

**UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID**

**FACULTAD DE DERECHO**

**Departamento de Derecho Constitucional**



**TESIS DOCTORAL**

**Génesis constitucional del nuevo sistema de justicia penal en México**

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR

PRESENTADA POR

**Silvia Yolanda Villasana Ramírez**

Directores

**José Manuel Martínez Serra**  
**José Ángel Camisón Yagüe**

**Madrid, 2017**

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Facultad de Derecho

Departamento de Derecho Constitucional



## **Génesis Constitucional del Nuevo Sistema de Justicia Penal en México.**

Memoria de investigación para obtener el  
Grado de doctor en Derecho presentada por  
Silvia Yolanda Villasana Ramírez

Directores: Prof. Dr. José Manuel Martínez Serra.

Prof. Dr. José Ángel Camisón Yagüe.

Madrid, 2015.

*“....esfuérzate y se [muy] valiente...” Josué 1:9.*

*A mis padres y hermano por todo su apoyo.*

*A mi abuelo Juan Francisco a quien llevo  
en mi corazón a donde quiera que voy.*

INTRODUCCIÓN.....	3
Capítulo I: Organización Judicial Mexicana. (Teórico).....	15
1. <i>Antecedentes Coloniales.</i> .....	32
2. <i>Antecedentes del México Independiente.</i> .....	35
3. Bifurcación del Sistema Judicial en México.....	40
4. Evolución del Sistema Judicial en las Constituciones Federales de 1824, 1847, 1857 y 1917.....	54
5. Poder Judicial de la Federación en la actualidad.....	68
5.1. Orden y Funcionamiento.....	79
a) <i>Suprema Corte de Justicia de la Nación.</i> .....	81
b) <i>Tribunal Electoral.</i> .....	90
c) <i>Tribunales Colegiados de Circuito.</i> .....	96
e) <i>Jueces de Distrito.</i> .....	100
f) <i>Jurado Federal de Ciudadanos.</i> .....	103
g) <i>Consejo de la Judicatura Federal.</i> .....	104
6. Organización Judicial Estatal o del Fuero Común.....	115
7. Competencias de los Tribunales Ordinarios. ....	120
Capitulo II: Génesis de la Estructura y Método de Enjuiciamiento Penal.....	124
1. Organización y Funcionamiento del Ministerio Público Federal.....	139
1.1. Procuraduría General de la República.....	142
1.2. Ministerio Público.....	152
2. Etapas del Proceso Penal.....	171
2.1. La Pre instrucción. ....	177
2.2. Instrucción. La Prueba. ....	184
2.3. Tercera Etapa del Procedimiento: Juicio.....	197
3. Sujetos en el Proceso Penal.....	203
3.1. Imputado. ....	204
3.2. Defensor.....	207
4. Principios Constitucionales en Materia Penal.....	219
4.1. Principios de acceso a la justicia.....	227
4.2. Garantías constitucionales de seguridad jurídica. ....	229
a) <i>La garantía de irretroactividad de la ley.</i> .....	233

b) <i>La garantía de audiencia.</i> .....	234
c) <i>La garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal, proscribiendo la analogía y la mayoría de razón.</i> .....	236
d) <i>Evolución de los principios constitucionales del Artículo 16 constitucional</i> .....	238
Capítulo III: Análisis del nuevo Sistema Oral en México. ....	242
1. Génesis del Sistema Acusatorio Adversarial. Reforma Constitucional y legal a la administración de Justicia en Materia Penal.....	252
2. Análisis del Sistema Acusatorio conforme al Principios de la Oralidad.....	258
3. El sistema de justicia oral frente al sistema de justicia escrito.....	267
4. Complicaciones en la Implementación del Juicio. ....	274
4.1.1. Reivindicación de la publicidad.....	282
4.1.2. Falta de oralidad en las etapas previas al juicio.....	294
4.1.3. Abuso de la Prisión Preventiva.....	300
4.1.4. La oralidad como proceso público y de audiencias. Críticas al proceso escrito.....	311
4.1.5. Nuevo diseño probatorio.....	322
4.1.6. Insuficiencia del Papel Investigador del Ministerio Público y las Policías.....	329
Capitulo IV. Conclusiones. ....	339
BIBLIOGRAFIA: .....	362
RESUMEN.....	403
ABSTRACT.....	403

## **INTRODUCCIÓN.**

La ciencia jurídica o el derecho como toda obra de elaboración humana, no escapa al incesante cambio evolutivo producido por las necesidades que imperan dentro de una sociedad determinada. De suerte que es a través de su constante estudio y análisis que comprendemos y estamos en posibilidad de apreciar los cambios evolutivos que se producen en un momento de tiempo y lugar, respecto de una comunidad determinada. Desde esta perspectiva surgen las inquietudes que motivan el presente ejercicio académico. La realización de investigaciones relacionadas con los sistemas judiciales, los procesos de reforma de los mismos, llevados a cabo por los Estados sobre todo en la materia penal encajan en el estudio constitucional, pues impactan la conformación del Estado democrático, los derechos fundamentales como limitación del poder estatal que son un logro y un rasgo definitorio de éste. El punto de partida es la observancia de los derechos que emanan de la estricta observancia de acceso a una tutela judicial efectiva, esto es, en estricto apego al marco de garantías procesales como parte del patrimonio de derechos fundamentales consignados en las normas fundamentales de los Estados, pero también dentro del nuevo esquema extraterritorial protector de derechos a través de los derechos fundamentales comprendidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Tratados Internacionales.

Desde esta perspectiva, resulta de sumo interés el desarrollar trabajos de investigación que revisen, critiquen y estudien la implementación de reformas judiciales tanto en el ámbito constitucional e institucional como de garantías en cuanto al desarrollo e implementación de los procesos concretos donde el ciudadano se somete al Poder del Estado. En este sentido, el Estado organizado constitucionalmente está condicionado a actuar bajo el parámetro de un sistema de derechos y libertades, donde por una parte se configuran y ordenan los poderes del aquel y por otra quedan establecidos los límites del ejercicio del poder y el ámbito de libertades y derechos fundamentales, ya que el Estado responde de los objetivos positivos y las prestaciones que el poder debe cumplir en beneficio de la comunidad.

Así los Estados con base en el principio de vinculación de los poderes públicos como eje central de las garantías y derechos fundamentales, respecto de los sistemas judiciales constitucionalmente descansan en que estos se organicen y fundamenten su actuación en estricto respeto de aquellos. Los sistemas de justicia, sobre todo en materia penal quedan sujetas al derecho a la tutela judicial efectiva.

El contenido del derecho a la tutela judicial efectiva comprende en primer término, el derecho de acceso a la jurisdicción, es decir a ser parte en un proceso promoviendo la función jurisdiccional. Se trata de la instancia inicial del ejercicio del derecho en el que la protección debe ser fuerte ya que de él dependen las instancias posteriores. Una de las manifestaciones concretas de este primer momento está dado por el deber de los jueces de posibilitar el acceso de las partes al juicio, sin restricciones irrazonables, y de interpretar con amplitud las leyes procesales en cuanto a la legitimación, pues el rechazo de la acción en virtud de una interpretación restrictiva o ritualista importa una vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva.

En tal cometido es un principio básico de interpretación constitucional que la libertad es la regla y la limitación es, en cambio, la excepción, la que debe interpretarse restrictivamente. Resulta indiscutible que en caso de duda habrá que optar en virtud de la regla "*pro homine*", a favor de las libertades y de la efectividad de los derechos. De ello deviene una serie de principios que se aplican en los distintos ámbitos del derecho de fondo y el derecho procesal, tales como: in dubio pro reo, el derecho a la doble instancia es otra de sus manifestaciones concretas, es decir a la posibilidad de revisión de las resoluciones judiciales, en cuanto a los hechos y el derecho aplicable, por parte de otro juez o tribunal superior al que las dictó. El artículo 8.2. de la Convención Americana de Derechos Humanos como el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establecen las garantías en el proceso penal.

En el ámbito del Convenio de Roma respecto a los países que conforman la Unión Europea, estos están animados de un mismo espíritu y poseen un patrimonio común de ideales y de tradiciones políticas, teniendo como referencia el respeto a las libertades fundamentales y de preeminencia al Estado Derecho. En este sentido, participan en la preservación de estas



libertades, colaborando a que las medidas adecuadas para asegurar la garantía colectiva de los derechos enunciados en la Declaración Universal, sean desarrolladas aún por aquellos estados que no conformen la Unión Europea.

De igual forma debe resaltarse la formación de investigadores y docentes especializados en este campo. Los ordenamientos jurídicos nacionales ya no pueden vivir de espaldas a estos fenómenos de intercambio de experiencias con aquellos estados con quienes se comparte una herencia cultural, jurídica y política. En los últimos años, los juristas han tenido que actualizar sus conocimientos del Derecho para reformular sus ordenamientos nacionales a la luz de los nuevos sistemas jurídicos que vienen del exterior, pero también para comprender e insertarse en la lógica de sus realidades las aportaciones emanadas de las experiencias jurídicas de otros Estados.

Las Universidades pueden y deben ofrecer su capital técnico y humano para la preparación de profesionales con conocimientos completos y exhaustivos de los procesos actuales de experiencias respecto de los modelos a implementar en el ámbito de la función estatal de administración de justicia, en constante vigilancia al respecto irrestricto de los derechos fundamentales en ambos lados del atlántico.

Por otra parte, el trabajo de investigación que se expone está dotado de plena vigencia y actualidad. No somos ajenos a los problemas que enfrentan los estados democráticos respecto de las funciones de administración e impartición de justicia. Para nadie es un secreto la necesidad de los Estados en mejorar sus sistemas de justicia instrumentando métodos eficaces de combate a la delincuencia, preservando el bienestar de la convivencia en la comunidad. Sin embargo estos esfuerzos no deben hacerse separándose del derecho fundamental a juicios justos en estricta observancia de principios como del debido proceso, el derecho a la libertad personal, o el principio de inocencia, entre otros, teniendo siempre en cuenta que el receptor de estos mecanismos es precisamente el ciudadano, sometido al poder coercitivo del Estado.

Los aparatos judiciales requieren de constantes revisiones, análisis y ser sometidos a las críticas necesarias para su mejora. Para ello todos los esfuerzos reformistas y cambios que se propongan requieren de observar unas garantías de elaboración. Esto es, que tengan siempre como marco referencial al Estado constitucional, fundado en el principio de “*rule of law*”,

principio inspirador que define la subordinación de todo poder al derecho, desde el nivel más bajo hasta el más alto, mediante el proceso de legitimación de toda acción de gobierno, llamada, desde la primera Constitución escrita de la época moderna también conocido como constitucionalismo<sup>1</sup>. El ejercicio del gobierno de la ley, ésta estrechamente vinculada a normas generales y abstractas, inspiradas en valores fundamentales como la igualdad, la seguridad, la libertad.

La importancia que reviste el presente ejercicio académico deriva de que el Estado Mexicano en el pasado reciente aprobó dos importantes reformas constitucionales, la primera en materia del sistema penal acusatorio oral, articulando principios, instituciones y sus facultades de funcionamiento en junio de 2008; y la segunda en materia de derechos humanos de junio de 2011. Emprendimos el estudio tomando como referencia tres ejes, primero desde la óptica del constitucionalismo y su influencia en el modelo constitucional mexicano, sus instituciones, así como el marco jurídico; doctrinal, para determinar el ajuste de los cambios constitucionales al sistema de justicia penal se conduzca conforme a los principios constitucionales definidos para un Estado Democrático y por último la doctrina jurisprudencial generada por la Corte Mexicana a la luz de la reforma constitucional en materia penal, pero también la generada en materia derechos humanos.

De ahí entonces que, referimos la importancia de estudiar los cambios que impactan la funcionalidad de determinadas instituciones, ubicando el momento de creación de las mismas y estudiando su evolución en el tiempo. Ya que es precisamente a través del estudio y análisis de éstas modificaciones producidas en tiempo y lugar determinado que se anotan los aspectos positivos que los convierten en instrumentos eficaces dentro del régimen constitucional y jurídico en beneficio de una sociedad, y desde luego a contrario sensu se advierten contradicciones, límites que impidan su evolución. De suerte que el tiempo puede considerarse como un criterio que concluya a establecer los mecanismos de transformaciones de las instituciones.

La Constitución Mexicana como norma fundamental ha sido sometida a evoluciones y cambios, encaminados a fortalecer, y enriquecer, en última ratio den consistencia a todo el

---

<sup>1</sup> Cfr. Bobbio, Norberto, *El futuro de la democracia*, Tercera Edición, Cuarta reimpresión, Editorial Fondo de Cultura Económica, México, D.F., 2000, p.173.

sistema jurídico. En este proceso resulta importante mencionar la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, que representa un parteaguas en el derecho mexicano, con este cambio se produjo un antes y un después en la vida jurídica del país<sup>2</sup>. Esta reforma produce un nuevo entendimiento en la función judicial, una de las consecuencias visibles, se han visto reflejadas en la mutación jurisprudencial desde el máximo Tribunal Constitucional del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ocurre a partir del cumplimiento de la sentencia interamericana del *Caso Radilla*, consiste en la comprensión de que hoy por hoy los jueces mexicanos son jueces de derechos humanos<sup>3</sup>.

El principio democrático de este siglo, para los estados modernos es justificar su quehacer considerando el entorno de la persona, su dignidad, igualdad y equidad, en definitiva en pleno respeto a sus derechos humanos y libertades fundamentales conforme al principio *pro personae*<sup>4</sup>. Este desarrollo del derecho constitucional internacional conmina a los Estados democráticos de este siglo a proteger y defender los derechos fundamentales de los individuos, con el propósito de producir sociedades con mejor calidad de vida, con paz y prosperidad.

Bajo este panorama, nos hemos abocado a establecer un panorama general respecto de la dinámica que ha seguido la estructura judicial en México a la luz de la organización constitucional, procurando además establecer los principios y condiciones políticas y jurídicas de su formación como un Estado federal. Sin perder de vista la complejidad de la empresa, aspiramos a crear un escenario que nos ayude a comprender primero la evolución de la estructura constitucional y de funcionamiento, del modelo judicial mexicano que al mismo tiempo nos deje en posibilidad de construir un marco conceptual, para elaborar un análisis

---

<sup>2</sup> Cfr. Delgado Carbajal, Baruch, F. *Reforma Constitucional en Derechos Humanos El impacto en la impartición de justicia local*, Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, Primera Edición, Editorial Flores, México, D.F., 2014, p. X.

<sup>3</sup> "...Hoy todos los jueces de cualquier materia y grado son jueces de constitucionalidad y de convencionalidad dentro de sus respectivas competencias, debiendo siempre interpretar las normas de derechos humanos de conformidad con la constitucional federal y los tratados internacionales, favoreciendo en todo momento la interpretación más amplia. Esta renovada visión permite a los jueces de las entidades federativas, tradicionalmente ajenos a esta función hermenéutica fundamental en la eficacia de los derechos, debido al cambio de paradigma que impuso la reforma al artículo 1 de la Constitución Mexicana...", Ferrer Mac-gregor, Eduardo, *Ibíd.*

<sup>4</sup> Estos principios sirvieron para que la Organización de las Naciones Unidas proclamará la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que sembró la simiente de la internacionalización del derecho constitucional, *Ibíd.*

congruente que nos ayude a conocer y evaluar, las ventajas y desventajas que supone el cambio de un sistema acusatorio oral. Este cambio de modelo jurisdiccional produce cambios no solamente respecto de la metodología del sistema procesal penal, sino que provoca modificaciones que emanan de principios constitucionales, cambiando estructuras institucionales, facultades y competencias de los órganos del Estado.

Desde el punto de vista de las instituciones que la componen, estudiamos la puesta en marcha del sistema judicial en materia penal, su implementación a través de los órganos estatales como el órgano jurisdiccional, el Ministerio Público, Defensoría Pública, Policía Judicial. Se pretende hacer un análisis de las deficiencias institucionales tanto del sistema penal inquisitivo o mixto, -también llamado tradicional que aún tiene vigencia en el país- así como dentro del sistema acusatorio penal actual y su instrumentación, examinando los referentes del sistema judicial escrito bajo la regulación adjetiva anterior y la actual.

La hipótesis del trabajo comprende las causas que producen a nuestro juicio un complejo, complicado y deficiente cumplimiento por parte del Estado Mexicano de los principios constitucionales y los derechos fundamentales propios de un Estado Democrático, respecto de la administración de justicia, el derecho a una tutela judicial efectiva, con graves repercusiones en el sistema de procesamiento penal y sus garantías procesales. El objetivo perseguido por los poderes ejecutivo y legislativo visionó un esfuerzo para modificar la Constitución Mexicana, con el fin de transformar de raíz el sistema de justicia penal en el país. El objetivo fue ajustar el sistema a los principios de un Estado democrático de derecho, para proteger las garantías de víctimas, acusados, la imparcialidad de los juicios, así como implantar prácticas más eficaces contra la delincuencia organizada. Además, con la reforma se buscó adaptar las leyes penales a efecto de cumplir los compromisos internacionales de México.

La reforma constitucional en materia penal concebida bajo un esquema que se presume garantista, ha sido señalada por la doctrina mexicana por crear sistemas penales paralelos, así citamos a Sergio García Ramírez quien manifiesta su preocupación por la manera en que el gobierno mexicano ha planteado la lucha contra el crimen, a menudo adoptando modelos autoritarios y represivos, en los que se sanciona por igual a un delincuente peligroso que a un líder de movimientos sociales. Según este autor con la reforma constitucional de 2008 se

abrió paso un doble sistema penal, uno ordinario y otro especial, -no necesariamente porque se tome en cuenta su peligrosidad de cara a garantizar la seguridad ciudadana- ejercida para quienes son considerados enemigos del estado, estas medidas son puerta peligrosa hacia la guantanamoización poniendo en riesgo al país de incurrir en formas antidemocráticas.

Es innegable la amplia corriente doctrinal en México que ha visto en la oralidad una forma de garantizar el acceso a la justicia. Buena parte de ella piensa que un proceso penal es oral, por cumplir con las características de la inmediación, la contradicción, la continuación, la publicidad, amén de que los objetivos que deben perseguirse con estos principios sea que la fundamentación de las sentencias se realice exclusivamente en el material de hecho introducido verbalmente en el juicio. Lo que nos enfrenta a la pregunta ¿Cuál de ellos en realidad permite arribar al hecho y la responsabilidad del autor?, ¿Será solo la oralidad? Pudiera ser que la práctica de la oralidad dentro del sistema, se transforme en meramente formal, al permitir audiencias con falta de secuencia, interrogación de testigos por separado y discontinuadas. Estos elementos hacen que los tribunales no tengan presente las circunstancias del caso a la hora de pronunciar la sentencia, y como consecuencia se dicte en base a los elementos escritos.

El presente ejercicio académico consta de tres partes a saber: el primero desde una perspectiva constitucional se emprende el estudio y análisis, tomamos como punto de partida la evolución del constitucionalismo que contribuye a determinar los principios que sostienen al Estado Constitucional, el cual a través de su evolución representa el esfuerzo ciudadano para limitar lo arbitrario del poder que lo rige, luchando por la reivindicación de libertades políticas, es decir en ejercicio de un derecho ciudadano para participar del gobierno, y en respeto a las libertades individuales de reconocimiento constitucional. Así el Estado y sus instituciones deben estarse a lo previsto por la norma fundamental.

Dentro de esta lógica constitucional, en México se creó un régimen constitucional a través de una norma fundamental que crea los poderes del Estado con sus respectivas funciones y competencias, y al mismo tiempo las reglas de autolimitación. Un principio constitucional importante que debe contener la norma fundamental para la conformación del Estado es la división de poderes, esto es que para el ejercicio y la atención de los asuntos de gobierno se establece la división de competencias y facultades repartidas en tres poderes Ejecutivo,

Legislativo y Judicial. No obstante lo anterior, debe tenerse en cuenta que la división de poderes y reconocimiento de derechos fundamentales son dos caras de la misma moneda. Todo se basa en la idea central de la limitación del poder. Además, debe también significar que la división de poderes lo que persigue es no solo el reparto de las competencias sino que unos poderes se vigilen a otros. De modo que la división del poder opera también como una suerte de mecanismo de relación entre ellos que se articula mediante instrumentos de controles recíprocos, es decir, aquí la división de poderes tiene una doble finalidad, por un lado técnica (división del trabajo) por otro política (asegurar la libertad y los derechos).

Estos tres poderes tienen su origen en la norma constitucional, y se sostienen sobre el concepto de soberanía popular y división de poderes, hay que decir que dos de estos entes tienen naturaleza distinta a la del Poder judicial. Abordamos el estudio de la conformación del sistema judicial mexicano, con sus particulares características, llamado a observar y preservar los principios constitucionales, establecidos por la norma fundamental, al igual que los demás. Partimos del supuesto de que los jueces se ven obligados a basar su actuación jurisdiccional de conformidad con ciertas normas o estándares preexistentes, con el objeto de satisfacer unas expectativas que nacen, no de sus cualidades personales, sino de prescripciones establecidas por el ordenamiento constitucional. Es así como, los jueces deben entender que su función es aplicar un parámetro normativo preexistente a una disputa estas tesis forman una construcción del Derecho Público del Estado Constitucional.

Además de formar al Estado, a su órganos, y determinar sus funciones y competencias, la norma fundamental dispone principios constitucionales, integrados por principios, valores o reglas cuya característica es disfrutar de la condición normativa de la constitución, desarrollando su eficacia como normas de rango constitucional y a los que, deberán someterse todos los poderes del Estado, principalmente el legislador, conforme a los principios generales derivados del sistema legal. Estos principios constitucionales pueden considerarse como los instrumentos normativos fundamentales para la realización de los valores superiores del sistema jurídico constitucional de un determinado Estado, sin embargo estos no deben ser considerados aisladamente sino como parte integrante de un sistema que desarrolla una función de ordenación dentro del Estado democrático de derecho.

Estos principios constitucionales son un referente del alcance en el proceso de interpretación y aplicación del derecho. Los valores constitucionales se realizan a través de los principios, ya que por medio de ellos se definen las orientaciones básicas del ordenamiento y que en definitiva el estado constitucional debe perseguir: tales como la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo. Por tanto el ordenamiento jurídico no debe ser un mero aglomerado formal de normas cuyo contenido es irrelevante, sino un conjunto sistemático con referentes esenciales que se plasman en la realización de los valores constitucionalmente establecidos. No hay que perder de vista que las constituciones de nuestro tiempo se consolidan y completan su normatividad a través de los mecanismos de control constitucional, por vía de órgano de control interno o externo.

El segundo capítulo nos enfocamos a explicar los fundamentos constitucionales y legales que sostienen el sistema de procesamiento penal mexicano, desarrollados por el orden normativo secundario. En lo relativo al proceso en concreto, los sujetos procesales involucrados y sus facultades en cuanto al método empleado dentro de la ingeniería procesal, ésta se caracterizó por ser principalmente escrito con algunos matices de oralidad, pero una parte de la doctrina lo clasifica dentro de los sistemas de procesamiento inquisitivo o mixto, hasta la reforma constitucional de 2007-2008 en el que se modifica el modelo del proceso penal para adoptar un sistema acusatorio-oral. Nos abocamos a identificar las deficiencias respecto del sistema penal inquisitivo o tradicional, las inconsistencias y deficiencias institucionales y legales, así como a las prácticas con que se ha venido operando por parte jueces, Ministerios Públicos, Policías, defensores, víctimas y ofendidos.

También informamos que a la fecha existen Estados de México estados organizados en su sistema penal conforme a los parámetros del sistema penal acusatorio y otros bajo el sistema anterior considerado sistema de procesamiento penal inquisitivo o mixto. La Constitución Mexicana dispone las bases procesales conforme a las cuales todas las autoridades del Estado deben proceder, conforme al principio de legalidad. Nos referimos también a las garantías constitucionales, las cuales funcionan como instrumentales porque, a su vez, revelan la adopción dentro del régimen jurídico nacional del principio constitucional de legalidad, como una garantía del derecho humano a la seguridad jurídica, acorde a la cual las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo que expresamente les facultan las leyes, en el entendido que la constitución y el orden jurídico que de ésta emana la manifestación de la voluntad general.

En la norma fundamental mexicana se determinan los mecanismos para proceder desde el momento mismo de la comisión de un delito, así como los órganos que intervienen y sus facultades. Respecto al proceso de enjuiciamiento penal hay que detallar las estructuras institucionales que hacen funcionar y contribuyen al desarrollo del proceso en sí mismo. también nos ocupamos de la amplia doctrina constitucional de parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia del sistema de justicia penal mexicano, desarrollando los principios constitucionales que lo informan, como el debido proceso, la presunción de inocencia, la prueba ilícita, el derecho de defensa, etc.

De igual forma presentamos un tercer capítulo donde desde una perspectiva crítica evaluamos el panorama del proceso penal mexicano, del sistema judicial que lo vertebra, de cómo en México se han recogido estos principios tanto por nuestra norma fundamental, como por el resto del ordenamiento jurídico. Hemos intentado enriquecer la discusión de las recientes reformas emprendidas a nivel federal y local de cara al nuevo modelo acusatorio. Pretendiendo que el hilo motivador sea que la estructuración de un sistema de enjuiciamiento penal, se encuentre basado en ese contenido esencial de derechos fundamentales, que salvaguarden el espacio de libertad de los individuos.

Las disposiciones que rigieron a México desde la instauración de la Nueva España, crearon un sistema de enjuiciamiento de características inquisitivas, que se han mantenido hasta finales del siglo XIX y principios del XX. Durante este periodo se facultó a los juzgadores para que tuvieran autoridad para iniciar el procedimiento, investigar los hechos, resolver discrecionalmente sobre el ofrecimiento y desahogo de pruebas y por último juzgar. Sin embargo, fue la carta fundamental de 1917 la que terminó con este estado de cosas. Pues en ella se reflejó la tradición humanista de la última parte del siglo XVIII, así en el último cuarto del siglo XX el orden jurídico mexicano corresponde al modelo democrático informado por el principio de mínima intervención, la racionalidad de las consecuencias jurídicas del delito y el constante avance del garantismo que se observó en el procedimiento penal. Por medio de ella se pretendieron resolver los abusos por la concentración de funciones, tratando de crear equilibrios entre los sujetos procesales. Hay que decir que el procedimiento como tal, se reglamentó hasta el código federal de 1934, donde el legislador secundario manifiesta que el sistema de procesamiento será acusatorio, por así establecerse en la Constitución Mexicana.



Sin embargo, se conservaron instituciones del sistema inquisitivo, en virtud de que era imposible eliminarlos, ante la organización de los tribunales preexistente, que desarrollaban sus funciones principalmente dictando autos de formal prisión y sentencias.

Con las reformas constitucionales de 1994 y 2000 respectivamente fue posible advertir tendencias encaminadas a equilibrar el proceso con la introducción de elementos como la división entre órganos, acusador, Juez y el defensor, que se reconocen ya desde la averiguación previa, delimitando cada uno de sus funciones dentro del proceso, sin que exista vinculación entre ellos. Hay libertad para ofrecer el caudal probatorio que se estime oportuno por los sujetos procesales, se estableció el derecho para que el inculpado fuera asistido por un defensor sometándose al proceso en igualdad de circunstancias, de igual forma que para la víctima u ofendido por causa del delito cometido. Son creados mecanismos para que durante la instrucción el Juez este en posibilidad de conocer las circunstancias en las que se cometió el delito, y los motivos para su comisión, conservando la publicidad del procedimiento. Existe la posibilidad para el inculpado de la libertad provisional, queda diseñados el sistema de recursos que permiten acceder a una segunda instancia y se adopta un sistema mixto de valoración de la prueba, que más bien se inclina hacia el sistema de prueba tasada.

Hasta la reforma de 1999, que se atemperó la dureza legislativa de los años anteriores, constitucionalmente se reformaron los artículo 16 y 19 constitucional para disponer los requisitos necesarios para acreditar el cuerpo de delito y poder expedir una orden de aprehensión o para dictar un auto de formal prisión. Así, derivado de esta importante modificación constitucional la Corte Mexicana interpretó a través de su jurisprudencia la obligación de que todo acto de autoridad dirigido a inferir un acto de molestia al justiciable cuente con la fundamentación y motivación, aspectos insoslayables en las conductas no solamente del órgano jurisdiccional, como de parte de todas las autoridades del Estado, sentando un pilar fundamental en el sistema jurídico mexicano.

Documentamos la perspectiva de la doctrina mexicana, en su mayoría se pronuncia a favor de que el sistema procesal mexicano, sea acusatorio a contrario del inquisitivo, es preciso anotar como quedo expuesto en los capítulos precedentes que las constantes reformas legales, contribuyen negativamente a mantener un sistema procesal con equilibrio de partes, inclinando la balanza hacia la inquisición. También dimos cuenta de la contribución del Tribunal Mexicano al desarrollar en su doctrina constitucional los principios que informan un proceso penal en estado democrático. Sin embargo los problemas subsisten con el funcionamiento de las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia, que a menudo de manera formal dan cumplimiento a los principios y derechos constitucionales a efecto de hacer eficaz el equilibrio entre sujetos procesales, cuando menos así previsto por el ordenamiento constitucional y sus normas jurídicas que de éste emanan. Si bien es clara la evolución en México hacia el modelo acusatorio, sobre todo por así quedar previsto en el ordenamiento constitucional en la realidad persisten elementos que lo acercan a experiencias lamentables dentro del sistema inquisitivo. Es preciso entender que todos los obstáculos que el propio Estado Mexicano se ponga en esta dirección atacarán la eficacia del sistema, desembocando en el cuestionamiento de su propia existencia, sobre todo a la vista de la situación que atraviesa el sistema de administración y procuración de justicia mexicano que se enfrenta altos grados de impunidad.

## Capítulo I: Organización Judicial Mexicana. (Teórico)

Las ideas generadas por los cuatro grandes movimientos de constitucionalización que hubo en el mundo occidental fueron definitivas para la creación del Estado Moderno. Indiscutiblemente el diseño del Estado constitucional actual se nutrió de la tesis del primer movimiento provocado por la Revolución francesa, así como la independencia americana; de igual forma de los movimientos revolucionarios en Francia de 1830 y 1848; el tercero de los movimientos, conocido como el “constitucionalismo de entreguerras” se definió por el término de la primera guerra mundial y el cuarto, y último el consecutivo a la segunda guerra mundial.

Todos estos acontecimientos durante los siglos XVIII, XIX y XX dieron carácter mundial e internacional a las tesis que conformarían a los nuevos “Estados constitucionales”, en los que Estado y Constitución son elementos interdependientes, de modo que se afirma que no hay Estado sin Constitución y que toda Constitución es Constitución de un Estado. Es decir a través del constitucionalismo clásico y después con el constitucionalismo social, ambos movimientos filosófico-políticos, fue que se llevaron a cabo las revoluciones en la dialéctica y conflictiva relación entre la sociedad y el Estado. Serían aquellos los que justificarán la afirmación y protección de la dignidad de la persona, paradigmas que marcarán en definitiva la construcción progresiva de un sistema jurídico-institucional a través de la Constitución, que tendrá proporciones universales<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> “(...) fue imprescindible, por un lado, reconocer los *derechos individuales* y sus correspondientes garantías. Y por otro, establecer la *división y equilibrio del poder* y sus funciones, que se imputaron a diversos órganos, en procuración de un poder limitado y controlado, para evitar todo abuso que violase la dignidad humana. Frente a la “voluntad del rey” solo legitimada en Dios, de las monarquías absolutas de derecho divino, surge el constitucionalismo y el Estado de derecho que se fundaban ahora en la “voluntad de la ley” legitimada en la incipiente soberanía popular. Estas ideas-fuerzas, fundamentadas en una concepción acentuadamente individualista, fueron asumidas en un primer momento por los postulados que sostuvo el *constitucionalismo clásico o liberal*, para más tarde, con motivo de los excesos de una irracional aplicación de ese individualismo en la vida de la colectividad y de la aparición en la escena mundial de la llamada “cuestión social”, transformarse en las primeras décadas del pasado siglo, en la nueva versión que representaba el *constitucionalismo social*, en el que como bien afirma Mirkin de Guetzevich, se pretende “el control social de la libertad individual”, ya que sostendrá junto a la libertad, la propiedad y la seguridad del *constitucionalismo liberal*, los valores de la justicia y la solidaridad, insuflando toda una dimensión social al derecho, que se proyecta en el nuevo *Estado social de derecho* en la expresión de Hermann Heller y que se afianza, definitivamente, después de la segunda postguerra mundial(...)”. Cfr. Haro, Ricardo, *Constitución, Poder y Control*, Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 2002, p. 139-140, Véase, Rubio Llorente, Francisco, “*Constitucionalismo*”, en Aragón Reyes, Manuel (coordinador), *Temas Básicos de Derecho Constitucional*, Tomo I, Primera edición, Editorial Civitas, Madrid, España, 2001, también sobre el

Otros elementos que contribuyeron a la constitucionalización de los nuevos Estados fue el carácter universal del concepto de Estado-nación, que después sería adoptado como sistema para ir de la mano de los movimientos de independencia regionales ante una petición -o mejor dicho- en ejercicio de un derecho de autodeterminación y libertades colectivas. Todas estas bases tuvieron como consecuencia que la conformación de un modelo de Estado que no sólo se materializaría en estricto sentido por medio de una norma fundamental, sino que al adoptar un régimen constitucional siguiendo los parámetros antes mencionados, le sería otorgado, además, el reconocimiento de Estado como tal a nivel internacional<sup>6</sup>.

Sería importante precisar que la literatura constitucional clásica define al Estado por la coincidencia de tres elementos: poder, territorio y pueblo, es decir que el Estado será un ente social que se forma en un territorio determinado, que organiza un grupo de individuos, -el pueblo- que se somete a la voluntad de un gobierno. Es decir que el Estado será una asociación de individuos, donde el individuo se transforma en un ser político en tanto que el ser humano es un ser social por naturaleza. Thomas Hobbes<sup>7</sup> nos dice que: *“la única forma de erigir un poder común que sea capaz de defender a los ciudadanos de los ataques del exterior y de los ataques de unos con otros es conferir todo el poder y fuerza a un hombre o a una asamblea de hombres con la finalidad de que mediante pactos mutuos estos últimos puedan utilizar la fuerza y los medios de todos ellos, como considere adecuado, para imponer la paz y la defensa común entre los ciudadanos...”*. En su forma natural el hombre es un lobo para el hombre siguiendo el concepto hobbesiano, porque renuncia a parte de su libertad para vivir en un contexto de seguridad personal y política, bajo este panorama se inserta la lucha por las libertades dentro del periodo constitucional liberal.

Posteriormente el reconocimiento del individuo como parte integrante, o incluso como el propio fin de la sociedad política, ante la lucha por el reconocimiento de las libertades

---

desafío central al paradigma constitucional entendido como el sistema de vínculos y controles a los poderes públicos y privados en beneficio de los derechos de las personas, Véase Pisarello, Gerardo, *“Globalización, Constitucionalismo y Derechos: Las vías del cosmopolitismo jurídico”*, Teoría del Neoconstitucionalismo, Ensayos Escogidos, Edición Miguel Carbonell, Editorial Trotta, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Madrid, España, 2007.

<sup>6</sup> Cfr. Hauriou, André, *Derecho Constitucional e Instituciones Políticas*, Traducción castellana José Antonio González Casanova, Ediciones Ariel, Barcelona, España, 1971, p. 97-104.

<sup>7</sup> Cfr. Hobbes, Thomas, *“Leviatán”*, o la materia, forma y poder de la república, eclesiástica y civil, Fondo de Cultura Económica, Primera Edición en inglés 1651, Quinta reimpresión 2005, México, D.F., p. 137-142 y 171 y ss.

individuales, mediante los diversos movimientos constitucionales propiciados por las clases medias, apoyadas también por los sectores más desprotegidos quienes inician estas transformaciones de lo que pudo suponer o constituir privilegios de unos pocos, pudiera convertirse en libertades individuales de todos los seres humanos. Así, en lo que se refiere a la creación del Estado constitucional Sieyès describe una situación de hecho, verdaderamente paradójica, en lo que respecta a los propósitos que se deberían perseguir. Hay una suerte de descripción de status quo frente al cual Sieyès considera que los medios de ejecución de los cuales los representantes de Francia podrán disponer 1789 diría que invocan los principios fundamentales del orden social y se sabe bien que de todas esas leyes, la primera la más importante para los pueblos, es la de una buena Constitución. No hay más que una buena Constitución que dar a los ciudadanos para garantizarles el gozo de sus derechos naturales y sociales. Todo comienza con la idea de que el Estado es un ente artificial, producto del contrato social, cuyos poderes deberían limitarse, para evitar la concentración del poder y por consiguiente, impedir la violación de los derechos naturales<sup>8</sup>.

Hoy la naturaleza de derechos subjetivos –nos dice Humberto Nogueira Alcalá- no sólo otorgan a la persona una facultad, sino que también provocan un status jurídico. Es decir que existe una doble dimensión de los derechos: por un lado, se trata de situaciones subjetivas, por otro lado, suponen la expresión del pacto social entre aquellos que conforman la sociedad que se contextualiza en un Estado. Así, los derechos constitucionales poseen también una significación objetiva, son la condición *sine qua non* del Estado constitucional democrático, ya que no pueden dejar de ser pensados sin que corra un riesgo inminente el Estado constitucional contemporáneo<sup>9</sup>. El autor abunda en que actualmente se admite que los derechos cumplen también funciones estructurales de gran importancia para los principios conformadores de la Constitución. En el Estado Constitucional Democrático actual los derechos constitucionales operan como derechos de defensa frente al Estado, salvaguardando la libertad individual, y al mismo tiempo, se hacen objetivos operando como elementos del

---

<sup>8</sup> Cfr. Carpio Marcos, Edgar, “*La Jury Constitutionnaire en el Pensamiento de Sieyès*”, *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, Año XXXII, No. 95, mayo-agosto, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 1999, p.277.

<sup>9</sup> Cfr. Nogueira Alcalá, Humberto, “*Aspectos de una Teoría de los Derechos Fundamentales: la delimitación, regulación, garantías y limitaciones de los derechos fundamentales*”, *Ius et Praxis*, Derecho de la Región, v.11 no.2, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Talca, Talca, Chile, 2005, p. 15-16. Disponible en <<http://www.scielo.cl>>, consultado el 21 mayo 2015.

ordenamiento jurídico<sup>10</sup>. Los derechos son fundamentales por su posición dentro del Estado constitucional como normas jurídicas supremas se constituyen en presupuestos de validez material para la creación, interpretación y aplicación de otras normas del derecho infraconstitucional. Antes los derechos fundamentales sólo valían en el ámbito de la ley, hoy las leyes sólo valen en el ámbito de los derechos fundamentales,<sup>11</sup> en el marco de las constituciones racional normativas con fuerza jurídica vinculante, cuya parte dogmática – aquella que se dedica al reconocimiento de los derechos y sus garantías- se convierte también en parámetro de enjuiciamiento de la constitucionalidad formal y material de las leyes.

Así pues, ante el reconocimiento del principio de igualdad haciendo que aparezcan en la escena constitucional las cartas de reconocimiento de las libertades individuales, que en un primer momento aparecen separadas de los textos constitucionales, para después establecerse que éstas cartas consignadoras de derechos fundamentales deberían incluirse en los textos constitucionales.

De fundamental influencia en materia de derechos ha sido la aportación del constitucionalismo estadounidense, mediante la Declaración de Virginia de 1776<sup>12</sup> aprobada justo unos días anteriores a la Declaración de Independencia en ella se recogen los derechos inherentes al hombre, la igualdad, la libertad, se reconoce al pueblo como titular de la soberanía, se establecen los principios de división de poderes además de contemplar otros derechos como la libertad de expresión, la libertad religiosa, el derecho de reunión, el derecho a un proceso con todas la garantías entre otros. Este fue el antecedente modelo para posteriormente fundamentar la Declaración francesa de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789<sup>13</sup>. Así la Constitución de 1787 fue el documento que estructuró políticamente las instituciones norteamericanas, sin embargo una de sus debilidades fue el no reconocimiento de los derechos debido a que los constituyentes norteamericanos pensaban que la Constitución debía contener la estructuración del estado, más no contener el reconocimiento de los derechos, menos mal que dicho error fue corregido con el *Bill of Rights*

---

<sup>10</sup> *Ibídem*, p.17.

<sup>11</sup> *Ibídem*, p.18.

<sup>12</sup> La Declaración de Virginia de 1776 disponible en: [www.juridicas.com.mx](http://www.juridicas.com.mx), consultado el 20 de Agosto de 2015.

<sup>13</sup> *Ibídem*.

(1791) y la incorporación de las primeras diez enmiendas a la Constitución en materia de derechos<sup>14</sup>.

Tal fue la importancia concedida al reconocimiento de los derechos y libertades individuales en las constituciones escritas de los Estados, que motivó a que una Constitución escrita, fuera considerada como tal, siempre y cuando comprendieran dos elementos: la existencia de una Constitución escrita que crea al Estado, y la introducción de la carta de derechos fundamentales a la cabeza de la misma, convirtiéndose así los pilares sobre los cuales se construiría la estructura del estado moderno, fundamento del estado constitucional de derecho actual.<sup>15</sup>

Así este instrumento albergó el reconocimiento de derechos humanos la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en su artículo 16 establecería que “*Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes establecida no tendrá Constitución*”. A través de esta disposición quedó establecido el contenido mínimo de cualquier texto constitucional, y de igual modo la configuración del Estado, podríamos decir que la etapa liberal apuntala el camino en la conformación de lo que será el desarrollo del Estado de derecho en donde todos los actos emanados del poder público tendrían que estarse a las facultades establecidas por la norma fundamental y en respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos. De esta manera se introducen los conceptos de imperio de la ley división de poderes, legalidad de los actos de los poderes públicos, los

---

<sup>14</sup> las aportaciones de estos documentos al constitucionalismo son las siguientes: a) se gesta la distinción entre poder constituyente y poderes constituidos; b) la supremacía formal de la Constitución a través de las cláusulas de reforma; c) se hace efectiva la idea de equilibrio en el seno de un esquema de separación de poderes (“Checks and Balances”); d) se alumbró el presidencialismo como forma de gobierno; e) se crea el sistema federal (una auténtica revolución americana frente a la noción de soberanía); f) se apuesta por un modelo de base democrática; g) se crean las bases del fortalecimiento del Poder Judicial; h) se da luz a las primeras declaraciones de derechos; h) y se sientan las bases sobre las que se construirán posteriormente la noción de supremacía material de la Constitución o lo que es lo mismo decir la supremacía de la Constitución sobre las leyes de donde derivará el denominado control de constitucionalidad de las leyes. Cfr. García Palacios, Omar, *Curso de Derechos Constitucional*, Instituto de Estudios e Investigación Jurídica, Primera Edición, Nicaragua, 2011, p. 32-35.

<sup>15</sup> Cfr. Hauriou, André, “*Derecho Constitucional...*”, op.cit., p. 207; “La depuración de las ideas europeas en las constituciones americanas fue lo que dio a estos Estados su organización, en estas normas fundamentales pueden advertirse dos marcadas tendencias la procedente de Norteamérica de las declaraciones de las colonias inglesas al proclamar su Independencia y la otra originada en la Revolución francesa principalmente las declaraciones de derechos y la organización política...”, Cfr. De la Torre Villar, Ernesto, *La Constitución de Apatzingán y los creadores del Estado mexicano*, Segunda Edición, Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F., 1978, p.79.

derechos y libertades fundamentales y la legalidad de las actuaciones de la Administración y Control Judicial de las mismas. Tal como lo advierte Miguel Carbonell resulto curioso que en la declaración se haya elegido el término garantía de los derechos y no se haya zanjado el tema con simplemente decir a los derechos, pues justamente una de las omisiones de la declaración fue precisamente incluir un sistema de garantías de los derechos a los cuales junto con el artículo 12 de la propia declaración les es asignado una fuerza pública<sup>16</sup>.

En conclusión, el movimiento constitucional clásico –sin duda-, significó un impulso de origen nacional que dio vida al Estado constitucional como tal, sin embargo tal como lo apunta Diego Valadés el concepto de Estado se ha ido formando por una diversidad de instituciones de tal suerte que la génesis común de este concepto son el propio Estado, la Constitución y las instituciones como un producto que también ha sido cultural, y que obedece a una decisión racional sostenida a lo largo de varios siglos<sup>17</sup>.

Sin embargo no hay que perder de vista que el Estado existe antes que la Constitución. Fundamentalmente el mismo nace en la edad moderna fruto de la concentración del poder entorno a la corona y de la necesidad de nuevos espacios que garantizar la reproducción de nuevos modelos económicos que superaban la estructura económica feudalista. Así, es lugar común hablar de que el Estado moderno se configura tras la Paz de Westfalia sobre la base del concepto clásico de soberanía nacional enunciado por Bodino y cuya evolución comprende desde el Estado absolutista al Estado constitucional<sup>18</sup>.

---

<sup>16</sup> Cfr. Carbonell Miguel, *En los orígenes del Estado Constitucional: Declaración Francesa de 1789*, Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (Sección peruana), Ilustre Colegio de Abogados de Lima, Cuadernos de Rectorado 23, Editorial Iustitia, S.A.C., Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Lima, Perú, 2012, p.107-108.

<sup>17</sup> “En la teoría del Estado y de la Constitución se siguen formulando conceptos sobre el Estado (...) los elementos que nutren al concepto, en todos los casos en indispensable tener presente que el Estado moderno surgió merced a un proceso de secularización del poder político, y que en su desarrollo progresivo ha implicado la formulación de otros conceptos afines, como Constitución e institución”, Cfr. Valadés Diego, *Apuntes sobre la formación del concepto de Estado*, VV.AA., en Homenaje al Doctor Emilio O. Rabasa, Primera edición, México, D.F., 2010, p. 493.

<sup>18</sup> “...podemos distinguir en Europa fundamentalmente tres épocas históricas distintas en lo que a la evolución del concepto de Constitución se refiere. En primer lugar, la Constitución de los antiguos, referida a la Constitución teorizada en la época clásica de la polis griega, y cuya principal finalidad era combatir la tiranía y articular un gran proyecto de disciplina social y política sobre la virtud de los ciudadanos que alejara el peligro de *stasis* mediante la *eunomía*. En segundo lugar, la Constitución medieval, que pivotaba sobre la figura del Monarca en torno a él cual se articulaba un organismo que culminará con la aparición de Estado absolutista. Y en tercer lugar, la Constitución de los modernos, que pretende, fundamentalmente, la limitación y ordenación del poder”. Véase Fioravanti, Maurizio, *Constitución. De la antigüedad a nuestros días*, Editorial Trotta, Madrid, 2001, p.



Esta evolución representó un esfuerzo ciudadano para limitar lo arbitrario del poder que lo regia, luchando por la reivindicación de libertades políticas, es decir en ejercicio de un derecho ciudadano para participar del gobierno, y en respeto a las libertades individuales de reconocimiento constitucional<sup>19</sup>. Esto supuso la inmediata limitación de las facultades del Estado y sus tres poderes, que en todo momento deben estarse a lo previsto por la norma fundamental. Sin embargo, no se puede perder de vista que el concepto de la normatividad de la Constitución doctrinal y jurídicamente tarda tiempo en extenderse, tal es el caso de Europa donde tarda un siglo en aparecer, no así en América debido a la famosa sentencia pronunciada por el Juez Marshall en el caso de Marbury vs. Madison<sup>20</sup>.

Para robustecer esta idea –siguiendo a Peter Habermas-, Constitución también quiere decir aquel orden jurídico fundamental del Estado y de la sociedad, que por supuesto incluyen a la sociedad constituida, aunque ciertamente no en el sentido de nociones de identidad, -es decir- que el estado constituido, no solamente es el conjunto de principios y reglas que ordenan al estado, esto es que un sentido amplio del término Constitución –además- comprende la estructura fundamental de la sociedad plural, incorporando de igual forma, la relación de los grupos sociales entre sí y de éstos con el ciudadano<sup>21</sup>, tal y como ya apuntamos, en cierto modo al hablar de la dimensión objetiva de los derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos.

Así pues la Constitución en sentido amplio –del término- es el conjunto de reglas que rigen la organización y funcionamiento del Estado<sup>22</sup>. Es en este documento donde se disponen una serie de reglas y principios bajo los cuales se regularán la organización y las relaciones de los poderes públicos, estableciendo además las relaciones entre el Estado y los ciudadanos. Dentro de esta lógica constitucional, la norma fundamental crea los poderes del Estado con sus respectivas funciones y competencias, y al mismo tiempo las reglas de autolimitación.

---

<sup>19</sup> Cfr. Hauriou, André, *“Derecho Constitucional...”*, op.cit., p. 181.

<sup>20</sup> Véase Garibay, Alberto F., *“La enseñanza del caso Marbury vs. Madison”*, *Academia*, Revista sobre la enseñanza del derecho, Núm. 13, Año 7, Buenos Aires, Argentina, 2009, p.121-136., disponible en [www.derecho.uba.ar](http://www.derecho.uba.ar)., consultado el 20 de Agosto de 2015.

<sup>21</sup> Cfr. Habermas, Peter, *El Estado Constitucional*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Primera Edición, Primera reimpresión, México D.F. 2003, p. 3.

<sup>22</sup> “(...) En su sentido formal, la Constitución de un país es un conjunto de reglas, promulgadas por lo general con cierta solemnidad, y que forman habitualmente una clase especial entre las reglas jurídicas (...)”, Cfr. Hauriou, André, *“Derecho Constitucional...”*, op.cit., p. 311-312.

Otro principio constitucional importante que debe contener la norma fundamental para la conformación del Estado es la división de poderes<sup>23</sup>, esto es que para el ejercicio y la atención de los asuntos de gobierno se establece la división de competencias y facultades repartidas, tradicionalmente, en tres poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

No obstante lo anterior, debe tenerse en cuenta que la división de poderes y reconocimiento de derechos fundamentales son dos caras de la misma moneda. Todo se basa en la idea central de la limitación del poder. Además, debe también significar que la división de poderes lo que persigue es no solo el reparto de las competencias sino que unos poderes se vigilen a otros. De modo que la división del poder opera también como una suerte de mecanismo de relación entre ellos que se articula mediante instrumentos de controles recíprocos, es decir, aquí la división de poderes tiene una doble finalidad, por un lado técnica (división del trabajo) por otro política (asegurar la libertad y los derechos).

Ahora bien, si estos tres poderes tienen su origen en la norma constitucional, y estos a su vez se sostienen sobre el concepto de soberanía popular<sup>24</sup> y división de poderes, hay que decir que dos de estos entes tienen naturaleza distinta a la del Poder Judicial<sup>25</sup>.

---

<sup>23</sup> Cfr. MONTESQUIEU, *De l'Esprit des Lois*, en *Montesquieu, Oeuvres Complètes*, Paris, Editorial du Seuil, 1964, paginas. 586 : " Il y a dans chaque État trois sortes de pouvoirs : la puissance législative, la puissance exécutrice des choques qui dépendent du droit des gens, et la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil. (...). Il n'y a point encore de liberté si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance législative et de la exécutrice".

<sup>24</sup> "...la soberanía popular implicaría un concepto de pueblo como conjunto de los ciudadanos de la generación presente, todos y cada uno de ellos (sufragio universal) dotados de un derecho a votar (y a abstenerse), considerados los representantes como meros mandatarios, transmisores de la voluntad preexistente de sus electores. Por el contrario, la soberanía nacional descansaría en un concepto abstracto de nación que, falto de voluntad expresa, requiere la mediación de órganos e instituciones que generen una voluntad previa inexistente, siendo uno de ellos el electorado, que cumple de esta suerte únicamente una función específica, y deviniendo, a su vez, los representantes, con entera Independencia, de la nación entera y no de sus electores concretos (...) mientras que en el concepto de soberanía del pueblo, "soberanía" designa el órgano supremo en el Estado, en el concepto de soberanía de la nación se refiere al nudo poder de la institución estatal, equiparándose por tanto con la "soberanía del Estado", siendo la nación, a la postre, la otra cara del Estado...", Cfr. Maíz, Ramón, *"Los Dos Cuerpos del Soberano: El Problema de la soberanía nacional y la soberanía popular en la Revolución francesa"*, *Soberanía y Constitución*, Cuadernos monográficos de Teoría del Estado Derecho Público e Historia Constitucional, 1/98, volumen I, coordinador Ramón Punset, Junta General del Principado de Asturias, Universidad de Oviedo, Oviedo, España, 1998 p. 3, disponible en: <http://www.unioviado.es/constitucional/fundamentos/primerio/>, consultado 18 de febrero, 2013.

<sup>25</sup> Cfr. DUGUIT, León, *La separación de poderes y la Asamblea Nacional de 1798*, Madrid, Editorial Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1996, págs. 82 y 83: "Los hombres de 1789-91 se equivocaron haciendo del orden jurisdiccional, que no es más que una rama del poder ejecutivo, un poder independiente; pero, no obstante, comprendieron y analizaron claramente su verdadero objeto. Captaron la distinción entre interés colectivo e interés individual. Afirmaron muy justamente

Así, por un lado –en algunos Estados- el poder legislativo como el ejecutivo tiene su origen en la voluntad directa de los ciudadanos a través del voto directo, y si bien el Poder Judicial es parte integrante y goza de éste elemento de soberanía no tiene, tradicionalmente, el mismo origen inmediato del pueblo. Lo anterior obedece a que como hemos expuesto no es dable en un sistema constitucional moderno y democrático subordinar a cualquier poder con respecto del otro, y mucho menos al órgano jurisdiccional haciéndolo depender de los movimientos y pretensiones políticas del poder legislativo o del ejecutivo. En suma si bien los tres poderes deberán gozar de independencia entre sí, ésta característica debe ser intrínseca al Poder Judicial desligándolo obligadamente de los demás poderes<sup>26</sup>. Recordamos las palabras pronunciadas por Montesquieu en el espíritu de las leyes 1748: “*No hay libertad si el poder de juzgar no está bien deslindado del poder legislativo y del poder ejecutivo. Si no está separado del poder legislativo, se podría disponer arbitrariamente de la vida de los ciudadanos. Si no está separado del poder ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor.*”<sup>27</sup>

Es importante añadir que el Poder Judicial también está llamado a observar y preservar los principios constitucionales, establecidos por la norma fundamental, al igual que los demás. Así, los jueces reciben las facultades y al mismo tiempo la obligación de sujetar la aplicación de un parámetro normativo preexistente a una disputa concreta estas tesis en atención a los parámetros fijados por la Constitución, formando así la construcción del Derecho Público del Estado Constitucional. Los jueces se ven obligados a basar su actuación jurisdiccional de

---

*que el orden judicial es siempre el encargado de aplicar las leyes, en tanto que afectan más directamente al interés individual, y, por eso mismo, el encargado de proteger los derechos individuales en todos los casos, sin distinguir si esta protección plantea o no un litigio. Comprendieron que, al contrario, la autoridad administrativa subordinada al poder ejecutivo, está encargada de aplicar las leyes en la que medida en que afectan directa y principalmente al interés colectivo, exista o no cuestionamiento. Esta era, en el fondo, la doctrina de Montesquieu (...).”* Cfr. TOCQUEVILLE, A.; *La democracia en América*, Barcelona, Editorial RBA, 2005, págs. 103 y ss. Tocqueville le dedica un capítulo, el sexto de la primera parte, a describir las características del Poder Judicial en Estados Unidos que, como se sabe, gozaba de un peso político mayor dentro del sistema constitucional en tanto que ya desde los primeros momentos del constitucionalismo norteamericano, en concreto desde la Sentencia *Marbury vs. Madison* (1803) se auto atribuyó el control de constitucionalidad difuso de la ley. Vid. *in extenso* en este sentido, LAMBERT, *El gobierno de los jueces*, Madrid, Editorial Tecnos, 2010.

<sup>26</sup> Cfr. Cabrera Acevedo, Lucio, *El Constituyente de 1917 y El Poder Judicial de la Federación Una Visión del Siglo XX*, Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, D.F., 2002, p.75.

<sup>27</sup> MONTESQUIEU, « *De l'Esprit des Lois...* », op.cit., p. 286.

conformidad con ciertas normas o estándares preexistentes, con el objeto de satisfacer unas expectativas que nacen, no de sus cualidades personales de los juzgadores, sino de prescripciones establecidas por la norma constitucional.

Por otro lado, tenemos los principios constitucionales<sup>28</sup>, los cuales pueden albergar valores o reglas cuya característica es disfrutar de la condición normativa de la Constitución, desarrollando su eficacia como normas de rango constitucional y a los que, deben someterse todos los poderes del Estado, principalmente el legislador, conforme a los principios generales derivados del sistema constitucional. Según Fernando Santaolalla<sup>29</sup> las constituciones de nuestro tiempo se consolidan y completan su normatividad básicamente a través de los mecanismos de control constitucional. Estos principios constitucionales pueden considerarse como los instrumentos normativos fundamentales para la realización de los valores superiores del sistema jurídico constitucional de un determinado Estado, sin embargo estos no deben ser considerados aisladamente sino como parte integrante de un sistema que desarrolla una función de ordenación dentro del derecho.

Estos principios constitucionales son un referente del alcance en el proceso de interpretación y aplicación del derecho. Los valores constitucionales se realizan a través de los principios, ya que por medio de ellos se definen las orientaciones básicas del ordenamiento y que en definitiva el estado constitucional debe perseguir: tales como la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo. Por tanto el ordenamiento jurídico no debe ser un mero aglomerado formal de normas cuyo contenido es irrelevante, sino un conjunto sistemático con referentes esenciales que se plasman en la realización de los valores constitucionalmente establecidos<sup>30</sup>.

En este tenor es oportuno estudiar ¿Qué entendemos doctrinalmente por jurisdicción y cuál es su naturaleza jurídica?, para responder a esta pregunta el Diccionario Jurídico Mexicano, establece que conforme a sus raíces latinas proviene de *jurisditio-onis*, que quiere decir poder o autoridad que se tiene para gobernar o poner en ejecución las leyes o aplicarlas en juicio, atendiendo a las voces latinas (*Jus-Juris, dicere*) significa la potestad de declarar el derecho

---

<sup>28</sup> Cfr. Aragón Reyes, Manuel, “*Principios Constitucionales*”, *Temas Básicos de Derecho Constitucional*, Tomo I, Primera Edición, Editorial Civitas, Madrid, España, 2001, p.39 y ss.

<sup>29</sup> Cfr. Santaolalla Fernando, “*Consideraciones sobre la Normatividad y Superioridad de la Constitución*”, *Teoría y Realidad Constitucional*, Encuesta: la ley de Extranjería y la constitución, Número 7, 1º Semestre, Año 2001, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces S.A., UNED, Madrid, España, p.192.

<sup>30</sup> Cfr. Balaguer Callejón, Francisco, VV.AA., *Manual de Derecho Constitucional*, Volumen I, Primera Edición, Editorial Tecnos, Madrid, España, 1999, p. 103-106.

recto, proclamando, declarando o diciendo el derecho<sup>31</sup>. En otro concepto el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española lo establece como el poder que tienen los jueces y tribunales para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado<sup>32</sup>, teniendo esta declaración efectos coercitivos y obligatorios por realizarla un órgano del Estado al que la Constitución le encomienda de manera exclusiva esa facultad, aunque existan otros órganos del Estado que puedan desempeñar estas facultades. Es decir la función del órgano jurisdiccional se ve materializada en la labor de un juez o de un magistrado al fungir como aplicador e intérprete de la ley.

Ante este panorama estimamos que la caracterización material del Poder Judicial, debe hacerse partiendo de elementos de una determinada situación histórica, -y como no podría ser de otra manera desde el ámbito académico es incluso obligatorio- el plantearse la pregunta de ¿Cuál es la situación que en la actualidad le confiere sentido a la función jurisdiccional?<sup>33</sup>

A efecto de responder atinadamente al planteamiento anterior, hay que decir que, la jurisdicción como tal, tutela los derechos que aun siendo protegidos por normas de derecho objetivo han quedado insatisfechos, porque ha existido incertidumbre en los términos normativos que deben tutelarse, o porque aun siendo reconocidos existe inobservancia de las hipótesis examinadas. Sin embargo debe analizarse que la actuación de la ley no es privativa del acto jurisdiccional, sino que debe interpretarse que la función jurisdicente es una serie de sucesos, de consecuencias jurídicas y contenidas a través de las previsiones legislativas<sup>34</sup>.

A partir de que el Estado constitucional se asienta sobre la separación de poderes, es decir sobre la división material de las funciones y la separación formal de poderes, de muy diferente naturaleza material que en su formulación clásica se divide en tres: la función de aprobar leyes en el órgano legislativo, la de ejecutar los mandatos contenidos en la ley, depositado en el órgano ejecutivo y por último la de resolver los conflictos que pudieran suscitarse en la aplicación e interpretación de las leyes reservado para el Poder Judicial. Esta división tiene el propósito de asegurar un cierto principio de especialización en la eficacia

---

<sup>31</sup> Cfr. Flores García, Fernando, *Diccionario Jurídico Mexicano*, Decima primera edición, Editorial Porrúa, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F. 1998, p.1884 y ss.,

<sup>32</sup> Cfr. *Diccionario de la Lengua Española*, Real Academia Española, Vigésima segunda Edición, Editorial Espasa Calpe S.A., Madrid, España, p.1332.

<sup>33</sup> Cfr. Cossío Díaz, José Ramón, *Jurisdicción Federal y Carrera Judicial en México, Cuadernos para la Reforma de la Justicia 4*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, Primera Edición, México D.F., 1996, p.9.

<sup>34</sup> Cfr. Flores García, Fernando, *"Diccionario Jurídico..."*, op.cit., p.1885.

propia de la función a desempeñar, pero también evitar que todo el poder se concentre en un solo punto, es por ello que el constitucionalismo atribuye cada una de estas tres funciones a distintos órganos del Estado<sup>35</sup>.

Así la función jurisdiccional se deposita en un órgano llamado Poder Judicial, cuya función consiste en resolver conflictos que surjan entre los ciudadanos, entre estos y los poderes públicos mediante la aplicación del derecho. El Poder Judicial está integrado por los órganos que de acuerdo con la Constitución y las leyes tienen atribuido la función jurisdiccional, estos órganos son independientes, sometidos a la Constitución y al orden jurídico establecido por ésta. Es en este momento donde se debe destacar la posición de la Constitución, como una de las piezas claves del sistema de organización y distribución del poder, asignando al Poder Judicial una de las tareas más importantes, que no es solamente la de resolver conflictos también será la de fungir como interprete supremo de la Constitución<sup>36</sup>. Que no es otra cosa que la jurisdicción constitucional.

Ahora bien en cuanto a la jurisdicción constitucional –siguiendo a Kelsen<sup>37</sup>– conforme a las funciones desempeñadas por cada órgano del Estado, por lo que respecta al parlamento, a éste se considera en la realidad como un libre creador del derecho y no como un órgano de aplicación del derecho vinculado a la Constitución, aunque teóricamente, bien en una medida relativamente reducida lo está puesto que el parlamento también está sometido por la Constitución. Sin embargo, para este autor no es pues el parlamento con quien debe contarse para realizar la garantía de subordinación a la Constitución, sino un órgano diferente a él, independiente de él, y por consiguiente, también de cualquier otra autoridad estatal, al que es necesario encargar la anulación de los actos inconstitucionales, mediante la creación de una jurisdicción o tribunal constitucional.

Es así como la Constitución regula el procedimiento de legislación de la misma manera en que las leyes regulan el procedimiento de los tribunales y el de las autoridades administrativas; es por ello, que la legislación se encuentra subordinada a la Constitución absolutamente de la misma forma en que lo están la legislación, la jurisdicción y la

---

<sup>35</sup> Cfr. García Morillo, Joaquín, *El poder judicial y el Ministerio Fiscal, Derecho Constitucional*, Volumen II, Los poderes del Estado. La organización territorial del Estado. Novena Edición, VV.AA., Tirant lo Blanch, Valencia, España, 2013, p.191.

<sup>36</sup> *Ibídem*, p.218.

<sup>37</sup> Cfr. Kelsen, Hans, *La Garantía Jurisdiccional de la Constitución (la justicia constitucional)*, Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 2001 p. 52-54.

administración. En suma, el postulado de la constitucionalidad de leyes es, teórica como técnicamente, idéntica por completo al postulado de la legalidad de la jurisdicción y de administración, por emanar de la misma fuente que es la norma fundamental. Lo cual supone un reparto del poder entre diferentes órganos, no para aislarlos recíprocamente, sino permitir un control recíproco de los unos sobre los otros<sup>38</sup>.

Pese a ello, Grant<sup>39</sup> destaca que el problema que ha enfrentado la norma fundamental ha sido encontrar los mecanismos a través de los cuales asegurarles a los justiciables una protección, plena y efectiva contra los excesos del gobierno y limitar la jurisdicción central y la local en sus respectivas esferas, y en este sentido añade que el Poder Judicial tiene una triple función, primero la protección de las garantías individuales, segundo mantener dentro de su perímetro respectivo a las jurisdicciones según sus competencias. El autor es enfático al señalar que la confianza en los tribunales para hacer cumplir la Constitución como norma superior de las leyes estatales, es una contribución –netamente- americana a la ciencia política –y después para el constitucionalismo moderno en general -. Sin olvidar que los Estados Unidos prima un control de constitucionalidad difuso, donde todos los órganos pueden utilizar la Constitución para declarar inconstitucionalidad de una norma en un caso concreto, esto no sucede en todos los Estados en donde la justicia constitucional es concentrada es el ejemplo de España.

En referencia a dichas expresiones, nos concentraremos en la función de aplicación e interpretación de normas, virtud a que se alude a uno de los Poderes indispensables que integran al Estado Constitucional moderno. También resulta oportuno precisar que el correcto desempeño de la actividad que desarrollan los aparatos jurisdiccionales supone la base que sostiene al Estado Constitucional Social y de Derecho, virtud a la importancia que ha adquirido la jurisdicción constitucional eje sobre el cual gravitan un sin número de cuestiones que afectan al Estado constitucional y la esencia misma del Derecho<sup>40</sup>.

---

<sup>38</sup> *Ibíd*em, p. 55-56.

<sup>39</sup> Cfr. Briseño Sierra, Humberto en Fix Zamudio, Briseño Sierra, Humberto, *Reseñas Bibliográficas de Grant J.A.C., "Control Jurisdiccional de la Constitucionalidad de las Leyes: una contribución de las Américas de la Ciencia Política, Revista de la Facultad de Derecho, Número 52, octubre-diciembre, Año 1963, Tomo XIII, UNAM, México, D.F., p.1117-1118, Véase Grant J.A.C., "Control Jurisdiccional de la Constitucionalidad de las leyes: una contribución de las Américas de la ciencia política, Revista de la Facultad de Derecho de México, Número 47 julio-septiembre 1962, 48 octubre-diciembre 1962 y 49 enero-marzo 1963, UNAM, México D.F.*

<sup>40</sup> "Las constituciones, incluso antes de que llegaran a caracterizarse como constituciones normativas, han buscado sistemas de defensa como medio para evitar que su violación o incumplimiento de cualquiera de sus normas, pueda quedar sin una respuesta. Esta defensa de la Constitución se arbitra por diversos medios, siendo el jurídicamente más efectivo la previsión de una jurisdicción constitucional (...)Por extensión, la

Así en la mayoría de las cartas fundamentales los elementos que integran el Poder Judicial se emplean en dos sentidos: en orgánico y funcional. El primero se refiere al conjunto de tribunales estructurados jerárquicamente y dotados de distintas competencias. El segundo, implica la función o actividad que los órganos jurisdiccionales desempeñan formal y materialmente dentro del Estado<sup>41</sup>. En este universo es indispensable, hacer un análisis somero de la estructura y conformación del poder judicial en el ordenamiento jurídico mexicano, cuya realidad revela un sistema complejo, debido al numeroso cuerpo de tribunales de distinta naturaleza.

A través del presente capítulo pretendemos estudiar los antecedentes constitucionales e históricos sobre los cuales descansa la construcción y evolución de la estructura judicial mexicana, teniendo como objetivo el establecer cuáles fueron los parámetros de organización jurisdiccional sobre los que se fue construyendo el sistema de justicia en general y en lo particular respecto del sistema de procesamiento penal, ¿Cuáles han sido las consecuencias de esa ingeniería jurídica?, ¿Qué eficacia ha tenido -o no- modelo de administración de justicia?, de tal suerte que su desempeño se pueda ubicar dentro de los lineamientos que sostienen un estado constitucional social y de derecho. En esta misma línea de análisis, estudiaremos la evolución histórica del procedimiento penal, y las etapas por las que han pasado nuestras instituciones procesales en la materia, con el objeto de determinar los mecanismos jurídicos e institucionales que han vertebrado el sistema de enjuiciamiento penal, que motivo una reforma constitucional en 2008 cuyos temas principales son concretamente en materia penal y procesal penal de gran envergadura, trastocando la estructura y funcionamiento del aparato jurisdiccional a nivel sistémico, como el nuevo sistema acusatorio, los principios del proceso penal, los derechos del imputado, derechos de la víctima y ofendido entre otros aspectos tanto procedimental como institucional, con esencial repercusión en materia de principios, catálogo de derechos y garantías fundamentales y constitucionales.

---

jurisdicción constitucional, inicialmente creada para realizar esa función de control de constitucionalidad de las normas, va ampliar su conocimiento a un importante núcleo de problemas relacionados que no se relacionan exclusivamente con la jerarquía normativa ni con el reparto correcto de las competencias, sino que abarcan (...) desarrollo y evolución de un núcleo importante de derechos, considerados fundamentales y de aplicación directa y cuyo amparo va a venir encomendado, de forma normalmente subsidiaria, a la jurisdicción constitucional...”, Cfr. VV.AA, “*Derecho Constitucional...*”, op.cit., p. 211.

<sup>41</sup> Cfr. Burgoa, Orihuela, Ignacio, *Derecho Constitucional Mexicano*, Primera Edición, Editorial Porrúa, México, D.F. 1973, p. 883-884.



El carácter actual del sistema judicial mexicano tanto institucional como a nivel normativo fue producto de cambios que se han ido produciendo a través de los distintos momentos de la vida histórico-política del país, influenciados por la carga ideológica, política y jurídica del momento. Una de las primeras formas para que México afirmara su independencia fue la creación de los tribunales manteniendo desde luego las bases contenidas por la Constitución de Cádiz de 1812. Pese a esto, los tribunales mexicanos son creados materialmente hasta la Constitución de 1824, es decir reflejando la carga ideológica y política de la época en la que se quería distanciarse de la influencia española.

Es a raíz de este momento que nace el sistema de organización judicial en México, y al mismo tiempo su complejidad cuya fuente de inspiración fue la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica de 1787. La primera Carta Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824 estableció una dualidad de organismos judiciales: los tribunales de la federación y los tribunales de los Estados, este sistema de doble jurisdicción se continuó en las Constituciones Federales de 1857, y la vigente que data de 1917<sup>42</sup>. Así dentro del espectro constitucional respecto de la administración de justicia se desarrollaron dos tipos de jurisdicciones, el federal, y otro de carácter local, también llamada del fuero común. A estos efectos hay que especificar que estas dos jurisdicciones, subyacen de igual modo en razón de la forma de estado federal adoptado por México, sin olvidar que dentro de estos modos competenciales también se desprenden la jurisdicción constitucional de competencia exclusiva de la federación y la militar que compete al ámbito castrense.

Haremos un repaso por los momentos históricos, jurídicos y políticos, que a nuestro juicio identifican los modelos institucionales y jurídicos que contribuyeron en su diseño, evolución, composición y funcionamiento. Es por ello, que consideramos importante examinar las bases sobre las cuales la Constitución Mexicana organiza estado basado en la forma de estado federal, y por el otro, el diseño institucional y competencial relativo al sistema judicial federal.

---

<sup>42</sup> Como en una época se implantó en Venezuela, ahora unificados, y todavía subsisten en Argentina y Brasil, de acuerdo con el régimen federal norteamericano que también les sirvió de modelo. Cfr. Fix-Zamudio Héctor, Valencia Carmona Salvador, *Derecho Constitucional Mexicano Comparado*, Tercera Edición, Editorial Porrúa, México, 2003, p.767 y ss.; Véase, *Derechos del Pueblo Mexicano, México a través de sus constituciones*, Volumen I, Tomo IX, Artículos 82-94, Serie VI, H. Cámara de Diputados LV Legislatura H. Congreso de la Unión, Comité de Asuntos Editoriales, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, Editorial Miguel Ángel Porrúa, México D.F., 1994, p.798.

Sobre el federalismo en México hay que comenzar por decir que su establecimiento fue tomado del modelo político-constitucional norteamericano comprendido de entre 1812 y 1824, en este último a través de la norma fundamental en su artículo 4, se dijo por primera vez que *“La nación mexicana adopta para su gobierno la forma de república representativa, popular y federal”*, pese a este precepto hay que decir que las tesis federalistas sufrieron varias crisis durante el tránsito histórico-político en México. A pesar de todas las luchas ideológicas entre liberales y conservadores, fue la Constitución de 1857 donde el federalismo se mantuvo como postulado fundamental del constitucionalismo mexicano<sup>43</sup>.

Finalmente en la Constitución de 1917 queda plasmado en los artículos 40 y 41, la naturaleza jurídica del estado federal mexicano, convirtiéndose en una decisión fundamental de orden jurídico, derivado de la esencia de la organización política, afirmándose: *“El estado federal está compuesto de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental”*. Por su parte el artículo 41 decía: *“El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de las competencias de éstos, y por los de los Estados en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir el Pacto Federal”*.

Así lo dejó escrito James Madison en el Federalista, acerca de la división de poderes y los frenos y contrapesos: *“En una república, el poder como un todo es entregado por la gente al Estado y su gobierno para su ejercicio legítimo, de manera que cualquier tipo de usurpación o intromisión quedará protegido por la división de poderes, que no es otra cosa que la separación del gobierno en poderes distintos y separados. En la América republicana, el poder otorgado a esta por el pueblo queda dividido en dos, proporcionando una doble garantía para los derechos de las individuos al quedar los poderes del Estado controlados entre sí, y cada uno se controlándose así mismo”*<sup>44</sup>.

---

<sup>43</sup> Cfr. Carbonell, Miguel, *“El federalismo en México: introducción a su problemática”*, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, No. 19, enero-abril, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 1998, p. 81, del mismo autor Véase, *“El Federalismo en México: principio generales y distribución de competencias”*, Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, Año 2003, Konrad-Adenauer-Stiftung, 9ª Edición, Montevideo, Uruguay, p. 379.

<sup>44</sup> Cfr. Madison, James, Paper Number 51, *“Checks and Balances”*, The Federalist, Alexander Hamilton, James Madison, John Jay, Edited by Benjamin F. Wright, University of Texas; Barnes and Nobles, New York, USA, p. 2004, p. 357-358.

Como hemos visto el federalismo como forma de estado, responde principalmente a la división del poder para salvaguardar la libertad. Además de sentar las bases de la división en el ejercicio de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que también ha supuesto una división territorial es decir una división competencial del poder, determinando una separación funcional y competencial en los campos de actuación de cada nivel de gobierno<sup>45</sup>.

En cuanto a la función jurisdiccional respecto a la dualidad de facultades que ejercen los tribunales federales, éstos ejercen de manera análoga funciones en los procesos del orden común, -es decir-, problemas jurídicos que pueden ser o no, constitucionales, sin que pueda establecerse una relación de hegemonía respecto de los demás órganos del Estado que la Constitución otorga a los tribunales federales, es decir “*juicios federales*”, distintos al juicio de amparo<sup>46</sup>.

Es decir, el Poder Judicial Federal en el ejercicio de la función jurisdiccional, propiamente dicha tiene una relación de supra a subordinación entre el órgano judicial titular de la potestad de juzgar y las otras autoridades, sea esta legislativa, ejecutiva o judicial federal o local, porque se tiene como objetivo el mantenimiento del orden constitucional, vía Juicio de Amparo. Ahora bien, en el caso de la función del control constitucional al mismo tiempo, se convierte en la institución protectora del régimen constitucional violado por las autoridades del estado, sean estatales o federales<sup>47</sup>.

Hasta aquí hemos intentado exponer los rasgos básicos del modelo federal, dentro del cual el Poder Judicial mexicano se ha insertado, y que conllevan una división del poder tanto horizontal como vertical (federación-Estados), para poder destacar la influencia que esto ha podido tener sobre la organización del Poder Judicial y su funcionamiento.

Otro de los rasgos importantes a destacar es la complejidad del derecho procesal mexicano no sólo por su estructura de doble jurisdicción federal y local, a la que ya nos hemos referido, también lo es por la multiplicidad de disposiciones sustantivas, contenidas a su vez en las correspondientes disposiciones adjetivas<sup>48</sup>. Sin embargo, sin obviar la complejidad de la

---

<sup>45</sup> Ibídem, p. 83, Cfr. Carpizo, Jorge, *Sistema Federal Mexicano*, Gaceta Mexicana de Administración Pública Estatal y Municipal, julio-septiembre 1981, Núm. 3, Ediciones Instituto Nacional de Administración Pública, México, D.F., p. 86-87.

<sup>46</sup> Cfr. Burgoa, Ignacio, “*Derecho Constitucional...*”, op.cit., p. 820-821.

<sup>47</sup> Ibídem, p. 824.

<sup>48</sup> Comentarios sobre la multiplicidad de códigos en México de Alcalá-Zamora, Niceto, en Carpizo, Jorge, “*Sistema Federal...*”, op.cit., 128-129.

empresa, pretendemos presentar una visión panorámica y concreta del sistema de procesamiento penal, que desde luego lleva implícito el estudio y revisión de las estructuras judiciales que tienen a su cargo esta responsabilidad. Se efectuará un examen de conjunto, que ponga de relieve la ingeniería jurídico-institucional de lo que ha sido hasta ahora el comportamiento del sistema de justicia en materia de procesamiento penal y sus implicaciones, y consecuencias a nivel constitucional. Este análisis nos permitirá hacer un deslinde de aquellos órganos jurisdiccionales encargados de la justicia de procesamiento penal, y plantear sus implicaciones sobre los principios constitucionales, así como los derechos y garantías establecidos por la Constitución Mexicana en estas materias.

### ***1. Antecedentes Coloniales.***

Una vez expuestos de manera general algunos elementos que han sido de fundamental influencia en la construcción de las instituciones jurisdiccionales mexicanas, que nos ayudan a determinar los elementos políticos y jurídicos que predominan en su construcción institucional y de competencias, creemos de igual forma oportuno indicar que los siguientes epígrafes se compondrán del estudio de los antecedentes coloniales, para posteriormente pasar a analizar los antecedentes del México independiente y por último abordar el tema de la bifurcación del sistema judicial, decantándose por sistema de división de competencias de la jurisdicción común y la jurisdicción federal que de otra parte también conoce de control constitucional.

Cobra interés el adentrarnos y repasar las referencias en cuanto al surgimiento de nuestros órganos jurisdiccionales. La primera referencia la encontramos en la Audiencia Real, de herencia española e institución básica de la administración de justicia castellana<sup>49</sup>. Teniendo su precedente en el Tribunal Castellano de finales de la Edad Media, este órgano inspiró la creación y organización del Tribunal Superior de Justicia de la Nueva España, es decir la Audiencia y Real Chancillería de México<sup>50</sup>.

Las audiencias fueron los máximos órganos de justicia dotados de grandes privilegios, pues en la propia Recopilación de Indias se establecía que las disposiciones de las audiencias

---

<sup>49</sup> Cfr. Soberanes, Fernández, José Luis, *El Poder Judicial en el Siglo XIX*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, Segunda Edición, México, D.F., 1992, p.19.

<sup>50</sup> *Ibidem*, p.22.

hubieran de guardarse y cumplirse, como si del Rey proviniera<sup>51</sup>. Fue natural que la Corona Española entendiera que los tribunales de justicia indianos, por la lejanía con el territorio estaban llamados a convertirse en los instrumentos fundamentales para consolidar la potestad real<sup>52</sup>.

La audiencia de México fue creada en 1527, para modificarse luego al promulgarse las Leyes de Indias ordenadas por Carlos II. Esta sufriría una última reforma en 1776 y, sería eliminada en 1823, consumada la independencia mexicana<sup>53</sup>.

Las Audiencias creadas en territorios americanos conquistados por España, concentraban tanto funciones administrativas o gubernamentales como jurisdiccionales<sup>54</sup>. La Real Audiencia de México desarrollo decididamente facultades jurisdiccionales, para convertirse en un tribunal de justicia, desarrollando dos tipos de competencias: las de justicia ordinaria y las de jurisdicción extraordinaria<sup>55</sup>. Dentro de la justicia ordinaria conocía tres tipos de asuntos: civiles, penales y administrativos, organizada en tres salas, dos de justicia y una del crimen<sup>56</sup>. La justicia extraordinaria por su parte estaba encomendada para los fueros especiales, militares, eclesiásticos, etc.

En este recorrido de competencias podemos decir que, de la misma forma que los modernos, los organismos jurisdiccionales de la Nueva España se dividieron en ordinarios, especiales o de fuero.

En vía ordinaria –es decir los primeros- de tres tipos de asuntos: civiles, penales y administrativos; los segundos servían para juzgar a individuos o en materias específicas que requerían juzgadores y una normatividad propia, de tal manera que por exclusión a los

---

<sup>51</sup> Cfr. Sanciñena, Asurmendi, Teresa, *La Audiencia en México en el reinado de Carlos III*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, Primera Edición, México, D.F., 1999, p.8, 10 abril 2010, Disponible en: <http://www.bibliojuridica.org/libros/1/87/3.htm>

<sup>52</sup> Ibídem, p.9.

<sup>53</sup> Cfr. Soberanes, Fernández, José Luis, *La administración Superior de Justicia en Nueva España*, *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, Año XIII, Número 37, enero-abril, 1980, (143-200), Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F., p.149, Véase, Cruz, Barney, Oscar, *Historia del Derecho en México*, Oxford University Press, Segunda Edición, México, D.F., 2004, p. 316 y ss.

<sup>54</sup> Cfr., Cruz, Barney, Oscar, “*Historia del Derecho...*”, op.cit., p. 325.

<sup>55</sup> Ibídem, p.179.

<sup>56</sup> Cfr. Soberanes, Fernández, José Luis, “*El Poder...*”, op.cit., p.40

tribunales ordinarios les estaba encomendada el conocimiento de los asuntos de aquellas personas y materias que no requerían de jurisdicción especial<sup>57</sup>.

En materia ordinaria la Audiencia debía conocer los asuntos sometidos a su jurisdicción respetando ciertos límites territoriales. Esto es, aquellos asuntos que se encontraran dentro de su distrito audiencial. El territorio de las audiencias se dividía a su vez en gobiernos, corregimientos y alcaldías mayores<sup>58</sup>. Por otro lado, en cuanto a la competencia por materia, por la vía ordinaria comprendía asuntos de carácter civil, penales y administrativos, organizada en tres salas, dos de justicia y una del crimen.

Dentro de la potestad jurisdiccional, la Real Audiencia fue, ante todo, un tribunal de apelación. Sus funciones eran de mayor transcendencia y ocupaban en mayor medida la atención de sus integrantes. Las dos Salas de Justicia conocían de los recursos de apelación en materia civil y administrativa cuando se hubiere afectado un interés particular. A la Sala del Crimen le correspondía el conocimiento de las apelaciones en materia penal que podían ser suplicados ante las Salas de Justicia<sup>59</sup>.

Con la reforma de 1812, durante el período conocido como el bienio liberal, se llevó a cabo una importante labor legislativa en la que se procuró desarrollar los preceptos constitucionales a través de una abundante legislación ordinaria, dentro del cual encontramos el Reglamento de Audiencias y Juzgados de Primera Instancia en materia civil y penal, que entre otras reglas disponía la división del territorio, con él se establecieron también normas procedimentales, tramitación de recursos y juicios verbales, la adopción de la casación, entre otros elementos<sup>60</sup>. Con este cuerpo de reformas quedo establecida la Real Audiencia como tribunal superior de alzada; también creándose un Tribunal Supremo para los recursos de casación y terceras instancias<sup>61</sup>.

---

<sup>57</sup> Cfr. Soberanes, Fernández José Luis, *"La Administración..."*, op.cit., p.143.

<sup>58</sup> Cfr. Cruz, Barney, Oscar, *"Historia..."*, op.cit., p.328.

<sup>59</sup> *Ibíd*em, p.330

<sup>60</sup> Cfr. Soberanes, Fernández, José Luis, *"El Poder..."*, op.cit., p.35.

<sup>61</sup> Sobre la jurisdicción extraordinaria o especial que la Real Audiencia ejercía estaban los recursos de fuerza; el Tribunal de Bienes de Difuntos; el Tribunal de la Bula de Santa Cruzada; el Juzgado de Provincia; y el de Visitas. Esta jurisdicción correspondía a los fueros personales y de grupo, su conocimiento estaba reservado ante aquel (...) Los tribunales de justicia extraordinaria eran el Consulado, el Protomedicato, la Inquisición, la Mesta, la Acordada, el Fuero Universitario, el Tribunal de Minería, el Fuero eclesiástico, los Fueros Militar de Marina y el Juzgado General de Indios; Véase. Cruz, Barney, Oscar, *"Historia..."*, op.cit., p.332, 371; Véase De la Hidalga, Luis, *Historia del Derecho Constitucional Mexicano, cuadros sinópticos: División de poderes y sistema electoral*, Editorial Porrúa, México, D.F., 2002.

## 2. *Antecedentes del México Independiente.*

Consumada la Independencia, no es sino hasta 1821 que surge el nuevo orden jurídico. Es decir que, aún efectuada la emancipación política de España, hasta esta fecha todo el Derecho tenía antecedente castellano-indiano. Fue a través de los “Tratados de Córdoba” y “El Plan de Iguala” que se determinó que la Constitución de Cádiz fuera la primera carta fundamental que organizara a la incipiente Patria emancipada. Así se dispuso que se gobernase interiormente conforme a las leyes hasta entonces vigentes, mientras se fueran expidiendo las leyes nacionales<sup>62</sup>.

La Constitución de Cádiz de 1812 fue la primera Constitución que formalmente rigió en México, hasta la expedición del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana de 1814, en que las Cortes continuaron trabajando en las leyes necesarias para la complementación del nuevo régimen que continuará con la corriente de leyes modernizadoras. En este estado de cosas, se hizo evidente, el problema de transitar hacia un nuevo ordenamiento jurídico, cuya conformación suponía el análisis de dos elementos esenciales: una la situación del orden jurídico en ese momento y dos la manera de estructurar la organización política del Estado<sup>63</sup>. Es por ello que las Audiencias de México y Guadalajara continuaron administrando justicia al tenor de lo dispuesto en el Reglamento de las Audiencias y Juzgados de Primera Instancia, otorgadas por las Cortes de gaditanas. En los casos en que faltaron cuerpos legales, se aplicaba la legislación española<sup>64</sup>.

---

<sup>62</sup> “Preciosa oportunidad fue la abdicación de los monarcas españoles para que el pueblo recuperase sus derechos y ejercitase la soberanía que a él correspondía y que hasta entonces se había delegado a sus soberanos”, Cfr. De la Torre Villar, Ernesto, *“La Constitución de Apatzingán...”*, op.cit., 19; Cfr. Soberanes, Fernández, José Luis, *“El Poder...”*, op.cit., p. 49; Véase, González, María del Refugio, *Historia del Derecho Mexicano*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, Primera Reimpresión, México, 1983, p. 43 y ss., Margadant, Guillermo F., *Introducción al Estudio del Derecho Mexicano*, textos universitarios, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1972, p. 139 y ss., Disponible en: <http://www.bibliojuridica.org/libros/3/1026/1.pdf>, 26 Mayo 2010.

<sup>63</sup> Cfr. Cruz, Barney, Oscar, *La codificación en México: 1821-1917, una aproximación*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma, Edición, México, D.F., 2004, p. 44.

<sup>64</sup> El orden de prelación de 1831-1833, poniendo a la cabeza las disposiciones tomadas por los congresos mexicanos; luego las disposiciones dispuestas en la Constitución de Cádiz; las últimas cédulas y ordenes posteriores de la Novísima Recopilación; las ordenanzas de los intendentes; la Recopilación de Indias; la Novísima Recopilación; los Fueros Reales y por último las Siete Partidas. De 1845-1849, el orden de prelación comenzaba por las Leyes Nacionales posteriores a la Independencia; Las Leyes Española, Recopilación de Indias

La Constitución de Cádiz consagró una serie de garantías, que pueden perfectamente ser consideradas como derechos, en materia de administración de justicia en lo criminal, estableciendo a favor del sujeto a proceso la obligación de formar los juicios a la brevedad posible y sin vicios, así como la prisión, la procedencia de la información sumaria previa de hecho que mereciera pena corporal, así como la obligación de que existiera mandamiento escrito expedido por el juez<sup>65</sup>. Para el funcionamiento y organización del Poder Judicial, en cuanto a la administración de justicia se promulgo la Ley para el Arreglo Provisional de la Administración de Justicia en los Tribunales y Juzgados del Fuero Común de 1837, siguiendo las pautas marcadas en el Reglamento de las Audiencias y Juzgados de Primera Instancia expedido en Cádiz<sup>66</sup>.

Posteriormente el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, conocida como Constitución de Apatzingán, 1814 en su segunda parte reglamentó los principios de organización y funcionamiento de los poderes públicos. Aquí el Poder Judicial quedó

---

y de Castilla; ordenamiento Real; ordenamiento de Alcalá; el Fuero Real; El Fuero Juzgo y las Siete Partidas; Cfr. González, María del Refugio, *"Historia..."*, op.cit., p. 46.

<sup>65</sup> Art. 247. Ningún español podrá ser juzgado en causas civiles ni criminales por ninguna comisión, sino por el tribunal competente determinado con anterioridad por la ley; Art. 248. En los negocios comunes, civiles y criminales no habrá más que un solo fuero para toda clase de personas; Art. 286. Las leyes arreglarán la administración de justicia en lo criminal, de manera que el proceso sea formado con brevedad, y sin vicios, a fin de que los delitos sean prontamente castigados; Art. 287. Ningún español podrá ser preso sin que preceda información sumaria del hecho, por el que merezca según la ley ser castigado con pena corporal, y asimismo un mandamiento del juez por escrito, que se le notificará en el acto mismo de la prisión; Art. 290. El arrestado, antes de ser puesto en prisión, será presentado al juez, siempre que no haya cosa que lo estorbe, para que le reciba declaración; más si esto no pudiere verificarse, se le conducirá a la cárcel en calidad de detenido, y el juez le recibirá la declaración dentro de las veinticuatro horas; Art. 291. La declaración del arrestado será sin juramento, que a nadie ha de tomarse en materias criminales sobre hecho propio; Art. 293. Si se resolviera que al arrestado se le ponga en la cárcel, o que permanezca en ella en calidad de preso, se proveerá auto motivado, y de él se entregará copia al alcaide, para que la inserte en el libro de presos, sin cuyo requisito no admitirá el alcalde a ningún preso en calidad de tal, bajo la más estrecha responsabilidad; Art. 294. Sólo se hará embargo de bienes cuando se proceda por delitos que lleven consigo responsabilidad pecuniaria, y en proporción a la cantidad a que ésta pueda extenderse; Art. 295. No será llevado a la cárcel el que de fiador en los casos en que la ley no prohíba expresamente que se admita la fianza. Art. 300. Dentro de las veinticuatro horas se manifestará al tratado como reo la causa de su prisión, y el nombre de su acusador, si lo hubiere; Art. 301. Al tomar la confesión al tratado como reo, se le leerán íntegramente todos los documentos y las declaraciones de los testigos, con los nombres de éstos; y si por ellos no los conociere, se le darán cuantas noticias pida para venir en conocimiento de quiénes son; Art. 302. El proceso de allí en adelante será público en el modo y forma que determinen las leyes; Art. 303. No se usará nunca del tormento ni de los apremios; Art. 304. Tampoco se impondrá la pena de confiscación de bienes; Art. 305. Ninguna pena que se imponga, por cualquier delito que sea, ha de ser trascendental por término ninguno a la familia del que la sufre, sino que tendrá todo su efecto precisamente sobre el que la mereció; Art. 306. No podrá ser allanada la casa de ningún español, sino en los casos que determine la ley para el buen orden y seguridad del Estado. Disponible en [http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Hist\\_Normas/ConstEsp1812\\_1978/Const1812](http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Hist_Normas/ConstEsp1812_1978/Const1812), consultado 27 de febrero, 2014.

<sup>66</sup> Cfr. Cruz, Barney, Oscar, *"Historia..."*, op.cit., p. 719,753.



formado por el Supremo Tribunal de Justicia, con facultades de tribunal superior de apelación en la rama civil y criminal, así como de los recursos de fuerza de los tribunales eclesiásticos. Las sentencias que pronunciase se remitían al gobierno para su cumplimiento. Estableciendo también las disposiciones a observarse en materia de administración de justicia<sup>67</sup>. Lamentablemente, los avatares de las luchas del momento impidieron que el mencionado Decreto tuviera vigencia práctica, debido a los difíciles tiempos en los que fue redactada, en plena guerra de independencia<sup>68</sup>.

Más tarde llegaría el Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano de 1822, en el que se retoma la organización judicial que existía en la Nueva España, favoreciendo el estado de cosas hasta antes de presentarse el movimiento de Independencia. Se defendió el régimen de las audiencias, que tendrían todas las mismas competencias, ejecutándolas en el territorio que el gobierno les designaría. Finalmente en el artículo 68 de dicho Reglamento se disponía la existencia de tres instancias y tres sentencias, así como normas de carácter procedimental y de garantías individuales<sup>69</sup>.

Son ampliamente conocidos los acontecimientos que sucedieron una vez que fue declarada la Independencia mexicana en 1821, el país continuo funcionando bajo la organización instaurada por la Constitución de Cádiz, hasta ser sustituida por la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, documento que precedió al congreso constituyente y por

---

<sup>67</sup> “El Supremo Tribunal de Justicia, se compondrá por ahora del Supremo Tribunal de Justicia...”, Capítulo XIV, Artículo 181; “Conocer de los recursos de fuerza de los tribunales eclesiásticos y de las competencias que se susciten entre jueces subalternos”, Artículo 197; “...conocer de las demás causas temporales, así criminales como civiles; ya en segunda, ya en tercera instancia, según lo determinen las leyes”, Artículo 199; “Las sentencias que pronunciare el Supremo Tribunal de Justicia, se remitirán al Supremo Gobierno, para que se las haga ejecutar por medio de los jefes o jueces a quienes corresponda”, Artículo 204, Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana sancionado en Apatzingán a 22 de octubre de 1814, en documentos constitucionales históricos, disponible en <http://www.juridicas.unam.mx/infjur/leg/conshist/>, consultado el 27 de febrero del 2014; Cfr. Gil de, Lester, Clementina, “Evolución de la Administración de Justicia del D.F.”, *Las Nuevas Bases Constitucionales y Legales del Sistema Judicial Mexicano, La Reforma Judicial 1986-1987*, Editorial Porrúa, Primera Edición, México, D.F., 1987, p. 613.

<sup>68</sup> “...en la Constitución de Apatzingán, al lado de los grandes principios democrático-liberales, que sin duda integran el nervio central de los patriotas que iniciaron nuestra Independencia (...) En Francia, el estallido de 1789 tenía otras causas y otros propósitos que nuestra revolución de Independencia; sin embargo sus principios universales se adecuaron de maravilla a nuestra lucha contra el régimen colonial que vivíamos (...) Las ideas del liberalismo democrático se convirtieron en carne propia, en parte orgánica y fundamental de nuestra historia (...) El movimiento de Independencia (...) abrieron a una historia desgarrada por más de cien años de luchas fratricidas”. Cfr. Flores Olea, Víctor, “El trasfondo ideológico”; *Estudios sobre el Decreto Constitucional de Apatzingán*, Dirección General de Publicaciones, Coordinación de Humanidades, UNAM, México, D.F., 1964, p. 146 y ss. Disponible en <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=2618>, consultado el 3 de marzo de 2014.

<sup>69</sup> Cfr. Gil de, Lester, Clementina, “Evolución de la Administración...”, op.cit., p. 615.

medio de éste se estableció el Poder Judicial de la Federación, depositándolo en una Corte Suprema de Justicia, en los Tribunales Colegiados de Circuito y en los Juzgados de Distrito. No obstante que la influencia organizacional derivada de la normatividad española continuara por varios años más, hasta ser sustituida progresivamente. Por ejemplo el establecimiento de la Suprema Corte de Justicia trajo consigo la desaparición de la Audiencia de México, por lo que cada estado tuvo que crear un tribunal superior propio, así como sus juzgados de primera instancia<sup>70</sup>.

De tal manera que la decisión de adoptar la forma de república federal demandó un sistema judicial que fuese emanación de aquella base, dejando a los Estados la regulación interior del sistema, reservando a los poderes federales exclusivamente el arreglo y vigilancia del ejercicio mismo<sup>71</sup>.

Así, conforme a las reglas de competencia de la recién creada institución jurisdiccional, las causas penales comunes no tendrían más de dos instancias, teniendo la posibilidad de abrirse una tercera, en caso de que la sentencia en segunda instancia no fuere del todo conforme con la de primera instancia, funcionando como tribunal de apelación. De esta manera se dan las bases de lo que fundaría la doble jurisdicción dentro del sistema judicial mexicano.

Sin dejar de reconocer el esfuerzo que se hizo por establecer un sistema judicial congruente con las ideas libertarias de este periodo, resulta importante precisar que las reglas generales que se dictaron respecto de la administración de justicia fueron copia de los parámetros y estructura que estableció la Constitución gaditana. De este modo, aunque en el papel se hacía el esfuerzo por tomar distancia y borrar todo antecedente colonial respecto de la organización política y jurídica del Poder Judicial y de su correspondiente funcionamiento, así como el sistema de procesamiento penal. Lo cierto es que, mucha de la nueva organización en la administración de justicia, tanto en la organización jurisdiccional, institucional, como en las

---

<sup>70</sup> Cfr. Soberanes, Fernández, José Luis, *"El Poder..."*, op.cit., p.51; Véase también Fix-Zamudio, Héctor, *"El Poder Judicial en la Constitución Federal de 1824"*, *Examen Retrospectivo del Sistema Constitucional Mexicano a 180 Años de la Constitución 1824*, VV.AA., Valadés Diego y Barceló Rojas, Daniel Armando coordinadores, Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 2005.

<sup>71</sup> Cfr. Barragán, Barragán, José, *Introducción al Federalismo (la formación de los Poderes 1824)*, Universidad Nacional Autónoma de México, Primera Edición, México, 1978, p.234; Véase Márquez Rábago Sergio R., *Evolución Constitucional Mexicana*, Editorial Porrúa, Primera Edición, México, D.F., 2002.

normas procesales se sostuvo sobre las bases y prácticas de lo que las audiencias coloniales habían dejado tras de sí<sup>72</sup>.

El mayor reto lo supuso el organizar las dos esferas competenciales federal y estatal, en virtud de que crearon los tribunales de los Estados y en consecuencia se suspendían los procesos que se encontraban pendientes bajo la responsabilidad aún de las audiencias, dejando la jurisdicción a los recién creados tribunales<sup>73</sup>. Bajo el régimen federal que restauró la Constitución de 1824 se crearon los tribunales de circuito y los juzgados de distrito, las causas pendientes que continuaron bajo el conocimiento de la Suprema Corte pasarían a los poderes judiciales de los Estados; dejándose a la Corte como tribunal de alzada<sup>74</sup>. Durante el periodo comprendido de 1823 a 1857 el problema más importante en materia penal es el derecho procesal pues la mayoría de las disposiciones se referían a la jurisdicción y hacer más efectiva la persecución de los delitos<sup>75</sup>.

La era moderna de la organización y estructura del Poder Judicial en México comenzó con el régimen constitucional instaurado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Para ubicarnos en el tiempo y el espacio los antecedentes de la época fue el movimiento político-social que tuvo lugar en México con la Revolución de 1910, como parte del surgimiento del movimiento liberal del momento se defendía el principio de la no-reelección, así como la reivindicación de los derechos individuales y garantías de carácter social a favor de las clases obreras y campesina. Estas ideas provocaron la transformación de la Constitución de 1857 de corte liberal-individual, para generar un nuevo documento fundamental cuyos principios esenciales serían la soberanía, los derechos humanos, la división de poderes, el sistema federal, el sistema representativo, la supremacía del Estado sobre las iglesias y el juicio de amparo como medio de control constitucional<sup>76</sup>.

---

<sup>72</sup> "...si bien la organización de los tribunales federales se inspira claramente en la Ley Judicial de los Estados Unidos de 1789, como no se tenía una clara comprensión de su funcionamiento, se introdujeron varios elementos de la constitución española de 1812, lo que se advierte no sólo en algunas atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, sino en cuanto a las reglas generales que se sujetará en todos los Estados y territorios de la federación la administración de justicia...en que se consignan algunos derechos procesales que se tomaron de la Constitución de Cádiz". Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, *"El Poder Judicial..."*, op.cit., p.125 y ss.

<sup>73</sup> *Ibídem*, pp. 278 y ss.

<sup>74</sup> Cfr. Soberanes, Fernández, José Luis, *"El Poder..."*, op.cit., p.64.

<sup>75</sup> Cfr. Cruz, Barney, Oscar, *"Historia..."*, op.cit., p.720.

<sup>76</sup> Cfr. Madrazo, Jorge, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, *"Diccionario Jurídico..."*, op.cit., p. 668-670.

Bajo este esquema el Poder Judicial federal quedaría compuesto por una Suprema Corte de Justicia que funcionaría en Pleno o en salas, además de los tribunales de circuito colegiado en materia de amparo y unitario en materia de apelación, y por último los jueces de distrito. De este modo, conforme al régimen federal establecido por el artículo 40 y 41 de la Constitución de 1917, las entidades federativas son soberanas y autónomas, creando por mandato constitucional dos órdenes jurídicos parciales y delegados de la propia Constitución: el orden jurídico federal y el común o de los Estados.

Así es como en su Capítulo IV “Del Poder Judicial”, de la Constitución de 1917, se asentaron asentó las bases que proyecto hacia el futuro el orden jerárquico-institucional tomando en cuenta el diseño de estado federal. Para después, también fundar los parámetros competenciales y de procedimiento en la administración de justicia en general y también penal.

### **3. Bifurcación del Sistema Judicial en México.**

El modelo federal para México ha marcado una gran parte de su historia política y jurídica, pues este concepto aparece una y otra vez en las distintas etapas evolutivas de la nación, en forma de organización política así como territorial. Así es como en los tres movimientos importantes de nuestro pasado constitucional encontramos que fue en esa dirección que se enderezaron los caminos de nuestro destino. Desde nuestro surgimiento a la vida independiente en 1824, la etapa de la reforma en 1857 y por último el movimiento revolucionario que culminó con la Constitución de 1917, revisten la lucha por implantar el modelo de estado federal<sup>77</sup>.

En este sentido hay quienes ubican en la estructura colonial y en algunos elementos instaurados por la Constitución de Cádiz de 1812 los primeros pasos de una descentralización política, que desembocaría más tarde en un Estado federal<sup>78</sup>.

Sin embargo hay que precisar que una de las motivaciones de la independencia mexicana fue distanciarse de todo lo que significara continuar con la dependencia española, tanto en lo

---

<sup>77</sup> Véase Rabasa Emilio O., *Historia de las Constituciones Mexicanas*, 1ª reimpresión de la 3ª Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 2004.

<sup>78</sup> Cfr. Valencia Carmona, Salvador, *Derecho Constitucional Mexicano a Fin de Siglo*, Editorial Porrúa, Universidad Nacional Autónoma de México, Primera edición, 1995, México D.F., p.286.

político como en lo jurídico. Se caminó en la dirección de fundar de un nuevo estado regido bajo paradigmas establecidos por constituciones con ideas liberales, con una marcada influencia norteamericana<sup>79</sup>. Fueron muchos los avatares que se sucedieron en la historia mexicana por la lucha entre el régimen federalista versus el régimen centralista la Constitución de 1836, la de 1843, fueron constituciones derivadas del movimiento centralista, por su parte el Acta de Reformas 1847, las constituciones de 1857 y la de 1917 consagraron de manera definitiva tanto política como institucionalmente el régimen federal, como una decisión política definitiva del estado mexicano.

En la actual Constitución una de las reglas de mayor trascendencia la encontramos en el Artículo 124 Constitucional el cual establece que: *“las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservados a los Estados”*, en este sentido constitucionalmente se desprende que determinadas facultades están legadas de manera exclusiva en el poder central, ya sea Ejecutivo, Legislativo o Judicial, para las restantes quedar dentro de las competencias de los Estados miembros. En principio nuestra carta fundamental establece las facultades que tienen los poderes federales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, en los artículos 73, 89, 103 y 107, respectivamente.

Sin embargo, desde una perspectiva de la teoría jurídica del Estado Federal la Corte mexicana ha hecho el siguiente análisis relativo a la división de facultades, se admiten tres métodos distintos para aterrizarlas, los cuales consisten: el primero, en enumerar en forma completa como sea posible, las atribuciones del Poder Central así como las facultades destinadas para los Estados; el segundo, en enumerar las atribuciones del Poder Central, de manera que todas las no especificadas, quedarán destinadas a los Estados; y el tercero en enumerar las atribuciones de los Estados, haciendo que recaigan en el Poder Central todas las no comprendidas en esa enumeración.

Según la Suprema Corte aunque el tercero de los métodos enunciados sea el más conveniente, desde el punto de vista constitucional, la Constitución Mexicana adoptó el método en que se enumeran las atribuciones o facultades de los gobierno locales, de manera que la presunción exista a beneficio del Poder Central, en razón de que una de las consecuencias de la evolución política y social, sea la transformación de las necesidades del

---

<sup>79</sup> Véase Rabasa Emilio O., *El Pensamiento Político y Social del Constituyente de 1916-1917*, Primera Edición Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 1996.

orden local, en intereses de orden general y éstos, deban ser administrados por el Gobierno Central por ser el representante del interés general.

El segundo de los métodos es determinado porque las facultades que no están expresamente concedidas por la Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los Estados, sin embargo el constituyente mexicano no parece admitir este principio en toda su pureza, puesto que, en algunos artículos de la Carta Federal, se confieren a los Estados algunas atribuciones; en otros, se les prohíbe el ejercicio de otras que también se especifican; y a veces se concede la misma facultad atributiva a la Federación y a los Estados, estableciéndose así una jurisdicción concurrente.

En definitiva el sistema adoptado por el Constituyente es una combinación de los tres métodos, por lo que no es sostenible el argumento del artículo 124 de la Constitución que la federación sólo puede ejercer las facultades legislativas que expresamente le confiere el artículo 73 constitucional; pues esas facultades van imbricadas también en las demás jurisdicciones y facultades conferidas a la Federación<sup>80</sup>.

Durante el desarrollo de los epígrafes anteriores, hemos anotado como el ordenamiento mexicano se inspiró en el sistema federal implantado por la Constitución de los Estados Unidos de 1787, así como en la Ley de Organización Judicial (Judiciary Act) expedida por el Congreso de los Estados Unidos en 1789<sup>81</sup>. Igualmente importante es precisar que siguió un

---

<sup>80</sup> T.XXXXVI, Controversia constitucional entre la Federación y el Estado de Oaxaca 2/32, Federación y Estado de Oaxaca, 15 de octubre de 1932, en la Constitución y su Interpretación por el Poder Judicial de la Federación, Volumen III, F-L, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fondo de Cultura Económica, México, D.F., 1992 p.1772-1773.

<sup>81</sup> "(...) to the constitution (...) The several departments of power are distributed and blended in such a manner as at once to destroy all symmetry and beauty of form, and to expose some of the essential parts of the edifice to the danger of being crushed by the disproportionate weight of parts (...) The accumulation of powers, legislative, executive and judiciary, in the same hands, whether of one, a few, or many, and whether hereditary, self-appointed, or elective, may justly be pronounced the very definition of tyranny (...) that the legislative, executive, and judiciary powers ought to be kept as separate from, and independent of, each other as the nature of a free government will admit; or as is consistent with that chain of connection that binds the whole fabric of the constitution (...) I mean so long as the judiciary remains truly distinct from the legislature and the Executive. For I agree, that "there is no liberty, if the power of judging be not separated from the legislative and executive powers". And it proves, in the last place, that as liberty can have nothing to fear from the judiciary alone, but would have everything to fear from its union with either of the other departments; that as all the effects of such a union must ensue from a dependence of the former on the latter, notwithstanding a nominal and apparent separation; that as, from the natural feebleness of the judiciary, it is in continual jeopardy of being overpowered, awed, or influenced by its coordinated branches; and that as nothing can contribute so much to its firmness and independence as permanency in office, this quality may therefore be justly regarded as an indispensable ingredient in its constitution, and in great measure, as the citadel of the public justice and the public security", Madison Paper number 47, "The Separation of Powers", Hamilton, Paper

camino diverso puesto que el federalismo mexicano reservó a los Estados lo que no estuviera consagrado a la federación, al contrario que en Estados Unidos de Norteamérica que se reservó para la federación lo que no estuviera conferido a los Estados. Así se creó el sistema de doble jurisdicción, que implicó la separación entre los tribunales locales y los federales, cada uno en su respectiva esfera de aplicación de los ordenamientos legales de los Estados y de la federación, que en los Estados Unidos de América, debido al desarrollo de la revisión judicial, se estableció que un asunto de legislación local sólo podría llevarse a los tribunales federales cuando se planteara una cuestión de inconstitucionalidad<sup>82</sup>.

Con el proceso reformista del siglo XIX y después el postrevolucionario de 1917 los que trajeron consigo importantes cambios a los principios que motivarían el diseño y sistematización del órgano jurisdiccional, terminando así la aplicación de la legislación colonial, pues anterior a esto aún se arrastraba la herencia judicial española con sus principios, formación y estructura. Así el órgano judicial federal por un lado atendería todos los casos en que el orden jurídico federal entre en conflicto con la Constitución, manteniendo una función de revisor del control de la legalidad el cual deberá ser observado por el resto de los órganos jurisdiccionales federales y locales en la aplicación de las normas secundarias y por la otra parte corresponde también la tarea de intérprete constitucional. Ósea derivado del régimen federal establecido en la Constitución Mexicana se deposita el ejercicio de la función jurisdiccional, en un conjunto de tribunales que llevan por nombre Poder Judicial de la federación, cuya facultad es el conocer no solamente de las controversias de relativas al orden jurídico interno, sino también se le otorga la responsabilidad del control constitucional. Con estos cambios se creó una doble función para Poder Judicial Federal mexicano<sup>83</sup>.

---

number 78 *"The Judges as guardians of the Constitution"*, *"The Federalist..."*, op.cit., p. 491, Cfr. Fix Zamudio, Héctor, *Comentarios al Artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, Derechos del Pueblo Mexicano, México a través de sus Constituciones, Volumen I, Tomo IX, Artículos 82-94, Serie VI, H. Cámara de Diputados LV Legislatura, H. Congreso de la Unión, Comité de Asuntos Editoriales, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, Editorial Miguel Ángel Porrúa, 1994, México D.F., p. 798.

<sup>82</sup> Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, *Justicia Constitucional y Control de legalidad en México, El Estado Constitucional Contemporáneo, Culturas y Sistemas Jurídicos comparados*, Tomo I, VV.AA., Instituto de Investigaciones Jurídica, UNAM, Primera Edición, México D.F., 2006, p. 251.

<sup>83</sup> La Suprema Corte de Justicia y los tribunales federales habían venido funcionando como un tribunales de casación federal, con algunos aspectos de control de constitucional, fue de manera paulatina que el máximo tribunal del país adquirió las características que definen a un organismo jurisdiccional especializado en la solución de las controversias planteadas con motivo de la aplicación de las normas constitucionales, trabajando una combinación de los sistemas concentrado (modelo europeo) y difuso de control constitucional (modelo

No hay que perder de vista que el sistema de doble jurisdicción, se apoyó en un sistema de existencia paralela de tribunales federales, y los poderes judiciales de cada una de las entidades federativas. Esta distribución supone diseñar unos mecanismos específicos en el ámbito de competencias entre unos y otros, así como en aquellos casos excepcionales que de los tribunales estatales trasciendan a la competencia federal<sup>84</sup>.

Es preciso explicar que la organización de doble jurisdicción se justifica mediante un conjunto de elementos de carácter político-jurídicos. Una interpretación ampliada del Artículo 14 de la Constitución de 1857 volvió a la Suprema Corte de Justicia en la última instancia, es decir en el órgano jurisdiccional encargado de resolver sobre la indebida aplicación de las disposiciones legales ordinarias, también conocido como control de legalidad. En la época los litigantes comenzaron a invocar el artículo 14 de la Constitución de 1857, para pedir la intervención de los tribunales federales a efecto de conseguir la revocación o modificación de sentencias dictadas por los tribunales locales, bajo el argumento de que la ley (local o común) no había sido “exactamente aplicada” al caso concreto controvertido. Esta posibilidad quedó abierta, en virtud de la redacción del mencionado artículo 14 constitucional, que a la letra disponía: “No se podrá expedir ninguna ley retroactiva. *Nadie puede ser juzgado ni sentenciado*; no por leyes dadas con anterioridad al hecho y *exactamente aplicadas a él*, por el tribunal que previamente haya establecido la ley”.

De esta manera, los tribunales federales comenzaron en algunos casos a otorgar amparos en contra de sentencias pronunciadas por los tribunales locales. Es decir que el criterio fue que los Estados, en función de su pertenencia a la unión, no podía contravenir a la Constitución y tenían la obligación de respetar y sostener las garantías individuales, a sufrir la intervención y

---

americano). Ibídem, p. 250, también Cfr. Quiroz Acosta, Enrique, *Lecciones de Derecho Constitucional*, Segundo Curso, Editorial Porrúa, Primera Edición, México, D.F., 2002, p.391.

<sup>84</sup>A través de una de las modalidades del Juicio de Amparo, se combaten dichas disposiciones, Ibídem, p. 27; “Artículo 14: A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho. Artículo 16: Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento (...)”, CONSTITUCIÓN Política de los Estados Unidos Mexicanos, Disponible en: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf>, 5 de junio 2010.



la acción de los tribunales federales en los casos de amparo por violación de garantías o invasión de la esfera de la autoridad federal. Sin embargo, no todos los tribunales federales actuaron de esta manera. Incluso la Suprema Corte de Justicia mostró una actitud vacilante respecto al tema<sup>85</sup>. Fue la presión de los litigantes la que llevó poco a poco a que la Corte admitiera el amparo judicial, no sin vacilación y titubeos. Así, el amparo judicial terminó por imponerse en la práctica, lo cual no fue óbice para que la discusión sobre la conveniencia o no de conservar este instrumento de control de legalidad.

Posteriormente con la expedición de la Constitución de 1917, esta jurisdicción es unitaria debido a que los tribunales ordinarios se encuentran subordinados a los tribunales federales, aduciendo violaciones a los artículos 14 y 16 constitucional<sup>86</sup>.

En el proceso de expansión del federalismo en México, se advierte la centralización de muchas de las facultades y actividades del estado concentradas en los poderes centrales, en perjuicio –como es lógico– de las entidades federativas. Sobre el tema Brewer Carias dice que todo sistema federal o de distribución vertical del poder público, debe por supuesto estar montado sobre un sistema de distribución de competencias entre el nivel nacional y el nivel de los Estados miembros. Indudablemente que la federación puede ser más completa como sistema de descentralización política mientras más competencias tengan los Estados, en el sistema federal mexicano estas competencias están centralizadas en virtud de que las facultades públicas se concentran en los poderes federales<sup>87</sup>. La característica del Estado federal consiste en que las facultades que se atribuyen a los órganos de la federación como los Estados miembros se reparten de manera tal, que debe existir un dualismo en centros de poder y ninguno debe de tener la supremacía de competencias<sup>88</sup>.

---

<sup>85</sup> Cfr. Serna de la Garza, José María, *El Sistema Federal Mexicano*, Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 2008, p. 266, 269.

<sup>86</sup> Cfr. Fix Zamudio, Héctor, Favela Ovalle José, *Derecho Procesal*, Primera Edición, Universidad Nacional Autónoma de México, 1991, México D.F., p. 27. Disponible en <http://www.bibliojuridica.org/libros/1/87/3.htm>. 25 de Mayo 2010.

<sup>87</sup> Cfr. Brewer Carias, Alan R., *“Los problemas de la federación centralizada”*, IV Congreso Interamericano de Derecho Constitucional, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 1992 p.87.

<sup>88</sup> Cfr. Hernández, María del Pilar, *Federalismo y Justicia Federativa*, “Homenaje al Doctor Emilio O. Rabasa”, VV.AA., Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Primera Edición, México, D.F., 2010, p. 238, Véase también de la misma autora, *“Del Federalismo Judicial”*, *Reforma Judicial*, *Revista Mexicana de Justicia*, Número 2, julio-diciembre, Año 2003, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F. 2003.

No se pueden ignorar las numerosas críticas por parte de la doctrina en relación a que tal estado de cosas ha sido excesivo, y ha contribuido a la deformación del propio sistema federal. Si bien es cierto que este tema en particular no es parte de la temática de nuestro trabajo, y el abordarlo nos llevaría en otra dirección excediendo las humildes pretensiones del mismo, estimamos de importancia mencionarlo brevemente.

Posteriormente en la exposición de motivos previa a la promulgación de la Constitución de 1917, se produjo el debate respecto al efecto centralizador del juicio amparo contra resoluciones judiciales en perjuicio de la autonomía de los órganos jurisdiccionales de los Estados. Pese a esto, se consideró que este mecanismo jurisdiccional serviría de remedio necesario para librar a los justiciables de las arbitrariedades de los jueces. Los constituyentes de la época defendieron la necesidad de otorgar a los tribunales y jueces locales la facultad de decidir de manera definitiva sobre las controversias en las cuales se aplicaran disposiciones también locales, a riesgo de perder la autonomía judicial en los Estados del país<sup>89</sup>. Una opinión decisiva fue la efectuada por José Natividad Macías sosteniendo que las bases que proponían en el proyecto del artículo 107 constitucional, se hacía eficaz el respeto a la autonomía de los tribunales locales, pues la corte mexicana no debía revisar los procedimientos seguidos en los Estados de la república, sino únicamente revisar si algún precepto constitucional fue violado<sup>90</sup>. Con el paso del tiempo esta jurisdicción se convertiría en unitaria, o mejor dicho en una revisión judicial concentrada de la constitucionalidad de las resoluciones judiciales de los tribunales ordinarios, debido a que estos últimos se encuentran subordinados a los tribunales federales, aduciendo violaciones a los artículos 14 y 16 constitucional<sup>91</sup>.

Una crítica importante que en referencia al federalismo judicial hace Fix Zamudio es lo que ocurre en el juicio de amparo, donde las autoridades judiciales de carácter federal pueden revisar, en última instancia, las resoluciones que dictan los tribunales y las autoridades locales por incorrecta aplicación de las leyes secundarias<sup>92</sup>, -actualmente también en materia de amparo autoridades federales conocen de resoluciones de tribunales federales como es el caso

---

<sup>89</sup> Véase Votos particular de Heriberto Jara e Hilario Medina, Cfr. *Derechos del Pueblo Mexicano. México a través de sus constituciones*, 4ª Edición, Tomo X, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Miguel Ángel Porrúa, México, D.F., 1994, p.547-548.

<sup>90</sup> *Ibíd*em, p. 573-580.

<sup>91</sup> Cfr. Fix Zamudio, Héctor, Favela Ovalle José, "*Derecho Procesal...*", op.cit., p. 27.

<sup>92</sup> Valencia Carmona Salvador, "*Derecho Constitucional...*", op.cit., p. 295.

del juicio de amparo interpuesto contra resoluciones de un tribunal unitario que confirme por ejemplo una formal prisión, la competencia en este caso recae en otro tribunal unitario siendo ambos federales, pero también autoridades locales son competentes para conocer del juicio de amparo en los casos de jurisdicción concurrente por ejemplo cuando un magistrado penal local, revisa en amparo cuestiones de índole penal a las alude el artículo 37 de la Ley de Amparo-. Dicha función se realiza a través de una de las modalidades de la institución jurídica del juicio de amparo, cuya procedencia puede enderezarse contra actos de autoridad de cualquier índole, así como de aquellos expedidos por los tribunales judiciales incluyendo en esta clasificación los de carácter administrativo o del trabajo, por la inaplicación indebida de normas jurídicas secundarias, reglamentos administrativos<sup>93</sup>.

Por otro lado en materia judicial, otro de los puntos críticos en cuanto al régimen federal se refiere, es que los ordenamientos jurídicos correspondientes al régimen jurídico de los Estados carecen de uniformidad en las normas secundarias en materias como civil, penal, y procesal, entre otros<sup>94</sup>. Lo anterior centra la discusión en que para un buen funcionamiento del sistema federal es necesario contar con un régimen de normas secundarias homogéneo<sup>95</sup>, que

---

<sup>93</sup> Véase, Artículo 158 de la Ley de Amparo de 1936, disponible en: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/20.pdf>; Estrada Rodríguez, José Guadalupe, *Los Supuestos de Procedencia del Juicio de Amparo*, Primera Edición, Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas, Zacatecas, México, 2002, p. 271 y ss. Disponible en: <http://www.bibliojuridica.org/libros/2/974/17.pdf>, 28 de Junio 2010.

<sup>94</sup> "Víctima de una mala entendida proyección federalista, el país padece una treintena de códigos procesales (...)", Cfr. Alcalá-Zamora y Castillo, Niceto, *Veinticinco Años de Evolución del Derecho Procesal 1940-1965*, Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, México D.F., 1968, p. 124 y ss., "La multiplicidad de códigos procesales en nuestro país plantea enormes dificultades para la administración de justicia (...)", Cfr. Sánchez Cordero, de García Villegas, Olga, "El Futuro del Derecho: hacia la unificación de las normas procesales como inicio de un salto evolutivo en la justicia", en: *Ciclo Permanente de Actualización Profesional "Temas Relevantes de la Práctica Procesal en Materia Civil y Familiar"*, (19 de Marzo 2001, México D.F.), Consejo Nacional de Egresados en Posgrado en Derecho A.C.; trabajos: Unidad de Congresos Centro Médico Nacional, Siglo XXI, México D.F. 2001, p.1 y ss., disponible en <http://www2.scjn.gob.mx/Ministros/oscgv/Conf/EL%20FUTURO%20DEL%20DERECHO.pdf>, 25 de junio 2010; "Durante el Siglo XIX, con el ánimo de copiar el sistema de Estados Unidos de América, de permitir que las diversas entidades de la federación tuvieran la posibilidad de legislar en materia penal, (...). De acuerdo con el sistema de que las facultades no reservadas a la Federación quedaban otorgadas a los Estados fue por lo que éstos, a partir de 1835, comenzaron a legislar en materia penal y de procedimientos penales. (...) Durante el Siglo XX tuvimos un verdadero mosaico de códigos penales y de procedimientos penales en toda la República. No ha habido, uniformidad ni unidad, ni concierto entre ellos. Estamos en completo caos". Cfr. Franco Guzmán, Ricardo, "La necesidad de unificar la legislación Penal en toda la República", *Los Desafíos de la Seguridad Pública en México*, coordinadores Peñaloza, Pedro José, Garza Salinas, Mario A., Primera Edición, Procuraduría General de la República, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2002, p.74-75.

<sup>95</sup> Las tesis sobre la unificación de los códigos procesales es hoy una realidad en México, ya que tanto en los congresos de los Estados, como de la federación existen consultas sobre el particular cuando menos en materia

abarque todas las materias, pues sólo así se está en cumplimiento de los principios de seguridad y certeza jurídica que todo orden normativo secundario debe establecer, además del de supremacía constitucional de normas imprescindible en un estado democrático constitucional de derecho. Sobre el tema Kelsen explica la forma de articulación de los niveles normativos que debe establecer el orden jurídico de un Estado federal, compuesto de normas centrales válidas para su territorio y de normas locales que valen solamente en parte de dicho territorio, de modo que los dos órdenes jurídicos, considerados por dicho autor como “parciales”, se encuentran articulados por un orden superior correspondiente al “Estado federal total”<sup>96</sup>.

La naturaleza propia del Estado federal responde a un principio de organización estatal que tiene por objeto la máxima autonomía de las unidades componentes, con el objetivo de un mejor funcionamiento de la organización. En esta línea el federalismo se manifiesta como una acentuación del ideal de libertad, como del principio de división de poderes cuya finalidad es garantizar la libertad<sup>97</sup>. La Constitución de un Estado Federal requiere de la operatividad de un federalismo judicial pleno, el cual se establece a través de instituir tribunales federales, estatales y municipales; determinando las vías y formas para garantizar el respeto de las sentencias dictadas por cada uno de ellos en pleno ejercicio de sus atribuciones. En el Estado Constitucional contemporáneo el Poder Judicial requiere satisfacer ciertos requisitos o principios, a saber el de independencia, responsabilidad, la existencia de un estatuto de jueces que contemple las bases de una selección, designación, ratificación, reelección, inamovilidad absoluta o relativa, remuneración y responsabilidad en todos los ámbitos y la unidad y exclusividad de la jurisdicción, auto gobierno y el establecimiento de consejos de la judicatura<sup>98</sup>.

---

penal. Los mecanismos propuestos son en dos vías, primero la expedición de un código único con vigencia nacional, y una segunda propuesta la expedición de códigos modelos para aprobación de las legislaturas locales respectivamente.

<sup>96</sup> Cfr. Kelsen, Hans, *Teoría General del Derecho y del Estado*, Traducción Eduardo García Máñez, textos universitarios, Primera edición, segunda reimpresión, UNAM, México, D.F., 1979, p. 376-380, Cfr. Serna de la Garza, José María, *El Sistema Federal Mexicano, un análisis jurídico*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, Primera Edición, México D.F. 2008, p. 10 y 11.

<sup>97</sup> Cfr. García Pelayo, Manuel comentado por Hernández, María del Pilar, *Federalismo y Justicia Federativa, “Homenaje al Doctor...”*, op.cit., p. 284, Véase, Bidart Campos, Germán J., “Marco, Condicionamientos y Frenos del Federalismo” y, Vescovi, Enrique, “Régimen Federal”, IV Congreso Interamericano de Derecho Constitucional, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 1992.

<sup>98</sup> *Ibidem*, p. 284.

Un aspecto relevante dentro del federalismo judicial tiene que ver con la necesidad de que los tribunales que se encargan de la jurisdicción común, -aquella que está destinada a ser ejercida por los órganos judiciales de los Estados- gocen de las mismas garantías que los federales, principalmente en los principios que rigen su actuación, tanto en el ámbito económico y jurídico<sup>99</sup>.

En el diseño institucional el Estado federal Mexicano la Constitución Política en su Artículo 133 dispone: “*Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados*”. Así el principio de supremacía de la Constitución establece la obligación a que todos el orden normativo sea dependiente de una norma de normas, es decir que se encuentra sometido a una disciplina jurídica de jerarquía superior que es la que dará unidad a todo el sistema.

Respecto a la unidad normativa, Ortiz Mayagoitia<sup>100</sup> explica que todo orden jurídico no es sino un sistema de normas que constituyen una unidad. La unidad de estas normas se encuentra cimentada por el hecho de que la creación o el contenido de la norma del grado más bajo se encuentra determinada por otra de grado superior, hasta llegar a la norma de mayor rango: La Constitución, la cual representa la suprema razón de validez del ordenamiento jurídico. El autor referido abunda en que una norma jurídica es válida por haberse creado en la forma prevista por la norma fundamental o que haya sido expedida conforme al contenido establecido por ésta, lo cual corresponde a la razón de validez de la primera y la relación entre una y otra conforman un vínculo de supra y subordinación.

Ahora bien, en un régimen normativo de carácter federal como el mexicano, las normas tienen distintos ámbitos de validez territorial, debido a que el sistema está compuesto por normas que valen para distintas partes del territorio nacional y existen ciertas autoridades que

---

<sup>99</sup> Ibídem, p.285.

<sup>100</sup> Cfr. Ortiz Mayagoitia, Guillermo, “El orden jurídico nacional a la luz de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, *Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano*, Edición 2003, Konrad-Adenauer-Stiftung A.C., Montevideo, Uruguay, p. 417, Véase también Kelsen, Hans, *Teoría Pura del Derecho*, Traducción de la segunda edición en Alemán por Roberto J. Vernengo, UNAM, México, D.F., 1982.

sólo pueden aplicar determinadas normas en una circunscripción específica. Así en los Estados federales existen dos clases de normas, las federales y las locales, pero éstas deberán regirse por lo que la norma superior delimite dentro del ámbito de validez de los órdenes normativos respectivos, sin este equilibrio no podrá afirmarse que exista unidad del orden normativo y mucho menos fundamento jurídico que permitan la división de los ámbitos de validez. Por tanto, en los sistemas federales además del orden local y federal, por encima de estos debe existir necesariamente un orden constitucional<sup>101</sup>.

En este tenor, la estructura normativa del orden jurídico mexicano emana de la Constitución Política, a través de la cual se establecen deberes, se crean limitaciones, facultades y derechos, por su propia naturaleza dicha norma se ubica en un ámbito de superioridad por no estar sujeta a ningún orden normativo. Así, lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia: *“La reforma al artículo 1º de la Carta Magna, publicada el 10 de junio de 2011, en modo alguno contraviene al principio de supremacía constitucional consagrado desde 1917 en el artículo 133 del propio ordenamiento (...) “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanan de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado serán la Ley Suprema de toda la Unión”, lo cual implica que las leyes y los tratados internacionales se encuentra en un plano jerárquicamente inferior a la Constitución, pues en el caso de las leyes claramente se establece que de ella emanan...”*<sup>102</sup>.

Adicionalmente la Constitución Mexicana, organiza al estado de tal forma que ambos ordenes tanto el local como el federal cumplan con el principio de la división de poderes, como elementos que determina las atribuciones que corresponden tanto a los poderes de la unión como a los Estados, donde según lo previsto por el artículo 124 constitucional las facultades que no estén expresamente concedidas a la federación, se entienden reservadas para los Estados.

---

<sup>101</sup> Ibídem, p. 418.

<sup>102</sup> Tesis: 2ª. LXXV/2012 (10ª.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro XIII, Octubre 2012, Tomo 3, Disponible en: [www.scjn.com.mx](http://www.scjn.com.mx), consultado el 15 de marzo 2014.

Así, la corte mexicana ha hecho una interpretación extensiva al decir: *“Los artículos 40 y 133 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos consagran el principio de supremacía constitucional, en tanto disponen que la Constitución es la ley fundamental o suprema, naturaleza que niega la posibilidad de que esté sometida a otro cuerpo normativo superior y, en cambio, requiere que todo le sea inferior y que cada acto de autoridad esté de acuerdo a ella. Por tanto, en términos generales, todas las autoridades ordinarias de control constitucional, están obligadas aplicarla directamente, particularmente cuando se está en presencia de derechos fundamentales, aplicación que ya ha reconocido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos precedentes...”*<sup>103</sup>. Y por último refuerza el principio de supremacía constitucional sometiendo tanto el derecho interno como los tratados internacionales al control constitucional, a través de las controversias constitucionales, las acciones de constitucionalidad y el juicio de amparo.

De este modo queda establecida también la vinculación que existe entre la actividad jurisdiccional y los principios constitucionales de un estado federal democrático. No es que sea el orden normativo el que solamente deba observar el principio de supremacía constitucional y su jerarquía normativa, también ordena al órgano jurisdiccional que, en su responsabilidad de aplicación de éstas, debe sujetarse en todo momento a las disposiciones previstas por la norma fundamental, en detrimento del régimen normativo local o secundario.

Es indiscutible que el órgano jurisdiccional como parte del poder público se encuentra condicionado en su ejercicio a que este se realice de conformidad con los principios establecidos en la Constitución. De esta manera justifica su legitimación constitucional y democrática derivado del respeto y la observancia que, en todas las competencias y responsabilidades que tengan a su cargo, los mismos tengan de los derechos y garantías

---

<sup>103</sup> Tesis: 2ª. CLXII/2008, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXIX, Enero 2009; Supremacía Constitucional y Ley Suprema de la Unión. Interpretación del Artículo 133 Constitucional. A partir de la interpretación del precepto citado, si aceptamos que las Leyes del Congreso de la Unión a las que aquél se refiere corresponden, no a las leyes federales sino aquellas que inciden en todos los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado mexicano y cuya emisión deriva de cláusulas constitucionales que constriñen al legislador para dictarlas, el principio de supremacía constitucional implícito en el texto del artículo en cita claramente se traduce en que la Constitución General de la República, las leyes generales del Congreso de la Unión y los tratados internacionales que estén de acuerdo con ella, constituyen la ley suprema de la unión, esto es conforman un orden jurídico superior, de carácter nacional, en el cual la Constitución se ubica en la cúspide y, por debajo de ella los tratados internacionales y las leyes generales. Tesis: P.VIII/2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXV, Abril de 2007; Aislada; Constitucional; Disponible en [www.scjn.com.mx](http://www.scjn.com.mx), consultado el 15 de marzo del 2014.

constitucionales previstas por el orden constitucional. Esto es la sujeción de la actividad jurisdiccional a las garantías constitucionales en cuanto al proceso y que en definitiva suponen el sometimiento del juez al ordenamiento jurídico, en la aplicación de normas previas a toda controversia<sup>104</sup>. Es decir, que los jueces se encuentran también limitados por la propia Constitución y el ordenamiento jurídico, están sujetos por ella.

Por último sería importante señalar en relación al federalismo, de la armonía que debe existir entre éste y el sistema democrático. Es decir, que si democracia entendemos –según Bidart Campos<sup>105</sup>– un régimen político-constitucional de libertades, cimentado en el reconocimiento de la dignidad de la persona, a la que se le asigna un status jurídico-político de acuerdo a su naturaleza, sistema que respeta, tutela y promueve la libertad y los derechos fundamentales tal como lo establece el artículo 1 de la Constitución Política mexicana. Indiscutiblemente estas libertades y derechos humanos conforman elementos esenciales de la democracia mexicana. Entonces abunda el autor ¿qué importancia tiene el concepto de democracia con respecto del federalismo?, -contestando- que el federalismo quedará vacío de sentido cuando el Estado federal no sea democrático, porque sin dejar de lado que el federalismo es una forma de organización estatal que descentraliza políticamente el poder, implicando relación de poder con el territorio éste modelo de regulación constitucional no agota su funcionalidad en sí misma, debido a que desde la perspectiva constitucional no se debe perder de vista a la persona humana y el régimen de libertades al que nos hemos referido.

Es decir el federalismo encuentra su valor cuando opera con funcionalidad dentro de los parámetros de un Estado democrático, porque entonces estará capacitado para integrarse a éste y coadyuvar a la estabilidad del mismo. De otra parte, si el Estado no es democrático, pierde la utilidad de preservar y encauzar la estructura federal, debido a que sus principios son adversos al pluralismo y al disenso, incurriendo en prácticas vacuas e inocuas sin funcionalidad. En suma se debe procurar un modelo de federalismo que no sea solamente una pieza mecánica dentro del engranaje del Estado, sino que sea susceptible de funcionalidad,

---

<sup>104</sup> Cfr. Arozamena Sierra, Jerónimo, *“Jueces Ordinarios y Constitución”, Documentación Jurídica, Jornadas sobre El Poder Judicial*, Tomo XII, Enero-Junio, 45/46, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, España, 1985, p.16.

<sup>105</sup> Cfr. Bidart Campos, Germán J. *“Marcos, Condicionamientos y Frenos”, “IV Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional”, Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., p.33.*



éste carácter únicamente puede conseguirse a través de los principios de un Estado democrático<sup>106</sup>.

Hemos intentado fijar un panorama general respecto de la dinámica que ha seguido la estructura judicial en México a la luz de la organización federal, procurando establecer los principios y condiciones políticas y jurídicas de su formación. Sin perder de vista la complejidad de la empresa, aspiramos a crear un escenario que nos ayude a comprender la mecánica de su funcionamiento, que al mismo tiempo nos deje en posibilidad de construir un marco conceptual, para elaborar un análisis congruente que nos ayude a comprender las causas que producen a nuestro juicio un complicado y deficiente cumplimiento por parte del estado mexicano de los derechos fundamentales relativos primero a la administración de justicia, teniendo graves repercusiones respecto del sistema de procesamiento de orden penal, y sus garantías procesales. Ahora transformado por la reforma constitucional del 2008 en la materia, ya que expresamente por lo menos en papel se ha constituido al estado mexicano bajo los principios constitucionales de un estado democrático constitucional de derecho.

De este modo quedo establecido también la vinculación que existe entre la actividad jurisdiccional y los principios constitucionales de un estado federal democrático. No es que sea el orden normativo el que solamente deba observar el principio de supremacía de normas, también ordena al órgano jurisdiccional que, en su responsabilidad de aplicación de éstas, debe sujetarse en todo momento a las disposiciones previstas por la norma fundamental, en detrimento del régimen normativo local o secundario.

Hemos intentado fijar un panorama general respecto de la dinámica que ha seguido la estructura judicial en México a la luz de la organización federal, procurando establecer los principios y condiciones políticas y jurídicas de su formación. Sin perder de vista la complejidad de la empresa, aspiramos a crear un escenario que nos ayude a comprender la mecánica de su funcionamiento, que al mismo tiempo nos deje en posibilidad de construir un marco conceptual, para elaborar un análisis congruente que nos ayude a comprender las causas que producen a nuestro juicio un complicado y deficiente cumplimiento por parte del estado mexicano de los derechos fundamentales relativos primero a la administración de justicia, teniendo graves repercusiones respecto del sistema de procesamiento de orden penal, y sus garantías procesales. Ahora transformado por la reforma constitucional del 2008 en la

---

<sup>106</sup> Ibídem, p. 34.

materia, ya que expresamente por lo menos en papel se ha constituido al Estado mexicano bajo los principios constitucionales de un estado democrático constitucional de derecho.

#### **4. Evolución del Sistema Judicial en las Constituciones Federales de 1824, 1847, 1857 y 1917.**

Como función pública el poder estatal debe ser esencialmente variable, con momentos en que su configuración, estructura y funcionamiento este condicionado por componentes de carácter histórico-político así como de tendencias jurídico-políticas que indiscutiblemente incidan en todos los ámbitos de la vida pública de un país<sup>107</sup>. Sin embargo, estos elementos son una constante y diríamos que inherentes a la creación del conjunto de órganos que integran al Estado. La historia orgánico-jurídico del Poder Judicial Mexicano está cimentada en las características que revisten sus atribuciones que son de naturaleza eminentemente jurisdiccional, ante la encomienda de impartir justicia como potestad dentro del ámbito de poder del estado, aplicando normas, dirimiendo controversias que se presenten dentro de un régimen jurídico establecido. Sin embargo esta responsabilidad no escapa al vaivén de las exigencias fácticas del que son objeto los regímenes políticos estatales a través del tiempo.

Es así como, el estudio de los documentos básicos -según Juventino V. Castro<sup>108</sup>- de una nación distinguen políticamente y jurídicamente al Estado, pues son importantes para identificar a un país en un momento concreto en la historia, es decir que el análisis de las constituciones resulta eficaz como método para aprehender la cultura de un pueblo, ósea el desiderátum ideológico plasmado en un momento determinado en un documento fundamental llamado Constitución. Sin duda dice Manuel García Pelayo<sup>109</sup>, la Constitución forma un nexo entre diversas esferas de la vida humana objetivada por el que se vinculan distintos sectores de la realidad política, jurídica, sociológica ente otras, -abunda el autor-, que es cierto también que el concepto de Constitución admite mayor pluralidad de formulaciones.

Una primera aproximación de la palabra Constitución nos indica un conjunto de normas –o bien-, una norma jurídica con un determinado contenido, con ciertas garantías de carácter

---

<sup>107</sup> Cfr. Burgoa, Orihuela, Ignacio, “*Derecho...*”, op.cit., p.944.

<sup>108</sup> Cfr. Castro, Juventino V., *Hacia el Sistema Judicial Mexicano del XXI*, Editorial Porrúa, Primera Edición, México D.F., 2000, p. 4.

<sup>109</sup> Cfr. García Pelayo Manuel, *Constitución y Derecho Constitucional (evolución y crisis de ambos conceptos)*, *Revista de Estudios Políticos*, No.37-38, Revista Trimestral Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, España, 1948, p.53-54.

formal y que forma parte integral de un ordenamiento jurídico, pero que al mismo tiempo se encuentra condicionada en su estructura y funcionamiento por ideales y valoraciones políticas, son en definitiva una forma a través de la cual el poder político-social se convierte en poder estatal<sup>110</sup>. Según la tipología que refiere García Pelayo, sobre el término Constitución primero en su acepción racional normativo, nos indica que aquella es un complejo normativo establecido de una sola vez, en el que de manera total, exhaustiva y sistemática se establecen las funciones del Estado, se regulan los órganos, el ámbito de sus competencias y las relaciones entre ellos. De acuerdo con esta tipología la Constitución es pues un sistema de normas, que parte de un esquema de organización en el que se encierre toda la vida del Estado. Otra característica dentro de este concepto es la despersonalización de la soberanía y la afirmación de la Constitución como soberana, es decir que si la soberanía es el poder de mandar sin excepción, y si todas las facultades de mandar son tales en cuanto que son expresión y se mueven dentro del ámbito de la Constitución, es claro que la Constitución es soberana puesto que todos los poderes de mando lo son en virtud de ésta<sup>111</sup>. Visión sostenida también por Kelsen en que ambos conceptos Estado y Constitución llegan a fusionarse en uno solo, donde el Estado es su Constitución.

Así también –el citado autor-<sup>112</sup> dentro del concepto histórico tradicional, define Constitución como el documento que no necesita ser escrito, sino que la costumbre tiene sobre ésta toda la dignidad que corresponde a una teoría del derecho sobre base historicista, así pues dentro de esta tipología la ley no crea la Constitución, es expresión de ella, pero no la única, ni siquiera la principal expresión, pues junto a ella actúa la costumbre e incluso algo que puede caer fuera de toda normatividad, esto es una serie de convenciones que se adaptan a la antigua estructura con nuevas situaciones ideales y reales. En esta categoría no existe el reconocimiento a la distinción formal entre leyes constitucionales y leyes ordinarias. En cuanto a la soberanía no existe despersonalización, pues esta reside en una persona o en unos órganos concretos, y como resultado del desarrollo histórico o como principio inmanente al mismo. Así por ejemplo, encontramos un constitucionalismo histórico evolutivo en el Reino Unido, donde la “costumbre constitucional” juega un papel fundamental.

---

<sup>110</sup> *Ibidem*, p.54.

<sup>111</sup> *Ibidem*, p.55-56.

<sup>112</sup> *Ibidem*, p.66 y ss.

En oposición a las conceptualizaciones arriba citadas, por Constitución en su acepción sociológica es primordialmente una forma de ser, y no de deber ser, éste documento fundamental es resultado de las situaciones y estructuras sociales del presente social, -esto es- sin sustentarse en una norma trascendente, sino que la sociedad tiene su propia legalidad. Bajo esta tipología Constitución es la expresión de una infraestructura social, y no creación de una normatividad, y su vigencia dependerá de que sea efectivamente expresión y sistematización de la realidad social subyacente<sup>113</sup>. Se trata también, de una reformulación del concepto de Lasalle de la Constitución como resultado de los factores reales de poder. Para este autor *“Los factores reales del poder que rigen en el seno de cada sociedad son esa fuerza activa y eficaz que informa todas las leyes e instituciones jurídicas de las sociedad en cuestión, haciendo que no puedas ser, en sustancia, más que tal y como son”*<sup>114</sup>.

Así estimamos que para el derecho constitucional es indispensable el estudio del órgano jurisdiccional, no sólo como institución jurídica sino también política, por formar parte del Estado y de mayor importancia lo es por cuanto éste debe configurarse dentro de los parámetros de un estado constitucional de derecho. Por este motivo, este análisis no podría realizarse desvinculado de su evolución, pues como quedo anotado en líneas anteriores el objetivo fundamental es conocer los momentos que han supuesto transformaciones importantes en las instituciones jurisdiccionales mexicanas las cuales serán estudiadas en capítulos posteriores. Al tenor de lo anterior, en el presente epígrafe nos enfocaremos ha referenciar los documentos jurídico-constitucionales que registran la creación y desarrollo de los órganos jurisdiccionales dentro de la vida jurídica mexicana. En concreto haremos referencia a las cartas fundamentales que dieron estructura al régimen y a la composición jurisdiccional, que fijan las bases del régimen federal tales el caso de la Constitución de Cádiz, 1824, las leyes reformistas de 1847, la Constitución liberal de 1857 y la revolucionaria de 1917.

a) Constitución de Cádiz.

---

<sup>113</sup> Ibídem, p.74 y ss.

<sup>114</sup> Lasalle, Fernand, *¿Qué es una Constitución?*, Buenos Aires: Ediciones Siglo Veinte, 1975, p. 41.

La Constitución de Cádiz tuvo una presencia doble en América Latina cuyo texto sirvió de modelo para las repúblicas emergentes, sin dejar de soslayar la influencia que tuvieron en dichas cartas fundamentales otros modelos constitucionales como el americano y el francés. Sin embargo hay que destacar la importante influencia de la Constitución gaditana en el Decreto constitucional de Apatzingán, que fue la primera Constitución independiente mexicana<sup>115</sup>. Los esfuerzos de independencia de la nueva nación, aprovecharon los elementos jurídicos de diferente origen, sin importar que provinieran del enemigo con quien mantenían su lucha<sup>116</sup>.

La Constitución de Cádiz instaló los principios básicos marcando el rumbo de la época liberal-democrática, fue un documento jurídico-político que sentó las bases de un nuevo tipo de organización social, inspirada en nuevos valores, derechos y principios de justicia, rompiendo con la con aquellos que inspiraron el Antiguo Régimen monárquico Español. Se da inició así en el contexto Latinoamericano a la era del Estado liberal de derecho<sup>117</sup>. Las ideas que inspiran a los constituyentes gaditanos fueron las del iusnaturalismo racionalista o moderno, filosofía que predominaba entre los pensadores ilustrados y liberales, rasgos básicos fueron el individualismo y el racionalismo basados en la observación de la naturaleza y especialmente la naturaleza humana. Se abren paso conceptos como el de la dignidad humana, y que la sociedad por muy importante que sea, no lo es más que el individuo, de ahí que fin de la sociedad y el poder político sea el promover el bienestar y la felicidad de los individuos a través del disfrute y protección de sus derechos naturales<sup>118</sup>.

Otra proclama importante en el documento gaditano, aunque no establecido expresamente fue el derecho de igualdad ante la ley, por ejemplo el artículo 248 sólo habla de la igualdad de fueros para todos los ciudadanos en los negocios comunes, civiles y criminales excluyendo

---

<sup>115</sup> Este Decreto puede consultarse en: [www.juridicas.com](http://www.juridicas.com), consultado 12 de Mayo de 2015.

<sup>116</sup> Cfr. Peset Reig, Mariano, *“La Constitución de Cádiz en América: Apatzingán 1814”*, Corts: *Anuario de Derecho Parlamentario*, No.26, Revista Anual, Editada por las Cortes Valencianas, Valencia, España, 2012, p. 113.

<sup>117</sup> Cfr. Ramos Pascua, José Antonio, *“Principios Jurídico-Políticos de la Constitución de Cádiz”*, Bajo palabra, *Revista de Filosofía*, Época 2, No.8, Revista Anual, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, España 2013, p.142., Véase, Cruz Barney, Oscar, *“Impacto del Movimiento Liberal Gaditano en el Mundo Jurídico Mexicano”*, Cuando las Cortes de Cádiz. Panorama Jurídico de 1812. Jornada de Conmemoración del Bicentenario, VV.AA., Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Primera Edición, México, D.F., 2012.

<sup>118</sup> *Ibidem*, p. 145.

cualquier estatuto que otorgara privilegios<sup>119</sup>. Dentro de los derechos civiles la Constitución gaditana encuadró y reconoció las garantías penales y procesales, que forman parte del derecho a la seguridad personal, así como la figura del *habeas corpus* que consiste en una serie de garantías enfocadas a la protección de la detención arbitraria, la inviolabilidad del domicilio y al prohibición de malos tratos a los presos<sup>120</sup>.

Sin embargo, también se han alzado ciertas voces críticas en la doctrina, respecto a la valoración que debe darse a la Constitución doceañista, que albergaba muchas luces pero también sombras. *“Por ello tiempo es todavía de exponer algunas dudas y recordar viejas controversias que nos den idea de lo que en verdad fue y representó aquella Constitución. No podemos seguir desfigurando el pasado como hicieron los mismos liberales próximos al Martínez Marina de la Teoría de las Cortes (1813), obsesionados con demostrar que la Constitución originaria de la Monarquía se fundaba en el principio de la libertad y los derechos de los pueblos que disponían de instituciones para el poder real, la «ansiosa limitación del poder real» que fue considerada por Marx como «el rasgo más llamativo de la Constitución de 1812». El mito de las Cortes medievales trasladado ahora a las del Cádiz vendría a ser como una vuelta al de la Edad de Oro, que inspiró a Don Quijote su discurso a los cabreros, aquella época en la que no existían las palabras tuyo y mío. De donde la necesidad de analizar a la luz de las nuevas investigaciones la naturaleza del liberalismo doceañista, sus fuentes doctrinales y sus limitaciones y errores, con su exagerado contenido católico e intolerancia religiosa, que terminó siendo el pecado capital de la Constitución. Esto es una realidad indiscutible por más que se haya intentado explicar aportando sus causas atenuantes. Aun cuando las explicaciones dadas por los propios liberales no parecieron suficientes. Pues a estos nunca se les ocurrió buscar la posterior aprobación de la sus Constitución por parte de la nación: «actuaron de forma tan absolutista como el monarca absoluto». Una realidad mal conocida que cuando la historia-memoria unifica los pasados y los presentes puede llevar a falsear lo que ocurrió verdaderamente. Necesario es evitar a*

---

<sup>119</sup> “Artículo 248. En los negocios comunes, civiles y criminales no habrá más que un solo fuero para toda clase de personas”.

<sup>120</sup> Estos derechos pueden encontrarse en el Capítulo 1, “De los tribunales y de la administración de justicia civil y criminal”, a partir de los artículos 242 y siguientes.

*toda costa la sacralización de la Constitución de 1812, sin por ello dejar de reconocer que el código gaditano dio forma jurídica al nacimiento de una nación*”<sup>121</sup>.

Así, dentro de la misma tradición jurídica y de lengua común la naciente república mexicana utilizó en su Constitución preceptos de la Constitución de Cádiz, para convertirse junto con Apatzingán en el primer documento constitucional de la recién creada nación, con la pretensión de sostener a México jurídica y políticamente a la consumada la independencia<sup>122</sup>.

La Constitución de Cádiz unificó al órgano jurisdiccional en un ente superior al que se le atribuyeron competencias de apelación en recursos de nulidad que se interpongan contra las sentencias dictadas en última instancia para el efecto de reponer el proceso, creando un Tribunal Supremo como cabeza imparcial e independiente del Poder Judicial<sup>123</sup>.

Además en este documento constitucional se recogieron y asignaron las competencias territoriales dentro cada provincia a las correspondientes audiencias, las cuales se encontraban subordinadas judicialmente a un Tribunal Supremo que en aquel momento se ubicaba en Madrid, capital española. En el título V se reguló la facultad exclusiva de los tribunales de aplicar la ley en las causas civiles y criminales, ordenando que hubiera un órgano jurisdiccional denominado Supremo Tribunal, que conocería de los conflictos de competencia

---

<sup>121</sup> Cfr. M. MORENO ALONSO, *La Constitución de Cádiz. Una mirada crítica*; Primera Edición, Editorial Alfar, 2011, Sevilla, España, p. 18 y ss.

<sup>122</sup> “El hilo conductor del mecanismo constitucional ideado no es otro que la defensa de las libertades así como de los demás de derechos y la limitación del poder, configurando un corpus doctrinario, que resurge, en cierto modo renovado, tras el desmoronamiento de las concepciones absolutistas. La Constitución de Cádiz representó la culminación de esas ideas en España. Mediante una amalgama de principios e instituciones afines se pretendió llevar a cabo una profunda transformación de las estructuras imperantes que se reflejó en sus concepciones centrales, a saber: a) el principio de la soberanía nacional complementado con la adopción del sistema representativo para la elección de los diputados de las Cortes; b) la doctrina de la separación de poderes, que acota las respectivas competencias de cada uno y consagra la independencia del Poder Judicial; c) el principio de legalidad y el deber que asumió la Nación española de proteger la libertad, propiedad y demás derechos individuales (...) A la vista del nuevo escenario, resulta trascendente que la tesitura del sistema constitucional gaditano haya configurado el establecimiento de un Poder Judicial, independiente, inamovible, con la finalidad de realizar la tutela judicial efectiva de los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos...”, Véase, Cassagne, Juan Carlos, *“El Bicentenario de la Constitución Cádiz y su proyección en Iberoamérica”*, Serna de la Garza, José Ma. *“Influencia de la Constitución de Cádiz en México”*, y Fix-Zamudio Héctor *“Influencia del Constitucionalismo Gaditano en la Nueva España”*, op.cit., p. 163.

de las audiencias, entre otros asuntos<sup>124</sup>; mandando que los tribunales quedarían sujetos a actuar en orden y con las formalidades determinadas por ley. A las audiencias también correspondió resolver en segunda y tercera instancia las causas civiles y criminales de los juzgados inferiores de su demarcación; se buscó que la justicia criminal se impartiera de forma breve, disponiendo una serie de garantías para los gobernados sujetos a procesos criminales, tales como que la administración de justicia se impartiría de manera que el proceso fuera formado con brevedad y sin vicios; que ningún español podría ser apresado sin que preceda información sumaria del hecho, por el que mereciera según la ley ser castigado con pena corporal<sup>125</sup>, ordenado por un juez por escrito; la obligación para la autoridad de presentar al “arrestado” ante el juez a efecto de rendir su declaración, informándole la causa de su prisión y el nombre de su acusador; el proceso del orden criminal será público, prohibiéndose el tormento y los apremios, la confiscación de bienes; de igual forma se eliminan las penas transcendentales<sup>126</sup>, estas son aquellas que afectan de modo legal y directo a terceros extraños no inculcados, lo cual no significa que las penas causen un mal más o

---

<sup>124</sup> Estos asuntos eran tribunales especiales, la separación o suspensión de consejeros de estado y magistrados de las audiencias. Artículos 254,259, 260, 261, 268 y 269 de la Constitución de Cádiz, Disponible en [www.congreso.es](http://www.congreso.es) consultado el 12 de Mayo de 2015.

<sup>125</sup> “...la Constitución de Cádiz estableció el principio de publicidad y brevedad en los procesos, para que los delitos fueran prontamente castigados artículo 286 (...) Los principios de estricta legalidad y seguridad jurídica en materia penal, para que ningún español fuera preso sin la existencia de información sumaria respecto de un hecho que, mereciera pena corporal, previo mandamiento por escrito de un juez, el cual debía ser notificado en el acto mismo de prisión (art.287), y debía también ser entregada una copia al alcalde de la cárcel como condición para retener al preso (art.293); esto es, el principio garantista *nullum crimen nulla poena sine lege* y la condición de un auto formal prisión, de los artículos 14, párrafo tercero, y 19, primer párrafo, constitucionales (...) dispuso...la intermediación judicial, para que el sujeto arrestado, antes de ser puesto en prisión, fuera presentado ante el juez, a fin de que éste recibiera su declaración; para el caso de que no fuera posible hacerlo inmediato, tal declaración debiera ocurrir en las siguientes 24 horas (art.290); en ese momento debía ser informado de la causa de su prisión y del nombre de su acusador (art.300)...En cuanto al principio de no autoincriminación la Constitución de 1812 decía: la declaración del arrestado será sin juramento, que a nadie habrá de tomarse en materias criminales sobre hechos propios (art.291)...Esbozo el derecho de defensa, para que al tomarse la confesión al reo, le fueran previamente leídos los documentos y declaraciones de testigos; y si de esas constancias no pudiera conocerse el nombre de sus acusadores, se le darían cuantas noticias pida para venir en conocimiento de quienes son (art.301)”. Cfr. Cruz Parceró, Taissia, “*El Poder Judicial en la Constitución de Cádiz. Garantías Procesales en Materia Criminal*”. *Memoria del Seminario Internacional: Conmemoración del Bicentenario de la Constitución de Cádiz. Las ideas constitucionales de América Latina*, VV.AA., Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Senado de la República, México, D.F., 2013, p. 199 y ss.

<sup>126</sup> Cfr. Márquez Rábago Sergio R., “*Evolución...*”, op.cit., p. 75-76; Véase, Tena Ramírez, Felipe, *Leyes Fundamentales de México 1808-1994*, Decimoctava Edición, Editorial Porrúa, 1994, 89-95; Carranco, Zúñiga Joel, *Poder Judicial*, Editorial Porrúa, Primera Edición, México, D.F., 2000, p. 64-65.



menos grave en la persona del delincuente, sino que los efectos de la misma afecten a los parientes del condenado en el proceso<sup>127</sup>.

b) Constitución de Apatzingán de 1824.

La principal cualidad del documento constitucional de 1824, fue el de construir el andamiaje político para México una vez obtenida su independencia, esta carta fundamental también tomo como referencia la Constitución de los Estados Unidos de América de 1787. Sin embargo, la carta fundamental 1824 se destacó por desarrollar ideas constitucionales liberales sirviéndose no solamente de la Constitución norteamericana, sino también considerando las bases proporcionadas por la Constitución de Cádiz<sup>128</sup>. Hay que decir que ante la expedición de la carta fundamental de referencia comenzó la construcción del modelo de justicia para México, el cual –según Tena Ramírez- supuso un ejemplo de equilibrio, al establecer que tanto la Suprema Corte de Justicia como los Tribunales de primera instancia federales que se establecieran en cada estado, tendrían que coincidir con la extensión territorial de los mismos<sup>129</sup>.

De entre las disposiciones fundamentales de esta Acta Constitutiva de la Federación Mexicana se creó el Supremo Poder de la Federación que se divide en, Legislativo, Ejecutivo y Judicial<sup>130</sup>, quedando depositado este último, en una Corte Suprema de Justicia y en los tribunales que se establecerían en cada estado, quedando así integrado el Poder Judicial de la Federación, con competencias eminentemente de tribunal de casación y de nulidad de las resoluciones<sup>131</sup>. Por otra parte quedó contemplada la garantía de ser juzgado por leyes expedidas con anterioridad al hecho; del mismo modo, los tribunales debían constituirse

---

<sup>127</sup> Tesis: 1ª./J.29/2002, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, disponible en: [www.scjn.com.mx](http://www.scjn.com.mx). Consultado el 5 de junio de 2014.

<sup>128</sup> Cfr. López Monroy, José de Jesús, *“Aplicación de los preceptos de la Constitución de la 1824”*, *Anuario Mexicano de Historia del Derecho*, Volumen VIII, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 1996, p.251.

<sup>129</sup> *Ibíd*em, p. 252.

<sup>130</sup> “El supremo poder de la federación se divide, para su ejercicio, en legislativo, ejecutivo y judicial; y jamás podrán reunirse dos o más de éstos en una corporación o persona, ni depositarse el legislativo en un individuo”. Artículo 9 del Acta Constitutiva de la Nación Mexicana, disponible en [www.juridicas.unam.mx](http://www.juridicas.unam.mx)., consultado el 6 de junio de 2014.

<sup>131</sup> “Artículo 18: Todo hombre que habite en territorio de la federación, tiene derecho a que se le administre pronta, completa e imparcialmente justicia; y con este objeto la federación deposita el ejercicio del Poder Judicial en una Corte Suprema de Justicia, y en los tribunales que se establecerán en cada Estado; reservándose demarcar en la Constitución las facultades de esta Suprema Corte”. *Ibíd*em.

previamente, quedando prohibidos los tribunales especiales, y la retroactividad de la ley<sup>132</sup>, todos estos conceptos referían derechos del individuo frente al estado, específicamente en materia penal<sup>133</sup>. A pesar de estas disposiciones, tanto la estructura como las funciones de los tribunales mexicanos continuaron operando bajo la influencia de los órganos judiciales coloniales, además los jueces siguieron aplicando la legislación española, relegando a los tribunales federales con funciones de órganos auxiliares del Tribunal Supremo<sup>134</sup>.

c) Constitución reformista de 1847.

De igual manera, debe destacarse el valor que tuvo la carta constitucional de 1847, cuya principal aportación fue el reimplantar la Constitución federal de 1824, en este documento fundamental por primera vez en la historia jurídica mexicana, se consagró de manera constitucional la institución del Juicio de Amparo, instrumento jurídico pensado para combatir los actos de autoridad arbitrarios, éste instrumento fue perfeccionado en las constituciones siguientes de 1857 y 1917.

Durante este periodo comprendido de 1836- 1840 el país estaba azotado, entre otras cosas, por las corrientes conservadores que apoyaban el régimen centralista, con la entrada en vigor de las Leyes Constitucionales de 1836, el Estado de Yucatán se convirtió en uno más de los departamentos que en ese momento transformaron al contexto federal de los Estados, cuyas

---

<sup>132</sup> “Artículo 21: Sólo las leyes pueden determinar los casos en que debe ser acusado, preso o detenido algún ciudadano; Artículo 22: Debe reprimir la ley todo rigor que no se contraiga precisamente a asegurar las personas de los acusados; Artículo 23: La ley sólo debe decretar penas muy necesarias, proporcionadas a los delitos y útiles a la sociedad”.

<sup>133</sup> Tena Ramírez, Felipe, “*Leyes Fundamentales...*”, op.cit., p. 190, Véase Rabasa, Emilio O., *Historia de las Constituciones Mexicanas*, Segunda Reimpresión, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México D.F., 2000.

<sup>134</sup> “El derecho que aplicó en México los primeros años de vida independiente (...) el artículo 12 del “Tratado de Córdoba”, (...) mandaba que, independizado el país, se gobernase interinamente conforme a las leyes nacionales. Así, pues, consumada la Independencia, (...) asumió el poder una Junta Provisional de Gobierno (...) y dispuso un decreto del 5 de octubre de 1821 que se habilitaba y confirmaba interinamente a todas las autoridades coloniales. Independientemente de éste decreto fue la doctrina la que estableció el orden de prelación de los ordenamientos coloniales para la recién creada nación en el siguiente orden: Decretos dados por los Congresos Mexicanos; Decretos dados por las Cortes de España publicados antes de declararse la Independencia; Reales disposiciones novísimas aún no inscritas en la Recopilación; Leyes de la Recopilación; Leyes de la Nueva Recopilación; Leyes del Fuero Real y Juzgo; Estatutos y fueros municipales de cada ciudad en lo que no se oponían a Dios, a la razón y a las leyes escritas, Las Partidas en lo que no estuvieran derogadas (...) durante ese primer medio siglo continuo la misma situación legal en México.”. Cfr. Soberanes, José Luis, *Historia del Sistema Jurídico Mexicano*. Segunda Parte, El Derecho en México. Una visión conjunta, T.1, Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 1991, p. 51-52.

autoridades eran nombradas por el Presidente de la República. Debido al descontento ante la imposición del régimen centralista, se apoya un levantamiento por el coronel Anastasio Torres, en la ciudad de Mérida, capital del Estado. Así el Estado de Yucatán se disocia del resto del país regido por el sistema centralista, promulgando para sí una Constitución y restableciendo así el sistema federal<sup>135</sup>.

Fue este movimiento que propicio la instalación de un Congreso Constituyente en agosto de 1840. Don Manuel Crescencio Rejón, electo diputado a dicho Congreso, propuso una nueva carta fundamental en el Estado entre cuyas novedades incluyó la figura del amparo como medio de tutela de la Constitución y de las leyes.<sup>136</sup> Además de otras novedades como la división de poderes, la elección popular directa de diputados y senadores, la libertad de culto, libertad de prensa, la supresión de fueros civiles y militares<sup>137</sup>.

d) Constitución liberal de 1857.

Dentro de este periodo conocido en la historia política mexicana como reformista tuvieron como corolario, la Constitución de 1857 se vio marcada por las ideas liberales de la época con un pronunciado apego al principio de la legalidad<sup>138</sup>. Si bien es cierto que la legislación de

---

<sup>135</sup> Cfr. Arellano, García, Carlos, *El Juicio de Amparo*, Editorial Porrúa, Primera Edición, México 1984, p.70, 110.

<sup>136</sup> "...el proyecto que hemos reseñado muy brevemente hace un boceto claro de los conceptos fundamentales del amparo que se acuñarían con el desarrollo del tiempo y de su puesta en práctica. La protección de los derechos fundamentales o libertades individuales, al depositar en un órgano judicial la potestad de impedir las manifestaciones arbitrarias de poder por parte de los otros dos poderes; el establecimiento del sistema de precedentes, como descrédito a la vigencia de una ley contraria a la Constitución. También es de importancia destacar que la Constitución de Yucatán de 1840 fue el primer documento que enumeró los Derechos del Hombre, quedando plasmados por primera vez en una carta fundamental en México. Sin embargo, el aporte histórico, ideológico, jurídico y quizás político también, de la carta fundamental yucateca es sin duda la creación del amparo, que por cierto en su artículo 53, en su promulgación y vigencia se redactó con el vocablo de "amparar". Ibídem, p.108.

<sup>137</sup> Artículos 1, 2, 4, 8 y 11 del Acta de Reformas de 1847. Disponible en [www.ordenjuridico.gob.mx](http://www.ordenjuridico.gob.mx), consultado 12 de Mayo de 2015.

<sup>138</sup> Los hombres más importantes de la época por sus ideas liberales fueron el propio Benito Juárez, Melchor Ocampo, Ponciano Arriaga, José María Mata, cuyo propósito fue pelear por la instauración de las instituciones liberales. Así las ideas de los derechos del hombre y la división de poderes que se plasman en la Constitución de 1857, surgen de las doctrinas del derecho natural que evoluciona en los siglos XVI y XVII, cuando se configura un amplia teoría sobre los derechos del hombre a través de pensadores como Francisco de Vitoria, Juan Ginés de Sepúlveda, Alfonso de Castro, Luis de Molina entre otros, sin dejar de señalar que éstos a su vez influyen en el pensamiento racional humanista destacando personajes como John Locke, Jean Jacques Rousseau, Immanuel Kant, y de igual forma los derechos establecidos en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 que en su artículo 16 estableció que en aquellos Estados que no establecieran la garantía de los derechos y la separación de poderes no tendrían constitución. De este universo se advierte la influencia de las doctrinas de los derechos naturales con fuerte impacto por

este período seguía estando organizado conforme al periodo colonial, con la restauración de la republica finalmente quedó reemplazado el viejo derecho colonial. En consecuencia, fue sustituido el método tradicional de fijación del Derecho, que se había caracterizado por multitud de ordenamientos para la solución de un caso concreto, régimen que fue sustituido por el cambio en el sistema jurídico debido al principio de supremacía constitucional que se situaba a “norma de normas” en la cúspide del orden jurídico, el cual sería expedido conforme a los parámetros de ésta, así en su redacción el Artículo 126 de la Constitución de 1857 decía: *“Esta Constitución, las leyes del congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados hechos o que se hicieren por el Presidente de la República, con aprobación del congreso; serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los Estados.”*

De igual forma fueron establecidos en el Artículo 14 “la no expedición de leyes retroactivas”, el derecho a que “Nadie podrá ser juzgado ni sentenciado, sino por leyes expedidas con anterioridad al hecho”, así como “la exacta aplicación de la norma en materia de procesamiento penal, por el tribunal previamente constituido por la ley”. El reto de este periodo significó el cambio de paradigma que hasta entonces se había establecido en el país, obligando a transformar el sistema de aplicación de normas, no sólo desde la perspectiva institucional de los órganos jurisdiccionales, sino también la mentalidad de aplicación de las normas por los jueces<sup>139</sup>.

Esto fue el claro legado de la Constitución Política de 1857, dentro de la vida constitucional y jurídica mexicana con clara referencias a las ideas surgidas en Revolución francesa, a la

---

considerarlos la base de la legitimidad política y el límite a la coacción del Estado. En este tenor la legitimidad del poder se delimita en la medida en que respeta los derechos naturales de los integrantes de la sociedad, porque los derechos naturales son inherentes al hombre y superiores a cualquier obligación política. Pero además se sientan las bases del principio de legalidad al sostener que, la coacción sólo puede ejercerse por parte del Estado, en la medida en que es autorizado por la ley. Todos estos ideales fueron de fuerte impacto para los liberales mexicanos y fueron la base de creación de la Constitución de 1857. Cfr. Márquez, Daniel, *“La Constitución de 1857, Libertad e Institucionalidad”, El Proceso Constituyente Mexicano. A 150 años de la Constitución de 1857 y 90 de la Constitución de 1917*, VV.AA., Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 2007, p. 631,632 y ss., Véase también en la misma obra Zertuche Muñoz, Fernando, *“El Congreso Constituyente de 1856-1857: el decenio de su entorno”*, así como a Fernández Ruiz, Jorge, *Juárez y sus contemporáneos 2ª*. Editorial, Segunda Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 2006; VV.AA., Juárez Jurista, Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, D.F., 2007.

<sup>139</sup> Cfr. Caballero Juárez, José, *“La codificación y el federalismo judicial”*, *Anuario Mexicano de Historia del Derecho*, Volumen XIV, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 2002, p.12-13.

práctica de los principios liberales tanto de los Estados Unidos y de Inglaterra. No hay que olvidar que el objetivo primordial de la Constitución de 1857, fue facilitar las condiciones necesarias de organización del Derecho. Ósea, mantener intactas las manifestaciones de libertades individuales para la prosecución del fin común, valores contenidos en la Declaración de Independencia Norteamericana<sup>140</sup>. En este mismo sentido, es el valor jurídico-político que desvela la promulgación de la Constitución de 1857 por ser el Estado el directamente obligado a hacer efectivas las libertades individuales de toda persona. Esta plataforma, se materializa al hablar de garantías individuales, como, por ejemplo, el “principio de legalidad”.

Así en el Artículo 14 la Constitución Mexicana de 1857 establece que: *“A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta, se fundará en los principios generales del derecho”*, de suerte que todas las leyes y actos de autoridad deben de reunir todas las condiciones señaladas en dicho precepto. En sus inicios esto se circunscribió únicamente a los juicios de orden penal, para posteriormente ampliarse a todos los juicios, convirtiéndose así al órgano jurisdiccional federal en revisor de los actos de autoridad de los jueces estatales, y después también de las autoridades administrativas<sup>141</sup>.

De igual forma otra de las garantías establecidas por la Constitución de 1857 fue el cambio de fórmula en cuanto a que todo proceso judicial debía seguirse ante los tribunales previamente establecidos, y que en ellos debían cumplirse las formalidades esenciales del procedimiento. En los juicios del orden criminal se intentaron desterrar las prácticas inquisitoriales

---

<sup>140</sup> Cfr. Rabasa, Emilio O., *“El Pensamiento Constitucional de Venustiano Carranza (Análisis de su mensaje del 1º de Diciembre de 1916 al presentar el Proyecto de Constitución)”*, *Anuario de Mexicano de Historia del Derecho*, Volumen VII, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 1995, p.153-154; Véase *“La evolución constitucional de México”*, Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 2004.

<sup>141</sup> *Ibíd*em, p. 155.

establecidas en el régimen de Porfirio Díaz<sup>142</sup>, materializando el límite en el tiempo de los juicios penales, así como la fijación de fianza. Se incluyó el artículo 21 Constitucional que ponía fin al abuso del arresto administrativo, delimitando las funciones del ministerio público, en beneficio del acusado<sup>143</sup>.

Nuevamente nos es útil la opinión de Juventino V. Castro acerca de la problemática que supone el estudio de un sistema judicial, o impartidor de justicia. Dice este autor que dicho análisis forzosamente deberá referirse a un sistema de impartición de justicia con bases constitucionales, esto es ubicado dentro de un orden jurídico normado bajo las disposiciones en que se marquen sus procedimientos, y que tenga en cuenta las calidades y atribuciones deseables para sus jueces, investidas de fuerza coactiva en la resolución de controversias que se les planteen, por supuesto siempre ubicado dentro de un sistema constitucional<sup>144</sup>. En suma podemos concluir que el valor político-jurídico de la Constitución Mexicana de 1857 no fue determinante sólo respecto de la ingeniería jurisdiccional mexicana, en cuanto a la composición y estructura de los órganos jurisdiccionales, sino también contribuyó a definir el sistema judicial en materia de derechos y garantías fundamentales. De esta manera la norma constitucional sentó las bases del Estado mexicano conforme a los principios del Estado constitucional moderno cimentándolo en el respeto a los derechos fundamentales de los justiciables, estableciendo como obligación para el estado su exacta observancia como condición de validez para todos sus actos, y que de igual forma las disposiciones que regulan el desempeño del órgano jurisdiccional, y la manera de administrar justicia de los jueces.

---

<sup>142</sup> Durante el periodo porfirista predominaron tanto en los códigos penales como de procedimientos penales la Escuela Clásica del derecho penal, que concebía al crimen como un atentado a la sociedad y al delincuente un inadaptado social, justificando la defensa social de tal amenaza, de suerte que la responsabilidad penal respondía en castigo ante tal agresión y la sanción basada en el delito sin ninguna consideración en cuanto a la personalidad del imputado, siguiendo prácticas de investigación sin ningún tipo de derecho o garantía en favor de los inculpadados, y mucho menos de carácter procesal o mecanismo que protegiera su integridad física y su libertad o cualquier tipo de derecho en su favor. A partir del movimiento reformista del siglo XVII y XVIII se pretendía transitar de una justicia de jueces a una justicia de leyes buscando la igualdad jurídica contemplando la fundamentación de las sentencias y exigiendo la exacta aplicación de la ley. Cfr. Speckman Guerra, Elisa, *“El Derecho Penal en el Porfiriato: un acercamiento a la legislación, los discursos y las prácticas”*, Proyectos Legislativos y otros temas penales, Segundas Jornadas Sobre Justicia Penal, VV.AA., Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 2003, p. 205, Véase a la misma autora en *“La Justicia Penal en el Siglo XIX y las primeras décadas del XX (los legisladores y su propuesta)”*, Los Abogados y la Formación del Estado Mexicano, Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 2013, 424 y ss.

<sup>143</sup> *Ibidem*, p. 156, “Artículo 21 Constitucional: La aplicación de las penas propiamente tales, es exclusiva de la autoridad judicial. La política o administrativa solo podrá poner como corrección, hasta quinientos pesos de multa o hasta un mes de reclusión, en los casos y modo que expresamente determine la ley”.

<sup>144</sup> Cfr. Castro, Juventino V., *“Hacia el Sistema...”*, op.cit., p.2.

e) Constitución Revolucionaria de 1917.

Durante esta etapa se buscaba fundamental restablecer el orden jurídico suspendido por junta revolucionaria, el objetivo del constituyente de Querétaro fue normalizar y reorganizar el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia así como de los tribunales federales, que habían sido disueltos, también había sido restringido el Juicio de Amparo por encontrarse el orden constitucional suspendido, debido al movimiento revolucionario que estallo en 1910 que posteriormente derivó en la conformación del Congreso Constituyente y en la firma en Querétaro de la Constitución de 1917.

Fue la norma fundamental que le sucedió al movimiento revolucionario de 1910, con una ideología de protección a los derechos sociales, los decretos de modificación promovidos por Carranza y sus colaboradores sabían que algunas de estas nuevas disposiciones entrarían en contradicción con la Constitución 1857 y no podrían ser promulgados por congreso ordinario pues tendían a trastocar la organización política de la nación en su conjunto, es por eso que se decidió convocar un congreso que tuviera el carácter de constituyente para que el país contara con una nueva Constitución<sup>145</sup>.

Durante el debate constitucional sobre el Juicio de Amparo se formuló una severa crítica ante la centralización por la interposición del Juicio de Amparo contra resoluciones judiciales, pues se consideró que restringía la autonomía de los Estados, sin embargo no fue corregido por considerarse como un remedio ante la falta de independencia de los tribunales locales<sup>146</sup>.

Con la entrada en vigor de la Constitución de 1917, su valor esencial fue haber restablecido el régimen constitucional junto al mecanismo de protección contra actos de autoridad es decir el Juicio de Amparo. Sin embargo, no existían leyes orgánicas, ni reglamentarias de ambas instituciones, ni de órganos jurisdiccionales ni del Juicio de Amparo, únicamente los preceptos constitucionales que los instauraban. Uno de los anhelos que fueron recogidos en este documento fundamental, fue el de crear tribunales independientes que hicieran efectivas las garantías individuales contra los atentados y excesos de los agentes públicos y que

---

<sup>145</sup> Cfr. Cabrera Acevedo, Lucio, *"El Poder Judicial durante la Revolución. Cuando cesa de laborar: La Suprema Corte (1914-1917). Un Homenaje a Don Cesar Sepúlveda"*, Escritos Jurídicos, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Primera Edición, México, D.F., 1995, p. 20.

<sup>146</sup> Cfr. Fix-Zamudio Héctor, *"La Suprema Corte de Justicia y el Juicio de Amparo"*, Ensayos sobre el Derecho de Amparo, Tercera Edición, Editorial, Porrúa, UNAM, México, D.F., 2003, p.533.

protegieran el goce quieto y pacífico de los derechos civiles y sociales de los que se habían faltado hasta ese momento<sup>147</sup>.

## 5. Poder Judicial de la Federación en la actualidad.

Una vez establecido que el modelo constitucional de referencia para México fue la Constitución de los Estados Unidos de América del Norte en la implantación del modelo de doble jurisdicción por lo que respecta al modelo de organización judicial, vinculado al sistema de estado federal y que funda la estructura jurisdiccional del mismo. De igual forma hemos establecido que las constituciones de 1824, 1857 y 1917 conformaron las cartas fundamentales más importantes de la historia jurídico-política mexicana, por contribuir a la instauración definitiva del modelo federal en el país. Paralelamente, se crearon los tribunales federales, así como los respectivos tribunales judiciales de las entidades federativas, con un ámbito de competencia muy definido, y que en casos excepcionales, trascendería la competencia de los órganos jurisdiccionales federales. En este sentido hay que apuntar que esta doble jurisdicción mexicana ha adquirido sus propias características debido a elementos que se relacionan directamente con el devenir político del país.

Así, la complejidad que revisten las particularidades de la organización judicial mexicana, se deben a la interpretación que en 1857 se hizo del artículo 14 de la Constitución<sup>148</sup> a través de la cual la corte mexicana se convierte en órgano de revisión judicial el cual que tendría la última palabra en cuanto al control de legalidad, convirtiéndola así en la institución de

---

<sup>147</sup> “Los debates del Constituyente de Querétaro fueron intensos en cuanto a la organización y funcionamiento del Poder Judicial Federal, encabezado por la Suprema Corte de Justicia, y en particular, en cuanto a su competencia para conocer del Juicio de Amparo...se advierte la preocupación por recuperar la independencia de los tribunales tanto federales como locales que según la Constitución de 1857 eran electos en segundo grado los ponía completamente a disposición del jefe del Poder Ejecutivo, y por la otra, que los jueces y tribunales locales se habían convertido en instrumentos ciegos de los gobernadores...”, Cfr. Tena Ramírez, Felipe, *Derecho Constitucional Mexicano*, 19ª. Edición, Editorial Porrúa, México, D.F., 1983, p. 746-747; Cfr. *Derechos del Pueblo Mexicano, México a través de sus constituciones*, Tomo IX, Artículos 82-94, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Cuarta Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Miguel Ángel Porrúa, México, D.F., 1994, p. 814.

<sup>148</sup> Artículo 14 de la Constitución de la República Mexicana de 1857: “No se podrá espedir (sic) ninguna ley retroactiva. Nadie puede ser juzgado ni sentenciado; sino leyes dadas con anterioridad al hecho y esactamente (sic) aplicadas á (sic) él, por el tribunal que previamente haya establecido la ley”, Cfr. Tena Ramírez, Felipe, *“Leyes Fundamentales...”*, op.cit., p. 608.



revisión de todo el ordenamiento jurídico mexicano<sup>149</sup>. Estos cambios produjeron la revisión de las resoluciones pronunciadas por tribunales judiciales locales por la indebida aplicación de leyes ordinarias<sup>150</sup>. En estos casos la competencia era unitaria por encontrarse los jueces comunes<sup>151</sup>, subordinados a los tribunales federales. En cuanto a las sentencias pronunciadas por los jueces ordinarios, éstas serían impugnables ante el juez federal, por violaciones a los artículos 14 y 16 de la Constitución Mexicana, de tal suerte que el amparo contra resoluciones judiciales, tuvo como finalidad el examen de la legalidad de las resoluciones de última instancia dictadas por todos los tribunales del país<sup>152</sup>. Las razones detrás de la procedencia del

---

<sup>149</sup> "...a través de un instrumento jurídico denominado Juicio de Amparo, el Juicio de Amparo se configuró como un instrumento procesal sometido al conocimiento de los tribunales federales y, en última instancia, de la Suprema Corte de Justicia, contra leyes o actos de cualquier autoridad que violasen los derechos individuales de carácter fundamental, o bien contra leyes o actos de autoridad federal que invadiesen la autonomía de los Estados y viceversa, pero siempre que hubiese la afectación a un derecho individual (...) y amplió de manera notable su campo de acción, como se consagró expresamente en los artículos 14, 16 y 107 del texto fundamental de 1917, de manera que ahora se emplea no sólo contra violaciones directas de la Constitución por afectación de los derechos fundamentales...también por infracciones a leyes ordinarias por parte de las autoridades públicas, especialmente las judiciales". Véase Fix Zamudio, Héctor, *"Derecho Constitucional..."*, op.cit, p. 833 y ss., también del mismo autor Véase, *"Ensayos sobre el Derecho de Amparo"*, op.cit., p. 11 y ss., Burgoa Orihuela, Ignacio, *Juicio de Amparo*, Edición, Editorial Porrúa, México, D.F., 1997; Noriega Cantú, Alfonso, *Lecciones de Amparo*, Segunda Edición, Editorial Porrúa, México, D.F., 1980; Arellano García, Carlos, *El Juicio de Amparo*, Primera edición, Editorial Porrúa, México, D.F., 1982.

<sup>150</sup> "En el año de 1869 en Culiacán, Sinaloa un Juez local de nombre Miguel Vega, tras a ver dictado una sentencia penal fue sancionado por el Tribunal Superior de Justicia de dicho estado (superior jerárquico dentro de la jurisdicción local). La sanción consistió en la privación de la función jurisdiccional y del ejercicio de la función jurídica durante un año. El juez Vega solicitó ante el Juez de Distrito del Estado de Sinaloa, no obstante que la Ley de Amparo señalaba su improcedencia en negocios judiciales. Al percatarse de que el asunto de Vega era de índole judicial por haber emitido la resolución impugnada un juez y que además no era de naturaleza penal tal como habían sido otros asuntos en los que se había otorgado la protección constitucional, el juez federal decidió negarle el amparo. El Juez Vega impugnó la resolución ante la Suprema Corte de Justicia, el ministro encargado de la ponencia fue Miguel Auza quien argumentó que la Corte en su función de órgano de control de constitucionalidad, no podía fundar su fallo en el artículo 8º de la Ley de Amparo de 1869, debido que era contrario a la Constitución. Tampoco considero necesario revisar la legalidad del fallo que emitió el juez local a pesar de que dicha resolución se fundó en la inexacta aplicación de la ley penal y prefirió a la naturaleza constitucional de la pena impuesta. El ministro Auza se pronunció por sustentar el fallo en el artículo 101 de la Constitución Federal y otorgó al quejoso la protección de la justicia federal...(sobre esta base) de los artículos 101 y 102 constitucionales y en virtud de que el amparo se había establecido para proteger a los ciudadanos contra las violaciones a sus garantías constitucionales, que incluía la garantía de legalidad consagrada en el artículo 14 constitucional, (así) los órganos jurisdiccionales federales competentes empezaron a aplicar éste criterio interpretativo, al considerar que el amparo también era procedente contra las violaciones a la garantía de legalidad, en los supuestos en los que los jueces locales de primera instancia aplicaran en sus resoluciones la ley de manera inexacta...". Cfr. Bustillos, Julio, *"El amparo judicial: A 140 años de la primera sentencia (1869-2009)"*, *El Juicio de Amparo. A 160 Años de la Primera Sentencia*, Tomo I, Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México D.F. 2010, p.111-112.

<sup>151</sup> En nuestro régimen constitucional el juez común, es el órgano juzgador ordinario que resuelve los asuntos en primera instancia y que pertenece a la jurisdicción local de cada estado del país.

<sup>152</sup> *Ibíd.*, p.846 y ss., "Las razones políticas de su consagración fueron el proceso de creación de la Constitución de 1917, debido también a la ley, la jurisprudencia y las doctrinas (que prevalecieron) de la época...", Véase Gudiño Pelayo José de Jesús, *Ingeniería Judicial y Reforma del Estado*, Segunda Edición, Editorial Porrúa, México, D.F., 2003, p.27 y ss.; Cfr. Fix Zamudio, Héctor, *"Derecho..."*, op.cit, p.27.

Juicio de Amparo contra resoluciones judiciales principalmente fueron el limitar los abusos de autoridad y en defensa de los derechos fundamentales. Es importante tener presente que el Juicio de Amparo surge con el propósito esencial de proteger los derechos de la persona humana establecido en la norma fundamental, contra violaciones de parte de los órganos del Estado.

Así la Constitución Mexicana, en su Artículo 94, utiliza el término Poder Judicial de la Federación para referirse al órgano que desempeña la función jurisdiccional<sup>153</sup>, organizado dentro de un Estado federal, con una esfera competencial determinada por la propia Constitución y sus leyes orgánicas respectivas, mediante las cuales se ajustan los parámetros de actuación y competencia. En términos generales el Poder Judicial de la Federación tiene la facultad de resolver las controversias planteadas ante él, en aplicación del régimen jurídico establecido constitucionalmente hablando sí, pero no para decir el derecho en sentido estricto, aplicando la norma general al caso concreto, sino para revisar que la aplicación e interpretación hecha por los jueces ordinarios respecto de la legislación secundaria sea conforme lo establecen los principios constitucionales previstas en la norma fundamental.

Ahora bien con respecto a la organización de los Tribunales que componen al Poder Judicial de la Federación, en la cúspide se coloca la Suprema Corte de Justicia, seguido por los Tribunales de Circuito Colegiados en materia de amparo y unitarios en materia de apelación, los Juzgados de Distrito, el Jurado Federal de Ciudadanos y por último el Consejo de la Judicatura Federal. Queda así diseñada la anatomía del Poder Judicial de la federación, colocando en la cúspide a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que conoce de las controversias ordinarias federales y las que se planteen a través del Juicio de Amparo, al mismo tiempo que las de control constitucional<sup>154</sup>.

---

<sup>153</sup> Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículo 94: “Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito...”.

<sup>154</sup> El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia conoce por medio del recurso de revisión, en segunda instancia de las sentencias dictadas por los jueces de distrito en los juicios de amparo en los cuales se impugna la inconstitucionalidad de una ley federal, local o tratado internacional. También conoce de las impugnaciones de las sentencias de los jueces de distrito pronunciadas en los juicios de amparo que se enderecen contra leyes o actos de autoridad que invadan la esfera federal o local, así como el segundo grado de los fallos dictados por los Tribunales Colegiados en una sola instancia, cuando estos se refieran a la inconstitucionalidad de una ley (Artículo 84 fracción I y II de la Ley de Amparo y 11 fracción V y VI de la ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación).

Por tanto, a la Suprema Corte corresponde la tarea de tribunal revisor conociendo de las sentencias expedidas por los órganos judiciales secundarios a través de las distintas causas que se pueden plantear a través del Juicio de Amparo<sup>155</sup>. Existe dentro de esta institución jurídica el llamado “amparo judicial”, en función de la cual se hace una división clásica entre las causas que motivan la casación: en primer lugar por errores *in procedendo*, que son las violaciones cometidas en el transcurso del procedimiento, y en segundo lugar por errores *in judicando* estas son por violaciones ya habiéndose pronunciado la sentencia correspondiente<sup>156</sup>.

En igual sentido el artículo 107 de la Constitución Mexicana establece dos procedimientos para que el Juicio de Amparo que conozca de sentencias judiciales: el primero de una sola instancia cuyo órgano competente sería la Suprema Corte de Justicia respecto de sentencias judiciales que pongan fin al procedimiento de que se trate; y un segundo que se le llamaría de doble grado, este ante los jueces de distrito en primera instancia, en segunda instancia ante la Suprema Corte y respecto resoluciones judiciales que no tienen el carácter de sentencias definitivas, lo mismo que de otro tipo de actos. Estos actos pueden ser administrativos o gubernativos emanados del ejecutivo en cualquiera de sus modalidades municipal o estatal o

---

<sup>155</sup> Véase, Burgoa Orihuela Ignacio, *El Juicio de Amparo*, Trigesimacuarta Edición, Editorial Porrúa, México, D.F., 1998; Noriega, Alfonso, *Lecciones de Amparo*, Segunda Edición, Editorial Porrúa, México, D.F., 1980; Arellano García, Carlos, *El Juicio de Amparo*, Primera Edición, Editorial Porrúa, México, D.F., 1982; Fix Zamudio, Héctor, Ferrer Mac-gregor, Eduardo (coordinadores), *El Derecho de Amparo en el Mundo*, Primera Edición, Editorial Porrúa, UNAM, Konrad-Adenauer-Stiftung, México, D.F., 2006; Ferrer Mac-gregor Eduardo, Sánchez Gil, Rubén, *El Nuevo Juicio de Amparo, Guía de la reforma constitucional y la nueva ley de amparo*, Tercera Edición, Editorial Porrúa, UNAM, Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, México, D.F., 2013.

<sup>156</sup> “...el juicio de amparo tiene como objetivo connatural a su esencia tutelar un ordenamiento de derecho superior, o sea, la Constitución, de las posibles violaciones que cometan las autoridades del Estado, en las diversas hipótesis de procedencia establecidas en el artículo 103. La esencia teleológica del amparo radica, pues en proteger o preservar el régimen constitucional, la cual deriva no solamente de su naturaleza misma, sino de sus antecedentes históricos (...) en nuestro régimen, dicha finalidad del juicio de amparo se ha ampliado palpablemente (...) operada por preceptos constitucionales expresos (...) el artículo 14, en su párrafo tercero y cuarto, indirectamente ha ensanchado la teleología del amparo al consagrar la garantía de legalidad en asuntos penales y civiles lato sensu, respecto de cuyas violaciones es procedente el ejercicio del medio de control, de conformidad con la fracción primera del artículo 103 de nuestra Ley Fundamental vigente (...) de esta manera el amparo no sólo tutela el régimen constitucional en los casos previstos por este último precepto, sino que si objeto preservador se extiende a los ordenamientos legales secundarios (...) los Jueces de Distrito, los Tribunales Colegiados de Circuito y la Suprema Corte de Justicia al conocer de los juicios respectivos, ensanchan su competencia hasta el grado de erigirse en revisores de los actos de todas las autoridades judiciales que no se hayan ajustado a las leyes aplicadas (...) que no se hayan apegado a la interpretación de la ley (...) También el artículo 16 a través de los conceptos causa legal del procedimiento y fundamentación y motivación de la misma, contiene una garantía de legalidad frente a las autoridades en general haciendo consistir los actos violatorios ya no en una privación sino en una molestia por lo que su alcance es mucho mayor... a todos el ordenamiento jurídico y sobre los actos de autoridad de todas las autoridades del Estado”. Cfr. Burgoa, Orihuela, Ignacio, “*Juicio de Amparo...*”, op.cit., p.145 y ss.

bien, leyes tildadas de inconstitucionales, son aquellas normas que emanan del poder legislativo federal o local. Estas facultades le dieron a la corte mexicana la condición de tribunal de casación<sup>157</sup> antes que de tribunal constitucional, resolviendo controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad<sup>158</sup>.

Con el nombre de amparo judicial o amparo-casación, el Juicio de Amparo fue establecido como instrumento dentro de la jurisdicción federal para impugnar las resoluciones expedidas por el órgano jurisdiccional y también administrativo, con el fin de que el Juez federal ejerciera la función de revisar, -es decir casar- las resoluciones dictadas por los tribunales comunes y modificarlas cuando sean valoradas erróneas.

Antes de proseguir con nuestro estudio debemos recordar que un órgano de control constitucional es aquel que tiene bajo su responsabilidad hacer efectiva la primacía constitucional, esto es la responsabilidad de revisar la adecuación de las leyes expedidas por el poder legislativo sean conformes a la Constitución, así como que su aplicación sea conforme ésta, a través de un examen de constitucionalidad en la emisión de tales actos o bien en la aplicación de normas<sup>159</sup>.

Durante décadas el modelo mexicano de control constitucional fue el modelo concentrado, pues centralizó éste proceso de revisión constitucional en un único órgano que forma parte del Poder Judicial federal, tal es el caso de la Suprema Corte de Justicia y después de los Tribunales Colegiados. Sin embargo, esta situación ya se encuentra superada, virtud a la sentencia del caso de Rosendo Radilla Cantú<sup>160</sup>, por medio de la cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos, condenó al Estado Mexicano por graves violaciones a los derechos humanos.

---

<sup>157</sup> “Para fines del siglo XIX, el amparo judicial que ya para entonces se le empezó a conocer como “amparo-casación”, debido a que realizaba funciones similares al recurso de casación de origen francés. Este recurso de casación fue utilizado como instrumento impugnativo contra los errores de aplicación de la ley que pudiera cometer el juzgador, tanto en el procedimiento como en fondo de la resolución definitiva”, Cfr. Calamandrei, Pietro, *la casación civil*, traducción Santiago Sentís Melendo, Editorial Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, 1961, volumen 1 y 2, Véase también Serna de la Garza, José María, *“El amparo casación en México: trayectoria de un debate”*, *“El Sistema Federal...”*, op.cit., p. 263 y ss., Véase, Fix Zamudio, Héctor, Ensayos *“Presente y Futuro de la Casación Civil a través del Juicio de Amparo Mexicano”*, *Ensayos sobre el Derecho de Amparo*, Tercera Edición, Editorial Porrúa, UNAM, México, D.F., 2003, p. 237 y ss.

<sup>158</sup> “Las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y el Juicio de Amparo...son vías jurisdiccionales de defensa de la constitución y como tales medios destinados a restaurar el orden constitucional...”, Quiroz Acosta, Enrique, *“Lecciones...”*, op.cit., p.454.

<sup>159</sup> Cfr. Highton, Elena I., *“Sistema concentrado...”*, op.cit., p. 108 y ss.

<sup>160</sup> Véase Cossío Díaz, José Ramón, Mejía Garza, Raúl M., Rojas Zamudio, Laura Patricia, *“El Caso Radilla”*, *Estudio y Documento*, Editorial Porrúa, Primera Edición, México, D.F., 2012.

Para efectos de nuestro análisis, de lo resuelto por la sentencia de la Corte Interamericana debe destacarse la condena a México en materia de derechos humanos, y entre otros aspectos ordeno el cambio de modelo de control constitucional obligándolo establecer un control difuso de la Constitución, apartándose del modelo concentrado, a fin de que todas las autoridades del país pudieran ejercer un control de convencionalidad *ex officio*<sup>161</sup>, para que inapliquen normas de derecho interno que resulten inconstitucionales o inconvencionales<sup>162</sup>. Por medio de esta resolución el tribunal internacional de San José de Costa Rica ordeno un control difuso de convencionalidad a fin de que autoridades distintas del Poder Judicial federal, llámese jueces o autoridades administrativas, inapliquen normas de su derecho interno que sean contrarias a la Constitución o a los tratados internacionales, sin facultarlas,

---

<sup>161</sup> “La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado que el control de convencionalidad tiene un carácter difuso, es decir, debe ser aplicado por todos los jueces nacionales y por tanto en el caso mexicano respecto de jueces locales y federales a manera de fuerza expansiva de su jurisprudencia hacia todos los jueces de los Estados que han reconocido su jurisdicción. Esta interpretación de la Corte Interamericana (...) amplió su sentido y alcance, al precisar que todos los órganos del Estado se encuentran obligados ante la Convención Americana de Derechos Humanos, desmontando un imaginario aún presente en muchos Estados, México incluido sobre una pretendida dificultad para determinar la competencia de los organismos internos y su alcance ante una sentencia de la Corte Interamericana, o la aplicación de criterios interpretativos. De igual manera, preciso que todos los órganos vinculados a la administración de justicia en todos sus niveles, es decir, todos los jueces que con independencia de su adscripción formal al Poder Judicial realicen funciones jurisdiccionales están obligados a ejercer *ex officio* el control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana...”, Cfr. Caballero Ochoa, José Luis, “La Cláusula de Interpretación Conforme el Principio pro persona (Artículo 1º)”, Segundo párrafo, de la Constitución”, *La Reforma Constitucional de Derechos Humanos. Nuevo Paradigma*, Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 2011, p. 119-120, también puede consultarse Ferrer Mac-gregor, Eduardo, “La Interpretación Conforme y Control Difuso de Convencionalidad. El Nuevo Paradigma para el Juez Mexicano. Estudios Constitucionales, Año 9, No. 2, Centro de Estudios Constitucionales de Chile Universidad de Talca, Santiago de Chile, 2011. Disponible en [www.cecococh.cl](http://www.cecococh.cl) consultada el 23 de junio 2014.

<sup>162</sup> La competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos reside básicamente en elaborar opiniones consultivas sobre las dudas que presenten los Estados parte de la Convención respecto al derecho internacional en la materia, así como de los casos contenciosos entre particulares en contra de los gobiernos signatarios del Pacto de San José por violaciones a las disposiciones de libertades, además de los litigios entre estos mismos. Los jueces internacionales de derechos humanos tienen competencia para revisar la compatibilidad de las leyes internas con la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, incluyendo los textos constitucionales. El artículo 2 de dicho instrumento es una especie de cláusula de supremacía de convencionalidad que dota de jerarquía a las declaraciones en la materia respecto a todo el derecho interno. Por ello es factible que la Corte determine la inconvencionalidad de artículos constitucionales. Es claro que se ha superado el principio que parecía de inamovible sobre el significado soberano de carta magna. Todas las instituciones liberales y necesarias para el andamiaje de las democracias deben evolucionar, permitiendo a las sociedades alcanzar respuestas a las exigencias de justicia, claro está por encima de cualquier estigma ideológico o conceptual. México reconoció la competencia contenciosa de la Convención Interamericana de Derechos Humanos el 16 de diciembre de 1998, decisión acertada que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en febrero de 1999.

desde luego a declarar la inconstitucionalidad porque esta facultad sigue conservándola el Poder Judicial federal<sup>163</sup>.

No obstante lo anterior, confirmamos que al estar el sistema judicial mexicano, inspirado en el modelo estadounidense, su diseño se pensó con una estructura que agrupa diversos niveles institucionales de gobierno. Comenzando por la organización federal, basada en la Constitución de 1824, que estableció la dualidad jurisdiccional: federal y local. Sin embargo, como ya habíamos advertido en líneas anteriores por razones históricas, esta instrumentación desembocó en un exceso de centralismo político-económico, a consecuencia de la concentración de funciones que el sistema de control constitucional federal mexicano ha ejercido a través del Juicio de Amparo, respecto de la justicia local transformándola en un ente subordinado y dependiente de la esfera federal.

Así, el control constitucional en México se manifestó principalmente a través de los medios procesales, -como el Juicio de Amparo- mediante el control que ejercido por los juzgadores federales sobre las resoluciones definitivas y no definitivas que emiten los juzgadores locales, pertenecientes a los órganos judiciales y administrativos materialmente jurisdiccionales establecidos en cada entidad federativa, los cuales tienen la encomienda de administrar justicia en sus respectivos Estados. Las resoluciones que éstos emiten se refieren, en el caso de las sentencias definitivas, a las que deciden la controversia en cuanto al fondo, pero que admiten medios de impugnación ante órganos judiciales de mayor jerarquía<sup>164</sup>, mientras que las resoluciones no definitivas aluden a las que no resuelven el conflicto en el fondo, pero que, al igual que las resoluciones de carácter definitivo, también pueden ser recurridas ante una instancia superior, a través de un medio procesal como es el Juicio de Amparo<sup>165</sup>.

---

<sup>163</sup> Sentencia: 912/2010 Expediente Varios, que da cumplimiento en sede jurisdiccional a la sentencia condenatoria pronunciada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado Mexicano caso Rosendo Radilla Pacheco, disponible en [www.scjn.com.mx](http://www.scjn.com.mx) y [www.corteidh.or.cr](http://www.corteidh.or.cr). consultada el 23 de junio 2014.

<sup>164</sup> Aquí nos referimos a la batería de recursos ordinarios, como puede ser de apelación, revisión, inconformidad, de queja según sea la materia de que se trate. Los cuales deben agotarse, para poder plantear el Juicio de Amparo, de hecho esta circunstancia se encuentra prevista dentro de uno de los principios fundamentales del Juicio de Amparo, llamado “principio de definitividad”. Que en cuanto a su procedencia respecto de sentencias definitivas, únicamente puede promoverse cuando todos los recursos procesales ordinarios hayan quedado agotados y no exista recurso alguno más que el amparo.

<sup>165</sup> Cfr. Bustillos Julio, *Federalismo Judicial A través del Amparo, Relaciones entre las jurisdicciones federal y locales a través del instrumento protector de los derechos fundamentales*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 2010, p. 1 y 2, Véase del mismo autor *El Amparo Judicial: A 140 años de la primera*

Dentro de la organización federalista y para dar continuidad a la misma se crearon los Tribunales Unitarios de Circuito, estos órganos tienen la facultad de conocer en segunda instancia los juicios que en primera instancia se hayan promovido ante el Juez de Distrito, por así organizarlo la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Es decir, los juicios iniciados ante los jueces de Distrito concluyen con sentencia pronunciada por los Tribunales Unitarios de Circuito, estos tribunales resuelven en apelación las sentencias pronunciadas por los Jueces de Distrito en primer grado, respecto de asuntos ordinarios federales en materia civil y penal.

En cuanto a los Jueces de Distrito, estos conocen de dos tipos de procesos con distinta naturaleza<sup>166</sup>. La primera, a la que ya nos hemos referido en líneas anteriores, son los asuntos que se pueden clasificar como de orden federal, es decir asuntos que se refieren a la aplicación del orden jurídico federal. Estos conflictos también pueden ser planteados ante la jurisdicción local, por así establecerlo la fracción I del Artículo 104 de la Constitución mexicana<sup>167</sup> en observancia de la jurisdicción concurrente. Y los segundos, la facultad que tienen los jueces de distrito de conocer en primera instancia de los juicios de amparo según lo establece el artículo 107 fracción VIII Constitucional<sup>168</sup>, así como el artículo 114 de la Ley de

---

*sentencia (1869-2009), VV.AA., "El Juicio de Amparo...", op.cit., p. 97 y ss., Véase también Fix-Zamudio, Héctor, Ensayos sobre el derecho de amparo, op.cit., p.237 y ss.*

<sup>166</sup> Artículo 33. Son competentes para conocer del juicio de amparo: I. La Suprema Corte de Justicia de la Nación; II. Los Tribunales Colegiados de circuito; III. Los tribunales unitarios de circuito; IV. Los juzgados de distrito; y V. Los órganos jurisdiccionales de los poderes judiciales de los Estados y del Distrito Federal, en los casos previstos por esta Ley. Artículo 35. Los juzgados de distrito y los tribunales unitarios de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo indirecto. También lo serán las autoridades del orden común cuando actúen en auxilio de los órganos jurisdiccionales de amparo. Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Artículo 39. Cuando se trate de amparos contra actos de autoridades que actúen en auxilio de la justicia federal, no podrá conocer el juez de distrito que deba avocarse al conocimiento del asunto en que se haya originado el acto reclamado. En este caso, conocerá otro del mismo distrito y especialización, en su caso, y si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito a que pertenezca. Ley de Amparo disponible en [www.scjn.mx](http://www.scjn.mx), consultada el 24 de junio 2014.

<sup>167</sup> "Artículo 104. Los Tribunales de la Federación conocerán: I. De los procedimientos relacionados con delitos del orden federal..."

<sup>168</sup> "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:... VIII. Contra las sentencias que pronuncien en amparo los Jueces de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito procede revisión. De ella conocerá la Suprema Corte de Justicia: a) Cuando habiéndose impugnado en la demanda de amparo normas generales por estimarlas directamente violatorias de esta Constitución, subsista en el recurso el problema de constitucionalidad. b) Cuando se trate de los casos comprendidos en las fracciones II y III del artículo 103 de esta Constitución. La Suprema Corte de Justicia, de

Amparo<sup>169</sup>, cuando a través de este se reclame la inconstitucionalidad de una norma. Sobre el particular, la corte mexicana ha explicado, que este proceso de control constitucional que ejercen los jueces de distrito a través del amparo ha sido ampliamente discutido por la doctrina mexicana, -sobre todo-, en el punto relativo a si el órgano judicial está obligado a abstenerse de aplicar una ley contraria a la Constitución, lo cierto es que en el derecho público mexicano se ha adoptado una solución positiva que puede calificarse de intermedia.

Es decir, conforme a la Constitución federal, no todo órgano judicial es competente para declarar la inconstitucionalidad de una ley, sino solamente el Poder Judicial federal, principalmente a través de un juicio de fisonomía singular como es el de amparo, donde la definición de inconstitucionalidad omitida por el juez federal se rodea de una serie de precauciones y de requisitos que tratan de impedir una desorbitada actividad del órgano judicial en relación con los demás poderes. Aun cuando en el caso del Artículo 133 constitucional, que impone a los jueces de los Estados la obligación de preferir a la Ley Suprema cuando la ley de su Estado sea contraria a la norma fundamental. Este precepto se ha

---

oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, del Fiscal General de la República, en los asuntos en que el Ministerio Público de la Federación sea parte, o del Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, podrá conocer de los amparos en revisión, que por su interés y trascendencia así lo ameriten. En los casos no previstos en los párrafos anteriores, conocerán de la revisión los Tribunales Colegiados de circuito y sus sentencias no admitirán recurso alguno...”

<sup>169</sup> “Artículo 114.- El amparo se pedirá ante el juez de Distrito: I.- Contra leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el Presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional, reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, u otros reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación, causen perjuicios al quejoso: II.- Contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. En estos casos, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda, a no ser que el amparo sea promovido por persona extraña a la controversia. III.- Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Lo anterior será aplicable en materia de extinción de dominio. Tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desapruében; IV.- Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; V.- Contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas a él, cuando la ley no establezca a favor del afectado algún recurso ordinario o medio de defensa que pueda tener por efecto modificarlos o revocarlos, siempre que no se trate del juicio de tercería; VI.- Contra leyes o actos de la autoridad federal o de los Estados, en los casos de las fracciones II y III del artículo 1o. de esta ley; VII.- Contra las resoluciones del Ministerio Público que confirmen el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal, en los términos de lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 21 Constitucional ”. La redacción de este artículo pertenece a la Ley de Amparo que fue expedida en el año de 1936. En la norma regulatoria del amparo actual, el artículo 114 corresponde al artículo 107 de dicha norma, expedida con fecha tres de abril de 2013, disponible en [www.cddhcu.gob.mx](http://www.cddhcu.gob.mx), consultado el 24 de junio 2014.



entendido en relación con el sistema instaurado por la Constitución mexicana según el cual es únicamente el Poder Judicial Federal el que puede hacer declaraciones generales de inconstitucionalidad<sup>170</sup>.

Hemos dejado establecido la enorme influencia que tuvo la organización y estructura de los tribunales de Estados Unidos de 1891, respecto de los tribunales federales mexicanos, de suerte que también se importó la creación de circuitos de apelación, que son los actuales tribunales unitarios de circuito<sup>171</sup>, -tribunales de apelación en materia de amparo. Continuando esta organización también se crearon los Tribunales Colegiados de Circuito en 1951 con la principal encomienda de desahogar la carga de trabajo que arrastraba la Suprema Corte de Justicia en la resolución de los juicios de amparo. Luego, la reforma de 1988<sup>172</sup> les otorgó facultades en el conocimiento de los juicios de amparo de una sola instancia o de doble instancia en los que se impugne la aplicación indebida de disposiciones legales, sean éstas de naturaleza reglamentaria u ordinarias<sup>173</sup>. Estos órganos judiciales ejercen sus funciones dentro de la justicia federal como órganos de segunda instancia ante los distintos procesos que puedan plantearse en vía del Juicio de Amparo que en primer grado conocen los jueces de distrito. De igual forma, los jueces de distrito conocerán de las controversias del orden civil o criminal que se enderecen contra el incumplimiento y aplicación de leyes de naturaleza federal o bien por inaplicación de tratados internacionales.

---

<sup>170</sup> Hasta este momento de evolución constitucional en México se había diseñado así para que en el caso de que un juez de una entidad federativa, frente a una ley local que se estimará inconstitucional, se abstuviera de aplicarla por no ajustar sus preceptos a la constitución federal, sin embargo esta abstención no tendría los alcances de una declaración sobre inconstitucionalidad de la ley, es decir dentro del derecho público mexicano admite implícitamente que conforme al principio de división de poderes, el órgano judicial está impedido de intervenir en la calificación de inconstitucionalidad de los actos de los otros poderes, a menos que a ese órgano se le otorgue una competencia expresa para ese efecto, como cuando la constitución federal cuando dota al Poder Judicial Federal de la facultad de examinar en determinadas condiciones la constitucionalidad de los actos de cualquier autoridad. Códigos Civiles de Coahuila, A quien compete declarar la Inconstitucionalidad de los. Amparo civil directo 6919/50. T.CXVII en Góngora Pimentel, Genaro, Saucedo Zavala, María Guadalupe, *Ley de Amparo, Doctrina Jurisprudencial Compilación de Tesis, Informes 1930 a 1989, Semanario Judicial de la Federación, quinta, sexta, séptima y octava época, Apéndice 1917-1988, Gaceta: febrero 1988 a diciembre 1994*, Tomo II, Editorial Porrúa, México, D.F., p. 2316-2317.

<sup>171</sup> “a partir de la carta federal de 1824 en México se adoptó la organización judicial federal de Estados Unidos, de conformidad con la Ley Orgánica Judicial Norteamericana de 1789 (Judiciary Act 1789) así como la organización americana se dividía en la Suprema Corte de Justicia, en tribunales de circuito y de distrito”. Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, “*Ensayos...*”, op.cit., p.472-473.

<sup>172</sup> Reformas y adiciones al Código Penal y de Procedimientos Penales de ambos fueros por decreto del 30 de diciembre de 1988, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 3 de enero de 1989, disponible para su consulta en [www.dof.gob.mx](http://www.dof.gob.mx).

<sup>173</sup> “Los Tribunales también pueden conocer de cuestiones de inconstitucionalidad, en los juicios de amparo planteados contra la aplicación de una ley por conducto de una sentencia judicial...”, *Ibíd.*, p.31.

En las reformas de 1988 y 1995 la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se distribuyeron competencias respecto de los asuntos que serían conocidos por la Corte<sup>174</sup>. Les quedó conferida la facultad de conocer en última instancia los juicios de amparo en los cuales estén planteadas cuestiones de constitucionalidad de manera directa, planteadas en primer grado ante el Juez de Distrito. Así, se podían plantear impugnaciones respecto de disposiciones legislativas por considerarlas inconstitucionales, en cuyas sentencias se interpretara directamente un precepto de la Constitución y la cuestión aun quedara planteada en el recurso de revisión (o de apelación)<sup>175</sup>. También quedarían bajo su potestad el recurso de revisión contra decisiones de los Tribunales Colegiados que hubiesen decidido sobre la constitucionalidad de una norma general o sobre la interpretación de un precepto constitucional<sup>176</sup>. Con esta reforma todos los demás asuntos en los que se plantearan violaciones a leyes secundarias, es decir por control de legalidad serían conocidos por los Tribunales Colegiados de Circuito.<sup>177</sup>

No podemos soslayar la importancia de la institución de amparo dentro de la justicia mexicana, sin embargo, no fue el objetivo del presente epígrafe examinar las cuestiones técnicas sobre el Juicio de Amparo pues la naturaleza de nuestro trabajo es únicamente resaltar la importancia de esta institución deteniéndonos a destacar de manera muy general las particularidades de su funcionamiento, por sus implicaciones debido a que como lo hemos estudiado está íntimamente ligado a la ingeniería jurisdiccional del Poder Judicial federal y de la jurisdicción ordinaria que estudiaremos más adelante.

En suma podemos concluir que en México puede ubicarse al Poder Judicial en dos coyunturas distintas según se desprende de las funciones que desempeña, por un lado, cuando ejerce facultades jurisdiccionales, convirtiéndose en un mero juez resolviendo un conflicto determinado planteado ante él; y, por otro, cuando ejerce sus facultades de órgano de control del orden constitucional. En este sentido al desarrollar sus funciones de control constitucional

---

<sup>174</sup> Estas reformas fueron publicadas en el Diario oficial de la federación del 26 de mayo de 1995, dadas a conocer en el propio Diario el 22 de noviembre de 1996; entre ellas la composición de los Tribunales Federales, así como al Código Federal de Procedimientos Penales, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, entre otras más, este decreto se puede consultar en: [www.dof.gob.mx](http://www.dof.gob.mx).

<sup>175</sup> Artículos 81, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo y Artículo 10, fracción II, inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

<sup>176</sup> Artículos 84, fracción II, de la Ley de Amparo, y 10 fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

<sup>177</sup> Estos Tribunales fueron creados por la reforma Constitucional de 1951, emulando a los tribunales de apelación de los Estados Unidos, esencialmente para liberar a la Corte Mexicana de la carga de trabajo.

se coloca en una jerarquía superior con respecto del resto de poderes del Estado, mientras que en la otra no se cumple esta condición, funcionando como un aparato institucional dentro del orden jurídico establecido por la propia Constitución, cumpliendo las atribuciones y facultades otorgadas por la misma, para el resto de los órganos estatales.

Por último, de conformidad con la Ley Orgánica, el Poder Judicial de la Federación tiene dentro de su estructura la figura del Jurado Federal de Ciudadanos, el cual está integrado por siete personas designadas por sorteo, procedentes de diversos sectores sociales y presididos por un Juez de Distrito<sup>178</sup>. Tiene una competencia restringida pues en 1982 se reformó la materia más importante sobre la responsabilidad de los servidores públicos, esto es el procesamiento de funcionarios y empleados federales a quienes se les impute delitos de carácter oficial. En la actualidad los únicos asuntos bajo la competencia del Jurado Popular son los delitos cometidos por la prensa contra el orden público o la seguridad exterior o interior del país, y las cuestiones de hecho que le sean planteadas por los jueces de distrito con arreglo a la ley. (Artículo 56 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación).

### **5.1. Orden y Funcionamiento.**

La tarea fundamental del Poder Judicial es el resolver las controversias que se le presente, aplicando el Derecho al caso concreto, esto es en aplicación de un régimen jurídico establecido de competencias institucionales, así como la observancia de determinados principios en la aplicación de normas. En subordinación a estas reglas es que el Poder Judicial, dice el Derecho, cabe recordar lo dicho por Luis de Secondant Barón de Montesquieu, en el “Espíritu de las leyes”: “...los jueces de la nación no son...más que la boca que pronuncia las palabras de la ley...”<sup>179</sup>.

En el mismo sentido Kelsen nos dice que es potestad del Poder Judicial al emitir una decisión judicial -esto es decir el Derecho- intervenir en función de una norma general de derecho adjetivo; al mismo tiempo que el órgano jurisdiccional, ósea el juez, deberá estar autorizado a

---

<sup>178</sup> Artículo 58 a 67 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

<sup>179</sup> Cfr. Montesquieu, “*Del Espíritu de las Leyes*”, estudio preliminar Daniel Moreno, Decimonovena Edición, Editorial Porrúa, México, D.F., 2013, p. 67 y ss.

intervenir en el caso concreto en aplicación de una norma de derecho sustantivo. En ausencia de este conjunto de normas que establezcan estas facultades específicas, sería imposible considerar que el juzgador pueda intervenir, pues solamente la decisión judicial podrá recaer si está autorizado para ello<sup>180</sup>.

Sin dejar de tener en cuenta que el Poder Judicial tiene un origen complejo. En las primeras formulaciones teóricas de la división de poderes, fue dependiente del poder ejecutivo. Además, hay que agregar que la tarea principal del Poder Judicial no es solamente el resolver casos, es también funcionar de contrapeso a los otros poderes existentes.

En el apartado que precede, hemos descrito el orden jerárquico del Poder Judicial mexicano en materia federal, estableciendo los asuntos y las materias que son de su competencia, así como las características que reviste la organización jurisdiccional en México. De manera sucinta abordamos las distintas facultades que le otorga el régimen constitucional, deteniéndonos a mencionar las diversas materias y los casos de los que pueden conocer. Sin embargo, por la complejidad que revisten en sí mismo algunos de sus mecanismos con respecto del funcionamiento orgánico, y sus funciones en materia procesal estimamos importante detenernos a examinar las normas orgánicas y algunas otras que se derivan de ellas, relativas a producir la solución de conflictos.

El Poder Judicial Federal atiende las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales y en aquellos casos en que la federación es parte. La estructura y ejercicio de los tribunales federales queda establecida en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como de la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Carta Fundamental mexicana al ser principalmente tribunales de amparo. Esta función jurisdiccional deriva esencialmente de la distribución que hace la Constitución Mexicana según lo dispone en su Artículo 104 de la propia Constitución.

En los siguientes apartados expondremos sobre las instituciones judiciales que conforman la base competencial y estructural del Poder Judicial Federal mexicano, este análisis lo elaboraremos siguiendo el orden marcado por el artículo 94 constitucional, el cual establece que el ejercicio del Poder Judicial Federal, es conferido en primer término en la Suprema

---

<sup>180</sup> Cfr. Kelsen, Hans, *"Teoría General del Derecho..."*, op.cit., p 171.

Corte de Justicia de la Nación, en el Tribunal Electoral Federal, en los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, y por último en los Juzgados de Distrito. Por otra parte, y con el objeto de completar el estudio sobre la estructura y organización de éstos órganos judiciales, expondremos sobre el Consejo de la Judicatura Federal, órgano que tiene bajo su responsabilidad la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial Federal con excepción de la Corte mexicana.

***a) Suprema Corte de Justicia de la Nación.***

Como hemos visto, la Corte mexicana se coloca en la cúspide del sistema jurisdiccional mexicano. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, primordialmente tiene funciones de órgano de control e interpretación constitucional. De conformidad con el artículo 133 de la Constitución Mexicana donde queda establecido el mecanismo de jerarquía de normas conforme al principio de supremacía constitucional, que define a aquella como la ley suprema de toda la Unión. Por ende, toda norma que sea expedida por el Congreso de la Unión deberá estarse a los preceptos que en ella se contienen, de igual forma que los tratados internacionales firmados y ratificados por el Senado mexicano. Bajo este principio, los jueces de los Estados quedan obligados a observar el ordenamiento constitucional, así como las leyes y tratados que sean expedidos conforme a ella. Desde esta óptica se hace efectiva la superioridad de la norma constitucional, respecto del orden normativo ordinario, teniendo una especial protección de su exacta observancia, como de la interpretación que se haga del mismo.

En este tenor la Suprema Corte de Justicia es la última instancia interpretativa de las normas constitucionales a través de las ejecutorias de amparo y la jurisprudencia, a esta institución se le atribuye, tener el carácter esencial del control de constitucionalidad de las leyes como competencia esencial de un tribunal constitucional<sup>181</sup>. El Título Cuarto de la Ley de Amparo

---

<sup>181</sup> “Según las tesis de Kelsen el objeto central en materia de la garantía jurisdiccional de la constitución, es precisamente la garantía de regularidad de la normas inmediatamente subordinadas a la Constitución. En este autor la problemática de la jurisdicción constitucional está comprendida por la problemática que plantea la contradicción normativa “leyes versus Constitución”, aclarando que otras normas de carácter general, dentro de las cuales la ley es una especie, -estas también- son susceptibles de control de regularidad constitucional, estos actos son inmediatamente subordinados a la Constitución, sobre su validez pesa la necesidad de controlar su regularidad constitucional”. Kelsen, Hans, traducción en español: “La garantía jurisdiccional de la Constitución (*La justicia constitucional*), trad. De R. Tamayo y Salmorán, México, Instituto de Investigaciones

reformada de los artículos 215 y siguientes dispone de la jurisprudencia así como de los procedimientos para la instauración de la misma, en lo correspondiente a la Suprema Corte de Justicia en Pleno, a las Salas y respecto del Poder Judicial Federal. A través de la ley queda asentado la naturaleza de la jurisprudencia, sus tipos, el procedimiento de integración y que el objeto es interpretar, explicar, y desarrollar el sentido o el espíritu de los preceptos constitucionales, plasmados en la Constitución Mexicana. Por último, debe añadirse que todas las reformas emprendidas con respecto al máximo tribunal mexicano acentúan las funciones de control de constitucionalidad, delegando los asuntos de legalidad a los Tribunales Colegiados de Circuito.

Integrada por once ministros que funcionan en pleno o en sala, según sea el caso. Se requiere la presencia de siete ministros para que el Pleno pueda ejercer sus funciones. La Corte tiene dos períodos anuales de sesiones: el primero comenzará el primer día del mes de enero y terminará el último día hábil de la primera quincena del mes de julio; el segundo comenzará el primer día hábil del mes de agosto y terminará el último día hábil de la primera quincena de diciembre<sup>182</sup>. Estas son públicas con excepción de aquellas que por determinarlo así, se decreta. Las decisiones pueden ser tomadas por mayoría de los ministros presentes, salvo en los casos previstos para las acciones de inconstitucionalidad y de control constitucional en cuyo caso se requiere la presencia de ocho ministros, es decir ocho votos, a efecto de que las decisiones que se tomen puedan tener efectos *erga omnes*. Exceptuando los casos previstos en artículo 105 constitucional, fracciones I y II, relativos a las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, para lo que se requieren ocho ministros. Artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

El artículo 96 Constitucional establece el procedimiento mediante el cual son nombrados los ministros de la Corte, es mediante una terna sometida al senado por el Presidente de la República, la elección se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del senado presentes dentro del término de 30 días, mismos que serán improrrogables. En el caso de que dentro de este término el Senado no elija al ministro, lo hará el Presidente de la República. Ahora bien, en el evento de que el Senado rechazará la totalidad de la terna

---

Jurídicas, UNAM, 2001, en Herrera García, Alfonso, "EL RECURSO DE AMPARO EN EL MODELO KELSENIANO DE JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL, ¿UN ELEMENTO ATÍPICO?", VV.AA., "El Juicio de Amparo a 160 Años de la Primera Sentencia", Tomo I, Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 2011 pp. 608-609.

<sup>182</sup> Artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, disponible en: [www.cddhcu.gob.mx](http://www.cddhcu.gob.mx)., consultado el 25 de agosto de 2015.

propuesta por el Ejecutivo, este deberá presentar una nueva, que seguirá el mismo procedimiento de designación por las dos terceras partes, que de ser nuevamente rechazada por la cámara alta, el ministro será nombrado por el Presidente.

Relativo al Pleno de la Corte<sup>183</sup>, éste tiene las siguientes competencias:

- a) Las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
- b) Los recursos de revisión contra sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los jueces de distrito o los tribunales unitarios de circuito, en los siguientes casos:
  - 1. Cuando subsista en el recurso el problema de constitucionalidad de normas generales, si en la demanda de amparo se hubiese impugnado una ley federal, local, del Distrito Federal, o un tratado internacional, por estimarlos directamente violatorios de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
  - 2. Cuando se ejercite la facultad de atracción contenida en el segundo párrafo del inciso b) de la fracción VIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para conocer de un amparo en revisión que por su interés y trascendencia así lo amerite, y
  - 3. Cuando se trate de los casos comprendidos en las fracciones II y III del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin que baste la afirmación del quejoso sobre la existencia de un problema de esa naturaleza, este artículo con sus respectivas fracciones se refieren a las competencias en materia de amparo;
- c) El recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de circuito, cuando habiéndose impugnado la inconstitucionalidad de una ley federal, local, del Distrito Federal o de un tratado

---

<sup>183</sup> "Artículo 10.", *Ibidem*.

internacional, o cuando en los conceptos de violación se haya planteado la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dichas sentencias decidan u omitan decidir sobre tales materias, debiendo limitarse en estos casos la materia del recurso a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales;

- d)** El recurso de queja en los casos y condiciones establecidas en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
- e)** El recurso de reclamación contra las providencias o acuerdos del presidente de la Suprema Corte de Justicia, dictados durante la tramitación de los asuntos jurisdiccionales de la competencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia;
- f)** De las excusas e impedimentos de los ministros, en asuntos de la competencia de la Suprema Corte de Justicia funcionando en Pleno;
- g)** De la aplicación de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
- h)** De las denuncias de contradicción entre tesis sustentadas por las Salas de la Suprema Corte de Justicia, por el Tribunal Electoral en los términos de los artículos 236 y 237 de esta ley, o por los Plenos de Circuito de distintos Circuitos, por los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo Circuito y por los Tribunales Colegiados de circuito con diferente especialización, cuando se trate de asuntos que por razón de la materia no sean de la competencia exclusiva de alguna de las Salas;
- i)** De los juicios de anulación de la declaratoria de exclusión de los Estados del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, y de los juicios sobre cumplimiento de los convenios de coordinación celebrados por el Gobierno Federal con los Gobiernos de los Estados o el Distrito Federal, de acuerdo con lo establecido por la Ley de Coordinación Fiscal, en términos de lo dispuesto por la Ley Reglamentaria del artículo



105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo que hace a las controversias constitucionales;

- j) De los procedimientos de declaratoria general de inconstitucionalidad, de conformidad con lo establecido en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

En el caso de las Salas de la Corte<sup>184</sup> sus competencias son las siguientes:

**I.** De los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias dictadas por los jueces de distrito en aquellas controversias ordinarias en que la Federación sea parte, de conformidad con lo dispuesto en la fracción III del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

**II.** Del recurso de revisión en amparo contra sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito, en los siguientes casos:

a) Cuando subsista en el recurso el problema de constitucionalidad, si en la demanda de amparo se hubiese impugnado un reglamento federal expedido por el Presidente de la República, o reglamentos expedidos por el gobernador de un Estado o por el Jefe del Distrito Federal, por estimarlos directamente violatorios de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o si en la sentencia se establece la interpretación directa de un precepto de la misma en estas materias, y

b) Cuando se ejercite la facultad de atracción contenida en el segundo párrafo del inciso b) de la fracción VIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para conocer de un amparo en revisión que por su interés y trascendencia así lo amerite;

---

<sup>184</sup> Artículo 21. Ibídem.

**III.** Del recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de circuito:

a) Cuando habiéndose impugnado la constitucionalidad de un reglamento federal expedido por el Presidente de la República, o de reglamentos expedidos por el gobernador de un Estado o por el Jefe del Distrito Federal, o en los conceptos de violación se haya planteado la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en estas materias, se haya decidido o se omita decidir sobre la misma inconstitucionalidad o interpretación constitucional; y

b) De los amparos directos que por su interés y trascendencia así lo ameriten en uso de la facultad de atracción prevista en el segundo párrafo del inciso d) de la fracción V del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

**IV.** Del recurso de queja en los casos y condiciones establecidas en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

**V.** Del recurso de reclamación contra los acuerdos de trámite dictados por su presidente;

**VI.** De las controversias que por razón de competencia se susciten entre los tribunales de la Federación, entre éstos y los de los Estados o del Distrito Federal, entre los de un Estado y los de otro, entre los de un Estado y los del Distrito Federal, entre cualquiera de éstos y los militares; aquellas que le correspondan a la Suprema Corte de Justicia de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, así como las que se susciten entre las juntas de conciliación y arbitraje, o las autoridades judiciales, y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje;

**VII.** De las controversias que por razón de competencia se susciten entre Tribunales Colegiados de circuito; entre un juez de distrito y el tribunal superior de un Estado o del Distrito Federal, entre tribunales superiores de distintos Estados, o entre el tribunal superior de un Estado y el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en los juicios de amparo a que se refieren los artículos 51, fracciones I y II, 52, fracción I, 53, fracciones I a VI, 54, fracción I y 55, de esta Ley;

**VIII.** De las denuncias de contradicción entre tesis que sustenten los Plenos de Circuito de distintos Circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo Circuito o los Tribunales Colegiados de circuito con diferente especialización, para los efectos a que se refiere la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

**IX.** De las controversias que se susciten con motivo de los convenios a los que se refiere el segundo párrafo del artículo 119 Constitucional;

Ahora bien, principalmente la Corte conoce:

**I.** De las controversias constitucionales<sup>185</sup> y acciones de inconstitucionalidad<sup>186</sup> a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

---

<sup>185</sup> Controversias Constitucionales. Cuando se aducen conceptos de invalidez por violaciones formales y de fondo respecto de normas generales de los Estados o de los Municipios impugnadas por la por la Federación, de Municipios reclamadas por los Estados o en los casos a que se refieren los incisos c), h) y k) de la fracción I del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe privilegiarse el Estudio de los primeros (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 47/2006). El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/2006, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, abril de 2006, página 817, sostuvo que si en la demanda de controversia constitucional se hacen valer tanto conceptos de invalidez por violaciones en el procedimiento legislativo como por violaciones de fondo, en los supuestos mencionados, debe privilegiarse el análisis de estos últimos, a fin de que la Suprema Corte realice un control y fije los criterios que deberán imperar sobre las normas respectivas, ya que de invalidarse éstas, una vez subsanados los vicios del procedimiento, las mismas podrían seguir subsistiendo con vicios de inconstitucionalidad. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a este Alto Tribunal a interrumpir tal criterio a fin de establecer que en los casos mencionados deberán analizarse en primer término las violaciones procedimentales, en virtud de que conforme al artículo 105 constitucional, de estimarse fundadas éstas, por una mayoría de por lo menos ocho votos, la declaratoria de invalidez tendrá efectos generales y, por tanto, la norma dejará de tener existencia jurídica, resultando indebido estudiar primero las violaciones de fondo, cuando podría acontecer que ese análisis se realizara sobre normas que de haberse emitido violando el procedimiento, carecerían de todo valor, con lo que implícitamente, con ese proceder se estarían subsanando las irregularidades del procedimiento. Tesis: P./J. 42/2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, disponible en [www.scjn.com.mx](http://www.scjn.com.mx)

<sup>186</sup> En razón de que con fecha cuatro marzo del año 2014 se promulgó el Código Único de Procedimientos Penales, publicado al día siguiente en el Diario Oficial de la Federación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con fecha 2 de abril del año 2014 presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación con fundamento en Artículo 105 fracción II Constitucional y su Ley Reglamentaria una acción de inconstitucionalidad contra 14 preceptos del Código Único de Procedimientos Penales, por considerarlos inconstitucionales e inconvenientes, esto es violatorios de derechos humanos de fuente constitucional y de las convenciones internacionales sobre derechos humanos. La citada demanda ya fue turnada al Ministro

**II.** Del recurso de revisión contra sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los jueces de distrito o los tribunales unitarios de circuito, en los siguientes casos:

a) Cuando subsista en el recurso el problema de constitucionalidad de normas generales, si en la demanda de amparo se hubiese impugnado una ley federal, local, del Distrito Federal, o un tratado internacional, por estimarlos directamente violatorios de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

b) Cuando se ejercite la facultad de atracción<sup>187</sup> contenida en el segundo párrafo del inciso b) de la fracción VIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para conocer de un amparo en revisión que por su interés y trascendencia así lo amerite, y

c) Cuando se trate de los casos comprendidos en las fracciones II y III del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin que baste la afirmación del quejoso sobre la existencia de un problema de esa naturaleza;

**III.** Del recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de circuito, cuando habiéndose impugnado la inconstitucionalidad de una ley federal, local, del Distrito Federal o de un tratado internacional, o cuando en los conceptos de violación se haya planteado la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dichas sentencias decidan u omitan

---

relator y puede ser consultada en forma electrónica aún está pendiente de resolverse [www.scjn.com.mx](http://www.scjn.com.mx), [www.cndh.com.mx](http://www.cndh.com.mx).

<sup>187</sup> Facultad de Atracción. La Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ejercerle a efecto de integrar Jurisprudencia sobre un problema que implica el análisis de diversos preceptos constitucionales y legales. Los requisitos de importancia y trascendencia para el ejercicio de la facultad de atracción se satisfacen cuando se solicita para integrar jurisprudencia por reiteración, y la problemática planteada implica el análisis e interpretación de diversos preceptos constitucionales y legales, ya que en tal supuesto, dicho ejercicio entrañaría la fijación de un criterio jurídico trascendente para casos futuros. Lo anterior es así, pues en atención al principio de legalidad, la jurisprudencia debe formularse con un grado suficiente de determinación que permita saber la conducta ordenada o prohibida, así como las consecuencias de su inobservancia, ya que de otro modo el objeto de vincular a las autoridades en el cumplimiento de la ley sería inalcanzable, pues la garantía de certeza se fundamenta en el principio de legitimación democrática. Tesis: 1a./J. 102/2011, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, disponible en [www.scjn.com.mx](http://www.scjn.com.mx)

decidir sobre tales materias, debiendo limitarse en estos casos la materia del recurso a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales<sup>188</sup>;

**IV.** del recurso de queja que se plantee en los casos y condicione establecidas en la Ley de Amparo;

**V.** de los recursos de reclamación que se enderecen en contra de los acuerdos tomados por el presidente de la Corte, en la tramitación asuntos de su competencia;

**VI.** de las excusas e impedimentos de los ministros, respecto de algún asunto;

**VII.** de la aplicación de la fracción XVI, del Artículo 107 constitucional;

**VIII.** de las denuncias de contradicción entre tesis sustentadas por las Salas de la Suprema Corte de Justicia, por el Tribunal Electoral en los términos de los artículos 236 y 237 de esta Ley, o por los Plenos de Circuito, en materia especializada de un mismo circuito y por los Tribunales Colegiados de circuito con diferente especialización, cuando se trate de asuntos que por razón de la materia no sean competencia exclusiva de alguna de las salas<sup>189</sup>;

---

<sup>188</sup> Amparo Directo en Revisión. Es procedente cuando en la demanda se alega la omisión de la responsable de realizar el control difuso de constitucionalidad de una norma general. De los artículos 10., 107, fracción IX, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos deriva que el ejercicio del control difuso de constitucionalidad a cargo de los órganos jurisdiccionales responsables, debe considerarse incluido en el supuesto de "constitucionalidad de normas generales", previsto para la procedencia del recurso de revisión en el citado artículo 107, fracción IX, siempre y cuando el quejoso se duela de la omisión de dicho control difuso en su demanda de amparo, vinculada con normas específicas de la ley secundaria; sea que ese planteamiento se analice u omita por el tribunal de amparo. Lo anterior es así, ya que dicho control consiste en preferir la aplicación de las normas fundamentales de derechos humanos sobre aquellas que los contravengan, para lo cual necesariamente debe hacerse un contraste entre las disposiciones legales y las fundamentales para determinar si las primeras se ajustan a las segundas, mediante el seguimiento de los pasos señalados por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. LXIX/2011 (9a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro III, Tomo 1, diciembre de 2011, página 552, de rubro: "PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.", es decir, primero hacer una interpretación conforme en sentido amplio por la cual se favorezca la protección más amplia de las personas; si esto no es posible, llevar a cabo una interpretación conforme en sentido estricto según la cual, ante varias interpretaciones jurídicamente válidas, preferir la que más favorezca los derechos fundamentales y, finalmente, cuando ninguna de las anteriores opciones es posible, atender directamente a la norma fundamental, en inaplicación de la norma secundaria incompatible. Tesis: 1a./J. 36/2015 (10a.), *Ibidem*.

<sup>189</sup> Jerarquía Constitucional de los Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos. La argumentación de esta contradicción de Tesis, versa sobre la prevalencia de los tratados internacionales forman parte de la Ley Suprema de la Unión en un plano jerárquico superior al de las leyes federales e inferior a la Constitución. Resolviendo que los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al primer párrafo del artículo 1º constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y

**IX.** De los procedimientos de declaratoria general de inconstitucionalidad<sup>190</sup>, de conformidad con lo establecido en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Con respecto al funcionamiento del Máximo Tribunal mexicano en salas, éstas se dividen en dos integradas por cinco ministros cada una, especializadas por materias<sup>191</sup>. Las materias civil y penal están delegadas a la Primera Sala, y las materias administrativa y laboral a la Segunda. Las sesiones gozan de la misma publicidad que las del pleno, con sus excepciones. En todos los casos, las resoluciones son tomadas por unanimidad o mayoría, de no obtenerse la votación necesaria el asunto será turnado a un nuevo ministro para la elaboración de un nuevo proyecto, si aun así no se obtuviere la mayoría, será el Presidente de la Corte quien designe a un nuevo ministro de la otra sala para que emita su voto. Si persiste la falta de acuerdo el Presidente de la Sala tiene voto de calidad<sup>192</sup>.

#### ***b) Tribunal Electoral.***

---

los Tratados Internacionales de los cuales el Estado mexicano sea parte. De la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que cuando la Constitución haya restricción expresa el ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional. En este sentido, los derechos humanos en su conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos de autoridad que forman parte del ordenamiento jurídico mexicano. Contradicción de Tesis 293/2011, entre las tesis sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y del Trabajo, del Décimo Primer Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Disponible y consultable en [www.scjn.com.mx](http://www.scjn.com.mx).

<sup>190</sup> Cesación de Efectos. El Artículo 109, fracción XI, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en dos mil tres, cuya invalidez se declaró en la acción de inconstitucionalidad 9/2003, debe reputarse vigente por el periodo transcurrido desde el inicio de su vigencia hasta la fecha en que surtió efectos la declaratoria de invalidez de carácter general, en relación con los actos, consecuencias y efectos ocurridos bajo su imperio; por tanto, para la procedencia del Amparo Indirecto no cesan sus efectos respecto de ese periodo, Tesis: IV.2o.A.74 A, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. Disponible y consultable en [www.scjn.com.mx](http://www.scjn.com.mx).

<sup>191</sup> "Artículo 15: La Suprema Corte de Justicia contará con dos Salas, las cuales se compondrán de cinco ministros, bastando la presencia de cuatro para funcionar." Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

<sup>192</sup> "Artículo 17: ...si al llevarse a cabo una votación de un asunto no se obtuviere mayoría, el presidente de la Sala lo turnará a un nuevo ministro para que formule un proyecto de resolución que tome en cuenta las exposiciones hechas durante las discusiones...sí a pesar de lo previsto en el párrafo anterior, no se obtuviere mayoría al votarse el asunto, el presidente de la Corte nombrará por turno a un integrante de otra Sala para que asista a la sesión correspondiente a emitir su voto. Cuando con la intervención de dicho ministro tampoco hubiere mayoría, el presidente de la Sala tendrá voto de calidad. El ministro que disienta de la mayoría podrá formular voto particular, el cual se insertará en la ejecutoria respectiva...", *Ibíd.*

Es el órgano jurisdiccional al que la Constitución Mexicana otorgo la facultad de resolver los conflictos surgidos en virtud de los procesos electorales, esto es que estos conflictos apuntan a ser más sobre los derechos políticos y el sistema electoral, para lo cual se prefirió crear un órgano jurisdiccional especializado que conociera sobre estos temas<sup>193</sup>. Estos asuntos tienen una dimensión eminentemente política es el caso de resolver controversias en materia electoral y proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos, es decir, de impartir justicia en esta materia electoral<sup>194</sup>.

Este órgano jurisdiccional está integrado al Poder Judicial de la Federación, así lo establece la Carta Fundamental Mexicana en su artículo 94, y las facultades y organización están establecidas por la Constitución en su artículo 99, así como en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en su Título Décimo. Estos jueces electorales funcionan en forma permanente con una Sala Superior ubicada en el Distrito Federal<sup>195</sup> y salas regionales<sup>196</sup> que están distribuidas por todo el país, actualmente son cinco ubicadas en Guadalajara, Monterrey, Xalapa, Toluca y Distrito Federal.

A la Sala Superior, le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, sobre:

---

<sup>194</sup> Con motivo de la reforma electoral de febrero de 2014, en marzo de este mismo año se creó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que estableció un nuevo esquema en la estructura, facultades y funcionamiento de los órganos electorales mexicanos que fueron depositados en el Instituto Nacional Electoral, anteriormente denominado IFE. Dentro de este nuevo orden el Instituto Nacional Electoral se arrogó, en los términos que establece esta Ley en comento, que contará con la responsabilidad de la elección y remoción del Consejero Presidente y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales, es decir de cada uno de los Estados del país, así lo prevé en el Artículo 32, fracción segunda, inciso b), de igual forma las facultades que ejercen estos consejos locales y sus consejeros se encuentran previstas en los Artículos 61 al 69 de Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

<sup>195</sup> La Sala Superior del Tribunal Electoral Federal, se integra de por siete magistrados, basta la presencia de cuatro para poder sesionar, las resoluciones se tomarán por unanimidad o mayoría calificada cuando así lo señale expresamente la ley electoral o por mayoría calificada. Los magistrados electorales duran nueve años en el cargo, los cuales son improrrogables, y su designación será escalonada. Artículo 187 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

<sup>196</sup> Los magistrados electorales regionales son nombrados a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sometida al Senado de la República. Artículo 33 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El Tribunal Electoral cuenta con siete salas regionales y una sala regional especializada que es integrada por tres magistrados electorales cada una; cinco de las Salas Regionales tienen su sede en la ciudad designada como cabecera de cada una de las circunscripciones plurinominales en que se divide el país, según lo establecido por el artículo 53 de la constitución y la ley en la materia. Las sedes regionales que restan serán designadas por la Comisión de Administración mediante acuerdo general. Las Salas Regionales sesionan con la presencia de los tres magistrados y las resoluciones se tomarán por unanimidad y mayoría de votos. Artículo 192 y 193, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

- a) Las impugnaciones en las elecciones federales de diputados y senadores<sup>197</sup>;
- b) Las impugnaciones que se presenten sobre la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos que serán resueltas en única instancia por la Sala Superior, así también tendrá autoridad la Sala Superior de realizar el cómputo final de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y en su caso, la declaración de validez de la elección y la de Presidente Electo respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos, así como la resolución de cualquier impugnación que se presente sobre dicha elección<sup>198</sup>;

---

<sup>197</sup> PROCESO ELECTORAL. CONCLUYE HASTA QUE EL ÚLTIMO ACTO O RESOLUCIÓN DE LA ETAPA DE RESULTADOS ADQUIERE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES).- El proceso electoral de una entidad federativa concluye hasta que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelve el último de los juicios de revisión constitucional electoral o para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovidos para impugnar los actos o resoluciones de las autoridades electorales, emitidos al final de la etapa de resultados, en virtud de que las ejecutorias que se dictan en los referidos juicios son las que proporcionan realmente la certeza de que dichos actos impugnados han adquirido definitividad. En efecto, según lo previsto en los artículos 140 y 143 del Código Electoral del Estado de México, el límite que se toma en cuenta para la conclusión de la etapa de resultados y declaración de validez de las elecciones de diputados y ayuntamientos, que es la última fase del proceso de tales elecciones, se encuentra constituido con los cómputos y declaraciones que realicen los consejos del instituto, o bien, con las resoluciones que, en su caso, pronuncie en última instancia el tribunal local. El hecho de que se tomen esos dos puntos de referencia para establecer la conclusión de la citada etapa final del proceso electoral radica en que, si con relación a un determinado cómputo o declaración se hace valer un medio de impugnación ordinario, no podría afirmarse que la etapa en comento haya concluido, porque las consecuencias jurídicas generadas por el acto recurrido podrían verse confirmadas, modificadas o revocadas, en virtud del medio de impugnación y, por tanto, es explicable que sea la resolución que pronuncie en última instancia el tribunal local, la que se tendría que reconocer como límite de la etapa del proceso electoral, porque, en principio, con la resolución dictada por el tribunal en el medio de impugnación se tendría la certeza de que en realidad habría concluido el proceso electoral, como consecuencia de la definitividad generada por la propia resolución, respecto a los cómputos o declaraciones realizados por los consejos del instituto. Estos actos y, en su caso, la resolución del tribunal estatal a que se refiere la última parte del artículo 143 del Código Electoral del Estado de México, serán aptos para generar esa certeza, si adquieren la calidad de definitivos. Pero si con relación a tales actos se promueve alguno de los juicios federales mencionados, es claro que la ejecutoria que se dicte en éstos será la que en realidad ponga fin al proceso electoral local, pues en atención a que esa ejecutoria tiene las características de definitiva e inatacable, en términos del artículo 99, cuarto párrafo, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, será la que en realidad proporcione la certeza de que la resolución dictada en la parte final de la etapa de resultados de la elección ha adquirido definitividad. *Convergencia por la Democracia, Partido Político Nacional vs. Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México*, Jurisprudencia 1/2002, Tercera Época: *Juicio de revisión constitucional electoral*. [SUP-JRC-341/2000](#). *Convergencia por la Democracia, Partido Político Nacional*. 1o. de septiembre de 2000. *Unanimidad de votos*. *Juicio de revisión constitucional electoral*. [SUP-JRC-342/2000](#). *Coalición Alianza por Morelos*. 9 de septiembre de 2000. *Unanimidad de votos*. *Juicio de revisión constitucional electoral*. [SUP-JRC-042/2002](#). *Partido del Trabajo*. 13 de febrero de 2002. *Unanimidad de votos*. Disponible en [www.trife.gob.mx](http://www.trife.gob.mx), consultado el 28 de agosto de 2015.

<sup>198</sup> Por nulidad de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos solicitando la Declaración de no validez de esta elección por violación a los principios constitucionales de elecciones auténticas y sufragio libre y por cancelación del registro por rebase de tope de campaña. SUP-JIN-359/2012, Véase López Noriega, Saúl, *Análisis de la impugnación elección presidencial de 2012*, Primera Edición, Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación, México, D.F., 2014. Disponible en [www.trife.gob.mx](http://www.trife.gob.mx), consultado en 28 de agosto de 2015.



- c) Las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal, distintas a las señaladas en las dos fracciones anteriores, que violen normas constitucionales o legales<sup>199</sup>;
- d) Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar

---

<sup>199</sup> Partido de la Democracia Social vs. Consejo Estatal Electoral de Aguascalientes. COMPETENCIA DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. LA TIENE PARA CONOCER DE POSIBLES VIOLACIONES A NORMAS CONSTITUCIONALES NO ELECTORALES.- En términos de los artículos 41, fracción IV y 99, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso b), y 189, fracción I, inciso e) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 3, párrafo 2, inciso d), y 86, párrafo 1, inciso b) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende la posibilidad de que la Sala Superior conozca de violaciones a preceptos constitucionales que no guarden relación con la materia electoral, es decir, cualquier acto de autoridad, positivo o que implique una abstención, podrá combatirse a través del medio de impugnación que corresponda, con independencia del precepto constitucional que se estime violado, siempre y cuando se cumpla con los requisitos genéricos de procedencia y especiales establecidos en el propio ordenamiento legal. Lo anterior en razón de que para proteger y mantener el orden constitucional, se dispone de un sistema de control que permite garantizar su observancia ante la posibilidad de ser infringida o vulnerada por las autoridades, es decir, mientras la supremacía constitucional consiste en que ninguna autoridad, ley federal o local pueden contravenir la Ley Fundamental, el control constitucional hace efectivo dicho principio al otorgar los mecanismos necesarios para garantizar que la Constitución sea respetada. En efecto, para el pleno ejercicio de ese control, se requiere que los medios de defensa y las autoridades competentes para conocerlos, estén expresamente regulados en la Ley Fundamental. Así pues, en la materia electoral, esta exigencia se satisface plenamente, toda vez que los artículos 41, fracción IV y 99, párrafo IV, de la Constitución federal, prevén que el establecimiento del sistema de medios de impugnación en la materia, garantizará los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, y que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene competencia para conocer y resolver, en forma definitiva e inatacable, entre otras, de las impugnaciones de actos y resoluciones de las autoridades electorales federales y de los Estados, que violen normas constitucionales o legales. Los preceptos constitucionales antes citados se reglamentan en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la que en su conjunto acota los mecanismos para garantizar que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales se sujeten, invariablemente, a los principios de constitucionalidad y de legalidad, y se establece que el juicio de revisión constitucional electoral se constituye como un medio de control constitucional en la materia, que procede contra los actos o resoluciones de las autoridades administrativas o jurisdiccionales electorales locales, que violen cualquier precepto de la Ley Suprema; que el sistema de medios de impugnación en materia electoral, tiene por objeto garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, mientras se sientan las bases para que el Tribunal Electoral desempeñe el carácter de órgano de control constitucional. Así las cosas, es incuestionable que, a través del juicio de revisión constitucional electoral se puedan conocer posibles violaciones al derecho de petición previsto en los artículos 8o. y 35, fracción V de la Constitución federal, siempre y cuando: a) quien alegue la violación constitucional lo sea un partido político, a través de su representante legítimo y b) que el acto de omisión provenga necesariamente de una autoridad local, administrativa o jurisdiccional, de carácter electoral. Tercera Época: *Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-026/2000. Partido Democracia Social. 5 de abril de 2000. Unanimidad de votos.* *Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-033/2000. Partido de Centro Democrático. 5 de abril de 2000. Unanimidad de votos.* *Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-034/2000. Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. 5 de abril de 2000. Unanimidad de votos.* Ibídem.

determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones<sup>200</sup>;

- e) Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país, en los términos que señalen esta Constitución y las leyes<sup>201</sup>.

---

<sup>200</sup> Partido de la Revolución Democrática vs. Congreso del Estado de Yucatán, Jurisprudencia 2/2001, ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS DE ORGANIZACIÓN O CALIFICACIÓN DE COMICIOS LOCALES. SON IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.- Atendiendo a lo dispuesto en los artículos 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso b), y 189, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 4 y 87 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la competencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para conocer y resolver cierto medio de impugnación en materia electoral, debe determinarse en función de la naturaleza del acto o resolución objeto del juicio de revisión constitucional electoral. Lo anterior es así, en virtud de que los órganos del poder público realizan actos que pueden ser considerados desde dos criterios distintos: Uno formal y otro material. El primero, el formal, atendiendo a la naturaleza propia del órgano que emite el acto, en tanto que el segundo, el material, observando la naturaleza intrínseca del propio acto, a efecto de considerarlo administrativo, legislativo o jurisdiccional. De acuerdo con lo anterior, por ejemplo, en ciertos casos, si bien el acto impugnado formalmente puede reputarse como legislativo, al haber sido emitido por determinado Congreso de un Estado, lo cierto es que al privilegiar la naturaleza intrínseca del acto, puede concluirse que se trata de un acto materialmente administrativo, particularmente en el supuesto en que no se esté en presencia de la emisión de una norma general, abstracta, impersonal y heterónoma, sino ante la designación de determinado funcionario, en el entendido de que si éste tiene carácter electoral, en tanto que participa en la organización de las elecciones, cabe calificar el correspondiente acto como materialmente administrativo electoral, toda vez que se trataría de una medida dirigida a la realización de la democracia representativa, a través de la celebración de elecciones periódicas, libres y auténticas, así como por el sufragio universal, libre, secreto y directo, a fin de integrar los órganos representativos del poder público del Estado; en efecto, se debe arribar a dicha conclusión, si se está en presencia de un asunto en el cual la autoridad responsable o legislatura del Estado ejerza una atribución prevista en una ley electoral, verbi gratia, la designación de los integrantes del órgano superior de dirección responsable de la organización de las elecciones, y si se tiene presente la naturaleza jurídica de dicho órgano electoral y las atribuciones que se prevean en su favor, tanto en la Constitución local como en las leyes electorales secundarias respectivas. Efectivamente, la determinación del Congreso local —a que se alude en este ejemplo— relativa a la integración del órgano responsable de la preparación de las elecciones en el Estado, a través de la designación de sus miembros, debe considerarse como un acto de carácter evidentemente electoral que se dicta en preparación al proceso electoral, entendido éste en un sentido amplio y no únicamente restringido a los actos que, ya iniciado el proceso electoral, se llevan a cabo previamente al día en que habrá de realizarse la jornada electoral correspondiente, razón por la cual debe considerarse como competencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral, en caso de que sea instada para ello, analizar si el acto referido se ajusta o no a los principios de constitucionalidad y legalidad electoral. Tercera Época: Juicio de revisión constitucional electoral. [SUP-JRC-391/2000](#). Partido de la Revolución Democrática. 12 de octubre de 2000. Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. [SUP-JRC-424/2000](#) y acumulado. Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática. 26 de octubre de 2000. Unanimidad de 6 votos. Juicio de revisión constitucional electoral. [SUP-JRC-004/2001](#). Partido Revolucionario Institucional. 30 de enero de 2001. Unanimidad de votos. *Ibidem*.

<sup>201</sup> María Isabel Angulo Arredondo vs. Consejo Electoral del Partido Acción Nacional en el estado de Sinaloa. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. SU PROMOCIÓN OPORTUNA ANTE LAS SALAS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN INTERRUMPE EL PLAZO.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, párrafo 1, 9, párrafos 1 y 3, 17 y 18 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia

En esencia se trata de un órgano especializado que forma parte del Poder Judicial en materia federal, como se ha visto es la máxima autoridad en materia electoral y sus resoluciones son definitivas e inatacables<sup>202</sup>. La ley de Amparo en su artículo 61 fracción IV expresamente dispone la improcedencia de dicho instrumento de protección constitucional contra las resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo queda a salvo el derecho del justiciable para promover una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos humanos, en vía contenciosa la que se refiere a que el Estado Mexicano reconoce a la Corte la facultad para conocer y resolver casos en los cuales las personas alegan que sus derechos humanos han sido violados por el Estado miembros de la Organización de Estados Americanos, y que ha suscrito la Convención Americana de Derechos Humanos, reconociendo la competencia del tribunal internacional.

La administración, vigilancia y disciplina en el Tribunal Electoral corresponderán, en los términos que señale la ley, a una Comisión del Consejo de la Judicatura Federal, que se

---

Electoral, se desprende que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la máxima autoridad en la materia y que, por regla general, los medios de impugnación deben presentarse por escrito ante la autoridad u órgano partidista señalado como responsable, en el plazo establecido por la ley. En ese tenor, a fin de maximizar el derecho de pleno acceso a la justicia, cuando por circunstancias particulares del caso concreto, algún medio de impugnación electoral no se presente ante la autoridad u órgano responsable de la emisión de la resolución o acto reclamado, sino directamente ante cualquiera de las Salas del Tribunal Electoral, debe estimarse que la demanda se promueve en forma, debido a que se recibe por el órgano jurisdiccional a quien compete conocer y resolver el medio de impugnación, porque constituye una unidad jurisdiccional. Quinta Época: *Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano*. [SUP-JDC-11/2012](#).—Actora: María Isabel Angulo Arredondo.—Responsable: Comisión Electoral Estatal del Partido Acción Nacional en Sinaloa.—25 de enero de 2012.—Unanimidad de cinco votos.—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—Secretario: Gustavo César Pale Beristain. *Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano*. [SUP-JDC-1800/2012](#).—Actor: Teodoro Ixtlapale Caporal.—Autoridad responsable: H. Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla.—12 de septiembre de 2012.—Unanimidad de votos.—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—Secretario: Gustavo César Pale Beristain. *Recurso de reconsideración*. [SUP-REC-19/2013](#).—Actores: Manuel Iván Verdugo Hernández y otro.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal, con sede en Guadalajara, Jalisco.—1 de mayo de 2013.—Mayoría de cinco votos.—Engrose: José Alejandro Luna Ramos.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretario: Fernando Ramírez Barrios.

<sup>202</sup> Véase, VV.AA., *Análisis del Sistema Electoral Mexicano*, Instituto Federal Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Primera Edición, México, D.F., 1996; Lara Leoncio, *El Nuevo Sistema Electoral Mexicano*, Universidad Nacional Autónoma de México, Corte de Constitucionalidad de Guatemala, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Primera Edición, México, D.F., 1992; González Oropeza, Manuel, Báez Silva, Carlos, *Derecho Electoral Mexicano*, una perspectiva judicial, Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz, Primera Edición, Xalapa, Veracruz, 2012; Cienfuegos Salgado, David, *Justiciabilidad Electoral en México, Reflexiones, retrospectivas y retos*, Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz, Primera Edición, Xalapa Veracruz, 2012; Cfr. Arteaga Nava, Elisur, *Derecho Constitucional*, Oxford University Press Harla, Colección Juristas Latinoamericanos, México, D.F. 2000, p. 450.

integrará por el Presidente del Tribunal Electoral, quien la presidirá; un Magistrado Electoral de la Sala Superior y por tres miembros del Consejo de la Judicatura Federal. El Tribunal somete su presupuesto a la consideración del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su inclusión en el proyecto de Presupuesto del Poder Judicial de la Federación.

### ***c) Tribunales Colegiados de Circuito.***

Además de las facultades que en materia de control constitucional y de creación de jurisprudencia también al Poder Judicial compete la solución de conflictos de juicios ordinarios federales; y de los recursos de naturaleza administrativa.

Lo que interesa a los efectos del presente ejercicio académico además de referenciar sus facultades judiciales propiamente dichas, también es destacar lo imprescindible de su función al revisar la actuación de los órganos de administración de justicia y administrativos, protegiendo derechos fundamentales a través del Juicio de Amparo, y más ahora ante la extensión de la tutela derechos establecidos en los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano establecido así por el artículo 1 de la Constitución Mexicana. En suma son encargados del resguardo de que todos los procesos que emanen de cualquier órgano del estado y en concreto los llevados a cabo por los tribunales, no rompan con los principios fundamentales del Estado democrático.

Estos tribunales cumplen un papel fundamental dentro del esquema constitucional, principalmente de carácter jurisdiccional. La creación de estos tribunales obedeció en esencia a querer superar el rezago de asuntos arrastrados por la Suprema Corte Justicia hasta 1951, sin embargo es importante señalar que su origen tuvo influencia del modelo de la Corte de Apelación estadounidense<sup>203</sup>. El objetivo perseguido por estos tribunales es llevar a cabo una

---

<sup>203</sup> “En un principio en los Estados Unidos de América se previó la existencia de tres cortes de circuito integrada por dos jueces de la Corte Suprema más el juez de distrito correspondiente al estado. Los jueces de distrito tenían residencia fija; en cambio los jueces de la corte a la vez que sesionaban en el asiento de los poderes federales, eran itinerantes y tenían fijado un circuito que recorrían de manera periódica; sólo podían actuar dentro de su circuito. También se abunda en cuanto a que se llegó a pensar que se trataba de tribunales mixtos, que se integrarían con jueces federales y locales...”, Cfr. Quiroz Acosta, Enrique, “*Lecciones...*”, op.cit., p. 427.

descentralización progresiva, que descargará a la Suprema Corte del rezago de trabajo. Estos órganos se crearon con las competencias precisas para conocer de asuntos que corresponden a la jurisdicción de la Corte. Son los superiores jerárquicos de jueces de Distrito y de los Tribunales Unitarios en materia de amparo indirecto<sup>204</sup>.

A partir de su creación se propuso que los Tribunales Colegiados tuvieran conocimiento de los juicios de amparo en los que se impugnen la inconstitucionalidad de una ley federal o local, cuando sea reclamada la violación directa de un precepto constitucional, así como de actos que contravengan la jurisprudencia de los tribunales federales, o los que afecten el interés público<sup>205</sup>.

Como su nombre lo indica, al ser colegiados están conformados por tres magistrados. La división en circuitos<sup>206</sup> está repartida por todo el territorio nacional, el número de éstos, las

---

<sup>204</sup> Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, artículos 33 y ss., disponible en: [www.cddhcu.gob.mx](http://www.cddhcu.gob.mx), consultado el 27 de agosto de 2015.

<sup>205</sup> "...al *certiorari* –se le definió– a fines del siglo pasado como un *writ* recurso o procedimiento que permite a una persona solicitar a una corte o tribunal superior, ordenar a otro inferior o a un funcionario público que ejerce funciones judiciales, con un procedimiento diferente al *common law*, que le remita a una causa o asunto pendiente de ser resuelto, para que el superior asuma su conocimiento, considerado no como una acción, sino como recurso(...)En el siglos XIX pasó a los Estados Unidos ampliándose también para asuntos civiles, administrativos y constitucionales(...)en el siglo XX tuvo como propósito esencial permitir que la Suprema Corte diera uniformidad a las interpretaciones que hicieran los tribunales de apelación y, cuando se encontrara una contradicción irreconciliable, admitir el recurso y resolverlo en beneficio de una de las partes en litigio(...)En el derecho norteamericano se distingue la apelación del *certiorari*(...)es discrecional y optativo para la Suprema Corte Federal, mientras la primera obligatoria. Cuando la Suprema Corte estima que un caso es importante, da entrada al *certiorari* y lo resuelve. Pero si no es así, lo rechaza discrecionalmente y queda firme la sentencia impugnada. De admitirlo, puede revocar el fallo del anterior. No obstante la discrecionalidad que implica, *el certiorari*, se rige por ciertas reglas lógicas, de tal suerte que la Suprema Corte actúa, con plena libertad, pero no en forma arbitraria. Estas reglas las da su propio reglamento. Las situaciones entre las cuales la Suprema Corte de los Estados Unidos acepta y resuelve *el certiorari*, están las siguientes: I. contra sentencias definitivas de los Tribunales de Circuito cuando: a) El Tribunal Federal de Apelación dicta sentencia definitiva en contradicción de tesis sustentada por otro tribunal del mismo rango sobre el mismo punto (*intracircuit conflict*); b) la sentencia federal de apelación contradice lo resuelto en última instancia por un Tribunal Superior Estatal sobre un problema federal; c) El tribunal Federal ha decidido una cuestión siguiendo un procedimiento que contradice las normas procesales antes acostumbradas; d) El Tribunal Federal de Apelación confirmó lo hecho por un Juez que siguió procedimientos contrarios a la costumbre; II. Contra sentencias del orden común, si *el certiorari* impugna la sentencia de un Tribunal Superior Estatal que, en última instancia, resolvió un punto en plena contradicción con lo asentado por un Tribunal Superior Federal de Apelación (*de Circuito*); III. Contra sentencias de un Tribunal Superior Federal o Estatal cuando sostienen una tesis en contradicción con las emitidas por los tribunales de aduanas (*customs*), de patentes (*patentes*) o de reclamaciones (*claims*)". Cfr. Cabrera Acevedo, Lucio, Los Tribunales Colegiados de Circuito, Segunda Edición, Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, D.F., 2003, p. 221-222; Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, "Ochenta Años de Evolución Constitucional del Juicio de Amparo Mexicano", "Ensayos...", op.cit., p. 742; Véase, Ríos Vázquez, Rodolfo, Los Tribunales Colegiados de Circuito, Gestación e Instalación, Primera Edición, Oficio Ediciones, Monterrey, N.L., 2004.

<sup>206</sup> La palabra circuito debe entenderse como la circunscripción territorial sobre el cual se ejerce jurisdicción. Cfr. Carranco, Zúñiga Joel, "Poder...", op.cit., p.189.

competencias y especialización de los mismos se determinan por el Consejo de la Judicatura Federal. En la actualidad el territorio mexicano se divide en veinticinco circuitos<sup>207</sup>.

Los Tribunales Colegiados<sup>208</sup> se encargan de los recursos de revisión que se enderecen contra las sentencias dictadas en amparo indirecto en el que se haya impugnado una ley federal, local o bien un tratado internacional. A efectos de precisar las competencias que tienen los Tribunales Colegiados respecto del amparo indirecto, es menester que expliquemos cuales son los asuntos que se atienden bajo este concepto en materia de amparo.

El amparo indirecto<sup>209</sup> es un proceso jurisdiccional autónomo de doble instancia, que tiene por objeto anular, en los casos concretos, los actos de autoridad contrarios a la Constitución

---

<sup>207</sup> Es facultad del Consejo de la Judicatura Federal de conformidad con el artículo 81, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación al determinar el número y los límites de los circuitos en que se divida el territorio de la República. Estas decisiones se aterrizan en los acuerdos jurisdiccionales tomados por el Consejo y sus integrantes.

<sup>208</sup> Los Tribunales Colegiados de Circuito conocen: a) de los juicios de amparo directo; b) de los recursos de revisión que se enderecen contra del desechamiento de una demanda de amparo indirecto; de las resoluciones que se concedan o nieguen la suspensión definitiva en amparo indirecto, o bien revoquen o modifiquen dicha resolución; conocerá también de los recursos de revisión que intenten contra autos de sobreseimiento y las interlocutorias que se dicten en el incidente de reposición de autos; contra las sentencias dictadas en amparo indirecto cuando no se combatan disposiciones de carácter general; también conocen de recursos de revisión donde se reclame una acuerdo de extradición tomada por el Poder Ejecutivo; de los asuntos que por acuerdo de la Corte envíe, a los Tribunales Colegiados de Circuito, para mayor prontitud en el despacho de los mismos y en aras de una pronta impartición de justicia ; c) algunas variantes del recurso de queja; d) de la revisión en materia fiscal; e) de los conflictos de competencia entre los tribunales unitarios y juzgados de distrito, además de los impedimentos y excusas de los mismos con respecto al conocimiento de algún asunto; f) de los recursos de reclamación que se presenten en contra de los acuerdos de tramite tomados por Magistrado Presidente. *Ibíd.*, p. 190-192, Véase Ponce de León Armenta, Luis, *Compendio de la Legislación comentada del Poder Judicial Federal*, Primera Edición, Editorial Porrúa, México, 1997, VV.AA., *Las Nuevas Bases Constitucionales y Legales del Sistema Judicial Mexicano, La Reforma Judicial 1986-1987*, Primera Edición, Editorial Porrúa, México, 1987.

<sup>209</sup> Está regulado por el Artículo 107 de la Ley de Amparo, en ocho fracciones. La primera fracción comprende la posibilidad de impugnar leyes de carácter autoaplicativas y heteroaplicativas, las primeras requieren para ser impugnables -vía amparo indirecto- sean planteadas dentro de los treinta días siguientes en que hayan iniciado su vigencia; en atención a la fracción segunda serán sujetos de amparo los actos de autoridad que por su carácter no provengan de autoridades jurisdiccionales, sino autoridades del poder ejecutivo, esto es, autoridades administrativas y particulares encargadas actos por equivalencia a los de autoridad; la fracción tercera mantiene íntima relación con el principio de definitividad al comprender que aún persiste medio de impugnación pendiente de agotarse previamente, ahora bien como excepcional se tomará en cuenta a aquella resolución administrativa que carezca de un medio procesal para definir el contenido de legalidad; la ley de mérito en fracción cuarta establece que tratándose de resoluciones provenientes de los diferentes tribunales fuera de juicio o después de concluido; la fracción quinta prevé la posibilidad de solicitar amparo contra actos acontecidos dentro del procedimiento judicial, al tener por objeto la afectación de derechos sustantivos dispuestos en la Constitución Mexicana y los tratados internacionales; en la fracción sexta abre la posibilidad de solicitar amparo por aquellos sujetos extraños al proceso judicial, quienes por cuestiones derivadas del proceso mantienen alguna afectación en su persona o patrimonio, estos es contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, dentro, fuera o después de concluido el proceso; en la fracción séptima se podrá promover amparo indirecto contra actos del Ministerio Público y en favor del ofendido o

realizados en perjuicio de los gobernados. La primera instancia se tramita ante un Juez de Distrito o ante un Tribunal Unitario de Circuito y la segunda, mediante el recurso de revisión, ante un Tribunal Colegiado de Circuito o ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con lo establecido por el sistema de competencias establecido en la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación<sup>210</sup>. Este proceso tiene como presupuesto que el acto de autoridad que se combate no es una sentencia definitiva, o cualquier tipo de resolución que ponga fin al juicio, dictado por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo<sup>211</sup>.

Siguiendo el modelo de la Corte, los Tribunales Colegiados resuelven los asuntos sometidos a su consideración, bien por unanimidad o mayoría, en el caso de que alguno de sus magistrados esté en desacuerdo con el proyecto de resolución, podrá presentar voto particular el cual se anexa al final de la sentencia respectiva<sup>212</sup>.

#### ***d) Tribunal Unitario de Circuito.***

Con respecto a los Tribunales Unitarios de Circuito básicamente son tribunales superiores jerárquicos de los jueces de distrito en los juicios ordinarios federales, respecto de los procesos distintos del amparo. Toman su nombre por estar integrados de un solo magistrado, y tienen autoridad para revisar en apelación los asuntos resueltos por los jueces de distrito en primera instancia; así como los impedimentos y excusas o recusaciones de éstos; están encargados de resolver los conflictos que se presenten entre jueces de distrito sujetos a su competencia<sup>213</sup>; -y por excepción funcionan como tribunales de control constitucional cuando

---

víctima del delito; la última fracción le otorga procedencia al juicio de amparo indirecto, cuando se declare la inhibición o declinación de un asunto por parte de la autoridad judicial al no asumir su competencia, una vez practicados los mecanismos procesales autorizados por ley al tener que respetar el contenido dispuesto por el principio de definitividad, de forma previa a concurrir al juicio de amparo indirecto o directo, si dicha resolución puso fin al proceso. Cfr. Peña Oviedo, *Ley de Amparo, Práctica Forense de Amparo*, Primera Edición, Editorial Flores, México, D.F., 2004, p.563 y ss.

<sup>210</sup> Artículo 35 y 107 de la Ley de Amparo, y del Título Cuarto, capítulo I, de los Jueces de Distrito de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación Artículos 50 y ss.

<sup>211</sup> Cfr. *Diccionario Especializado en Materia de Amparo, Definiciones, conceptos en materia civil, penal, laboral, constitucional*, Edición Especial, Primera Edición, Editorial Libros Técnicos, Tlaxcala, Tlax, 2012, p.168-169.

<sup>212</sup> Artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

<sup>213</sup> Estos tribunales pueden conocer de amparo, cuando sea indirecto contra una resolución pronunciada por otro Tribunal Unitario de Circuito, cuando por la naturaleza de la resolución sea impugnabile en vía de amparo. Cfr. Carranco, Zúñiga Joel, *"Poder..."*, op.cit., p.199; "Artículo 29: Los tribunales unitarios de circuito conocerán: I. De los Juicio de Amparo promovidos contra actos de otros tribunales unitarios de circuito, que no constituyan

tienen competencia para conocer de juicios de amparo promovidos contra determinadas resoluciones de otro tribunal unitario como, es el caso cuando éstos en vía de apelación confirman un auto de formal prisión, el Juicio de Amparo que se intente contra ésta decisión es competente de otro tribunal unitario ya sea del mismo circuito o del más próximo-.

#### ***e) Jueces de Distrito.***

La función de Juez de Distrito<sup>214</sup> se circunscribe a la aplicación genérica de leyes federales que realiza en primera instancia, salvo que sea especializado puede hacerlo en todas las materias.

Estos tribunales están distribuidos por todo el territorio nacional, integrados por un juez y del número de secretarios, actuarios y empleados que determine su presupuesto, la carga de trabajo y su especialidad. Los jueces de distrito que no tengan jurisdicción especial conocen los asuntos de todas las materias<sup>215</sup>.

En materia penal los jueces de distrito tienen autoridad para conocer de los delitos de competencia de la federación, determinados por el orden normativo respectivo; como en las disposiciones que se puedan contener en tratados internacionales; en el Código Penal Federal en los artículos del 2 al 5; los cometidos en el extranjero por los agentes diplomáticos, personal oficial y cónsules mexicanos; en las embajadas, consulados, y legaciones

---

sentencias definitivas, en términos de lo previsto por la Ley de Amparo, respecto de los juicios de amparo indirecto promovidos ante el juez de distrito. En estos casos, el tribunal unitario competente será el más próximo a la residencia de aquél que haya emitido el acto impugnado; (...)" . Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación disponible en <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/>, 12 de junio 2011, en este sentido la corte mexicana ha resuelto Competencia para conocer de un conflicto competencial entre Jueces de Distrito de distinta jurisdicción, derivado de un procedimiento penal federal. Se surte a favor del Tribunal de Circuito que ejerza jurisdicción sobre el órgano que previno. Tesis: 1a./J. 60/2014 (10a.), Semanario Judicial de la Federación, CONTRADICCIÓN DE TESIS(Jurisprudencia (Penal, Común)), Publicación: viernes 07 de noviembre de 2014, disponible en [www.scjn.com.mx](http://www.scjn.com.mx).

<sup>214</sup> Cfr. "Diccionario Especializado...", op.cit., p. 664.

<sup>215</sup> Es el Consejo de la Judicatura quien tiene las facultades para determinar el número, límites territoriales y, en su caso especialización por materia, de los juzgados de distrito en cada uno de los circuitos. De igual forma el Consejo es quien hace el nombramiento de los jueces de distrito, resuelve sobre la ratificación, adscripción y remoción de los mismos, así previsto en el Artículo 81 fracción VI y VII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Estos asuntos se resuelven mediante acuerdos que expide el propio Consejo de la Judicatura, y que se publican en el Diario Oficial de la Federación, como ejemplo tenemos el acuerdo DOF: 05/08/2014, relativo a la CONVOCATORIA al primer concurso interno de oposición para la designación de jueces de Distrito especializados en el Nuevo Proceso Penal Acusatorio, disponible para su consulta en [www.dof.gob.mx](http://www.dof.gob.mx).



extranjeras; los cometidos por los servidores y empleados federales en ejercicio y con motivo de sus funciones, así como las que se cometan en contra de estos también; en los que la federación sea sujeto pasivo. Conocerán también de los procedimientos de extradición; de las autorizaciones para intervenir comunicaciones privadas de conformidad con la ley federal en materia de delincuencia organizada<sup>216</sup>.

Los jueces de distrito, conocen de amparo<sup>217</sup> en materia penal cuando:

a) de los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales en la materia respectiva; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo de aquellos actos administrativos que estén fuera de un procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Mexicana<sup>218</sup>;

b) de los juicios de amparo que se promuevan en contra de actos en juicio, fuera de juicio o una vez concluido, que afecten a personas extrañas al juicio; contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito cuya jurisdicción corresponda el acto reclamado del lugar donde ejecute o trate de ejecutarse; procede contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculcados, o en los casos de responsabilidad civil, por los tribunales que hayan conocido del proceso, bien por tribunales diversos en los juicios de responsabilidad civil cuando al acción se funde en la comisión de un delito<sup>219</sup>;

---

<sup>216</sup> Artículo 50, *Ibíd.*

<sup>217</sup> Artículos 107 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 51 fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

<sup>218</sup> ACTOS O VIOLACIONES INTRAPROCESALES PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. SUS CARACTERÍSTICAS. Tratándose de actos o violaciones intraprocesales, lo decisivo para exigir una inmediata impugnación en el amparo indirecto es la imposible reparación en razón de una afectación material -real y actual- a derechos sustantivos, a diferencia de la lesión o agravio formal a disposiciones adjetivas o procedimentales. Por tanto, más que la modalidad o tipo de acto (intraprocesal o terminal), lo relevante son los efectos y agravio que puedan producir en situaciones y circunstancias concretas; esto es, pueden reclamarse de manera inmediata cuando se esté en presencia de aquellos denominados de imposible reparación o, en su caso, junto con el acto terminal al que han trascendido, y siempre que hayan generado indefensión. Tesis: I.1o.A.E.20 K (10a.), Semanario Judicial de la Federación, disponible en [www.scjn.gob.mx](http://www.scjn.gob.mx), consultado el 28 de agosto de 2015.

<sup>219</sup> AMPARO CONTRA ACTOS DENTRO DE JUICIO. SÓLO PROCEDE CUANDO EXISTE UNA AFECTACIÓN MATERIAL A DERECHOS SUSTANTIVOS TUTELADOS EN LA CONSTITUCIÓN O EN LOS TRATADOS, Y NO CUANDO SE TRATE DE UNA EVENTUAL VIOLACIÓN FORMAL O INDIRECTA (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE). Cuando en el juicio de amparo se aduce violación a los derechos sustantivos previstos en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, debe considerarse la naturaleza jurisdiccional del acto

c) de los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y disposiciones que tengan el carácter de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo.

Hay que precisar que la posibilidad de que las controversias sobre aplicación o cumplimiento de leyes federales y tratados internacionales que se ventilen ante los órganos judiciales federales (Juzgados de Distrito), operará exclusivamente si se han afectado intereses particulares, así previsto por la fracción I, del Artículo 104 Constitucional.

Sobre el resto de materias de los que conocen los jueces de distrito, están establecidos en los artículos 52, 53, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, respectivamente en las áreas administrativa, civil y laboral.

---

reclamado, emitido conforme a la regulación procesal y sustantiva correspondientes, por lo que tales derechos no se ven materialmente afectados, como se deduce de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Al establecerse en dicha norma que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, y que por éstos debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Ley Fundamental o tratados en los que el Estado Mexicano sea parte; ello implica que no cualquier afectación a estos derechos es apta o suficiente para justificar la procedencia del amparo, pues debe tratarse de una afectación material o directa. Los derechos fundamentales de audiencia o debido proceso, y de autoridad competente, tratándose de actos materialmente jurisdiccionales, incluso, el de acceso efectivo a la jurisdicción, no son de aplicación y eficacia material inmediata, sino que ello se logra a través de la regulación normativa secundaria, pues es en las codificaciones procesales en las que se detallan y determinan los procedimientos que deben cumplirse para la tutela de los derechos sustantivos de los gobernados, ya que en ellas se contienen la forma y términos en que aquéllos pueden ejercerse. En los actos jurisdiccionales, que derivan de procedimientos legalmente regulados, es posible que la inobservancia de las normas procesales pueda trascender a una afectación de los derechos fundamentales reglamentados en las leyes secundarias; casos en los que se está ante una vulneración al principio de seguridad jurídica y al derecho del gobernado a la legalidad de todo acto autoritario que pueda trascender a su esfera jurídica, en forma de molestia o de privación. La afectación a los derechos humanos previstos en preceptos constitucionales o convencionales, que son la base de la regulación secundaria que los reglamenta o detalla, cuando se trata de actos jurisdiccionales en cuya emisión deban acatarse las normas secundarias, adjetivas o sustantivas correspondientes, no puede darse de manera directa o material, sino cuando se vulnera la legalidad esperada de todo acto de autoridad, de modo que esa violación a derechos humanos previstos en la Constitución o en convenciones internacionales, se da en forma indirecta o formal, al infringirse las normas que de manera inmediata regulan el quehacer de las autoridades jurisdiccionales. Por ello, el juicio de amparo es un medio no sólo para el control de constitucionalidad o de convencionalidad de los actos de autoridad, sino eminentemente de legalidad, pues a través del desacato a la legislación ordinaria, en vía de consecuencia, pueden afectarse alguno o ambos parámetros sobre la regularidad de lo actuado por el Estado a través de actos unilaterales y obligatorios que deben ponderarse para analizar la procedencia del amparo. Tesis: I.5o.C.8 K (10a.), Semanario Judicial de la Federación, *Ibíd.*

#### *f) Jurado Federal de Ciudadanos.*

El antecedente de esta institución es el Jurado Popular y en su tiempo fue el instrumento encargado de resolver como juzgador ordinario de los delitos comunes, en las materias de imprenta y delitos oficiales. Así a finales del siglo XIX y principios del XX, se creó la Ley de Jurados en Materia Criminal para el Distrito Federal, promulgada por el Presidente Juárez en 1869. Con la reforma del 4 de octubre de 1929, se suprimieron las competencias del Jurado Popular respecto de los delitos del orden común del Código de Organización de Competencia y de Procedimientos en materia penal para el Distrito Federal y Territorios Federales. Posteriormente la Constitución de 1917 en su artículo 3º le otorgo facultades para conocer de delitos oficiales, así como por la Ley de Responsabilidades de 1939 y de 1979. Finalmente, en 1982 la Constitución Mexicana le quito al Jurado Popular el conocer de procesos sobre delitos oficiales<sup>220</sup>.

El fundamento constitucional del Jurado Federal de Ciudadanos se encontraba en el artículo 20 fracción VI, sin embargo con la reforma del 18 de junio de 2008<sup>221</sup>, este artículo fue modificado en su totalidad para dar forma al nuevo sistema de justicia penal, basado en la oralidad. Suponemos que el legislador en la elaboración de la reforma razonó que la institución del jurado federal de ciudadanos quedaría justificada en los nuevos conceptos de oralidad contenidos en el artículo de referencia. Puesto que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en su artículo 1º vigente<sup>222</sup>, lo cuenta dentro de las instituciones que integran el Poder Judicial dándole estructura y estableciendo sus competencias, es decir los asuntos de los que puede conocer.

Este órgano judicial resolverá los asuntos puestos a su consideración a través de un veredicto, estos podrán serle planteados por un juez de distrito relativo a delitos cometidos por la prensa contra el orden público o la seguridad exterior de la Nación y demás que determinen las leyes<sup>223</sup>.

---

<sup>220</sup> Cfr. Barragán Salvatierra, Carlos, *Derecho Procesal Penal*, Segunda Edición, Editorial McGraw-Hill/Interamericana, México, D.F., 2004, p.495.

<sup>221</sup> La reforma está disponible en [http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM\\_ref\\_180\\_18jun08\\_ima.pdf](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_180_18jun08_ima.pdf), 14 de enero 2011.

<sup>222</sup> Disponible en <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/172.pdf>, 14 de junio 2011.

<sup>223</sup> Artículo 56 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Este tribunal es integrado de siete ciudadanos seleccionados por sorteo. Los requisitos que debe reunir un aspirante a jurado son el de ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos; saber leer y escribir y ser vecino del distrito judicial en que desempeñe el cargo, por lo menos con un año de antigüedad al día en que se publiquen las listas de jurados. Quedan impedidos para ejercer el cargo de jurado: los servidores públicos federales, de los Estados y del Distrito Federal, los municipios; los ministros de algún culto religioso; las personas que tuvieren sujetas a proceso; las personas que hubieren sido condenadas por algún delito con pena de prisión; los ciegos, sordos o las personas sujetas a interdicción<sup>224</sup>.

Los jurados que asistan a las audiencias serán remuneradas conforme lo determine el presupuesto. Las atribuciones del Jurado Federal de Ciudadanos se encuentran dispuestas en el Título Quinto de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, sin embargo a pesar de que en el ordenamiento de referencia se encuentran desarrolladas la integración, los requisitos para conformar dicho tribunal y sus competencias, es una institución en desuso, es decir que no existen antecedentes de su puesta en marcha, y mucho menos de resolución alguna emanada de éste.

#### ***g) Consejo de la Judicatura Federal.***

Los órganos del Estado aunque constitucionalmente tengan debidamente establecidas sus atribuciones y competencias, no sólo desempeñan las actividades que les son propias conforme a su naturaleza y atribuciones delegadas por el orden normativo. En el caso del Poder Judicial existen actividades que no guardan estrecha relación con la actividad jurisdiccional –es decir, la solución de conflictos-, existen facultades y competencias que tienen que ver con la administración, vigilancia, disciplina, y la responsabilidades para regular lo relativo a la carrera judicial, por ejemplo: los nombramiento de jueces, magistrados, secretarios y el resto de personal que auxilian a los órganos judiciales. Otras responsabilidades son las relativas a la administración de los bienes inmuebles que ocupan los tribunales y el presupuesto destinado a cubrir las necesidades de los mismos; y por

---

<sup>224</sup> Artículo 59 y 60, *Ibíd.*

supuesto la vigilancia y correcciones disciplinarias a los servidores públicos al servicio del Poder Judicial<sup>225</sup>.

En México todas estas responsabilidades y competencias recaen en el Consejo de la Judicatura Federal, así previsto expresamente en el Título Sexto y Capítulo I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, cuyos apartados respectivamente rezan “De los Órganos Administrativos del Poder Judicial de la Federación”, y “Del Consejo de la Judicatura Federal”, siendo este último el órgano dentro del Poder Judicial Federal con funciones de administración, organización y vigilancia de todas las actividades no judiciales del mismo, con excepción de la Suprema Corte y el Tribunal Electoral, gozando de independencia técnica y de gestión para pronunciar sus decisiones.

El Consejo se integrará por siete miembros de los cuales, uno será el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien también lo será del Consejo; tres Consejeros designados por el Pleno de la Corte, por mayoría de cuando menos ocho votos, de entre los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito; dos Consejeros designados por el Senado, y uno por el Presidente de la República. Para ser Consejero de la Judicatura Federal es necesario reunir los mismos requisitos que se requieren para ser Ministro de la Corte, según lo dispone el Artículo 95 Constitucional.

El Consejo funciona en Pleno o en comisiones<sup>226</sup>. El Pleno del Consejo asigna la competencia territorial y el órgano en que deba ejercer sus funciones, además de todo lo concernientes a las designaciones, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces. Para la designación y adscripción de magistrados y jueces de distrito el Consejo toma en

---

<sup>225</sup> Véase, Rivas Acuña, Israel, *El Consejo de la Judicatura Federal, trayectoria y perspectivas*, Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México D.F., 2011; Solís Rodríguez, Javier, *Consejo de la Judicatura Federal: Responsabilidad Administrativa, facultad disciplinaria y prescripción, Estudios sobre la Responsabilidad del Estado en Argentina, Colombia y México*, VV.AA. coordinadores, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Primera Edición, México, D.F., 2007; Carpizo, Jorge, “Otra reforma constitucional: la subordinación del Consejo de la Judicatura Federal”, *Cuestiones Constitucionales*, Revista Mexicana de Derecho Constitucional, Número 2, Enero-Junio, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 2000, Procedencia del Juicio de Amparo contra resoluciones del Consejo de la Judicatura Federal que impongan sanciones administrativas a Secretarios o Empleados de los Tribunales de Circuito y Juzgado de Distrito, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Suprema Corte de Justicia de la Nación; Primera Edición México, D.F., 1999.

<sup>226</sup> El Pleno se integrará con los siete consejeros, pero bastará la presencia de cinco de ellos para funcionar, las sesiones ordinarias del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal serán privadas y se celebrarán durante los períodos a que alude el artículo 70 de esta ley, en los días y horas que el mismo determine mediante acuerdos generales. 74 y 75 de la Ley Orgánica de la Poder Judicial de la Federación.

consideración los siguientes criterios: a) la calificación obtenida en el concurso de oposición; b) los cursos que haya realizado en el Instituto de la Judicatura; c) la antigüedad en el Poder Judicial de la Federación o la experiencia profesional; d) en desempeño en el poder judicial; e) el grado académico que comprende el nivel de estudios con que cuenta el servidor, así como los cursos de actualización<sup>227</sup>.

Para la ratificación de los jueces y magistrados el Consejo toma en consideración: a) el desempeño del juzgador en el ejercicio de su función; b) los resultados de las visitas de inspección; c) el grado académico que comprende el nivel de estudios con que cuenta el servidor público, así como los cursos de actualización y especialización acreditados; d) no haber sido sancionado por falta grave con motivo de queja administrativa; e) los demás que estime el Consejo siempre que consten en acuerdo general y sean publicados con seis meses de anticipación a la fecha de la ratificación<sup>228</sup>. Las decisiones que en materia de adscripción, nombramientos, cambio de adscripción y remoción de jueces y magistrados pueden impugnarse ante el Pleno de la Corte Mexicana mediante un recurso de revisión administrativa, establecido con el objeto de que el tribunal revise si el nombramiento, readscripción o remoción de un juez o magistrado se realizó en estricto apego a los requisitos que establece la ley, los reglamentos interiores o los acuerdos generales expedidos por el Consejo de la Judicatura Federal<sup>229</sup>.

Las resoluciones del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se tomarán por el voto de la mayoría de los consejeros presentes, y por mayoría calificada de cinco votos tratándose de los casos previstos en las fracciones I, II, VII, VIII, XI, XII, XV, XVI, XVIII, XXV, XXVI y XXXVI<sup>230</sup> del artículo 81 de esta ley. Los consejeros no podrán abstenerse de votar sino

---

<sup>227</sup> Artículos 119 y 120 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

<sup>228</sup> Artículo 121, *Ibíd.*

<sup>229</sup> Artículo 122, *Ibíd.*

<sup>230</sup> "I. Establecer las comisiones que estime convenientes para el adecuado funcionamiento del Consejo de la Judicatura Federal, y designar a los consejeros que deban integrarlas; II. Expedir los reglamentos interiores en materia administrativa, de carrera judicial, de escalafón y régimen disciplinario del Poder Judicial de la Federación, y todos aquellos acuerdos generales que fueren necesarios para el adecuado ejercicio de sus atribuciones en términos del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (...) VII. Hacer el nombramiento de los magistrados de circuito y jueces de distrito, y resolver sobre su ratificación, adscripción y remoción; VIII. Acordar las renunciaciones que presenten los magistrados de circuito y los jueces de distrito (...) XI. Suspender en sus funciones a los magistrados de circuito y jueces de distrito que aparecieran involucrados en la comisión de un delito, y formular denuncia o querrela contra ellos en los casos en que proceda; XII. Resolver sobre las quejas administrativas y sobre la responsabilidad de servidores públicos en términos de lo que dispone esta ley incluyendo aquellas que se refieran a la violación de los impedimentos

cuando tengan impedimento legal o cuando no hayan asistido a la discusión del asunto de que se trate. En caso de empate, el presidente tendrá voto de calidad.

Dentro de las principales facultades del consejo de la judicatura son las siguientes:

1. Determinar las comisiones que pueden ser la administración; carrera judicial; disciplina; creación de nuevos órganos y la de adscripción y las que determine el pleno.
2. Expedir los reglamentos interiores para las materias de su competencia.
3. Determinar el número de circuitos del territorio nacional.
4. El número y especialización por materia de los tribunales de circuito, colegiados y unitarios.
5. Nombrar, ratificar y definir la adscripción de los magistrados y jueces así como resolver sobre su remoción.
6. Decidir sobre la remoción forzosa de jueces y magistrado del sus cargos, así como suspenderlos de sus cargos a solicitud de la autoridad judicial.

---

previstos en el artículo 101 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por parte de los correspondientes miembros del Poder Judicial de la Federación, salvo los que se refieran a los miembros de la Suprema Corte de Justicia (...) XV. Nombrar, a propuesta que haga su presidente, a los titulares de los órganos auxiliares del Poder Judicial de la Federación, resolver sobre sus renuncias y licencias, removerlos por causa justificada o suspenderlos en los términos que determinen las leyes y los acuerdos correspondientes, y formular denuncia o querrela en los casos en que proceda; XVI. Nombrar, a propuesta que haga su presidente, a los secretarios ejecutivos, así como conocer de sus licencias, remociones y renuncias (...) XVIII. Establecer la normatividad y los criterios para modernizar las estructuras orgánicas, los sistemas y procedimientos administrativos internos, así como los de servicios al público. Para tal efecto, deberá emitir la regulación suficiente, por medio de reglas y acuerdos generales, para la presentación de escritos y la integración de expedientes en forma electrónica mediante el empleo de tecnologías de la información que utilicen la Firma Electrónica, de conformidad con lo estipulado en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (...) XXV. Resolver los conflictos de trabajo suscitados entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores públicos en términos de la fracción XII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir del dictamen que le presente la Comisión Sustanciadora del propio Poder, con excepción de los conflictos relativos a los servidores públicos de la Suprema Corte de Justicia cuya resolución le corresponda, en los términos de los artículos 152 a 161 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional en aquello que fuere conducente; XXVI. Designar, a propuesta de su presidente, al representante del Poder Judicial de la Federación ante la Comisión Sustanciadora para los efectos señalados en la fracción anterior; (...) XXXVI. Investigar y determinar las responsabilidades y sanciones a los servidores públicos y empleados del propio Consejo; de los tribunales de circuito, que para el caso de que se trate de tribunales colegiados, deberá considerar las grabaciones que se encuentren documentadas de las sesiones en que resuelvan los juicios o recursos promovidos ante ellos; y juzgados de distrito; todo ello en los términos y mediante los procedimientos establecidos en la ley, los reglamentos y acuerdos que el Consejo dicte en materia disciplinaria (...).”

7. Resolver las quejas en materia administrativa y sobre responsabilidad de los servidores públicos que se presenten.
8. Aprobar el proyecto de presupuesto anual de egresos del Poder Judicial de la Federación, para que junto con el elaborado por la Suprema Corte de Justicia se envíe al Ejecutivo.
9. Los cambios de residencia de los tribunales federales.
10. La concesión de licencias.
11. Resolver los conflictos laborales que se presenten entre los servidores públicos del Poder Judicial Federal, con excepción de los servidores públicos al servicio de la Corte.
12. Ejercer el presupuesto que se otorgue al Poder Judicial de la Federación, con excepción del de la Corte y el Tribunal Electoral.
13. La emisión de acuerdos para delegar facultades.

De igual forma el Consejo cuenta con órganos auxiliares, es el caso de: La Unidad de Defensoría del Fuero Federal; Instituto de la Judicatura; Visitaduría; Contraloría del Poder Judicial de la Federación.

*a) La Unidad de Defensoría del Fuero Federal.* El sistema de defensa federal fue regulado por la Ley de Defensoría de Oficio Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 9 de febrero de 1922, y por el Reglamento de la Defensoría de Oficio en el Fuero Federal de 25 de septiembre de ese mismo año, aprobado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión celebrada el 18 de octubre siguiente. Conforme a la Ley y al Reglamento señalados, el Jefe y demás miembros del Cuerpo de Defensores, formaban parte de la Suprema Corte, cuyos nombramientos y remoción también realizaba el Alto Tribunal. El Jefe de defensores prestaba la protesta constitucional ante la Suprema Corte, los defensores adscritos a la Ciudad de México ante el Jefe del Cuerpo, y los defensores foráneos ante los magistrados o jueces de los tribunales a que estuvieran adscritos.

Desde entonces, el servicio público de la defensa jurídica gratuita proporcionada por el Estado en el nivel federal, se realiza a través del Poder Judicial de la Federación. Así el Instituto de Federal de la Defensoría Pública es un órgano dependiente del Poder Judicial de



la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, con independencia técnica y operativa, cuya función es garantizar el derecho a la defensa pública en materia penal y el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica en las materias administrativa, fiscal, civil y derivada de causas penales<sup>231</sup>, permitiendo atender a la población menos favorecida del país, bajo los principios de gratuidad, probidad, honradez y profesionalismo, contribuyendo a superar desigualdades sociales y a consolidar el estado de derecho.

Este órgano será el garante de los servicios de defensa pública en los asuntos del orden penal federal, desde la averiguación previa hasta la ejecución de las sentencias, y de asesoría jurídica en asuntos de orden no penal, contribuyendo a superar desigualdades sociales, preservar los derechos humanos, consolidar el estado de derecho y el principio constitucional de acceso a la justicia.

Los defensores públicos y asesores jurídicos están obligados a prestar a título personal el servicio de orientación, asesoría y representación a las personas que lo soliciten en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la Ley Federal de la Defensoría Pública. De igual forma los defensores y asesores jurídicos representan y ejercen ante las autoridades competentes los intereses y los derechos jurídicos de los defendidos o asistidos, a cuyo electo harán valer acciones, opondrán las excepciones y defensas, interponer los incidentes o recursos y realizar cualquier trámite o gestión que proceda conforme a Derecho para desarrollar una defensa adecuada y eficaz<sup>232</sup>.

En todo momento estos profesionistas deben evitar la indefensión de las personas a quienes representen, vigilando en todo momento el respeto a las garantías individuales de los justiciables a su cargo, y formular las demandas de amparo respectivas, cuando éstas se estimen violadas. Bajo su responsabilidad queda –de igual forma-, llevar el registro y formar

---

<sup>231</sup> “...ante el Ministerio Público el defensor público debe atender inmediatamente las solicitudes formuladas por el indiciado al Agente del Ministerio Público necesarias para la defensa, hacer las solicitudes al Ministerio Público de libertad caucional, el no ejercicio de la acción penal en favor de su defendido cuando no existan elementos para consignar. Entrevistarse y asistir en todo momento a su defendido para conocer los hechos que motivaron la investigación así como apoyarlo en la rendición de su declaración ante el Ministerio Público, así como proporcionar la información del trámite legal de los asuntos encomendados a los familiares de su defendido, todas aquellas que sean necesarias para una defensa conforme a Derecho...”, Artículo 11 de la Ley Federal de la Defensoría Pública.

<sup>232</sup> Artículo 5 de la Ley Federal de Defensoría Pública.

el expediente de control de todos los procedimientos o asuntos bajo su responsabilidad hasta el término de los mismos o bien de su intervención personal.

A los defensores públicos y asesores jurídicos les está prohibido tener empleos diversos, cargos o comisiones que deriven de otras instancias gubernamentales, con excepción de las actividades docentes. El ejercicio particular de la profesión de abogado, salvo que se trate de causa propia, de su cónyuge, concubino, así como parientes consanguíneos en línea recta sin limitación de grado, y colaterales hasta el cuarto grado, por afinidad o civil. De igual forma los defensores y asesores no podrán bajo ningún concepto actuar como mandatarios judiciales, tutores, curadores o albaceas, depositarios judiciales, síndicos, administradores, interventores en quiebra o concurso, ni corredores, notarios, comisionistas, árbitros, ni ser mandatarios judiciales ni endosatarios en procuración, o ejercer cualquier otra actividad cuando ésta sea incompatible con sus funciones<sup>233</sup>.

La importancia de la Unidad de la Defensoría del fuero federal, garantiza el derecho fundamental de defensa a que todo ciudadano tiene derecho, en cualquier proceso, especialmente en materia penal contemplado el Artículo 20 de la Constitución Mexicana, satisfaciendo la prestación de la defensa jurídica gratuita, a la que el Estado mexicano está obligado según lo dispone el artículo de referencia. En este sentido al Consejo corresponde la designación de los defensores de oficio, estableciendo los concursos de oposición a los que deben someterse; la adscripción, la promoción y determinación de la categoría de los defensores, de igual forma que los sistemas de evaluación que determinen su desempeño y honorabilidad<sup>234</sup>. Los servicios de asesoría jurídica se prestarán a personas desempleadas, que no perciban ingresos, trabajadores jubilados o pensionados, indígenas o personas que por cualquier razón social o económica tengan necesidad del servicio.

*b) Instituto de la Judicatura.* Es un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal en materia de investigación, capacitación y actualización en los miembros del Poder Judicial de la Federación y de quienes aspiren a pertenecer a éste. Tiene autoridad para coordinarse con poderes judiciales locales, así como instituciones académicas para la celebración de cursos y programas de actualización judicial, y de preparación de las oposiciones correspondientes a

---

<sup>233</sup> Artículo 6, *Ibíd.*

<sup>234</sup> Artículo 89 al 91, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

las distintas categorías dentro de la carrera judicial<sup>235</sup>. El artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su párrafo séptimo dispone las bases para la formación y actualización de los funcionarios judiciales para el desarrollo de la carrera judicial de los mismos con el objeto de que formen jueces que se rijan bajo los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia.

Los miembros del Instituto son designados por el Consejo de la Judicatura Federal entre personas con reconocida experiencia profesional y académica y se creó para contribuir al perfeccionamiento de profesionales del Derecho, a través de la creación y transmisión del conocimiento y cultura jurídicos, para ejercer funciones jurisdiccionales con sentido analítico, crítico, creativo e innovador, y solucionar problemas mediante la correcta aplicación del ordenamiento jurídico. Es el órgano encargado de publicar las convocatorias y los lugares sedes, donde se habrán de aplicar los exámenes para la selección ya sea de jueces de Distrito<sup>236</sup>, Magistrados de Circuito<sup>237</sup>, visitadores del poder judicial de la federación que ocupen las posiciones en los lugares del país que lo necesiten.

El instituto es dirigido por un director general<sup>238</sup>, que su vez dispone la formación de un Comité que junto con el director general definen los programas de investigación, preparación y capacitación de los alumnos del instituto, de igual forma los mecanismos de evaluación, rendimiento y participación en los exámenes de oposición libre que definan los elementos que habrán de integrarse a la carrera judicial<sup>239</sup>, de conformidad con los artículos 112 y 117 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

---

<sup>235</sup> Artículo 92 al 97 *Ibíd.*

<sup>236</sup> Seis Concursos Internos de oposición para la designación de Jueces de Distrito especializados en el Nuevo Proceso Penal Acusatorio a realizarse en: SEDE CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL; TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO; ZAPOPAN, JALISCO; MONTERREY, NUEVO LEÓN; MÉRIDA YUCATÁN Y TIJUANA BAJA CALIFORNIA. 13 DE MAYO DE 2015. Acuerdo General 26/2004, Del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta los cursos del Instituto de la Judicatura Federal; fija las bases para celebrar y organizar los exámenes de aptitud a que se refiere el artículo 115 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; establece el procedimiento para la expedición de nombramientos de Secretarios de Tribunal de Circuito, de Juzgados de Distrito y Actuarios del Poder Judicial de la Federación; y abroga el Acuerdo General 3/2002 del propio Órgano Colegiado en: [www.ijf.cjf.gob.mx](http://www.ijf.cjf.gob.mx), consultado el 27 de agosto de 2015.

<sup>237</sup> Vigésimo Sexto concurso interno de oposición para la designación de MAGISTRADOS DE CIRCUITO DE COMPETENCIA MIXTA. *Ibíd.*

<sup>238</sup> Acuerdo General 10/2004. Del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se determina la duración del periodo de encargo del Director General del Instituto de la Judicatura Federal. *Ibíd.*

<sup>239</sup> Acuerdo General 24/2003. Del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, relativo a la asistencia de servidores públicos adscritos al Consejo de la Judicatura Federal, órganos jurisdiccionales y auxiliares, a los concursos y exámenes autorizados por el propio Pleno, para desempeñar una categoría de las mencionadas en el artículo

El objetivo es formar que los órganos judicial en México, se desarrollen con liderazgo iberoamericano por la calidad de sus actividades formativas, capaz de coordinar un sistema de formación judicial en todo el país que integra a la docencia e investigación jurídicas conforme a modelos de enseñanza innovadores, sistemático y pertinente; que transformen a los profesionales en servidores públicos jurisdiccionales altamente competitivos en la aplicación del Derecho y la justicia.

c) *Visitaduría*. Órgano competente para inspeccionar el funcionamiento de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito y para supervisar las conductas de los integrantes de estos órganos. Los miembros que integran esta institución representan al Consejo del Poder Judicial, los cuales inspeccionarán periódicamente los tribunales federales, cuando menos dos veces al año, haciendo la comunicación respectiva al mismo<sup>240</sup>.

---

110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación o de la Visitaduría Judicial, y que abroga el diverso Acuerdo General 19/2001 del referido Cuerpo Colegiado. PRIMERO.- Los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación que participen en los diversos concursos de oposición o exámenes de aptitud, para acceder a alguna categoría de las mencionadas en el artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, o de la Visitaduría Judicial, de conformidad con los acuerdos generales aprobados por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, podrán asistir a realizar los trámites de inscripción, sustentar los exámenes respectivos y acudir, en caso de ser designados, a los cursos propedéuticos correspondientes, previa autorización del titular de su adscripción, según corresponda, por considerar que su participación es en aras de fortalecer al Poder Judicial de la Federación y tratarse de una cuestión inherente a la función pública que desempeñan. SEGUNDO.- Los jueces de Distrito que participen en los concursos para la designación de magistrados de Circuito, deberán solicitar a la Comisión de Carrera Judicial la autorización para realizar los trámites de inscripción y para la sustentación de los exámenes, cuando menos con tres días de anticipación, debiendo señalar el nombre del secretario que quedará encargado del despacho, en términos de lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. TERCERO.- Los servidores públicos adscritos a tribunales de Circuito y juzgados de Distrito y los secretarios técnicos adscritos a ponencias de Consejeros que participen en los concursos o exámenes mencionados en el punto primero, deberán solicitar la autorización correspondiente, con una anticipación prudente que no será menor de tres días, al titular del órgano jurisdiccional de su adscripción, o, en su caso, al Consejero respectivo, quienes brindarán las facilidades necesarias para su participación, a menos de que con ello se cause trastorno a las funciones sustantivas del propio órgano, aspecto que deberá razonarse suficientemente. CUARTO.- En el caso de servidores públicos adscritos a unidades administrativas u órganos auxiliares del Consejo de la Judicatura Federal, la Dirección General de Recursos Humanos otorgará la autorización correspondiente, previa solicitud por escrito del titular respectivo. QUINTO.- El Consejo de la Judicatura Federal, a través del Instituto de la Judicatura Federal o del órgano designado por el Pleno del propio Consejo, deberá expedir y entregar las constancias necesarias que acrediten fehacientemente el lugar, día y hora en que los servidores públicos realizaron su inscripción, sustentaron los exámenes y, en su caso, asistieron a los cursos propedéuticos correspondientes. SEXTO.- Después de haber realizado los trámites de inscripción, practicado los exámenes o haber asistido a los cursos propedéuticos respectivos, los servidores públicos participantes dispondrán de cinco días hábiles contados a partir de que el Instituto de la Judicatura Federal, o el órgano facultado para tal efecto, les expida la constancia correspondiente, para acreditar fehacientemente, ante quien los autorizó, los actos que llevaron a cabo para tales fines. Las personas referidas en el párrafo anterior que no cumplan con lo establecido en el presente acuerdo, serán sujetas de las sanciones que determine el propio Consejo de la Judicatura Federal. *Ibidem*.

<sup>240</sup> Artículo 98, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

La Visitaduría Judicial tiene sustento legal en los artículos 88 y 98 a 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Federación. El artículo 98 de este ordenamiento establece que la Visitaduría Judicial es el órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal competente para inspeccionar el funcionamiento de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, y para supervisar las conductas de los integrantes de estos órganos. El mismo cuerpo de leyes señala, en su artículo 99, que las funciones que se confieren a la Visitaduría Judicial, deberán ser ejercidas por los Visitadores Judiciales.

A través de los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que se ordenan las disposiciones en materia de responsabilidades administrativas, situación patrimonial, control y rendición de cuentas. Para estas tareas la Visitaduría Judicial lleva a cabo las acciones de inspección de la función judicial y de supervisión de la conducta de los servidores públicos de los órganos jurisdiccionales. Estas visitas de inspección, pueden ser ordinarias o extraordinarias, las primeras son físicas y a distancia; y las extraordinarias presentan las modalidades de inmediatas y programadas; adicionalmente contemplan informes de conducta y todos aquellos instrumentos que determine el Pleno o las Comisiones. Actualmente, la práctica de las visitas ordinarias y extraordinarias inmediatas, así como el uso de sistemas informáticos de captura y explotación de la información más relevante de la función jurisdiccional, son los principales instrumentos a través de los cuales se llevan a cabo las tareas de inspección y supervisión antes referidas. Estas herramientas tienen la ventaja de proporcionar la información requerida, de forma más eficiente y permiten la inspección de la función judicial y la supervisión de la conducta de los servidores públicos de órganos jurisdiccionales, con una menor participación de los juzgadores, en aras de optimizar el ejercicio jurisdiccional<sup>241</sup>.

Los visitadores revisan también las listas del personal que labora en los tribunales a inspeccionar, comprobando las asistencias; verificando que los valores asegurados por el órgano jurisdiccional estén conforme a la ley, comprobar que estén asegurados los instrumentos objeto de un delito entre otros. De la visita se levantará un acta circunstanciada, donde se asentará el desarrollo de la misma, así como quejas y denuncias que se hayan

---

<sup>241</sup> DOF: 17/09/2014 ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y deroga diversas disposiciones de los similares que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y que establece las disposiciones en materia de responsabilidades administrativas, situación patrimonial, control y rendición de cuentas. Disponible en [www.dof.gob.mx](http://www.dof.gob.mx), consultado 27 de agosto de 2015.

efectuado. Una copia del acta es entregada a los jueces o magistrados del tribunal correspondiente y al secretario ejecutivo de disciplina, para que en caso necesario se de vista al consejo, el cual ordenara la integración de comités de investigación, cuando se estime que existen elementos que hagan presumible la comisión de irregularidades por parte de algún juez<sup>242</sup>.

Al llevar a cabo una visita –inspección- las actas de visita serán levantadas por los Visitadores Judiciales, éstos deberían abstenerse de agregar al acta exhortaciones, requerimientos, apercibimientos, felicitaciones o cualquier consideración subjetiva respecto de la inspección practicada, concretándose, de ser el caso, a recomendar, cuando se advirtiera que en un proceso se venció el término para dictar sentencia, que ésta se pronunciara a la brevedad, así como indicar, en su caso, la corrección necesaria para que las suspensiones provisionales y definitivas no se prolongaran por más tiempo al señalado en la ley. Por otra parte, además de las actividades que desplegaran en cada inspección según lo señalado por la ley o por el Consejo de la Judicatura Federal en el acuerdo específico, habrían de:

a) Verificar el cumplimiento a las observaciones y prevenciones emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal en relación con la última visita, así como las recomendaciones e indicaciones que el Visitador hubiera realizado en la visita anterior; b) Tomar conocimiento de las quejas administrativas presentadas en contra del servidor público, por los litigantes, abogados postulantes o público en general; y, c) Recabar las quejas y observaciones del personal profesional y administrativo, de haberlas<sup>243</sup>.

Las disposiciones en materia de responsabilidades administrativas, situación patrimonial, control y rendición de cuentas están regulados en los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal<sup>244</sup>.

d) *Contraloría del Poder Judicial de Federación*. Tiene a su cargo facultades de control y la inspección del cumplimiento de las normas de funcionamiento administrativo que rigen a los órganos judiciales, los servidores públicos y empleados de los tribunales federales con

---

<sup>242</sup> Artículo 99 al 102, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

<sup>243</sup> Acuerdo General 26/1997 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, *Ibíd.*

<sup>244</sup> Acuerdo General 17/01/2014 y 28/05/2015, *Ibíd.*

excepción de la Corte. Sus funciones de conformidad con el Artículo 104 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal son: vigilar los controles establecidos por el Consejo de la Judicatura; comprobar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación, presupuestos, ingresos, egresos, financiamiento, patrimonio y fondos; darle seguimiento al registro y evolución de la situación patrimonial de los servidores públicos del Poder Judicial Federal, a que se refiere la fracción VI del artículo 80 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores<sup>245</sup>; Inspeccionar y vigilar el cumplimiento de las normas relativas a los sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago del personal, contratación de servicios y recursos materiales del Poder Judicial, las demás que se establezcan en las leyes, reglamentos y acuerdos que al efecto se expidan.

El funcionario público tiene la responsabilidad de observar buena conducta y desempeñar su cargo con apego a los principios constitucionales y legales marcados por el orden jurídico, así como todas aquellas normas jurídicas que sean expidas en apego de lo previsto por el Artículo 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de suerte que, el servidor público que no se conduce conforme a las obligaciones legales que derivan de su función y competencia en el ejercicio de su función, serán objeto de investigación, procesamiento y la imposición de la sanción correspondiente. De acuerdo con la ley un servidor público puede incurrir en responsabilidad de tres tipos administrativa, civil y penal.

## **6. Organización Judicial Estatal o del Fuero Común.**

Al efectuar un ejercicio de identificación de los rasgos generales, que conforman la estructura normativa del orden jurídico mexicano, encontraremos que, el primero que la Constitución

---

<sup>245</sup> ARTÍCULO 80.- Tienen la obligación de presentar declaraciones de situación patrimonial, ante la autoridad competente, conforme a lo dispuesto por el artículo 79, bajo protesta de decir verdad, en los términos que esta Ley señala: (...) VI.- En el Poder Judicial Federal: Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Magistrados de Circuito, Jueces de Distrito, secretarios judiciales y actuarios de cualquier categoría o designación; VII. En el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, Magistrados y Secretarios o sus equivalentes; VIII. En el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en los tribunales de trabajo y en los demás órganos jurisdiccionales que determinen las leyes: Magistrados, miembros de junta y Secretarios o sus equivalentes; (...) El servidor público que en su declaración de situación patrimonial faltare a la verdad en relación con lo que es obligatorio manifestar en términos de esta Ley, será suspendido, y cuando por su importancia lo amerite, destituido e inhabilitado de tres meses a tres años. (...). Disponible en <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/115.pdf>, 17 de enero de 2011.

será la norma suprema que rige a todo el país, creando facultades, deberes, limitaciones, y concediendo derechos. El segundo de estos rasgos será el que, conforme al principio de supremacía constitucional no existe otro cuerpo normativo por encima de esta, partiendo de esta premisa -es decir hacia abajo- todo le es inferior, y tanto las leyes como los actos de autoridad deben apegarse a ella<sup>246</sup>. De acuerdo con estas bases el artículo 40 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos expresamente estableció el sistema federal<sup>247</sup>, previendo reglas claras para la aplicación en los ámbitos federal, local y también municipal, y por tanto sentando las bases para la existencia órganos jurisdiccionales y de un sistema judicial que garantice el respeto de las normas constitucionales y sus principios derivados<sup>248</sup>.

En razón de esta organización política, los Estados están investidos de facultades para constituir los órganos que ejerzan las funciones de gobierno al interior de los mismos, previendo las funciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En este tenor, los Estados del país diseñan la composición propia de sus sistemas judiciales, tanto en su estructura como en materia de competencias, -naturalmente en observancia- de los lineamientos trazados por la carta fundamental. Cabe señalar que la Constitución Mexicana no contiene prescripción alguna en lo que concierne a las bases estructurales de los tribunales en los Estados.

Ahora bien, si la función jurisdiccional implica el conocimiento y resolución de cualquier conflicto o controversia, que pueden ser de diversas materias, tales como civil, penal, administrativa o laboral, también los Estados tendrán facultad de otorgar a través de sus respectivos poderes legislativos, la organización y competencia de sus propios tribunales. Está claro que el único límite que tienen las entidades federativas respecto de la actuación de sus

---

<sup>246</sup> Cfr. Ortiz Mayagoitia, Guillermo I., *"El orden jurídico..."*, op.cit., p. 418.

<sup>247</sup> La organización política del Estado mexicano en una república, representativa, democrática, federal, formada por Estados libres y soberanos en cuanto a su régimen interior; unidos en una federación cuyas principios están previstos en la norma fundamental en sus artículos 40 y 122 respectivamente.

<sup>248</sup> "El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado, en jurisprudencia firme, que dichos órdenes son los siguientes: el orden federal, el local o estatal, el del Distrito Federal y el orden constitucional (...) Jurisprudencia Número PJ 95/99: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS DIVERSOS ÓRDENES JURÍDICOS ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL TIENEN AUTONOMÍA FUNCIONAL Y ASIGNACIONES COMPETENCIALES PROPIAS. Del contenido de los artículos 1º, 40, 41, primer párrafo, 43, 44, 49, 105, fracción I, 116, primero y segundo párrafo, 122, primero y segundo párrafos, 124 y 133, de la Constitución Federal, puede distinguirse la existencia de cuatro órdenes jurídicos dentro del Estado mexicano, a saber: el federal, el local o estatal, el del Distrito Federal y el constitucional. Cada uno de ellos cuenta con asignaciones competenciales propias que, por regla general, son excluyentes entre sí, contando con autonomía para su ejercicio a cargo de las autoridades correspondientes". En Ortiz Mayagoitia, Guillermo I., *"El orden..."*, op.cit., p. 419.



tribunales es estar ajustados a las disposiciones constitucionales, principalmente en lo relativo a los derechos y garantías fundamentales del gobernado en materia judicial. Particularmente en relación a los procesos de orden criminal la norma fundamental en general prohíbe la existencia de tres instancias; ningún estado puede organizar el conjunto de sus tribunales de modo que los procesos penales tengan que en cuatro o más instancias. Para los juicios en materia civil o administrativo sobre cuestiones no contenciosas en materia federal, las legislaturas locales tienen libertad para diseñar los órganos judiciales<sup>249</sup>.

De lo anterior se desprende que los tribunales de los Estados se organizan de acuerdo con las constituciones locales y las leyes orgánicas respectivas. Aunque no es posible efectuar una descripción a detalle de cada uno de ellos por ser 31 entidades federativas, que como ha quedado apuntado en líneas arriba, cada una de ellas tiene un diseño propio de su estructura y régimen jurisdiccional. Intentaremos hacer una descripción general, aspirando en dar una visión panorámica, para ofrecer una idea general de las facultades y competencias. Además de hacer evidente el complejo sistema jurisdiccional y procesal en México, calificado así por una parte importante de la doctrina mexicana. En este sentido estudiar cada una de ellas excedería con mucho los límites de este ejercicio académico.

La jurisdicción común en las entidades federativas se deposita en los Tribunales Superiores de Justicia del Estado correspondiente, de los jueces mixtos o unitarios de primera instancia, de los jueces de paz, menores o conciliadores y de tribunales para menores.

Unas de las capacidades que le corresponden al juez, se entienden como las atribuciones contenidas en la ley para que éste pueda conocer de un conflicto determinado, ahora bien, por lo que respecta a la materia penal abarca diversos aspectos, que podemos clasificar en dos: uno subjetiva y otro objetivo<sup>250</sup>. El primero sería el conjunto de requisitos establecidos por ley y que deben ser satisfechos para ejercer el cargo de juez; y, que cuando el órgano jurisdiccional tenga que conocer de un asunto en concreto, no esté impedido para ello. El segundo, son las limitaciones que pueden tener los tribunales para conocer de todo tipo de

---

<sup>249</sup> Cfr. Burgoa Orihuela, Ignacio, "*Derecho...*", op.cit., p.1006.

<sup>250</sup> Cfr. Barragán Salvatierra, Carlos, "*Derecho...*", op.cit., p.149.

delitos, tomando en cuenta, el lugar de su comisión, atendiendo a la división política que rige al país, que en definitiva tiene que ver con la competencia del órgano<sup>251</sup>.

En el derecho mexicano, la clasificación de la competencia de los tribunales, es definido según la materia, la persona, el lugar y en función de la conexidad<sup>252</sup>. La materia queda dispuesta por la clasificación que hace el legislador en cuanto al fuero común, federal, militar, administrativo, etc. La persona se justifica por las cualidades profesionales que pueda tener el sujeto, ser militar, funcionario público federal, legislador entre otros. El territorio, se define por el lugar donde se ha cometido el delito, en este escenario puede que existan varios jueces de la misma categoría, será competente el que haya prevenido primero y cuando se trate de delitos continuados<sup>253</sup>. Por último puede ejercerse la facultad de atracción por parte de los jueces federales y del Ministerio Público Federal, cuando se trate de delitos de asalto, secuestro, tráfico de menores entre otros previstos en el Artículo 3 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada<sup>254</sup>.

---

<sup>251</sup> Los tribunales de los Estados se componen por los jueces de paz para asuntos de menor cuantía cuyas resoluciones son normalmente inapelables; por jueces en materia civil y penal de primera instancia; por un órgano de apelación que recibe el nombre de Tribunal Superior de Justicia, con un número de salas y de magistrados que puede variar de acuerdo a la importancia del estado de que se trate. Queda claro que los tribunales ordinarios o del fuero común conocen de las controversias planteadas en aplicación de las leyes ordinarias expedidas por la legislatura correspondiente.

<sup>252</sup> Cfr. Barragán Salvatierra, Carlos, "*Derecho...*", op.cit., p.150.

<sup>253</sup> Las reglas generales en referencia a la comisión de delitos y la competencia de los tribunales, quedan previstas por el Código Federal de Procedimientos Penales en su artículo 6 señala que el tribunal que tiene autoridad para conocer del delito, será el del lugar en que se cometa, salvo lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero del artículo 10 del mismo cuerpo normativo. Artículo 6: Es tribunal competente para conocer de un delito, el del lugar en que se comete, salvo lo previsto en los párrafos segundo y tercero del artículo 10. Si el delito produce efectos en dos o más entidades federativas, será competente el juez de cualquiera de estas o el que hubiera prevenido; pero cuando el conflicto involucre como partes a indígenas y no indígenas, será tribunal competente el que ejerza jurisdicción en el domicilio donde radique la parte indígena. (...); (...) Artículo 10: (...) En caso de concurso de delitos, el Ministerio Público Federal será competente para conocer de los delitos del fuero común que tengan conexidad con delitos federales, y los jueces federales tendrán, asimismo, competencia para juzgarlos. También será competente para conocer de un asunto, un juez de distrito distinto al del lugar de comisión del delito, atendiendo a las características del hecho imputado, a las circunstancias personales del inculpado, por razones de seguridad en las prisiones o por otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso, cuando el Ministerio Público de la Federación considere necesario llevar el ejercicio de la acción penal ante otro juez. Lo anterior es igualmente aplicable para los casos en que, por las mismas razones la autoridad judicial, de oficio o a petición de parte, estime necesario trasladar a un procesado a algún centro de reclusión de máxima seguridad, en los que será competente el tribunal del lugar en que se ubique dicho centro (...).

<sup>254</sup> " Los delitos a que se refieren las fracciones I, II, III y IV del artículo anterior, que sean cometidos por algún miembro de la delincuencia organizada, serán investigados, perseguidos, procesados y conforme a las disposiciones de esta Ley. Los delitos señalados en las fracciones V y VII de dicho artículo lo serán únicamente si, además de cometerse por un miembro de la delincuencia organizada, el Ministerio Público de la Federación ejerce la facultad de atracción. En este caso, el Ministerio Público de la Federación y las autoridades judiciales

Sin embargo, en los términos del Artículo 104 de la Constitución Mexicana también deciden sobre jurisdicción concurrente, es decir sobre conflictos derivados de la aplicación de normas de orden federal, que afecten intereses particulares<sup>255</sup>. Pues de un mismo asunto puede conocer un tribunal federal o uno del fuero común a elección del actor, siempre que se cumplan dos elementos: a) que verse sobre la aplicación y cumplimiento de leyes federales o de tratados internacionales, de donde deriva la competencia de los tribunales federales; b) que sólo afecten intereses particulares, de donde nace la posibilidad de la parte actora de elegir al órgano jurisdiccional que habrá de conocer su controversia.

Las reglas generales para la estructura del Poder Judicial respecto de los Estados las encontramos previstas en el artículo 116, fracción III, de la Constitución Mexicana, donde el marco constitucional deja al libre albedrío de aquellos, la forma e integración de los tribunales estatales, lo mismo que la fijación de las materias que le corresponde conocer en la resolución de conflictos que pueden ser sometidos a su jurisdicción. Sin embargo, a través del control de legalidad llevado a cabo por los jueces federales, los jueces locales se han convertido en tribunales de instrucción, convirtiendo a los tribunales federales en revisores de todo tipo de sentencias del fuero común<sup>256</sup>.

Por otra parte como advierte María del Pilar Hernández<sup>257</sup> es necesario precisar que ciertas condiciones dentro del sistema político mexicano han influido para la conformación de un federalismo centralizado, -dice la autora- que en las últimas décadas las estructuras del modelo federal se han visto fortalecidas, bajo el enfoque de funcionalidad, respeto efectivo de los ámbitos de competencia de los tres niveles.

---

federales serán las competentes para conocer de tales delitos. Bajo ninguna circunstancia se agravarán las penas en las legislaciones de las entidades legislativas". Las fracciones I, II, III y IV, previstos en este artículo 3, que a su vez remiten al artículo 2 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, se refieren a los delitos de terrorismo, acopio y tráfico de armas, y tráfico de indocumentados. Disponible en [www.cddhcu.gob.mx](http://www.cddhcu.gob.mx)

<sup>255</sup> Clasificados como tribunales no judiciales, pero con funciones de resolver conflictos, existen otros organismos que forman parte del poder judicial, aunque con atribuciones repartidas entre los Ejecutivos locales y de la Federación son los tribunales laborales, estructurados y organizados por la Ley Federal de Trabajo, estableciendo la formación de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje en cada uno de los Estados (...), cada entidad federativa ha establecido Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje para resolver los conflictos laborales locales; así también de los tribunales en materia fiscal, diseñados para resolver las conflictos de la hacienda pública y los Tribunales Agrarios que resuelven conflictos de reparto de tierras (...)

Véase, Fix Zamudio, Héctor, Favela Ovalle, José, VV.AA., "*Derecho Procesal...*", op.cit., p.1274 y ss.

<sup>256</sup> Cfr. Hernández, María del Pilar, "*Del federalismo...*", op.cit., p. 229

<sup>257</sup> Ibídem, p. 236.

En apoyo de este argumento dice Miguel Carbonell<sup>258</sup> que el federalismo en México ha supuesto la existencia de fuerzas distintas del poder central que tienen su propia sustantividad y como consecuencia reclaman un campo propio de acción. En este sentido para el poder jurisdiccional de los Estados es clara, la sujeción a diversos tipos de control –no sólo jurisdiccionales- sino político, administrativo y financiero, que desencadena el incumplimiento, intencional o no, de los fines asignados a la administración de justicia.

## **7. Competencias de los Tribunales Ordinarios.**

Para cumplir el objetivo de hacer una descripción panorámica, respecto de las competencias que le pertenecen al órgano judicial local, hemos elegido tomar como referencia los tribunales que residen en el Distrito Federal<sup>259</sup>. Esta elección no se refiere solamente a que sea la ciudad más importante del país, obedece también a que los Estados en su mayoría han seguido este modelo de organización en su estructura judicial y de facultades<sup>260</sup>. Con excepción de los que han modificado sus Leyes Orgánicas y Procesales, para adaptarlas al nuevo sistema judicial de modelo acusatorio, al que nos referiremos en el capítulo respectivo.

Según el Código de Procedimientos Penales y la Ley Orgánica de los tribunales de justicia del fuero común la función judicial se ejerce a través de Jueces de Paz del orden penal; Jueces Penales, y por el Tribunal Superior de Justicia<sup>261</sup>. Para el caso de los Jueces de Paz son designados por el Tribunal Superior de Justicia, ubicados en las distintas circunscripciones territoriales. Estos tribunales tiene autoridad para conocer de los proceso de orden penal, de

---

<sup>258</sup> Cfr. Carbonell, Miguel, *“El federalismo en México: principios generales y distribución de competencias”*, *Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano*, Edición 2003, Konrad-Adenauer-Stiftung A.C., Montevideo, Uruguay, p. 380.

<sup>259</sup> El artículo 619 del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, incluye en sus fracciones III y IV a los jueces de debates y al Jurado Popular, los que omitiremos en esta descripción primordialmente porque al Jurado Popular ya nos hemos referido en el apartado que precede y con respecto a los jueces de debates sus funciones están ligadas principalmente a éste. Disponible <http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/r189703.pdf>, 24 de Enero 2010.

<sup>260</sup> “Los órganos jurisdiccionales en los Estados Unidos Mexicanos tienen en cada estado, una estructura judicial particular, si bien no difieren fundamentalmente de la del Distrito Federal”, Cfr. Tomás Biosca Ezequiel, Betanzo Hernández Germán, *Nociones de Derecho Positivo Mexicano*, Editorial Porrúa, Primera Edición, México, 1996, p.212.

<sup>261</sup> De conformidad con la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común, los Códigos de Procedimientos Penales del Distrito Federal.

conformidad con a las competencias que para ello le otorguen la ley; practicar a petición del Ministerio Público, las diligencias que correspondan en la averiguación de los delitos que se comentan en el territorio de su jurisdicción; practicar las diligencias ordenadas por los Jueces de Primera Instancia que deban tener lugar en su jurisdicción territorial<sup>262</sup>. Conocerán sólo del procedimiento sumario en los delitos que tengan sanción de apercibimiento, multa, o pena de prisión que no exceda de dos años.

Respecto de los Jueces Penales, éstos son designados por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, que tienen la autoridad para cambiar a los jueces de una categoría a otra. Los jueces contarán con secretarios desempeño de sus funciones, encargándose de las promociones tramitadas ante el juzgado, dando cuenta al juez de los asuntos, el trámite y práctica de diligencias y notificaciones. El Ministerio Público es el que realiza las consignaciones ante el juez en turno, para que este lleve a cabo el procedimiento de instrucción, hasta la sentencia que al efecto se pronuncie.

El Tribunal Superior de Justicia está integrado por magistrados, que al igual que la Corte funcionan en Pleno o en Salas, éstas se encuentran divididas por materias civiles, penales y en algunas entidades federativas salas familiares. Este órgano jurisdiccional funciona como tribunal de apelación, pues los magistrados de las Salas tienen autoridad para conocer de las apelaciones interpuestas en contra de resoluciones pronunciadas por los jueces de primera instancia; incidentes en materia civil, competencia entre juzgados; impedimentos y recusaciones en materia penal; de las contiendas de acumulación entre jueces.

Como excepción también las salas de apelación en materia penal tienen competencia para conocer del juicio de amparo indirecto por las violaciones limitadas establecidas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, esto es lo que se conoce como jurisdicción concurrente. Un principio consustancial del sistema jurídico-político en México, es el principio de supremacía constitucional el cual descansa en la expresión primaria de la soberanía en la expedición de la Constitución, colocada ésta por encima de todas las leyes y de todas las autoridades, de ahí que las actuaciones de éstas deben ajustarse estrictamente a las disposiciones de aquélla. En este sentido, más que una facultad, la supremacía constitucional impone a toda autoridad el deber de ajustar a los preceptos fundamentales, los actos desplegados en ejercicio de sus

---

<sup>262</sup> 628 y 629 Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.

atribuciones. Por tanto, si bien es cierto que los tres Poderes de la Unión deben sujetarse al ordenamiento constitucional, no puede afirmarse que por esta razón, las autoridades puedan, por sí y ante sí, en el ejercicio de funciones materialmente jurisdiccionales, examinar la constitucionalidad de sus propios actos o de los ajenos, toda vez que, al respecto, la propia Constitución consagra, en sus artículos 103 y 107, un medio de defensa expreso, por vía de acción, como es el juicio de amparo y lo encomienda, en exclusiva, al Poder Judicial de la Federación, sentando las bases de su procedencia y tramitación<sup>263</sup>.

En este orden de ideas, por disposición de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo representa un medio de defensa expreso, por vía de acción, que se encuentra constitucionalmente encomendado, en exclusiva, al Poder Judicial de la Federación, por lo que ninguna otra autoridad podría conocer de aquél; sin embargo, del referido artículo 107, fracción XII, así como de la interpretación sistemática por parte de la Corte Mexicana de diversos artículos relativos al trámite del amparo indirecto y, especialmente, de los numerales 37 y 156 de la Ley de Amparo, se advierte la posibilidad de una excepción a dicho principio de control difuso o concentrado de la constitucionalidad, pues tratándose de la jurisdicción concurrente, del juicio constitucional puede conocer un tribunal de segunda instancia del orden penal perteneciente a una estructura diversa del Poder Judicial de la Federación, como puede ser una Sala Penal de un Poder Judicial Estatal<sup>264</sup>.

Resulta importante precisar el cambio de paradigma que en materia de derechos humanos, y de control de constitucionalidad y de convencionalidad, se ha establecido para todos los órganos judiciales federales, llámese jueces de distrito, y tribunales de circuito, además de los jueces ordinarios –del fuero común– con motivo de la reforma constitucional de 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos<sup>265</sup>. Este cambio constitucional dispuso en el

---

<sup>263</sup> Tesis: P./J. 73/99, Semanario Judicial de la Federación, disponible en [www.scjn.gob.mx](http://www.scjn.gob.mx), consultado el 29 de agosto d 2015.

<sup>264</sup> Tesis: XIX.1o.P.T.18 K, Ibídem.

<sup>265</sup> “el contexto evolutivo de la incorporación de los tratados internacionales sobre derechos humanos al orden interno. Para comprender frente a qué nos encontramos debemos atender a una realidad clarísima y previa: las normas contenidas en los tratados internacionales son obligaciones preexistentes para los Estados una vez que éstos se ha ratificado. Este es el momento fundamental de vinculación; de manera que cuando se hacen reformas constitucionales para su armonización se está facilitando la aplicación y reglas de juego interpretativas, el diálogo jurisprudencial, pero el protagonismo esencial lo tiene la ratificación de los instrumentos. Sin embargo, en México pareciera que los avances constitucionales en materia de derechos humanos traen aparejadas realidades novedosas...el resto de aproximaciones que contribuyen a la

segundo párrafo del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que respecto de las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales en la materia<sup>266</sup>, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia –principio pro persona-<sup>267</sup>, y que las condiciones para su ejercicio por parte de estos tribunales federales en estas materias será ex-officio, es decir deberán ser atendidas de manera oficiosa.

---

armonización en sede interna de la norma internacional, incluida su relevancia constitucional, van conformando una secuencia de pasos que permiten una mejor y más amplia aplicación. Me refiero a los siguientes aspectos: la aceptación de la competencia contenciosa de las jurisdicciones internacionales, la incorporación de los tratados internacionales sobre derechos humanos al orden jurídico nacional, la relevancia constitucional de los tratados internacionales sobre derechos humanos, la incidencia de la jurisprudencia de los tribunales internacionales sobre derechos humanos...”. Cfr. Caballero Ochoa, José Luis, *La Interpretación Conforme, El modelo constitucional ante los Tratados Internacionales sobre los Derechos Humanos y el Control de Convencionalidad*, Primera Edición, Editorial Porrúa, Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, México, D.F., 2013-2014, p. 14 y 15, Véase también García Ramírez, Sergio y Castañeda Hernández, Mireya (Coord.), *Recepción nacional del derecho internacional de los derechos humanos y admisión de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana*, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Secretaría de Relaciones Exteriores, Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2009,

<sup>266</sup> “El segundo párrafo del artículo 1º constitucional prevé un mandato interpretativo en materia de derechos humanos. Se trata de la constitucionalización de un criterio o principio hermenéutico específico de los derechos fundamentales, que de manera poco clara y aislada venía realizando la Suprema Corte en los últimos años. Pauta interpretativa que se suma a la prevista por el propio texto fundamental en el párrafo cuarto del artículo 14 constitucional para los “juicios del orden civil”, así como los criterios de interpretación aceptados por nuestro más alto tribunal vía jurisprudencial...los destinatarios de esta cláusula constitucional son todos los intérpretes de las normas en materia de derechos humanos, sean autoridades o particulares. Todas las autoridades del Estado mexicano, dentro de sus competencias, tienen que seguir este criterio interpretativo. Esto implica que los jueces deben acudir a esta técnica de interpretación en todo caso relacionado con normas de derechos humanos en los asuntos de su competencia; los legisladores tendrán que adecuar la normativa existente utilizando este criterio y aplicarlo como parte de la técnica legislativa al emitir la norma; y todos los órganos de la administración pública deberán ajustar su actuación conforme a la nueva pauta interpretativa de derechos humanos, especialmente cuando se trate de restricción de los mismos”. Cfr. Mac-gregor, Eduardo, *“La Interpretación Conforme y Control Difuso de Convencionalidad...”*, op.cit., p.553-554, Véase Los derechos humanos en la actividad jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, SCJN-Alto Comisionado de Naciones Unidas, Tomo II, Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, SCJN, México, D.F., 2010 disponible en [www.hchr.org.mx](http://www.hchr.org.mx), consultado el 3 de diciembre 2014.

<sup>267</sup> “El principio “pro persona” implica favorecer en todo tiempo a las personas la protección más amplia; lo que significa interpretación más estricta cuando se trate de restricción o limitaciones a derechos y libertades. En realidad, este principio goza de rango constitucional por lo dispuesto en el primer párrafo del mismo artículo 1º constitucional, toda vez que se encuentra previsto en el artículo 29 del Pacto de San José. De ahí que los parámetros interpretativos de dicho precepto deben considerarse en la cláusula de interpretación conforme regulado en el segundo párrafo aludido. Así lo previsto en el numeral 29 de la CADH relativo a que ninguna disposición de ese tratado puede interpretarse para excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que deriven de la forma democrática representativa de gobierno o excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza o limitar el goce y el ejercicio de cualquier derecho o libertad, deben considerarse en la interpretación conforme que se realice en los términos del artículo 1º constitucional”. Ibídem, p.557-558.

Cabe señalar también, que este nuevo paradigma de constitucionalidad y convencionalidad se actualiza no solamente para la labor jurisdiccional de los Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito cuando el órgano jurisdiccional advierta que una norma contraviene derechos humanos contenidos en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, también se materializa para el resto de órganos jurisdiccionales en materia ordinaria, -es decir, los órganos jurisdiccionales, locales- , aun cuando la constitucionalidad de la norma o disposición no haya sido impugnada, de acuerdo con la citada reforma se entiende que con este ejercicio oficioso se garantiza la prevalencia de los derechos humanos frente a las normas ordinarias que los contravengan. No se debe ignorar que el nuevo artículo primero constitucional, establece como premisa la obligación de todas las autoridades para promover, respetar, proteger y garantizar, los derechos humanos, incluyendo aquellos que están previstos en fuente nacional e internacional, por lo que la interpretación conforme que se realice, obliga a considerar esta previsión para optimizar en todo momento la protección más amplia.

## **Capítulo II: Génesis de la Estructura y Método de Enjuiciamiento Penal.**

¿Existen líneas maestras para la configuración del proceso penal conforme a las exigencias propias de un Estado democrático constitucional de derecho?, ¿Son exigibles por igual los principios procesales que informan los enjuiciamientos penales actuales?



¿Cuáles son los ámbitos que, lejos de tal presupuesto, pertenecen al marco de la mera opción política criminal?, ya que de las respuestas que obtengamos deben surgir el conjunto de principios “no negociables”, es decir aquellos que protejan los derechos y garantías que son irrenunciables tendientes articular el proceso penal. La exigencia al emprender una empresa de esta naturaleza supondrá salvaguardar el principio de igualdad, el principio de audiencia y contradicción; el derecho de defensa y las garantías que derivan de esta, el principio acusatorio demanda la necesidad de una acción, la correlación entre la acusación y la sentencia, la prohibición de *reformatio in peius*; así como la presunción de inocencia; la doble instancia penal, la oralidad; intermediación y la publicidad.

Como puede advertirse no es exagerado –dice Díez-Picazo<sup>268</sup>– afirmar que el modo en que un Estado regula el ordenamiento de la titularidad y el ejercicio de la acción penal poseen una innegable relevancia constitucional en dos sentidos. Porque por un lado se produce una afectación en las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, y segundo porque entraña un problema de reparto de atribuciones y control del poder dentro del propio aparato del Estado. El autor razona como problema jurídico-político básico, a quien se le otorga y deposita la titularidad como el ejercicio de la acción penal aspectos que deben examinarse no solo desde una perspectiva procesal, sino también desde la perspectiva constitucional del fundamento, organización y los límites del poder.

Una vez establecido que la Constitución Política es quien organiza el régimen bajo el cual se conduce la vida jurídica nacional, en todos sus ámbitos, en cada uno de los aspectos que conforman al Estado, encontramos reglas que determinan los perfiles de las instituciones normadas por aquella. Lo cual es útil para efectos de nuestro estudio, porque nos permitirá tener una perspectiva clara del proceso penal mexicano. Es así como la carta fundamental mexicana además de crear a los órganos del Estado, y sus instituciones también fija las actividades de los mismos.

Nuestro enfoque será explicar los fundamentos constitucionales que sostienen el sistema de procesamiento penal, desarrollados por el orden normativo secundario. En lo relativo al proceso en concreto, en cuanto al método empleado dentro de la ingeniería procesal, ésta se

---

<sup>268</sup> Cfr. Díez-Picazo, Luís María, *El Poder de Acusar, Ministerio Fiscal y Constitucionalismo*, Primera edición, Editorial Ariel, Barcelona, España, 2000, p. 11 y 12.

caracterizó por ser principalmente escrito con algunos matices de oralidad, pero una parte de la doctrina lo clasifica dentro de los sistemas de procesamiento inquisitivo o mixto<sup>269</sup>, hasta la reforma constitucional de 2007-2008 en el que se modifica el modelo del proceso penal para

---

<sup>269</sup> Véase Colín Sánchez, Guillermo, *Derecho Mexicano de Procedimientos Penales*, Tercera Edición, Editorial Porrúa, México, D.F., 1974, p.75 y ss., Polanco Braga, Elías, *"El Nuevo Sistema de Enjuiciamiento Penal Mexicano"*, en Cultura Jurídica de los Seminarios de la Facultad de Derecho, número 4, octubre-diciembre 2011, Editada por la Facultad de Derecho de la UNAM, México, D.F., 2011, p. 167-175, González Macías, P.; Herrera Izaguirre, J.; López Díaz, L.; García Govea, M. y Gaona Tovar, T.: *"Comentarios sobre el sistema inquisitivo y el sistema acusatorio: camino a los juicios orales"*, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, disponible en: [www.eumed.net/rev/cccss/16/](http://www.eumed.net/rev/cccss/16/) diciembre 2011.

adoptar un sistema acusatorio-oral<sup>270</sup>. Es importante mencionar que a la fecha existen estados de México que han cambiado sus legislaciones procesales<sup>271</sup>, tanto adjetivas como

---

<sup>270</sup> Entre el 29 de septiembre de 2006 y el 4 de octubre del 2007, las fracciones parlamentarias del PAN, PRI y PRD al interior del Congreso de la Unión presentaron respectivamente iniciativas de decreto para reformar los artículos 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73, 115 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales fueron turnadas a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia, de Gobernación; de seguridad pública; y de estudios legislativos. En sesión celebrada en la Cámara de Diputados el día 12 de diciembre de 2007, se aprobó el dictamen que reformo, adicionó y derogó diversas disposiciones de la Constitución Mexicana, en materia de justicia penal y seguridad pública Dictamen de 1ra. Lectura. 1ra.Vuelta. DIPUTADOS 12/DIC/2007. En razón de su contenido todas las iniciativas fueron dictaminadas de manera conjunta. Con fecha 13 de diciembre 2007 la Mesa Directiva del Senado de la República acordó dispensar el trámite convencional, para turnar directamente a las Comisiones, de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente DICTAMEN DE 1RA. LECTURA SENADO. 13/DIC/07. Esta comisión parlamentaria presenta un proyecto de decreto donde el proponente señala que en México, los niveles de impunidad y la inseguridad pública se han incrementado en los últimos años, lo que dificulta el desarrollo político, económico y social de país, sembrando incertidumbre, temor generalizado en la sociedad y provoca desconfianza en las instituciones del Estado además de que obstaculiza el pleno desarrollo individual de los miembros de la sociedad. El dictamen abunda en el sistema prevalece hasta ese momento en el país fue concebido en una época distinta a la que se vive hoy. La globalización y las nuevas tecnologías han modificado no sólo las necesidades y los intereses de los distintos grupos que conforman la sociedad, sino sus actividades y valores así como los medios e instrumentos a través de los cuales los miembros de la sociedad interactúan y se comunican. Por todo esto estiman fundamental una revisión profunda a las instituciones mexicanas encargadas de la procuración y administración de justicia y la legislación respectiva, a fin de hacer frente a las formas que la delincuencia ha adoptado. En necesario lograr que la sociedad recupere la confianza en sus instituciones; además de estimar fundamental contar con un sistema de justicia penal en el que se establezcan como principio, que la sanción sea proporcional a la conducta y que la víctima tenga a su alcance los elementos y medios eficaces para ser restituido el agravio ocasionado. Respecto de la reestructuración del sistema de justicia penal, la iniciativa propone analizar y tomar como punto de referencia la experiencia internacional y a la de Oaxaca, Chihuahua, Estado de México y Nuevo León, que han abordado la problemática con gran responsabilidad, aterrizando reformas legislativas para agilizar los procedimientos penales y facilitar la restitución de los derechos de las víctimas y ofendidos. Uno de los problemas que se analiza en el dictamen es el problema de la delincuencia organizada, estableciendo mecanismos a través de los cuales el Ministerio Público puede actuar con mayor eficiencia y eficacia en sus tareas de investigación, principalmente aquellos que se refieren al establecimiento de medidas cautelares tales como cateos, arraigos, intervenciones telefónicas, etc. También plantea la posibilidad de que el Estado pueda aplicar a su favor, bienes respecto de los cuales existan datos suficientes para considerar que son instrumentos, objeto o producto de actividades de la delincuencia organizada. Se propone un sistema garantista, en el que se respeten los derechos tanto de la víctima y ofendido, como del imputado, partiendo de la presunción de inocencia para este último. Tal sistema se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, con las características de acusatoriedad y oralidad; la primera, para asegurar una trilogía procesal en la que el ministerio público sea la parte acusadora, el inculpado esté en posibilidades de defenderse y que al final, sea un juez quien determine lo conducente; la segunda, que abonará a fomentar la transparencia, garantizando al mismo tiempo una relación directa entre el juez y las partes, propiciando que los procedimientos penales sean más ágiles y sencillos. Cfr. Reforma Constitucional en Materia de Justicia Penal y Seguridad Pública, Proceso Legislativo, 18 de junio de

sustantivas para adaptarlos a la reforma constitucional mencionada. Se ordenó así a través del régimen de transitoriedad que acompañó a la reforma constitucional que estableció las disposiciones de la entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de lo dispuesto en los artículos transitorios. Estos artículos establecieron la mecánica para la puesta en marcha del nuevo sistema de justicia penal.

Así el sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimoquinto; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años, contado a partir del día siguiente de la publicación de este decreto reformista. En consecuencia, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán expedir y poner en vigor las modificaciones u ordenamientos legales que sean necesarios a fin de incorporar el sistema procesal penal acusatorio. La Federación, los Estados y el Distrito Federal adoptarán el sistema penal acusatorio en la modalidad que determinen, sea regional o por tipo de delito.

En el momento en que se publiquen los ordenamientos legales a que se refiere el régimen de transitoriedad previsto en decreto reformista, los poderes u órgano legislativos competentes deberán emitir, asimismo, una declaratoria que se publicará en los órganos de difusión oficiales, en la que señale expresamente que el sistema procesal penal acusatorio ha sido incorporado en dichos ordenamientos y, en consecuencia, que las garantías que consagra esta Constitución empezarán a regular la forma y términos en que se substanciarán los procedimientos penales.

---

2008, Subdirección de archivo y documentación, Palacio Legislativo de San Lázaro, México, D.F., disponible en: [www.diputados.gob.mx](http://www.diputados.gob.mx), consultado 28 de agosto de 2015.

<sup>271</sup> Baja California, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Estado de México, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán. En tanto, en nivel intermedio se encuentran Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Hidalgo, Quintana Roo, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas, mientras que en las 10 entidades federativas restantes se registra un “nivel crítico” por su atraso en la ejecución de la reforma penal. Información obtenida de comunicación social del Senado de la República. Disponible en [www.comunicación.senado.gob.mx](http://www.comunicación.senado.gob.mx), de fecha 16 de mayo del 2014.

Algunos de las modificaciones a los códigos adjetivos penales fueron anteriores a la reforma de la constitución, otras posteriores, que comentaremos más adelante en el capítulo respectivo. Cabe aclarar que existen estados de México que continúan organizados bajo el sistema penal tradicional considerado sistema de procesamiento penal inquisitivo o mixto atendiendo al régimen de transitoriedad establecido por la propia reforma constitucional.

Como primera aproximación al modelo de procesamiento penal, hay que decir que en la Constitución Mexicana se determinan los mecanismos para proceder desde el momento mismo de la comisión de un delito, organizando las dos hipótesis que pudieran presentarse; bien que el responsable de la comisión de un delito se encuentre frente a su obra, es decir en el momento mismo de su consumación, o bien hayan transcurrido tiempo entre la comisión del ilícito y el conocimiento de la autoridad.

El artículo 16 constitucional dispone las bases procesales conforme a las cuales todas las autoridades del estado deben proceder, conforme al principio de legalidad referido en el precepto de antecedentes, en el cual se advierten los requisitos de mandamiento escrito, autoridad competente, fundamentación y motivación. Estas garantías constitucionales, tienen el carácter de instrumentales porque, a su vez, revelan la adopción dentro del régimen jurídico nacional del principio constitucional de legalidad, como una garantía del derecho humano a la seguridad jurídica, acorde a la cual las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo que expresamente les facultan las leyes, en el entendido de que son la Constitución y el orden jurídico que de ésta emana la manifestación de la voluntad general<sup>272</sup>. Además expresamente prescribe que a ninguna persona podrá privarse de la

---

<sup>272</sup> “Bajo esa premisa, el principio mencionado tiene una doble funcionalidad (...) por un lado, impone un régimen de facultades expresas en el que todo acto de autoridad que no represente el ejercicio de una facultad expresamente conferida en la ley a quien lo emite, se considerará arbitrario y, por ello, contrario al derecho a la seguridad jurídica, lo que legitima a las personas para cuestionar la validez de un acto desajustado a las leyes (...) Así, el principio de legalidad, apreciado en su mayor amplitud, da cabida al diverso de interdicción de la arbitrariedad, pero también conlleva que éste opere a través de un control jurisdiccional, lo que da como resultado que no basta que el gobernado considere que determinado acto carece de fundamentación y motivación para que lo estime no obligatorio ni vinculante o lo señale como fuente de un derecho incontrovertible a una sentencia que lo anule, sino que, en todo caso, está a su cargo recurrir a los órganos de control a hacer valer la asumida ausencia o insuficiencia de fundamento legal y motivación dentro de dicho procedimiento y, a su vez, corresponderá a la autoridad demostrar que el acto cuestionado encuentra sustento en una facultad prevista por la norma, so pena de que sea declarado contrario al derecho a la seguridad jurídica, lo que revela que los procedimientos de control jurisdiccional,

libertad, sino en virtud de mandamiento escrito, expedido por autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento, esto es que medie acusación formal contra el imputado, que los hechos sean constitutivos de delito, sancionado con pena corporal, y que dicha acusación se haga acompañar de información bastante que acredite la probable responsabilidad de quien se acusa.

En el sistema jurídico mexicano las restricciones a la libertad de los individuos, sólo pueden tener lugar en los casos y condiciones reguladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, a partir del estricto cumplimiento de determinados requisitos y garantías, pues en caso contrario, se estará ante una medida arbitraria o ilegal -detención o privación ilegal de la libertad-; principio que se observa en el artículo 16, párrafo cuarto, constitucional, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008 (actualmente párrafo quinto), que establecía que en caso de delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público, entendiéndose por flagrancia, cuando el indiciado es sorprendido en el momento en que está cometiendo el delito; postulado que coincide con los artículos 9, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 7, numerales 2 y 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos<sup>273</sup>.

Respecto al proceso de enjuiciamiento penal hay que detallar las estructuras institucionales que hacen funcionar y contribuyen al desarrollo del proceso en sí mismo. Así, al presentarse la privación de libertad de una persona imputada por la comisión de un delito, posteriormente a la detención será puesto a disposición del Ministerio Público –Fiscal-<sup>274</sup>.

---

constituyen la última garantía de verificación del respeto al derecho a la seguridad jurídica, cuyas reglas deben ser conducentes y congruentes con ese propósito”. PRINCIPIO DE LEGALIDAD. CARACTERÍSTICAS DE SU DOBLE FUNCIONALIDAD TRATÁNDOSE DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y SU RELACIÓN CON EL DIVERSO DE INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD Y EL CONTROL JURISDICCIONAL. Tesis: IV.2o.A.51 K (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Disponible en [www.scjn.com.mx](http://www.scjn.com.mx), consultada el 15 de Enero 2015.

<sup>273</sup> DETENCIÓN EN FLAGRANCIA DEL INCUPLADO. CASO EN EL QUE NO VIOLA LOS DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL; 9, NUMERAL 1, DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS Y 7, NUMERALES 2 Y 3, DE LA CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, CUANDO SE REALIZA POR POLICÍAS CON MOTIVO DE LA DENUNCIA QUE PRESENTA LA VÍCTIMA DEL DELITO. Tesis: III.4o.(III Región) 7 P (10ª), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Disponible [www.scjn.com.mx](http://www.scjn.com.mx), consultada el 15 de Enero 2015.

<sup>274</sup> De conformidad con el artículo 16, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como con los artículos 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 7 de la

Luego el acusado informado de su derecho a declarar y, podrá ser interrogado por el Agente del Ministerio Público siempre en presencia de su defensor, procediendo esta autoridad de investigación a la revisión de pruebas materiales que se hayan obtenido durante la detención, o bien como consecuencia de la comisión del delito<sup>275</sup>. Luego, el fiscal procede a

---

Convención Americana sobre Derechos Humanos, la limitación a la libertad personal con motivo de la detención por flagrancia, implica que toda persona detenida bajo esa hipótesis sea puesta sin demora a disposición de la autoridad ministerial. El reconocimiento y protección de este derecho fundamental conlleva una trascendencia especial, pues el escrutinio estricto posterior a la detención se dirige precisamente a verificar que no hubo una privación ilegal de la libertad que, de actualizarse, provocaría invalidar la detención, así como datos de prueba obtenidos con motivo de la misma, además que ello deberá desencadenar el reproche y la exigencia de responsabilidad a los agentes captores. Así, en términos estrictamente constitucionales, el agente que detenga al imputado por la comisión de un delito en flagrancia, tiene obligación de ponerlo sin demora ante el ministerio público, esto es, sin retraso injustificado o irracional. Ahora bien, las consecuencias y efectos de la vulneración al derecho humano de libertad personal, con motivo de la retención indebida, deben vincularse estrictamente con su origen y causa; lo que implica que si la prolongación injustificada de la detención generó la producción e introducción de datos de prueba, éstos deben declararse ilícitos, lo mismo que las diligencias pertinentes se hayan realizado en condiciones que no permitieron al inculcado ejercer el derecho de defensa adecuada, de conformidad con los principios de debido proceso y obtención de prueba lícita. Tesis: 1a. CCII/2014 (10a.), Semanario Judicial de la Federación, *Ibíd.*

<sup>275</sup> Cuando el inculcado fuese detenido o se presentare voluntariamente ante el Ministerio Público Federal, se procederá de inmediato en la siguiente forma: I.- Se hará constar por quien haya realizado la detención o ante quien aquél haya comparecido, el día, hora y lugar de la detención o de la comparecencia, así como, en su caso, el nombre y cargo de quien la haya ordenado. Cuando la detención se hubiese practicado por una autoridad no dependiente del Ministerio Público, se asentará o se agregará, en su caso, la información circunstanciada suscrita por quien la haya realizado o haya recibido al detenido; II.- Se le hará saber la imputación que existe en su contra y el nombre del denunciante o querellante; III.- Se le harán saber los derechos que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, particularmente en la averiguación previa, de los siguientes: a) No declarar si así lo desea, o en caso contrario, a declarar asistido por su defensor; b) Tener una defensa adecuada por sí, por abogado o por persona de su confianza, o si no quisiere o no pudiere designar defensor, se le designará desde luego un defensor de oficio; c) Que su defensor comparezca en todos los actos de desahogo de pruebas dentro de la averiguación; d) Que se le faciliten todos los datos que solicite para su defensa y que consten en la averiguación, para lo cual se permitirá a él y su defensor consultar en la oficina del Ministerio Público y en presencia del personal, el expediente de la averiguación previa; e) Que se le reciban los testigos y demás pruebas que ofrezca y que se tomarán en cuenta para dictar la resolución que corresponda, concediéndosele el tiempo necesario para ello, siempre que no se traduzca en entorpecimiento de la averiguación y las personas cuyos testimonios ofrezca se encuentren en el lugar donde aquélla se lleva a cabo. Cuando no sea posible el desahogo de pruebas, ofrecidas por el inculcado o su defensor, el juzgador resolverá sobre la admisión y práctica de las mismas; y f) Que se le conceda, inmediatamente que lo solicite, su libertad provisional bajo caución, conforme a lo dispuesto por la fracción I del artículo 20 de la Constitución y en los términos del párrafo segundo del artículo 135 de este Código. Para efectos de los incisos b) y c) se le permitirá al indiciado comunicarse con las personas que él solicite, utilizando el teléfono o cualquier otro medio de comunicación del que se pueda disponer, o personalmente, si ellas se hallaren presentes. De la información al inculcado sobre los derechos antes mencionados, se dejará constancia en las actuaciones. IV.- Cuando el detenido perteneciere a un pueblo o comunidad indígena o fuere extranjero, que no hable o no entienda suficientemente el español, se le designará un traductor que le hará saber los derechos a que se refiere la fracción anterior. Tratándose de indígenas, el traductor y el defensor que deberán asistirle, deberán tener además conocimiento de su lengua y cultura. Si se tratare de un extranjero, la detención se comunicará de

interrogar a los testigos de haberlos; al propio detenido, y de ser necesario hará uso de los servicios periciales respectivos. Posteriormente, el Agente del ministerio público levantará un acta, en la que por escrito dará cuenta de todo lo actuado hasta ese momento y, según el artículo 16 constitucional, ordenar la detención del imputado si hubiere encontrado elementos suficientes para hacer probable su responsabilidad. Por último el ministerio público tiene la obligación de ponerlo a disposición del órgano jurisdiccional respectivo, a esta etapa –según el modelo procesal tradicional- se le llama acto de consignación, conforme al este sistema de procesamiento penal<sup>276</sup>.

Una vez que el delito ha sido cometido hasta la imposición de la sanción por parte del Juez, es exclusivamente competencia del Ministerio Público la acción persecutoria, de acuerdo con el Artículo 21 Constitucional. Según el Artículo 21 de la Constitución Mexicana<sup>277</sup> y las leyes orgánicas tanto de la Procuraduría General de la República<sup>278</sup>, como de los Ministerios Públicos de los estados, disponen que a esta institución le corresponde llevar a cabo las actividades investigadoras tendientes a comprobar la comisión de los hechos delictivos; acreditar la responsabilidad a quien se imputan, y ponerlos a disposición de la autoridad judicial competente.

De acuerdo con el artículo 19 constitucional<sup>279</sup>, una vez que el imputado ha sido privado de su libertad y puesto a disposición del Ministerio Público se ordena que ninguna detención exceda de setenta y dos horas sin justificarse con un auto de formal prisión, -conforme a la

---

inmediato a la representación diplomática o consular que corresponda, y V.- En todo caso se mantendrán separados a los hombres y a las mujeres en los lugares de detención o reclusión. Artículo 128 Código Federal de Procedimientos Penales, disponible en [www.cddhcu.gob.mx](http://www.cddhcu.gob.mx), consultado el 29 de Agosto de 2015.

<sup>276</sup> Actualmente en México persisten algunos estados donde el procedimiento penal no se sigue conforme a la reglas establecidas por la Reforma Constitucional de 2008, que instauro el modelo acusatorio oral, los estados que aún se organizan conforme al anterior sistema de enjuiciamiento penal se le denomina sistema tradicional. Cfr. Arilla Bas, Fernando, *“El Procedimiento Penal en México”*, Manual del Abogado Penalista, Editores Mexicanos Unidos, Cuarta Edición, México, D.F., 1973, p.73 y ss.

<sup>277</sup> “Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público...”.

<sup>278</sup> “Artículo 4. Corresponde al Ministerio Público de la Federación: I. Investigar y perseguir los delitos del orden federal...”. Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

<sup>279</sup> “Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión...”.



reforma constitucional de 2008 se le llama “auto de vinculación a proceso”- en el que deben fijarse la evidencia plena de los elementos constitutivos del delito y los hechos bastantes que justifiquen la responsabilidad del inculpado.<sup>280</sup> De tal suerte que, de no presentarse estos requisitos *sine quan non*, se debe poner en inmediata libertad a la persona, y de excederse en el término de la detención habrá responsabilidad para los jueces. En este sentido el Código Penal Federal en su artículo 225 señala que son delitos contra la administración de justicia, fracción XVII “no dictar auto de formal prisión o de libertad de un detenido, dentro del término de setenta y dos horas siguientes a que pongan a su disposición al procesado, la sanción para el juez que incurra en este supuesto será la destitución e inhabilitación para desempeñar cualquier cargo público por tres a 10 años, además de la imposición de penas de prisión de cuatro a 10 años y multa de mil a dos mil días de salario mínimo<sup>281</sup>.

Por otra parte, el artículo 20 constitucional establece los derechos y garantías que asisten al acusado en su derecho de defensa. El precepto fija un plazo de setenta y dos horas para que el acusado sea consignado, –este acto consignatario- pondrá en conocimiento de los hechos mediante audiencia pública de los hechos que se le atribuyen y el nombre de su acusador; posteriormente se le toma declaración preparatoria; se hará la recepción de testigos y el ofrecimiento de pruebas de descargo. Se prescribe igualmente, el derecho que le asiste al inculpado para nombrar un defensor, y que de no hacerlo se le designe uno de oficio. En este estadio procesal, serán ofrecidas las pruebas de cargo o de descargo, por parte del Ministerio Público, detenido y defensor. Una vez transcurridas las setenta y dos horas, la autoridad jurisdiccional deberá resolver la consistencia de la detención y del delito correspondientemente, así como de la responsabilidad del mismo o bien decretar la libertad sin cargos<sup>282</sup>.

---

<sup>280</sup> Cfr. Arilla Bas, Fernando, “*El Procedimiento...*”, op.cit., p.77.

<sup>281</sup> Artículo 225, fracción XVII, y XXXIV tercer párrafo, del Código Penal Federal, disponible en [www.cddhcu.gob.mx](http://www.cddhcu.gob.mx) consultado el 28 de agosto de 2015.

<sup>282</sup> Cfr. Arilla Bas, Fernando, “*El Procedimiento...*”, op.cit., p.81; “...el Ministerio Público ejercitará la acción penal ante los tribunales y expresará, sin necesidad de acreditarlo plenamente, la forma de realización de la conducta, los elementos subjetivos específicos cuando la descripción típica lo requiera, así como las demás circunstancias que la ley prevea. No obstante lo dispuesto por la Fracción II del artículo 15 del Código Penal Federal, el Ministerio Público podrá ejercitar la acción penal en los términos del párrafo precedente y, en su caso, las excluyentes del delito que se actualicen por la falta de los elementos subjetivos del tipo, serán

La etapa de desahogo de pruebas dentro del proceso penal, también llamado período de instrucción, -dentro del sistema tradicional-, de este momento procesal se ofrece el caudal probatorio que cada una de las partes estime oportuno, también es posible que el propio órgano juzgador ordene la inclusión de algunos medios de prueba que coadyuven al esclarecimiento de los hechos delictivos imputados al procesado, así como la responsabilidad en su comisión<sup>283</sup>.

Una vez que ha sido agotada la aportación de pruebas, el Juez declara cerrada la etapa de instrucción, expidiendo un auto que se notifica a las partes, dejando correr un periodo de entre tres u ocho días, dependiendo si se trata de un procedimiento de orden federal o del orden común. Aquí el Ministerio Público y el defensor podrán ofrecer los últimos elementos de prueba, las que serán posible desahogar en un plazo no mayor de 15 días. De no presentarse prueba alguna dentro del término anteriormente señalado, el Juez pronuncia otro auto que pone fin a la etapa de ofrecimiento y desahogo de pruebas, poniendo la causa a disposición de las partes a efecto cada uno formule sus conclusiones. En esta etapa procesal las condiciones son de términos estrictos, pues en el caso de que el defensor decida no presentar sus conclusiones, estas se tendrán presentadas como de inculpabilidad<sup>284</sup>.

---

analizados por el juzgador después de que se haya dictado el auto de formal prisión o de sujeción a proceso según corresponda, sin perjuicio del derecho del inculcado de acreditar ante el propio Ministerio Público la inexistencia de los mencionados elementos subjetivos del tipo. Para el libramiento de la orden de aprehensión, los tribunales se ajustarán a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 16 constitucional y en el 195 del presente Código. Si el ejercicio de la acción penal es con detenido, el tribunal que reciba la consignación radicará de inmediato el asunto, y se entenderá que el inculcado queda a disposición del juzgador, para los efectos constitucionales y legales correspondientes...El Ministerio Público dejará constancia de que el detenido quedó a disposición de la autoridad judicial... El juez que reciba la consignación con detenido procederá de inmediato a determinar si la detención fue apegada a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o no; en el primer caso ratificará la detención y en el segundo decretará la libertad con las reservas de ley. En caso de que la detención de una persona exceda los plazos señalados en el artículo 16 de la Constitución Política citada, se presumirá que estuvo incomunicada, y las declaraciones que haya emitido el indiciado no tendrán validez...", Artículo 134. Código Federal de Procedimientos Penales, disponible en [www.cddhcu.gob.mx](http://www.cddhcu.gob.mx), consultado el 29 de agosto de 2015.

<sup>283</sup> Cfr. Arilla Bas, Fernando, *"El Procedimiento..."*, op.cit., p.102; Título 4to, Capítulo I, Reglas Generales de la Instrucción, Artículo 142 y ss., del Código Federal de Procedimientos Penales, Disponible en [www.cddhcu.gob.mx](http://www.cddhcu.gob.mx), consultado el 28 de agosto de 2015.

<sup>284</sup> Artículo 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298 y 299, del Código Federal de Procedimientos Penales, Ibídem.

Una vez que se han presentado las conclusiones por las partes<sup>285</sup>, el juez ordena que el turno de la causa sea enviado a la Secretaria de Acuerdos para citar a la audiencia en la que públicamente deberá pronunciarse la resolución en presencia del procesado, su defensor y el Ministerio Público. Durante la audiencia, la secretaria informa sobre el estado conclusivo del proceso, leyendo las constancias que las partes solicitan, se les otorga el uso de la palabra al Ministerio Público y al defensor, para que funden y motiven las conclusiones que respectivamente han presentado. También al procesado se le concede el uso de la palabra para que manifieste lo que a su derecho convenga.

Luego de que el fiscal, defensor y el acusado hayan hecho valer los extremos de sus pretensiones, el juez declarará el proceso visto para sentencia, y dentro del término de quince días deberá pronunciar la sentencia correspondiente. La resolución puede ser absolutoria o condenatoria. Esta etapa procesal pone fin al juicio criminal, como tal. Es decir termina el juicio en cuanto a la instancia; de manifestarse inconformes con lo resuelto en la sentencia, habrá de interponerse el recurso de apelación respectivo que abre la segunda instancia procesal ante la Sala, del Tribunal Superior<sup>286</sup>.

Este órgano jurisdiccional tendrá la potestad de revocar, modificar o confirmar lo resuelto por el juzgador en primera instancia, poniendo fin al proceso penal, en sentido estricto<sup>287</sup>. Igualmente como se apreciará en el capítulo respectivo contra las sentencias que se pronuncien por tribunales de juicio oral dentro del sistema acusatorio procede el recurso de casación.

En este sentido pretende el artículo 20 constitucional proteger al inculcado, estableciendo un término preciso dentro del cual, éste deberá ser juzgado ante los tribunales. El cual no deberá exceder de cuatro meses, cuando el delito por el que se persiga no exceda de dos años de prisión, o dentro de un año como máximo cuando la pena sea mayor. La consecuencia de incumplimiento a esta disposición es la obligación del juzgador a petición del defensor de poner en inmediata libertad al procesado, es que este está privado de su libertad. Esta consecuencia si se ha presentado en la práctica sobre todo en la modalidad

---

<sup>285</sup> Cfr. Arilla Bas, Fernando, *“El Procedimiento...”*, op.cit., p.160.

<sup>286</sup> Artículo 363, 364 y 365 del Código de Procedimientos Penales, *Ibíd.*

<sup>287</sup> Artículo 383 y 384, *Ibíd.*

acusatoria oral, donde los jueces se han visto en la obligación de proceder a poner al procesado en libertad, por exceder el plazo para la emisión de la sentencia respectiva<sup>288</sup>.

Ahora bien, en cuanto al sistema de enjuiciamiento penal, es importante precisar que éste participa de una estructura institucional no jurisdiccional, que colabora con en el procedimiento penal, estos que se resuelve en sede administrativa, pues al Ministerio Público compete el ejercicio exclusivo de la acción penal y es ante quien se debe hacer la denuncia de los hechos que se estiman como delictivos. En otras palabras, es quien comienza la persecución del delito, que de proceder seguidamente pondrá en marcha el aparato jurisdiccional. Así organizado, la labor a desarrollar por parte del Ministerio Público debe ajustarse –como ya hemos anotado- a los parámetros establecidos por la norma fundamental, plegando su actividad a las distintas etapas del proceso penal. La primera es la actividad que despliega ante el órgano jurisdiccional, al momento de sostener la acusación respectiva, y la segunda la que ha de observar internamente para efectos de sostener jurídica y probatoriamente dicha acusación.

Es decir que el Ministerio Público desenvuelve su actividad en dos categorías: con respecto a la división del trabajo, que dentro del orden jerárquico descansa en los Agentes del Ministerio Público del fuero común adscritos a los Juzgados Penales tanto en el Distrito Federal, y en cada estado de la República. Esta misma organización se sigue, para Ministerios Públicos adscritos a los Juzgados de Distrito, dependientes de la Procuraduría General de la República, así como los Agentes del Ministerio Público Federal adscritos a

---

<sup>288</sup> Amparo en revisión 205/2014, Mediante la cual se resuelve el amparo en revisión 205/2014, promovido en contra de una resolución dictada el once de octubre de dos mil trece por el Juez Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad de Irapuato, en el juicio de amparo indirecto 622/2013. El problema jurídico a resolver por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en verificar, en caso de que se cumplan los requisitos procesales correspondientes, si fue correcta la interpretación constitucional realizada por el Juez de Distrito relativa a que en la causa penal correspondiente no se ha transgredido el principio de plazo razonable para dictar sentencia estando el inculpado en prisión preventiva, en atención a los artículos 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (de ahora en adelante la “Constitución Federal”); 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Cf. AR/205/2014, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, disponible en [www2.scjn.gob.mx](http://www2.scjn.gob.mx), consultado el 28 de Agosto de 2015.

las Delegaciones de la Procuraduría General de la Republica en cada uno de las entidades federativas y de la propia Fiscalía<sup>289</sup>.

Hasta aquí hemos hecho referencia a la conformación que tiene el sistema de procesamiento penal mexicano –respecto del sistema tradicional- por un lado, y por el otro también la organización jerárquico-competencial que cada una de las instituciones participantes tiene conforme a sus respectivas competencias derivadas de nuestro régimen constitucional. En este sentido queremos dejar sentado que la acción penal en México corresponde al Estado, quien ejercita esta competencia utilizando los órganos inmediatos por ser dependientes del mismo, estando cada una de sus funciones reguladas por los ordenamientos jurídicos y conforme a los principios constitucionales<sup>290</sup>, indispensables en un estado constitucional de derecho; que recordamos aquí son:

- a) el derecho a una tutela judicial efectiva, que se traduce en el acceso a la impartición de justicia, la imparcialidad judicial, a la impartición de una justicia pronta y expedita, a los mecanismos alternativos de solución de conflictos, a la reinserción del sentenciado, a las medidas cautelares, al plazo constitucional<sup>291</sup>.

---

<sup>289</sup> Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, disponible en [www.cddhcu.gob.mx](http://www.cddhcu.gob.mx).

<sup>290</sup> GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos. Tesis: 1a./J. 42/2007, Semanario Judicial de la Federación, disponible en [www.scjn.gob.mx](http://www.scjn.gob.mx), consultado el 29 de agosto de 2015.

<sup>291</sup> TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y DEBIDO PROCESO. CUALIDADES DE LOS JUECES CONFORME A ESOS DERECHOS FUNDAMENTALES. El derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva, como lo ha establecido la Primer Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder

- b) Derechos del imputado, el derecho a una defensa adecuada<sup>292</sup>, a un proceso penal en audiencia pública, el derecho a la libertad personal bajo caución, la presunción de inocencia.
- c) Los derechos de la víctima y ofendido<sup>293</sup>, que se traduce en la reparación del daño, la impugnación por omisiones del Ministerio Público.

---

de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Asimismo, la propia Primera Sala estableció que el derecho a la tutela jurisdiccional tiene tres etapas que corresponden a tres derechos bien definidos, que son: 1. Una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; 2. Una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que corresponden los derechos fundamentales del debido proceso; y, 3. Una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas o el derecho a ejecutar la sentencia. Vinculado a este derecho fundamental, en específico, a la etapa judicial, el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho al debido proceso que tiene toda persona como parte sustancial de cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional y que comprende a las denominadas formalidades esenciales del procedimiento, que permiten una defensa previa a la afectación o modificación jurídica que puede provocar el acto de autoridad. Tesis: I.3o.C.79 K (10a.), Semanario Judicial de la Federación, *Ibidem*.

<sup>292</sup> DEFENSA ADECUADA DEL INculpADO EN UN PROCESO PENAL. SE GARANTIZA CUANDO LA PROPORCIONA UNA PERSONA CON CONOCIMIENTOS TÉCNICOS EN DERECHO, SUFICIENTES PARA ACTUAR DILIGENTEMENTE CON EL FIN DE PROTEGER LAS GARANTÍAS PROCESALES DEL ACUSADO Y EVITAR QUE SUS DERECHOS SE VEAN LESIONADOS. De la interpretación armónica y pro persona del artículo 20, apartado A, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en relación con los diversos 8, numeral 2, incisos d) y e), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 3, inciso d), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se concluye que la defensa adecuada dentro de un proceso penal se garantiza cuando la proporciona una persona con conocimientos técnicos en derecho, máxime que de la normativa internacional citada no deriva la posibilidad de que sea efectuada por un tercero que no sea perito en dicha materia y, por el contrario, permite inferir que la defensa que el Estado deba garantizar será lo más adecuada y efectiva posible, lo cual implica un elemento formal, consistente en que el defensor acredite ser perito en derecho, y uno material, relativo a que, además de dicha acreditación, actúe diligentemente con el fin de proteger las garantías procesales del acusado y evitar que sus derechos se vean lesionados, lo que significa, inclusive, que la defensa proporcionada por persona de confianza debe cumplir con estas especificaciones para garantizar que el procesado pueda defenderse adecuadamente. Lo anterior, sin que se llegue al extremo de imponer al juzgador la carga de evaluar los métodos que el defensor emplea para lograr su cometido de representación, toda vez que escapa a la función jurisdiccional el examen sobre si éste efectivamente llevará a cabo la estrategia más afín a los intereses del inculpado, máxime que los órganos jurisdiccionales no pueden constituirse en Juez y parte para revisar la actividad o inactividad del defensor e impulsar el procedimiento, y más aún, para declarar la nulidad de lo actuado sin el debido impulso del defensor. Tesis: P. XII/2014 (10a.), Semanario Judicial de la Federación, *Ibidem*.

<sup>293</sup> VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. EN ATENCIÓN A LOS PRINCIPIOS DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y DE ACCESO A LA JUSTICIA, TIENE DERECHO A PROMOVER EL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA NEGATIVA DE LIBRAR LA ORDEN DE APREHENSIÓN CONTRA EL INDICIADO, AUN CUANDO EL ARTÍCULO 5 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE GUERRERO, NO LE OTORGUE EL CARÁCTER DE PARTE EN EL PROCESO PENAL. En atención a los principios de supremacía constitucional y de acceso a la justicia, previstos en los artículos 133 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe

- d) Sistema penal acusatorio<sup>294</sup>, ajustado a los principios de oralidad, inmediación, concentración, contradicción y publicidad.

## **1. Organización y Funcionamiento del Ministerio Público Federal.**

La organización actual del Ministerio Público México data de la Constitución de 1917, en sus artículos 21 y 102 se reconoce el monopolio de la acción penal por parte del Estado, depositando su ejercicio en un solo órgano: El Ministerio Público, facultado por la constitución para ejercer las funciones de persecución y acusación de delitos ante los tribunales. En este sentido, es el Ministerio Público el órgano en quien queda depositada la

---

concederse a la víctima u ofendido del delito el derecho a promover el recurso de apelación contra la negativa de librar una orden de aprehensión contra el indiciado, aun cuando el artículo 5 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero no le otorgue el carácter de parte en el proceso penal. Lo anterior, porque con este proceder se reconoce el derecho del ofendido a un debido proceso, que le otorga el artículo 2o., fracción III, de la Ley General de Víctimas, que implica brindarles la posibilidad de recurrir una determinación que lesione sus derechos, en tanto que permite a la autoridad jurisdiccional de segundo grado, examinar lo decidido por el Juez de primera instancia, para que la revisión del acto reclamado (negativa de libramiento de una orden de aprehensión) sea completa. Además, el derecho de recurrir evita que quede firme esa resolución e impide que los aspectos que se reclamen en un amparo, puedan calificarse de inoperantes, por no haberse aducido como agravio en el recurso de apelación que, en su caso, pudiera haber interpuesto exclusivamente el Ministerio Público. Adicionalmente, al otorgarse al ofendido el derecho de agotar la doble instancia jurisdiccional, se evita la existencia de sentencias contradictorias, esto es, la derivada del recurso de apelación instado por el representante social contra el no libramiento de la orden de captura y la que llegara a dictarse en el juicio de amparo indirecto, promovido contra la negativa decretada por el Juez de primera instancia; de ahí que deba concederse la protección constitucional, para el efecto de que la Sala responsable ordene al Juez de la causa que notifique a la víctima el contenido del auto relativo, y esté en posibilidad de interponer el referido recurso de apelación. Tesis: XXI.1o.P.A.6 P (10a.), Semanario Judicial de la Federación, Ibídem.

<sup>294</sup> SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. SUS DIFERENCIAS CON EL PROCESO PENAL MIXTO EN LA FASE DE INVESTIGACIÓN. Si bien el proceso penal mixto y el acusatorio y oral requieren para su articulación de la investigación preliminar del hecho respecto del cual se solicitará la aplicación de la ley, en el proceso penal mixto, la averiguación previa es la fase en la que se recopilan los elementos de prueba que permiten sostener la existencia del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del imputado, por lo que la tarea investigadora debe ser más estricta. En cambio, en el sistema procesal penal acusatorio y oral, la integración de la carpeta de investigación no requiere de una tarea investigadora reforzada, pues sólo debe contener elementos suficientes para justificar, racionalmente, que el imputado sea presentado ante el Juez de Garantía. Así, la diferencia sustancial en lo que respecta a los elementos que debe contener una averiguación previa, en relación con los datos de prueba contenidos en una carpeta de investigación, consistente en el nivel de reforzamiento de los elementos probatorios arrojados para establecer las razones que permiten presumir la existencia de un hecho delictivo, siendo que los datos derivados de la averiguación previa, por el especial reforzamiento que deben respetar, hacen altamente probable tanto la comisión del delito, como la participación del imputado. Tesis: 1a. CCLXIX/2014 (10a.), Semanario Judicial de la Federación, Ibídem.

investigación de los delitos, la búsqueda de elementos probatorios bastantes, a efecto de poder determinar la o las personas responsables de la comisión de los hechos delictuosos. Por otra parte, el artículo 102 constitucional establece que el Jefe máximo del Ministerio Público a nivel federal es el Procurador General de la República dependiente jerárquicamente del Presidente de la República quedando orgánicamente adscrito al Poder Ejecutivo. La principal normativa que desarrolla estos mandatos constitucionales es el la Ley Orgánica de la Procuraduría General de República, y su reglamento orgánico.

En México el Ministerio Público está organizado jerárquicamente bajo la responsabilidad del Procurador General de la República, de suerte que la acción y el mando en esta materia es de competencia exclusiva de éste. Los agentes del Ministerio Público<sup>295</sup> al actuar lo hacen en representación siempre de aquel y de la institución, muchas de las atribuciones que desarrollan, como por ejemplo: investigar y perseguir los delitos del orden federal; recibir denuncias o querellas sobre acciones u omisiones que puedan constituir en delito; practicar las diligencias necesarias para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad; ejercer la conducción y el mando de las policías en la función de investigación de los delitos; obtener los elementos probatorios que acrediten el delito y la responsabilidad; realizar el aseguramiento de bienes; ordenar la protección de personas respecto de las cuales exista riesgo en cuanto a su integridad física entre otras se concentran o residen en la figura del Procurador General.

La doctrina en materia procesal penal asigna al Ministerio Público las características de *unidad o jerarquía, indivisibilidad, irrecusabilidad e independencia*<sup>296</sup>. Se entiende por unidad todos los funcionarios que forman parte de un sólo órgano reconociendo una sola dirección que favorece el cumplimiento de los fines trazados por la institución. La indivisibilidad corresponde a la representación de todos sus agentes ante cualquier tribunal pues representan al mismo organismo, evitando fraccionamiento o división respecto de las actuaciones de los agentes. En cuanto a la irrecusabilidad porque dentro de un proceso penal jamás se podrá prescindir de la intervención del Ministerio Público como institución, en todo caso podrán ser recusados los agentes en casos de personas concretas que estén

---

<sup>295</sup> Artículo 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, disponible en [www.cddhcu.gob.mx](http://www.cddhcu.gob.mx), consultado el 29 de agosto 2015.

<sup>296</sup> Cfr. Colín Sánchez, Guillermo, "Derecho Mexicano...", op.cit., p.116-117.



impedidos para actuar en un caso concreto. Y por último la característica de la independencia, que se le atribuye en principio por tener autonomía respecto del poder ejecutivo, al cual se encuentra integrado y vinculado presupuestalmente. No obstante, en el desempeño de sus funciones sólo se somete a la autoridad del orden jurídico que lo regula, además de no admitir injerencias de los integrantes de los otros poderes del estado en su actuación<sup>297</sup>.

Es innegable que las funciones que desempeña la institución del Ministerio Público son de múltiple naturaleza y en algunos casos bastante complejas. Es por ello que es objeto de críticas por parte de la doctrina no sólo en su responsabilidad de persecución de los delitos, sino también por la amplia representación que sus funcionarios tienen en diversas materias, haciendo evidente una amplia influencia de parecer como un cuarto poder con tintes dictatoriales<sup>298</sup>, por su amplia dependencia del Poder Ejecutivo<sup>299</sup>. En la práctica son conocidas y manifiestas las injerencias que tiene el Poder Ejecutivo, hacia el Procurador y los sus subalternos.

Según Niceto Alcalá Zamora, el Ministerio Público ha de ser inamovible, independiente y libre en su actuación, con este criterio el Poder Ejecutivo no puede arrogarse la representación de la sociedad, cuya defensa en juicio corresponde al fiscal, tampoco debe identificarse con el Estado por consiguiente no puede ser órgano del gobierno pues entre su misión como abogado de la ley y como agente del Ejecutivo, no tiene por qué predominar una intervención a costa de la otra<sup>300</sup>.

---

<sup>297</sup> Ibídem, p. 117; Cfr. Hernández Pliego, Julio Antonio, *El Proceso Penal Mexicano*, Primera Edición, Editorial Porrúa, México, 2002, p. 107.

<sup>298</sup> Cfr. Castro, V. Juventino, *"La Procuración..."*, op.cit., p.12.

<sup>299</sup> "El depender presupuestalmente del Ejecutivo, entre otras cuestiones hace nugatoria la Independencia de la Procuraduría y del Ministerio Público(...)la mejor forma de limitar la autonomía de una autoridad, es controlando su presupuesto económico, de manera que mientras esto sea, resultará sumamente precaria la pretendida separación que le provee de fluidez en los recursos económicos(...), debiendo subrayar la potestad que el artículo 102 concede al Ejecutivo la potestad de designar y remover a los funcionarios de la Institución, con lo cual se reserva una arma sumamente poderosa para plegarlos, a sus(...)necesidades del momento". Cfr. Hernández Pliego, Julio Antonio, *"El Proceso..."*, op.cit., p. 108.

<sup>300</sup> "En efecto la falta de autonomía de los integrantes del Ministerio Público, en el ejercicio de sus funciones y principalmente por su dependencia directa e inmediata del Poder Ejecutivo, que ha originado que se le vea con recelo, porque el interés social que debe protegerse puede subordinarse a intereses o presiones(...)ausente de imparcialidad". Cfr. Colín Sánchez, Guillermo, *"Derecho..."*, op.cit., p. 117.

El Ministerio público –como hemos visto-, esta orgánicamente dentro de la administración pública centralizada, en consecuencia el nombramiento del procurador es una decisión exclusiva del Presidente de la República, y en los estados del gobernador. Sin embargo con la reforma constitucional de 31 de diciembre de 1994 se añadió un contrapeso a esta facultad exclusiva del Ejecutivo, al disponer que el nombramiento del procurador tuviera que ser ratificado por el Senado de la República. En este sentido debemos exponer que es amplia la opinión doctrinal que avanza en la línea de la autonomía constitucional del Ministerio Público, de forma que ya no dependa del poder ejecutivo federal, en este caso el presidente y en los estados a los gobernadores<sup>301</sup>.

Es importante precisar que las propuestas de reforma que se enderezan hacia el Ministerio Público deben servir como marco de un amplio debate cuyos objetivos deben materializarse de cara al proceso penal y al modelo de enjuiciamiento, esta discusión se insertan ante la responsabilidad estatal de lograr un proceso penal no sólo con miras a combatir la inseguridad pública sino que además de ser instrumento de cohesión social son instituciones de defensa para evitar la violencia del delincuente sobre la víctima, y de la familia de la víctima sobre el delincuente a través de la venganza privada<sup>302</sup>.

### **1.1. Procuraduría General de la República.**

Esta institución se deposita en su titular el Procurador General de la República, que tiene dentro de sus competencias la representación de la federación, la consejería jurídica del gobierno federal, además de la jefatura del Ministerio Público. En este sentido existen funciones que el Procurador debe llevar a cabo en forma personal, participar en el Sistema

---

<sup>301</sup> “Es preciso lograr que el Ministerio Público no dependa jerárquicamente y discrecionalmente del Poder Ejecutivo, tanto en el ámbito federal como de las entidades federativas, y en esta dirección basta pasar revista a los cambios recientes que se observan en varios ordenamientos latinoamericanos, en los cuales o bien se adscribe al Ministerio Público al Poder Judicial, o bien se le otorga autonomía respecto del Ejecutivo, con el objeto de conferirle una mayor Independencia”, Fix-Zamudio, Héctor; *“ha llegado el tiempo de que el Ministerio Público se asuma como órgano autónomo del Estado mexicano, como ya lo han hecho otras instituciones con resultados favorables”*, García Ramírez, Sergio citado en Carbonell, Miguel, *“Reflexiones sobre el Monopolio de la Acción Penal y la Autonomía del Ministerio Público”*, Retos y Perspectivas de la Procuración de Justicia en México, Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 2004, p.153.

<sup>302</sup> Ferrajoli, Luigi, *Ibidem*, p.148.

Nacional de Seguridad Pública; instrumentar los mecanismos de coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública; establecer indicadores que sirvan para evaluar la actuación de la Procuraduría; entre otras establecidas en el Artículo 5 y 8 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y otras que serán delegables según lo establezcan las normas secundarias, algunas de estas facultades son el no ejercicio de la acción penal; la solicitud de cancelación o reclasificación de la orden de aprehensión; la formulación de conclusiones no acusatorias; las consultas que realicen los Agentes del Ministerio Público; la infiltración de agentes de investigación en materia de delincuencia organizada y sobre la admisión de los elementos de prueba a solicitud de víctima u ofendido.

La estructura funcional de la Procuraduría –fiscalía- es organizada por la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República conforme a las facultades que le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, teniendo por objeto principal crear las competencias para el despacho de los asuntos que al Ministerio Público Federal y al Procurador General. En orden de jerarquía el Procurador General de la República se ubica dentro de la autoridad del Poder Ejecutivo Federal, este último tiene facultades exclusivas para nombrarle con aprobación del Senado, según lo dispone la fracción IX del artículo 89 Constitucional<sup>303</sup>.

Además de la Carta Fundamental en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República se encuentra desarrollado el marco normativo que rige la estructura y competencias del Procurador General de la República, los agentes del Ministerio Público Federal, así como de la policía investigadora y de los cuerpos periciales. A su vez en el reglamento de esta Ley, así como del Reglamento de Servicio de Carrera de Justicia Federal, entre otros cuerpos normativos destinados a regular el trabajo al interior de la institución.

El Procurador General de la República intervendrá por sí o por conducto de agentes del Ministerio Público de la Federación en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la

---

<sup>303</sup> Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes: (...) IX. Intervenir en la designación del Fiscal General de la República y removerlo, en términos de lo dispuesto en el artículo 102, Apartado A, de esta Constitución.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta institución funcionará con las siguientes divisiones: Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales<sup>304</sup>; Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo<sup>305</sup>; Coordinación General de Delegaciones. Delegaciones Estatales; Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada<sup>306</sup>; Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales<sup>307</sup>; Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad<sup>308</sup>; Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales<sup>309</sup>; Oficialía Mayor<sup>310</sup>; Visitaduría General<sup>311</sup>; Agencia Federal de Investigación<sup>312</sup>; Unidad de Operaciones. Dirección General de Intercepción; Dirección

<sup>304</sup> Cuenta con agregadurías; Dirección General de Asuntos Jurídicos; Dirección General de Constitucionalidad y Dirección General de Normatividad. Disponible en [http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/PE/PGR/Manuales/25042005\(1\).pdf](http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/PE/PGR/Manuales/25042005(1).pdf), 1 de febrero 2010.

<sup>305</sup> Dirección General de Control de Averiguaciones Previas; Dirección General de Control de Procesos Penales Federales y la Dirección General de Amparo. Disponible en [http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/PE/PGR/Manuales/25042005\(1\).pdf](http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/PE/PGR/Manuales/25042005(1).pdf), 1 de febrero 2010.

<sup>306</sup> Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud; Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas; Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda; Unidad Especializada en Investigación de Secuestros; Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados y Órganos; Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos. Disponible en [http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/PE/PGR/Manuales/25042005\(1\).pdf](http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/PE/PGR/Manuales/25042005(1).pdf), 1 de febrero 2010.

<sup>307</sup> Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial; Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros; Unidad Especializada en Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia; Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales. Disponible en [http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/PE/PGR/Manuales/25042005\(1\).pdf](http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/PE/PGR/Manuales/25042005(1).pdf), 1 de febrero 2010.

<sup>308</sup> Dirección General de Promoción de la Cultura en Derechos Humanos; Atención a Quejas e Inspección; Dirección General de Atención a Recomendaciones y Amigables; Conciliaciones en Derechos Humanos; Dirección General de Atención a Víctimas del Delito; Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. Disponible en [http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/PE/PGR/Manuales/25042005\(1\).pdf](http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/PE/PGR/Manuales/25042005(1).pdf), 1 de febrero 2010.

<sup>309</sup> Dirección General Jurídica en Materia de Delitos Electorales; Dirección General de Averiguaciones Previas en Materia de Delitos Electorales; Dirección General de Control de Procesos y Amparo en Materia de Delitos Electorales; Dirección General de Coordinación, Desarrollo e Innovación Gubernamental en Materia de Delitos Electorales; Dirección General de Información y Política Criminal en Materia de Delitos Electorales. Disponible en [http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/PE/PGR/Manuales/25042005\(1\).pdf](http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/PE/PGR/Manuales/25042005(1).pdf), 1 de febrero 2010.

<sup>310</sup> Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto; Dirección General de Recursos Humanos; Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales; Dirección General de Telemática; Dirección General de Control y Registro de Aseguramientos Ministeriales; Dirección General de Servicios Aéreos; Centro de Evaluación y Desarrollo Humano; Disponible en [http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/PE/PGR/Manuales/25042005\(1\).pdf](http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/PE/PGR/Manuales/25042005(1).pdf), 1 de febrero 2010.

<sup>311</sup> Dirección General de Visitaduría; Dirección General de Inspección Interna; Dirección General de Supervisión e Inspección Interna para la AFI; Dirección General de Delitos cometidos por Servidores Públicos de la Institución; Disponible en [http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/PE/PGR/Manuales/25042005\(1\).pdf](http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/PE/PGR/Manuales/25042005(1).pdf), 1 de febrero 2010.

<sup>312</sup> Dirección General de Planeación Policial; Dirección General de Investigación Policial; General de Análisis Táctico; Dirección General de Despliegue Regional Policial Dirección General de Operaciones Especiales; Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e INTERPOL. Disponible en [http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/PE/PGR/Manuales/25042005\(1\).pdf](http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/PE/PGR/Manuales/25042005(1).pdf), 1 de febrero 2010.

General de Erradicación; Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional<sup>313</sup>; Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado<sup>314</sup>.

Como puede apreciarse esta institución se completa con un grupo de delegaciones estatales repartidas por todo el territorio nacional y el Distrito Federal. Las cuales se desempeñan como delegaciones de manera permanente coordinándose en las actividades y responsabilidades que son de sus competencias. Una de los principales problemas que enfrenta esta institución radica en la coordinación de facultades que recaen en las delegaciones estatales para que estas coadyuven en la descarga de trabajo y no funcionen como pequeñas procuradurías<sup>315</sup>. Es un tema que constantemente es discutido tanto por la opinión pública, como a nivel doctrinal, sobre todo en atención a que la coordinación se refleje en una eficaz procuración de justicia y ésta se refleje en la disminución de los índices delictivos.

Algunas de estos errores estructurales y funcionales los encontramos en la insuficiencia de equipo, material mínimo, carencia de laboratorios e instalaciones para llevar acabo la labor de investigación, es decir faltan las herramientas científicas y tecnológicas para la labor de investigación de los delitos. Esto trae como consecuencia que la integración de la investigación criminal sea deficiente resultando las resoluciones de acción penal y de acusación en el proceso presenten problemas en la determinación científica de los hechos delictivos, problemas de prueba para soportar la acusación.

Por otro lado hay ausencia de responsabilidad y de responsabilidad de los Ministerios Públicos en la actividad investigadores, provocado por mandos deficientes y coordinación con la policía investigadora. La falta de preparación de los servidores públicos es un factor

---

<sup>313</sup> Dirección General Planeación e Innovación Institucional; Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional; Dirección General de Formación Profesional; Dirección General de Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal; Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales; Instituto de Capacitación y Profesionalización en Procuración de Justicia Federal. Disponible en [http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/PE/PGR/Manuales/25042005\(1\).pdf](http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/PE/PGR/Manuales/25042005(1).pdf), 1 de febrero 2010.

<sup>314</sup> Dirección General de Investigación Ministerial "A"; Dirección General de Investigación Ministerial "B"; Dirección General de Cooperación y Participación Ciudadana; Dirección General de Análisis, Investigación e Información Documental. Disponible en [http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/PE/PGR/Manuales/25042005\(1\).pdf](http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/PE/PGR/Manuales/25042005(1).pdf), 1 de febrero 2010.

<sup>315</sup> Cfr. Castro V., Juventino, *La Procuración de la Justicia Federal*, Editorial Porrúa, México, 1999, p.16.

determinante por el que se incurren en errores frecuentes, como el desconocimiento de la teoría del delito es el motivo principal por el que no se integran eficazmente las causas penales. Las actuaciones de los Ministerios Públicos se limita a brindar atención a las partes que les solicitan información respecto de los avances y el estado de las investigaciones, en la mayoría de los casos los particulares son quienes integran y resuelven, la autoridad investigadora se limita a firmar las actuaciones.

Como hemos estudiado existen normas orgánicas a través de las cuales se determina la estructura jerárquica, y de funcionamiento del Procurador, los Ministerios Públicos, Policía Judicial, peritos entre otros. Sin embargo la política criminal diseñada por los gobiernos en turno ha caminado hacia la centralización de las facultades de este órgano investigador y procurador de justicia, haciéndola depender el mando del Procuraduría General de República y su Procurador en turno.

Con la reciente expedición en 2014 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con el objeto homologar el sistema penal mediante normas generales de investigación, procesamiento y sanción de delitos, estos procedimientos serán llevados a cabo por los tribunales federales y locales, además del aparato de investigación y procuración de justicia. Otro viso de centralización lo proporciona la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, facultada para atraer investigaciones e imponer sanciones a servidores públicos en los estados y municipios sujetos a investigación por delitos de corrupción. Todas estas reformas en el pasado reciente hacen evidente que el país se encuentra sometido a un proceso de centralización de funciones, de todo tipo, y especialmente en materia penal.

Este esfuerzo centralizador disminuye la libertad de los Estados en México para dotarse de sus normas, estructuras, funcionamiento y autoridades, la homologación de leyes, por ejemplo, establece parámetros básicos para la operación nacional de determinados sectores, lo que lleva a los Estados a operar a partir de un piso común en temas que son de interés nacional. La facultad de atracción se traduce en la posibilidad de que un organismo federal intervenga o asuma una función que originalmente correspondía a un organismo local.

Mientras que la centralización significa que una atribución, responsabilidad o prerrogativa se traslada de los estados a la Federación. Esta última modalidad representa una centralización mucho más agresiva, pues excluye a los gobiernos estatales de su participación en determinados temas.

Luis Carlos Ugalde<sup>316</sup> nos advierte sobre el riesgo de la centralización de funciones es que se puede posponer la reparación de las deficiencias de muchos gobiernos en México. Si la centralización se ha hecho para aminorar problemas de desempeño o de poca rendición de cuentas de los gobiernos estatales, quitarles esa función no mitigará ese déficit de gobernabilidad escondida por el federalismo centralizador. Dicho de otra forma: hay una mala pedagogía detrás de la visión centralizadora: quitarle la pelota a los niños mal portados en lugar de obligarlos a jugar en buena lid. Centralizar funciones no estimula el desarrollo político local ni ayuda a construir los pesos y contrapesos democráticos, única medida de fondo para combatir el abuso del poder o la poca eficacia de muchos gobiernos locales.

Dentro de las responsabilidades conferidas a la Procuraduría General de la República por su ley orgánica, son principalmente:

- a) Vigilancia de los principios de constitucionalidad y de legalidad;
- b) Vigilar que la administración de justicia sea pronta y expedita;
- c) Representante de la Federación;
- d) Consejero Jurídico del Gobierno;
- e) Persecución de los delitos de orden federal;
- f) Facultad de celebrar convenios de colaboración con los estados en materia de procuración de justicia;
- g) Representar al Gobierno Federal en actos de índole internacional; entre otras que tiene que ver principalmente con la mecánica interna de la institución<sup>317</sup>.

---

<sup>316</sup> Cfr. Ugalde, Luis Carlos, *“Los riesgos de la Centralización en México”*, Revista Alcaldes, publicado 01/06/2014, Revista en línea, disponible [www.luiscarlosugalde.mx](http://www.luiscarlosugalde.mx), consultado el 30 de Agosto, 2015.

<sup>317</sup> Artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

En cuanto a las competencias sobre Seguridad Pública es responsabilidad de la Procuraduría participar, coordinar y dar cumplimiento a los acuerdos y resoluciones derivados del Sistema Nacional de Seguridad Pública<sup>318</sup>. Corresponde también, instrumentar y aplicar mecanismos de coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y con otras instituciones de seguridad pública de las entidades federativas y de los municipios para la investigación de los delitos. En el ejercicio de esta función, las policías actuarán bajo la conducción y mando del Ministerio Público de la Federación. Dicha institución también es responsable de establecer indicadores y procedimientos que sirvan para evaluar la actuación de la propia Procuraduría.

El Procurador también tiene dentro de sus tareas la de vigilar los principios constitucionales y la legalidad, siendo responsable de velar por el respeto de las garantías individuales y los derechos humanos en la esfera de su competencia contenidos en la carta constitucional mexicana así como en los tratados internacionales en materia de derechos humanos<sup>319</sup>, de igual forma la enmienda de normas locales inconstitucionales; es sujeto legitimado para presentar ante la Suprema Corte de Justicia las acciones de inconstitucionales y controversias constitucionales sobre normas que estime contrarias a la norma fundamental<sup>320</sup>; puede intervenir a través del dictamen correspondiente en controversias

---

<sup>318</sup> El Sistema Nacional de Seguridad Pública está conformado por El Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) quien es el órgano superior del SNSP, presidido por el Presidente de la República, e integrado por los Secretarios de Gobernación, Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública, el Procurador General de la República, los Gobernadores de los Estados, el Jefe del Gobierno del Distrito Federal, y el Secretario Ejecutivo del SNSP. Véase [www.secretariadoejecutivo.gob.mx](http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx)

<sup>319</sup> La intervención del procurador en los conflictos legales, es tan variada la norma constitucional otorga en el artículo 21 no solamente el monopolio del ejercicio de la acción persecutoria, además de esto el procurador es un protector de la Constitución, ya que interviene en la impugnación de normas, de preceptos constitucionales que se estimen violados y los conceptos de invalidez que el procurador estime pertinente. El procurador puede intervenir en una invalidación, no sólo accionando dicho mecanismo, sino que también puede obrar mediante pedimentos en los cuales argumente los intereses públicos con el objeto de velar por la observancia de la Constitución. No hay precepto limitativo acerca del procurador de la República. La legitimación deviene de su compromiso nacional. Debe intervenir personalmente en los juicios de inconstitucionalidad dada la importancia de su intervención en asuntos de la nación. El procurador puede impugnar normas de cualquier nivel emitida por cualquier ente público. Así se previene de los artículos 107 fracción V, inciso d), inciso VIII, fracción V, fracción XII de la Constitución Mexicana. Con respecto al procedimiento de amparo de acuerdo a la ley respectiva artículo 40 el Procurador General puede pedir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ejerza la facultad de atracción en asuntos de trascendencia para la vida jurídica nacional.

<sup>320</sup> Como ejemplo de la facultad que tiene el Procurador General de la República para promover la Acción de Inconstitucionalidad es la No. 2/2010 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en que solicito la



constitucionales conforme al artículo 105 de la Constitución Mexicana<sup>321</sup>. La Procuraduría también será responsable de fomentar entre sus servidores públicos una cultura de respeto a las garantías individuales y los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano y de suma importancia ante el nuevo paradigma de control de convencionalidad, los tratados internacionales en que los Estados Unidos Mexicanos es parte. Dentro de este grupo de facultades encontramos también la solicitud a la Suprema Corte de Justicia para que ejerza la facultad de atracción a la que ya en apartados anteriores nos hemos referido, así como la denuncia ante el citado órgano de tesis contradictorias a que se refiere el artículo 227 en sus tres fracciones de la Ley de Amparo<sup>322</sup>.

Como ejemplo de esta facultad de atracción la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó la solicitud de la Procuraduría General de la República para atraer el amparo que promovió uno de los líderes y fundadores del cártel de Guadalajara, Ernesto Fonseca Carrillo, alias “Don Neto” y evitar así que la demanda sea resuelta por el mismo Tribunal Colegiado que concedió la libertad a Rafael Caro Quintero. Así la Corte a través de los

---

invalidez de la reforma a los artículos 146 y 391 del Código Civil del Distrito Federal, relativo a los matrimonios entre personas del mismo sexo, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, publicados el 29 de diciembre de 2009, emitida por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y promulgada por el Jefe de Gobierno de este mismo. Véase “El Matrimonio entre Personas del Mismo Sexo en la Legislación del Distrito Federal y sus Efectos Jurídicos”, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Primera Edición, México, D.F., 2013.

<sup>321</sup> “Artículo 105 fracción II, apartado i): De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución (...), apartado i) El Fiscal General de la República respecto de leyes federales y de las entidades federativas, en materia penal y procesal penal, así como las relacionadas con el ámbito de sus funciones...”.

<sup>322</sup> Artículo 227. La legitimación para denunciar las contradicciones de tesis se ajustará a las siguientes reglas: I. Las contradicciones a las que se refiere la fracción I del artículo anterior podrán ser denunciadas ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por los ministros, los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados de circuito y sus integrantes, los jueces de distrito, el Procurador General de la República, o las partes en los asuntos que las motivaron. II. Las contradicciones a las que se refiere la fracción II del artículo anterior podrán ser denunciadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por los ministros, los Plenos de Circuito o los tribunales colegiados de circuito y sus integrantes, que hayan sustentado las tesis discrepantes, el Procurador General de la República, los jueces de distrito, o las partes en los asuntos que las motivaron. III. Las contradicciones a las que se refiere la fracción III del artículo anterior podrán ser denunciadas ante los Plenos de Circuito por el Procurador General de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los jueces de distrito o las partes en los asuntos que las motivaron.

integrantes de la Primera Sala determinaría si el máximo tribunal del país ejerce o no su facultad de atracción para resolver el amparo promovido por el narcotraficante<sup>323</sup>.

La Corte Mexicana mediante acuerdo resolvió en ese momento: *“Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación admite a trámite la solicitud de ejercicio de facultad de atracción, promovida por el procurador general de la República. Túrnese el expediente para su estudio al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, integrante de la Primera Sala y radíquese en ella, en virtud de que la materia del asunto corresponde a su especialidad”*<sup>324</sup>.

Así mismo, *“La Procuraduría consideró necesario que a fin de evitar que los mismos magistrados del Tribunal Colegiado sean quienes resuelvan este amparo utilizando idénticos argumentos por los que liberaron a Caro Quintero, se solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga el caso a fin de que sea analizado de manera conjunta con el recurso de revisión promovido”*.

Esta facultad del Procurador General de la República es muy importantes, y se pueden ejercer en casos muy específicos que por su importancia y trascendencia se determine que sean atraídos, estudiados y resueltos por la Suprema Corte Justicia de la Nación. En las últimas décadas desde el 1995 a 2014 se ha presentado un incremento en las solicitudes de atracción por parte del máximo tribunal mexicano y existe una proyección de incremento desde 2014 hasta 2016<sup>325</sup>.

---

<sup>323</sup> Cfr. Reyes, Juan Pablo, *“La SCJN analiza petición de la PGR sobre el amparo de Don Neto”*, Diario Excelsior, Agosto de 2013, Diario en línea disponible en [www.excelsior.com.mx/nacional/2013/08/28/915676](http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/08/28/915676) consultado el 1 de septiembre de 2015.

<sup>324</sup> *“...la PGR informó que daría seguimiento puntual al trámite del recurso ante la Suprema Corte para velar que en este caso como en cualquier otro, se tomen en cuenta además de los derechos de los inculcados, los derechos de las víctimas y de la sociedad. Al mismo tiempo, la dependencia federal interpuso un recurso de revisión en contra de la sentencia que concedió la libertad a Rafael Caro Quintero, fundador y líder del cártel de Guadalajara, dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito con sede en el estado de Jalisco”*. Ibídem.

<sup>325</sup> Esta información está disponible en [www2.scjn.gob.mx/alex/documents/temasjudiciales/SEFAS.pdf](http://www2.scjn.gob.mx/alex/documents/temasjudiciales/SEFAS.pdf) consultado el 1 de septiembre de 2015.

Como consejero jurídico del gobierno tiene competencias en todos los asuntos donde el gobierno federal y sus dependencias requieran orientación jurídica mediante la expedición de la opinión o dictamen correspondiente. Como pueden ser las reformas legislativas presentadas por el Presidente de la República. Según la fracción VIII, del Artículo 5 de la Ley Orgánica de Procuraduría General de la República la participación el Procurador en los proyectos e iniciativas de reformas se limita a que estas versen sobre las materias de su competencia, en cuyo caso está legitimado para hacer manifestaciones e intervenir en la elaboración de los proyecto. Por otra parte el Artículo 6 del citado ordenamiento otorga la facultad al Fiscal para proponer al Ejecutivo Federal los proyectos de iniciativa de ley o reformas legislativas para la observancia de la Constitución y que de igual forman estén dentro de su ámbito de competencia. En el gobierno de Felipe Calderón ante la promulgación de la Ley Sobre Delincuencia Organizada y la Ley sobre Extinción de dominio en ambos casos tuvo intervención el Procurador.

Sin duda la organización central o federal incide respecto de la decisión sobre la estructura del Estado, que como hemos estudiado en cada estado atiende a raíces históricas y aspiraciones políticas en tiempo y espacio. Sin embargo esto no debe servir como pretexto para que de acuerdo al régimen, deba determinarse la construcción del sistema de enjuiciamiento penal. Es decir, la estructura organizacional de las instituciones estatales como es el caso el Ministerio Público -ante una responsabilidad tan importante como es el poder de acusar y de investigar- no deben suponer sacrificio alguno para los derechos y garantías de cara al proceso penal dentro de un sistema democrático, ni que decir para la adopción de una política penal adecuada. Dice García Ramírez<sup>326</sup> que resulta peligroso que las normas constitucionales sean las creadoras de sistemas procesales que ofrecen flancos sensibles a la arbitrariedad y autoritarismo, inclinándose hacia a la impunidad. Desde esta perspectiva el Ministerio público es pieza fundamental dentro del sistema de enjuiciamiento penal, donde su diseño tanto institucional como sus atribuciones deben reflejar los principios democráticos de un estado constitucional de derecho. A mayor abundamiento Luis María Díez Picazo sostiene que el modo en que un ordenamiento regula la titularidad

---

<sup>326</sup> Cfr. García Ramírez, Sergio, *"Algunas Cuestiones del Proceso Penal"*, Memoria del Congreso Internacional de Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados, Tomo II Proceso Penal, Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 2004, p. 162, 174.

y el ejercicio de la acción penal posee innegable relevancia constitucional en un doble sentido, primero, afecta lo más profundo de las relaciones entre el Estado y los ciudadanos; segundo entraña un problema de reparto de atribuciones y control del poder dentro del aparato estatal<sup>327</sup>. Ejercer el *ius puniendi* es siempre extremadamente delicado, obligando no sólo a considerar aspectos de política criminal sino, a actuar con exquisito celo profesional, sólo así se podrá ser eficaz a las exigencias sustantivas y procesales del Estado de Derecho<sup>328</sup>.

## 1.2. Ministerio Público.

La institución del Ministerio Público además de tener competencias de investigación y persecución de los delitos de orden federal, también funge como representante y protector de los intereses de la sociedad así prescrito por la Constitución Mexicana. En consecuencia, su fundamento y organización deben ser desarrollados conforme a las funciones establecidas por el marco constitucional, lo cual le obliga a que su actuación sea en protección de los derechos fundamentales previstos por la misma. Además del marco constitucional el ministerio público debe acogerse a la tutela de los derechos fundamentales reconocidos por los tratados internacionales, que conforman las bases para la conformación del debido proceso legal, guardando –como es lógico- estrecha relación con la institución en cuestión<sup>329</sup>.

Conforme al modelo procesal tradicional<sup>330</sup> el ejercicio de estas facultades que corresponden al Ministerio público comienza con el ejercicio de la acción penal de

---

<sup>327</sup> Cfr. Díez-Picazo, Luis María, *“El Poder de...”*, op.cit., p.174.

<sup>328</sup> *Ibíd*em, p.175.

<sup>329</sup> Cfr. Alcaraz Mondragón, Eduardo, *“Ministerio Público y Derechos Humanos”*, Panorama Internacional sobre Justicia Penal, Proceso y Justicia Penal Internacional, Culturas y Sistemas Jurídicos comparados, Séptimas Jornadas Sobre Justicia Penal, Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México D.F., 2007.p. 247.

<sup>330</sup> “La (nueva) reforma procesal penal busco modificar el actual sistema de justicia criminal, con objeto de garantizar en juicio justo a todos los ciudadanos. entrega las responsabilidades de investigar y juzgar a órganos distintos. La etapa de investigación corre a cargo del Ministerio Público, y la función de juzgar recae en el Poder Judicial. El Ministerio público aparece como entidad compuesta por fiscales, quienes para efectos dirigen la investigación y la acción de la policía, y protegen a víctimas y testigos (...) Estructurándose

conformidad con el artículo 136 del Código Federal de Procedimientos Penales aterrizada en la averiguación previa, al ser el receptor de la denuncia y/o querrela sobre conductas que puedan constituir delito y, por otra parte, el Ministerio Público<sup>331</sup> también tiene bajo su mando a la policía investigadora que habrá de llevar a cabo las investigaciones e indagatorias a fin de comprobar la veracidad de los hechos denunciados. De suerte que recae en el Ministerio Público, la responsabilidad de practicar las diligencias necesarias para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado en términos de lo dispuesto por el Capítulo II del Código Federal de Procedimientos Penales<sup>332</sup>.

---

el proceso como una contradicción entre las partes acusadora que será ahora el fiscal y acusada, todas las investigaciones y actividades del Ministerio Público que sean realizadas durante la investigación tienen por finalidad preparar la acusación, pero no constituyen pruebas (...) los fiscales no serán los que directamente realicen la labor técnica de investigación; para ellos existe la policía (...) la segunda función del Ministerio Público es ejercer la acción penal (...) La tercera función es la de adoptar medidas para proteger a las víctimas y a los testigos. Esta función refleja la tendencia de poner a la víctima y sus intereses como elemento fundamental del procedimiento penal, otorgándole el carácter de sujeto procesal por el solo hecho de ser directamente afectada por el delito (...) busca asegurar que la víctima colabore con el procedimiento y comparezca al mismo". Cfr. Blanco Escandón Celia, *"Los Sujetos Procesales en el Nuevo Proceso Penal"*, Temas actuales de Justicia Penal, Sextas Jornadas sobre Justicia Penal, Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 2006, p. 126, 140-141.

<sup>331</sup> Algunas de las nuevas responsabilidades que le son atribuidas al Ministerio Público según el artículo 20 y 21 constitucional y el correspondiente 141 del Código Federal de Procedimientos Penales, están enfocadas hacia la protección de la víctima y ofendido por la comisión de algún delito, estos deben recibir por parte de aquel todo tipo de asesoría jurídica respecto de denuncia y/o querrela para la defensa de sus intereses; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución; la víctima y/o ofendido deberán ser informados de los cause y resultados de la investigación, así como de sus consecuencias legales. Tanto la Constitución como la legislación penal federal establecen para el Ministerio Público la responsabilidad de conducirse con atención y respeto a la dignidad humana, conduciendo su actuación sin discriminación que anule, atente o menoscabe la dignidad de las personas y protección de sus derechos debiendo de efectuarse sin distinción alguna, estos y otros cambios en las responsabilidades del Ministerio Público dentro del proceso penal se derivan de las reformas constitucionales aprobadas en 18 de junio 2008, la última adecuación del Código Federal de Procedimientos Penales es de fecha 14 de marzo de 2014. Disponible en [www.cddhcu.gob.mx](http://www.cddhcu.gob.mx).

<sup>332</sup> Según el Artículo 134 del Código Federal de Procedimientos Penales en cuanto aparezca de la averiguación previa que se ha acreditado el cuerpo de delito y la probable responsabilidad del indiciado en los términos del artículo 168, el Ministerio Público ejercitará la acción penal ante los tribunales y expresará, sin necesidad de acreditarlo plenamente, la forma de realización de la conducta, los elementos subjetivos específicos cuando la descripción típica lo requiera, así como las demás circunstancias que la ley prevea. El correspondiente artículo 168 del código mencionado establece para el Ministerio Público la responsabilidad de acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, como base del ejercicio de la acción penal, de suerte que de igual forma la autoridad judicial deberá examinar a detalle que estén acreditados ambos requisitos.

De conformidad con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministerio Público<sup>333</sup> ejerce la conducción y mando de las policías en la función de investigación de los delitos, instruyéndoles respecto de las acciones que deban desarrollarse conforme a la averiguación del delito, de sus autores y de quienes hayan participado en su comisión. Tiene competencia concurrente<sup>334</sup> en la investigación de los

---

<sup>333</sup> El Capítulo II del Código de Procedimientos Penales se refiere a las Reglas Especiales para la Práctica de Diligencias y Levantamiento de Acta de Averiguación Previa, dentro de las facultades otorgadas al Ministerio Público y a la policía investigadora, estas deberán dictar todas las providencias para proporcionar seguridad y auxilio a las víctimas y testigos, así como proceder y dictar los lineamientos para la preservación de indicios y vestigios de los hechos delictuosos, así como todos los instrumentos, objetos que se hayan producido como consecuencia del hecho delictivo. Es la propia Procuraduría General de la República quien dicta las reglas que se seguirán para asegurar la cadena de custodia en el levantamiento de la evidencia física allí donde se encuentre y podrá finalizar por medio de orden de autoridad competente. Así como la preservación de los indicios, huellas y vestigios que se hayan producido como consecuencia de los hechos delictuosos. Artículos 123 y siguientes del Código Federal de Procedimientos Penales.

<sup>334</sup> "El artículo 73, fracción XXI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que: "En las materias concurrentes previstas en esta Constitución, las leyes federales establecerán los supuestos en que las autoridades del fuero común podrán conocer y resolver sobre delitos federales.". En este sentido, el legislador federal, específicamente en el numeral 474 de la Ley General de Salud, adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2009, plasmó las reglas de competencia general otorgadas a favor de las autoridades de seguridad pública, procuración e impartición de justicia y de ejecución de sanciones de las entidades federativas, incluido el Distrito Federal, y de la Federación en materia de delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, lo cual tiene como objetivo fortalecer la investigación y el combate de este género de delitos, a través del esquema de "competencia concurrente", por el que las entidades federativas y el Distrito Federal, dentro de su marco jurídico y territorial respectivo, conjuntamente con la Federación, deben combatir integralmente dicho fenómeno delictivo con las limitaciones que la citada ley sanitaria establece. Lo anterior generó dos reglas de competencia general a favor de las autoridades federales para conocer de los delitos de narcomenudeo: por una parte, la competencia originaria prevista en el artículo 474, párrafo segundo, de la indicada ley, conforme a la cual es necesario que se actualice cualquiera de las siguientes hipótesis: 1) se trate de delincuencia organizada; 2) la cantidad de la droga sea igual o superior a la que resulte de multiplicar por mil el monto de las previstas en la tabla de orientación contenida en el artículo 479 de la misma legislación; o, 3) el narcótico no esté contemplado en la tabla; y, por otra parte, la excepcional, establecida en el citado artículo 474, fracción IV, última parte, que señala que las autoridades federales conocerán de tales delitos cuando: "Independientemente de la cantidad del narcótico el Ministerio Público de la Federación: a) prevenga en el conocimiento del asunto, o b) solicite al Ministerio Público del fuero común la remisión de la investigación". Por su parte, con la adición del multicitado artículo 474, párrafo primero, se estableció otra regla de competencia, pero a favor de las autoridades locales, específicamente, cuando: a) los narcóticos estén expresamente previstos en la "tabla de orientación de dosis máximas de consumo personal e inmediato", b) la cantidad de dichos narcóticos sea inferior a la que resulte de multiplicar por mil el monto de las previstas en la referida "tabla", y c) no existan elementos suficientes para presumir delincuencia organizada. Así, dicho precepto constituye el fundamento legal para delimitar los ámbitos de competencia concurrente a favor de la Federación y de las entidades federativas, incluido el Distrito Federal, para conocer los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, así como para tener por actualizados los tipos penales y la punibilidad eventualmente aplicable". DELITOS CONTRA LA SALUD EN LA MODALIDAD DE NARCOMENUDEO. EL ARTÍCULO 474 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, CONSTITUYE EL FUNDAMENTO LEGAL PARA DELIMITAR LA COMPETENCIA CONCURRENTA A FAVOR DE LA FEDERACIÓN, LAS ENTIDADES

delitos cuando las leyes otorguen competencia a las autoridades del fuero común, siempre que prevengan en el conocimiento del asunto, o solicite al Ministerio Público local la remisión de la investigación o se actualicen las hipótesis que para tal efecto contemple la ley, así como llevar a cabo las acciones necesarias para solicitar la reparación del daño correspondiente.

Como ha quedado anotado, en esencia el Ministerio Público Federal es responsable de obtener los elementos probatorios para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado –ahora de nombre imputado-,<sup>335</sup> así como solicitar a particulares su aportación voluntaria y, cuando se requiera de control judicial, solicitar al órgano jurisdiccional la autorización u orden correspondiente para su obtención. Tomar conocimiento de las detenciones que en flagrancia o caso urgente se lleven a cabo y que le deban ser notificadas, así como llevar un registro de las mismas. De igual forma está obligado a llevar un registro con la identificación de las personas que intervengan en la cadena de custodia y de las autorizadas para reconocer y manejar los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito. Debe en todo momento cerciorarse de que se han seguido los procedimientos para preservar los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito; asentar cualquier violación a las disposiciones para la recolección, el levantamiento, preservación y el traslado de los mismos, y dar vista a la autoridad competente para efectos de las responsabilidades a que hubiere lugar<sup>336</sup>.

De fundamental importancia el Ministerio Público, tiene la responsabilidad de realizar el aseguramiento de bienes de conformidad con las disposiciones aplicables; así como ordenar

---

FEDERATIVAS Y EL DISTRITO FEDERAL, PARA CONOCER DE AQUÉLLOS. Tesis: 1a./J. 94/2012 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Disponible: [www.scjn.gob.mx](http://www.scjn.gob.mx).

<sup>335</sup> “Indiciado o imputado: Se trataría de aquella persona sospechosa de haber cometido un delito, ya sea como autor, o en concurrencia con otros. A veces se usa de modo genérico, siendo en tal caso su sentido el de la persona contra la que cualquier proceso penal se dirige. También puede usarse tal expresión de un modo más riguroso, concreto y específico, esto es, estaríamos hablando en tal caso de alguien a quien, ya sea la autoridad judicial o policial, se la considera formalmente imputada. ¿Desde cuándo se es imputado?, se adquiere tal condición desde que se comunique a un sujeto la existencia de un procedimiento penal contra él, o se le detenga, o meramente se le cite para ser oído, al haber indicios racionales de la comisión de un delito por parte del mismo. También, obviamente, cuando se decreta su prisión provisional”.

<sup>336</sup> Artículo 123, 123 bis, 123 ter, 123 quater, 123 quintus al 124 Código Federal de Procedimientos Penales. Disponible en [www.diputados.gob.mx](http://www.diputados.gob.mx) consultado el 30 de agosto de 2015.

a la policía que brinde protección a personas respecto de las cuales exista un riesgo objetivo para su vida o integridad corporal por su intervención en procedimientos penales del orden federal. Deberá solicitar al órgano jurisdiccional la prisión preventiva de los indiciados – imputados-, así como requerir de estos, las órdenes de cateo, la imposición del arraigo, la prohibición de abandonar una demarcación geográfica u otras medidas cautelares que resulten necesarias para asegurar el éxito de la investigación y evitar que el probable responsable se sustraiga de la acción de la justicia, la protección de personas o bienes jurídicos y el debido cumplimiento de la sentencia que se dicte. Por último decide sobre el ejercicio de la acción penal; auto de reserva, o bien sobre incompetencia y remitir el asunto a la autoridad que deba conocerlo así como la acumulación de las averiguaciones previas cuando sea procedente<sup>337</sup>.

Ante los órganos jurisdiccionales el Ministerio Público Federal es responsable de ejercer la acción penal cuando exista denuncia o querrela, esté acreditado el cuerpo del delito de que se trate y la probable responsabilidad de quien o quienes en él hubieren intervenido, solicitando las órdenes de aprehensión o de comparecencia. Es responsable de hacer la solicitud de las medidas cautelares, así como de poner a disposición judicial a las personas detenidas dentro de los plazos establecidos por la ley. Debe aportar las pruebas y promover las diligencias conducentes para la debida comprobación de la existencia del delito, las circunstancias en que hubiese sido cometido y las peculiares del inculpado, de la responsabilidad penal, de la existencia de los daños y perjuicios, así como para la fijación del monto de su reparación. Como parte en el proceso penal hará la solicitud del caudal probatorio necesario, a fin de acreditar el delito y la responsabilidad del imputado. Podrá en todo momento inconformarse con las resoluciones, autos o sentencias que dicte la autoridad jurisdiccional<sup>338</sup>.

En materia de atención y seguridad a la víctima o el ofendido por algún delito: es obligación del Ministerio Público Federal proporcionar asesoría jurídica a la víctima u ofendido e informarle de los derechos que en su favor establece la Constitución Política de

---

<sup>337</sup> Artículo 4 fracción I, apartado A), incisos a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, y n, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. *Ibídem*.

<sup>338</sup> Artículo 4, fracción I, apartado b, incisos e y g, de la Ley Orgánica del Procuraduría General de la República. *Ibídem*.



los Estados Unidos Mexicanos y, cuando lo solicite, sobre el desarrollo del procedimiento penal<sup>339</sup>. Como representación social es su deber proteger los derechos e intereses de los menores y las personas incapaces, en todo tipo de juicios no sólo en materia penal. También es misión del Ministerio Público vigilar el cumplimiento de la legalidad y el respeto a los derechos humanos dentro de la esfera de su competencia, al igual que impulsar una pronta y expedita impartición de justicia.

Una vez definido el campo de acción y de funciones que atañen al Ministerio Público, es importante señalar la importancia que guardan respecto de los derechos y garantías fundamentales del estado democrático, es decir que en ejercicio de sus funciones, dicho órgano no está excusado de cumplir con las disposiciones constitucionales en materia de derechos fundamentales. Estos derechos deben ser observados en todo momento por la autoridad ministerial. Partiendo de estas premisas ante el reconocimiento constitucional de los derechos humanos las funciones y responsabilidades del ministerio público deben ser acordes y en respeto irrestricto de los mismos.

Al respecto la Corte Mexicana a su vez ha explicado cómo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido con claridad la obligación para los estados adheridos a la

---

<sup>339</sup> El apartado C, del Artículo 20 Constitucional dispone los derechos de la víctima o del ofendido: I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal; II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa; III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia; IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño; V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa. El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación; VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos, y VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. *Ibidem*.

misma, de garantizar los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, contenida en su artículo 1, numeral 1, cumpliendo de diferentes maneras en función del derecho específico que el Estado deba garantizar y de las particulares necesidades de protección, lo que implica el deber del Estado de organizar todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público que fueren necesarias para asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como parte de dicho compromiso, debe investigar seriamente, con los medios a su alcance, las violaciones que se cometan dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, imponerles las sanciones pertinentes y asegurar a la víctima una adecuada reparación<sup>340</sup>. Estos derechos fundamentales previstos tanto en el tratado internacional referido como en el ordenamiento constitucional mexicano pertenecen a la protección clásica de la libertad personal, la vida, así como la garantía de igualdad, todos ellos derechos fundamentales de primera generación, bases del estado constitucional de derecho<sup>341</sup>.

*a) Policías.*

Las Policías que se encuentra bajo la autoridad y mando inmediato del Ministerio Público de la Federación, se integran por todo el cuerpo de seguridad federal, de conformidad con el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Es decir que para el cumplimiento de las competencias propias de la Procuraduría, de su titular, y del Ministerio Público, se cuenta con las unidades administrativas y órganos desconcentrados, dentro de los cuales se ubica a la Policía Federal Ministerial. Este órgano está facultado para ejecutar los mandamientos judiciales y ministeriales que ordene la autoridad investigadora, teniendo la responsabilidad de cumplir con los procesos de cadena de

---

<sup>340</sup> DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. AL SER EL JUICIO DE AMPARO LA MATERIALIZACIÓN DEL DERECHO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO, RECONOCIDO EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, NO SE REQUIERE DE UNA LEY ADJETIVA PARA INVESTIGAR VIOLACIONES GRAVES A DERECHOS HUMANOS, TRATÁNDOSE DE ESTE DELITO. Tesis: I.9o.P.59 P (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, disponible: [www.scjn.gob.mx](http://www.scjn.gob.mx). Consultado el 20 de junio de 2015.

<sup>341</sup> Cfr. Herdegen, Mathias, *Derecho Internacional Público*, Primera Edición, Fundación Konrad Adenauer, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, D.F., 2005, p. 374.

custodia, para su correcta aplicación y desarrollo. La policía ejerce sus facultades en todo el territorio nacional a través de las unidades administrativas que integran su organización regional<sup>342</sup>.

Esta institución goza de independencia en la delegación de atribuciones conferidas a la Agencia y a sus unidades subalternas, cualquiera de los agentes adscritos están facultados para ejecutar ordenes expedidas bien por el Ministerio Público Federal como autoridad investigadora o bien del órgano jurisdiccional en cumplimiento de una orden expedida por éste último<sup>343</sup>. La Agencia de Investigación Criminal<sup>344</sup> cuenta con un titular nombrado por el procurador encargado de dirigir los trabajos de la institución, con facultades para:

- a) Proponer al Procurador las políticas generales de actuación de la Agencia, vigilando que sus miembros actúen permanentemente bajo la autoridad y mando inmediato del Ministerio Público de la Federación, de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3 del Código Federal de Procedimientos Penales y demás disposiciones aplicables;
- b) Coordinar los servicios de la Agencia para cumplir con las órdenes del Procurador y de las unidades administrativas a cargo de la investigación y persecución de los delitos federales y conexos;
- c) Coordinar la ejecución de las órdenes de aprehensión, reaprehensión, comparecencia, presentación, cateos, detención en caso urgente, y otros mandamientos judiciales o ministeriales;
- d) Diseñar las estrategias y mecanismos de control que garanticen que los miembros de la Agencia actúen con pleno respeto a las garantías individuales y a los derechos humanos,

---

<sup>342</sup> Artículo 3 y 24 y ss., del Reglamento de la Procuraduría General de la República. disponible en [www.diputados.gob.mx](http://www.diputados.gob.mx) consultado el 1 de septiembre 2015.

<sup>343</sup> Capitulo Octavo, Artículo 22 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

<sup>344</sup> DOF: 25/09/2013, Decreto que crea la Agencia de Investigación Criminal, disponible en [www.dof.gob.mx](http://www.dof.gob.mx), consultado el 4 de septiembre de 2015.

apegándose a los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad e imparcialidad que señalan los artículos 21 y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

e) Coordinar la planeación operativa de la Agencia, así como supervisar y evaluar los resultados de las acciones que lleve a cabo y, en general, de la actuación de sus integrantes;

f) Organizar el servicio de protección y seguridad a los servidores públicos de la Institución, así como a otras personas cuando así lo establezcan las disposiciones aplicables o lo determine el Procurador;

g) Proponer, en coordinación con la Dirección General del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal, las políticas, criterios y programas para el ingreso, desarrollo y terminación del servicio de Carrera de los agentes de la policía;

h) Proponer a la Oficialía Mayor la adquisición del armamento, municiones, parque vehicular y equipo policial, destinados al desarrollo de las actividades propias de la Agencia;

i) Realizar la asignación del armamento, municiones, parque vehicular y equipo policial, destinados al desarrollo de las actividades propias de la Agencia; j) Establecer, en coordinación con las unidades administrativas competentes, los mecanismos de intercambio de información policial con las agencias policiales internacionales.

Las agencias de investigación en México pasan por periodos de constantes cambios según la administración federal en turno, en 2001 se creó la Agencia Federal de Investigación, que hoy es la Agencia de Investigación Criminal, en diciembre de 2006 el presidente Felipe Calderón, como parte de la Estrategia Nacional de Combate a la Delincuencia, unificó el mando de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y el de la Policía Federal Preventiva, conformando una sola Policía Federal. Este esquema operó por cerca de dos años hasta que el Congreso de la Unión dio marcha atrás a esta iniciativa. “*La policía investigadora en*

*México tiene un problema que va más allá de corrupción –que por supuesto existe- y es la falta de capacitación de los agentes o falta de equipo necesario para hacer un trabajo de investigación científica”, advierte Martín Barrón<sup>345</sup>, analista del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) quien ha monitoreado en campo casos emblemáticos como las muertes de Juárez, encontramos en Chihuahua graves deficiencias en la recolección de indicios, en la preservación de las evidencias y en la sustentación de pruebas. Así también lo han corroborado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), formado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tiene seis meses en el país en el informe Ayotzinapa, respecto de las primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa<sup>346</sup>*

*b) Servicios Periciales.*

El Reglamento de la Procuraduría de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República crea la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales. Este departamento tiene la responsabilidad de operar, coordinar y supervisar el funcionamiento de los servicios periciales de la procuraduría. Funciona como auxiliar al Ministerio Público de la Federación en la búsqueda, preservación y obtención de indicios y pruebas, a fin de

---

<sup>345</sup> “El problema para tratar las evidencias de un delito es complejo y va desde actos de corrupción hasta ignorancia o falta de condiciones para analizar las pruebas. En México ni siquiera existen almacenes para preservar las evidencias o, al menos, no de manera pública y sistematizada. El exprocurador Jesús Murillo Karam reconoció en su momento que la dependencia que tuvo a su cargo hasta febrero pasado necesita “un cuerpo de investigadores serios, confiables, científicos y con tecnología para combatir a la delincuencia moderna, a veces más moderna que quien la persigue. Ha falta modernidad, a la fecha no existen bancos nacionales de huellas dactilares, ni de datos genéticos ni mucho menos de averiguaciones previas y hasta 2014 faltaban 12 procuradurías con laboratorio propio para genética forense.” Cfr. “México vive una crisis de investigación criminal”, La Opinión, Diario digital en línea, disponible en [www.laopinion.com/mexico-vive-una-crisis-enlainvestigacion-criminal](http://www.laopinion.com/mexico-vive-una-crisis-enlainvestigacion-criminal).

<sup>346</sup> Véase, Valencia Villa, Alejandro, Buitrago Ángela María, Martín Beristáin, Carlos, Paz, Claudia, Baile, Paz, Cox Vial, Francisco, *Informe Ayotzinapa, Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa, Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)*, Primera Edición, Marras Servicios publicitarios, México, D.F., 2015; Véase Elementos para la Construcción de una Política de Estado para la Seguridad y la Justicia en la Democracia, Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia, Hacia una Política de Estado en los Albores del Tercer Milenio, Agosto de 2011, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, disponible [www.unam.mx](http://www.unam.mx).

coadyuvar en el cumplimiento de sus funciones constitucionales de investigación y persecución de los delitos<sup>347</sup>.

Es responsable de elaborar las guías y manuales técnicos que deban observarse, en la formulación de dictámenes que requieran las autoridades competentes, dentro del marco de la autonomía técnica de estos servicios, velando porque se cumplan con las formalidades y requisitos que establecen las leyes del procedimiento, así como con las normas científicas y técnicas aplicables. Al mismo tiempo que diseña las políticas institucionales de actuación de los servicios periciales<sup>348</sup>.

Tiene bajo su responsabilidad el laboratorio central, los laboratorios regionales de Servicios Periciales y en su caso, los existentes en las delegaciones, así como la operación de los bancos de datos criminalísticos de la Procuraduría que se integren al Sistema Nacional de Seguridad Pública, especialmente los de identificación dactiloscópica y fotográfica, así como todos los necesarios para la investigación, que serán distintos de los que administre el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia.

Propone la adquisición del equipo adecuado para el desarrollo de los servicios periciales y se encarga de promover la cooperación en la materia con las Procuradurías de las entidades federativas, así como con otras instituciones. Toma parte en el diseño e implementación de los programas de capacitación y actualización científico-técnica del personal pericial, en coordinación con las unidades administrativas competentes. Interviene en la supervisión técnica y administrativa en la emisión de los dictámenes periciales, a efecto de que éstos cumplan con la metodología pericial y las normas vigentes.

Por último es importante precisar que el desempeño profesional que desarrollan cada uno de los unidades que integran la Procuraduría General de la República están previstas en el Reglamento del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal<sup>349</sup>, el cual

---

<sup>347</sup> Artículo 71 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

<sup>348</sup> Estos manuales de operación están disponibles en [www.pgr.gob.mx](http://www.pgr.gob.mx)

<sup>349</sup> Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, disponible en: <http://www.pgr.gob.mx/que%20es%20pgr/marco%20normativo.asp#>, 2 de febrero de 2011.

comprende a Agentes del Ministerio Público de la Federación, a la Policía Federal Investigadora y los peritos, determinando la actuación y coordinación de las unidades administrativas y órganos competentes de la Procuraduría, así como del resto de organismos y demás instancias que intervienen dentro de la misma. Este reglamento tiene la finalidad de garantizar la igualdad de oportunidades en el ingreso a cualquiera de las secciones que integran la institución, así como el escalafón de ascensos en el Servicio, con base en el mérito y en la experiencia; fijándose la meta de elevar y fomentar la profesionalización de sus miembros y asegurar el cumplimiento de los principios que establece la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

En este tenor los órganos que componen el Estado mexicano se han visto ampliamente convulsionados ante el cambio en la concepción del Estado Constitucional de derecho a la luz del derecho internacional de los derechos humanos y los nuevos esquemas de control constitucional convencional, -esto es que en el caso de México ejerce la Corte Interamericana de Derechos Humanos-<sup>350</sup>. Con este nuevo panorama se dejan atrás la visualización del Estado constitucional únicamente subordinado al principio de legalidad de las constituciones rígidas, experimentando un cambio en las condiciones de validez de las leyes; en la determinación de las formas legislativas, imponiéndoles a los Estados y sus órganos las obligaciones de contenido relativas a los derechos, anteponiendo principios fundamentales como la dignidad humana, la libertad, la igualdad, relativos a la estructura y fines del Estado democrático social, posicionando los derechos fundamentales<sup>351</sup>.

Sin ningún género de duda la nota trascendental de este nuevo modelo de Estado es la preponderancia de la dignidad humana, alrededor de donde giran los derechos humanos, mismos que le otorgan sustento y fundamento, al Estado mismo. Hace pues responsable al Estado en cuestión de la responsabilidad internacional en que ésta incurre por la realización

---

<sup>350</sup> México ratifica la Convención Americana el 24 de marzo de 1981, pero admite la competencia contenciosa de la Corte hasta 16 de diciembre de 1998. Véase García Ramírez, Sergio, *“Admisión de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”*, en García Ramírez, Sergio y Castañeda Hernández, Mireya (coord.). *Recepción Nacional del derecho internacional de los derechos humanos y admisión de la competencia de la Corte Interamericana*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 2009.

<sup>351</sup> Cfr. Ferrajoli, Luigi, *Teoría Neoconstitucionalismo*, Ensayos escogidos, Primera Edición, Editorial Trotta, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Madrid, 2007, pp.71 y ss.

de actos que atentan contra los derechos fundamentales, sin importar el agente, poder órgano o nivel de gobierno que haya cometido las violaciones respectivas aún en el caso de los Estados Federales. Estas violaciones pueden producirse por actos y omisiones de diversa naturaleza, cometidos por los órganos del Estado en el ejercicio de funciones administrativas, actuaciones o resoluciones judiciales e incluso leyes<sup>352</sup>. Por ultimo las sentencias condenatorias a México de parte de la Corte Interamericana como Caso González y otras: “Campo Algodonero” sentencia del 16 de noviembre de 2009; Caso Radilla sentencia de 23 de Noviembre de 2009; Caso Fernández Ortega y Rosendo Cantú sentencia de 30 y 31 agosto de 2010; Caso Cabrera y Montiel Flores sentencia de 26 de noviembre de 2010<sup>353</sup>, todos estos asuntos han puesto en evidencia las fallas importantes tanto en los aparatos del Estado, la responsabilidad de por parte de las instituciones de investigación, como de procuración y administración de justicia en apego y respeto a los derechos humanos<sup>354</sup>.

#### ***a) Nuevas competencias del Ministerio Público en el Proceso Penal:***

En el apartado que antecede nos hemos referido ampliamente a las facultades que desempeña el Ministerio Público, dentro de sus facultades de investigación de delitos, de

---

<sup>352</sup> En la Sentencia pronunciada por la Corte Interamericana relativa al Caso González y otras (Campo Algodonero) vs. México de manera expresa establece que fue ostensible una actitud prejuiciosa de las autoridades (mexicanas) respecto de la conducta de las víctimas, y fue evidente la poca intención de realizar las indagatorias pertinentes, en su primer momento para localizar a las víctimas y posteriormente para el esclarecimiento de los hechos, situación que ha prevalecido en el tiempo. En estas condiciones, la Comisión Interamericana, previo el trámite correspondiente, somete el caso ante la Corte misma que consideró que México violó los derechos de la vida, integridad personal y libertad personal de las tres jóvenes, en relación con la obligación general de garantía, incumpliendo con su deber de investigar y de adoptar disposiciones de derecho interno, así como sus derecho de acceso a la justicia, protección judicial y el deber de no discriminación. En cuanto a la condena la Corte determino obligaciones para el Estado y sus órganos encargados de investigación y persecución de delitos la estandarización de protocolos, manuales, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y de impartición de justicia con una perspectiva de género, derivado del caso concreto. Sentencia del 16 de Noviembre de 2009. Véase Ferrer Mac-gregor, Eduardo, Eduardo y Silva García, Fernando. *Los Feminicidios en Ciudad Juárez ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Campo Algodonero. La segunda sentencia condenatoria del Estado mexicano*, Porrúa, UNAM, México, D.F., 2011.

<sup>353</sup> Todas estas sentencias pueden ser consultadas en [www.corteidh.org.cr/porpais.cfm](http://www.corteidh.org.cr/porpais.cfm).

<sup>354</sup> Cfr. Rangel Hernández Laura, *Sentencias Condenatorias al Estado mexicano dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sus implicaciones en el orden jurídico nacional*, IUS, Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, México, Año V, No. 28, Julio-Diciembre de 2011, p.160-186.



igual forma que a la responsabilidad de ejercer la acción persecutoria ante los tribunales. No sólo en representación del poder coercitivo del estado, sino también de la sociedad que se ve beneficiada con la labor de aquel en el combate a la criminalidad.

La tendencia del derecho mexicano en materia procesal penal no ha sido favorable al ofendido. La legislación en la materia ha supuesto una situación de abandono relativo de la víctima, generalmente explicado bajo el argumento de que la asunción estatal del *jus puniendi*, la prevalencia del principio de oficialidad estricta, con todas sus consecuencias, naturales o artificiosas, conducía a destacar el papel del Ministerio Público como representante de la sociedad más no de los individuos afectados por un hecho delictivo cometido en su contra, en este tenor se menoscaba el papel procesal del ofendido, representado por el acusador público.

Sin embargo es necesario advertir, el nuevo esquema de responsabilidades que nacen para el Ministerio Público respecto de la situación constitucional y legal del ofendido y víctima del delito. La desigualdad que se creó durante décadas en la atención de los derechos que asisten al inculcado, es innegable, como también los que asisten a la víctima dentro del proceso penal. En el transcurso del presente ejercicio académico hemos hecho referencia a los diversos estudios y ejercicios de evaluación y de opinión pública respecto del cambio constitucional y legal al sistema de justicia penal, algunos elaborados por la Suprema Corte Justicia de la Nación, otros por el Centro de Investigación y Docencia Económicas abordando distintos aspectos de las reformas. En el presente apartado haremos referencia al Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados (CESOP), que según a uno de sus ejercicios llevado a cabo en 2007 encontraron que la evaluación social ubicó la crisis de seguridad, debido a la crisis económica, y que a consecuencia de este fenómeno venía el problema de la inseguridad y delincuencia<sup>355</sup>. Este mismo estudio arrojó que también hizo saber que a más del 70% de la población le preocupa ser víctima de alguno de los siguientes delitos: robo con violencia,

---

<sup>355</sup> Cfr. Rodríguez Olvera, Oscar, Espinosa, Sandra, *“Impacto de la inseguridad pública en los derechos fundamentales”*, Reporte CESOP No. 4, SEGURIDAD PÚBLICA, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, XL Legislatura, agosto 2007, p. 11; *“Pulso Ciudadano” (indicadores selectos de opinión pública)*, Núm. 39, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados (CESOP), XL Legislatura, noviembre de 2007, página 23; *“Opinión pública sobre justicia”*, Reporte CESOP No. 8, PODER LEGISLATIVO Y OPINIÓN PÚBLICA, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados (CESOP), XL Legislatura, diciembre de 2007, página 48.

secuestro o extorsión.

A través de estas evaluaciones se concluye que la opinión pública en México evalúa el sistema de procuración e impartición de justicia penal con problemas graves de diseño y operación, además de que se ha generado una profunda crisis de credibilidad social respecto de todo el Estado mexicano en el ámbito federal y local en materia de seguridad pública. Sin embargo uno de los objetivos generales planteados por la reforma además la procuración e impartición de justicia penal consiste en garantizar que todas las personas víctimas y ofendidos accedan a un sistema de justicia penal más expedito y equitativo, reconociéndoles la categoría de sujeto procesal, que se traduce en otorgamiento de las disposiciones y las herramientas jurídicas para intervenir en el proceso penal en protección de sus intereses.

Así, previo a la reforma de 2008, la constitución hacía una débil defensa de los derechos del ofendido. El desinterés general para la víctima y ofendido surge de también de las mismas ciencias penales, por ejemplo la Escuela Clásica del derecho penal centro su interés en el delito como ente jurídico, para esta disciplina importaron básicamente el hecho delictuoso y la justa retribución al responsable del mismo, esta escuela se centró en la teoría del delito dejando al delincuente en un segundo plano y por supuesto también a la víctima<sup>356</sup>. Desde otra perspectiva la Escuela Positiva se centró en el estudio del hombre antisocial, bajo la Tesis Lombrosiana en un esfuerzo por la integral comprensión de la persona criminal, más que por la víctima del delito olvidándose de esta<sup>357</sup>.

En 1985 se promulga por la Organización de las Naciones Unidas la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, en este documento se conceptualizó la figura de la víctima del delito. En este documento internacional se dijo que las víctimas del delito son: *“las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, incluso lesiones físicas o mentales, sufrimiento*

---

<sup>356</sup> Cfr. Manzanera Rodríguez, Luís, *“Situación actual de la Victimología en México. Retos y perspectivas”*, Gaceta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Número 65, Enero-Febrero, CODHEM, México, 2004, p. 68, [www.codhem.org.mx](http://www.codhem.org.mx) consultado el 1 abril 2015.

<sup>357</sup> *Ibidem*, p. 68, Véase la obra de Lombroso sobre *“El hombre delincuente”*, Lombroso, Cesar. L' Uomo Delicente, Fratelli Bocca, Editori, Italia, 1876.

*emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados miembro, incluida la que proscribe el abuso de poder, considerando también a los familiares o persona a cargo que tenga relación inmediata directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización”*<sup>358</sup>.

En México se han tenido avances en materia de la victimología tanto en la teoría como en la práctica, iniciando discusiones sobre la reparación del daño. En 1969 se publica la Ley sobre el Auxilio a las Víctimas del Delito del Estado de México en el Periódico Oficial del Estado de México. En el año de 1993 se adicionó el último párrafo del Artículo 20 constitucional<sup>359</sup> donde se estableció que en todo proceso del orden penal, la víctima u ofendido del delito, tendría derecho a recibir asesoría jurídica, a que se le satisfaga la reparación del daño cuando proceda, a coadyuvar con el Ministerio Público, y a que se le preste la atención médica de urgencia cuando lo requiriera. En diciembre de 1994 se adicionó el párrafo cuarto del Artículo 21 constitucional<sup>360</sup> estableciendo el derecho del ofendido o víctima del delito de impugnar por vía jurisdiccional las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio de la acción penal<sup>361</sup>. Por último, las reformas emprendidas a partir de septiembre del año 2000 han permitido cambiar el trato legal del ofendido, asignándole el carácter de sujeto procesal, estableciendo los derechos que le asisten en dentro del proceso penal<sup>362</sup>.

---

<sup>358</sup> Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Resolución 40/34 de 29 de noviembre de 1985. Disponible en [www.onu.org](http://www.onu.org). Consultado 1 de abril 2015.

<sup>359</sup> Disponible en <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/>, 27 de febrero 2011.

<sup>360</sup> Disponible en <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/>, 27 de febrero 2011.

<sup>361</sup> Véase Lima Malvido, María de la Luz, *Modelo de atención a víctimas en México*, Sociedad Mexicana de Criminología, México, 1995.

<sup>362</sup> El artículo 20 constitucional prevé que “El proceso penal será acusatorio y oral”, sumado a lo anterior, el inciso C, establece que en ese proceso la víctima u ofendido tendrá diversos derechos. En el artículo 20 constitucional existen otros beneficios procesales a favor de la víctima, además de los que se explicaron en el apartado anterior, establecidos en los incisos A y B.

En el inciso A, se establecen los principios generales del proceso penal, mismos que al ser aplicados por las autoridades representarán mayores garantías procesales para la víctima. Igualmente el Artículo 19 de la Constitución Mexicana ofrece las alternativas de aseguramiento del imputado en beneficio de la víctima y ofendido. Ley Orgánica de la Procuraduría General de República, así como la Ley Orgánica del Poder Judicial

En este universo el único conducto para la gestión de los intereses particulares, patrimoniales, morales de la víctima y ofendido ante el tribunal se deposita en el Ministerio Público. Está claro que la condición de ofendido puede recaer en cualquiera, bien en la integridad corporal, o respecto del patrimonio, incluyendo en personas inimputables, personas morales, no nacidos etc. En el caso de presentarse una lesión a los derechos fundamentales de la víctima y ofendido, los criterios de la Corte Mexicana han sido amplios en reconocer las posibilidad de ser parte quejosa en un Juicio de Amparo ante la violación de algún tipo por ejemplo cuando se impugne el derecho de ofrecer y desahogo de prueba que no haya sido respetado por la autoridad<sup>363</sup>.

En este sentido, el Ministerio Público establece frente a la víctima una doble relación, porque en primer lugar examina desde la perspectiva de ésta, si desea obtener una visión completa y sustancial del hecho delictivo, así como de la dinámica que desencadenó la conducta delictiva, al mismo tiempo, su análisis deberá situarse en su condición de defensor de oficio o particular en la preservación de los derechos del ofendido<sup>364</sup>. Desde 1980 el Maestro Sergio García Ramírez viene afirmando que: *“Es parcial e insuficiente, social y jurídicamente, una actividad ministerial que agotase con diligencia la comprobación de los hechos típicos y la solicitud puntual de la pena, si no hiciera lo mismo, y con idéntico esfuerzo, en lo que atañe a la reparación del daño privado que arrojo el delito”*<sup>365</sup>.

Si bien la figura de la víctima del delito no ha sido un tema nuevo, dentro del proceso penal, este ha pasado inadvertido durante mucho tiempo por la doctrina y por el legislador. Tal como lo hemos analizado, en México existió un enorme abismo en la atención a la víctima por el sistema jurídico, tanto en los órganos estatales y sus funcionarios por un

---

Federal reconocen el papel preponderante de parte de la víctima y el ofendido; todas las leyes y códigos de los Estados en México disponen los derechos de la víctima y ofendido así como los mecanismos para poder intervenir en el proceso penal; La ley General de Víctimas promulgada el 9 de enero de 2013.

<sup>363</sup> Tesis: LXXXVIII/2011, Tesis: LXXXIX, Tesis: XC/2011, Tesis: CVII/2011, Tesis: CVIII/2011, Tesis: 1ª./J.114/2011, disponible en [www.scjn.gob.mx](http://www.scjn.gob.mx), consultado el 1 de septiembre d 2015.

<sup>364</sup> Cfr. García Ramírez, Sergio, *Justicia Penal*, Primera Edición, Editorial Porrúa, México, 1982, p.151.

<sup>365</sup> Ibídem, p.151-152.

lado, como en la política criminal y victimología por otro, enfrentando a estos sujetos procesales a la falta de proporcionalidad en relación a los derechos que les asisten.

Hoy por hoy, nos encontramos con que el órgano legislativo abre un nuevo camino para asignar constitucionalmente derechos a ofendido y de víctima del delito, según Olga Isla<sup>366</sup> el actual redescubrimiento de la víctima, aún es tímido, tardío y desorganizado, que por cierto expresa la imperiosa necesidad de verificar, a la luz de la ciencia, la función real que desempeña la víctima del delito en diversos momentos del proceso criminal.

A partir de las reformas del año 2000 y las respectivas del año 2008 en México se elevaron a rango constitucional los derechos de la víctima y ofendido por del delito, con el objeto de que estos se ejerzan y se protejan dentro del proceso penal. En lo que atañe a los derechos a favor de la víctima o el ofendido, sin embargo, el cual actual Artículo 20 constitucional, apartado C, establece los derechos constitucionales en favor de la víctima y ofendido por la comisión de un delito, tales como recibir asesoría jurídica; ser informados de desarrollo del procedimiento penal; coadyuvar con el Ministerio Público, recibir la atención médica y psicológica desde la comisión del delito; que se le repare el daño; al resguardo de su identidad y sus datos personales; solicitar las medidas cautelares para la restitución y protección de sus derechos y por ultimo tiene derecho a impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, las resoluciones de reserva, no ejercicio o desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño<sup>367</sup>.

En el caso de la asesoría jurídica más que una asesoría de naturaleza legal, deberá contemplarse una representación legal y defensa concretamente de la víctima durante todo el procedimiento penal, y no sólo primeros auxilios jurídicos dice María Teresa

---

<sup>366</sup> Cfr. Islas de González Mariscal, Olga, *"Derechos de las víctimas y de los ofendidos por el delito"*, Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México D.F., 2003, p. 19 y ss., también Véase Ambrosio Morales, María Teresa, *"La Atención a los Ofendidos y a las Víctimas de los Delitos en México"*, Estudios Jurídicos en Homenaje a Olga Islas de González Mariscal, Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 2007, p. 68.

<sup>367</sup> Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación 2 de diciembre de 1948. Disponible en <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/>, 25 de febrero de 2011.

Ambrosio<sup>368</sup> apuntando la necesidad de crear un defensor específicamente para la protección y tutela de los derechos e intereses de víctimas y ofendidos.

Dentro del nuevo esquema de derechos que le asisten a la víctima encontramos la coadyuvancia con el Ministerio Público, -por ser éste-, quien ejerce la acción penal en forma exclusiva conforme lo prevé la Constitución Mexicana en su Artículo 21, además de tener bajo su responsabilidad la representación de los intereses de la víctima en el proceso penal. Sin embargo la víctima no es quien persigue el delito, sino tan sólo auxilia al titular de la acción penal para lograr que al integrar la investigación y fincar responsabilidad ante el juez penal, se logre una sentencia condenatoria que obligue al procesado a la reparación del daño<sup>369</sup>.

A pesar de este universo, sin duda podemos referir algunos avances en cuanto a la protección constitucional de los derechos de la víctima y ofendido del delito por parte de la Corte mexicana, a partir de la reforma constitucional al artículo 1 constitucional de 2011, *“conforme al principio de progresividad en la protección de los derechos humanos, entre ellos, los derechos de acceso a la justicia y recurso efectivo, garantizados en los artículos 1º, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la víctima u ofendido del delito tiene la legitimación para impugnar, a través del juicio de amparo directo, la constitucionalidad de todos los apartados de la sentencia definitiva condenatoria...debe entenderse como la amplitud de protección establecida en el artículo 20 constitucional y analizar cuando se reclama la afectación personal y directa de algunos de los derechos humanos ahí reconocidos. Dicha legitimación es acorde con el principio de equilibrio de las partes procesales en materia penal y con el reconocimiento de la calidad de parte activa en el sistema procesal a favor de la víctima u ofendido del delito...la legitimación de la víctima u ofendido para promover el juicio de amparo directo debe interpretarse en*

---

<sup>368</sup> Cfr. Ambrosio Morales, María Teresa, *“La Atención a los Ofendidos...”*, op.cit., p.71.

<sup>369</sup> Ibídem, p. 72 y ss.

*sentido amplio y protector como instrumento legal y eficaz que garantice la protección de sus derechos humanos, en franca oposición del delineamiento de acciones regresivas”<sup>370</sup>.*

En el debate del derecho penal moderno el tema central es la sanción con un enfoque que si falla el derecho penal, también falla el control social que aquel debe proporcionar, hoy por hoy –dice Verónica Martínez Solares- “*la sanción*” es vista como el elemento central de las políticas criminales de los Estados en los últimos tiempos. Desde esta óptica la sanción como la reparación del daño no son una de las finalidades primordiales de la pena, pocas veces se aplican, y más que ser una reparación del daño se convierten en una simple indemnización, si tomamos en cuenta que lo que la víctima pierde por la comisión del delito, es mucho más que solamente sus bienes materiales o la propia vida. A menudo los sistemas de justicia penal en materia de víctimas y ofendidos son lentos, defectuosos, sobrevictimizantes e ineficientes<sup>371</sup>. Sin duda que el auge de la delincuencia pone de manifiesto la debilidad del Estado y con ello la ineficacia de los sistemas penales, cuya reacción es únicamente a través del aumento de penas, de una manera más violenta y menos garantista. La política criminal no puede dejar de atender la perspectiva de la víctima<sup>372</sup>. Ante este panorama se vuelven necesarios la búsqueda de alternativas de solución que tengan como objetivo a la sociedad evitando la reproducción de ciclos violentos, que resultan en sociedades menos polarizadas por el lastre de la delincuencia y la respuesta violenta de parte del Estado.

## **2. Etapas del Proceso Penal.**

Existen elementos que son comunes a la materia procesal, así encontramos que las disciplinas del derecho, además de gozar de su regulación constitucional, tienen códigos

---

<sup>370</sup> Tesis: 1ª./J.40/2013; 1.7ª.P.J/1 (20ª); 1ª./J.103/2001. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, disponible en [www.scjn.com.mx](http://www.scjn.com.mx) consultado el 15 de octubre de 2013.

<sup>371</sup> Cfr. Martínez Solares, Verónica, “Víctimas y Justicia...”, op.cit., p.77

<sup>372</sup> Véase, Romero Apis, José Elías, “*Los Derechos Humanos y las Víctimas del delito en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*”, Lima Malvido, María de la Luz, “Modelos de Atención a Víctimas del Delito”, *Ibíd.*

sustantivos y adjetivos, cuyo contenido objetivan y desarrollan los derechos que protegen, ¿quiénes tiene la condición de sujetos procesales?, así como el camino que hay que seguir para la resolución de una determinada controversia de cada una de las materias. Baste mencionar la materia civil, laboral, administrativa, de amparo. Por supuesto que la materia penal no será la excepción, ya que dentro de su fisionomía de derechos, de estructura institucional y de funcionamiento, es necesario distinguir las etapas que componen –o han compuesto- el procedimiento penal en general, a través de los tiempos.

El conocimiento de las partes del proceso penal es de importancia crítica en la práctica, pues en esta materia es bastante recomendable no solamente invocar la opinión doctrinal, es de igual importancia dar un vistazo a las etapas desde el punto de vista didáctico, aunque más que tratar de delimitar dichas etapas es conveniente centrarse en el flujo y trámite que sigue el proceso, en sí mismo. Ahora será necesario entrar al estudio de las etapas que componen el proceso penal en México, para ubicar los límites, términos y funcionarios que intervienen –y han intervenido, desde su configuración como un proceso mixto, anterior al sistema acusatorio actual- en cada una de sus fases, que nos ayude a reconocer los momentos más importantes que han delimitado cada una de las partes del procedimiento.

La estructura exterior del proceso es el procedimiento, dice Fairén Guillén ya que dentro de éste subyacen los principios, inspirados del mismo como vehículo para la tutela de los intereses jurídicamente protegibles por parte de una entidad superior -que será en este caso la jurisdicción- provista de potestades suficientes para poner en acción tales actos de protección<sup>373</sup>, este concepto concatenado a la jurisdicción, se convierte en la potestad de juzgar y ejecutar lo juzgado en todo tipo de procesos que corresponde exclusivamente para su conocimiento a los jueces y tribunales determinados por ley, de conformidad con las competencias y procedimientos que las mismas establezcan los Estados por medio de una constitución, o bien provengan de los tratados internacionales<sup>374</sup>.

---

<sup>373</sup> Cfr. Fairén Guillén, Víctor, *Teoría General del Derecho Procesal*, Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 1992, p.36

<sup>374</sup> *Ibíd*em, p. 103.



El término “proceso”<sup>375</sup> engloba una realidad más amplia; además del procedimiento legalmente previsto, incluye también las relaciones entre los sujetos intervinientes, las relaciones entre éstos y el objeto del proceso, etc. El proceso, además, aspira a una finalidad, que es la terminación o justa composición del litigio, y para llegar a ella emplea el procedimiento como medio. Todo proceso implica la existencia de un procedimiento; pero puede que exista un procedimiento sin que haya proceso alguno. El proceso, se define como el conjunto de actos realizados por el juez ante la presencia o con intervención de las partes contendientes, hasta dictar sentencia definitiva.

El proceso judicial<sup>376</sup> es básicamente la exigencia constitucional para el desarrollo rogado de la jurisdicción. El proceso sirve a la satisfacción de los intereses jurídicos socialmente relevantes, siendo el medio constitucionalmente instituido para ello. El proceso como tal puede tener diferentes significados, por ejemplo:

- a) En el momento constitucional, el debido proceso es el instrumento constitucionalmente previsto para la tutela de los intereses legítimos de las personas;
- b) En el momento procesal, el proceso tiene un contenido concreto, y se trata de un proceso específico, que es la articulación concreta que posibilita el desarrollo de la función jurisdiccional.

En cuanto al procedimiento, este consiste en el conjunto de normas jurídicas generales que regulan los trámites, actos y resoluciones a través de los cuales los jueces y tribunales ejercitan su potestad jurisdiccional juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado.

---

<sup>375</sup> Eduardo J. Couture nos explica que el vocablo “proceso” significa, progreso, transcurso del tiempo, acción de ir hacia adelante, desenvolvimiento. Desde este punto de vista el proceso jurídico es un cumulo de actos, su orden temporal, su dinámica, la forma de desenvolverse. Definiendo al proceso judicial, como una secuencia o serie de actos que se desenvuelven progresivamente, con el objeto de resolver, mediante un juicio de la autoridad, es decir el conflicto sometido a su jurisdicción. Cfr. Couture J. Eduardo, *Fundamentos del Derecho Procesal Civil*, Tercera Edición, Depalma, Buenos Aires, 1958, p.122.

<sup>376</sup> “...la idea de proceso es necesariamente teleológica, es decir en cuanto a su fin, la decisión del conflicto mediante un fallo que requiere autoridad de la cosa juzgada. En este sentido el proceso equivale a causa, litigio, pleito y juicio. De lo cual se advierte la relación jurídica, entendiéndose como el vínculo que la norma de derecho establece entre el sujeto del derecho y el sujeto del deber. La relación jurídica procesal consiste en el conjunto de ligámenes, de vinculaciones, que la ley establece entre las partes y los órganos de jurisdicción recíprocamente, y entre las partes entre sí...”. *Ibidem*, p.123.

En cuanto al término juicio, se emplea muy a menudo en la legislación procesal, y ello se debe a la tradición histórica, ya que en el derecho medieval juicio equivalía a sentencia. Hoy en día, juicio y proceso aluden al mismo fenómeno, pero mientras que el juicio se refiere a la acción de juzgar, el proceso se refiere al medio empleado para ello. Dentro del proceso existe un juicio, pero no todo juicio puede identificarse con el proceso. Solamente son ambos términos equivalentes cuando la acción de juzgar la desarrollan órganos investidos de potestad jurisdiccional<sup>377</sup>.

En apartados anteriores hemos explicado como en México en la actualidad subsisten dos tipos de procedimientos por lo que al procesal penal se refiere, uno de ellos se le ha denominado como procedimiento tradicional y otro de corte acusatorio adversarial, con fisonomías y estructuras completamente distintas<sup>378</sup>.

A diferencia del sistema acusatorio, el sistema y el procedimiento que se conoce como tradicional se distinguen en que la intervención del Ministerio Público realiza las actuaciones tendientes a determinar los hechos materia del proceso, etapa procesal conocida como pre instrucción así determinado por artículo 1 fracción II del Código Federal de Procedimientos Penales<sup>379</sup>. Podemos decir que de acuerdo con este método de procesamiento penal, el proceso penal en sentido estricto tiene su inicio con el auto por el

---

<sup>377</sup> Véase Alcalá-Zamora, Niceto, *Estudios de Teoría General e Historia del Proceso (1945-1972)*, Tomo II, Número 12-30, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 1992.

<sup>378</sup> En los Estados del país donde los códigos adjetivos no han sido adaptados conforme a las disposiciones de la reforma constitucional de 2008, siguen la tramitación de los procesos penales, conforme a las reglas del proceso inquisitivo o mixto. En este procedimiento a la investigación se le llama averiguación previa, donde la autoridad rectora es el Ministerio Público en la integración de la averiguación, para posteriormente efectuar la consignación al juez penal y resolver la situación jurídica así como dar inicio al período de instrucción donde se hacen la aportación de pruebas, para después pasar a las conclusiones y alegatos de las partes y la posterior sentencia. Para los Estados que migraron al sistema acusatorio oral, modificando los códigos al sistema oral, bajo los principios de oralidad, inmediación, concentración, contradicción, publicidad conforme a las reglas establecidas por la constitución mexicana. La estructura cambia los jueces ordinarios, se vuelven jueces de garantía o de control ante los cuales se exponen por parte del Ministerio Público las evidencias que le dan soporte a su acusación ante el juez. El proceso se compone de una audiencia de formulación de imputación, de vinculación a proceso, una audiencia intermedia de desahogo de pruebas y finalmente la audiencia de juicio oral. En esta última etapa el tribunal oral está conformado por personas distintas al órgano juzgador primario que conoció de la instrucción del proceso. Es decir de la depuración de los elementos del tipo constitutivos de delito y la responsabilidad el individuo.

<sup>379</sup> Artículo 1 fracción II: El presente Código comprende los siguientes procedimientos: (...) II.- El de preinstrucción, en que se realizan las actuaciones para determinar los hechos materia del proceso, la clasificación de éstos conforme al tipo penal aplicable y la probable responsabilidad del inculpado, o bien, en su caso, la libertad de éste por falta de elementos para procesar (...);

cual el Ministerio Público a través de su investigación y logra que el Juez decrete la detención del imputado, o el auto de formal prisión, -que en el sistema acusatorio se conoce como auto de vinculación a proceso- dependiendo de las circunstancias de cada caso en concreto, es decir si existe o no persona detenida<sup>380</sup>.

La legislación adjetiva en materia penal atribuye un doble papel al Ministerio público: como autoridad, al asumir la titularidad del procedimiento penal en su primera etapa denominada averiguación previa o de investigación, desempeñándose como el encargado de resolver las diligencias legalmente necesarias para que el Ministerio Público este en posibilidad de resolver si ejerce o no acción persecutoria, y como parte ante el órgano jurisdiccional sosteniendo una sólida acusación sobre la probable comisión de unos hechos calificados como delito y su imputación de los mismos a persona determinada. El carácter de autoridad la pierde una vez que ejerce la acción penal ante el juez, momento en el que pasa a ser sólo parte procesal<sup>381</sup>.

El sistema de enjuiciamiento en México no admite iniciar el proceso *ex officio*, para ello se requiere de la intervención del Ministerio Público para poner en movimiento al órgano

---

<sup>380</sup> Cfr. Ojeda Bohórquez, Ricardo, “*Los Distintos Procesos Penales en el Orden Federal Mexicano*”, Temas de Procesal Penal de México y España, VV.AA coordinadores., Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 2005, p. 78.

<sup>381</sup> AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LOS DATOS DE PRUEBA ANUNCIADOS POR EL IMPUTADO O SU DEFENSOR DURANTE EL TÉRMINO CONCEDIDO PARA RESOLVERLO, DEBEN ADMITIRSE Y DESAHOGARSE POR EL JUEZ DE CONTROL ANTE QUIEN FUE PUESTO A DISPOSICIÓN AQUÉL Y NO POR EL MINISTERIO PÚBLICO, DE LO CONTRARIO, SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO). De la interpretación de los artículos 19 y 20, apartado B, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 27, fracción I y 296 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, se concluye que el facultado para admitir y desahogar los datos de prueba anunciados por el imputado o su defensor durante el término concedido para resolver respecto de la vinculación o no a proceso, es el Juez de control ante quien se puso a disposición dicho indiciado y no el Ministerio Público. La circunstancia de que esos datos se desahoguen ante esa autoridad judicial y no ante la representación social no modifican la forma de razonar sobre su idoneidad, pertinencia y suficiencia al pronunciarse sobre la vinculación o no a proceso del inculcado, o bien, que dichos datos se encuentren en un estándar probatorio mayor a los anunciados por la representación social. Lo anterior sólo es una excepción a la regla, cuyo objetivo, por un lado, es que el Juez mencionado vele directamente, como parte de las funciones para las que fue creado, que ese derecho u oportunidad que le concedió el legislador al imputado sea cumplido, es decir, que se efectivice y, por otro, asegura la regularidad y buena fe del procedimiento en esa etapa, como lo disponen los numerales 178 y 179 del código citado, pues evita que la representación social entorpezca u obstaculice el desahogo de los datos de prueba ofertados por el imputado; de lo contrario, se actualiza una violación a las leyes del procedimiento que amerita su reposición. Tesis: II.1o.P. J/4 (10a.), Semanario Judicial de la Federación, disponible en [www.scjn.gob.mx](http://www.scjn.gob.mx), consultado el 30 de agosto 2015.

jurisdiccional en todos los casos, y que éste en respuesta ejerza sus facultades en el conocimiento y resolución de la controversia penal, planteada ante éste. Una vez sustentada la acusación ante el tribunal –que es lo que propiamente da inicio al proceso como tal-, éste determinara la convergencia de una serie de elementos<sup>382</sup>. En primer lugar los sujetos que intervienen, el objeto del procedimiento penal así como los actos procesales que lo integran. Debe advertirse que a raíz de la reforma constitucional de 8 de junio de 2008, se introduce la posibilidad de que los particulares ejerciten penalmente la acción privada, en la inteligencia de que serán las leyes secundarias las que detallen hipótesis, condiciones y términos para su ejercicio, incluso en diversas entidades federativas que ya tienen establecido el sistema acusatorio-adversarial prevén la posibilidad de que el ofendido o la víctima ejerciten la acción penal privada.

Esta reforma abre la posibilidad de ejercer directamente la acción penal por parte de los particulares, en los casos en que expresamente lo disponga la norma secundaria, sin perjuicio de que el Ministerio Público pueda intervenir en estos supuestos para salvaguardar el interés público, pues se estima que contribuye en forma importante a elevar los niveles de acceso a la justicia en materia penal. De suerte que, la reforma incluyó la acción penal privada, como una opción en determinados delitos, y es de carácter optativo, en el caso de que el particular decida acudir ante el Ministerio Público, éste deberá ejercer acción penal en estos mismos delitos al igual que en los demás casos tal y como lo establece el Artículo 21 constitucional.

La razón por la que se decide incorporar la figura de la acción penal privada en el proceso penal mexicano, fue para contribuir “en forma importante a elevar los niveles de acceso a la justicia en materia penal”, estimando que dicha intervención debería ser evidentemente excepcional y sólo en aquellos casos en los que el interés afectado no sea general. A su vez en el mandato constitucional se establece, con respecto a la nueva figura, que será decisión del legislador al crear las leyes secundarias, el definir en qué delitos el particular podrá ser actor penal. Los delitos a los que se aplique tendrán que ser aquellos en que sea menor el reproche social, por lo que la instancia se adaptará a determinados

---

<sup>382</sup> Artículo 2º, 113 y 114 del Código Federal de Procedimientos Penales, disponible en [www.diputados.gob.mx](http://www.diputados.gob.mx) consultado el 30 de agosto de 2015.

asuntos de preponderante interés privado<sup>383</sup>.

El Artículo 4º del mismo Código de Federal de Procedimientos Penales<sup>384</sup> acota la competencia dentro del procedimiento penal tradicional, respecto de las etapas de pre instrucción, instrucción y primera instancia de los tribunales federales a quienes corresponde de manera exclusiva el conocimiento y resolución del proceso penal en materia federal, así como la individualización de la penas y medidas de seguridad que establezca las leyes adjetivas.

## **2.1. La Pre instrucción.**

Esta etapa procesal se compone de una serie de actos concatenados cada uno con distinta naturaleza, pero que al enlazarlos se está en posibilidad de actuar de una manera o de otra. Es decir que al inicio del procedimiento pueda existir una persona detenida, acusada de la comisión de unos hechos calificados como delito, o bien que los hechos hayan sido denunciados ante el Ministerio Público, poniendo en marcha el aparato investigador, en contra de quien resulte responsable, esto es sin que exista una persona acusada en concreto.

El inicio de la etapa procesal se marca con la emisión del auto de radicación por el juez, objetivando la relación procesal, sujetando a las partes a la autoridad del tribunal. No hay que olvidar que el titular de esta etapa procesal es el órgano jurisdiccional, que dirige a partir de este momento los destinos del procedimiento hasta su conclusión con la sentencia

---

<sup>383</sup> En nuestro México la instrumentación de esta acción ejercida por el particular se ha estado regulando paulatinamente y a la fecha, en ocho estados de la República han puesto en marcha, de manera total o parcial, el nuevo sistema procesal penal acusatorio y oral. Los Estados que han adoptado la acción penal privada en sus ordenamientos adjetivos son Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, Morelos, Oaxaca y Zacatecas.

<sup>384</sup> Artículo 4o.- Los procedimientos de preinstrucción, instrucción y primera instancia, así como la segunda instancia ante el tribunal de apelación, constituyen el proceso penal federal, dentro del cual corresponde exclusivamente a los tribunales federales resolver si un hecho es o no delito federal, determinar la responsabilidad o irresponsabilidad penal de las personas acusadas ante ellos e imponer las penas y medidas de seguridad que procedan con arreglo a la ley. Durante estos procedimientos, el Ministerio Público y la Policía Judicial bajo el mando de aquél, ejercitarán, en su caso, también las funciones que señala la fracción II del artículo 2; y el Ministerio Público cuidará de que los tribunales federales apliquen estrictamente las leyes relativas y de que las resoluciones de aquéllos se cumplan debidamente.

respectiva y hasta la segunda instancia<sup>385</sup>. Esta serie de actos desarrollados por el juez se encuentran no solamente regulados por la ley adjetiva, sino también por la norma fundamental mexicana en el Artículo 20 constitucional. Estas actuaciones están encaminadas a comprobar la existencia de un delito, la acreditación de elementos que hagan probable la responsabilidad del inculpado, para posteriormente ser el tribunal quien determine si formalmente queda sujeto a proceso, o bien quedará en uso y disfrute de su libertad<sup>386</sup>.

Es verdad que dentro de la pre instrucción se llevan a cabo una serie de valoraciones sobre hechos y responsabilidad en la comisión de los mismos, que aunque son sólo de manera provisional, funcionan como filtro para evitar la iniciación de procesos que no reúnen ninguno de los elementos que hemos mencionado y que resultaría ocioso, además de ser una carga económica importante el continuar con ellos. Hay que precisar que de conjugarse los hechos con las normas procesales y sustantivas, estas por sí mismas no deben ser suficientes para poner en marcha el proceso judicial, esto es que los requisitos que exigen para la iniciación del proceso sólo se actualicen formalmente.

La Constitución Mexicana en este sentido es muy clara sujetando a las instituciones encargadas de ejercer la acción penal, y de los tribunales a que su actuación siempre vaya en función de unos hechos calificados como delito por la ley penal sustantiva aunado a la

---

<sup>385</sup> Artículo 134, y 147 del Código Federal de Procedimientos Penales, disponible en [www.scjn.gob.mx](http://www.scjn.gob.mx) consultado el 30 de agosto del 2015.

<sup>386</sup> "...pues en ésta se sostuvo que es inadmisble obligar al inculpado a someterse a un proceso penal sin habersele dado oportunidad de desvirtuar las pruebas de cargo durante la preinstrucción. Lo que no significa dejar de reconocer que la actividad probatoria en la alzada no puede tener los mismos alcances ni extensión que en la primera instancia, porque se traduciría en una repetición de ésta, ajena a la naturaleza del recurso de apelación y de los medios de impugnación en general; por tanto, nada de lo anterior implica que deba recibirse cualquier clase de prueba, sino que siempre y en cada caso particular corresponderá al tribunal de apelación pronunciarse, fundada y motivadamente, acerca de la pertinencia e idoneidad de la propuesta por parte legítima, pues además de ser inherente a su investidura y responsabilidad, la propia norma establece que ese órgano podrá ordenar el desahogo de tales pruebas, de modo que su admisión no es un deber sino una facultad del órgano de apelación, sujeta a control..." PRUEBAS OFRECIDAS Y ADMITIDAS POR LA AUTORIDAD JUDICIAL EN LA PREINSTRUCCIÓN. CUANDO SU DESAHOGO ES MATERIAL Y TEMPORALMENTE POSIBLE DURANTE EL PLAZO CONSTITUCIONAL, EXISTE OMISIÓN INJUSTIFICADA DE ÉSTA DE HACERLO Y ELLO TRASCIENDE AL DICTADO DE LA RESOLUCIÓN DE PLAZO CONSTITUCIONAL, PROCEDE CONCEDER EL AMPARO PARA EFECTO DE DEJARLA INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO. Tesis: 1a./J. 13/2011, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Disponible en [www.scjn.gob.mx](http://www.scjn.gob.mx), consultada 19 de Febrero 2015.

existencia de hechos que actualizan ese tipo penal haciendo probable responsable a su autor. En consecuencia este momento del procedimiento obliga a tener elementos que hagan arrojen información para identificar –cuando menos de una forma presuncional- al responsable de la comisión del delito. Aunque en la etapa previa es decir la investigación dirigida por el Ministerio Público, en algunos casos se haga en ausencia de persona imputada, y en otros se desconozca su identidad.

Debemos detenernos a mencionar la multiplicidad de actos que pueden desahogarse dentro de este momento procesal, en virtud de acreditar -como hemos dicho antes-, los elementos del tipo penal, y/o la participación de persona o personas en su comisión. Es importante hacerlo porque pueden determinar la apertura de la etapa procesal que estudiamos. Tal es el caso del acto de ratificación o revocación de la detención ministerial –es decir la detención preventiva que haya efectuado la autoridad ministerial-; la orden de aprehensión o de detención<sup>387</sup>, de comparecencia o su negativa; las peticiones y órdenes de cateo, o su negativa; la declaración preparatoria<sup>388</sup>; solicitud y concesión de la duplicidad del plazo constitucional<sup>389</sup>; el ofrecimiento y recepción de pruebas, documentales, testimoniales, periciales etc.; la petición y otorgamiento del beneficio de la libertad provisional bajo

---

<sup>387</sup> “Es una resolución judicial en la que con base en el pedimento del Ministerio Público y satisfechos los requisitos indicados por el Artículo 16 constitucional, se ordena la captura de una sujeto determinado, para que se puesto, de inmediato, a disposición de la autoridad judicial que lo reclama, o requiere, con el fin de que conozca todo lo referente a la conducta o hecho que se le atribuye” Cfr. Colín Sánchez, Guillermo, *“Derecho...”* op.cit., p. 314.

<sup>388</sup> “Acto procesal en el que el inculcado ante el juez, haga saber a éste la conducta o hecho antijurídico, por el que el Ministerio Público ejerció la acción penal en su contra, para que aquel ejerza su derecho a defenderse”. *Ibidem*, p. 314; La declaración preparatoria es una garantía constitucional establecida por la Constitución Mexicana en su Artículo 20 apartado B fracción III establece que en los juicios del orden criminal tendrá el acusado el derecho de saber tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Es decir el nombre de su acusador, la naturaleza de su acusación y causa de la misma a fin de que conozca los hechos y pueda ejercer sus derechos de defensa.

<sup>389</sup> Importante aclarar qué con anterioridad a la reforma de 2007-2008 que cambio al sistema acusatorio, se preveía un plazo constitucional a favor del acusado que suponía una extensión del plazo probatorio dentro de la etapa de pre proceso a efecto de ofrecer el caudal probatorio que desvirtuara la acusación del Ministerio Público. Este plazo contaba a partir de que el inculcado fuera puesto a disposición judicial, cobrando importancia que quedará sentado la fecha y hora en el auto de radicación respectivo. En este sentido el Artículo 19 Constitucional precisaba el término en que debía dictarse el auto de formal prisión, que sería de setenta y dos horas dentro de los cuales el juez deberá resolverle la situación jurídica expidiendo bien un auto de formal prisión o de libertad, en la actualidad llamado auto de vinculación a proceso y el mencionado artículo sigue redactado en los mismo términos. Disponible en <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf>, 11 de febrero del 2011.

caución, y su negativa; el aseguramiento de bienes que tengan relación con el delito o los destinados a reparar los daños y perjuicios; las ordenes de traslado de cárcel al inculcado y por último el auto de formal procesamiento o el de libertad por falta de elementos para procesar.

Por tanto, la Corte Mexicana ha establecido que para poder considerar que hay prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia, el juez deberá cerciorarse de que las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia efectivamente alegada por la defensa en el juicio y, al mismo tiempo, en el caso de que existan, debe descartarse que las pruebas de descargo o contra indicios den lugar a una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora. Así el Tribunal Constitucional Mexicano ha establecido su doctrina respecto del principio de presunción de inocencia, refiriendo que este es un derecho que puede calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de esas vertientes se manifiesta como "estándar de prueba" o "regla de juicio", en la medida en que este derecho establece una norma que ordena a los jueces la absolución de los inculcados cuando durante el proceso no se hayan aportado pruebas de cargo suficientes para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad de la persona; mandato que es aplicable al momento de la valoración de la prueba. Dicho de forma más precisa, la presunción de inocencia como estándar de prueba o regla de juicio comporta dos normas: la que establece las condiciones que tiene que satisfacer la prueba de cargo para considerar que es suficiente para condenar; y una regla de carga de la prueba, entendida como la norma que establece a cuál de las partes perjudica el hecho de que no se satisfaga el estándar de prueba, conforme a la cual se ordena absolver al imputado cuando no se satisfaga dicho estándar para condenar.<sup>390</sup>

Ahora bien al enlazar el principio de presunción de inocencia con el derecho a la libertad este es un derecho humano –nos dice el máximo tribunal mexicano en su doctrina- de protección evolutiva que se reconoce formalmente tanto a nivel interno como internacional

---

<sup>390</sup> Tesis: 1a./J. 26/2014 (10a.) Tesis: 1a. CCCXLVII/2014 (10a.), Semanario Judicial de la Federación, disponible en [www.scjn.gob.mx](http://www.scjn.gob.mx) consultado el 1 de septiembre 2015.



y que admite diferentes manifestaciones como la libertad personal que, en su ámbito más básico, es entendida como la capacidad de una persona de llevar a cabo sin intromisiones injustificadas sus propios actos, incluyendo la libertad de movimiento o libertad deambulatoria.

Ahora, restringiéndose al ámbito de la materia penal, se ha sostenido que para la privación de la libertad de una persona deben concurrir una serie de requisitos constitucionales como la emisión de una orden de aprehensión, un caso de urgencia acreditable por el Ministerio Público o la actualización de un supuesto de flagrancia delictiva. Sin embargo, es notorio que al margen de estos casos, existen afectaciones momentáneas a la libertad que no encuadran dentro de dichas categorías conceptuales y que deben de cumplir con otros parámetros para validar su constitucionalidad. Es decir, las competencias propias de los agentes de seguridad pública implican actos de investigación o de prevención del delito, mismos que necesariamente provocan algún tipo de incidencia o contacto entre agentes del Estado y los habitantes de este país. A este tipo de situaciones se les puede denominar como restricciones provisionales al ejercicio de un derecho, ya que no conllevan una privación del derecho de libertad personal, sino una afectación momentánea de la misma que deberá estar justificada por la autoridad y que en muchos casos tiene como finalidad última la prevención, preservación o consecución de la seguridad pública. En ese tenor, para analizar la validez de estas restricciones, en precedentes de la Suprema Corte, se ha ideado el concepto de control preventivo provisional, consistente en las diferentes actuaciones de investigación y prevención del delito, el cual es legítimo desde el punto de vista constitucional cuando se realiza en cumplimiento a lo previsto en el artículo 21 de la Constitución Federal, siempre que se efectúe atendiendo al estándar de excepcionalidad y la concurrencia de una sospecha razonable acreditable caso por caso<sup>391</sup>.

Dentro de esta fase procesal las partes quedan sujetas a los principios de legalidad, dualidad y contradicción. Así como también una serie de reglas que deberán observarse durante todo el procesamiento de un imputado, tendientes a garantizar su derecho a un juicio justo, y con un tratamiento de igualdad ante la ley.

---

<sup>391</sup> Tesis: 1a. XCII/2015 (10a.), *Ibídem*.

Por otra parte existe una importante crítica respecto de esta forma de procesamiento o en nuestras palabras una desviación del mismo, que creemos importante detenernos a estudiar. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 21, establece claramente la institución responsable del ejercicio de la acción penal. Esto significa que la investigación y persecución de los delitos corresponde al Ministerio Público, bien en la actualidad la etapa de averiguación previa corresponde a este último, así establecido por la legislación secundaria. En la actualidad ocurre que los actos procesales son desarrollados en sede administrativa donde se llevan a cabo todos los actos tendientes a la comprobación del delito, así como a la búsqueda y recaudación del material probatorio, a la identificación del responsable, que culmina con la resolución que abre el proceso de enjuiciamiento formalmente.

Hay consenso en la doctrina mexicana<sup>392</sup> con respecto a que el proceso debe conducirse por el órgano jurisdiccional, donde el Ministerio Público tenga el carácter de parte y no de autoridad, quedando todos los sujetos que participan en el proceso al arbitrio del juez. De suerte que tanto la pre instrucción y la etapa de averiguación previa sean presididas por el órgano jurisdiccional, donde el Ministerio Público quede limitado a investigar el delito sosteniendo su fundamento ante el tribunal. Se dice también que existe falta de contradicción de parte del Ministerio Público a favor del inculpado, pues hay escasa intervención de los abogados defensores, que dejan como consecuencia arbitrariedades, injusticias y una total indefensión.

---

<sup>392</sup> “La justicia penal en los países latinoamericanos constituye un lugar excelente para estudiar los efectos de los vicios y fallas del desempeño jurisdiccional en la región. El uso excesivo del medio escrito y el culto a las formas procesales; la falta de inmediación del juez y la excesiva delegación de funciones al personal subalterno (...) En la última década, (se) han emprendido procesos de reformas en el ámbito penal, todos bajo distintas modalidades destinados, en lo fundamental a sustituir el tradicional sistema de corte inquisitivo heredado de las instituciones coloniales por un proceso más tipo acusatorio con fuerte influencia del modelo estadounidense...se trata de establecer una estructura de oposición, contradicción, inmediación e igualdad de partes del proceso penal: el fiscal o Ministerio Público que investiga y acusa, el defensor que responde a la estrategia y planteamiento de la acusación en representación del inculpado, y el juzgador, que supervisa la legalidad de las actuaciones y resuelve...”, Cfr. Blanco Escandón, Celia, *“El Nuevo Proceso Penal en América Latina”*, Derecho Penal. *“Memoria...”*, op.cit., p. 51-52.

En cuanto a la averiguación previa en México, podemos destacar avances respecto de la defensa de los derechos fundamentales no sólo respecto de los acusados, sino también en relación a la víctima y/o ofendido. Esta situación supone que se logre un equilibrio entre los sujetos procesales en conflicto, y al mismo tiempo sujetar al control constitucional la actuación del Ministerio Público, que hasta no hace mucho fueron consideradas definitivas e inatacables, colocando a los justiciables envueltos en la investigación en completo estado de indefensión<sup>393</sup>.

En este sentido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de Nación ha resuelto que, a partir de la interacción de los principios de acusación, presunción de inocencia, imparcialidad judicial y defensa adecuada, que configuran el derecho humano a un debido proceso, siempre que el Ministerio Público no especifique en el escrito de consignación los hechos y la conducta que se atribuyen al inculpado, la autoridad judicial carece de facultades para deducir y configurar dichos elementos a través de la revisión oficiosa de la averiguación previa, para el efecto de resolver la situación jurídica del inculpado mediante el auto de plazo constitucional. Por tanto, cuando se actualice esta deficiencia, el juzgador deberá limitarse a analizar las circunstancias precisadas en el pliego de consignación; destacar que la omisión en que incurrió el acusador constituye un impedimento para constatar la acreditación del cuerpo del delito y la demostración de la probable responsabilidad, que son presupuestos jurídicos para el dictado de la formal prisión o sujeción a proceso del inculpado, y resolver que no procede decretar la sujeción a proceso

---

<sup>393</sup> “En relación con la primera instancia del proceso penal, se señalan los aspectos más trascendentes relativos a la consignación con y sin detenido. En el primer supuesto, se destacan los derechos del indiciado, tanto constitucionales como legales, con una crítica al sistema legal, en tanto permite que la ratificación de la detención, que involucra una garantía individual al prever que en caso de que el juzgador estime que no se cumplieron los requisitos que prevé el artículo 16 de la constitución federal, se decrete su inmediata libertad, se vuelva nugatoria, pues para sus efectos de la procedencia del juicio de amparo, se actualiza un cambio de situación jurídica con el dictado de auto de formal prisión (o de vinculación a proceso) conforme a los plazos legales, siempre ocurre, de ahí que se impida ejercer un control constitucional que permitiría la reparación de la violación de ese derecho fundamental, y que al no hacerlo, vacía su contenido”. Cfr. Silva Meza, Juan N., *“La Jurisprudencia Penal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. México. Su repercusión en el Proceso Penal”*, Panorama Internacional sobre Justicia Penal. Proceso Penal y Justicia Penal Internacional. Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados, Séptimas Jornadas Sobre Justicia Penal, VV.AA. coordinadores, Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 2007, p. 413.

de aquél; además, de ser el caso, ordenar su libertad, ante la falta de elementos para la apertura de la instrucción del proceso penal<sup>394</sup>.

## **2.2. Instrucción. La Prueba.**

Esta fase procesal la persona acusada se encuentra sujeta a la jurisdicción del tribunal, de suerte que el Ministerio Público cambia su condición de autoridad a ser parte en el proceso. A riesgo de repetirnos, esta etapa comienza a partir de la emisión del auto de formal prisión o de vinculación a proceso y cumple un objetivo importante dentro del mismo, pues es el momento procesal de ofrecimiento y desahogo de pruebas<sup>395</sup>.

Aquí el órgano acusador-investigador tiene la carga procesal de reunir los elementos comprobatorios del delito que determinen la plena responsabilidad del procesado y por su parte la defensa la responsabilidad de desvirtuar las pruebas aportadas por este. Este período fenece con la expedición de un auto declarando cerrada la instrucción, es decir dando por terminada la oportunidad de aportar pruebas para el Ministerio Público, como para la Defensa, abriendo paso al inicio del juicio como tal, poniéndolo a la vista de las partes para que elaboren sus conclusiones<sup>396</sup>.

La Corte Mexicana proporciona una reciente definición, respecto del derecho del Ministerio Público a aportar pruebas, la misma ha establecido que esta facultad no es ilimitada, pues se encuentra condicionada a que éstas (las pruebas) sean ofrecidas y desahogadas ante el propio juez; criterio jurisprudencial que además de provocar la igualdad de las partes en el proceso, las sujeta a todas al juez, como rector del proceso y evita que el indiciado quede en indefensión, -se identifica una mala praxis de parte del órgano investigador y persecutor de

---

<sup>394</sup> AUTO DE PLAZO CONSTITUCIONAL. EL JUEZ DEBE LIMITARSE A RESOLVER LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL INCUPLADO, DE ACUERDO AL CONTENIDO DE LA CONSIGNACIÓN, AL CARECER DE FACULTADES PARA DETERMINAR POR SÍ MISMO LOS HECHOS Y LA CONDUCTA ATRIBUIDA MEDIANTE LA REVISIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA, SI ESTAS CIRCUNSTANCIAS NO FUERON PRECISADAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO AL EJERCER LA ACCIÓN PENAL. Tesis: 1a./J. 66/2014 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Disponible: [www.scjn.gob.mx](http://www.scjn.gob.mx) consultado 19 febrero de 2015.

<sup>395</sup> Artículo 150 del Código Federal de Procedimientos Penales, disponible en [www.diputados.mx](http://www.diputados.mx), consultado el 30 de agosto de 2015.

<sup>396</sup> Artículo 150, segundo párrafo del Código Federal de Procedimientos Penales, Ibídem.

delitos- pues era común que el Ministerio Público consignara la averiguación previa correspondiente y dejara abierto un triplicado de ésta, en el que seguía actuando, y dentro del término constitucional ofrecía pruebas recabadas y desahogadas por y ante sí mismo, no obstante que al ejercer la acción penal dejará de ser autoridad y se convirtiera en parte del proceso<sup>397</sup>.

A partir de este momento queda determinada la relación procesal, pues tanto el Ministerio Público como el inculcado y su defensor quedan sujetos a la jurisdicción del tribunal. En consecuencia, la instrucción tiene la tarea fundamental de aportar luz al juez, por parte de cada uno de las partes, a través del ofrecimiento y desahogo de pruebas. Así el Código Federal de Procedimientos Penales en su Artículo primero fracción III dice: la instrucción, abarca las diligencias practicadas ante y por los tribunales con el fin de averiguar y probar la existencia del delito, las circunstancias en que hubiese sido cometido y las peculiares del inculcado, así como la responsabilidad penal de éste. De suerte que las normas adjetivas obligan también al órgano jurisdiccional a desentrañar la verdad del hecho puesto a su consideración, proporcionándole el caudal probatorio para que éste pueda llevar a buen término dicha encomienda.

En este sentido la Corte Mexicana hace un análisis que respecto del contexto histórico y jurídico derivado de la reciente reforma de 10 de junio de 2011 al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Carta Magna y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Así nos explica, que conforme a este nuevo paradigma para interpretar y aplicar la ley, es factible que se incorporen al proceso las pruebas ofrecidas por la víctima u ofendido del delito después de declararse agotada la instrucción, aun cuando no se trate de pruebas supervenientes o que el *a quo* no las considere para mejor proveer, si se toma en cuenta que todavía no se decreta el cierre de instrucción, por lo que no ha concluido la etapa probatoria y, además, esas probanzas pueden permitir al juzgador contar

---

<sup>397</sup> Jurisprudencia 1ª/J.40/2000 Semanario Judicial de la Federación, Primera Sala, Novena Época, Tomo XIII, febrero 2001, *Ibíd*em, p. 430-431.

con mayores elementos de convicción para conocer la verdad histórica de los hechos, que es la razón de ser de un proceso penal<sup>398</sup>.

La instrucción puede tomar dos formas distintas. Así lo prevé el Artículo 152 del Código Federal de Procedimientos Penales. La primera de ellas es la ordinaria que en términos generales se utiliza para los procesos por delitos graves, por su naturaleza compleja y la alta penalidad fijada por el Código Penal. Para estos es menester aportar el material probatorio suficiente y proveer el tiempo necesario para agotar las labores de investigación que cumplan este objetivo. Por otra parte la instrucción de carácter sumario se refiere a delitos menos graves o que la investigación no requiere ser tan exhaustiva de forma que facilite su tramitación. A continuación estudiaremos brevemente cuando corresponde la tramitación de ambos procesos.

Existen dos tipos de procedimientos: el sumario<sup>399</sup> y la tramitación ordinaria. Para ello el artículo 147 del Código Federal de Procedimientos Penales establece la necesidad de que la

---

<sup>398</sup> “...Por tanto, el desechamiento de esas pruebas a la víctima u ofendido del delito, so pretexto de que su ofrecimiento ha sido extemporáneo, por haberse efectuado después de declararse agotada la instrucción, constituye una violación a las leyes del procedimiento, prevista en el artículo 173, fracción XIX, inciso b), de la Ley de Amparo, que además implica violación al artículo 20, apartado B, fracción II, de la Constitución Federal (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008)”. INSTRUCCIÓN. EL DESECHAMIENTO DE LAS PRUEBAS APORTADAS POR LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, INCLUSIVE LAS QUE NO SON SUPERVENIENTES O CONSIDERADAS PARA MEJOR PROVEER, SO PRETEXTO DE QUE SU OFRECIMIENTO ES EXTEMPORÁNEO, POR HABERSE REALIZADO DESPUÉS DE AGOTADA AQUELLA ETAPA, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO Y AL ARTÍCULO 20, APARTADO B, FRACCIÓN II, CONSTITUCIONAL -EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA DE 18 DE JUNIO DE 2008- (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 314 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL). Tesis: I.6o.P.49 P (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Disponible en [www.scjn.gob.mx](http://www.scjn.gob.mx) consultado 19 febrero 2015.

<sup>399</sup> En materia federal el juicio sumario procede en tres casos:

- a) En los casos de delitos cuya pena no exceda de dos años de prisión, sea o no alternativa, o la aplicable no sea privativa de libertad, al dictar el auto de formal prisión o de sujeción a proceso, de oficio resolverá la apertura del procedimiento sumario, en el cual se procurará cerrar la instrucción dentro de quince días. Una vez que el tribunal la declare cerrada, citará a la audiencia a que se refiere el artículo 307;
- b) Cuando la pena exceda de dos años de prisión sea o no alternativa, al dictar el auto de formal prisión o de sujeción a proceso, el juez de oficio resolverá la apertura del procedimiento sumario en el cual se procurará cerrar la instrucción dentro del plazo de treinta días, cuando se esté en cualquiera de los siguientes casos: I.- Que se trate de delito flagrante; II.- Que exista confesión rendida precisamente ante la autoridad judicial o ratificación ante ésta de la rendida ante el Ministerio Público; o III.- Que no exceda de cinco años el término medio aritmético de la pena de prisión aplicable, o que excediendo sea alternativa. Una vez que el juzgador acuerde cerrar la instrucción, citará para la audiencia a que se refiere el artículo 307, la que deberá celebrarse dentro de los diez días siguientes;

instrucción del proceso deberá terminarse en el menor tiempo posible. Cuando exista auto de formal prisión y el delito tenga señalada una pena máxima que exceda de dos años de prisión, se terminará dentro de diez meses; si la pena máxima es de dos años de prisión o menor, o se hubiere dictado auto de sujeción a proceso, la instrucción deberá terminarse dentro de tres meses. Los plazos a que se refiere este artículo se contarán a partir de la fecha del auto de formal prisión o del de sujeción a proceso, en su caso. Dentro del mes anterior a que concluya cualquiera de los plazos antes señalados, el juez dictará auto que señale esta circunstancia, así como la relación de pruebas, diligencias y recursos que aparezcan pendientes de desahogo. En el mismo auto, el juez ordenará que se gire oficio al tribunal unitario que corresponda, solicitándole resuelva los recursos antes de que se cierre la instrucción, y dará vista a las partes para que, dentro de los diez días siguientes, manifiesten lo que a su derecho convenga. En la práctica, con la carga de trabajo de los tribunales es raro que se observen los plazos establecido por la ley penal adjetiva, en el caso de exceder los plazos de resolución se puede promover una demanda de Amparo, para que sea el tribunal federal quien ordene al juez menor el cumplimiento de los plazos legales.

En el mismo sentido el artículo 150 del Código Federal de Procedimientos Penales<sup>400</sup>, indica que cuando el tribunal considere agotada la instrucción lo determinará así mediante resolución que se notificará personalmente a las partes, y mandará poner el proceso a la

---

c) En cualquier caso en que se haya dictado auto de formal prisión o de sujeción a proceso y las partes manifiesten al notificarse de ese auto o dentro de los tres días siguientes a la notificación, que se conforman con él y que no tienen más pruebas que ofrecer salvo las conducentes sólo a la individualización de la pena o medida de seguridad y el juez no estime necesario practicar otras diligencias, citará a la audiencia a que se refiere el artículo 307. El inculpado podrá optar por el procedimiento ordinario dentro de los tres días siguientes al que se le notifique la instauración del juicio sumario. Artículos 152 y 307 del Código Federal de Procedimientos Penales.

<sup>400</sup> Artículo 150.- Transcurridos los plazos que señala el artículo 147 de este Código o cuando el tribunal considere agotada la instrucción lo determinará así mediante resolución que se notificará personalmente a las partes, y mandará poner el proceso a la vista de éstas por diez días comunes, para que promuevan las pruebas que estimen pertinentes y que puedan practicarse dentro de los quince días siguientes al en que se notifique el auto que recaiga a la solicitud de la prueba. Según las circunstancias que aprecie el juez en la instancia podrá de oficio ordenar el desahogo de las pruebas que a su juicio considere necesarias para mejor proveer o bien ampliar el plazo de desahogo de pruebas hasta por diez días más. Al día siguiente de haber transcurrido los plazos establecidos en este artículo, el tribunal, de oficio y previa la certificación que haga el secretario, dictará auto en el que se determinen los cómputos de dichos plazos. Se declarará cerrada la instrucción cuando, habiéndose resuelto que tal procedimiento quedó agotado, conforme a lo previsto en el párrafo anterior, hubiesen transcurrido los plazos que se citan en este artículo o las partes hubieran renunciado a ellos.

vista de éstas por diez días comunes, para que promuevan las pruebas que estimen pertinentes y que puedan practicarse dentro de los quince días siguientes. Según las circunstancias que aprecie el juez en la instancia podrá de oficio ordenar el desahogo de las pruebas que a su juicio considera necesarias para mejor proveer o bien ampliar el plazo de desahogo de pruebas hasta por diez días más. Al día siguiente de haber transcurrido los plazos<sup>401</sup> establecidos en este artículo, el tribunal, de oficio y previa la certificación que haga el secretario, dictará auto en el que se determinen los cómputos de dichos plazos. Se declarará cerrada la instrucción cuando, habiéndose resuelto que tal procedimiento quedó agotado, conforme a lo previsto en el párrafo anterior, hubiesen transcurrido los plazos que se citan en este artículo o las partes hubieran renunciado a ellos.

Dentro del fuero común el procedimiento sumario se encuentra establecido de conformidad con el Artículo 305 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal<sup>402</sup>, el cual podrá abrirse primero cuando el juicio sea competencia del juez de paz; se trate de delito flagrante; exista confesión ministerial o judicial; o cuando se trate de delitos no graves. De suerte que una vez notificado el auto de formal prisión o de sujeción a proceso se darán tres días comunes a las partes para el ofrecimiento de pruebas, las cuales serán recibidas en una sola audiencia. En el caso de que aparecieren nuevos elementos sujetos de probanzas, el tribunal podrá decretar tres días más para su presentación y desahogo, dejándolo asentado en el auto respectivo donde quedara fijada la fecha de la diligencia.

Sin duda que lo que debe definir a cada uno de estas formas de procesar es la exhaustividad y la especialidad en el ofrecimiento y desahogo del caudal probatorio, estos parámetros de especificidad deben ser determinados por el juez, pues este tendrá bajo su responsabilidad la solución del conflicto planteado. La conformación de las etapas de instrucción no solo en

---

<sup>401</sup> Proceso Sumario. Se rige por el artículo 152 del Código de Procedimientos Penales, por lo que en esta vía, el Juez procurará cerrar la instrucción dentro de los plazos establecidos en dicho precepto, sin que proceda que previamente la declare agotada. Este criterio privilegia la garantía de brevedad en el proceso, pues reconoce en el juicio sumario un procedimiento muy breve, para aquellos casos en que no necesite un mayor plazo por la defensa para ofrecer las pruebas que considere pertinentes, con la exclusión de reglas que son propias del procedimiento ordinario, y que, de seguirse, impedirían desahogar el juicio con la celeridad que pretendió el legislador. Jurisprudencia 1ª/J. 12/2003, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, disponible: [www.scjn.gob.mx](http://www.scjn.gob.mx), consultado 25 de marzo 2014 p. 433.

<sup>402</sup> Disponible en <http://cgsservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/r189703.pdf>, 15 de febrero del 2011.



teoría, sino en la práctica deben estructurarse con la mirada puesta en la obtención de la mayor verdad posible, característica específica del proceso penal objetivando su atención en el tema de la prueba, pues las reglas del ejercicio probatorio forman un sector relevante en la ingeniería de un proceso penal democrático.

La autoridad responsable está obligada por disposición constitucional de observar los requisitos impuestos por el artículo 16 y demás disposiciones aplicables, al emitir una sentencia que resuelva el asunto en lo principal. Amén de que sea necesario documentar, en los términos de las legislaciones procesales respectivas, a fin de otorgar certeza jurídica a lo resuelto en un procedimiento, que a su vez puede constituir la base de análisis para el eventual control de constitucionalidad en sentido estricto. La sentencia definitiva constituye el acto jurídico en donde se plasma la decisión del órgano jurisdiccional que falla la causa o controversia, por lo que es necesario que ese documento público conste como expresión, título o prueba que dé certidumbre de la existencia misma del acto jurídico y perpetúe las manifestaciones en él asentadas, preservando así su contenido para el futuro y librando de posibles contradicciones o desconocimientos, a fin de brindar seguridad y confianza en cuanto a la valoración que la autoridad finalmente realizó respecto de los hechos y pruebas que conoció para resolver de determinada manera; tanto para la seguridad jurídica de los implicados, la potencial revisión de la forma de actuar de la autoridad y la posible ejecución misma del fallo<sup>403</sup>. La actuación de juzgador ante el régimen de valoración de probanzas es quien da legitimidad al proceso, ya que por medio de éste surten eficacia los derechos y garantías fundamentales tanto del procesado como del ofendido y la víctima.

Si tenemos claro que todo acto de autoridad que entrañe afectación a la libertad de una persona, como lo es una sentencia de condena, debe estar justificado en mandamiento escrito que cumpla las formalidades esenciales del procedimiento, motivado y fundado en leyes expedidas con anterioridad al hecho, lo que materializa las garantías de legalidad y seguridad jurídica.

---

<sup>403</sup> Tesis: II.2o.P.255 P, Semanario Judicial de la Federación, disponible en [www.scjn.gob.mx](http://www.scjn.gob.mx), consultado el 30 de agosto de 2015.

En general el derecho penal para el cumplimiento de sus objetivos, queda completamente sujeto a la prueba. Lo que significa que en el procedimiento la prueba es un factor básico. Baste con argumentar que a través de esta se pretende llegar a la verdad. En este sentido cada una de las partes intervinientes cumple un papel fundamental, en el caso del Ministerio Público debe fundar el ejercicio de la acción penal, al mismo tiempo que es deber del tribunal demandarle la precisión en los extremos de su acusación. Para el caso del acusado, no es necesaria la comprobación de su inocencia, pues se parte de este principio, sin que esto suponga que su defensor este en libertad de no aportar los elementos de prueba necesarios para invalidar los argumentos que sostienen la acusación del Ministerio Público.

La Corte Mexicana ha establecido el siguiente criterio conforme al principio de inocencia y de *indubio pro reo*:

*“...principio forma parte del derecho fundamental a la presunción de inocencia en su vertiente de estándar de prueba. Ahora bien, el concepto de "duda" implícito en el principio in dubio pro reo debe entenderse como la existencia de incertidumbre racional sobre la verdad de la hipótesis de la acusación, incertidumbre que no sólo está determinada por el grado de confirmación de esa hipótesis, sino también eventualmente por el grado de confirmación de la hipótesis de la defensa, en el supuesto de que existan pruebas de descargo que la apoyen. De esta forma, cuando la hipótesis de la defensa es total o tendencialmente incompatible con la hipótesis de la acusación, el hecho de que aquélla se encuentre confirmada por las pruebas disponibles genera una incertidumbre racional sobre la verdad de la hipótesis que sustenta el Ministerio Público, lo que se traduce en la existencia de una duda razonable sobre la culpabilidad del imputado. En este orden de ideas, entender la "duda" a la que alude el principio in dubio pro reo como incertidumbre racional sobre la verdad de la hipótesis de la acusación, no sólo exige abandonar la idea de que para determinar si se actualiza una duda absolutoria el juez requiere hacer una introspección para sondar la intensidad de su convicción, sino también asumir que la duda sólo puede surgir del análisis de las pruebas disponibles. En consecuencia, la satisfacción del estándar de prueba no depende de la existencia de una*

*creencia subjetiva del juez que esté libre de dudas, sino de la ausencia dentro del conjunto del material probatorio de elementos que justifiquen la existencia de una duda”<sup>404</sup>.*

Del anterior orden de ideas se desprende que el estudio de las probanzas es fundamental dentro del procedimiento penal. En el transcurso de la averiguación previa, al entrar en conocimiento de la *notitia criminis*, es responsabilidad del Ministerio Público el allegarse del caudal probatorio necesario tendiente a fundamentar jurídicamente la persecución de un delito, que a su vez es adjudicado a un sujeto determinado. Es decir que los elementos probatorios deben proporcionarle grados de certeza en el descubrimiento de la verdad. De suerte que las probanzas serán el medio que justifiquen su postura legal, ya sea de perseguir el delito o desistiéndose de acusar. La fase de instrucción dice Moreno Catena, en el proceso penal recibe en la actualidad una atención esencial en todos los ordenamientos jurídicos porque, cumple con la finalidad principal de depurar la *notitia criminis*, es decir no solamente es una función que prepara el proceso penal, sino que permite evitar el proceso en sí mismo, esto sucede en la medida en que permite a todos los sujetos intervinientes los elementos para decidir si ha lugar a la apertura del juicio penal<sup>405</sup>.

En otras palabras el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes, es una prerrogativa constitucional no sólo para garantizar una defensa adecuada para el imputado, sino también hace eficaz la contradicción y la libre valoración del caudal probatorio que son fundamento del proceso penal democrático en su conjunto. Según el Tribunal Constitucional Español *“la indefensión es un impedimento del derecho a alegar y de demostrar en el proceso los propios derechos, y en su manifestación más trascendente, es la situación en la que se impide a una parte, por el órgano judicial, en el curso del proceso, el ejercicio del derecho de defensa, privándola de ejercitar su potestad de alegar y, en su caso, justificar sus derechos e intereses para que le sean reconocidos...este Tribunal ha reconocido la interrelaciones existentes entre la indefensión contemplada en el Art. 24.1 de la Constitución Española y el derecho a los medios de prueba...habiendo afirmado que la*

---

<sup>404</sup> Tesis: 1a. CCXIX/2015 (10a.), Semanario Judicial de la Federación, disponible en [www.scjn.mx](http://www.scjn.mx), consultado el 30 de agosto de 2015.

<sup>405</sup> Cfr. Moreno Catena, Víctor, *“El Ministerio Fiscal, Director de la Investigación de los Delitos”*, Teoría y Derecho, Revista del Pensamiento Jurídico, ¿Ministerio Fiscal o Juez Instructor?, La investigación penal a debate, Revista Semestral, No.1, Junio/Diciembre, 2007, Tirant lo Blanch, Valencia, España, p.80

*relación entre el derecho a las pruebas e indefensión, marca el momento de máxima tensión en la eventual lesión del derecho ”<sup>406</sup>.*

Por su parte la Corte Mexicano ha expuesto el siguiente criterio:

*“El artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce el derecho humano al debido proceso al establecer que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Ahora bien, este derecho ha sido un elemento de interpretación constante y progresiva en la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, del que cabe realizar un recuento de sus elementos integrantes hasta la actualidad en dos vertientes: 1) la referida a las formalidades esenciales del procedimiento, la que a su vez, puede observarse a partir de dos perspectivas, esto es: a) desde quien es sujeto pasivo en el procedimiento y puede sufrir un acto privativo, en cuyo caso adquieren valor aplicativo las citadas formalidades referidas a la notificación del inicio del procedimiento y de sus consecuencias, el derecho a alegar y a ofrecer pruebas, así como la emisión de una resolución que dirima las cuestiones debatidas y, b) desde quien insta la función jurisdiccional para reivindicar un derecho como sujeto activo, desde la cual se protege que las partes tengan una posibilidad efectiva e igual de defender sus puntos de vista y ofrecer pruebas en apoyo de sus pretensiones, dimensión ligada estrechamente con el derecho de acceso a la justicia; y, 2) por la que se enlistan determinados bienes sustantivos constitucionalmente protegidos, mediante las formalidades esenciales del procedimiento, como son: la libertad, las propiedades, y las posesiones o los derechos. De ahí que previo*

---

<sup>406</sup> De acuerdo con esta doctrina del Tribunal Constitucional Español estos derechos son protegidos constitucionalmente vía recurso de amparo. STC 89/1986, de 1 de julio (RTC 1986, 89), STC 51/1985, de 10 de abril (RTC 1985, 51), (RTC 1983, 116), STC 357/1993, 1/1996. Cfr. Pulido Quecedo, Manuel, *Constitución Española, con la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional*, Tercera Edición, Editorial Aranzadi, Navarra, España, 2001, p. 789-790.

*a evaluar si existe una vulneración al derecho al debido proceso, es necesario identificar la modalidad en la que se ubica el reclamo respectivo”<sup>407</sup>.*

En la actualidad el Artículo 206 del Código Federal de Procedimientos Penales establece que se admitirá como prueba en los términos del artículo 20 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo aquello que se ofrezca como tal, siempre que pueda ser conducente, y no vaya contra el derecho, a juicio del juez o tribunal. Respecto del citado artículo de la Constitución Mexicana hay que decir que la referencia corresponde a la redacción anterior a la reforma constitucional de octubre 2007-2008. Actualmente este precepto constitucional hace referencia en primer término a los principios generales que deben observarse dentro de juicio. Primero estableciendo que será en presencia del juez el desahogo y la valoración de las pruebas la cual deberá realizarse de manera libre y lógica<sup>408</sup>. Segundo, que la presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral. Tercero, dentro los derechos que le pertenecen al inculcado dispone la recepción de testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley. Por último el que creemos el más importante de los principios generales, la sanción de nulidad a cualquier elemento de prueba obtenido con violación a derechos fundamentales<sup>409</sup>.

Sobre las garantías procesales, hay que decir que una de las más importante, -si no es que la más- es la que veda toda forma de compulsión destinada a una persona a auto incriminarse.

---

<sup>407</sup> Tesis: 1a. IV/2014 (10a.), Semanario Judicial de la Federación, disponible en [www.scjn.gob.mx](http://www.scjn.gob.mx) consultado el 30 de agosto de 2015.

<sup>408</sup> “...de defensa de todo imputado durante el procedimiento penal, consiste en la posibilidad de aportar todos los medios de prueba que considere adecuados, por ello, los Jueces y tribunales se encuentran constreñidos constitucionalmente a lo establecido en los dispositivos legales citados en primer término, que únicamente imponen como limitante, que las pruebas que se aporten al proceso no sean manifiestamente impertinentes, que no tengan por objeto acreditar hechos públicos y notorios, así como que no hayan sido obtenidas por medios ilícitos, con la correlativa obligación de la autoridad de recibirlas, admitirlas y desahogarlas...”, Tesis: II.2o.P.270 P (9a.), Semanario Judicial de la Federación, disponible en [www.scjn.gob.mx](http://www.scjn.gob.mx), consultado el 2 de septiembre de 2015.

<sup>409</sup> apartado A, fracciones II, IV, V y apartado B fracción IV del Artículo 20 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Este principio ha superado a los Estados nacionales para ingresar a formar parte del sistema internacional de derechos humanos, así lo demuestran el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos en su artículo 14.3 y la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8.3. Bajo estas premisas es dable suponer que la autoincriminación involuntaria, -o mejor dicho impuesta-, representa una grave lesión a estas garantías. En México, como en otros países de América Latina existe una relación bastante conocida –y hasta podemos decir institucionalizada- entre proceso penal y tortura, que inmediatamente es expuesta en las causas penales como información auto incriminatoria proveniente de actos de tortura. A consecuencia de lo anterior surge la prohibición del uso de la prueba ilícita dentro del proceso penal<sup>410</sup>.

Respecto a la prueba prohibida y prueba ilícita Francisco Lockhart<sup>411</sup>, explica que la primera supone la concurrencia de haber sido obtenido violando o contradiciendo una norma legal o un principio de derecho y la segunda importa una noción más estricta ya que se presenta cuando esa norma o principio comprometido por la adquisición o puesta en práctica de la prueba, pertenezca la Constitución o algún instrumento internacional. Es decir que la prueba ilícita es aquella que atenta contra la dignidad humana, es esta la pieza clave de su concepto: todo medio de prueba que atente contra la misma resulta ilícita y por ende inadmisibile.

Con respecto a la prueba ilícita la Corte Mexicana ha dicho en su doctrina: *“La exclusión de las pruebas obtenidas con violación a un derecho fundamental forma parte de una garantía procesal constitucional, que impide la utilización de todo aquello que derive directa o indirectamente de dicha lesión...la exclusión de la prueba ilícita -como garantía que le asiste al inculpado en todo proceso, íntimamente ligada con el respeto irrestricto al debido proceso, a ser juzgado por un Juez imparcial, como complemento de una tutela judicial efectiva y por virtud del cual se protege la defensa adecuada del inculpado-, tiene*

---

<sup>410</sup> Véase, Gabriel Juárez, Mariano, *“La regla de exclusión de la prueba prohibida en la jurisprudencia internacional sobre derechos humanos: el caso de la tortura y el juicio de ponderación”*, Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, Año XVII, Bogotá, Colombia, 2012.

<sup>411</sup> Cfr. Lockhart, José Francisco, *“La prueba ilícita en el proceso penal”*, Revista Intercambios, No. 16, Año XVI, Mayo 2014, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de la Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina, p.4 y 5.

*un efecto reflejo, ya que también son ilícitas las pruebas obtenidas indirectamente a partir de la lesión a un derecho fundamental...*”<sup>412</sup>

Por su parte la Primera Sala de la Corte relativo a la prueba ilícita ha dicho: “...las pruebas recabadas en contravención a las disposiciones legales son ilícitas, y deben declararse nulas en la etapa de averiguación previa, así como las que deriven de éstas, las cuales sólo serán eficaces en caso de que pueda advertirse objetivamente que el hecho en cuestión sería descubierto por otra vía legal, totalmente independiente al medio ilícito y puesta en marcha en el curso del proceso, como ocurre con las pruebas desahogadas en la instrucción, a través de una fuente independiente, esto es, en presencia del juez, sometidas al contradictorio de las partes, en función del respeto a los derechos fundamentales de las víctimas, aun cuando tratándose de declaraciones judiciales se ratifiquen las versiones ministeriales afectadas de nulidad., debido a que, por un lado, no pueden convalidarse de esa forma las pruebas viciadas y, por el otro, porque esas declaraciones judiciales tendrán valor exclusivamente en cuanto a los datos de convicción que por sí mismas arrojen en esa etapa procesal...”<sup>413</sup>.

Un elemento a destacar es que en materia procesal penal la presunción de inocencia no es solamente un derecho, sino también un principio que puede calificarse de "poliédrico", -ha dicho la Corte mexicana- en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de esas vertientes se manifiesta como "estándar de prueba" o "regla de juicio", en la medida en que este derecho establece una norma que ordena a los jueces la absolución de los inculcados cuando durante el proceso no se hayan aportado pruebas de cargo suficientes para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad de la persona; mandato que es aplicable al momento de la valoración de la prueba. Dicho de forma más precisa, la presunción de inocencia como estándar de prueba o regla de juicio comporta dos normas: la que establece las condiciones que tiene que satisfacer la prueba de cargo para considerar que es suficiente para condenar; pero además es una regla de carga de la prueba, entendida

---

<sup>412</sup> Tesis: I.9o.P. J/16 (10a.), Ibídem.

<sup>413</sup> Tesis: 1a. LXVII/2015 (10ª), Ibídem.

como la norma que establece a cuál de las partes perjudica el hecho de que no se satisfaga el estándar de prueba, conforme a la cual se ordena absolver al imputado cuando no se satisfaga dicho estándar para condenar<sup>414</sup>.

Queda claro que constitucional y normativamente en el derecho mexicano la responsabilidad de valoración de la prueba recae en los tribunales, en sus distintas instancias o según las etapas procesales de que se trate: al resolver la situación jurídica – auto de vinculación o de sujeción a proceso–; en la emisión de órdenes de detención, y en el momento de dictar la sentencia correspondiente.

Ahora bien, el acto de valoración de la prueba es determinado por ser el ejercicio procesal a través del cual se hace el análisis, que ligados a los elementos aportados en la investigación, tiene por objeto la obtención de un resultado respecto de la conducta, que arroje certeza y no duda a la respecto de la responsabilidad del delincuente –imputado-<sup>415</sup>. Es sobre este tema donde parte de la doctrina que clasifica el sistema de valoración de la prueba<sup>416</sup> en México, como mixto puesto que la valoración del caudal probatorio la hará el juez sujeto a las reglas que le señale la ley procesal adjetiva, y sólo tendrá libertad para valorar los documentos técnicos aportados por los peritos así como los indicios, aludiendo a diversos artículos del Código Federal de Procedimientos Penales y al respectivo del Distrito Federal. Lo anterior despierta numerosos argumentos en contra, principalmente porque conduce a una injusta administración de justicia. Nosotros nos remitiremos a la actual redacción del reformado artículo 20 de la Constitución Mexicana, el cual introduce un nuevo sistema de valoración de la prueba<sup>417</sup> la que deberá realizarse de manera libre y lógica. Sin duda

---

<sup>414</sup> PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. Tesis: 1a./J. 26/2014 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Disponible: [www.scjn.gob.mx](http://www.scjn.gob.mx), consultado 20 de febrero 2015.

<sup>415</sup> Cfr. Colín Sánchez, Guillermo, *“Derecho...”*, op.cit., p. 374.

<sup>416</sup> Ibídem, p.383, también en Hernández Pliego, Julio Antonio, *“El Proceso...”*, op.cit., p. 454.

<sup>417</sup> La Doctrina General del Tribunal Constitucional Español respecto a la libre valoración de la prueba establece:

“El principio de libre valoración de la prueba, recogido en el art. 741 de la LECrim, supone que los distintos elementos de prueba puedan ser ponderados libremente por el Tribunal de instancia, a quien corresponde, en consecuencia, valorar su significado y trascendencia en orden a la fundamentación del fallo contenido en la sentencia. Pero para que dicha ponderación pueda llevar a desvirtuar la presunción de inocencia, es preciso una mínima actividad probatoria producida con las garantías procesales que de alguna forma pueda entenderse de cargo y de la que se pueda deducir, por tanto, la culpabilidad del procesado, y es el Tribunal Constitucional quien ha de estimar la existencia de dicho presupuesto en caso de recurso...el tribunal penal



alguna que este principio obliga a rescribir todos los criterios que hasta ahora se habían establecido para valorar pruebas, aunque existan disposiciones en la legislación secundaria que aún no lo recojan y que se emitan resoluciones de parte del órgano jurisdiccional que no lo reflejen o que contradicen dichos principios.

### **2.3. Tercera Etapa del Procedimiento: Juicio.**

La tercera etapa del procedimiento se define por la expedición del juez del auto donde declara cerrada la instrucción. El propio Código Federal de Procedimientos Penales en su Artículo 1 fracción IV indica que es este el momento procesal, durante el cual el Ministerio Público precisa su pretensión y el procesado su defensa ante el Tribunal, y éste valora las pruebas, para luego pronunciar la sentencia definitiva.

Para llegar a este momento en el proceso –conforme al sistema tradicional- es necesario que las partes formulen cada uno sus conclusiones. Este acto procesal tiene la tarea fundamental de fijar las bases sobre los cuales versará la audiencia final. Al elaborar conclusiones cada una de las partes crea un enlace con el objetivo que cada uno representa dentro del proceso, para el Ministerio Público es argumentar si los hechos denunciados han quedado perfectamente comprobados y se ajustan al tipo penal, de igual forma que la responsabilidad a quien ha sido imputado como autor del mismo. Para la defensa, como es natural, corresponderá el análisis sobre la forma en que las pruebas aportadas afirman o desvirtúan la acusación. En la presentación de las conclusiones está incluido el propio inculcado<sup>418</sup>.

---

sólo queda vinculado a lo alegado y probado dentro de él (juicio)...la presunción de inocencia como derecho fundamental vincula a todos los poderes públicos...". STC 31/1981, Cfr. Pulido Quecedo, Manuel, *"Constitución..."*, op.cit., p. 791.

<sup>418</sup> Al respecto hay que decir que anterior a la reforma constitucional de octubre de 2007-2008, existía el derecho de autodefensa a favor del inculcado, o bien de que fuera éste quien escogiera a quien ejercería la misma, pudiendo recaer esta responsabilidad en cualquier persona, sin necesidad de tener título de Licenciatura en Derecho. Es por eso que en las legislaciones penales procesales de los estados, se estableció que el procesado tendría el derecho de defenderse por sí mismo y en este sentido también las conclusiones podrían presentarse por sí mismo. Sin embargo la reforma constitucional mencionada suprimió el derecho de autodefensa o la elección que el inculcado pudiera hacer respecto de quien ejerciera su defensa dentro del proceso penal. Actualmente por disposición del Artículo 20 apartado B fracción VIII constitucional el inculcado tiene derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el

Tanto el Ministerio Público como la defensa deben basar sus pedimentos ante el juez en las actuaciones dentro la averiguación previa y la instrucción. En el caso de la defensa, ésta deberá tomar en cuenta la posición del Ministerio Público, sin embargo deberá participar de todas las probanzas desahogadas por ser útiles en sus peticiones de inculpabilidad, o en la disminución de la penalidad.

El momento procesal para la presentación de las conclusiones se lleva a cabo una vez que se haya decretado que el período de instrucción ha fenecido. Será importante establecer las reglas de presentación de éstas, según del procedimiento de que se trate que sea sumario y ordinario. Tratándose del procedimiento sumario el Código de Procedimientos Penal del Distrito Federal en su Artículo 315 reza: “... *el juez declarará cerrada la instrucción y mandará poner la causa a la vista del Ministerio Público y de la defensa, durante cinco días por cada uno, para la formulación de conclusiones. Si el expediente excediera de doscientas fojas, por cada cien de exceso o fracción, se aumentará un día al plazo señalado, sin que nunca sea mayor de treinta días hábiles...*”.

En el mismo sentido el Código Federal de Procedimientos Penales en su numeral 291 establece: “*Cerrada la instrucción, se mandará poner la causa a la vista del Ministerio Público, por diez días, para que formule conclusiones por escrito. Si el expediente excediere de doscientas hojas, por cada cien de exceso o fracción, se aumentará un día al plazo señalado, sin que nunca sea mayor de treinta días hábiles*”. El numeral en cita, obliga al Ministerio Público para que en caso de que el plazo fijado fenezca sin que se hayan presentado las conclusiones respectivas. Será el juez quien deberá informar mediante notificación personal al Procurador General de la República acerca de esta omisión, para que dicha autoridad formule conclusiones en un plazo de diez días hábiles, contados desde la fecha en que se le haya notificado la omisión. Si transcurrido el plazo sin que se formulen conclusiones, el juez tendrá por presentadas conclusiones de no acusación y el

---

momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. Sin embargo existen algunos códigos penales estatales actualizados conforme al modelo acusatorio y se recoge este nuevo estado de cosas, y otros que aún no han sido reformados y no lo contemplan expresamente.

procesado será puesto en inmediata libertad, sobreseyendo el proceso. En los procesos del fuero común se sigue esta misma lógica procesal.

Dentro de la fase procesal de primera instancia, una vez que se han presentado las conclusiones, el acto procesal siguiente es la celebración de la audiencia final. Dice Juan Silva Meza<sup>419</sup> que la precisión de este procedimiento en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es de proporcionar la seguridad jurídica en el proceso y, como consecuencia garantizar el respeto a la garantía de audiencia del imputado, quien al dar contestación a las conclusiones de acusación, tendrá la posibilidad de argumentar para desvirtuarlas, estableciendo criterios que permitan al juzgador que hacer en caso de que éstas sean confusas. La Corte Mexicana en este sentido ha dicho también: *“En tratándose de la garantía de audiencia, debe ser respetada aun en el extremo de que la ley ordinaria no prevea un procedimiento para oír al interesado de una resolución que le perjudique. Si la protección de la Justicia Federal fue concedida para tal único efecto...”*<sup>420</sup>.

La naturaleza de esta etapa es para que los sujetos de la relación jurídica que nació con motivo del proceso penal, reproduzcan verbalmente sus conclusiones o bien abunden sobre la razón de su dicho, lo que permitirá al juez definir la pretensión punitiva. En el caso del procedimiento sumario el Código Federal de Procedimientos Penales en su Artículo 307 establece: *“Cuando se esté en los casos a que se refieren los apartados a), b) y c) del artículo 152<sup>421</sup>, la audiencia principiará presentando el Ministerio Público sus*

---

<sup>419</sup> Cfr. Silva Meza, Juan N., *“La Jurisprudencia Penal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. México. Su repercusión en el Proceso Penal”*, “Panorama Internacional...”, op.cit., p. 431.

<sup>420</sup> Tesis: XIX.10.1 P, Semanario Judicial de la Federación, disponible en [www.scjn.gob.mx](http://www.scjn.gob.mx), consultado el 30 de agosto de 2015.

<sup>421</sup> Artículo 152.- El proceso se tramitará en forma sumaria en los siguientes casos: a) En los casos de delitos cuya pena no exceda de dos años de prisión, sea o no alternativa, o la aplicable no sea privativa de libertad, al dictar el auto de formal prisión o de sujeción a proceso, de oficio resolverá la apertura del procedimiento sumario, en el cual se procurará cerrar la instrucción dentro de quince días. Una vez que el tribunal la declare cerrada, citará a la audiencia a que se refiere el artículo 307; b) Cuando la pena exceda de dos años de prisión sea o no alternativa, al dictar el auto de formal prisión o de sujeción a proceso, el juez de oficio resolverá la apertura del procedimiento sumario en el cual se procurará cerrar la instrucción dentro del plazo de treinta días, cuando se esté en cualquiera de los siguientes casos: I.- Que se trate de delito flagrante; II.- Que exista confesión rendida precisamente ante la autoridad judicial o ratificación ante ésta de la rendida ante el Ministerio Público; o III.- Que no exceda de cinco años el término medio aritmético de la pena de prisión aplicable, o que excediendo sea alternativa. Una vez que el juzgador acuerde cerrar la instrucción, citará para la audiencia a que se refiere el artículo 307, la que deberá celebrarse dentro de los

*conclusiones y contestándolas a continuación la defensa. Si aquéllas fueren acusatorias, se seguirá el procedimiento señalado en el artículo anterior<sup>422</sup>, dictándose la sentencia en la misma audiencia o dentro de los cinco días siguientes a ésta. Si las conclusiones fueren de las contempladas en el artículo 294, se suspenderá la audiencia y se estará en lo previsto en el artículo 295”.*

Dentro del procedimiento ordinario el juez fijará día y hora para la celebración de la vista, que se llevará a cabo dentro de los cinco días siguientes. Las partes deberán estar presentes en la audiencia. En caso de que el Ministerio Público o el defensor no se presenten, se citará para nueva audiencia dentro de tres días. Si la ausencia fuere injustificada, se aplicará una corrección disciplinaria al defensor particular y se informará al Procurador y al Jefe de la Defensoría de Oficio, en su caso, para que impongan la corrección que proceda a sus respectivos subalternos y puedan nombrar sustituto que asista a la nuevamente citada. Después de recibir las pruebas que legalmente puedan presentarse, de la lectura de las constancias que las partes señalen y de oír los alegatos de las mismas, el juez declarará visto el proceso para emisión de la resolución respectiva<sup>423</sup>.

Por la naturaleza de los derechos en juego dentro de un proceso penal, hace imprescindible que en todos los actos procesales los sujetos de la relación procesal estén presentes y teniendo la posibilidad de intervenir en todas las diligencias a efecto de que manifiesten lo

---

diez días siguientes; c) En cualquier caso en que se haya dictado auto de formal prisión o de sujeción a proceso y las partes manifiesten al notificarse de ese auto o dentro de los tres días siguientes a la notificación, que se conforman con él y que no tienen más pruebas que ofrecer salvo las conducentes sólo a la individualización de la pena o medida de seguridad y el juez no estime necesario practicar otras diligencias, citará a la audiencia a que se refiere el artículo 307. El inculcado podrá optar por el procedimiento ordinario dentro de los tres días siguientes al que se le notifique la instauración del juicio sumario. Disponible en <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/7.pdf>, 17 de febrero de 2011.

<sup>422</sup> Artículo 306.- En la audiencia podrán interrogar al acusado sobre los hechos materia del juicio, el juez, el Ministerio Público y la defensa. Podrán repetirse las diligencias de prueba que se hubieren practicado durante la instrucción, siempre que fuere necesario y posible a juicio del tribunal, y si hubieren sido solicitadas por las partes, a más tardar al día siguiente en que se notificó el auto citando para la audiencia. Se dará lectura a las constancias que las partes señalen; y después de oír los alegatos de las mismas, se declarará visto el proceso, con lo que terminará la diligencia, salvo que el juez oyendo a las partes, considere conveniente citar a nueva audiencia, por una sola vez. Contra la resolución que niegue o admita la repetición de las diligencias de prueba o cite a nueva audiencia, no procede recurso alguno. Disponible en <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/7.pdf>, 17 de febrero de 2011.

<sup>423</sup> Artículos 325, 326, 328 Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal.

que a su derecho convenga. El juez, el Ministerio Público, el inculpado y su defensor. En este sentido el Código Federal de Procedimientos Penales en su Artículo 87 dice que en la audiencia final del juicio será obligatoria la presencia del Ministerio Público y del defensor quien podrá hacer la defensa oral del acusado, sin perjuicio del alegato escrito que quiera presentar.

Hemos estudiado como en el Derecho mexicano la legislación adjetiva penal, en sus distintos ámbitos reflejan la obligación de que la audiencia final este presidida en todo momento por los sujetos procesales y el órgano jurisdiccional, a modo de que el momento de contradicción y debate que debe envolver al juicio mismo, tenga lugar. La naturaleza de este momento procesal recae en la oportunidad de que la acusación, defensa y posterior resolución se hayan desarrollado bajo los parámetros del debate oral, público y contradictorio, por lo menos así ha quedado reflejado en la legislación estudiada. Sin embargo, existe una fuerte crítica al respecto, esta es que en la mayoría de los casos, el juicio queda reducido al mero formalismo en la celebración de las audiencias dentro del procedimiento y de la audiencia final, donde este último en la más de las veces queda reducido a la lectura de las constancias que las partes señalen, así como sus alegatos, el juez procede a la emisión de un auto de trámite donde se declara el juicio visto para la sentencia<sup>424</sup>.

En epígrafes anteriores sobre la naturaleza y funcionamiento del juicio de amparo, nos detuvimos mencionando brevemente como esta institución ocupa un lugar importante no sólo con respecto a los órganos jurisdiccionales que en materia federal se conocen como tribunales de amparo, pero que al mismo tiempo tienen incidencia en la jurisdicción común<sup>425</sup>. Este instrumento jurídico es en términos generales considerado como un medio de impugnación que se endereza contra actos de autoridad, en violación de garantías constitucionales. Dentro de la categoría de actos de autoridad encontramos las resoluciones judiciales que se dictan dentro de un proceso penal, hay que aclarar que el juicio de amparo

---

<sup>424</sup> Cfr. Polanco Braga, Elías, *"El Nuevo Sistema de..."*, op.cit., p.170; Véase Witker, Jorge, Natarén, Carlos F., *"Tendencias Actuales del diseño del proceso acusatorio en América Latina y México"*, Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM. México, D.F., 2000.

<sup>425</sup> Capítulo I, apartados 4 y 5, del apartado Organización Judicial Mexicana.

no es un recurso procesal en sentido estricto, es un juicio en sí mismo<sup>426</sup>. Hecha esta precisión, el juicio de amparo, que puede iniciarse para combatir resoluciones judiciales derivadas de un proceso penal, puede adoptar dos procedimientos distintos, dependiendo de la naturaleza de la resolución que se impugne.

En materia penal se conoce como amparo indirecto de acuerdo con la Ley de Amparo en su Artículo 107, o porque procede contra los actos y resoluciones que se dicten dentro del juicio, siempre que no sean de imposible reparación. Como ejemplo a un acto recurrible en amparo indirecto será aquel que se interponga en contra normas generales que por su sola entrada en vigor, causan un perjuicio al justiciable; por lo que hace a un acto de imposible reparación lo es un orden de detención que ejerce la policía en acatamiento a una orden judicial emanada de un juez, constituye un acto de imposible reparación debido a que el justiciable sea privado de su libertad, hacia el futuro no podrá desempeñar sus actividades cotidianas debido a que ha sido privado de su libertad personal. También procede contra actos realizados fuera del juicio o después de concluido, de igual forma que procede contra las resoluciones judiciales que se pronuncien y afecten a terceros. Es importante señalar que para que este medio de impugnación pueda emprenderse por esta vía, es menester que se hayan agotado todos los recursos ordinarios que estén ordenados por ley en la materia en su Artículo 61, fracción XVIII.

Por otra parte, procede el juicio de amparo directo contra las sentencias definitivas del orden penal, es decir aquellas resoluciones que deciden sobre el fondo dentro del juicio penal, y que ya no son impugnables por ningún recurso ordinario Artículo 170 de la Ley de Amparo.

---

<sup>426</sup> Esta diferencia sobre si el Juicio de Amparo será un juicio o un recurso, nace desde la ley reglamentaria de la materia promulgada el 1861, que se estuvo a lo señalado por la Constitución, y llamo al Amparo Juicio, como ésta le llama el artículo 102 Constitucional y la Constitución Mexicana lo llamo así pues en su momento los ideólogos del Amparo no visionaron la evolución que dicha institución tendría hacia el futuro. El Amparo iba ser siempre el ejercicio de un derecho surgido de una violación. Por su parte la Ley de 1869 tomando como referencia la experiencia sobre un conocimiento mejor de los artículos 101 y 102 comienzan a llamar al Amparo como un recurso. Ahora bien la Ley de 1882, igualmente le otorgo al Amparo la condición de recurso, pero, lo que parecía un resultado no intencional del concepto que de esta clase de procesos se había ido formando, se sometió a especial consideración, fue deliberada resolución la de llamar siempre Juicio al Amparo en el Código Federal de Procedimientos Civiles, quedando legalmente resuelto que es siempre y en todos los casos un juicio. Cfr. Rabasa, Emilio, *“Artículo 14 y El Juicio Constitucional”*, Primera Edición, Segunda reimpresión 1955, Editorial Porrúa, México, D.F., p.9.

Como puede observarse en México –cuando menos en la esencia- el enjuiciamiento penal ha sido diseñado con la mirada puesta en la obtención de la mayor verdad posible y accesible, así lo advierte Sergio García Ramírez<sup>427</sup>, éste concepto ha sido entendido como un fin específico del proceso penal y por lo tanto con la atención puesta en la prueba. En rigor, -continúa el autor- el proceso es de principio a fin un extenso ejercicio probatorio. Las reglas de este ejercicio que alguna vez –y aún- incluyeron la tortura<sup>428</sup>, hoy se intentan regular por un derecho de signo democrático con sus respectivos tropiezos y exclusiones, que sin embargo conforman parte esencial y determinante en la ingeniería del proceso penal. Ante el reto de configurar un nuevo sistema de procesamiento penal corresponde tal como lo plantea Teresa Armenta Deu<sup>429</sup> contestar los siguientes cuestionamientos:

### **3. Sujetos en el Proceso Penal.**

El enfoque del presente capítulo ha sido estudiar la estructura y funcionamiento del sistema procesal mexicano, pese a la complejidad de la empresa intentamos establecer un panorama general de la regulación constitucional y legal de los tribunales mexicanos, que tiene competencia en materia penal y sus facultades, el objetivo es evidenciar como la Constitución Mexicana se ocupa de regular a los órganos que tienen bajo su encargo la impartición de justicia en dicha materia y, también, analizar los organismos encargados de procurarla. Nuestra exposición se centrará en la jurisdicción penal, los elementos que la integran, y por supuesto los preceptos constitucionales y legales que la sostienen. Dentro de este estudio quedan comprendidos las partes que deben intervenir en un proceso penal, por un lado el Ministerio Público, quien en nombre del Estado y también en bienestar de la sociedad ejerce la función de investigar y perseguir los delitos, que de igual forma lo encontramos ejerciendo nuevas atribuciones al representar los intereses de la víctima u

---

<sup>427</sup> Cfr. García Ramírez, Sergio, *“Algunas Cuestiones del Proceso Penal”*, “Memoria...”, op.cit., p.177-178.

<sup>428</sup> Esta condición subsistió desde que México firma la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Político, pero ha tenido eficacia por los efectos derivado de la doctrina sentada por la Corte Mexicana, en el tema de la tortura y la prueba ilícita.

<sup>429</sup> Cfr. Armenta Deu, Teresa, *“Nuevo Proceso Penal: Sistemas y Valoración de Pesos y Contrapesos”*, “Memoria...”, op.cit., p. 32-33.

ofendido dentro del proceso penal. Luego están el imputado y su defensor, con quienes también el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el derecho de defensa y por último el juez quien es encargado de impartir justicia responsable de ser garante en todo momento de las prerrogativas constitucionales.

Con respecto a los sujetos procesales hay que decir que han quedado mejor diferenciadas con posterioridad a la reforma constitucional de 2007-2008, a través de la cual cambia en principio el sistema de procesamiento por un modelo acusatorio-adversarial<sup>430</sup>. Este nuevo esquema procesal distingue, por lo menos en el papel las funciones de los órganos de acusación y los de defensa, así como las de aplicación del Derecho –que son responsabilidad del tribunal-. De igual forma es importante señalar que la legislación procesal penal a menudo se ha ocupado desordenadamente de la regulación de las partes que intervienen dentro del proceso de enjuiciamiento.

El actual artículo 20 de la Constitución Mexicana establece las reglas que deben observarse en el proceso y en cuanto al desarrollo del mismo, pero también instruye los modos de actuar del juez; los derechos que asisten al imputado, además del derecho a ser asistido por un defensor y por último los derechos que asisten a la parte ofendida o víctima del delito. Respectivamente el Artículo 21 Constitucional establece que la responsabilidad de investigación de los delitos y ejercicio de la acción penal ante los tribunales recae exclusivamente en el Ministerio Público, con la salvedad apuntada en líneas anteriores de la acción privada. Mejor clasificados como sujetos de la relación procesal, más que en su acepción de partes, a continuación nos ocuparemos del Ministerio Público en su carácter de representante de la víctima y ofendido; del acusado y los derechos que le asisten, entre ellos el derecho defensa, que recae en la figura del defensor sea este de oficio o particular a quien también haremos referencia.

### **3.1. Imputado.**

---

<sup>430</sup> Existe una parte de la doctrina mexicana que antes de la reforma clasificaban el sistema de procesamiento penal, como acusatorio incluso mixto, sin embargo persistía la crítica respecto de lo imprecisión con que las normas procesales regulan el tema de las partes procesales. A menudo centrándose en el poder que supone dentro del proceso las actuaciones del Ministerio Público principalmente.



En términos generales el acusado es a quien se le atribuye la comisión de un hecho delictivo, puede ser persona determinada o indeterminada, es aquel contra quien el Ministerio Público ejercerá la acción persecutoria. Es el sujeto procesal indispensable dentro del proceso penal. Surge en el momento en el que alguien le atribuye la comisión de un delito, bien sea a través de una denuncia o querrela, por su acción u omisión se pone en marcha el aparato punitivo del Estado.

En el proceso quien ejerce la acción penal es el Ministerio Público constitucionalmente se le atribuye esta facultad exclusiva, ocupando la condición de sujeto activo dentro del enjuiciamiento, mientras que al inculcado le es propio la condición de sujeto pasivo dentro de aquel, por ser el receptor del *ius puniendi*. Es importante decir que a menudo la averiguación previa servirá para determinar la persona en quien recaerá la condición de inculpada. Al final de lo cual deberá ser posible la identificación del inculcado, para el momento del ejercicio de la acción penal. Sin embargo hay que precisar que en el caso de las nuevas competencias por parte los particulares para ejercer la acción penal privada, esta será una opción para el justiciable en determinados delitos pudiendo renunciar a esa oportunidad y agotar la vía institucional ante el Ministerio Público que en ningún caso será sustituidas sus facultades exclusivas de perseguir los delitos.

Como hemos visto, el inculcado no requiere de alguna capacidad especial para legitimar su vínculo jurídico dentro del proceso, y con el resto de sujetos procesales. Baste el hecho de ser persona imputable. Sin embargo, lo que sí es fundamental de cara al desarrollo del proceso mismo y su legitimación dentro de un estado democrático constitucional, son los derechos que corresponden a todo gobernado al verse sometido a un proceso de enjuiciamiento penal. De suerte que toda persona en quien recaiga la condición de imputada, bien sea a partir del proceso de investigación, bajo la autoridad del Ministerio Público como en la fase que dirija el tribunal, aquel deberá estar protegido por un conjunto de derechos fundamentales que le asisten.

En este sentido el Artículo 20 Constitucional al que hemos hecho referencia en múltiples ocasiones en su apartado B contiene un catálogo de derechos a favor del imputado<sup>431</sup>.

---

<sup>431</sup> I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa; II. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán

Dentro del Derecho mexicano existe una obligación impuesta por la constitución al estado en la estricta observancia de los derechos que asisten al inculpado, y los parámetros que se deberán seguirse en cuanto al desarrollo del proceso. Interesa al Estado el observar estos derechos, ya que de no ser así sus actos podrán ser invalidados o nulificados según sea el caso. A manera de ejemplificar lo expuesto en el pasado la Corte Mexicana creó el criterio de *“la teoría de la asunción judicial”*, la cual consiste en que: *“un Tribunal Colegiado de Circuito al conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la víctima del delito, esa decisión judicial evita una probable responsabilidad del Estado Mexicano en el plano*

---

saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio; III. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador. La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada; IV. Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley; V. Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo. En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de investigación podrán tener valor probatorio, cuando no puedan ser reproducidas en juicio o exista riesgo para testigos o víctimas. Lo anterior sin perjuicio del derecho del inculpado de objetarlas o impugnarlas y aportar pruebas en contra; VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibirse declaración o entrevistarle. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa; VII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa; VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, y IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo. La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención.

*internacional y, por tanto, la consecuencia lógica y necesaria es sancionar al servidor público que cometió un ejercicio indebido, o un descuido -en su caso- de la función jurisdiccional que ejercía como juzgador autorizado por el Consejo del Poder Judicial del Estado porque, contrariando a la Teoría de la Asunción Judicial, ese titular del órgano jurisdiccional ordinario no otorgó la tutela que de él se esperaba para reparar la violación alegada, convirtiéndose en el origen inmediato directo de esa violación”<sup>432</sup>.*

Como puede advertirse los propios órganos impartidores de justicia, al ser parte del Estado y prestar una función establecida en la norma constitucional y su normas ordinarias, no es ajena a la obligación y responsabilidad de ejercer sus facultades en apego y protección de derechos fundamentales. En los epígrafes relativos al Poder Judicial Federal, orden y funcionamiento y los subsecuentes nos hemos referido que dentro del sistema jurídico mexicano se han establecido mecanismos de defensa respecto de actos de autoridad arbitrarios violatorios de derechos fundamentales, es el caso del juicio de amparo y sus distintas vertientes que incluyen el proceso penal.

### **3.2. Defensor.**

El acceso a una defensa adecuada para el imputado, implica el cumplimiento un derecho fundamental en sí mismo, es que sus intereses estén protegidos dentro del sistema procesal mexicano ordenando el derecho a ser asistido por un defensor. La Constitución Mexicana ha hecho obligatorio este derecho, sobre todo en materia penal, puesto que de conformidad con la carta fundamental, más que un derecho es una garantía constitucional. Esto es así por disposición de la fracción VIII, apartado C del Artículo 20 Constitucional que -el imputado- tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera.

---

<sup>432</sup> Tesis: XI.10.A.T.19 K (10a.), Semanario Judicial de la Federación, disponible en [www.scjn.gob.mx](http://www.scjn.gob.mx), consultado el 2 de septiembre de 2015.

Sin duda para el sujeto procesal del imputado, la asistencia de un defensor supone el elemento *sine qua non* dentro de la relación procesal que se establece desde el momento de la averiguación previa-investigación. En el caso de que cuente con una persona detenida, el Ministerio Público no sólo está obligado a informarle de los derechos que le asisten como imputado, sino también debe garantizarle el derecho de estar asesorado por su abogado en todo momento, pues esto es lo que hace efectivo el derecho constitucional de defensa. Pues no podemos perder de vista que por medio de éste, serán analizados todos los actos de autoridad que con motivo del proceso se realicen, como tampoco la circunstancia de que todos los actos que se efectúen con motivo de la investigación, deban satisfacer una serie de principios y condiciones en sujeción a las garantías constitucionales que todo régimen que se precie de ser democrático está obligado a observar.

Esquinca Muñoa<sup>433</sup> explica que a simple vista pareciera que el problema de la indefensión dentro del proceso penal mexicano es un asunto superado, que es resquicio del pasado cuando el Ministerio público fue absoluto en la etapa de averiguación, en donde no existía oportunidad de defensa. Pues bien a pesar de los avances logrados a favor de los imputados en materia de los derechos fundamentales que les asisten, es insoslayable la resistencia que en la actualidad aún impide la plena garantía del derecho a una defensa adecuada que ordena la Constitución Mexicana.

Es cierto –refiere el autor– que se han presentados avances importantes principalmente por lo que respecta a la defensoría pública en el ámbito federal, al hacer efectivo la sola presencia del defensor en espacios donde antes era zona exclusiva del Ministerio Público en carácter de órgano investigador-inquisidor, llevando a cabo prácticas contrarias a la ley en perjuicio del justiciable. Ha sido común que no se permita al defensor público tener acceso inmediato a la persona detenida para hacer de su conocimiento la prerrogativa de contar con un defensor gratuito que lo asesore desde el momento mismo de la averiguación. Sobre el derecho a una defensa adecuada, la Corte Mexicana ha establecido el criterio: *“El derecho a la defensa adecuada tutelado por el artículo 20, apartado A), fracción IX, de la*

---

<sup>433</sup> Cfr. Esquinca Muñoa, Cesar, *“Aspectos de la Procuración de Justicia y la Defensa Penal”*, La Reforma a la Justicia Penal, Quintas Jornadas sobre Justicia Penal, VV.AA, Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 2006, p.190.

*Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, referido específicamente al derecho del inculpado de nombrar al inicio del proceso una defensa representada por sí mismo, por un abogado o por persona de su confianza, más allá de una interpretación tradicional del precepto legal y sometida a una más extensiva y protectora de derechos humanos, atento al principio pro persona, nos lleva a establecer que el Juez garantiza al inculpado dicho derecho -bajo una perspectiva de tutela más amplia y protectora-, cuando además de respetar su derecho de nombrar a una persona de confianza que no es licenciado en derecho, le designa a un defensor público para que lo asesore en todas las cuestiones técnico legales y, conjuntamente con la persona de confianza, puedan representar efectivamente su defensa. Ésa es la manera en que puede lograrse la protección más amplia, pues con ello se persigue no solamente atender a la voluntad del justiciable de tener como su defensor a una persona en la que deposite su confianza firme, sino que también cuente con un defensor profesional y que materialice su expectativa de ser representado y defendido ante la autoridad judicial, garantizando así su derecho fundamental a una defensa adecuada. En aplicación del principio pro persona”<sup>434</sup>.*

De igual forma, derivado del control absoluto que ha tenido Ministerio Público a menudo recurre a un sin número de argucias legales para evitar las acciones de defensa, e impidiendo la designación del defensor, anulando con ello toda posibilidad de hacer efectivo al derecho de defensa<sup>435</sup>. Con el objeto de dar protección al derecho fundamental a una defensa adecuada el Tribunal Mexicano ha establecido en su doctrina: “...la violación al derecho humano de defensa adecuada, que se actualiza cuando el imputado (lato sensu) declara sin la asistencia jurídica de un defensor que tenga el carácter de profesional en derecho (abogado particular o defensor público), no puede concurrir con circunstancias que en apariencia la convaliden, de manera que transformen la realidad jurídicamente observable como si no hubiera acontecido. Lo cual implica que la declaratoria de ilicitud de la diligencia no debe supeditarse a actos posteriores que puedan interpretarse como el consentimiento o superación de la actuación que se realizó de forma contraria a derecho y

---

<sup>434</sup> Tesis: XXXI.2 P (10a.), Semanario Judicial de la Federación disponible en [www.scjn.gob.mx](http://www.scjn.gob.mx), consultado el 2 de septiembre de 2015.

<sup>435</sup> Cfr. Esquina Muñoa, Cesar, “Aspectos de la Procuración...”, op.cit., p. 191.

*que dejó en estado de indefensión al imputado. En consecuencia, la diligencia practicada en los términos resaltados, no deberá considerarse para efectos de valoración al dictar cualquier resolución por la que se determine la situación jurídica de la persona sujeta a un procedimiento penal, sino que tendrá que excluirse como medio de prueba, con independencia de su contenido. Por tanto, las autoridades no requieren realizar una evaluación a priori de la declaración del imputado para determinar si tiene efectos perjudiciales hacia la defensa o si vierte elementos de exculpación que pudieran beneficiarle, como para estimar que puede convalidarse la actuación si posteriormente es ratificada. Incluso, aun en el supuesto de que el imputado aportara elementos de exculpación, esta circunstancia de ninguna manera tiene el alcance de validar la ilicitud de la diligencia que se practicó en contravención al derecho humano de defensa adecuada”<sup>436</sup>.*

Por tanto, el objetivo del derecho de defensa es asegurar que desde el momento mismo en que un individuo sea sujeto a una investigación-averiguación por un hecho que presuntamente pudiera ser delictivo, el justiciable tenga conocimiento de los derechos que le asisten. Pues si la intención es que la designación del defensor se haga cuando el imputado rinda su declaración inicial ante el fiscal, -es decir cuando esta por vencer el plazo para determinar si hay elementos para ejercitar la acción persecutoria-, esto hace nugatorio toda posibilidad de defensa, pues anula cualquier posibilidad de defensa al impedir el desahogo de probanzas que combatan la imputación formulada por el Ministerio Público<sup>437</sup>.

---

<sup>436</sup> Tesis: 1a./J. 27/2015 (10a.); Semanario Judicial de la Federación, disponible en [www.scjn.gob.mx](http://www.scjn.gob.mx), consultado el 2 de septiembre de 2015.

<sup>437</sup> “La eficacia del derecho constitucional del acusado a contar con una defensa adecuada, tanto en la etapa de detención como en el juicio penal, se puede medir de dos formas distintas. En el caso de las dos encuestas de población en reclusión del CIDE, lo intentamos hacer de dos maneras. Por un lado, a través de la percepción de los propios sentenciados: cómo evalúan ellos la calidad de la defensa que recibieron a lo largo de todo el proceso, desde la averiguación previa hasta la sentencia. Esta medición puede tener sesgos ya que el acusado fue sentenciado. Por ello también intentamos medir la calidad de la defensa, a través del nivel de eficacia de los derechos constitucionales del acusado asumiendo que una “defensa adecuada” debe por lo menos garantizar que tales derechos no sean violados y que sí lo son, ello tenga consecuencias jurídicas en el proceso los datos de ambas encuestas revelan la ineficiencia del derecho a la defensa en las dos formas de medirlo...”, Cfr. Magaloni Kerpel, Ana Laura, Ibarra Olguín, Ana María, “La configuración Jurisprudencial de los Derechos Fundamentales. El caso del Derecho Constitucional a una defensa adecuada”, Cuestiones Constitucionales, Número 19, julio-diciembre, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM,

De la exposición que hemos hecho respecto de la eficacia del derecho a una defensa adecuada se advierte que el respeto a ese cúmulo de garantías mínimas tiene el objetivo de lograr la salvaguarda de los derechos fundamentales del inculpado, entre las que se encuentra la de contar con una adecuada defensa por abogado, no queda constreñida a la mera designación o nombramiento del defensor, sino a la comunicación que el justiciable puede tener con su abogado, de manera privada. Es decir que con anterioridad a que se produzca la oportunidad de intervenir rindiendo su declaración preparatoria, precisamente por la relevancia y trascendencia que esa actuación implica dentro del proceso; desde ese momento deba garantizarse la oportunidad de ser asesorado por un defensor, pues de lo contrario serán ilegales todas las actuaciones que se lleven a cabo si el imputado no está asistido del profesionista en derecho, pues es claro que aquél no contó con una oportuna defensa.

Otro aspecto convenientemente aprovechado por el Ministerio Público ha sido la posibilidad que la constitución y los códigos procesales otorgaban al procesado para nombrar una persona de su confianza como defensor, este derecho ha obedecido esencialmente a la necesidad de que la norma constitucional acudiera en defensa de la persona sujeta a proceso, para que al ser sometido a un enjuiciamiento penal pudiera tener comunicación con el exterior, eliminando la oscuridad con que se manejaban los procesos penales manejados con control absoluto y discrecional del Ministerio Público<sup>438</sup>.

Entonces, ¿porque es interés del Ministerio Público el garantizar la presencia del defensor? La respuesta es que sin la presencia de éste los actos celebrados dentro del procesamiento resultan nulos, incluyendo como hemos anotado los actos que se resuelven dentro de la averiguación. En este sentido el Artículo 388 en sus fracciones II y siguientes del Código Federal de Procedimientos Penales sentencia que habrá reposición del procedimiento:

---

México, D.F., p.115., Véase también Azaola, Elena, Bergman, *"Delincuencia Marginalidad y Desempeño institucional"*. Resultados de la tercera encuesta a población en reclusión en el Distrito Federal y en el Estado de México. CIDE, México D.F. 2009, disponible en [www.cide.edu.mx](http://www.cide.edu.mx)

<sup>438</sup> Cfr. Esquina Muñoa, Cesar, *"Aspectos de la Procuración..."*, op.cit., p.192.

*“II.- Por no habersele permitido nombrar defensor o no nombrársele el de oficio en los términos que señala la ley; por no habersele facilitado la manera de hacer saber al defensor su nombramiento, y por habersele impedido comunicarse con él o que dicho defensor lo asistiere en alguna de las diligencias del proceso; II Bis.- Por haberse omitido la designación del traductor al inculcado que no hable o entienda suficientemente el idioma castellano, en los términos que señale la ley. III.- Por no habersele ministrado los datos que necesitare para su defensa y que constaren en el proceso (...) VII bis.- Por existir omisiones graves de la defensa en perjuicio del sentenciado; se reputan como omisiones graves de la defensa: a) No haber asesorado al inculcado sobre la naturaleza y las consecuencias jurídicas de los hechos imputados en el proceso; b) No haber asistido a las diligencias que se practicaren con intervención del inculcado durante la averiguación previa y durante el proceso; c) No haber ofrecido y aportado las pruebas necesarias para la defensa del inculcado (...)”<sup>439</sup>.*

Hemos advertido que la reforma constitucional de octubre 2007-2008 produjo un cambio de universo en cuanto a la defensa del inculcado se refiere. Antes de esta, el inculcado podía ejercer su propia defensa y también podía designar en ella a una persona de su confianza, sin que esta ostentara el título Licenciado en Derecho con la cedula profesional respectiva. Esto quedó previsto en el artículo 20 Constitucional, apartado B, fracción VIII. También existía la posibilidad del defensor particular o el de oficio. En la actualidad estas dos últimas posibilidades siguen vigentes, lo que vino a cambiar la reforma constitucional fue la condición de persona de su confianza o el ejercicio de la defensa por sí mismo,

---

<sup>439</sup> En el mismo sentido el Código Penal del Distrito Federal en su Artículo 431 establece.- Habrá lugar a la reposición del procedimiento por alguna de las causas siguientes: (...) III. Por no haberse permitido al acusado nombrar defensor, en los términos que establece la ley o por no haberse cumplido con lo dispuesto en los artículos 294 (nombramiento de un defensor por parte del juez), 326 (presencia del defensor en la audiencia final), 338 y 339 (nombramiento de nuevo defensor); III Bis. Por haber omitido la designación del traductor al inculcado que no hable o no entienda suficientemente el idioma castellano, en los términos que señala esta ley. IV. Por no haberse practicado las diligencias pedidas por alguna de las partes; (...) VI bis. Por existir omisiones graves de la defensa en perjuicio del sentenciado; se reputan como omisiones graves de la defensa: a) No haber asesorado al inculcado sobre la naturaleza y las consecuencias jurídicas de los hechos imputados en el proceso, b) No haber asistido a las diligencias que se practicaron con intervención del inculcado durante la averiguación previa y durante el proceso; c) No haber ofrecido y aportado las pruebas necesarias para la defensa del inculcado; d) No haber hecho valer las circunstancias probadas que en el proceso favorecieran la defensa del inculcado; e) No haber interpuesto los medios de impugnación necesarios para la defensa del inculcado, y f) No haber promovido todos aquellos actos procesales que fuesen necesarios para el desarrollo normal del proceso y el pronunciamiento de la sentencia.



estableciendo que la defensa será ejercida por abogado, esto es por persona que sea profesional en derecho en posesión del título y certificaciones correspondientes<sup>440</sup>.

Pese a la reforma constitucional comentada, tanto el Código Federal de Procedimientos Penales, como el propio del Distrito Federal establecen la posibilidad de que en las audiencias además de ser públicas, el inculcado podrá defenderse por sí mismo o por su defensor. Como puede observarse, ambos códigos dejan abierta la posibilidad de que el inculcado asuma su propia defensa, o bien que esta responsabilidad recaiga en persona de su confianza que carezca del título de licenciado en derecho, o en posesión de cedula profesional, en cuyo caso el tribunal esta en obligación de asignarle un defensor de oficio que asista en la preparación de una buena defensa<sup>441</sup>.

Es fácil advertir que este nuevo estado de cosas tiene como principal objetivo el asegurar que aquel ciudadano que este sujeto de investigación o de procesamiento por algún delito, se someta al mismo, teniendo una defensa que proteja sus derechos fundamentales. La Constitución Mexicana obliga al Estado a que el proceso se desarrolle resguardando estos derechos, cuya validez y efectividad de actos se castigarán con la nulidad de no cumplirse con las previsiones que establece la norma constitucional. De esta manera el Estado sólo podrá ejercer su poder coercitivo en estricta observancia del régimen constitucional y jurídico que le obliga a que todos los actos de autoridad o de molestia estén fundados conforme al conjunto de garantías constitucionales, que todo estado democrático está en obligación de asegurar.

---

<sup>440</sup> Que los estudios universitarios estén acreditados por la Secretaria de Educación Pública, el profesionista haya cumplimentado el procedimiento para la obtención de su título profesional, que varía dependiendo de la Institución Educativa donde curse y culmine sus estudios, que en todos los casos deben ajustarse a lo que marque la autoridades educativas. Una vez cumplimentado el proceso de titulación, el mismo deberá ser registrado en la Dirección de Profesiones, de la Secretaria de Educación Pública Federal y esta autoridad es el único organismo que puede expedir la cedula profesional, documento oficial a través del cual se acredita la profesión de abogado entre otras profesiones.

<sup>441</sup> Código Federal de Procedimientos Penales Artículo 160.- (...) Fuera de los casos excluidos en el párrafo anterior, el inculcado puede designar a personas de su confianza para que lo defiendan, pero en caso de que la designación no recaiga sobre quien tenga cédula profesional de licenciado en Derecho o autorización de pasante, conforme a la Ley que reglamente el ejercicio de las profesiones, el tribunal dispondrá que intervenga, además del designado, un defensor de oficio que oriente a aquél y directamente al propio inculcado en todo lo que concierne a su adecuada defensa (...).

En relación al derecho de la defensa adecuada como derecho humano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha definido en opiniones consultivas diversas, que el debido proceso es un medio para asegurar en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia, debido al conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal. Dichos actos sirven para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho y son las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos derechos u obligaciones que están bajo consideración judicial<sup>442</sup>.

La Corte también establece como una obligación de parte de los Estados el garantizar el respeto a los derechos humanos, y por ende, el derecho al debido proceso que garantice una defensa adecuada y como segunda obligación el asegurar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la convención a personas sujetas a su jurisdicción. Esta obligación implica el deber del Estado de organizar todo el aparato gubernamental en todas sus estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos, en otras palabras este ejercicio no se agota con la existencia de un orden normativo, también es necesario una conducta gubernamental que asegure la existencia en la realidad<sup>443</sup>.

En este sentido la Corte Mexicana ha establecido su doctrina con respecto a hacer efectivo el cumplimiento a los derechos humanos. *“En relación con las prácticas judiciales, este Tribunal ha establecido en su jurisprudencia que es consciente de que los Jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los*

---

<sup>442</sup> Opinión Consultiva OC-16/99 del 1 de octubre de 1999, *El derecho a la información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal*; Opinión Consultiva OC-9/87 de octubre de 1987, *Garantías Judiciales en Estados de Emergencia* (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Corte IDH, disponible en [www.corteidh.or.cr](http://www.corteidh.or.cr) consultado el 10 de octubre de 2013.

<sup>443</sup> Sentencia Velásquez Rodríguez vs. Honduras, disponible en [www.corteidh.or.cr](http://www.corteidh.or.cr) consultado el 10 de octubre de 2013.

*efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer un ‘control de convencionalidad’ ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”<sup>444</sup>.*

De esta guisa conforme al Artículo 1o. Constitucional, reformado por el decreto constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2012, todas las autoridades del Estado Mexicano, dentro del ámbito de sus competencias, están obligadas a velar no sólo por aquellos contenidos tanto en los instrumentos internacionales firmados por éste, sino también por los contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y conforme al principio de interpretación más favorable a la persona, mejor conocido como el “principio pro persona”<sup>445</sup>.

Por su parte la Corte Mexicana, ha dicho que: *“el derecho a una defensa adecuada, contenido en el artículo 20, apartado A, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008), consiste en que el inculpado tendrá derecho a una defensa, por medio de su abogado y a que éste comparezca en todos los actos del proceso, quien tendrá la obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, lo*

---

<sup>444</sup> Véase Varios 912/2010, “en referencia al Caso Radilla”, disponible [www.scjn.gob.mx](http://www.scjn.gob.mx), consultado el 3 de septiembre del 2015.

<sup>445</sup> “...La obligación de ejercer el control ex officio de constitucionalidad y convencionalidad de una norma se actualiza aun en aquellos casos en los que el derecho humano de que se trate esté regulado en la propia Constitución Federal. Lo anterior, porque el Tribunal Pleno, al resolver el expediente Varios 912/2010, no hizo esa acotación, ni determinó que el control ex officio fuera una cuestión de subsidiariedad, sino que más bien recalcó que los jueces y todas las autoridades del país estaban obligados a velar por los derechos humanos y que esa vigilancia se traducía, en el caso de los juzgadores, en un problema interpretativo; para ello, se requiere que lleven a cabo efectivamente ese control en aquellos casos en los que la norma que se va a aplicar despierte sospechas para la autoridad aplicadora o sea señalada por el interesado como violatoria de derechos en el juicio de amparo; en esos supuestos, deberá además llevar a cabo el ejercicio en los tres pasos que indica el expediente Varios 912/2010: interpretación conforme en sentido amplio, interpretación conforme en sentido estricto y, en su caso, inaplicación”. Tesis: 1a./J. 38/2015 (10a.), *Ibidem*.

*que se actualiza desde que aquél es puesto a disposición del Ministerio Público; esto es, desde la etapa ministerial deberá contar con la asistencia efectiva del profesional, entendiéndose como tal, la presencia física y la ayuda efectiva del asesor legal, quien deberá velar porque el proceso se siga con apego a los principios del debido proceso, y éste no sea viciado, asegurando a la postre el dictado de una sentencia que cumpla con los requisitos, valores y principios legales y constitucionales que permean en el debido proceso penal; lo que deberá observarse en todas aquellas diligencias o actuaciones y etapas procesales en las cuales es eminentemente necesaria la presencia del inculcado, en las que activa, directa y físicamente participe o deba participar, así como en aquellas en las que de no estar presente, se cuestionarían o pondrían gravemente en duda la certeza jurídica y el debido proceso. Esto es así, porque la defensa adecuada representa un derecho instrumental cuya finalidad es asegurar que el poder punitivo del Estado se desplegará a través de un proceso justo, lo que además busca asegurar que pueda tener garantizados en su integridad sus derechos fundamentales”<sup>446</sup>.*

Queda claro que dentro de un proceso penal el derecho a una defensa adecuada es de naturaleza instrumental obligando a las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia, como para las encargadas de la investigación, a que el proceso se desarrolle con respeto a las garantías constitucionales para el imputado. En el caso de que el imputado no haya señalado persona alguna para que la ejerza, el propio órgano jurisdiccional debe nombrarle un defensor de oficio.

En México tanto en el orden federal, como en el fuero común, el Estado ha instituido la defensoría de oficio dirigido o mejor dicho en beneficio de personas que no cuenten con medios económicos para pagar un defensor particular. En cuanto al orden federal los defensores de oficio se regulan por la Ley de la Defensoría de Oficio Federal y en su correspondiente reglamento; y en materia común por la Ley de la Defensoría Fuero Común

---

<sup>446</sup> RECONOCIMIENTO DEL INCUPLADO A TRAVÉS DE LA CÁMARA DE GESELL. EN DICHA DILIGENCIA ES NECESARIA LA ASISTENCIA DEL DEFENSOR A EFECTO DE GARANTIZAR EL DERECHO A UNA DEFENSA ADECUADA. Tesis: 1a./J. 10/2015 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, disponible en [www.scjn.gob.mx](http://www.scjn.gob.mx) consultado 4 de abril de 2015.

y su reglamento. Este servicio no sólo es gratuito, también es obligatorio sufragado por el Estado<sup>447</sup>.

En materia federal para la prestación de los servicios de defensoría pública, se creó el Instituto Federal de Defensoría Pública, como órgano del Poder Judicial de la Federación. Los servicios de defensoría pública se prestarán a través de Defensores públicos, en los asuntos del orden penal federal, desde la averiguación previa hasta la ejecución de las penas<sup>448</sup>.

Los defensores públicos<sup>449</sup> y asesores jurídicos están obligados a prestar personalmente el servicio de orientación, asesoría y representación a las personas que lo soliciten en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta ley y las demás disposiciones aplicables. Deberán representar y ejercer ante las autoridades competentes los intereses y los derechos jurídicos de los defendidos o asistidos, a cuyo efecto harán valer acciones, opondrán excepciones o defensas, interpondrán incidentes o recursos y realizarán cualquier otro trámite o gestión que proceda conforme a Derecho que resulte en una eficaz defensa. Los defensores están en obligación de evitar en todo momento la indefensión de sus representados. Son vigilantes en el respeto a las garantías individuales de sus representados y deben formular las demandas de amparo respectivas, cuando las éstas se estimen violadas<sup>450</sup>.

El proceso para seleccionar a los defensores públicos en materia federal será a través de convocatorias que genera el Instituto de la Defensoría Federal, quienes aspiren a convertirse en defensor público a nivel federal debe someterse a los procesos de selección

---

<sup>447</sup> Estas normas pueden consultarse en [www.dof.gob.mx](http://www.dof.gob.mx), [www.diputados.gob.mx](http://www.diputados.gob.mx).

<sup>448</sup> Artículos 3 y 4 de la Ley Federal de Defensoría Pública

<sup>449</sup> Los defensores públicos quedarán sujetos al servicio civil de carrera tanto para defensores y asesores, que comprenderá la selección, ingreso, adscripción, permanencia, promoción, capacitación, prestaciones, estímulos y sanciones. Este servicio civil de carrera se regirá por la Ley Federal de Defensoría Pública, así como por las disposiciones generales que dicte el Consejo de la Judicatura Federal y por las bases generales de organización y funcionamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública. Los defensores públicos son asignados por el Instituto Federal de Defensoría Pública, sin más requisitos que la solicitud formulada por el indiciado en la averiguación previa, el inculpado en el proceso penal, el sentenciado y el Agente del Ministerio Público o el órgano jurisdiccional, según sea el caso. (Artículo 8 y 10).

<sup>450</sup> Artículo 6 de la Ley Federal de Defensoría Pública.

se publican en el Diario Oficial de la Federación<sup>451</sup>. En estas convocatorias se establecen las bases del concurso a los aspirantes, el número de plazas, las adscripciones, los requisitos que se deben cumplir, el plazo de entrega, así como el temario ya que son sometidos a unos exámenes de conocimientos. Además del examen de conocimientos el aspirante se somete a una evaluación psicológica, que tiene como propósito advertir las cualidades éticas y de personalidad capaz para desempeñar el cargo de defensor público o de asesor jurídico, practicada mediante pruebas escritas diseñadas y calificadas por personal especializado de la Dirección General de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura Federal. De cada etapa del Concurso se levantará acta circunstanciada para constancia, y los resultados no admitirán impugnación alguna.

Además de los defensores hay selección de supervisores y evaluadores que son los elementos a través de los cuales el Instituto realiza el monitoreo de los defensores, sus asuntos, la atención, las capacidades, etc. Además la Defensoría, tomando en cuenta en todo momento que en el desempeño de su cargo demuestre objetividad, perseverancia, orden y principalmente su antigüedad, grado académico y cursos de actualización y especialización acreditados, calidad de desempeño con base en sus resultados y su disciplina en la institución, podrá participar en los procedimientos internos de selección para ascender a las categorías antes indicadas, desde defensor público o asesor jurídico, hasta delegado<sup>452</sup>.

En suma, la definición de la garantía específica de defensa adecuada, plantea como objetivo dos premisas básicas: que son la idoneidad de la persona que detenta el cargo de defensor y la eficiencia en la actuación del mismo<sup>453</sup>. Nuevamente Esquinca Muñoa<sup>454</sup> nos habla de

---

<sup>451</sup> DOF: 05/10/2011 CONVOCATORIA al Concurso Abierto de Oposición 1/2011 para la selección de defensores públicos y asesores jurídicos del Instituto Federal de Defensoría Pública, disponible en [www.dof.gob.mx](http://www.dof.gob.mx), consultado el 3 de septiembre de 2015.

<sup>452</sup> En los estados del país existen los Institutos de Defensoría Pública Estatal, dependientes normalmente del Poder Ejecutivo, lo cual en muchas cosas constituye un inconveniente por el control que esté ejerce sobre las tareas de los defensores públicos, los sistemas de selección y de evaluación no son tan rigurosos como a nivel federal.

<sup>453</sup> Cfr. Salazar Santana, Bernardo Alfredo, *“La Garantía de Defensa Adecuada. Sus Alcances en el Procedimiento Penal”*, El Derecho Mexicano Contemporáneo. Retos y Dilemas, VV.AA., Primera Edición, Fundación Académica Guerrerense, Universidad Autónoma de Chiapas, Colegio de Guerrero, Chilpancingo, Guerrero, México, 2012, p. 521.

que el Estado social de derecho supone la garantía de satisfacer condiciones de vida digna, dando vigencia a los derechos de rango constitucional entre ellos se encuentra el derecho a la defensa penal y el acceso a la justicia para quienes tiene menos, estos derechos suponen un imperativo cuyo cumplimiento justifica la naturaleza y la existencia misma del Estado y la legitimación de los todos los órganos que de éste derivan.

#### **4. Principios Constitucionales en Materia Penal.**

La Constitución Mexicana hasta antes de la reforma constitucional de 2011, título con el término “garantías individuales”, el apartado que reservo para sentar los derechos fundamentales, a éste concepto se apegó una parte importante de la doctrina mexicana. Sin embargo tal y como lo advierte Fix Zamudio<sup>455</sup>, el concepto de garantía no puede ser igual al de un derecho, en virtud de que la garantía sería el medio para hacer eficaz o de devolver a su estado original en caso de que haya sido violado un derecho fundamental no respetado por la autoridad. –tesis que compartimos-. Por su parte Ferrajoli advierte que si bien el término “garantía” es una expresión que designa cualquier técnica normativa de tutela de un derecho subjetivo, así por garantismo se refiere a las técnicas para tutelar los derechos fundamentales<sup>456</sup>. El diccionario de la Real Academia Española nos dice que garantía “*es el efecto de afianzar lo estipulado, fianza o prenda, cosas que se aseguran y protegen contra el riesgo o necesidad, y por ultimo seguridad o certeza que se tiene sobre algo*”. En este contexto una garantía constitucional, no es otra cosa que el asegurar el cumplimiento de un derecho, donde el Estado debe garantizar el respeto irrestricto a tales derechos fundamentales, ¿Cómo lo hace?, mediante el establecimiento de las garantías constitucionales<sup>457</sup>.

---

<sup>454</sup> Cfr. Esquinca Muñoa, César, “*La Defensa Pública en el Proceso Penal*”, Memoria del Congreso Internacional de Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados. II. Proceso Penal., Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 2005, p. 123.

<sup>455</sup> Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, en Carbonell, Miguel, “*Los derechos fundamentales en México*”, Editorial Porrúa, Universidad Nacional Autónoma de México, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Primera Edición 2004, Primera Reimpresión 2005, México, D.F., p. 6.

<sup>456</sup> Cfr. Ferrajoli, Luigi, “*Garantías*”, Jueces para la democracia, Información y Debate, Julio/2000, No.38, Publicación cuatrimestral, Editorial EDISA, Unigraf, Madrid, España, 2000, p.39.

<sup>457</sup> Cfr. Alvarado Martínez, Israel, “*¿Qué debemos entender por “garantías constitucionales”?*”, disponible en: [www.digital.inacipe.gob.mx](http://www.digital.inacipe.gob.mx) consultado 15 de marzo 2015.

La Real Academia define como garantías constitucionales, “*aquellos derechos que la constitución de un Estado reconoce a todos sus ciudadanos, es decir, ya sea en solitario o de forma compuesta refieran protección o certeza de ser libre de sufrir riesgo alguno*”<sup>458</sup>. Para el caso de la garantía constitucional, esta responsabilidad recae en el Estado, primero al establecer en un documento constitucional el reconocimiento de una serie de derechos hacia los individuos, y segundo asegurar la creación de los mecanismos de protección que impidan sufrir riesgo alguno al no poder disfrutar de los derechos reconocidos.

El estado constitucional democrático se caracteriza por seis principios fundamentales, -dice Robert Alexy- que han hallado en la ley fundamental una clara expresión. Se trata de los principios fundamentales de la dignidad humana, de la libertad y de la igualdad, así como los principios relativos a la estructura y los fines del Estado de derecho, democrático y social. Entre los derechos fundamentales y los principios relativos a la estructura y los fines del Estado existen, íntima relación<sup>459</sup>. Ahora la posición de los derechos fundamentales respecto del sistema jurídico, regulan con máximo rango y con máxima fuerza jurídica, en cuanto al primero tenemos que los derechos fundamentales se encuentran regulados por la Constitución, de acuerdo al principio *lex superior derogat legi inferiori*, es decir que la norma constitucional prima sobre el derecho de los estados, de donde se colige que toda norma jurídica que la infrinja será declarada inconstitucional, y en consecuencia nula por regla general<sup>460</sup>. Respecto a la máxima fuerza jurídica, ésta significa que los derechos fundamentales vinculan como derecho constitucional vigente en forma directa a los tres poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y al mismo tiempo se ejerce un control constitucional jurisdiccional sobre los actos de cada uno de estos<sup>461</sup>.

---

<sup>458</sup> Cfr. *Diccionario de la Lengua Española*, Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición, Real Academia Española, Editorial Espasa, Madrid, España, 2001, p.1117.

<sup>459</sup> Cfr. Alexy, Robert, “*Los derechos fundamentales en el Estado Constitucional Democrático*”, Neoconstitucionalismo(s), Primera Edición, Editorial Trotta, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Madrid, España, 2003, p.31.

<sup>460</sup> *Ibíd*em, p.33.

<sup>461</sup> *Ibíd*em, p.33.



Existen un conjunto de derechos básicos para los individuos, cuyo reconocimiento define un elemento esencial del Estado democrático constitucional de derecho como se advirtió en líneas arriba, estas libertades se identifican con el nombre de derechos fundamentales, estos derechos, cobrarán su eficacia a través del ordenamiento jurídico, emanado de la norma constitucional que establece la obligatoriedad de tutelar estos derechos. De acuerdo con Prieto Sanchís<sup>462</sup> la consecuencia básica de su llamado constitucionalismo de los derechos, consiste en concebir a los derechos como normas supremas, efectivas y directamente vinculantes, que pueden y deben ser observadas en toda operación de interpretación y aplicación del derecho. El autor expone como la doctrina del Tribunal Constitucional Español ha establecido que los derechos y libertades fundamentales vinculan a todos los poderes públicos, y son origen inmediato de derechos y obligaciones, y no meros principios programáticos.

En este sentido la constitucionalización de los derechos será la plena positivización de un derecho, a partir del cual cualquier ciudadano podrá reclamar su tutela ante los tribunales ordinarios. *“...el artículo 53.2 de la Constitución Española atribuye la tutela de los derechos fundamentales primariamente a los tribunales ordinarios (...) por lo que la articulación de la jurisdicción constitucional con la ordinaria ha de preservar el ámbito que al Poder Judicial reserva de la Constitución (...) el respeto a la precedencia temporal de la tutela de los Tribunales ordinarios exige que se apuren las posibilidades que los cauces procesales ofrecen en la vía judicial para la reparación del derecho fundamental que se estima lesionado (...) esta exigencia, lejos de constituir una formalidad vacía, supone un elemento esencial para respetar la subsidiaridad del recurso de amparo y, en última instancia, para garantizar la correcta articulación entre este Tribunal y los órganos integrantes del Poder Judicial, a quienes primeramente corresponde la reparación de las posibles lesiones de derechos invocados por los ciudadanos, de modo que la jurisdicción*

---

<sup>462</sup> (STC 15/1982) (STC 56/1982) Cfr. Prieto Sanchís, Luis, *“El constitucionalismo de los derechos”*, Teoría del Neoconstitucionalismo, Primera edición, Editorial Trotta, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Madrid, España, 2007, p.216, Véase Jiménez del Campo, J., *Derechos Fundamentales. Conceptos y Garantías*, Editorial Trotta, Madrid, España, 1999; Alexy, Robert, *“Epílogo a la Teoría de los derechos fundamentales”*, Revista Española de Derecho Constitucional, No. 66 Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, España, 2002.

*constitucional sólo puede intervenir una vez que, intentada dicha reparación, la misma no se ha producido*”<sup>463</sup>.

La constitución española tiene dedicado en su Título I “los derechos y deberes fundamentales”, un Capítulo IV, llamado “De las garantías de las libertades y derechos fundamentales”, vinculando a un sistema de protección de los derechos reconocidos en el texto constitucional en tres niveles, que dependen de la mayor o menor intensidad de las garantías jurídicas constitucionales establecidas, en aplicación de una sistemática constitucional: a) los derechos y libertades reconocidos en el artículo 14, Sección Primera del Capítulo Segundo del Título I. “De los derechos fundamentales y las libertades públicas” y, con un régimen singular, la objeción de conciencia el artículo 30; b) los derechos reconocidos en el Capítulo Segundo del Título I “Derechos y Libertades”, apartado que comprende, además de los derechos y libertades de la sección 1ª, situados en el primer nivel de protección, los derechos y deberes de los ciudadanos los encontramos en la sección segunda; c) y por último los llamados “principios rectores de la política social y económica”.

Así el amparo de los derechos fundamentales ante los tribunales ordinarios se instrumenta a través de un procedimiento especial, de carácter preferente y sumario, a través de esta institución el Tribunal Constitucional Español se convierte en el máximo protector de los derechos y libertades. Se trata de un recurso que procede contra la violación de cualquier derecho establecido en los artículos 14 a 29 y 30 de la Constitución Española, no sin antes haber agotado la vía judicial previa.

Desde esta perspectiva, advertimos los objetivos del constitucionalismo moderno, respecto de la garantía constitucional será establecer el conjunto de límites y vínculos impuestos a todos los poderes públicos privados y políticos para tutelar las violaciones que se produzcan a los principios, valores o disposiciones contenidos en la norma fundamental.

---

<sup>463</sup> (STC 284/2000), del 27 de noviembre del 2000, disponible en [www.tribunalconstitucional.es/](http://www.tribunalconstitucional.es/) consultado el 4 de septiembre de 2015.

En este sentido hay que decir que los estados que fundan su estructura y funcionamiento bajo los parámetros de una democracia constitucional de derecho, deben establecer como eje central la protección de sus derechos fundamentales individuales inherentes a toda persona, tan sólo por tener tal condición y que estimamos son requisito indispensable para considerarse un estado democrático como tal. Es en este terreno donde las previsiones de la carta fundamental deberán encaminarse, con la finalidad de salvaguardar estos derechos que por su naturaleza corresponden a la esfera de desarrollo natural de todo individuo.

En virtud de que la norma jurídica fundamental da forma al Estado, a los órganos de gobierno y las funciones que le son inherentes, las relaciones entre sí y de estos con respecto de los gobernados. Es este cuerpo normativo el que establece los parámetros bajo los cuales el Estado estará posibilitado para actuar y justificar sus actos. Las “garantías” tienen la finalidad de dar certeza al gobernado respecto de los actos de autoridad que emanen del gobierno y sus autoridades.

En México fue a partir de la Constitución liberal de 1857 que el derecho a la libertad y el derecho a la igualdad se elevan a la categoría de derechos constitucionales. Estos derechos se establecieron, recordando el compromiso de parte de los principios defendidos por estado liberal de reconocer, respetar y nunca más incurrir en violación de derechos fundamentales. Con esta perspectiva garantista, por primera vez se afrontan racionalmente los problemas que originan el derecho estatal de castigar, su esencia y sus límites, la forma y los medios de actuación de los órganos de gobierno frente al gobernado que delinque<sup>464</sup>. En la exigencia de proscribir los actos autoritarios de gobierno para realizar la más eficaz tutela de las condiciones fundamentales de vida social con el menor sacrificio de la libertad individual, subordinando el derecho estatal de castigar a límites procesales<sup>465</sup>, concediendo a favor del ciudadano lo que se clasificaría como –garantías de seguridad jurídica-, donde todos los actos de molestia que se dirijan al individuo, tanto en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones, deberán hacerse mediante mandamiento escrito, por

---

<sup>464</sup> Cfr. Ojeda Velázquez, Jorge, *Derecho Constitucional Penal*, Teoría y Práctica, Tomo I, Primera Edición, Editorial Porrúa, México, 2005, p. 8.

<sup>465</sup> *Ibíd*em, p. 8.

autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento establecido en el artículo 16 constitucional de la época<sup>466</sup>.

Posteriormente la carta fundamental mexicana de 1917 estableció que la persecución de los delitos incumbía exclusivamente al Ministerio Público, ordenando que la policía judicial fuera auxiliar de éste, bajo el mando y autoridad de aquel en las labores de integración de las averiguaciones-investigaciones. Fue esta carta fundamental la que estableció la garantía de que sólo los tribunales judiciales estarían encargados de la imposición de penas. Quedarían prohibidas las penas corporales; las penas inusitadas y trascendentes, así como limitando el procedimiento penal a tres instancias<sup>467</sup>.

Bajo estas premisas la Constitución Mexicana en el artículo primero establecía : *“En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución...”*, actualmente en virtud a la reforma de 8 de junio de 2011 dicho precepto establece que: *“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece...”*, de este precepto se desprende que la carta fundamental en cita, en primer lugar no hace distinciones de nacionalidad, raza, sexo, entre otras condiciones inherentes al individuo, y en segundo lugar infiere que la persona que se encuentre dentro del territorio mexicano tendrá la certeza de no ser molestado en su

---

<sup>466</sup> “Garantías Individuales. No son derechos sustantivos, sino que constituyen el instrumento constitucional para salvaguardar éstos. Las garantías individuales que se encuentran consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, como lo son la del debido proceso y la de fundamentación y motivación en todo acto de autoridad, como su nombre lo indica, garantizan la aplicación de la ley en cuanto a los procedimientos seguidos ante tribunales, con el objeto de proteger la integridad física, la libertad y los bienes, siendo éstos, los derechos fundamentales del gobernado, entre otros; es decir, las garantías individuales, no son derechos sustantivos, sino que constituyen el instrumento constitucional establecido por la propia norma fundamental del país, para salvaguardar tales derechos”. Tesis Aislada. Tesis: I.6o.C.28 K, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, disponible en: [www.ius.scjn.com.mx](http://www.ius.scjn.com.mx), consultado el día 11 de noviembre 2013.

<sup>467</sup> Artículo 22 Constitucional en su primer párrafo : Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y transdentes otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.

persona, sus posesiones y que sus derechos serán respetados por la autoridad<sup>468</sup>. Y que en el caso de ser receptores de actos de molestia por parte del gobierno y sus autoridades, éstas deben de ajustarse a los procedimientos establecidos por la Constitución Mexicana y sus normas secundarias<sup>469</sup>.

Cobra importancia señalar la función central desarrollado por la Suprema Corte de Justicia Mexicana, cuyas funciones sustanciales han permitido establecer cuáles son los derechos fundamentales que debe proteger el Estado mexicano, esta importante función se ha concretado en arbitrar las relaciones entre el justiciable y los poderes públicos. En relación a la posición que los derechos humanos tiene dentro de un sistema jurídico, recordamos nuevamente las ideas de Robert Alexy<sup>470</sup>, anotando que la observancia de estos derechos debe hallarse plenamente controlado por los tribunales, teniendo en cuenta que con una sola disposición que en la constitución no sea controlable judicialmente se abre el camino para la pérdida de obligatoriedad.

En este sentido la Corte mexicana ha estado concretando gradualmente los principios orgánicos, competencias, garantías institucionales y derechos fundamentales reconocidos en la constitución, a través de los mecanismos de control constitucional establecidos en la propia norma fundamental. Así pues, a través de las decisiones y criterios de la Corte<sup>471</sup>, en

---

<sup>468</sup> DOF 10-06-2011, este Decreto de reforma constitucional de junio de 2011, se encuentra disponible en [www.diputados.gob.mx](http://www.diputados.gob.mx)

<sup>469</sup> “Desde un punto de vista general, los actos emanados de las autoridades pueden ser positivos o negativos; los primeros entrañan una acción, orden, prohibición, privación, molestia y su ejecución puede ser instantánea, continuada o inacabada o de tracto sucesivo; en cambio, los segundos implican que las autoridades se rehúsan a realizar algo u omiten hacer lo que la ley les impone a favor de lo solicitado por los gobernados, es decir, constituyen abstenciones. Así, debe entenderse que dentro de los actos positivos se encuentran los “prohibitivos”, que son aquellos que fijan una limitación, que tienen efectos positivos, como son los de coartar o limitar los derechos de quienes los reclaman en el juicio de amparo...”. Tesis: I.15o.A.43 K, Semanario Judicial de la Federación, disponible en [www.scjn.gob.mx](http://www.scjn.gob.mx), consultado en 2 de septiembre 2015.

<sup>470</sup> Cfr. Alexy, Robert, *“Los derechos fundamentales en el estado democrático constitucional”*, op.cit., p.33.

<sup>471</sup> “El primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano sea parte. De la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo 1o., cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda

México se reconoce la eficacia general de la jurisprudencia constitucional, teniendo eficacia normativa directa e inmediata en relación con todos los tribunales del país, por estar obligados a su estricto cumplimiento, e indirectamente en relación con el resto de autoridades, añadiendo que su incumplimiento acarrea responsabilidad para la autoridad, cuyos actos son remediables a través de la anulación de los actos respectivos<sup>472</sup>.

Es este universo de lineamientos constitucionales lo que constituye el marco ideológico-político a través del cual se insertan los principios políticos del sistema procesal en términos generales, influyendo en la articulación del procedimiento, fundamentalmente en la aplicación e interpretación de las reglas.

Ahora bien en materia penal, este conjunto de derechos y garantías nacen a partir de que el justiciable pueda ser sujeto de una investigación y posterior enjuiciamiento penal, en virtud de que en ninguna parte como dentro del proceso penal se encuentran en tensión la autoridad del estado y la preservación de los derechos humanos, es por esto que la constitución en México aparecen una serie de principios que dan estructura a la justicia penal: el principio de legalidad y el debido proceso. Sin perder de vista que todos estos valores y principios constitucionales, están enfocados a proteger derechos fundamentales que da legitimación constitucional al estado democrático.

---

supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz de las reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en el orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía constitucional. En este sentido, los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano". DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL. Tesis: P./J. 20/2014 (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta disponible en [www.scjn.gob.mx](http://www.scjn.gob.mx), consultada el 17 de marzo 2015.

<sup>472</sup> Cfr. Silva Meza, Juan N., Silva García, Fernando, *Derechos Fundamentales*, Bases para la reconstrucción de la jurisprudencia constitucional, Editorial Porrúa, Primera Edición, México, D.F., 2009, p. XXVII.

Sin duda alguna el contenido y de la interpretación constitucional que se haga sobre los derechos humanos deben ir a la par de la evolución de los tiempos y las condiciones actuales de vida, pues los textos que reconocen dichos derechos son "instrumentos permanentes" dice la Corte Mexicana<sup>473</sup>, definiéndolos como "instrumentos vivos" de acuerdo con la jurisprudencia interamericana. Dicho de otra manera, el contenido de los derechos humanos no se limita al texto expreso de la norma donde se reconocen dichos derechos, sino que se va robusteciendo con la interpretación evolutiva o progresiva que hagan tanto los tribunales constitucionales nacionales, como intérpretes últimos de sus normas fundamentales, como los tribunales internacionales en la materia.

A continuación nos referiremos a estos principios constitucionales: a) Principios de acceso a la justicia; b) Garantías constitucionales de Seguridad Jurídica, que incluyen la Garantía de irretroactividad de la ley, la Garantía de audiencia, la Garantía de exacta aplicación en materia penal, y la evolución de los principios constitucionales del Artículo 16 Constitucional, entre las que se contemplan la garantía de autoridad competente y detención por orden judicial.

#### **4.1. Principios de acceso a la justicia.**

Por lo que respecta a los artículos 17 y 22 constitucional igualmente sirven para hacer efectivo el derecho fundamental de acceso a la justicia, está claro que el primer párrafo del artículo 17 constitucional evita que los ciudadanos recurran a la venganza privada en la solución de conflictos como se hiciera en los principios de la Edad Media. Así el ciudadano está obligado a acudir a las autoridades sean administrativas o jurisdiccionales, a efecto de solicitar de éstas la administración de justicias, que en definitiva es la solución de conflictos. La disposición constitucional en estudio, en su segundo párrafo impone la obligación al Estado de que en interés de preservar el orden y el bienestar social, los tribunales estén prontos a impartir justicia de forma expedita, cumpliendo los tiempos y

---

<sup>473</sup> DERECHOS HUMANOS. SU CONTENIDO NO SE LIMITA AL TEXTO EXPRESO DE LA NORMA QUE LO PREVÉ, SINO QUE SE EXTIENDE A LA INTERPRETACIÓN QUE LOS ÓRGANOS AUTORIZADOS HAGAN AL RESPECTO. Tesis: 1a. CDV/2014 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta disponible en [www.scjn.gob.mx](http://www.scjn.gob.mx) consultado 16 de marzo 2015.

plazos fijados por ley. Además de que por disposición constitucional este servicio debe ser gratuito.

Según la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este precepto constitucional garantiza a favor del gobernado el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso, a promover la actividad jurisdiccional que en cumplimiento de los requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas. Si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos<sup>474</sup>.

Los tribunales deben ser gratuitos en la inteligencia de que el acceso a la justicia no excluya a las personas de escasos recursos y que no puedan pagar una defensa adecuada. De acuerdo con la reforma constitucional de 2007-2008, este artículo establece como garantía constitucional la provisión de parte del Estado en todos sus niveles de un servicio de defensoría pública de calidad para la población, imponiendo la obligación de profesionalizar a estos cuerpos defensores otorgando la seguridad laboral y salarial que contribuya al desempeño de sus actividades. Hemos estudiado en apartados anteriores como en materia federal se cumple con este requisito pues existe los defensores de oficio en esta materia, regidos a su vez por su ley respectiva, que establece las responsabilidades que atañen a estos, así como el sistema de ingreso, las condiciones de acenso, los mecanismos de actualización profesional a los que están sometidos, y el régimen de sanciones. En materia del fuero común se han ido creando o, mejor dicho, profesionalizando los cuerpos de defensores ya existentes. Sin embargo, hay que decir que no en todos los casos, se les ha dado el tratamiento de profesionalización institucional, y laboral que esta función merece. En algunos casos los cuerpos de defensores son dependientes del Poder Ejecutivo de la entidad federativa respectiva. Lógicamente que el estado de cosas descrito hace flaco

---

<sup>474</sup> Cfr. *"Las Garantías..."*, op.cit., p. 104.



favor al eficaz cumplimiento de la garantía de defensa pública gratuita, que a su vez trastoca otras garantías como el derecho a una tutela judicial efectiva, el acceso a un debido proceso legal, con igualdad y equilibrio entre sujetos procesales.

Otros aspectos regulados en el precepto constitucional tienen que ver con la obligación para el órgano legislativo expida leyes que regulen las acciones colectivas; los procedimientos y mecanismos para la reparación del daño y la exclusividad para los jueces federales en su conocimiento, los mecanismos alternativos de solución de controversias, y las consecuencias derivadas de ellas. Así también respecto de las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán gozar de la publicidad y de la presencia de las partes procesales.

El penúltimo párrafo prevé que el régimen jurídico, tanto en materia federal como común, en su contenido garantice la independencia judicial, requisito indispensable para el buen funcionamiento de los órganos jurisdiccionales. Las garantías judiciales, tienen como objetivo asegurar la calidad y efectividad de la impartición de justicia a favor del justiciable<sup>475</sup>. Y finalmente, la proscripción de la prisión por deudas de carácter civil, en la inteligencia de que las deudas que se originen por este concepto, pertenecen al campo del derecho privado.

#### **4.2. Garantías constitucionales de seguridad jurídica.**

La seguridad jurídica se refiere a la certidumbre que pertenece al ámbito del ciudadano en su persona, familia, posesiones o en sus derechos y de que estos disfrutaran del respeto de parte de la autoridad en todo momento. Esto implica que, en caso de producirse actos de molestia respecto de alguno de ellos, los actos emanados del gobierno y sus autoridades

---

<sup>475</sup> "...están relacionadas con la selección, ascensos y promociones, estabilidad, inamovilidad e inmunidad, Independencia y seguridad económica de los juzgadores...todas otorgadas en razón del cargo pero siempre en beneficio y a favor de los justiciables". (...) Dentro de las garantías judiciales destacan la estabilidad y la adecuada remuneración; la primera de ellas permite que los juzgadores conserven un puesto mientras no incurran en causas graves de responsabilidad, en tanto que la segunda busca que los jueces y magistrados, al recibir una decorosa remuneración por el ejercicio de sus funciones, venzan la tentación de recibir sobornos. Cfr. Ibídem, p. 107,112.

deberán ajustarse a los procedimientos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las correspondientes normas secundarias. La seguridad jurídica define la forma en que las autoridades del Estado actúan y de que la aplicación que se haga del orden jurídico a los gobernados sea eficaz. Supone un deber para el Estado, sin que olvidemos que la justificación del Estado también es la preservación del orden y el bienestar social. Y que también los ciudadanos están sujetos a un orden jurídico.

Así, dice Miguel Carbonell<sup>476</sup>, que los derechos de seguridad jurídica son los que más clara relación guardan con el concepto de Estado de derecho, que podemos entender como el conjunto de reglas del juego de carácter fundamental procedimental que los órganos públicos deben observar en su organización y funcionamiento interno, lo que más importancia cobra en materia de derechos fundamentales por su relación con los ciudadanos. En otras palabras, son los requisitos que deben observar las autoridades para molestar a una persona, las reglas de carácter procesal para privar a una persona de su libertad, y la imposibilidad de aplicar hacia el pasado las nuevas leyes.

Sin embargo como explica Ferrajoli puede existir carencia o ineffectividad de estas garantías –de seguridad jurídica–, especialmente las de carácter penal. Es decir, que si bien las garantías tanto primarias como secundarias, implican derechos fundamentales constitucionalmente establecidos y aunque previstas o no expresamente, están en posibilidad de ser violadas por sus destinatarios los poderes públicos. Así pues, las garantías penales y procesales son esencialmente negativas, por estar dirigidas a limitar el poder punitivo en defensa de las libertades individuales<sup>477</sup>.

Estas garantías de seguridad jurídica son definidas por una parte de la doctrina mexicana como derechos subjetivos públicos a favor del gobernado, con efectos *erga omnes* respecto a los demás órganos del estado, quienes verán sus actos supeditados a una serie de requisitos, en el evento de que estos se vean en situación de afectar la esfera jurídica de los ciudadanos. Con el objetivo claro de que prevalezcan condiciones de igualdad y de libertad, evitando incurrir en situaciones de indefensión e incertidumbre jurídica frente al Estado. Estas garantías son baluarte del acceso efectivo a la justicia, al que tienen pleno derecho los

---

<sup>476</sup> Cfr. Carbonell, Miguel, “*Los Derechos de Seguridad Jurídica*”, “*Los Derechos...*”, op.cit., p.585.

<sup>477</sup> Cfr. Ferrajoli, Luigi, “*Garantías*”, “*Jueces para...*”, op.cit., p. 42.

individuos de toda sociedad libre y democrática, donde el Estado no subordina a sus intereses la estabilidad social que demanda la subsistencia del derecho<sup>478</sup>.

El Estado constitucional actual debe responder a un modelo garantista, que a su vez establezca un sistema de garantías -valga la redundancia- como máxima forma de protección de los derechos y libertades como norma directiva fundamental para la realización de los valores constitucionales<sup>479</sup>. La continuidad y eficacia que tengan los escenarios de igualdad y libertad respecto de la actividad del Estado establecidas por el texto constitucional, dependerá el grado de cohesión social, evitándose así caos del mismo. La existencia de las garantías de seguridad jurídica, hacen depender el sostenimiento del Estado constitucional democrático de derecho<sup>480</sup>. En suma, la naturaleza de este conjunto de derechos es que el gobernado jamás se encuentre en una situación de incertidumbre frente al Estado.

Las garantías de seguridad jurídica se encuentran comprendidas en los artículos del 14 al 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se encuentran previstas las garantías penales y procesales, -que pretende proyectar, conceptualmente- un derecho penal mínimo, esto es un sistema penal capaz de someter la intervención punitiva del Estado, tanto en la previsión legal de los delitos, como en su constatación judicial sometida a rígidos principios impuestos en defensa de los derechos de la persona<sup>481</sup>. Dentro de la

---

<sup>478</sup> Según el tipo de derechos para cuya protección se establecen las garantías, o sea, las técnicas idóneas para asegurar su efectiva tutela o satisfacción, pueden distinguirse aún diversos tipos o significados de garantismo. Se habla de garantismo patrimonial para designar el sistema de garantías que tutelan el derecho de propiedad y el resto de derechos patrimoniales; de garantismo liberal, y específicamente penal, para designar las técnicas establecidas para la defensa de los derechos de libertad personal, frente a intervenciones policiales o judiciales arbitrarias; de garantismo social para designar el conjunto de garantías, todavía escasas e imperfectas encaminadas a satisfacer los derechos sociales...”, Cfr. Ferrajoli, Luigi, *Democracia y Garantismo*, Editorial Trotta, Madrid, España, 2008, p. 192; Cfr. *Las Garantías de Seguridad Jurídica*, Poder Judicial de la Federación, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera edición, Colección Garantías Individuales, SCJN, México, D.F., 2003, p.13.

<sup>479</sup> Mauricio, Fioravanti, citado por Sastre Ariza, Santiago, “*Derecho y Garantías*”, “Jueces...”, op.cit., p.50.

<sup>480</sup> Cfr. *Las Garantías de Seguridad Jurídica*, Número 2, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Colección Garantías Individuales, Primera Edición, Primera Edición, México, D.F., 2003, p. 13.

<sup>481</sup> Cfr. Ferrajoli, Luigi, “Garantías”, “Jueces para...”, op.cit., p. 42, “...en este contexto donde nace el garantismo penal. El sistema garantista que se forja en torno a este modelo jurídico se caracteriza según Ferrajoli por los diez siguientes axiomas: *Nullum pena sine crimine*, *Nullum crimen sine lege*, *Nulla lex (poenalis) sine necessitate*, *Nulla necessitas sine iniuria*, *Nulla iniura sine actione*, *Nulla actio sine culpa*, *Nulla sine iudicio*, *Nullum iudicium sine accusatione*, *Nulla accusatio sine probatione* y *Nulla probatio sine defensione...*”, en Sastre Ariza, Santiago, *Derecho y garantías*, Ibídem, p. 49.

concepción garantista- siguiendo a Ferrajoli-, los principios que integran el derecho penal mínimo, se dividen: primero, en cuanto al delito, en *garantías penales sustanciales*, que son las que se refieren al principio de estricta legalidad de los comportamientos punibles, al principio de lesividad, materialidad y culpabilidad; segunda, en lo relativo al proceso serían *las garantías procesales y orgánicas*, tal es el caso del principio de contradicción, la paridad entre defensa y acusado, la separación rígida del juez y la acusación, la presunción de inocencia, la carga de la prueba para el que acusa, la oralidad y la publicidad del juicio, la independencia tanto interna, como externa de la magistratura y el principio del juez natural, -dice el autor- todas estas garantías de verdad y de inmunidad contra la arbitrariedad<sup>482</sup>.

En el caso mexicano las garantías penales sustanciales están comprendidas en los artículos 14, 16, 17, 20 y 21 constitucional. Respecto del artículo 14, serán cuatro las garantías que se contienen dentro de este precepto:

---

<sup>482</sup> Cfr. Ferrajoli, Luigi, Derecho y Razón, *Teoría del garantismo penal*, Editorial Trotta, Quinta Edición, Madrid, España, 2001, p.101.

a) *La garantía de irretroactividad de la ley*. Esta garantía significa que las disposiciones contenidas en las leyes no deben aplicarse hacia el pasado, también conocido como conflicto de leyes en el tiempo. Se intenta resolver las consecuencias que tiene la expedición de nuevas leyes, sobre situaciones jurídicas o derechos que han sido generadas por leyes posteriores, que han adquirido la condición de abrogadas. En este sentido la seguridad jurídica es importante ante la aplicación de que un nuevo cuerpo normativo pueda ocasionarle al justiciable un daño en esos derechos que ya se encontraban dentro de su esfera jurídica. Especialmente en materia penal, significa que nadie podrá ser castigado si no en virtud de una ley que haya sido expedida con anterioridad a la comisión de un hecho que la ley establece como delito y aplicada conforme a los mecanismos legales correspondientes, establecidos en la Constitución<sup>483</sup>.

No hay que olvidar que el concepto de seguridad jurídica está íntimamente relacionado con el principio de legalidad de los delitos y las penas, cuyo lema fundamental reside en que “sólo las leyes pueden decretar los delitos, las penas que les corresponden y esta autoridad reside únicamente en el legislador”<sup>484</sup>. Una de las manifestaciones materiales conforme al principio de legalidad en el ámbito del derecho penal, es la prohibición de expedir normas con efectos retroactivos desfavorables, de aplicarlas a hechos cometidos con anterioridad a la expedición y entrada en vigor de las mismas. En definitiva se trata del reconocimiento de un ámbito de libertad del individuo, frente al derecho de castigar del Estado. El principio de irretroactividad de la ley debe entenderse como uno de los fundamentos del derecho penal, que caracteriza al estado democrático constitucional.

---

<sup>483</sup> Cfr. “*Las Garantías...*”, op.cit., p. 40 y ss., RETROACTIVIDAD DE LA LEY Y APLICACIÓN RETROACTIVA. SUS DIFERENCIAS. El análisis de retroactividad de las leyes implica estudiar si una determinada norma tiene vigencia o aplicación respecto de derechos adquiridos o situaciones jurídicas acaecidas con anterioridad a su entrada en vigor. En cambio, el análisis sobre la aplicación retroactiva de una ley supone la verificación de que los actos materialmente administrativos o jurisdiccionales estén fundados en normas vigentes, y que en caso de un conflicto de normas en el tiempo se aplique la que genere un mayor beneficio al particular. Tesis: 1a./J. 78/2010, Semanario Judicial de la Federación, disponible en [www.scjn.gob.mx](http://www.scjn.gob.mx), consultado el 3 de septiembre de 2015.

<sup>484</sup> Cfr. Ruíz Antón, Luis Felipe, “*El principio de irretroactividad de la ley penal en la doctrina y la Jurisprudencia*”, Anuario de la Facultad de Derecho, Universidad de Extremadura, No.7, Anual, Extremadura, España, 1989, p. 149-150.

b) *La garantía de audiencia.* Respecto de esta garantía la Suprema Corte de Justicia de la Nación define que es un derecho que tiene los gobernados no sólo frente a los autoridades administrativas y judiciales, sino también respecto del órgano legislativo, de manera que sea éste el que se obliga a disponer los mecanismos dentro de las normas, para que se oiga a los interesados y se les dé la oportunidad de decir, formular alegatos, aportar pruebas en los casos en que alguno de sus derechos resulten afectados<sup>485</sup>. El máximo tribunal mexicano ha establecido el criterio siguiente: *“De conformidad con los artículos 1o. y 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los órganos jurisdiccionales se encuentran legalmente vinculados a ejercer, ex officio, el control de convencionalidad en sede interna, lo cual implica la obligación de velar no sólo por los derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, sino también por los establecidos en la Constitución Federal, adoptando la interpretación más favorable conforme al principio pro persona. Así, deben proteger cabalmente, entre otros, los derechos y libertades de acceso a la justicia, garantía de audiencia y tutela jurisdiccional, acorde con los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los preceptos 14 y 17 de la Constitución General de la República”*<sup>486</sup>.

Genéricamente conocida como garantía de audiencia según el criterio del máximo tribunal son cuatro las garantías contenidas en este segundo párrafo: a) que la privación se realice mediante juicio, esto es, a través de un procedimiento que se efectúa ante un órgano estatal; tal procedimiento significa una serie de etapas que concluyen en una resolución que dirime una controversia; b) que el juicio sea seguido ante los tribunales previamente establecidos, extendiendo esta obligación a todos aquellos órganos que pertenezcan al Poder Judicial,

---

<sup>485</sup> “Dentro de las garantías del debido proceso existe un “núcleo duro”, que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al “núcleo duro”, las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la “garantía de audiencia”, las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente”. DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO., Tesis: 1a./J. 11/2014 (10a.), Semanario Judicial de la Federación, disponible en [www.scjn.gob.mx](http://www.scjn.gob.mx), consultado el 3 de septiembre de 2015.

<sup>486</sup> Tesis: VI.3o.(II Región) 1 K (10a.), Ibídem.

también para aquellos que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, esto es que apliquen normas a casos concretos; c) que se cumplan con todas las formalidades del procedimiento, enfocándose principalmente en el derecho de defensa, en el derecho de aportar pruebas y d) que la privación se realice conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

Tanto la Constitución como la Corte hablan de que “la audiencia previa a la emisión del acto de autoridad y el debido proceso legal, como garantías del gobernado, son de observancia obligatoria respecto de los actos privativos ya sea de vida, de libertad, de las propiedades o de derechos de los particulares<sup>487</sup>”.

Sobre el juicio previo, este es una circunstancia que debe satisfacerse antes de que el acto de privación se produzca. Conocidas como formalidades esenciales del procedimiento, con antecedentes de la audiencia judicial hispánica y el *due process of law* de origen anglosajón<sup>488</sup>. La Corte mexicana define que son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y va más allá establecido cuales son: 1. La notificación del procedimiento y sus consecuencias; 2. La oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas en que se finque la defensa; 3. La oportunidad de alegar; 4. El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. En este criterio jurisprudencial la Suprema Corte sanciona que de no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, cuyo objetivo último es evitar la indefensión del afectado<sup>489</sup>. En suma, la autoridad debe asegurarse de que el gobernado conoce las pretensiones de los actos emanados de ella, pero no sólo eso, está en obligación de notificarlos otorgando el tiempo prudente para que aquel pueda argumentar lo que a su derecho convenga en defensa de sus derechos<sup>490</sup>.

---

<sup>487</sup> Cfr. Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, vol. 26 Primera Parte, p. 96; CD-ROM IUS: 233681,

<sup>488</sup> Ibídem, p. 50-51.

<sup>489</sup> Ibídem, p.57- 58.

<sup>490</sup> Tesis: P./J. 47/95, Ibídem.

Existe una excepción a la garantía de audiencia la encontramos en el Artículo 33 de la Constitución Mexicana, en referencia a los extranjeros<sup>491</sup>, en casos determinados podrán ser expulsados del país. Sin embargo, atendiendo a los derechos fundamentales de fuente internacional, los derechos de los extranjeros se han visto ampliados por parte de la Corte Mexicana, que en diversas tesis les reconoce el derecho fundamental a la notificación, contacto y asistencia consular, como un elemento esencial de seguridad jurídica, ante el nuevo paradigma de protección de derechos fundamentales derivado de la reforma constitucional al artículo 1 donde se reconocen que los tratados internacionales en materia de derechos fundamentales tiene primacía dentro el régimen jurídico mexicano, permeando y obligado a todos los órganos del estado .

*c) La garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal, proscribiendo la analogía y la mayoría de razón.* Este precepto tiene la finalidad de defender la seguridad jurídica de los ciudadanos, a los que no podrá atribuirse la condición de culpables en la comisión de un delito establecido por la ley penal en vigencia, sin que haya quedado plenamente probado. En otras palabras que a nadie podrá imponerse pena o medida de seguridad, sin que la conducta de acción o de omisión se haya producido, la cual está prevista como delito por la ley penal vigente y hayan coincidido los presupuestos para la imposición de la pena o medida de seguridad establecida.

---

<sup>491</sup> “..el contenido del artículo 36, primer párrafo, de la Convención de Viena sobre las Relaciones Consulares, no es una regla equiparable a la formalidad esencial del procedimiento de origen interno creada por el legislador nacional. Por el contrario, la misma debe interpretarse atendiendo a su carácter de derecho fundamental de fuente internacional que tiene finalidades y alcances diversos. Considerando su origen, la recta interpretación de dicho artículo presupone que se trata de una regla de aplicación especial en proceso penales seguidos contra individuos en naciones extranjeras. Es una regla de fuente internacional que opera paralelamente a la legislación nacional, cuya función es introducir en los operadores jurídicos la noción de que el proceso se sigue aún no nacional necesariamente se encuentra caracterizado por una barrera cultural y una situación de potencial inseguridad jurídica, debido al desconocimiento del sistema jurídico al que está sujeto. Esta barrera cultural disminuye con la debida garantía del derecho fundamental a la asistencia consular, conforme a lo previsto en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, ya que a través de ésta se establece un intermediario entre la perspectiva del legislador del país que procesa y la diversa óptica cultural que corresponde al extranjero procesado en dicha nación. En este sentido, el papel de la oficina consular es fungir como garante de la seguridad jurídica y ser un agente que coadyuve para que el proceso penal seguido en contra de sus nacionales deje de ser algo desconocido e incierto y sea seguido con un efecto culturizador que facilite una mejor comprensión de las leyes y procedimientos a la que se somete”. Tesis: 1ª.CLXXIV/2013 (10ª.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, disponible en: [www.scjn.gob.mx](http://www.scjn.gob.mx). consultado el 10 de octubre del 2013.



En observancia del principio *nullum crimen sine lege*, y del *nulla poena sine lege*, la presente garantía condiciona a la autoridad, a que ésta, solo pueda imponer las penas y medidas de seguridad tipificadas como delitos, en una norma. Al respecto la Primera Sala de la Suprema Corte ha establecido que esta garantía no se limita a obligar a la autoridad jurisdiccional a que se abstenga de imponer por simple analogía o por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al hecho delictivo, obliga también al legislador a que al expedir las normas penales, señale las conductas típicas y las penas aplicables con tal precisión que evite un estado de incertidumbre jurídica y una actuación arbitraria del juzgador. Es este mismo criterio el máximo tribunal sentencia que la ley penal debe concebirse de forma tal, que los términos mediante los cuales se especifique los delitos o las penas, sean claros precisos y exactos, evitando así que la autoridad aplicadora incurra en confusión ante la indeterminación de los conceptos y, como consecuencia demeritando la defensa del procesado<sup>492</sup>.

La aplicación de penas por analogía o mayoría de razón supone el riesgo de que éstas, no sean congruentes respecto del delito cometido. Jurídicamente la analogía es un método de interpretación que entraña dos momentos: primero la falta de una norma aplicable al supuesto concreto y, dos que exista similitud respecto de los hechos. El efecto que produce la analogía es que el ámbito de aplicación de las leyes se extienda más allá del conjunto de casos originalmente previstos por el legislador, siempre que se trate de supuestos similares y que la razón legal sea la misma entre unos y otros<sup>493</sup>.

En materia penal esta garantía de la exacta aplicación comprende que la ley que se aplica, debe redactarse de tal forma, que los términos mediante los cuales especifique los elementos respectivos sean claros, precisos y exactos. En este tenor, la autoridad legislativa no puede sustraerse al deber de consignar en las leyes penales que expida, conceptos claros, precisos y exactos en el establecimiento de las penas y describir las conductas que señalen como típicas, incluyendo todos los elementos, características, condiciones, términos y

---

<sup>492</sup> Cfr. "Semanario Judicial de la Federación...", op.cit., p. 66 y 67.

<sup>493</sup> Cfr. Ibídem, p. 69.

plazos, cuando ello sea necesario para evitar confusiones en su aplicación o demérito en la defensa del procesado<sup>494</sup>.

*d) Evolución de los principios constitucionales del Artículo 16 constitucional.* Este artículo ha sufrido una importante reforma en el pasado reciente, donde se ha incluido una variedad de temas en sus párrafos, motivando una amplia crítica por parte de la doctrina mexicana en aspectos de contenido semántico, como de los tópicos que se abordan. Nosotros centraremos nuestro estudio haciendo referencia al contenido garantista del precepto constitucional a pesar de la reforma. De suerte que, precisamente por esto comentaremos genéricamente el contenido de los párrafos controvertidos, sabemos que entrar al análisis de cada uno de ellos excedería con mucho los límites del presente ejercicio académico. Sin embargo creemos importante dejar constancia del descontento sobre la nueva redacción del artículo, y la peligrosidad que ha supuesto de cara a la salvaguarda de derechos fundamentales, poniendo en duda que en verdad supongan una garantía constitucional a favor del ciudadano, que más bien lo deja a merced de la autoridad estatal.

En términos generales podemos clasificar en cuatro las garantías contenidas en el precepto constitucional: 1. Garantía de Autoridad Competente; 2. Garantía de mandamiento escrito, en el que se funde y motive la causa legal del acto de molestia para el gobernado y 3. Garantía de detención por orden judicial<sup>495</sup>.

---

<sup>494</sup> Cfr. Ibídem, p. 70.

<sup>495</sup> “...los derechos fundamentales relativos a que todo acto de autoridad debe ser fundado y motivado, así como el acceso a la administración de justicia. En ese sentido, cuando el Juez dicta una orden de aprehensión en la que transcribe literalmente el estudio del cuerpo del delito y la probable responsabilidad hecho por el Ministerio Público en su escrito de la consignación, es decir, utiliza las mismas palabras y párrafos en igual orden como si se tratara de una fotocopia, a fin de tener por acreditados esos requisitos, dicha actuación viola derechos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica y acceso a la justicia, al dejar de exponer argumentos propios que demuestren que realizó una actividad intelectual autónoma para motivar y fundamentar su resolución y al omitir practicar la función jurisdiccional que constituye su propio objeto, consistente en el sometimiento de la solicitud ministerial de captura a los parámetros de legalidad para determinar con libertad de jurisdicción si procede o no”. Tesis XXVII.1º. (VIII Región) 5P (10ª.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, disponible en: [www.scjn.ius.com.mx](http://www.scjn.ius.com.mx). consultado 10 octubre del 2013.

1. *Garantía de Autoridad Competente.* Atendiendo a la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son actos de molestia los que sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos. En este tenor el máximo tribunal dice que la emisión de cualquier acto de molestia precisa de la concurrencia indispensable de tres requisitos: 1. Que se exprese por escrito y contenga la firma original o autógrafa del funcionario respectivo; 2. Que provenga de autoridad competente, y 3. Que en los documentos quede registrado el fundamento y la motivación de la causa legal del procedimiento<sup>496</sup>.

Cuando en el precepto constitucional se habla de autoridad competente, significa que debe haber certeza respecto del acto de molestia. Pues éste, una vez que sea expedido debe establecer la autoridad de quien proviene, el contenido es decir la justificación de su emisión y por último las consecuencias jurídicas que trae aparejadas. De igual forma cuando el acto de autoridad provenga de autoridad competente, indica que la autoridad que ha expedido el acto esté facultada constitucional y legalmente para hacerlo.

En relación al deber de fundamentar y motivar, esto supone que en el documento donde se asiente el acto de molestia, contenga los preceptos legales que regulan los hechos y las consecuencias jurídicas que se pretendan conseguir con el mismo. De suerte, que la autoridad del estado sólo está justificada a actuar cuando el propio régimen jurídico expresamente le faculte a hacerlo. Por otra parte, en referencia a la motivación con ella se asegura la expresión de las razones que llevaron a la autoridad a emitir el acto de molestia.

2. *Garantía de detención por orden judicial.* Esta significa que toda orden judicial que tenga como objetivo privar de la libertad preventivamente al ciudadano, deberá provenir de una autoridad judicial, y de manera inmediata ponerse a la persona en quien recae la detención, a disposiciones del juez.

Por otra parte el precepto constitucional en estudio también contiene las reglas para proceder en casos de flagrancia; en casos de urgencia; la inviolabilidad de las

---

<sup>496</sup> Cfr. “*Las Garantías...*”, op.cit., p. 88.

comunicaciones privadas<sup>497</sup>. La práctica de visitas domiciliarias que tienen que ver con el acatamiento de disposiciones en materias de controles sanitarios, de policía y fiscales; la inviolabilidad de la correspondencia y por último lo que tiene que ver con el alojamiento de militares en tiempos de paz y de guerra. Finalmente, la disposición contiene temas relacionados a delincuencia organizada, y sobre la nueva estructura y elementos que integran los poderes judiciales<sup>498</sup> respecto del diseño jurisdiccional de corte acusatorio.

Son amplias las críticas respecto de la nueva redacción del artículo 16 constitucional después de la reforma penal constitucional (2007-2008)<sup>499</sup>, centrándose en la diversidad de temas que se incluyeron en el mismo. Es el caso de la definición del término delincuencia organizada; la autorización sobre las comunicaciones; el riesgo de discrecionalidad en el desempeño de las fuerzas de seguridad entre otros. Insistimos que sería amplísimo entrar al análisis de cada uno de ellos, por lo que en el presente epígrafe nos interesamos por detallar las garantías constitucionales que en materia procesal penal se contienen, amén del resto de elementos. Sin embargo, plantear la crítica que suscita en la doctrina la redacción y contenido del nuevo artículo, nos ayuda a dejar sentado la ambigüedad con la quedan asegurados ciertos derechos dentro del sistema jurídica mexicano, creando una percepción que más bien podría desembocar en una certeza, de que el ciudadano se encuentra a merced de la autoridad estatal.

Del estudio del sistema de garantías que comprende la Constitución Mexicana, podemos apreciar no sólo el nexo que existe entre derecho penal mínimo y el garantismo, sino entre

---

<sup>497</sup> Sobre el particular la nueva redacción del artículo 16 Constitucional adiciona un párrafo disponiendo que estaría en manos de los jueces federales la facultad de ordenar la intervención de comunicaciones privadas, siempre que la autoridad federal este facultado para ello por ley y del Ministerio Público respectivamente.

<sup>498</sup> “Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendido...”.

<sup>499</sup> Véase García Ramírez Sergio, La Reforma Penal Constitucional (2007-2008), ¿Democracia o autoritarismo?, Primera Edición, Editorial Porrúa, México, 2008; IX Jornadas Sobre Justicia Penal, La Reforma Constitucional sobre Justicia Penal y Seguridad Pública, Mesa IV, Perspectiva Académica, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Disco 4, 24 de abril del 2008; Comentarios a la Reforma Constitucional en Materia Penal, mesas redondas (abril-mayo 2008) disponible en [www.scjn.gob.mx/.../ComentariosReformaConstitucionalMateriaPenal.aspx](http://www.scjn.gob.mx/.../ComentariosReformaConstitucionalMateriaPenal.aspx), 3 de marzo del 2011.

el derecho penal mínimo y la efectividad y legitimación del sistema penal y en definitiva el sistema de protección de derechos y valores constitucionales en general. Esto supone que la eficacia no sólo define la efectividad del sistema penal, sino del Estado en su conjunto, esto es, en función de la tutela de los bienes primarios y de los derechos fundamentales que pueda asegurar, junto a la certeza y al resto de garantías penales, también se pone a prueba la efectividad de la jurisdicción frente a las formas cada vez más poderosas y amenazadoras de la criminalidad organizada. Para Ferrajoli<sup>500</sup> solo un derecho procesal depurado de la emergencia de la disparidad entre acusación y defensa a la excesiva discrecionalidad en la prisión preventiva puede ofrecer un fundamento robusto y creíble a la independencia del poder judicial y a su papel de control de legalidad de los poderes, además de lo anterior un Estado que pretenda responder al paradigma de la democracia constitucional, deberá en primer lugar estar en posibilidad de garantizar todos los derechos, no sólo los de libertad, sino los sociales también, en segundo lugar la protección frente a los poderes públicos y los privados y en tercer plano, hoy por hoy deberán responder a todos los planos tanto del derecho estatal, como del internacional<sup>501</sup>.

La primera parte del tercer párrafo del artículo 1º constitucional señala que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, el incumplimiento de esta obligación, genera en automático la responsabilidad del Estado. La responsabilidad internacional del Estado, con todo lo que esto implica es unitaria, es decir el único que comparece en la escena internacional, el que se obliga, independientemente de que los autores de la violación, activa u omisa, sean agentes u órganos de otros ámbitos del Estado. Así en la adopción de la Convención Americana por parte de México y en la admisión de la competencia contenciosa del Pacto de San José, se asume la obligación estatal de prevenir y en su caso reparar las violaciones a los derechos humanos. Así conforme a la Constitución Mexicana la protección a derechos humanos reside en disposiciones de origen nacional como de

---

<sup>500</sup> Cfr. Ferrajoli, Luigi, *"Garantías", "Jueces para..."*, op.cit., p.43.

<sup>501</sup> *Ibídem*, p.43-44.

orden internacional de los derechos humanos al más alto nivel del ordenamiento aplicable en México objetivo que persiguió la reforma constitucional de 2011<sup>502</sup>.

### **Capítulo III: Análisis del nuevo Sistema Oral en México.**

Sin duda que los procesos de tecnificación en materia de datos y la Constitución de la sociedad global, este desarrollo de procesos de información han supuesto un antes y después en relaciones humanas y de estas, con el Estado. Es en este sentido que la perspectiva penal demande una mayor y mejor atención, enfocando sus esfuerzos en construir una política criminal congruente y eficaz, capaz de combatir la criminalidad interna, al mismo tiempo que pueda ir más allá de lo propiamente doméstico. Es un fenómeno que pertenece a la parte de un todo dentro de un sistema, con la natural repercusión en el ámbito jurídico, particularmente en el área penal, que desencadena la

---

<sup>502</sup> Véase, García, Ramírez, Sergio, *Reparación de Fuente Internacional por Violación de Derechos Humanos (Sentido e implicaciones del párrafo tercero del artículo 1º. Constitucional bajo reforma de 2011)*, La Reforma Constitucional de Derechos Humanos, un nuevo paradigma, VV.AA., Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Primera Edición, México, D.F., 2011.

obligada reacción del Estado, proveyéndose de mejores instrumentos legales, ante los avances de la sociedad.

En virtud del incremento de los índices delictivos, la aparición de nuevos fenómenos antisociales hoy como nunca los sistemas jurídicos son puestos a prueba particularmente de nuestro hemisferio enfrentándose con serios problemas en materia de justicia penal, suponiendo la creación de mejores instrumentos jurídicos que permitan enfrentarlos. Consecuencia de ello es que los Estados en respuesta a la demanda social, han enfocado sus baterías principalmente al endurecimiento de las penas, a la modificación de las reglas prescripción, a la anulación del derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, la introducción de un régimen de recompensas, delación anónima y del modelo denominado “cero tolerancia”, erigiéndose como la medicina contra el delito y la delincuencia<sup>503</sup>.

Todo esto por supuesto sin perder de vista que en el caso del derecho penal, este se encuentra sujeto a los fines sociales del sistema, que son: discentivar las conductas delictivas, así como disciplinar la violencia legal, pero también aplicar la sanción penal a quien ha sido encontrado responsable de la comisión de un delito. Se tiene como objetivo principal la eliminación de la violencia privada y de las reacciones sociales informales frente al delito, es esta última a la que el sistema debiera enfocar su defensa, ocupando un lugar prioritario<sup>504</sup>. Un error ha ocurrido cuando el sistema penal absuelve a una persona culpable o condena a una inocente. Lo cual no tiene nada que ver con el hecho de que el sistema jurídico haya seguido sus propias reglas, sino con el hecho de que el verdaderamente culpable y el verdaderamente inocente hayan sido correctamente identificados<sup>505</sup>.

Sin embargo, estos esfuerzos no deben hacernos perder de vista que el reconocimiento a la

---

<sup>503</sup> Cfr. Plascencia Villanueva, Raúl, *“Procuración de Justicia y Reforma Penal”, Las Reformas Penales en los últimos años en México (1995-2000)*, VV.AA., Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2001, p.186.

<sup>504</sup> Cfr. Ríos Espinosa, Carlos, *El conocimiento en el Proceso Penal, Temas de Derecho Procesal Penal México España*, VV.AA., Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2005, p. 3 y 4.

<sup>505</sup> Cfr. Ibídem, p. 5 y 6.

existencia de un conjunto de derechos básicos de los ciudadanos constituye un elemento esencial que define al Estado constitucional de derecho. Este conjunto de derechos fundamentales contenidos en la norma constitucional, tiene como objetivo el hacer efectivo el respeto a la esfera jurídica de los ciudadanos. De esta manera se protegen un ámbito mínimo de libertades, necesarias para el desarrollo de todo individuo. En otras palabras los derechos fundamentales son derechos públicos subjetivos en favor del ciudadano, que trascienden a todo el ordenamiento jurídico y a su vez exigen una serie de prestaciones por parte del Estado. Estos derechos forman parte de la comunidad nacional, por cuanto configuran un marco de convivencia justa y pacífica plasmado en el Estado social y democrático de Derecho<sup>506</sup>. De suerte que para fortalecerlo es imprescindible la constante revisión de los procesos jurisdiccionales, a efecto de verificar las exigencias de eficacia, buscando la observancia y el respeto a las garantías de los gobernados.

Cierta es la necesidad de armonizar por un lado las necesidades de seguridad pública, y por otro el respeto y la protección a los derechos fundamentales. Este será un examen permanente del proceso penal, así como del resto del ordenamiento jurídico, que en cada caso debe partir de que el derecho es un producto cultural determinado por las condiciones histórico-políticas que influyen en una comunidad determinada. En consecuencia la reforma penal debe abordarse en dos vertientes: primero la histórica, tomando en cuenta los orígenes de las instituciones jurídicas y la segunda, con respecto partiendo de problemas vigentes, considerando la perspectiva del derecho comparado<sup>507</sup>.

Es en este contexto que el presente ejercicio académico pretende hacer un análisis del panorama del proceso penal mexicano, del sistema judicial que lo vertebra, de cómo en México se han recogido estos principios tanto por nuestra norma fundamental, como por el resto del ordenamiento jurídico. En este sentido es importante precisar la importancia que reviste los temas de análisis a los órganos de administración y procuración de justicia, hemos intentado enriquecer la discusión de las recientes reformas emprendidas a nivel federal y local de cara al nuevo modelo acusatorio. Pretendiendo que el hilo motivador sea

---

<sup>506</sup> STC. 25/1981.

<sup>507</sup> Cfr. Natarén Nandayapa, Carlos F., *Los Derechos Fundamentales en el Derecho Penal, Temas de Derecho Procesal Penal, México-España*, Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2005, p. 156.



que la estructuración de un sistema de enjuiciamiento penal, se encuentre basado en ese contenido esencial de derechos fundamentales, que salvaguarden el espacio de libertad de los individuos.

Es verdad que las disposiciones que rigieron a México desde la instauración de la Nueva España, crearon un sistema de enjuiciamiento de características inquisitivas, que se mantuvieron hasta finales del siglo XIX y principios del XX. Durante este periodo se facultó a los juzgadores para que tuvieran autoridad para iniciar el procedimiento, investigar los hechos, resolver discrecionalmente sobre el ofrecimiento y desahogo de pruebas y por último juzgar. Sin embargo, fue la carta fundamental de 1917 la que terminó con este estado de cosas<sup>508</sup>. Pues en ella se reflejó la tradición humanista de la última parte del siglo XVIII, así en el último cuarto del siglo XX el orden jurídico mexicano corresponde al modelo democrático informado por el principio de mínima intervención, la racionalidad de las consecuencias jurídicas del delito y el constante avance del garantismo que se observó en el procedimiento penal. Por medio de ella se pretendieron resolver los abusos por la concentración de funciones, tratando de crear equilibrios entre los sujetos procesales. Hay que decir que el procedimiento como tal, se reglamentó hasta el código federal de 1934, donde el legislador secundario manifiesta que el sistema de procesamiento será acusatorio, por así establecerse en la Constitución Mexicana. Sin embargo, se conservaron instituciones del sistema inquisitivo, en virtud de que era imposible eliminarlos, ante la organización de los tribunales preexistente, que desarrollaban sus

---

<sup>508</sup> “Las dos formas de enjuiciamiento que eligieron los legisladores del Congreso de 1916-1917 para solucionar los graves problemas que se padecían en materia de procuración y administración de justicia se encaminaron hacia una misma dirección en el sentido de contemplar un proceso penal oral y público. Una de estas formas de enjuiciamiento fue dejar abierta la institución del jurado (artículo 20, fracción VI) para que los legisladores decidieran dentro de su ámbito competencial su incorporación y regulación en el proceso penal. Las características de un modelo procesal en el que se establece el jurado involucran como escenario natural a la audiencia y con ello a la oralidad, inmediación, publicidad, contradicción, entre otras, además, la necesidad de un órgano acusador que recaía obviamente en el Ministerio Público. Las anteriores características según la clasificación doctrinal del proceso penal se alejan del sistema inquisitivo y son observables en el sistema acusatorio”. Cfr. Guillén López, Raúl, *Breve Estudios Sobre los Intentos de Establecer en México Juicios Orales en Materia Penal*. Serie Juicios Orales, Núm. 1, Primera Edición, 2014, Primera Reimpresión 2014, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., p. 13.

funciones principalmente dictando autos de formal prisión y sentencias<sup>509</sup>.

Tal como estudiamos en el segundo capítulo, la etapa que corresponde a la averiguación previa, queda bajo la responsabilidad monopólica del Ministerio Público, porque aunque este asuma la función de acusar, es decir ejercer la acusación, también tiene el carácter de autoridad durante la etapa, por encargarse de todas las diligencias que lo lleven a determinar si acusa o no. Debemos mencionar también la modalidad de la escritura del proceso, que como puede verse ambas características son atribuidas al sistema inquisitivo.

Cierto es que a partir de las reformas constitucionales de 1994<sup>510</sup> y 2000 respectivamente fue posible advertir tendencias encaminadas a equilibrar el proceso con la introducción de elementos como la división entre órganos, acusador, Juez y el defensor, que se reconocen ya desde la averiguación previa, delimitando cada uno de sus funciones dentro del proceso, sin que exista vinculación entre ellos. Hay libertad para ofrecer el caudal probatorio que se estime oportuno por los sujetos procesales, se estableció el derecho para que el inculcado fuera asistido por un defensor sometiéndose al proceso en igualdad de circunstancias, de igual forma que para la víctima u ofendido por causa del delito cometido. Son creados mecanismos para que durante la instrucción el Juez este en posibilidad de conocer las circunstancias en las que se cometió el delito, y los motivos para su comisión, conservando la publicidad del procedimiento<sup>511</sup>. Existe la posibilidad para el inculcado de la libertad

---

<sup>509</sup> Cfr. Aguilar López, Miguel Ángel, *Análisis comparativo*, VV.AA., *Temas de Derecho Procesal Penal México España*, Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2005, p. 91; García Ramírez, Sergio, *Consideraciones sobre la Reforma Procesal Penal*, VV. AA., Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, p. 57.

<sup>510</sup> Cfr. Silva Meza, Juan N., *Las Reformas Penales de los últimos Años en México, Las Reformas Penales de los últimos años en México (1995-2000)*, *Primeras Jornadas sobre Justicia Penal*, García Ramírez, Sergio, Vargas Casillas Leticia, A., coordinadores, Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 2001, p. 224-225. En el mismo sentido y en la misma obra véase Adato Green, Victoria, *“Las Reformas de los últimos cinco años en materia de Administración de Justicia Penal”*; Ramos Rivera, José Luis *“La Justicia Penal en la última década”*.

<sup>511</sup> DEFENSA ADECUADA. FORMA EN QUE EL JUEZ DE LA CAUSA GARANTIZA SU VIGENCIA. La garantía individual de defensa adecuada contenida en el artículo 20, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008) entraña una prohibición para el Estado consistente en no entorpecer el ejercicio del derecho de defensa del gobernado y un deber de actuar, en el sentido de informarle el nombre de su acusador, los datos que obren en la causa, brindarle la oportunidad de nombrar un defensor, no impedirle que se entreviste de manera previa y en privado con él y, en general, no impedir u obstaculizar el ejercicio de las cargas procesales que le corresponden dentro del proceso penal para desvirtuar la acusación

provisional, queda diseñado el sistema de recursos que permiten acceder a una segunda instancia y se adopta un sistema mixto de valoración de la prueba, que más bien se inclina hacia el sistema de prueba tasada<sup>512</sup>.

Desde una perspectiva crítica Juan Silva Meza señala que a menudo la respuesta que ha tenido el Estado Mexicano para atajar el fenómeno delictivo ha sido a través de emprender cambios en el marco normativo penal tanto en la parte sustantiva, como en la especial y la general, principalmente en las cuestiones procesales poniendo gran énfasis en la administración de justicia, el autor es enfático al decir que el discurso oficial del legislador a menudo ha confundido la administración con la procuración de justicia”. La reforma

---

del Ministerio Público. Así, para proteger la citada garantía es necesario que la labor de quien funja como defensor sea eficaz, pues aquella no puede concebirse como un mero requisito formal, sino que debe permitir una instrumentación real para tener oportunidades de descargo que, básicamente, permitan al imputado una efectiva participación en el proceso. Ahora bien, el Juez de la causa garantiza la posibilidad de defensa al permitir que se den todas las condiciones necesarias para que el inculcado sea debidamente asistido, tanto formal como materialmente, de manera que si en los hechos no puede calificar su adecuada defensa -en razón de la forma en que se conduce el defensor respectivo-, ello no significa que el Juez de la causa viole la garantía en cuestión, pues el control de la correcta o incorrecta actitud procesal del defensor, del debido ejercicio de las cargas procesales, así como de su pericia jurídica, sólo podrían ser materia de responsabilidad profesional, en términos de las leyes administrativas o penales, y según se trate de un defensor de oficio o particular. Esto es, el Juez respeta la garantía de defensa adecuada: (i) al no obstruir en su materialización (como ocurre cuando niega el derecho a una entrevista previa y en privado o interfiere y obstaculiza la participación efectiva del asesor) y (ii) al tener que asegurarse, con todos los medios legales a su alcance, que se satisfacen las condiciones que posibilitan la defensa adecuada, sin que ello signifique que esté en condiciones de revisar la forma en que los defensores efectivamente logran su cometido, pues ello excedería las facultades que tiene a su cargo para vigilar que en el proceso se garantice una defensa adecuada. Tesis: 1a./J. 12/2012 (9a.), Semanario Judicial de la Federación, disponible en [www.scjn.gob.mx](http://www.scjn.gob.mx), consultado el 4 de septiembre de 2105.

<sup>512</sup> PRINCIPIO DE IGUALDAD EN EL PROCESO PENAL. SU ALCANCE. En el proceso penal, el equilibrio de los sujetos procesales es de suma importancia, pues deben concedérseles iguales condiciones, de manera que ninguno quede en estado de indefensión; y si bien es cierto que este principio no está previsto expresamente en algún numeral concreto del Código Federal de Procedimientos Penales, también lo es que se consigna implícitamente en su artículo 206, en cuanto prevé que todo aquello que se ofrezca como prueba -en términos del artículo 20, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008- debe admitirse, siempre y cuando sea conducente y no vaya contra el derecho a juicio del Juez o del tribunal, lo que significa que los medios probatorios ofrecidos por ambas partes procesales deben valorarse con el mismo estándar o idénticas exigencias de juicio para generar convicción. Así, cuando la información que brinda un medio probatorio es imprecisa, parcial o genera duda porque adolece de claridad y da lugar a que el Juez le reste valor, no es válido que tal estándar sólo aplique para una de las partes, ya que el mérito o valor de convicción del medio probatorio está sujeto a la libre apreciación del Juez, pero es inadmisibles que los medios de prueba de la misma índole -ofrecidos por ambas partes- tengan un estándar de valoración distinto, según se trate del actor o del demandado, del órgano ministerial o del acusado, pues ello atentaría contra las garantías de justicia imparcial, de equidad procesal y de correcta fundamentación y motivación. 1a./J.141/2011(9a.), Ibídem.

penal operada en 1994 fue ampliamente criticada precisamente por lo apresurada, y porque al mismo tiempo ejecuto una reforma constitucional en materia de administración de justicia, que cambio para siempre la estructura y composición del Poder Judicial federal. Otras tantas reformas le han seguido producto de la desesperación como fue la reforma de 1996 esta reforma constitucional se planteó la posibilidad de un auténtico derecho penal paralelo, un verdadero sistema penal excepcional. Esta modificación constitucional no fue el resultado de una política preventiva general, sino como respuesta a un problema que provoco años de incapacidad, ignorancia, mala fe corrupción e incapacidad. Fue un auténtico derecho penal de excepción<sup>513</sup>.

Sería hasta la reforma de 1999, que se atemperó la dureza legislativa de los años anteriores, constitucionalmente se reformaron los artículo 16 y 19 constitucional para disponer los requisitos necesarios para acreditar el cuerpo de delito y poder expedir una orden de aprehensión o para dictar un auto de formal prisión. Así, derivado de esta importante modificación constitucional la Corte Mexicana interpretó a través de su jurisprudencia la obligación de que todo acto de autoridad dirigido a inferir un acto de molestia al justiciable cuente con la fundamentación y motivación, aspectos insoslayables en las conductas no solamente del órgano jurisdiccional, como de parte de todos los autoridades del Estado, sentando un pilar fundamental en el sistema jurídico mexicano<sup>514</sup>.

Así el Tribunal Constitucional Mexicano ha establecido en su doctrina: *“La falta de fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión debe hacerse de manera previa...el artículo 16 constitucional establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su*

---

<sup>513</sup> Silva Meza, Juan N., *“Las Reformas Penales...”*, op.cit., p. 225.

<sup>514</sup> Tesis: I. 4º. T.19K, Tomo: VII, Mayo de 1998, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, p. 1021.

*falta, y la correspondiente a su incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección... ”<sup>515</sup>.*

Es preciso añadir que parte de la doctrina procesal, hasta antes de la reforma penal constitucional de 2008 clasificaba al proceso penal mexicano, sin tener un criterio unánime

---

<sup>515</sup> Tesis: I.3o.C. J/47, Tesis: XXVII.1o.(VIII Región) J/2 (10a.), Tesis: 1a./J. 141/2011 (9a.), Semanario Judicial de la Federación, disponible en [www.scjn.gob.mx](http://www.scjn.gob.mx), consultado el 4 de septiembre 2015.

respecto de que el sistema procesal mexicano fuera acusatorio o mixto. Para autores como Franco Sodi<sup>516</sup> y González Bustamante<sup>517</sup> es acusatorio basándose en que es un proceso de partes cuyas funciones se encuentran delimitadas por la ley, además de que por mandato constitucional así debe ser. Por otra parte Rivera Silva sostiene que el sistema adoptado por la legislación mexicana es mixto, porque la ley permite al Juez cierto tipo de inquisición en el proceso, lo cual riñe de manera absoluta con sistema acusatorio donde aquel se caracteriza por el simple decidir.

Por su parte, Colín Sánchez contradice esta última tesis, argumentando que si el Juez ordena la práctica de diligencias, será con el objeto de conocer la verdad, ya que en virtud de la información que se obtenga con su práctica deberá emitir su resolución. Circunstancia que no podría presentarse si no fueran otorgadas amplias facultades en materia de prueba para el conocimiento de los hechos, el autor abunda en que al Juez incumbe tomar iniciativa en materia probatoria, pues de lo contrario permanecerá en la duda y sobre esa base resolver. Para él, el proceso se encuentra gobernado bajo los principios de legalidad, obligatoriedad, necesidad, identidad del Juez, autonomía de las funciones procesales, oralidad, contradicción y publicidad, motivo por el cual considera que la estructura y perfiles del procedimiento penal mexicano sería acusatorio<sup>518</sup>.

Aunque la doctrina en su mayoría se pronuncia a favor de que el sistema procesal mexicano, sea acusatorio a contrario del inquisitivo, es preciso anotar como quedo expuesto en los capítulos precedentes que las constantes reformas legales, contribuyen negativamente a mantener un sistema procesal con equilibrio de partes, inclinando la balanza hacia la inquisición. Para a veces solamente de manera formal otorgarse algunos derechos a efecto de hacer eficaz el equilibrio entre sujetos procesales, cuando menos así previsto por el ordenamiento jurídico. Si bien es clara la evolución en México hacia el modelo acusatorio, sobre todo por así quedar previsto en el ordenamiento constitucional en la realidad persisten elementos que lo acercan a experiencias lamentables dentro del

---

<sup>516</sup> Cfr. Franco Sodi, Carlos, *El Procedimiento Penal Mexicano*, Segunda Edición, Editorial Porrúa, México, D.F., 1939, p.247.

<sup>517</sup> Cfr. Riveras Silva, Manuel, *El Procedimiento Penal*, trigésima octava edición, Editorial Porrúa, México, D.F., México, D.F., 2009, p.10 y ss.

<sup>518</sup> Véase Colín Sánchez, Guillermo, *"Derecho Mexicano..."*, op.cit., p. 82

sistema inquisitivo. Es preciso entender que todos los obstáculos que se pongan en esta dirección atacarán la eficacia del sistema, desembocando en el cuestionamiento de su propia existencia, sobre todo a la vista de la situación que atraviesa el sistema de administración y procuración de justicia mexicano que se enfrenta altos grados de impunidad<sup>519</sup>.

En las últimas décadas México ha sido víctima de una serie de reformas emanadas del Poder Legislativo<sup>520</sup>, las que se distinguen por la arbitrariedad, el desorden y una tendencia a la modificación constante. Prueba de lo anterior son las tres reformas constitucionales, que han transformado el esquema esencial de la justicia penal mexicana. Estas reformas fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, en fechas 3 de septiembre de 1993, 3 de julio de 1996, 8 de marzo de 1999, y 21 de septiembre del 2000 respectivamente. A todos estos cambios se suman el conjunto de ordenamientos que se crearon sobre delincuencia organizada<sup>521</sup>, las cuales han supuesto cambios sustanciales dentro del sistema de justicia penal, al grado de que hay quienes sostienen que tal orden de cosas ha creado un sistema de justicia penal paralelo, esto es enfocado a combatir los casos de delincuencia organizada<sup>522</sup>. En este sentido las reformas que se han emprendido en estas materias en México, en su mayoría tienen un contenido ampliamente discutible, siguiendo una dinámica de avances y retrocesos.

---

<sup>519</sup> Véase Informe Ayotzinapa, *Investigación y Primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa*, Grupo Interdisciplinario de Expertos, (GIEI), Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Alejandro Valencia Villa, Ángela María Buitrago, Carlos Martín Beristáin, Claudia Paz y Paz Baile, Francisco Cox Vial. Primera Edición, Marra Servicios Editoriales; Matías Pedro, *"Impunidad en México alcanza 95%, alerta de la ONU"*, *Revista Proceso*, Semanario de información y análisis, Mensual, Enero 2012, México, D.F., disponible en [www.proceso.com.mx](http://www.proceso.com.mx) consultado el 5 de septiembre de 2015;

<sup>520</sup> Una media de diecisiete decretos de reforma al Código Penal Federal, siete decretos de reformas al Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, nueve decretos del Código Federal de Procedimientos Penales, y las correspondientes leyes orgánicas de las Procuradurías General de Justicia del Distrito Federal y de la General de la República, así como el excesivo énfasis en regular las labores de los órganos de procuración de justicia a través de acuerdos. Cfr. Plascencia Villanueva, Raúl, *Procuración de Justicia y Reforma Penal, Las Reformas Penales de los últimos años en México (1995-2000)*, "Primeras Jornadas...", op.cit., p. 187.

<sup>521</sup> Ley Federal contra Delincuencia Organizada, Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y La Ley Federal para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados, más actualmente la Ley de Extinción de Dominio entre otras.

<sup>522</sup> Cfr. Ibídem, p. 187.

## **1. Génesis del Sistema Acusatorio Adversarial. Reforma Constitucional y legal a la administración de Justicia en Materia Penal.**

Sobre el concepto de reforma judicial podemos ubicarlo como un movimiento que ha venido sucediendo en las últimas tres décadas en América Latina, así lo confirman también los diversos tratados internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica; El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos adoptado por la ONU; La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; La Convención de Salvaguarda de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales, del Consejo de Europa; El Proyecto de Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Procedimiento Penal, y qué decir de los numerosos encuentros sobre sistemas procesales latinoamericanos. Sin embargo en el caso de México ha sido complicado el empleo del término reforma judicial, pues a menudo cuando es empleado este término por la doctrina tienden a referirse a la reforma constitucional de 1994-1995<sup>523</sup>, por el carácter sustancial que tuvo en su momento y que hemos comentado en líneas arriba.

Los temas que tiene que ver con sistemas judicial y el debido proceso sin duda –dice Miguel Carbonell-, son tópicos que interesen no solamente a los ambientes académicos, es decir que tienen repercusión en varios ámbitos de la vida de una sociedad, repercuten en muchas áreas de convivencia de la misma como económico, el social, etc. Desde esta perspectiva es fácil identificar las causas generadoras que justifican e impulsan reformas a los sistemas judiciales que impactan también un cambio al procedimiento penal. El autor identifica entre estas causas: a) el proceso de democratización presente en varios países de América Latina, luego de varias décadas de gobiernos dictatoriales; b) los sistemas políticos obsoletos; c) la presión a los Estados por modernizarse en general; d) el papel

---

<sup>523</sup> Reforma al sistema judicial impulsada por el entonces Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, al Poder Judicial federal, se organizaron una serie de cambios institucionales, estructurales y de naturaleza procesal. Estos cambios no han resultado como se ofertó en una eficacia ni eficiencia en la impartición de justicia en México. Sin embargo, desde entonces todas las campañas presidenciales han abordado el tema de seguridad ocupando uno de los principales tópicos por las distintas plataformas electorales, y en cada gobierno en alguna medida se han emprendido esfuerzos reformistas para fortalecer al Poder Judicial y su función de impartición de justicia reforzando su credibilidad en la sociedad mexicana.



preponderante de los derechos humanos; e) la percepción negativa del sistema judicial y, y sobre los juzgados en materia penal<sup>524</sup>.

Sobre el reconocimiento de los derechos humanos en el ámbito internacional, éstos derechos en su versión contemporánea suponen una obligación para los estados a proveer de bases jurídicas sólidas que dicten el proceder cotidiano de los gobiernos en todas las materias y más en la materia penal, el derecho a la vida, a la integridad física con la prohibición a la tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes entre otros. Por tanto, la legislación en materia de sistemas judiciales y de procedimiento penal está condicionado por el respeto y salvaguarda de los derechos humanos que obligan principalmente a los gobiernos así como a los actores gubernamentales a cumplir con sus deberes y a establecer las prohibiciones correspondientes. Son de especial aplicación en la materia el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José los cuales establecen normas jurídicas que se ocupan del derecho a la libertad y la tutela judicial efectiva, entre otras materias del procedimiento penal. Además de agregar las consecuencias del Bloque Interamericano de Derechos Humanos, integrado por OEA, CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el sistema de protección de los derechos humanos de los estados que integran la Organización de Estados Americanos<sup>525</sup>.

Así la reforma judicial mexicana, como en los demás países de América Latina surge de un proceso de globalización en el que la principal bandera ha sido la defensa de los derechos humanos, para mostrar Estado amigos y seguidores de las tesis de la democracia, seguros para la inversión extranjera, en la lógica de que un Estado de derecho solido es garantía de

---

<sup>524</sup> Partamos de una certeza de una certeza: el sistema penal mexicano está en bancarrota. Ningún de sus principales acores está satisfecho con su funcionamiento actual. Todas las estadísticas disponibles nos permiten concluir que el proceso penal mexicano hace aguas por todos lados: a) no sirve para atrapar a los delincuentes más peligrosos; b) permite un altísimo nivel de impunidad y corrupción; c) no asegura los derechos fundamentales ni de víctimas, ni de acusados, d) no establece incentivos para una investigación profesional del delito; e) es sumamente costoso tomando en cuenta los resultados. Cfr. Carbonell Miguel, *¿Qué son y para qué sirven los juicios orales?*, Universidad Nacional Autónoma de México, Editorial Porrúa, Renace, México, D.F., 2009, p.1., para datos estadísticos Véase Bergman, Marcelo (coordinador), *Delincuencia, marginalidad y desempeño institucional. Resultados de la encuesta a población en reclusión en tres entidades de la República mexicana*, CIDE, México, D.F., 2003, disponible en [www.cide.com.edu](http://www.cide.com.edu)

<sup>525</sup> Véase, “20 Claves para Conocer y Comprender mejor Los Derechos Humanos”, editado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Primera Edición, México, D.F., 2011. Disponible en [www.hchr.org.mx](http://www.hchr.org.mx).

la liberalización económica<sup>526</sup>. En el caso de México la reforma penal se emprendió ambiciosamente con un gran apoyo y consenso político al momento de la aprobación de los cambios constitucionales y legales correspondientes, pero insuficientes a la hora de la implementación de cada una de las fases que supone una reforma de estas características. Alberto Binder le llama a este esfuerzo reformista “fetichismo normativista”, que no es otra cosa que la práctica que lleva acabo las autoridades del Estado para promulgar y sancionar normas con propuestas ambiciosas de cambio, para después olvidarlas o no dar seguimiento ni presupuesto a su puesta en marcha, en su equipamiento operación y capacitación. Pareciera dice el autor que fueran cambios que se emprenden desde la superficialidad o la frivolidad pretendiendo dejar intacto la sociedad de privilegios usando la legalidad con una mascarará de legitimidad y no como la realización de políticas públicas efectivas<sup>527</sup>.

Con este panorama en México desde agosto de 2003 la Suprema Corte de Justicia de la Nación llevo a cabo una convocatoria que diera inicio a la Consulta Nacional para una Reforma Integral y Coherente del Sistema de Impartición de Justicia en el Estado Mexicano. Con esta consulta se recogerían la opinión de la comunidad jurídica mexicana, como el de la población en general, sobre el sistema de impartición de justicia en el país. En este sentido la Corte Mexicana asumió un liderazgo que hasta este momento no había desplegado en hacer un esfuerzo común para satisfacer mediante una reforma judicial integral la demanda común a una justicia accesible, rápida y expedita para todos los mexicanos. Como puede entenderse los debates alrededor de la reforma judicial transitaron desde la consolidación d un sistema de defensa constitucional para México, una nueva Ley de Amparo, la reingeniería del federalismo, los nombramientos de jueces y magistrados de

---

<sup>526</sup> Países en América Latina que han emprendido las reformas Guatemala, Perú, Salvador y Argentina, y al poco tiempo se percataron de sus pobres resultados. Cfr. Solís Delgadillo, Juan Mario, *La Reforma Penal Mexicana espejismos y realidades. Los actores del sistema como variables de éxito o fracaso. Reforma Judicial. Revista Mexicana de Justicia*, Núm. 13, Enero-Junio, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 2009, p. 98.

<sup>527</sup> Cfr. Binder, Alberto, “La reforma de la Justicia Penal: entre el corto y el largo plazo”, *Sistemas Judiciales*, Núm. 3, “Reformas Procesales en América Latina”, Centro de Estudios de las Américas, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, junio 2002, p.68, disponible en: [www.cejamericas.org/sistemas-judiciales/index.html](http://www.cejamericas.org/sistemas-judiciales/index.html), consultado 01/08/2015.

los tribunales tanto del fuero federal como común, la codificación uniforme así hasta abordar los temas de la justicia penal<sup>528</sup>.

Nadie duda de lo específico de los temas que se debate, estudian y analizan en el marco de una reforma integral de justicia y aún más en tratándose de la justicia penal. Desde el año de 2006 se expresó la urgencia de una reforma penal apuntando la necesidad de armonizar el procedimiento penal con la jurisprudencia producida por la Corte Mexicana, pero también incluyendo la jurisprudencia derivada de los órganos internacionales abriendo paso a un sistema acusatorio, con oralidad, intermediación y concentración. De igual forma se discutían la autonomía de las procuradurías de justicia, la revisión del monopolio de la acción penal, la armonización de los tipos penales y sus correspondientes sanciones, así como la despenalización y la restitución de derecho penal como *última ratio*<sup>529</sup>.

La reforma judicial en materia penal en México no se compone de un solo momento sino del resultado de un proceso en marcha, así es como el 13 de diciembre de 2007 fue publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Senadores el Decreto por el que reformaron disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia penal y seguridad pública que entró en vigor en 2008<sup>530</sup>. La reforma integral al sistema de justicia penal atiende a las siguientes características:

1. Un sistema acusatorio en el que se respeten los derechos de la víctima y del ofendido, como del imputado, en el cual se establece el principio de presunción de inocencia para éste.
2. El sistema se rige por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e intermediación, con la característica de la oralidad se fomenta la transparencia de los procesos para garantizar de igual forma la relación directa entre el Juez y las partes, propiciando que los procedimientos penales sean más ágiles y sencillos.

---

<sup>528</sup> Cfr. *Libro Blanco de la Reforma Judicial, una agenda para la justicia en México*, Primera Edición, Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, D.F., 2006, p.67.

<sup>529</sup> *Ibíd.*, p. 95.

<sup>530</sup> Reforma Constitucional en Materia de Justicia Penal y Seguridad Pública, proceso legislativo, junio de 2008, Secretaría de Servicios Parlamentarios, Centro de Documentación e Información y Análisis, Dirección de Bibliotecas y de los Sistemas de Información, Palacio Legislativo, México, D.F. Decreto disponible en [www.cddhcu.org.mx](http://www.cddhcu.org.mx).

3. Crea jueces especializados llamados de control que resuelven de manera inmediata, y por cualquier medio las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que así lo requieran, respetando las garantías de las partes y que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho. Debe disponerse en todo momento un registro fidedigno de las comunicaciones que se produzcan entre el Juez y el Ministerio Público. El Juez de la causa se hará cargo del asunto una vez que la persona señalada como responsable de la comisión de un delito, haya sido vinculada a proceso hasta la emisión de la sentencia correspondiente. Será un Juez diverso el que se encargue de vigilar y controlar la ejecución de la pena, contenida en la sentencia.
4. El auto de formal prisión y de sujeción a proceso se cambian por lo que se le nombra auto de vinculación a proceso.
5. Una nueva regulación de medidas cautelares entre ellas la prisión preventiva, de tal forma que ésta sanción solo excepcionalmente podrá ser aplicada cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad o cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. Para los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, en contra del libre desarrollo de la personalidad y en contra de la salud, la prisión preventiva se sugiere que se aplique en todos los casos.
6. Mecanismos de solución alternativos de controversias, que procuren asegurar la reparación del daño, sujetas a supervisión judicial en lo caso que la legislación secundaria juzgue conveniente.
7. Un sistema integral de garantías, tanto de la víctima como del imputado, así como una serie de principios generales que deberán regir todo proceso penal.
8. Un régimen especial que regirá los procesos penales en tratándose de delincuencia organizada. Esto incluye la facultad de que órgano legislativo se ocupe de expedir las normas en esta materia.

9. Las bases sobre las cuales deberá constituirse y operar el Sistema Nacional de Seguridad Pública, privilegiando la coordinación del Ministerio Público y las instituciones policiales en los tres órdenes de gobierno, a fin de lograr la integración de los esfuerzos en materia de seguridad pública, respetando al régimen federal.

Con este panorama de cambios y reformas es posible comprender la complejidad del reto que se asume ante un cambio de esta magnitud, pues no supone únicamente modificaciones metodológicas sino un cambios de paradigmas que impactan una serie de instituciones, de estructuras, de principios políticos, jurídicos y desde luego culturales para la vida jurídica y social mexicana.

Pues se pretende en primer término crear un procedimiento en donde el juicio sea la etapa central del proceso penal, arbitrado y atendido en todo tiempo por la autoridad jurisdiccional, lo que significa eliminar los regímenes de excepción previstos por la Constitución Mexicana y su respectiva leyes secundarias<sup>531</sup> que impiden -o mejor dicho anulan- el acceso a los derechos fundamentales de naturaleza procesal del justiciable, y que por otra parte no permite fortalecer la importancia de la etapa de investigación ante el Ministerio Público.

Como ya se dijo el éxito de una reforma de estas características descansa también en la división de funciones propias de la autoridad investigadora, de las Fiscalías y de los Ministerios Públicos convertidos en verdaderos investigadores, así como de las facultades que son responsabilidad exclusiva de la función jurisdiccional. Por otra parte es esencial el atemperar también el derecho penal sustantivo irracional en muchas de sus sanciones y penalidades, castigando todo tipo de conductas.

---

<sup>531</sup> Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, disponible en: [www.cddhcu.gob.mx](http://www.cddhcu.gob.mx), consultado el 10 de Agosto de 2015, Véase Alvarado Martínez, Israel, *“La investigación procesamiento y ejecución de la delincuencia organizada en el sistema acusatorio*. Series juicios orales Núm. 2, Primera edición 2012, primera reimpresión 2014, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 2014; Roemer Andrés, Buscaglia, Edgardo, *compiladores*, Terrorismo y Delincuencia Organizada. Un enfoque de derecho y economía. Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 2006; Fondevila Gustavo, Mejía Vargas, Alberto, *Reforma Procesal Penal: Sistema Acusatorio y Delincuencia Organizada, Reforma Judicial*. *Revista Mexicana de Justicia*, Núm. 15-16, Enero-diciembre, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 2010.

En definitiva una reforma constitucional en materia penal, dentro de un estado democrático constitucional pasa por el sometimiento de todos órganos del Estado encargados de la procuración y administración de justicia al respeto de los derechos fundamentales de las personas sujetas a proceso penal, como de las víctimas de conductas delictivas, no es un secreto que en nuestro sistema político criminal se asume como alternativa para el combate a la delincuencia el sacrificar los derechos fundamentales, donde la autoridad los estima como incompatibles y un estorbo para el cumplimiento de los fines de la seguridad pública.

Sin embargo no debe perderse de vista, la obligación internacional del Estado Mexicano, en los diversos instrumentos convencionales en materia de derechos humanos, a los que el propio estado ha quedado obligado a promover, respetar, garantizar y a salvaguardar, según el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que deben armonizarse con los fundamentos constitucionales del proceso penal acusatorio, previsto por el artículo 20 de la misma norma fundamental.

## **2. Análisis del Sistema Acusatorio conforme al Principios de la Oralidad.**

Decir proceso oral es designar la audiencia como el campo de acción de la acusación y la defensa y del Juez. Existen cuando menos tres tipos de sistemas procesales: el escrito; el oral puro y el mixto. Dentro de este último los actos importantes de la causa, particularmente los que determinan los hechos y las pruebas, se hacen por escrito, para después en la celebración de la audiencia correspondiente se refieran los motivos que dieron origen a la causa y se realice el debate correspondiente entre los sujetos procesales, donde manifiesten lo que a su derecho convenga. Desde la perspectiva de Chiovenda el problema se encuentra mal planteado y pobremente resuelto, ya que nadie puede dudar de que el sistema deba ser mixto, todo está en determinar la relación recíproca entre los dos elementos y el valor de la audiencia respecto al desarrollo de las actividades procesales<sup>532</sup>.

---

<sup>532</sup>Cfr. Chiovenda Giuseppe, *Ensayos de Derecho Procesal Civil*, Traducción de Santiago Sentís Melendo, Vol. II, Ediciones Jurídicas Bosch y Cía., Chile, Buenos Aires, 1949, p. 231.

No es útil pretender generar un antagonismo entre la escritura y la oralidad, finalmente creemos que ambos funcionan como complemento uno del otro<sup>533</sup>. La oralidad es uno de los principios que con frecuencia son invocados pero raramente entendidos y aplicados por algunos sistemas de enjuiciamiento penal. Es preciso anotar que el empleo de la oralidad no significa el renunciar a toda forma respecto de los actos procesales. De este modo oralidad significa que las actuaciones que se lleven a cabo dentro del procedimiento por los sujetos procesales serán practicadas de viva voz. A menudo los códigos mexicanos han destacado la oralidad, sin embargo en la práctica se ha revelado lo contrario. Los numerosos tropiezos respecto de la inmediación, el ritmo discontinuo en los mecanismos al interior del proceso, la escasa intervención de los sujetos procesales, la eliminación en la celebración de auténticas audiencias públicas y otros tantos en el desarrollo habitual de los procesos penales, han terminado por echar abajo el uso eficaz de la oralidad<sup>534</sup>.

Con nuestros antecedentes castellanos, en virtud de que los procedimientos en España se organizaron conforme a los principios procesales romano-canónicos<sup>535</sup>. Durante mucho tiempo la justicia indiana se debatió entre la tradición medieval oral y la vertiente burocrática del Estado Español, que para proteger sus dominios tuvo la necesidad de crear una cultura documental basada en la prueba escrita, ante la piratería y la pluralidad de las

---

<sup>533</sup> Cfr. Narváez, José Ramón, *“Oralidad y Justicia en la Historia de México”*, Anuario Mexicano de Historia del Derecho, Volumen XIX, Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2007, p. 275.

<sup>534</sup> Cfr. García Ramírez, Sergio, *Principios Rectores del Proceso Penal, XV Congreso Mexicano de Derecho Procesal*, Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 1998, p. 370.

<sup>535</sup> “El procedimiento criminal en México ha sido hasta hoy, con ligerísimas variantes, exactamente el mismo que dejó implantada la dominación española, sin que se haya llegado a templar en lo más mínimo su dureza, pues esa parte de la legislación mexicana ha quedado enteramente atrasada, sin que nadie se haya preocupado en mejorarla. Diligencias secretas y procedimientos ocultos de que el reo no debía tener conocimiento, como si no se tratase en ellos de su libertad o de su vida; restricciones del derecho de defensa impidiendo al mismo reo y a su defensor asistir a la recepción de pruebas en su contra, como si se tratase de actos indiferentes que de ninguna manera podrían afectarlo y, por último, dejar la suerte de los reos casi siempre entregada a las maquinaciones fraudulentas y dolosas de los escribientes, que por pasión o vil interés alteraban sus propias declaraciones, las de los testigos que deponían en su contra, y aun las de los que se presentaban a declarar en su favor... Los jueces mexicanos han sido, durante el período corrido desde la consumación de la independencia hasta hoy, iguales a los jueces de la época colonial: ellos son los encargados de averiguar los delitos y buscar las pruebas, a cuyo efecto siempre se han considerado autorizados a emprender verdaderos asaltos contra los reos, para obligarlos a confesar, lo que sin duda alguna desnaturaliza las funciones de la judicatura..”. Véase Tena Ramírez, Felipe, *Leyes fundamentales de México 1808-2002*, 23a. Edición, Editorial Porrúa, México, D.F., 2002, p. 751; Cfr. Guillén López, Raúl, *“Breve Estudio sobre la Interpretación de establecer los juicios orales en materia penal”*, Serie Juicios Orales, Núm. 1, Primera Edición 2012, Primera Reimpresión 2014, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., p.15 y ss.

fuentes del derecho de indias. Con la formación del Estado moderno, la sociedad novohispana vio nacer la burocracia con los borbones. De esta manera el Estado Mexicano ordeno que los jueces siempre que solicitaran un interrogatorio lo hicieran por escrito y pidieran les fuera respondido por el mismo método<sup>536</sup>.

Paulatinamente durante el siglo XIX que el sistema jurisdiccional cambiaria hacia la formalización judicial, detallando el tipo de procedimiento que existía en el México decimonónico<sup>537</sup>. El primero es el juicio sumario era por esencia verbal, la Ley de Jurados de 1859 introduce la diferencia entre juicios sumarios y plenarios, el primero de estos no era formalmente un juicio sino la sustanciación del mismo, comenzaba con un auto de formal prisión, pasaba por la confesión de los cargos, el jurado entraba en acción hasta el momento final donde se le expondría el caso. El segundo, fue verbal sustanciándose ante el Juez menor, en este sentido los jueces de paz les fueron encomendadas las conciliaciones de toda clase de personas, aunque fueran aforadas y de los juicios verbales que se presenten<sup>538</sup>.

---

<sup>536</sup> Narváez, José Ramón, *"Oralidad y Justicia..."*, op.cit., p. 282-283.

<sup>537</sup> "...para solucionar la problemática dentro del sistema de justicia penal a mediados del siglo XIX, varios diputados plantearon...la posibilidad de establecer la institución del jurado, ello ocurrió, precisamente, cuando se discutió el artículo 20 constitucional, además de otros artículos constitucionales para establecerlo para casos de delitos de imprenta...la discusión del artículo 20 constitucional dio pie a un debate extenso e interesante sobre la justificación y viabilidad de establecerlo en aquella época. Algunos de los argumentos expresados para justificar el establecimiento del jurado fueron tendientes a evidenciar el mal funcionamiento del sistema de justicia de aquella época, el principal detractor del jurado, el señor Vallarta, confesó que el modo de enjuiciar adolecía de defectos notorios, pues conocía los abusos cometidos por los jueces. Afirmaba que aun conviniendo con la descripción sombría que se hacía de los tribunales por parte de los amigos del jurado, esto era, el furor sangriento, los grillos, las cadenas, los calabozos, las cárceles, el secreto, la incomunicación y el Juez tan bárbaro como omnipotente; lo anterior debía de corregirse y no dar al pueblo mexicano costumbres nuevas...Los miembros de la comisión encargados de elaborar el proyecto de Constitución presentaron un dictamen en el cual incluían la figura del jurado como una innovación importante dentro de las causas criminales y fijaban como derecho constitucional la garantía a favor de todo acusado que fuere juzgado breve y públicamente por medio de un jurado imparcial. Más adelante, señalaban que la soberanía del pueblo no podía concebirse sin la institución del jurado y en vano se repetía que la ignorancia de un pueblo era el obstáculo para el establecimiento de los mismos... Los miembros de la Comisión de Constitución, ya para finalizar los argumentos relacionados con la implantación del jurado, hicieron en el dictamen una fuerte crítica sobre las múltiples deficiencias del sistema de administración de justicia de la época. Cfr. Guillen López, Raúl, *"Breve Estudio..."*, op.cit., p.6 y ss., Cfr. Zarco, Francisco, *Historia del Congreso Extraordinario Constituyente de (1856-1857)*, Primera Edición 1956, Segunda reimpresión 1979 México, D.F., p. 36 y ss.

<sup>538</sup> Cfr. Narváez, José Ramón, *"Oralidad y Justicia..."*, op.cit., p. 283;



Luego en para 1867 por medio de un decreto confirmaba la ambigüedad entre lo oral y lo escrito, pues establecía que los jueces menores debían extender las actas de los juicios verbales y las conciliación bajo el numero ordinal que le correspondía en los libros sellados que les proporcionaba el gobierno, de este modo la regla era que en cuantía menor los juicios fueran verbales pero todo haciéndose constar en actas. Otra de las características fue que hasta antes de ser conocido por el jurado, -es decir antes de que dictara el auto de formal prisión-, los juicios eran privados, además de ser definitivos pues los fallos y sus incidentes no admitían recurso alguno<sup>539</sup>.

Durante esta etapa el mecanismo seguido para un juicio verbal, consistía en que en una sola audiencia se oyera la demanda y la contestación y en el acto se formará por un escribano un resumen de todo lo acontecido, donde las partes manifestarían su satisfacción estampando su firma. En el caso de requerir pruebas, estas serían recibidas concediéndose un plazo de 15 días, si la prueba fuere testimonial esta se concedía otorgándose un plazo de tres días para su desahogo. Para que al día siguiente de concluido el término, las partes podrán alegar verbalmente en la audiencia respectiva lo que su derecho conviniera. El Juez en la siguiente audiencia podía emitir su resolución verbal, el escribano, los dos testigos de asistencia; después de que el alcalde y el Juez de paz hayan tenido conocimiento del acto donde se ha efectuado la demanda y de las excepciones del reo, una vez que éstos se hayan retirado el Juez de paz deberá pronunciar su resolución.

No hay que olvidar que íntimamente ligada a la figura del juicio verbal, encontramos también la institución del jurado que materialmente existió en México, hasta principios del siglo XX, fue establecido en las constituciones de 1857<sup>540</sup> y 1917<sup>541</sup>, actualmente en desuso.

---

<sup>539</sup> Ibídem, p. 284.

<sup>540</sup> Cfr. Guillen López, Raúl, *"Breve Estudio sobre..."*, op.cit., p. 4 y ss.

<sup>541</sup> "...la situación del sistema de justicia penal en México, uno de ellos sin duda muy generoso en información es el proyecto que presentó el señor Venustiano Carranza para vencer al Congreso Constituyente de la necesidad de reformar el texto constitucional en materia de administración de justicia...el artículo 20 de la Constitución de 1857 señala las garantías que todo acusado debe tener en un juicio criminal; pero en la práctica esas garantías han sido enteramente ineficaces, toda vez que sin violarlas literalmente, al lado de ellas, se han seguido prácticas verdaderamente inquisitoriales, que dejan por regla general a los acusados sujetos a la acción arbitraria y despótica de los jueces y aún de los mismos agentes o escribientes suyos... El procedimiento criminal en México ha sido hasta hoy, con ligerísimas

Un golpe a la oralidad se daría –también– durante el siglo XIX, por la confusión que produjo en el Constituyente de 1856 distinguir entre tribunales especiales y justicia especializada. En este sentido la justicia oral se sustentaba en la posibilidad de que los tribunales fueran especializados, pues el lenguaje entre las partes y el Juez sería similar. Durante la época hubo una percepción equivocada del concepto de oralidad, porque se le asociaba con tribunales especiales, de conformidad con el principio que supone no crear tribunales *ex novo* para juzgar a una persona o contra un solo hecho, una garantía procesal valiosa, pero que claramente son conceptos totalmente distintos<sup>542</sup>.

Conforme al tema de la oralidad la reforma más significativa tendría lugar durante el siglo XX, a través de la cual tanto el fiscal como el procurador dejaban de pertenecer al Poder Judicial, dando paso a la creación del Ministerio Público, el cual quedaría bajo la autoridad del Poder Ejecutivo. Esta desvinculación entre los órganos de procuración y administración de justicia hecho por tierra el principio de oralidad respecto de los procesos, pues la comunicación entre uno y otro se remitiría a constancias que debían constar en forma escrita.

Dentro de la legislación mexicana como puede verse, el concepto de la oralidad no es una novedad, el problema ha sido la falta de contenido de cara al sistema procesal. Las razones estriban en su denegada práctica, o mejor dicho su caída en desuso, a la acepción de mero formalismo. Para muestra baste decir que constitucionalmente el artículo 17 de la Constitución al pedir una administración de justicia recta e imparcial, así como el artículo 14 y 16 que ordenaron la fundamentación y la motivación de todos los actos, y demás providencias se pide que consten en mandamiento escrito, trayendo como consecuencia que la balanza se inclinará a favor de la escritura en detrimento de la oralidad. De igual forma el

---

variantes, exactamente el mismo que dejó implantada la dominación española, sin que se haya llegado a templar en lo más mínimo su dureza, pues esa parte de la legislación mexicana ha quedado enteramente atrasada, sin que nadie se haya preocupado en mejorarla. Diligencias secretas y procedimientos ocultos de que el reo no debía tener conocimiento, como si no se tratase en ellos de su libertad o de su vida; restricciones del derecho de defensa impidiendo al mismo reo y a su defensor asistir a la recepción de pruebas en su contra, como si se tratase de actos indiferentes que de ninguna manera podrían afectarlo y, por último, dejar la suerte de los reos casi siempre entregada a las maquinaciones fraudulentas y dolosas de los escribientes, que por pasión o vil interés alteraban sus propias declaraciones, las de los testigos que deponían en su contra, y aun las de los que se presentaban a declarar en su favor...”, *Ibíd.*, p. 15 y ss., Véase también Tena Ramírez, Felipe, “*Leyes fundamentales...*”, *op.cit.*, p. 751.

<sup>542</sup> Cfr. Narváez, José Ramón, “*Oralidad y Justicia...*”, *op.cit.*, p. 286.

artículo 19 constitucional exigía que el auto de formal prisión expresara, el delito que se imputa al acusado; el lugar; tiempo y circunstancias de su ejecución, así como los datos que arroje la averiguación previa, que deben ser los suficientes para determinar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculcado. Conforme al Artículo 20 el indiciado podía pedir de manera verbal y directa su libertad; también hizo referencia a que mediante audiencia pública el inculcado conocería el nombre de su acusador, la naturaleza y la causa de la misma, a fin de que tuviera conocimiento del hecho punible que se le imputa y pueda contestar a los cargos, rindiendo su declaración preparatoria; y por ultimo contemplo la obligación de ser juzgado en audiencia pública. De esta manera podemos concluir que el modelo mexicano si bien seguía un modelo de justicia mixto, la oralidad se adoptó como una formalidad dentro del proceso, gravitando hacia una publicidad sin oralidad y no al revés.

Creemos que en México el concepto de la oralidad ha sido mal entendido, preocupándose sólo por enfoque específico de la oralidad de los juicios, y no en el enfoque mismo del sistema acusatorio, olvidándose del resto de los mecanismos. No hay que olvidar que el acceso a la justicia se basa en que los gobernados puedan ser oídos y atendidos por los órganos de impartición de justicia con eficacia, sin dilaciones, sin enfrentarse con problemas burocráticos, sin candados, ni obstáculos de tipo económico, discriminaciones raciales, de género, políticas, sexuales, religiosas etc. Así por ejemplo la Constitución Mexicana en la actualidad establece los principios que tienen repercusión en el derecho procesal, en la configuración de derechos que asisten a los ciudadanos, como es el establecimiento de los mecanismos jurídicos a favor de éstos ante el poder coactivo de los órganos del Estado. Los principios democráticos que todo sistema de justicia debe observar dentro de un estado democrático social de derecho.

Para asegurar una acceso efectivo a la justicia, el justiciable deben salvaguardarse entre otras cosas; la prohibición a la indefensión; el derecho a un Juez establecido previamente por la ley; el derecho a una defensa; el derecho a un proceso públicos y sin dilaciones; el derecho a un proceso judicial con todas las garantías, dentro del cual se ubican la utilización de los medios de prueba pertinentes que soporte la acusación de un individuo; el derecho a ser informado de la acusación; a no declarar contra sí mismo y a la observancia

del principio de inocencia.

Es innegable la amplia corriente doctrinal en México que ve en la oralidad una forma de garantizar el acceso a la justicia<sup>543</sup>. Buena parte de ella piensa que un proceso penal es oral, por cumplir con las características de la inmediación, la contradicción, la continuación, la publicidad, amén de que los objetivos que deben perseguirse con estos principios sea que la fundamentación de las sentencias se realice exclusivamente en el material de hecho introducido verbalmente en el juicio. Lo que nos enfrenta a la pregunta ¿Cuál de ellos en realidad permite arribar al hecho y la responsabilidad del autor?, ¿Será solo la oralidad? Pudiera ser que la práctica de la oralidad dentro del sistema, se transforme en meramente formal, al permitir audiencias con falta de secuencia, interrogación de testigos por separado y discontinuadas. Estos elementos hacen que los tribunales no tengan presente las circunstancias del caso a la hora de pronunciar la sentencia, y como consecuencia se dicte en base a los elementos escritos<sup>544</sup>.

Los tribunales federales mexicanos ya se han pronunciado en este sentido de explicarnos en que consiste el principio de oralidad, reconociendo que el primer párrafo del artículo 20 constitucional es sin duda el eje total del nuevo procedimiento penal mexicano disponiendo que el sistema penal será acusatorio y oral regido además del principio de oralidad, por la publicidad, la contradicción, la concentración, continuidad e inmediación. La Corte Mexicana en su doctrina ha establecido: “...importancia son estos principios y su observancia y su desarrollo se encuentra sujeto precisamente a la oralidad, -es decir-, que esta última constituye el instrumento de expresión verbal en el que se basan el resto de principios. Así, en el nuevo sistema penal acusatorio, la oralidad constituye un instrumento de relevancia primordial, pues marca una estructura general del procedimiento, que

---

<sup>543</sup> Véase Vázquez Marín, Óscar, “La Implementación de los Juicios Orales en el Sistema de Justicia Penal Mexicano: ¿qué sigue después de la reforma constitucional?, *Reforma Judicial*. Revista Mexicana de Justicia, Núm. 12, Julio-Diciembre, Año 2008, México, D.F.; González Obregón, Diana Cristal, “Una Nueva cara de la Justicia en México:

Aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales bajo el Sistema Acusatorio Adversarial. Serie Juicios Orales, Núm. 21, Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 2014; también pueden consultarse “Veredicto”, Revista especializada en juicios orales, Revista en línea, mensual, Chihuahua, México, disponible en [www.veredicto.com.mx/](http://www.veredicto.com.mx/). Consultado el 4 de septiembre de 2015.

<sup>544</sup> Cfr. Hidalgo, Murillo, José Daniel, *Sistema Acusatorio Mexicano y Garantías del Proceso Penal*, Universidad Panamericana, Primera Edición, Editorial Porrúa, México, 2009, p.63.

*estrictamente se refiere a una norma de comunicación -referencia verbal-, lo que debe entenderse como la obligación de que las partes estén presentes en las audiencias, para que se comuniquen de forma hablada (no escrita), de manera tal que el juzgador escuche directamente todos los argumentos que en ese momento se le expongan para sostener la imputación o la defensa, así como recibir los datos que se ofrezcan... ”<sup>545</sup>.*

Así estos principios constituyen la forma en que debe regirse el sistema procesal penal, cuyo cumplimiento debe repararse por el Juez para otorgar al imputado un debido proceso, ya que impone a las autoridades, la obligación, que el juicio que se siga, se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Lo anterior, porque aun cuando la oralidad tiene una previsión constitucional, ello no cambia su naturaleza procesal, cuya nota distintiva consiste en regular una determinada fase jurisdiccional<sup>546</sup>.

En suma con la reforma penal constitucional de 2008, el objetivo con el artículo 16 de la Constitución exige que en garantía de los derechos del gobernado, nadie pueda ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito, expedido por la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Así el constituyente confronta el artículo 16 con el 20 Constitucional a través del cual se establece que el proceso penal debe ser acusatorio y oral, y por consecuencia regirse bajo los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. En otras palabras decir proceso oral es designar a la audiencia como el campo de acción de los sujetos procesales.

Alberto Binder respecto de la oralidad, -resalta que- no debe entenderse como un principio en el sentido estricto de la palabra, sino como un instrumento facilitador de los principios políticos básicos y más aun de las garantías que estructuran el propio sistema procesal penal<sup>547</sup>. Dentro de esta lógica la oralidad supone además que el ordenamiento jurídico sea el que recoja las garantías y principios conforme a los cuales el justiciable enfrentara su enjuiciamiento, que al mismo tiempo obligan al Estado a su estricta observancia. Por

---

<sup>545</sup> Tesis: XVIII.4o.8 P (10a.), Semanario Judicial de la Federación, disponible en: [www.scjn.gob.mx](http://www.scjn.gob.mx), consultado el 15 de agosto de 2015.

<sup>546</sup> *Ibídem*.

<sup>547</sup> Cfr. Binder, Alberto, *Introducción al Derecho Procesal Penal*, Primera Edición, Editorial Ad-hoc, Buenos Aires, Argentina, 1993, p. 96.

ejemplo conforme a la reforma constitucional de 2008 vigente, el proceso penal se rige por un sistema acusatorio donde prevalece que en cualquier causa penal la práctica de las probanzas se llevarán a cabo en el juicio oral, y solo las que hayan sido desahogadas dentro del mismo tendrán valor a efecto de que el órgano jurisdiccional produzca una resolución.

En este sentido es de destacar un elemento más, el que define Bentham como “*el alma de la justicia*”, la publicidad, funciona como el instrumento de garantía *sine qua non* para prevenir la comisión de crueldades o excesos en perjuicio de los justiciables. La transparencia que produce la publicidad con lleva que las actuaciones dentro del proceso, se van sometidas a la presencia de los sujetos procesales, de terceros, en suma que funcione como freno en el ejercicio del poder, del que es fácil abusar<sup>548</sup>.

Cuando se quiera definir una política legislativa concreta, sobre todo en materia procesal penal, la oralidad no debe representar la base del problema, pues como hemos dicho en líneas anteriores, la definición debe emanar de las garantías y objetivos básicos, que habrán de vertebrar el proceso, para posteriormente determinar si la escritura o la oralidad, constituyen un sistema que sirva como instrumento, para conseguir que el proceso penal garantice derechos fundamentales, al mismo tiempo que obtener sus fines. Hay que decir que la oralidad no comprende todas las fases del proceso. Que un proceso penal se caracterice como oral, no oculta que en las etapas de investigación, instrucción, es decir todas las actuaciones tendientes a la preparación del juicio sean fundamentalmente escritas, teniendo como colofón la celebración de una audiencia de debate oral.

Las ventajas de la oralidad, reposan, más que en sí misma como técnica procesal, en la circunstancia de poder ser el mecanismo para constituir el mejor escenario y así posibilitar la actuación de los principios y reglas fundamentales de la inmediación, concentración, celeridad, publicidad, probidad y buena fe, flexibilidad de las formas e identidad de los jueces. En ese esquema, el valor seguridad dentro del proceso apunta a la garantía de los justiciables y se materializa en el esclarecimiento de los hechos que sirven de punto de apoyo al derecho sustancial, cuya protección aquéllos persiguen; a su vez, el respeto por los hechos y su verdad objetiva reposa no sólo en los mayores poderes reconocidos a los

---

<sup>548</sup> Cfr. Bentham, J., *Tratado de las pruebas judiciales*, traducción de M. Ossorio Florit, EJE, Buenos Aires, 1959, I, p. 140.

jueces —contenido formal—, sino también y decisivamente en la posibilidad de actuar los principios de inmediación y concentración. La inmediación, de su parte, presupone la identidad del Juez que instruye la causa y la decide, en razón de ser él quien ha conocido directamente los hechos. Por consecuencia, en el modelo tradicional, en relación con las cuestiones fácticas, la causa se decide definitivamente en una única instancia ante un tribunal colegiado, desde que en la publicidad absoluta de los actos y en la colegialidad del órgano residen las garantías del sistema<sup>549</sup>.

### **3. El sistema de justicia oral frente al sistema de justicia escrito.**

Hoy en día son sumamente criticables los sistemas que no contemplan el juicio oral dentro de su estructura procedimental, más aun en materia penal, pues es visto como el medio que permite un mejor respeto a los derechos fundamentales dentro del desarrollo del enjuiciamiento mismo, y que al mismo tiempo permite hacer una efectiva impartición de justicia. Así lo contemplan la mayoría de las democracias occidentales, sino además dicho sistema es referido por las convenciones internacionales. Todas se inclinan por la adopción del sistema de oralidad para la justicia penal, porque se le atribuye una mayor salvaguarda y tutela de los derechos humanos.

Así lo confirman la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica; El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos adoptado por la ONU; La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; La Convención de Salvaguarda de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales, del Consejo de Europa; El Proyecto de Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Procedimiento Penal, y qué decir de los numerosos encuentros sobre sistemas procesales latinoamericanos<sup>550</sup>, un ejemplo de las propuestas fue un código tipo, tomando como

---

<sup>549</sup> Cfr. Berizonce, Roberto Omar, Martínez Astorino, Roberto Astorino, *Juicios Orales. La Reforma Judicial en Iberoamérica, Homenaje al Maestro Cipriano Gómez Lara*, Ferrer Mac-gregor, Eduardo, Saíd Ramírez, Alberto, Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 2013, p. 40.

<sup>550</sup> “El derecho procesal penal de los países latinoamericanos, observado como conjunto, ingreso a partir de la década de los ochenta un período de reformas totales, que para el lector europeo, puede compararse con la transformación que sufrió el derecho procesal penal de Europa continental durante el siglo XIX. No se

referencia las ideas de Niceto Alcalá-Zamora y Castillo siguiendo un modelo de procesal, con estructura y principios basados en las reglas del juicio oral, que sirviera como instrumento para la administración de justicia penal<sup>551</sup>.

Todas estas convenciones internacionales, a veces de manera implícita y otras expresamente señalan que el proceso debe ser público, lo que supone que el procedimiento tenga que desarrollarse con plena igualdad, para estar en posibilidad de conocer la acusación, las interrogaciones de los testigos y peritos, lo que solo puede conseguirse a través de la oralidad.

El problema en lo práctico no pasa por escoger un sistema por encima de otro, en la mayoría de los países, entre los que se incluye el nuestro podemos encontrar una combinación de oralidad y escritura, a excepción de los sistemas puros como el inglés. Recordemos que la escritura funciona como medio a través del cual se recogen todas las actuaciones de los sujetos procesales, dejando constancia de las mismas, a efecto de ser consultadas en otras instancias de ser necesario. Creemos que la discusión no debe consistir si se deben o no suprimir los elementos escritos dentro del proceso en su totalidad, sería imposible. El objetivo debe enfocarse en el estudio de la cantidad de elementos provenientes de la oralidad o de la escritura, que son determinantes en lo sustancial la consistencia del proceso, cuyo resultado fundamental es el de lograr un equilibrio efectivo,

---

trata, así de modificaciones parciales a un sistema ya adquirido y vigente, sino, por lo contrario de una modificación del sistema según otra concepción del proceso penal. Descrito sintéticamente, se puede decir que este proceso de reformas consiste en derogar los códigos antiguos todavía tributarios de los últimos ejemplos de la Inquisición, recibida con la conquista y colonización del continente, para sancionar en más o en menos, leyes procesales penales conforme al Estado de Derecho, con la aspiración de recibir en ellas la elaboración cumplida en la materia durante el siglo XX (...) No parece que las reformas logradas, en particular el juicio público y oral como base ineludible de la sentencia penal, puedan retroceder al estado legislativo anterior a ellas. El prestigio jurídico-político que precede a esa legislación, fruto de la cultura universal, y algunos resultados, sobre todo en la transparencia en la administración de justicia penal, a la vista de todos, las sostiene por sí mismas, a pesar de su falta de eficiencia parcial, fundada en una deficiente organización judicial y de los órganos de persecución penal, de la misma manera en que resulta impredecible aunque no imposible a un regreso a prácticas autoritarias en la arena política, pese a las dificultades, sobre todo económico sociales, que soportan los países del área...". Cfr. Iberhard Struense, Maier, Julio B.J., *Las reformas procesales penales en América Latina*, Julio B.J., Maier, Kai Ambos, Jan Woischnik, *coordinadores*, Primera Edición, Konrad Adenauer-Stiftung, Ad-hoc, Instituto Max Planck para Derecho Penal Extranjero Internacional, Buenos Aires, República Argentina, 2000, p. 17 y ss. en el mismo sentido, Véase, Ambos, Kai, *Breves comentarios sobre la reforma judicial en América Latina*, *Anuario de Derecho Penal*, Université de Fribourg, Revista en línea disponible en [www.unifr.ch.ddp/derechopenal/articulos/a\\_20080521\\_16.pdf](http://www.unifr.ch.ddp/derechopenal/articulos/a_20080521_16.pdf). Consultado el 15 de agosto de 2015.

<sup>551</sup> Cfr. González, Álvarez, Daniel, "La Oralidad en el Proceso...I", op.cit., p. 643.



del Estado en ejercicio del *ius puniendi* frente al justiciable. En líneas anteriores, hemos advertido que el sistema de justicia oral, o que se basa en la oralidad, en sí mismo no constituye un principio como tal, sino en un instrumento que facilita que los procesos de enjuiciamiento penal, cumplan los principios básicos y las garantías que deben fundamentar un sistema procesal en su conjunto.

Creemos importante plantear, -mejor-, es la coherencia de la oralidad respecto del sistema de procesamiento penal en su conjunto. Es decir que los códigos adjetivos federal o estatales pueden establecer “el principio de oralidad” como práctica procesal que transforme los elementos escritos en orales, dentro del desarrollo del proceso mismo, sin embargo, han sido los sujetos procesales los que han transformado los elementos orales en juicios escritos. En cuanto que las audiencias en la mayoría de las ocasiones son audiencias que se circunscriben al intercambio de constancias que se transmiten en forma escrita. Un punto de quiebre para la oralidad dice Klauz Volk<sup>552</sup> es la auto lectura, sin duda que con la novedad del cambio la oralidad queda sujeto a cierta moda y cuando esta fue la persecución de escritos o la escritura así se hizo, ahora bien atendiendo al principio de oralidad el riesgo que existe es tergiversar la oralidad transformándolo en un momento de lectura de la gruesa novela por parte de fiscales y jueces. De esta manera queda evidencia el rompimiento del principio de oralidad o simplemente anulado poniendo en riesgo lo que el principio quiere evitar, que las sentencias que se pronuncien se basen en contenido de los documentos sin que se haya suscitado el debate respecto del contenido de las constancias procesales. Así el órgano jurisdiccional funda su sentencia en el contenido de un expediente. En el mismo sentido, Pietro Castro dice que el procedimiento oral llevado a los extremos resulta rígido y formalista condicionando el orden legal de los actos<sup>553</sup>.

Por otro lado aquel proceso que se rija por la oralidad aunque sea caracterizado por la simplicidad, reduciéndose a un solo acto y casos excepcionales a dos, si en la práctica se alarga o se convierten en un ejercicio de documentación excesiva, no estaremos mejorando la aplicación de la norma sino todo lo contrario. Es importante entender que la norma

---

<sup>552</sup> Cfr. Volk, Klaus, “*El Principio de la Oralidad en el Proceso Penal*”, Reforma Judicial. Revista Mexicana de Justicia, Núm 14. Julio-Diciembre, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 2009, p. 120.

<sup>553</sup> Cfr. Prieto Castro, Leonardo, *Derecho Procesal Civil*, Volumen I, Editorial Tecnos, Madrid, España, 1978, p. 111.

jurídica que contemple la oralidad de los juicios deberá ser lo más sencilla posible pretendiendo responder principalmente a los elementos inmediatez, oralidad, inmediación, concentración y publicidad.

Dentro del proceso oral también existe el riesgo de una excesiva formalización, principalmente porque las audiencias se lleven en las oscuras oficinas de los juzgadores sin reunir los requisitos de publicidad. En este sentido la Constitución Mexicana en su artículo 20 dice que el proceso penal será acusatorio y oral, lo que supone el resto de los ordenamientos procesales en la materia deberán regirse por estos dos elementos, sin perjuicio de la documentación escrita. No podemos olvidar que existe también la obligación constitucional por el artículo 16 de la carta fundamental mexicana de que los actos de molestias expedidos por cualquier autoridad del estado se expide por escrito fundando y motivando la causa legal del procedimiento. Puesto que la oralidad no es otra cosa que la expresión de la palabra hablada, pero que de alguna forma debe quedar documentada. En este sentido un procedimiento basado únicamente en la oralidad es imposible, puesto que es necesaria la escritura. En definitiva en la oralidad queda patente el brocardo *audiatur ex altera parte*<sup>554</sup>.

Es preciso mencionar el recuento de desventajas que se le atribuyen al procedimiento escrito, porque este ha representado para muchos el letargo funcional del aparato jurisdiccional, culpable de retrasos, estancando los procesos con trámites burocráticos. Hay que decir que la oralidad no escapará a estos problemas, pues la sustanciación del procedimiento corre el riesgo de caer en superficialidad, una pobre fundamentación a la hora de emitir las resoluciones, una extensión excesiva de las audiencias provocando el cansancio de los asistentes.

En México vivimos una época en donde se cantan las glorias de la oralidad y cualquier opinión que discrepe de esta idea, es tildada de retrograda, es preciso estudiar los inconvenientes de este principio del procedimiento, en la práctica. Se nos ha dicho –sobre todo en últimos tiempos- que los principios consecuencia del procedimiento escrito, era el secreto, la dispersión y la mediación, todos con un alto ingrediente negativo. Sin embargo

---

<sup>554</sup> Cfr. Álvarez Sacristán, Isidoro, “Juicio Verbal Versus Escrito”, *Diario La Ley*, Tomo 4, Grupo Wolters Kluwer, Madrid, 1991, p. 2, disponible en: <http://www.laley.es/content/Revistas.aspx>, 30, Mayo, 2001.

al hablar de la oralidad por arte de magia todos los adjetivos se tornan en positivo. Lo cual no es más una reacción doctrinal contra tantos siglos de procedimiento escrito. Creemos que esta actitud que en algunos casos se torna incluso visceral, deja completamente del lado los procedimientos orales, olvidando que también estos pueden ser secretos, de iure pueden celebrarse a puerta cerrada o de facto cuando a nadie le interese estar presente en las audiencias. Estos juicios también pueden tener ante sí la condicionante de ser dispersos, celebrarse en varias vistas, cuando el tribunal no esté en posibilidad de celebrarlas en días seguidos. Este tipo procedimiento puede no gozar de la inmediación adecuada si los jueces no prestan la debida atención en las audiencias, tampoco la habrá si no están en posibilidad de repasar las grabaciones de las audiencias y hubiere algún detalle que no recuerden, o bien que al no existir grabación que revisar, sólo exista el acta levantada por el secretario del juzgado, lo que provoque que la inmediación sea inútil<sup>555</sup>.

A menudo se acude a los antecedentes de que los procesos romanos les es atribuible la oralidad como característica, sin embargo es preciso mencionar que el punto de inflexión o de evolución respecto de estos juicios se centró en la necesidad de hacer constar todo lo acontecido dentro del juicio, con el objeto de que no pudiera ser negado. Con una amplia influencia del derecho canónico, con el brocardo *quod non est in actis non est in mundo* se llevaría al extremo que acabo por implantarse la escritura en los procesos criminales, abandonando toda forma de oralidad. Lógicamente este estado de cosas tuvo repercusión en los ordenamientos jurídicos, también en la práctica del proceso, y de esta manera renunciando los jueces a presenciar la práctica de las diligencias procesales. La forma de escritura dentro del procedimiento penal se arrastró durante mucho tiempo<sup>556</sup>.

Fue hasta el siglo XIX cuando en Francia se planteó la recuperación de la oralidad, a través de los códigos napoleónicos, aprovechando las reformas que la Ilustración traería a los ordenamientos procesales, *Code de Procédure Civile* de 1806 y el *Code de Instruccion Criminelle* de 1808. Fue así como se fue introduciendo en la mayoría de los estados europeos, como en el caso de España con la reforma al código de enjuiciamiento penal de 1882.

---

<sup>555</sup> Cfr. Nieva Fenoll, Jordi, *Los Problemas de la Oralidad*, Diario La Ley, No. 6701, Año XXVIII, Ref. D-102, Madrid, 26 de abril 2007, p.2 disponible en: <http://www.laley.es/content/Revistas.aspx>, 30, Mayo, 2010.

<sup>556</sup> Ibídem, p. 3.

El caso de México no es distinto al resto de los estados occidentales, en el sentido de tener en común un proceso penal regido por la escritura, -nosotros añadimos consecuencia de un excesivo formalismo, por la imperante necesidad de documentar todos los actos en protección del gobernado, ante la desconfianza hacia el sistema judicial en su conjunto-. Para muestra baste recordar que durante la década de los ochenta y principios de los noventa uno de los objetivos respecto del sistema judicial, fue terminar a los abusos y excesos que las autoridades encargadas de la procuración de justicia. Abusos de autoridad, extorsión, detenciones ilegales sin que mediare ningún tipo de constancia, casos de tortura entre otros muchos obligaron al Estado Mexicano a reaccionar creando instituciones y mecanismos tendientes a defender los derechos fundamentales de los gobernados frente al abuso de la autoridad. Hubo reformas al procedimiento penal, así como de las instituciones jurisdiccionales encargadas de éste<sup>557</sup>.

El objetivo en principio fue vaciar el contenido del procedimiento penal en la fase judicial, es decir la mayor parte de la investigación se desarrollaba en la averiguación previa donde el gobernado tenía nulas oportunidades defenderse, antes de que un Juez entrara en escena. Hay que considerar también que la mayoría de la materia probatoria estaba agotada desde la averiguación previa, en razón de la poca inmediación durante la etapa judicial del procedimiento, lo que significaba que aquellas consignaciones que se resolvían con auto de formal prisión aseguraban una sentencia condenatoria. En conclusión todo el proceso judicial no era más que la ratificación de las diligencias de investigación.

Cierto es que los códigos procesales evolucionaron estableciendo la obligación de que el Juez presenciara las audiencias durante la declaración del imputado y los testigos entre otra clase de diligencias, no tuvo un cumplimiento eficaz. La fuerza del uso forense heredado de

---

<sup>557</sup> “Sin embargo, las presiones para utilizar las fuerzas armadas mexicanas en funciones policiacas también provienen desde los años ochenta. Desde el sexenio de Miguel de la Madrid, se decidió utilizar a las fuerzas armadas como recurso de aseguramiento del orden público. En principio las funciones fueron en tareas como destrucción de plantíos, decomiso de cargamentos de droga, internos y de paso a Estados Unidos de apoyo a las fuerzas policiacas para el control de grupos de narcotraficantes en la república...con la llegada de Felipe Calderón Hinojosa a la Presidencia de la República el despliegue de las fuerzas armadas en labores policiacas para combatir el narcotráfico aumentó, con operaciones en Michoacán, y Chihuahua desde 2007...estamos ante el escenario cada vez más peligroso de que el narco poder haya infiltrado a las propias fuerzas armadas mexicanas”. Cfr. Villamil, Jenaro, *“El Ejército y su urgente retorno a los cuarteles”*, Revista Mensual, Septiembre de 2015, Semanario de Información y análisis, México, D.F., disponible en [www.proceso.com.mx](http://www.proceso.com.mx), consultado el 15 de Septiembre 2015.

épocas anteriores hizo que sistémicamente quedara olvidado en la práctica, celebrando audiencias en el papel. Circunstancia que está lejos de cambiar pues no olvidemos que a pesar de haberse aprobado la reforma constitucional de 2008 donde se establece el cambio de sistema y una serie de principios conforme a los cuales debe regirse el procedimiento penal, y que los estados en el ámbito de sus respectivas competencias han modificado sus sistemas judiciales, siguen rigiendo simultáneamente ambos. La reforma no se ha completado en su totalidad<sup>558</sup>.

Sin duda que la oralidad permitirá la vinculación directa entre el Juez y las partes, además de permitir que la actividad procesal se concentre en una o en muy pocas audiencias. En esta estas etapas se toman varias declaraciones, efectuándose pericias en un mismo acto sin necesidad de detallarlas, ya que inmediatamente se efectúa el pronunciamiento judicial. El Juez recibe una impresión viva y directa de la prueba y debe presidir la audiencia, sin poder delegar sus funciones, bajo pena de su nulidad. Si entendemos que la oralidad, es el intercambio verbal de ideas, constituye una herramienta esencial en la tarea jurisdiccional, como instrumento para facilitar el debido proceso y respeto a los derechos y garantías de los ciudadanos en un Estado de Derecho moderno. La misma permite que la actuación del juzgador se acomode a criterios de inmediación y contradicción realmente efectivos. Asimismo, a través de un juicio público, sólo posible en el ámbito de la oralidad, la sociedad ejerce legítimas facultades de conocimiento y control acerca del verdadero

---

<sup>558</sup> Existen estados del país y a nivel federal no todos los tribunales se rigen bajo los principios del sistema penal acusatorio, que plantea entrar en vigor 2016 en materia federal. En el apartado que corresponde al régimen de transitoriedad del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el Artículo Primero conforme al Decreto que reformó y adicionó disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se declara que la presente legislación recoge el sistema procesal penal acusatorio(...)el Artículo Segundo, habla de la vigencia señalando que el Código Nacional entrará en vigor gradualmente en todas las regiones en la Federación a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. El Congreso de la Unión emitirá declaratoria, previa solicitud conjunta del Poder Judicial de la Federación y la Procuraduría General de la República para la entrada en vigor del presente código, sin que pueda exceder del 18 de junio 2016. En el caso de las entidades federativas la declaratoria estará a cargo de su poder legislativo, previo comunicado de la autoridad competente en cada una de ellas para la implementación del Sistema de Justicia Penal y entrará en vigor. Cfr. Hesbert Benavente, Chorres, Hidalgo Murillo, José Daniel, Hidalgo Murillo, *Código Nacional de Procedimientos Penales*, comentado guía práctica, comentarios, doctrina, jurisprudencia y formularios, práctica procesal penal desde el sistema acusatorio en México, Primera Edición, Editorial Flores, México, D.F., 2014, p.118.

contenido de la actividad de sus jueces y tribunales, órganos encargados de la impartición de justicia<sup>559</sup>.

#### 4. Complicaciones en la Implementación del Juicio.

Existen dos elementos que condicionan un sistema procesal: uno es el derecho sustantivo y le otro las normas constitucionales, y los tratados internacionales que conforman el marco normativo básico. Según Goldschmidt: los principios de la política procesal de una nación no son otra cosa que segmentos de su política estatal. Se puede decir que la estructura del proceso penal de una nación no es sino el termómetro de los elementos corporativos o autoritarios de su Constitución. Para este autor, la ciencia procesal ha desarrollado un conjunto de principios opuestos constitutivos del proceso, de tal manera que el triunfo de uno sobre otro, o bien la fusión de ellos será lo que caracterice la historia del proceso<sup>560</sup>.

Al enfrentarnos al reto de conformar un nuevo proceso penal, es indudable la lección y la perspectiva que nos ofrece la historia de los sistemas procesales que existen respecto de su situación actual. En este sentido corresponde plantearnos ¿Cuáles son las líneas maestras para la configuración de un proceso penal basado en los principios que conforman un Estado democrático constitucional de derecho?, ya que según la respuesta que obtengamos, surgirán un conjunto de principios llamados “no negociables”, y otros tantos de contenido meramente histórico, cultural, social y económico que a su vez determinaran los mecanismos jurídicos que conformen cada sistema procesal<sup>561</sup>. La Corte Mexicana en su doctrina lo ha definido como “núcleo duro”, atribuyéndole ser *“el conjunto de garantías que deben observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional (...) el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda*

---

<sup>559</sup> Suárez Tejera, Y. y González Moreno, G.: *“La oralidad como facilitadora de los principios del proceso penal”*, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, Junio 2012, [www.eumed.net/rev/cccss/20/](http://www.eumed.net/rev/cccss/20/), disponible en línea, consultado el 16 de agosto de 2015.

<sup>560</sup> Cfr. Goldschmidt, James, *“Los principios del proceso penal II”*, Problemas jurídicos y políticos del proceso penal, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1961, p. 109.

<sup>561</sup> Cfr. Armenta Deu, Teresa, *“Nuevo Proceso Penal”*, Memorias del Congreso Internacional de Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados, II Proceso Penal, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2005, p.32.

*modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo*”<sup>562</sup>. Lo que en principio nos permite concluir que serán los principios de la política procesal los que definan el sistema procesal, y no al revés.

Nos hemos referido en apartados anteriores al consenso que existe en la adopción de un sistema procesal acusatorio, el cual es tildado de proteger con eficacia los principios de igualdad, de audiencia, contradicción, los derechos de defensa y sus garantías, la presunción de inocencia; la oralidad, la inmediación y la publicidad. Haciendo un examen de cada uno de ellos veremos el significado de cada y el papel que juegan dentro del sistema procesal en estudio.

En referencia al principio de igualdad dentro de la fase de enjuiciamiento, es posible distinguir distintos grados en la fase de investigación, así como en el juicio mismo. En el caso Español se contemplan diferentes sujetos entre las partes acusadoras, así tenemos por una parte al Ministerio Fiscal, quien conforme al Artículo 124.1 de la Constitución Española: “*promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley*”, sin embargo el mandato constitucional no se traduce necesariamente en el obligado ejercicio de la acción penal ante el conocimiento de la noticia criminosa. Es decir que el Fiscal puede decidir sobreseer antes de la apertura del juicio oral o la absolución de acusado, no es que “pueda” dejar de acusar, sino que “debe” dejar de acusar o abstenerse de acusar, por imperativo legal, cuando entienda que no existe materia criminal. Pues en el caso de que hubiera otra parte acusadora particular o popular, el fiscal debe promover, al igual que la defensa del acusado, su absolución<sup>563</sup>. Dentro del sistema español se cuenta con el acusador particular, que en este caso se actualiza en la persona del ofendido o perjudicado por el delito quien será el sujeto legitimado para el ejercicio de la acción penal con independencia del Ministerio Fiscal, la modificación reciente a la ley dispuso que en los procesos de menores, la víctima de delito o sus familiares pueden constituirse en

---

<sup>562</sup> Tesis: 1a./J. 11/2014 (10a.), op.cit.

<sup>563</sup> Cfr. Gutiérrez Berlinches, Álvaro, “*Las partes Acusadoras en el Proceso Penal Español*”, *Temas de Derecho Procesal Penal de México y España*, VV.AA., coordinadores, Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 2005, p. 311-312.

acusación y ejercerla<sup>564</sup>; por otra parte se tiene al acusador popular<sup>565</sup>, la acusación privada<sup>566</sup> y la acción civil en el proceso penal<sup>567</sup>. Esta organización ofrece una configuración mucho más eficaz, pues en el ámbito del acusador y defensor se deben informar la oportunidad de las actuaciones en las diferentes fases procesales.

Uno de los avances respecto del modelo procesal inquisitivo, se refleja precisamente en el principio de audiencia o contradicción, conforme a los parámetros de que nadie podrá ser condenado sin ser oído y vencido en juicio. Así se satisface, la incorporación al periodo de instrucción los derechos tanto de defensa, como los de pronta imputación, haciendo énfasis en que son la audiencia y contradicción los elementos que determinan esta etapa procesal. La activación del principio de audiencia se hace mucho más eficaz en la fase de enjuiciamiento oral, la cual no podrá iniciarse sin el imputado, a disposición de la autoridad judicial. Por otro lado la contradicción es fundamental en la celebración del juicio mismo,

---

<sup>564</sup> Ley Orgánica 15/2003, del 26 de noviembre, artículo 25, Ley Orgánica reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores.

<sup>565</sup> “Esta de conformidad con el Artículo 125, de la Constitución Española admite expresamente que los ciudadanos puedan ejercer la acusación popular. En consonancia con el precepto constitucional, el artículo 101, Ley de Enjuiciamiento Criminal señala: “la acción penal es pública. Todos los ciudadanos españoles podrán ejercitarla con arreglo a las prescripciones de la ley”. Si se reconoce expresamente el derecho de cualquier ciudadano a acusar, a fortiori debe reconocérsele al ofendido o perjudicado directamente por el delito. El Tribunal Constitucional Español ha establecido que el ejercicio de la acción penal por el ofendido es parte integrante del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y, sin embargo, para el ciudadano no ofendido por el delito su poder de acusar no descansa en ningún derecho fundamental, sino en la previsión expresa del artículo 125, Constitución Española”. Cfr. Gutiérrez Berlinches, Álvaro, “*Las partes Acusadoras...*”, op.cit., p. 318 y ss.

<sup>566</sup> “...hoy en día el ámbito en el que puede desenvolverse la actuación del acusador privado es muy limitado, únicamente en los delitos privados: injurias y calumnias contra particulares Artículo 215.1, del Código Penal Español. Ahora bien, en estos pocos casos la presencia del acusador privado es necesaria para que pueda comenzar y desarrollarse el proceso penal, pues el Ministerio Fiscal no puede acusar. Del mismo modo que si el delito es público o semipúblico es necesaria la presencia del Ministerio Fiscal, y no puede existir acusador privado; si el delito es privado, es necesaria la presencia del acusador privado, y no puede actuar el Ministerio Fiscal. Los procesos penales en los que se persigue un delito privado se asemejan a los procesos civiles, en los que rige plenamente el principio dispositivo, pues la acción penal no es pública, y cabe que el ofendido o perjudicado renuncie a su ejercicio Artículo 106.2, Ley de Enjuiciamiento Criminal...”. Ibídem, p. 321.

<sup>567</sup> “En sentido *amplio*, actor civil es todo aquel que en el proceso penal ejerce la acción civil *ex delicto*. Generalmente no se plantea ningún problema en cuanto a personación o facultades procesales del actor civil, porque con frecuencia la acción civil es ejercitada por el Ministerio Fiscal, por la acusación particular o por ambos; es decir, se ejercita por sujetos a los que se les reconoce legalmente la posibilidad de ser partes acusadoras en el proceso penal. Sin embargo, en sentido *estricto*, actor civil es el sujeto que pretende hacer valer en el proceso penal, única y exclusivamente, la acción civil que correspondía al perjudicado, pero que él mismo garantizaba, principalmente, porque existía un contrato de seguro, contrato al que acudió el ofendido o perjudicado para resarcirse anticipadamente”. Ibídem, p. 322.



porque motiva el debate en la fase del juicio oral. Limita la sentencia que se dicte dentro del proceso penal por el Juez, la cual deberá subordinarse al sujeto y a los hechos que fueron objeto de la acusación, impidiendo que el Juez exceda sus razonamientos más allá, de lo que conste en la acusación. Por último cubre elementos que sin ser relevantes dentro del proceso, exigen que el Juez las someta al conocimiento de la otra parte, para que manifieste lo que a su derecho convenga.

En relación al derecho de defensa y el principio de audiencia, éstos guardan una estrecha relación, porque resguardan una serie de garantías fundamentales<sup>568</sup>. Tal es el caso de:

---

<sup>568</sup> “...el derecho a una defensa adecuada contenido en el artículo 20, apartado A, fracciones I, V, VII y IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (texto anterior a la reforma de 18 de junio de 2008), cuya finalidad es asegurar que el poder punitivo del Estado se despliegue a través de un proceso justo, lo que además garantiza en su integridad los derechos fundamentales de los inculcados como es no declarar, no autoincriminarse, no ser incomunicado, no sufrir tortura, no ser detenido arbitrariamente, así como ser informado de las causas de su detención; asimismo, entraña una prohibición para el Estado de no entorpecer el ejercicio del derecho de defensa del gobernado y un deber de actuar de informarle el nombre de su acusador, los datos que obren en la causa, brindarle la oportunidad de nombrar un defensor, no impedirle que se entreviste previamente y en privado con él, etcétera. En ese sentido, en términos de los artículos 7, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 9, numerales 1 y 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en esencia refieren que nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones estipuladas por las Constituciones Políticas o por las leyes dictadas conforme a ellas, así como las garantías judiciales y protección judicial de que goza toda persona; y atento al principio pro persona, la omisión del Ministerio Público de citar o hacer comparecer al probable responsable para que declare dentro de la averiguación previa, contraviene los derechos de defensa adecuada y debido proceso, los cuales son de especial atención, prerrogativas que como lo señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos, deben ejercerse desde que se señala a una persona como posible autor o partícipe de un hecho punible y sólo culmina cuando finaliza el proceso (...), ya que sostener lo contrario, implicaría someter esos derechos humanos a que el probable indiciado se encuentre en determinada fase procesal, dejando abierta la posibilidad de que se transgredan sus derechos a través de actos de autoridad que desconoce o que no puede controlar u oponerse con eficacia, lo cual es contrario a la Convención Americana sobre Derechos Humanos; por lo que el Estado, en todo momento, está obligado a tratar al individuo como un verdadero sujeto del proceso, en el más amplio sentido, y no simplemente como objeto de él. Sin que obste a lo anterior que la autoridad, en ciertos casos, pueda reservar algunas diligencias de investigación, para garantizar la eficacia de la administración de justicia; empero, este derecho debe armonizarse con el de defensa del investigado, que supone, entre otras cosas, la posibilidad de conocer los hechos que se le imputan, por lo que el probable responsable no puede esperar a que el Ministerio Público lo cite a rendir su declaración y le informe que se encuentra sujeto a una averiguación previa o que se consignó ésta, para que pueda ejercer su derecho a una adecuada defensa; máxime que de ser cierto que se le sigue una indagatoria, al citarlo a comparecer se le estaría dando la oportunidad de desvirtuar la acusación, trayendo como consecuencia el no ejercicio de la acción penal, con lo cual dejaría de estar afectado por un estado de incertidumbre permanente”. Tesis: I.9o.P.88 P (10a.), Tribunal Colegiado de Circuito, Tesis aislada, Semanario Judicial de la Federación, disponible en: [www.scjn.gob.mx](http://www.scjn.gob.mx), consultado el 16 de agosto 2015.

a) *el derecho a ser informado de la acusación* ya que el contenido es distinto en la fase instructora, en la detención, o en el momento en que se hace pone en conocimiento del hecho punible al posible autor<sup>569</sup>;

b) *el derecho a no declarar contra sí mismo y a no declararse culpable*, lo cual supone carga para el tribunal quien debe informar al inculcado de este derecho<sup>570</sup>;

c) *derecho de defensa, de tener asistencia jurídica*, es decir *el derecho a utilizar todos los medios disponibles para la defensa*<sup>571</sup>, que supone la facultad de proponer la práctica de los medios de prueba correspondientes, así como obtener respuesta sobre la admisión e

---

<sup>569</sup> Nos sirve considerar como ejemplo el Artículo 6º del Convenio Europeo de Derechos Humanos, por ser un amplio contenedor de garantías y situaciones jurídicas subjetivas dirigidas a un ámbito definido de aplicación: el contexto procesal en todas sus vertientes, esta norma exige a los Estados contratantes el reconocimiento y la realización de un extenso abanico de derechos que en sí mismo, concretan la efectividad del derecho a la tutela judicial, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. Cfr. Agudo Zamora, Miguel, Milione, Ciro, *El Derecho a ser informado de la Acusación en la Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional Español, Teoría y Realidad Constitucional*, Núm. 23, UNED, Madrid, España, 2009, p. 193.

<sup>570</sup> “El artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos proscribe la tortura, entendida como aquellos actos de violencia física o psicológica contra las personas; los tratos inhumanos y degradantes; el tormento de cualquier especie; la marca, los azotes, los palos, etcétera. Ahora bien, para acreditar la existencia de la tortura, el citado precepto constitucional no exige que el inculcado que la sufre se haya autoincriminado, es decir, la autoincriminación no puede considerarse como una inferencia válida o una conclusión atinente a partir del artículo constitucional referido ni de algún instrumento internacional que resulte obligatorio para el Estado Mexicano. Considerar que la autoincriminación forma parte del núcleo esencial del concepto de tortura, no fortalece el nuevo modelo pro-derechos humanos, sino que lo entorpece, al quedar excluidos aquellos casos en los que las personas son torturadas como parte de una cultura corrupta y una práctica reiterada en el ámbito de la procuración de justicia; además implicaría que otros órganos jurisdiccionales siguieran esa pauta interpretativa, con consecuencias desventajosas y alejadas del nuevo paradigma de los derechos humanos. Ahora bien, la autoincriminación es un posible resultado de la tortura, pero no una condición necesaria de ésta; por ello, el operador jurídico no debe confundir entre el proceso de la tortura y sus resultados, pues si éste se acredita, con independencia del tipo de resultado, debe castigarse y atenderse conforme a los lineamientos establecidos jurisprudencialmente por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”. Tesis: 1a. CCCLXXXIII/2014 (10a.), Semanario Judicial de la Federación, disponible en [www.scjn.gob.mx](http://www.scjn.gob.mx), consultado el 5 de septiembre de 2015.

<sup>571</sup> “...y la propia doctrina de interpretación constitucional generada por esta Primera Sala. Lo anterior, para establecer que el ejercicio eficaz y forma de garantizar el derecho humano de defensa adecuada en materia penal implica que el imputado (lato sensu), a fin de garantizar que cuente con una defensa técnica adecuada, debe ser asistido jurídicamente, en todas las etapas procedimentales en las que intervenga, por un defensor que tenga el carácter de profesional en derecho (abogado particular o defensor público); incluso, de ser posible, desde el momento en que acontezca su detención. La exigencia de una defensa técnica encuentra justificación al requerirse de una persona que tenga la capacidad técnica para asesorar y apreciar lo que jurídicamente es conveniente para el imputado, a fin de otorgar una real y efectiva asistencia legal que le permita estar posibilidad de hacer frente a la imputación formulada en su contra. Lo cual no se satisface si la asistencia es proporcionada por cualquier otra persona que no reúna la citada característica, a pesar de ser de la confianza del referido imputado”. Tesis: 1a./J. 26/2015 (10a.), *Ibíd.*

inadmisión de los mismos, y por último la práctica de los medios de probatorios propuestos.

Al considerar como parámetro el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que en su artículo 6.3 establece que todo acusado tiene como mínimo el derecho a ser informado, en el más breve plazo, en una lengua que comprenda y detalladamente, de la naturaleza y de la causa de la acusación formulada contra él. Como puede verse esta formulación recoge un principio básico para el correcto desarrollo un proceso equitativo, bajo el respeto de derecho de igualdad y contradicción procesal. Con esta obligación impuesta a los Estados miembros de la Unión Europea la obligación de proporcionar a una persona acusada de delito todo el conocimiento necesario, es decir elementos jurídicos y fácticos acerca de la acusación, para permitir el concreto y eficaz derecho de defensa<sup>572</sup>.

Respecto a la presunción de inocencia, la cual se encuentra estrechamente relacionada al tratamiento del imputado dentro del proceso penal, siendo el elemento partiendo del cual se sujetaran las medidas restrictivas respecto de aquel. Como regla del juicio exige que la acusación deba ser acompañada por los medios de prueba que completen la culpabilidad. Es decir que el caudal probatorio ofrecido y desahogado en el procedimiento conduzca al Juez a una convicción de culpabilidad, pues de lo contrario opera el principio de inocencia en favor del inculpado. De igual forma, este principio condiciona a que las pruebas aportadas, sean obtenidas sin vulneración de derechos fundamentales.

En el caso de la oralidad y la publicidad, ambas informan las actuaciones del procedimiento dentro del juicio oral, porque en esencia se realizan en presencia del Juez, y de su aplicación surgen la inmediación como característica formal del proceso.

Respecto del sistema acusatorio puede decirse que encuentra una estructura diferente según el país que estudiemos, así en los sistemas europeos estará conformado de manera totalmente distinta, que en Inglaterra o en los Estados Unidos por ejemplo. De tal suerte que en cada uno de ellos encontraremos diferencias sustanciales, que difícilmente se repetirían al estudiar otros Estados. Por ejemplo en la Europa continental se ha depositado

---

<sup>572</sup> Cfr. Agudo Zamora, Miguel, Milione, Ciro, *"El Derecho a ser informado..."*, op.cit., p.198.

la instrucción en manos del fiscal, que por otra parte en España se ha entendido que el fiscal carece de la independencia necesaria para garantizar el equilibrio esencial entre las facultades de investigación y las de ejercicio de la acción persecutoria<sup>573</sup>.

Finalmente hoy en día la discusión que se centra en la elección de un sistema procesal por encima de otro, debe direccionarse hacia el peligro que supone para las garantías constitucionales del justiciable, la falta de equilibrio entre los aparatos de instrucción y acusación dentro del proceso mismo; así como la protección de los derechos del acusado. De tal manera que el órgano acusador no adopte medidas que supongan una carga excesiva de parcialidad. El riesgo que enfrenta un sistema procesal al no resolver los riesgos de parcialidad, es que los rasgos inquisitorios se trasladen al juicio de acusación, que terminen en la comisión de arbitrariedades, enfrentándose al peligro de invadir la vida privada de los ciudadanos<sup>574</sup>.

Cuando prevalece el principio acusatorio las expectativas y posibilidades crecen, ante la importancia del contenido jurídico público que deben observar los poderes de Estado, respecto de los derechos constitucionales de los ciudadanos determinantes dentro del proceso. Así por ejemplo el proceso penal español<sup>575</sup> dominado por este principio, establece una serie de reglas:

1) Si no hay acusación no hay juicio. Interpuesta la querrela el juicio se continua de oficio, el fiscal no podrá desistir de ella. Una vez cumplimentado este requisito el Ministerio fiscal es responsable de encomendar a la policía judicial las diligencias necesarias para la comprobación del delito y las averiguaciones de la persona o personas que han participado en su comisión. Cuando este solicite el sobreseimiento y nadie se presente a sostener la acusación, el Juez lo acordara de plano. De igual forma respecto del juicio por jurado cuando se retire la acusación en el juicio oral, no podrá recaer una sentencia condenatoria (Art. 912.3 Ley de Enjuiciamiento Criminal y 69 de la Ley de Jurado);

---

<sup>573</sup> Cfr. Armenta Deu, Teresa, "Nuevo proceso...", op.cit., p.40.

<sup>574</sup> Ibídem, p. 41., Véase Castillo Alva, José Luis, *El Derecho a ser informado de la Imputación, Temas Penales de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Anuario de Derecho Penal*, 2008., Université de Fribourg, Revista en línea disponible en: [www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/anuario/an\\_2008\\_07.pdf](http://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/anuario/an_2008_07.pdf). Consultado el 16 de agosto de 2015.

<sup>575</sup> Cfr. Goldschmidt, James, "Problemas Fundamentales de Derecho", Derecho, Derecho Procesal y Proceso I, Edición López Barja de Quiroga, Jacobo, Editorial Marcial Pons, Madrid, 2010, p.774-775.

2) No podrán practicarse en el juicio oral otras diligencias de prueba de las que se han propuesto por las partes, como tampoco podrán examinarse testigos que los en las listas presentadas (Art. 728 Ley de Enjuiciamiento Criminal). De tal suerte que corresponde a las partes la proposición y producción de las pruebas, procediendo a interrogar a cada uno de los testigos y peritos presentados por ellos, el resto de las partes podrán dirigir las preguntas que consideren oportunas a la vista de las contestaciones que se produzcan (Art. 708, 724 Ley de Enjuiciamiento Criminal). Solamente el Presidente o a petición de algún miembro del tribunal tiene facultades de hacer preguntas complementarias. La única excepción al ofrecimiento de prueba por las partes será cuando el Tribunal acuerde diligencias de prueba, distintas a las no propuestas por las partes, por considerarlas necesarias para la comprobación de los hechos, objeto del escrito de calificación;

3) Si el procesado manifiesta su conformidad con la calificación más grave de las propuestas con la pena respectiva, en el caso de que fuera correccional el Tribunal dictará sin más trámite la sentencia que proceda. Como en la institución del *Plea Guilty* inglés, este es el indicio más característico de la prevalencia del principio acusatorio<sup>576</sup>;

4) El Juez que instruye el sumario no es el que después falla, éste debe formar el sumario bajo la inspección del fiscal. Sólo las partes pueden intervenir en las diligencias del sumario. Se atribuye al Juez el poder discrecional de autorizar al procesado para que tome conocimiento de las diligencias que crea oportunas, siempre que no perjudiquen el sumario. La ley impone al Juez el deber de evacuar con urgencia las citas que el procesado hiciere y las demás diligencias que proponga, si el Juez las estima conducente para la comprobación de sus manifestaciones, para su exculpación así como para la comprobación de los hechos.

---

<sup>576</sup> En el recién promulgado Código Nacional de Procedimientos Penales, se encuentra previsto el procedimiento denominado “abreviado”, los requisitos de procedencia se encuentran previstos en el numeral 201, en el cual queda sujeto a la autorización de Juez, una vez que el Ministerio Público haya hecho la solicitud formulando acusación al imputado donde exponga los datos de prueba que lo fundamenten, así como los hechos, su clasificación jurídica, grado de intervención, penas que le corresponden y la reparación del daño. La víctima y ofendido deberán estar de acuerdo. En cuanto al imputado, expresamente debe renunciar al derecho a un juicio oral, y de los alcances del procedimiento abreviado ya que es requisito sine qua non que admita su responsabilidad por el delito que se le imputa y acepte ser sentenciado con base en los medios de convicción que exponga el Ministerio Público en su acusación. Los códigos adjetivos de la materia que implementan el procedimiento oral en los estados de la república también disponen el procedimiento abreviado y sus requisitos de procedencia. Disponible en [www.cddhcu.gob.mx](http://www.cddhcu.gob.mx), consultado 4 de septiembre de 2015.

De esta manera se intenta compensar la superioridad del fiscal sobre el procesado y la prioridad que tiene en la integración del sumario.

Al principio de oralidad se le atribuye ser uno de los principios frecuentemente invocados y más raramente entendidos o aplicados dentro de algunos sistemas de enjuiciamiento penal. A menudo en la doctrina encontramos opiniones que admiten que el adoptar un sistema oral, no implica el abandono de toda forma de escritura, únicamente significa que las actuaciones practicadas se harán de viva voz por los sujetos procesales, de suerte que, lo que en estas se manifieste pasara a formar parte de la resolución respectiva<sup>577</sup>.

Cierto es que la oralidad es un modo de mejorar el acceso a la justicia, sin embargo es necesario establecer los objetivos que se pretenden conseguir con esta. Sin embargo, creemos necesario elegir el enfoque, ya sea que con el sistema acusatorio se quiera privilegiar la oralidad de los juicios, en cuyo caso habrá que centrarse en el desahogo de las pruebas en la audiencia del juicio, sin considerarlas en la investigación. Es decir que un proceso penal será oral cuando se logre que la sentencia se apoye en el material probatorio aportado verbalmente dentro del juicio. Debemos preguntarnos ¿cuál es el elemento que permite llegar a la responsabilidad del autor y al delito mismo?, ¿será la oralidad, o el contradictorio en la inmediación y viceversa?<sup>578</sup>, ahora bien también debe asumirse el riesgo que existe de la oralidad formal, que convierte los juicios en audiencias orales de intercambio de lectura de constancias, además de permitir la celebración discontinua de las vistas, trayendo como consecuencia que el tribunal no conserve memoria de los detalles de la causa en el momento de pronunciar su resolución y deba apoyarse en las constancias escritas dentro del juicio.

En el caso del proceso penal mexicano, cierto es que existe la necesidad de ampliar la oralidad, o mejor dicho hacerla efectiva, que no es lo mismo a decir que sea inexistente.

---

<sup>577</sup> “La correcta comprensión del sistema acusatorio consiste en que los elementos para fundar la sentencia deben ser proporcionados al tribunal exclusivamente en el juicio oral, con la extensión adecuada al objeto probatorio del proceso, según las reglas que el principio de contradicción impone para la práctica de cada medio de prueba y con inmediación entre el juzgador y el medio de prueba para una correcta libre valoración”. Cfr. Ortells Ramos, Manuel, *“Problemas de la Oralidad en el Proceso Penal Español (oralidad, contradicción, inmediación de los medios de prueba personales), Juicios Orales. “La Reforma Judicial...”*, op.cit., p.291.

<sup>578</sup> Cfr. Hidalgo Murillo, José Daniel, *“Sistema Acusatorio...”*, op.cit., p. 63.

Cierto es que la práctica ha nulificado sus efectos. Sin embargo se ha encontrado presente en varias etapas procesales, como las audiencias de desahogo de pruebas, la fase de vista así como en una variedad de diligencias donde prevalece la oralidad –otra cosa es que se haya facultado a rendir la declaración ante el Juez de manera escrita, junto con otras diligencias ante la necesidad de respaldar y de tener constancia del desahogo de determinadas actuaciones- y que en la práctica se limitará a una mera celebración de constancias. Todos los códigos procesales que rigen en los distintos estados de México, exigen publicidad en las audiencias, y por supuesto no es posible pensar en esta sin ir acompañada de oralidad.

Por otra parte, los códigos de procedimientos penales mexicanos todavía hoy autorizan al Ministerio Público con motivo de la etapa de la iniciación del procedimiento a desahogar las pruebas que encuentre según el desarrollo de la investigación, incluyendo la confesión de persona detenida, o bien, sea que éste se presente voluntariamente<sup>579</sup>. También se le

---

<sup>579</sup> El Código Federal de Procedimientos Penales, aún vigente dispone un Capítulo II, Reglas de Práctica de Diligencias y levantamiento de actas de Averiguación Previa, donde el Ministerio Público queda a cargo de las policías y los funcionarios encargados de practicar todas las diligencias dentro de la averiguación previa, así como dictar todas las providencias para proporcionar seguridad y auxilio a las víctimas y testigos; impedir que se pierdan, destruyan o alteren los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito; saber qué personas fueron testigos; evitar que el delito se siga cometiendo y, en general, impedir que se dificulte la averiguación, procediendo a la detención de los que intervinieron en su comisión en los casos de delito flagrante y su registro inmediato (...) El Ministerio Público también ordena la detención de personas cuando se trate de delito flagrante o de caso urgente, conforme a lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución y en los términos de los artículos 193 y 194 respectivamente. El Ministerio Público también está a cargo de la preservación de indicios, huellas o vestigios producidos por el hecho delictuoso (...) En la averiguación previa éste deberá constar un registro que contenga la identificación de las personas que intervengan en la cadena de custodia y de quienes estén autorizadas para reconocer y manejar los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito. Los lineamientos para la preservación de indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito, que por acuerdo general emita la Procuraduría General de la República, detallarán los datos e información necesaria para asegurar la integridad de los mismos (...) La cadena de custodia iniciará donde se descubra, encuentre o levante la evidencia física y finalizará por orden de autoridad competente. El Ministerio Público se cerciorará de que se han seguido los procedimientos para preservar los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito (...) En caso de que la recolección, levantamiento y traslado de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito no se haya hecho como lo señala el artículo anterior, el Ministerio Público lo asentará en la averiguación previa y, en su caso, dará vista a las autoridades que resulten competentes para efectos de las responsabilidades a las que haya lugar(...) Los peritos darán cuenta por escrito al Ministerio Público cuando los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito no hayan sido debidamente resguardados, de conformidad con lo dispuesto en los artículos anteriores y demás aplicables, sin perjuicio de la práctica de los peritajes que se les hubiere instruido. Artículos 123, 123Bis, 123Quater y 123 Quintus.

autoriza a emitir y ejecutar resoluciones de naturaleza jurisdiccional, tal es el caso del beneficio de la libertad provisional bajo caución; el nombramiento del defensor que asista al inculpado; en algunos códigos se prevé que reciba de parte de la defensa los elementos de prueba aportados por ésta; y en general dictar los autos necesarios a solicitud de los interesados, para restituir el goce de algún derecho.

En la mayoría de los procesos el Ministerio Público no ofrece ni desahoga pruebas ante el tribunal en virtud de todas las diligencias probatorias las ha desahogado ante sí mismo, para posteriormente acompañarlas a la averiguación, una vez que decida ejercitar la acción persecutoria. Podemos decir que las facultades que ejerce lo convierten de facto en Juez de instrucción. De tal suerte que en la práctica el Juez al tener conocimiento de la causa, únicamente se limita pronunciar su sentencia, basándose sólo en las pruebas desahogadas unilateralmente ante el Ministerio Público. Es fácil concluir que este estado de cosas rompe con el principio de la igualdad de las partes, ante la falta de imparcialidad de los órganos del Estado, en perjuicio del ciudadano que se enfrenta un proceso penal.

El análisis efectuado nos lleva a advertir que debe buscarse una forma de procesamiento penal mucho más ágil sin duda, pero esta condición no pasa únicamente por tomar como referencia la oralidad. Como hemos estudiado anteriormente la oralidad no supone un sistema procesal como tal, sino que funciona como un principio facilitador que permite salvaguardar una serie de derechos, y que al mismo tiempo debe acompañarse de otros elementos que garanticen su eficacia. Pues no se trata sólo de abandonar viejas prácticas procesales, pretendiendo sustituirlas por nuevas -entre comillas-, sino que el sistema en su conjunto funciona todavía bajo un modelo de administración de justicia, cuyas características continúan con prácticas y organización inquisitiva.

#### ***4.1.1. Reivindicación de la publicidad.***

En la norma constitucional mexicana, están previstos los derechos esenciales individuales, especialmente en proceso penal, desde texto constitucional de 1917, la cual estableció el



catálogo de derechos de naturaleza procesal penal<sup>580</sup>. El artículo 14 constitucional correspondiente al concepto norteamericano del debido proceso legal, que dispuso de manera escueta este derecho fundamental. Las constituciones consideradas clásicas –como la mexicana– consagraron algunas categorías de los derechos fundamentales de naturaleza procesal, en especial las respectivas a la organización y competencia de los tribunales además de los derechos de los justiciables. En alguna medida el artículo 20 constitucional estableció la publicidad como formalidad tanto de la declaración preparatoria, como de la audiencia de juicio, de igual forma otros códigos procesales en materia federal y del fuero común harían la referencia respectiva.

---

<sup>580</sup> “...Los diputados que intervinieron en el debate del Congreso Constituyente de 1917 se refirieron al Artículo 20 Constitucional sólo a la segunda parte de la fracción VI del artículo 20 constitucional, concerniente al establecimiento del jurado obligatorio para los delitos cometidos por medio de prensa. Todas las demás fracciones nueve en total contenían el resto de garantías individuales no dieron lugar a discusión, ni siquiera la primera parte de la fracción VI en donde se establecía como garantía individual para todo acusado en una causa criminal el ser juzgado en audiencia pública por un Juez o jurado de ciudadanos. Así pues, resulta evidente la poca credibilidad que del Poder Judicial en cuanto órgano encargado de la administración de justicia, pues, algunos jueces no sólo cometían abusos y violaciones a las reglas del procedimiento penal, sino que se prestaban como un instrumento del ejecutivo para reprimir la libertad de imprenta a la usanza del Tribunal de la Sagrada Inquisición. Está claro que la aprobación por unanimidad del artículo 20 constitucional sin discusión alguna, con excepción de la segunda parte de la fracción VI y la aprobación de esta última por mayoría simple, demuestra la urgencia y necesidad en aquella época. Por su parte las limitantes a la actividad investigadora, dispuestas en el artículo 16 de la Constitución de 1917 contenían una serie de requisitos que debían de cumplirse para que una persona pudiera ser detenida. A la letra este artículo contemplaba lo siguiente: Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento por escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. No podrá librarse ninguna orden de aprehensión o detención, a no ser por la autoridad judicial, sin que preceda denuncia, acusación, o querrela de un hecho determinado que la ley castigue con pena corporal, y sin que estén apoyadas aquellas por alguna declaración, bajo protesta, de persona digna de fe o por otros datos que hagan probable la responsabilidad del inculpado, hecha excepción de los casos de flagrante delito en que cualquier persona puede aprehender al delincuente y a sus cómplices, poniéndolos sin demora a disposición de la autoridad inmediata. Solamente en casos urgentes, cuando no haya en el lugar ninguna autoridad judicial, tratándose de delitos que se persiguen de oficio, podrá la autoridad administrativa, bajo su más estrecha responsabilidad, decretar la detención de un acusado, poniéndolo inmediatamente a disposición de la autoridad judicial. En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir y que será escrita, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o las personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose, al concluirla, un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado, o en su ausencia, o negativa, por la autoridad que practique la diligencia...”, Cfr. *Congreso Constituyente Diario de Debates*, Compilación, Nueva Edición del diario de debates del Congreso Constituyente de 1916-1917, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo I y II, México, D.F., 2006; Tena Ramírez, Felipe, “*Leyes Fundamentales...*”, op.cit., p.822.

Los Tribunales Internacionales en creados para defender los derechos humanos disponen el derecho de publicidad de los juicios claramente establecido en las constituciones modernas a efecto de lograr la independencia e imparcialidad del órgano impartidor de justicia, en beneficio de los ciudadanos, además de ser un elemento esencial de un sistema democrático<sup>581</sup>. Es así como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la reciente reforma de 2008, en su artículo 20 constitucional establece de manera clara y precisa que los juicios en materia penal estarán regidos entre otros principios por el de publicidad. El precepto constitucional descrito, dispone que todos los actos dentro del juicio serán públicos, indicando que cualquier persona interesada podrá asistir a las salas de juzgado y enterarse de las actuaciones procesales. Aunque por otra parte dice Salvador Valencia que los principios que se enuncian en el encabezado del artículo 20 constitucional actual pueden calificarse de básicos a políticos en virtud de que pueden aplicarse a cualquier sistema procesal penal<sup>582</sup>.

Durante el presente capítulo hemos expuesto por un lado los principios que han formado el sistema de justicia penal mexicano en el pasado reciente, en contraste con los derivados de la reforma constitucional de 2008, con el objeto de analizar los aspectos más importantes que deben buscarse al momento de plantearse una reforma de tal magnitud, en virtud de las consecuencias sociales que la misma implica. Dentro de esta comparación es preciso destacar la necesidad de que los jueces mexicanos asuman el papel protagónico respecto de la solución de conflictos haciendo necesario un compromiso en la solución de los conflictos que aquejan a los ciudadanos del país. Estos conceptos son los que motivan la reforma constitucional en comento, disponiendo en el artículo 20 constitucional dentro de los derechos del imputado el ser juzgado en audiencia pública por un Juez o Tribunal. Con la

---

<sup>581</sup> Así lo ha resuelto ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el Caso Pretto y otros vs. Italia: “La característica de publicidad de un procedimiento que se lleva a cabo ante un tribunal protege al justiciable ante una administración de justicia en secreto, sin el examen público, además de ser un elemento que proyecta confianza en la actividad jurisdiccional cualquiera que sea su nivel. Al hacer que la administración de justicia se lleve a cabo de forma pública se actualizan los derechos contenidos en el Artículo 6.1 del Convenio Europeo sobre Derechos Humanos que habla sobre el derecho al debido proceso, que al protegerse se convierte en uno de los pilares esenciales de una sociedad democrática...”, Caso Pretto y otros vs. Italia, STEDH, disponible en [www.hudoc.echr.coe.int](http://www.hudoc.echr.coe.int), consultado el 6 de septiembre de 2015.

<sup>582</sup> Cfr. Valencia Carmona, Salvador, “Constitución y Nuevo Proceso Penal”, *Revista Mexicana de Justicia, Reforma Judicial*, enero-junio 2009, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, p. 48.

condición de que la publicidad podrá ser restringida en los casos y excepciones que determine la ley, disponiendo los casos de excepción respecto de la publicidad.

Estas excepciones son la seguridad nacional, seguridad pública, protección de víctimas, testigos, menores, cuando estén en riesgo la revelación de datos protegidos por ley, o bien que el Juez o tribunal lo ordenen mediante resolución expresa y debidamente motivada. Es decir, constitucionalmente las audiencias deben ser públicas, lo que supone que las de naturaleza preliminar se regirán bajo este mismo principio las audiencias de medidas cautelares, de vinculación a proceso y las de preparación a juicio. Los códigos acusatorios mexicanos<sup>583</sup> expedidos a la fecha son enfáticos en cuanto a la publicidad de las audiencias distintas al juicio. Este criterio obedece a que pueda presentarse una colisión de principios, el de publicidad con el de inocencia, la protección a la intimidad personal, ya que de igual forma constitucionalmente el Juez o tribunal está autorizado a limitar la publicidad.

Es incuestionable que el principio de publicidad es el elemento central de una sociedad democrática, de lucha contra la corrupción y la ineficacia de los tribunales, impidiendo escenarios opacos alejados de la mirada pública. Dice Ferrajoli la publicidad asegura el control interno y externo de la actividad judicial. Siendo un principio fundador los procedimientos de formulación de hipótesis y de determinación de responsabilidad penal tienen que producirse a la luz del sol, bajo el control de la opinión pública, y sobre todo del imputado y su defensor. En definitiva conforma un requisito elemental del proceso acusatorio<sup>584</sup>. Sigue diciendo este autor, *“la crítica pública no la genérica referida a los males de la justicia, sino la documentada respecto de las resoluciones de los tribunales, expresa el punto de vista de los ciudadanos a través de la crítica basada en la razón (...) Es por esta vía, mejor que las sanciones de carácter jurídico o político, como se ejerce el control popular sobre la justicia, rompiendo la separación de la función jurisdiccional*

---

<sup>583</sup> Véase Carmona Castillo, Gerardo A., *“El nuevo Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca”* y San Martín Cerda, Rodrigo, *“La decisión Judicial. Publicidad y Fundamentación”* en *Cuadernos de Literatura Jurídica*, Número 2, Noviembre 2008, Universidad Autónoma “Benito Juárez de Oaxaca”, Oaxaca, México; Ovalle Favela, José, *El Procedimiento Penal Oral en el Estado de Chihuahua*, Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua, UNAM, México, D.F., 2010; Witker, Jorge y Nataren, Carlos F., *Tendencias actuales del diseño del proceso acusatorio en América Latina y México*, Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 2010.

<sup>584</sup> Cfr. Ferrajoli Luigi, *Derecho y Razón*, *“Teoría del...”*, op.cit., 616.

*emancipando a los jueces de nocivos vínculos políticos, burocráticos y corporativos, deslegitimando a los malos jueces, la mala jurisprudencia, y se elaboran nuevos fundamentos a la deontología judicial*”<sup>585</sup>.

En la ciencia del proceso es destacable la importancia de la publicidad y su papel como instrumento democrático. Desde la época de la ilustración el principio de publicidad ha sido entendido como un elemento consustancial a las formas democráticas de gobierno mostrando así la complejidad que encierra. Dentro de esta lógica aunque intentemos enfocarnos en su carácter técnico-procesal, es imposible desentrañarle su esencia político-ideológica. En la época, *Montesquieu* escribía que la democracia era el ideal del gobierno visible, cuyos actos se desarrollan en público bajo el control de la opinión pública<sup>586</sup>. Por su parte *Bentham* atribuía a la publicidad ser “*el alma de la justicia*”, *Couture* decía que la publicidad del proceso es la esencia del sistema democrático de gobierno, determinando que la presencia del público es un elemento de fiscalización popular sobre la obra de magistrados y defensores, “*el pueblo es el Juez de jueces*”<sup>587</sup>. *Mirabeau* nos dice “*dadme el Juez que os plazca: parcial, venal, incluso mi enemigo; poco importa con tal que no pueda hacer nada cara al público*”. Es así como durante el siglo XIX la publicidad como elemento del proceso, quedo atado al principio de oralidad. A partir de entonces todas las constituciones occidentales recogieron la publicidad y oralidad dentro del mismo precepto estableciendo la publicidad como una garantía esencial del proceso, para asegurar el respeto al derecho del debido proceso<sup>588</sup>.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 se ocupa de este concepto en dos disposiciones, habla del derecho que tiene toda persona de ser oída públicamente para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal (Artículo 10), y sienta el derecho de que toda persona acusada de delito tiene el derecho a un juicio público (Artículo

---

<sup>585</sup> *Ibíd*em, p. 616.

<sup>586</sup> Cfr. *Montesquieu, Espíritu de las Leyes*, Estudio Preliminar de Daniel Montero, Decimonovena Edición, Editorial Porrúa, México, D.F., 2013, p.20 y ss.

<sup>587</sup> Cfr. *Couture, J. Eduardo, Fundamentos del Derecho Civil*, Tercera Edición, Roque Depalma Editorial, Buenos Aires, 1958, p. 146 y ss.

<sup>588</sup> Cfr. *Jimeno Bulnes, Ma. Del Mar, “Principio de Publicidad en el Sumario”, Justicia*, Número III y IV, 1993, Barcelona, España, 1993, p. 646.

11.1). Es decir que cualquier persona ajena al proceso puede conocer de las actuaciones celebradas dentro del mismo, en última ratio de la sociedad en general. En este sentido, el Tribunal Constitucional Español dice, que el principio de publicidad, entraña una génesis programática ocupando una posición institucional en el Estado de Derecho desde la perspectiva de legitimidad constitucional, que la convierten en una de las condiciones de legitimidad constitucional de la Administración de Justicia<sup>589</sup>. Además la publicidad sirve para mantener la confianza de la comunidad en los tribunales, pues constituye una fórmula irrenunciable para suministrar el control de la colectividad sobre el quehacer jurisdiccional<sup>590</sup>. En este mismo sentido Fairén Guillen nos recuerda que la importancia de la publicidad del proceso es muy conocida y apreciada, pues constituye una garantía para el procedimiento legal e imparcial en los tribunales, debido a la influencia disciplinaria causada por la posibilidad que concede al pueblo para vigilar los procesos y seguir su desarrollo<sup>591</sup>. Es incuestionable que el principio de publicidad en el proceso es una conquista del pensamiento liberal en oposición al sistema inquisitivo, instaurándose como base en el control del funcionamiento de la justicia, asegurando la confianza de los ciudadanos con respecto a ésta.

Ahora bien, dentro del catálogo de derechos fundamentales contemplados en los diversos tratados internacionales sobre la materia, encontramos que el derecho a la tutela judicial efectiva tiene particular prioridad. La supremacía de éste derecho, obedece a que es considerado uno de los más importantes por constituir el conjunto de posiciones jurídico-subjetivas fundamentales en la mayoría de los tratados internacionales. En este tenor los estados signatarios de cualquiera de los tratados que contienen este derecho se obligan a garantizar a sus ciudadanos una justicia apta para hacer respetar y sancionar las violaciones de la regla común, ponen de manifiesto la importancia del derecho a la tutela judicial efectiva, característica necesaria e imprescindible de los estados democráticos de derecho. Sobre este derecho el Tribunal Europeo de Derechos humanos se ha pronunciado sobre el importante espacio que el derecho a un proceso justo mantiene en una sociedad

---

<sup>589</sup> STC 96/1987.

<sup>590</sup> Cfr. Del Moral, Antonio, *"Derecho a un Juicio Público"*, *Persona y Derecho, Revista de Fundamentación de las Instituciones Jurídicas y de Derechos Humanos*, 59/2008, Instituto de Derechos Humanos, Universidad de Navarra, España, 2008, p.256.

<sup>591</sup> Cfr. Fairén Guillén, Víctor, *"Teoría General del..."*, op.cit., p. 33 y ss.

democrática. El derecho a un proceso equitativo representa una de las garantías jurídico-democráticas más decisivas<sup>592</sup>.

Dentro de esta lógica toca preguntarnos ¿Qué debemos entender por un proceso justo?, ¿Qué entendemos por derecho a la tutela judicial efectiva? Sobre el particular diremos que el derecho a la tutela judicial efectiva ha sido inspiración de la Declaración Universal de Derechos Humanos, contemplándola en un conjunto de garantías procesales destinadas a reforzar el mecanismo de salvaguarda de los derechos fundamentales. Un aspecto esencial al querer definir el derecho a un proceso justo y en igualdad es que sea celebrado en audiencia pública. La doctrina de Tribunal de Estrasburgo a este respecto es unánime al considerar que el derecho a un proceso público representa un principio fundamental que informa desde la base, el funcionamiento de una sociedad democrática<sup>593</sup>. Con este derecho se cumplen dos finalidades por una parte se protege a los justiciables de una justicia en secreto y sin control de la opinión pública, y por el otro tutelar la confianza de la sociedad en los juzgados y tribunales<sup>594</sup>.

Así el derecho a un proceso público es considerado norma fundamental de la buena administración de justicia, y como tal, lo encontramos consagrado en el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Existen muchas razones por las que los procesos deben celebrarse mediante audiencias públicas, la primera es la importancia de informar a los ciudadanos de la forma en que los juicios son resueltos, segundo la opinión pública es considerado como testigo colectivo en la observancia de los procedimientos, de la imparcialidad de los jueces así como el correcto desarrollo del proceso en su conjunto. Al someter al órgano jurisdiccional al control público continuamente, se le obliga a ser prudentes y escrupulosos en el cumplimiento de sus deberes, en la inteligencia de que aquel Juez que conoce que los ojos del público están puestos en él deberá esforzarse por librarse de todo prejuicio así como de rendirse a cualquier pasión política.

---

<sup>592</sup> Cfr. Milione Ciro, *“El derecho a un proceso público en la Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”*, Revista Uruguaya de Derecho Procesal, 4/2001, Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, Fundación Cultural Universitaria, Montevideo, Uruguay, 2001, p. 557.

<sup>593</sup> Véase, STEDH, Diennet vs. France.

<sup>594</sup> Véase, STEDH Axen vs. Federal Republic of Germany.

La celebración de los proceso a través de audiencias públicas permite que los sujetos que intervienen dentro del mismo, impugnen a los jueces que obren en ausencia de imparcialidad. En el evento de que un litigante tenga motivos para dudar de la imparcialidad de los jueces que integran el tribunal que ha de conocer su caso. Este derecho, al que subyace la garantía de una justicia equitativa, no puede ejercerse de manera efectiva a menos que el procedimiento sea desarrollado en público. De este modo, al reconocer que todo proceso quedara sujeto al principio de audiencia pública como fundamento dentro del proceso, supone la protección de que la justicia sea impartida en secreto. Creemos importante comentar el criterio establecido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al decir que la convención no es explícita en cuanto a la naturaleza escrita u oral del procedimiento, reservando para cada una de estas formas de procedimiento la presentación de cada caso en particular. Sin embargo el criterio del tribunal es enfático en cuanto a la naturaleza pública del procedimiento, como requisito *sine quan non* para garantizar el derecho a un juicio justo<sup>595</sup>.

Por otra parte es necesario distinguir una función objetiva del derecho a la publicidad dentro del proceso la cual supone una cercanía funcional y dogmática con otro derecho fundamental dentro de una sociedad democrática, que es el derecho a la información. Es decir de forma simultánea el derecho a un proceso público desencadena ambos efectos, por un lado el acceso de los ciudadanos a las salas de audiencia así como de los medios de comunicación. Y como ya hemos advertido en líneas anteriores se dan garantías individuales a los justiciables frente a cualquier abuso por el Poder Judicial y al mismo tiempo asegurar un control objetivo sobre los jueces<sup>596</sup>. Sin embargo, si bien es cierto que la libertad y el derecho de informar y a ser informados son elementos fundamentales correspondientes de una sociedad democrática, son completamente heterogéneos respecto del derecho a un proceso público, y a la tutela judicial efectiva.

Queda claro que el principio de publicidad procesal está clasificado dentro de los principios que son de naturaleza constitucional, pues constituye un elemento esencial del proceso, por

---

<sup>595</sup> STEDH. Axen vs. Federal Republic of Germany.

<sup>596</sup> Cfr. Milione Ciro, "El derecho a un...", op.cit, p. 558

tener un carácter superior del puramente técnico, elevándolo a rango de garantía constitucional. En este sentido, según Montero Aroca sólo un proceso oral y concentrado permite la publicidad<sup>597</sup>, es decir que son complementarios uno no existe sin el otro, pues forman parte de un único sistema. Sin embargo si bien la publicidad se muestra en coincidencia con la oralidad, esto no siempre será así<sup>598</sup>. Es decir, que si bien la publicidad es un derecho amplio, no es absoluto admitiendo excepciones, cabe tener presente que una publicidad mal entendida, o peor aún mal practicada ocasiona la neutralización de los efectos fiscalizadores que lleva aparejada el principio de publicidad sobre los tribunales. Es cierto que nadie en la actualidad defiende un sistema procesal en secreto, instaurando reservas a la publicidad de la actividad jurisdiccional. El problema se traslada de la posición antagónica de ambos conceptos procesales, por una eficaz reglamentación del sistema procesal público, persiguiendo el objetivo de eliminar exageraciones malsanas de la publicidad, a menudo vinculadas a los medios masivos de comunicación<sup>599</sup>.

Podemos decir que el derecho a un proceso público es sin duda una derecho de prestación, que garantiza una determinada forma o manera de conducir la actividad jurisdiccional, que se traduce en la celebración de las audiencias con puertas abiertas, con la posibilidad de

---

<sup>597</sup> Cfr. Montero Aroca, Juan, Derecho Jurisdiccional, Tomo I, 18 Edición, Tirant lo Blanch, Valencia, España, 2010, p. 600.

<sup>598</sup> En Bélgica, de hecho, la instrucción es secreta (...) encuentra su finalidad en la protección de dos grandes ventajas: el respeto en primer lugar, a la integridad moral y la intimidad de cualquier persona que se presume inocente y, en segundo lugar, el la eficiencia en la gestión de la formación. De ello se desprende que cuando un tribunal como un tribunal de la investigación, la audiencia está normalmente cerrado y la decisión no se pronuncia en público (...)El Tribunal consideró que el secreto del procedimiento de investigación puede estar justificada por razones relativas a la protección de la intimidad de las partes y los intereses de la justicia, en la segunda frase del artículo 6 § 1. También señala que si el caso de los demandantes había dado como resultado, después de un juicio completo, una remisión a un tribunal de apelación, actuando como tribunal de primera instancia, los acusados y demandantes, como demandantes, habría tenido derecho a la información completa de los procedimientos. Se recuerda a este respecto que, si bien el artículo 6, pueden jugar un papel antes de su remisión a la Juez de primera instancia, las modalidades para su aplicación durante la investigación depende de los detalles del procedimiento y las circunstancias del caso. STEDH AFFAIRE ERNST ET AUTRES c. BELGIQUE.

<sup>599</sup> Cfr. Pereira Campos, Santiago, *"El principio de publicidad en el Código General del Proceso"*, Revista Uruguaya de Derecho Procesal, 1/92, Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, Montevideo, Uruguay, 1992, p. 75; Veasé Armstrong Brandwood, Joanne, *"You say 'fair trial' and I say 'free press': British and American approaches to protecting defendants rights in high profile trials"*, New York University Law Review, Vol.75, No.5, November 2000, USA; Sheppard v. Maxwell, 384 U.S., STEDH Sunday Times v. United Kingdom; Sentencia del Tribunal Constitucional Español, STC. 292/2000.



acceso a las salas de justicia por parte de terceros, además del pronunciamiento de la sentencias. De este modo la expresión de un proceso público puede considerarse sinónima de un juicio oral accesible al público, quedando excluida cualquier otra forma que el requisito de publicidad procesal quede satisfecho<sup>600</sup>. Hemos estudiado que son abundantes las sentencias que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha pronunciado sobre la publicidad procesal, estimando que el respeto a este derecho es de esencial importancia específicamente en los procesos penales, por ser donde se producen el mayor número de violaciones respecto de aquel ciudadano sometido como acusado en un procedimiento penal.

Del análisis desarrollado advertimos que entre los principios fundamentales de la ciencia procesal moderna se encuentran los de publicidad versus secreto y los de oralidad versus escritura, entendiendo que la publicidad es la expresión insustituible de un régimen democrático, subdividiéndose en externo o interna dependiendo si corresponde a los sujetos procesales o bien al público en general. Sin embargo, para que estos principios queden efectivamente asegurados, es de importancia hacer un estudio de los antecedentes histórico-legislativos de cada país. Con este objetivo hemos estudiado el proceso penal mexicano y como se ha entendido en el pasado, y como se entiende en la actualidad por nuestras normas jurídicas, así como de las instituciones de procuración y administración de justicia en virtud de las recientes reformas constitucionales. A nadie escapa la existencia de los problemas que en la materia de inseguridad, sufre en la actualidad nuestro país, donde un sector académico y gubernamental amplio pone su fe en “los juicios orales”, regidos entre otros principios por el de publicidad. En contraste existen otras opiniones académicas –que compartimos– que expresan su preocupación al querer resolver problemas estructurales con una reforma solamente a los juicios<sup>601</sup>. Los principios de oralidad y publicidad no son una varita mágica, son uno más de la génesis que conforma un sistema penal acusatorio, que a su vez es una parte del sistema de justicia penal.

---

<sup>600</sup> Cfr. Milione Ciro, “El derecho a un...”, op.cit., p. 560.

<sup>601</sup> Cfr. Islas Colín, Alfredo, “Las Reformas a la Constitución Política”, Revista del Centro Nacional de Derechos Humanos, Año 3, Número 9, 2008, Comisión Nacional de Derechos Humanos, México, D.F., 2008, p.75; Viscaino Zamora, Álvaro, Secretario General Académico, INACIPE, El Mundo del Abogado, Año 10, Número 99, Julio 2007, México D.F., p.34-37

En este sentido la doctrina en México manifiesta su preocupación por la manera en que el gobierno mexicano plantea la lucha contra el crimen, a menudo adoptando modelos autoritarios y represivos, en los que se sanciona por igual a un delincuente peligroso que a un líder de movimientos sociales. Según este autor las reforma constitucional de 2008 aprobadas crearon un doble sistema penal, uno ordinario y otro especial para quienes son considerados enemigos del estado, estas medidas son puerta peligrosa hacia la guantanamización poniendo en riesgo al país de incurrir en formas antidemocráticas<sup>602</sup>. En este sentido la publicidad mal implementada cobra un papel fundamental de consecuencias nefastas para los ciudadanos. En México es frecuente que los medios de comunicación den a conocer nombres y fotografías o imágenes de personas que son privadas de su libertad, con el objeto de cumplir más que con un procesamiento penal respetuoso de los derechos y garantías constitucionales, con la agenda política del gobierno. Sin que exista ningún elemento que los haga culpables de haber cometido un delito y sin embargo son exhibidos públicamente como violadores, asesinos o ladrones. En esta lógica, los medios de comunicación con la conveniencia de las autoridades policiales o ministeriales, vulneran incuestionablemente de la presunción de inocencia.

Dice Miguel Carbonell que la intimidad de los individuos que son detenidos debe respetarse, lo que no significa que se esté a favor de las detenciones secretas, bajo ningún concepto, sino de preservar el debido equilibrio entre los intereses que el principio de publicidad pone en juego<sup>603</sup> dentro de un proceso penal. La tan deseada publicidad no debe conducirnos a que sin distinguos de ninguna especie, las salas de juicio se conviertan en estudios de televisión, las partes en actores y el juicio en un *reality show*. Pues sin ningún género de duda no se estaría sirviendo a los mejores intereses de la justicia. Héctor Fix Zamudio nos dice que, una mala interpretación del principio de publicidad propicia juicios paralelos, con el riesgo de que los imputados sean juzgados por millones de telespectadores con los proceso escenificadores durante la tramitación de los juicios. Ya se advierten en algunos casos programas en los que periodistas con independencia de la investigación

---

<sup>602</sup> Ibídem, p. 87.

<sup>603</sup> Cfr. Carbonell, Miguel, “Sobre el principio de publicidad de las actuaciones judiciales”, La Judicatura, Revista Jurídica del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, Jueces y Lenguaje, Enero-Junio 2009, Estudios sobre la Filosofía Analítica y Función Judicial, Hermosillo Sonora, México, p.58.

oficial realizan pesquisas, interrogan testigos y sospechosos, dejando de lado la preparación técnica de la policía, el ministerio público o los jueces de instrucción. Estas conductas más que a vivir un proceso penal propia de una sociedad democrática, nos traslada al sistema de acusación privada, al linchamiento colectivo, que en nada beneficia a nuestra ya de por sí polarizada sociedad<sup>604</sup>.

Actualmente advertimos un panorama incierto, plagado de confusiones y desencuentros en el que se ha caído en México a consecuencia de la reforma constitucional en materia penal y el desarrollo secundario del mismo. Ni siquiera las expresas previsiones de la norma fundamental mexicana y el estudio del proceso de reforma, que hablan por sí solos, alcanzan a unificar a los intérpretes de nueva jurisdicción. Es preciso distinguir entre un aventurismo alimentado por ímpetus reformistas que se abastece de turismo jurídico, así como de importaciones apresuradas, dejando de lado el genuino desarrollo de la función jurisdiccional, que debe informarse del conocimiento, la previsión y la experiencia. En contraste, faltaríamos a la verdad si ignoráramos los progresos y la buena voluntad con que algunos actores han emprendido esta encomienda, sin embargo hay que evidenciar que no todo son aciertos, es preciso continuar alertas en el estudio y análisis de las consecuencias que la reforma penal y procesal penal por el grave impacto que ciertas tendencias puedan tener en la sociedad mexicana. Nuevamente hay que recordar que el panorama ya de por sí es complicado, pues en este momento ya sufre el estado una endeble credibilidad por parte de la opinión pública. Pues en esencia se está redefiniendo el papel del sistema penal en el control social, donde el nuevo diseño supone un riesgo incuestionable para los derechos humanos y la democracia<sup>605</sup>.

#### ***4.1.2. Falta de Oralidad en las etapas previas al juicio.***

---

<sup>604</sup> Ibídem, p. 56-57.

<sup>605</sup> Cfr. García Ramírez, Sergio, “La reforma del Proceso Penal”, Revista Mexicana de Justicia, Reforma Judicial, enero-junio 2008, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., p. 45-46.

Las etapas procesales del proceso penal mexicano –tradicional a diferencia del sistema penal acusatorio-, previas al juicio son: a) la averiguación previa; b) la instrucción; c) preparación del juicio y c) la audiencia de vista. Para determinar el beneficio de la oralidad, creemos necesario efectuar un análisis de cada una de estas etapas con el objetivo de conocer su funcionamiento y desarrollo actual. Es de esencial importancia que podamos explicar las diferencias entre los mecanismos que pertenecen a un sistema en concreto y a otro -a la luz de las nuevas reformas procesales-. Con la finalidad de explicar el funcionamiento de algunos instrumentos que creemos simplemente han sido víctima de una mala práctica, estos errores puede repetirse aún con la aplicación de un nuevo sistema y los principios que se le atribuyen.

La averiguación previa es la fase de preparación que hace el Ministerio Público de la acción de perseguir y tiene por objeto la práctica de las diligencias probatorias que acreditan que los hechos que se denuncian son constitutivos de delito, y que existan elementos para atribuir responsabilidad a la persona o personas determinadas. La función que desempeña el Ministerio Público durante esta fase comprende a su vez dos momentos distintos: el primero es el acto mismo de buscar los elementos fehacientes de que un delito fue cometido, de quien pudo a ver participado en su comisión; y el segundo es la decisión de acusar y perseguir ante el Juez.

El Ministerio Público ejercita la acción penal mediante un escrito que turna al Juez. La función del órgano acusador debe ser imparcial puesto que el imputado participa de la investigación aportando pruebas, ejerciendo así su derecho y garantía de defensa. El Ministerio Público y las policías bajo su mando, tienen prohibido la incomunicación de la persona imputada, el legislador solo le concede validez a la confesión de este, cuando se haya efectuada en presencia de su defensor. Es cierto que a pesar de lo previsto por los códigos procesales, el Ministerio Público se rige por mecanismos inquisitivos, obstaculizando el desempeño que deben cumplir los sujetos procesales por mandato constitucional.

Durante esta etapa hay confusión respecto del ofrecimiento y desahogo del caudal probatorio por parte de la parte inculpada, fase por demás temida por él en virtud de la dominio inquisitivo con el que se maneja, sin contradicción, en secreto, de forma escrita y

con una deficiencia en la garantía de que este asistido por un defensor. Produciendo innumerables arbitrariedades a consecuencia de ello. Queda claro que a pesar de que el Artículo 21 constitucional conceda el monopolio de la acción persecutoria al Ministerio Público, indebidamente la ley adjetiva ha delegado la averiguación previa en el Ministerio Público, pues si bien es cierto la Constitución establece la existencia de una investigación preliminar, esto no significa que el procedimiento penal deba seguirse ante este, sino ante el órgano jurisdiccional.

Es de vital importancia seguir esta organización a efecto de que el Ministerio Público figure únicamente como sujeto procesal y no como autoridad, colocándose al mismo nivel que el inculcado y su defensor, dando libertad al Juez cuya potestad será el resolver si existen elementos para iniciar un procedimiento penal o de no ser suficientes concluir la investigación.

Es necesario advertir también que todavía hoy, el desarrollo de las investigaciones preliminares sea llevado a cabo en sedes administrativas, obviamente bajo la influencia y autoridad del órgano acusador. La idea es que éste órgano en la investigación y persecución de los delitos este abocado a buscar los medios de convicción tendientes a sostener la acusación, pero no depende de éste el poder decidir su desahogo ante sí mismo, y mucho menos la decisión del ejercicio de la acción penal. Estos son actos de jurisdicción que corresponden única y exclusivamente al Juez. Es decir que una correcta proyección de la averiguación preliminar debe llevarse a cabo en sede judicial, de suerte que no escape al tribunal la realización de ningún acto procesal. En este sentido el Ministerio Público estará obligado a cuidar los mecanismos utilizados para la investigación, en la obtención de pruebas y los elementos que comprueben los hechos tendientes a perseguir el delito, ajustándose a lo previsto en el ordenamiento constitucional, esto es sin infringir derechos fundamentales.

La segunda fase procesal es la instrucción que se compone del acto de ejercicio de perseguir ante el tribunal competente. Cuando la acusación no esté acompañada de persona detenida, el Juez tiene tres días en materia común, exceptuando los delitos graves para expedir una orden de detención, sujeta también a un plazo perentorio de 24 horas a partir de que fue recibida la acusación. El artículo 16 constitucional prevé los requisitos que deben

satisfacerse para que el Juez este en posibilidad de emitir una orden de privación de libertad. Cuando exista persona detenida el Juez radica de inmediato la causa, revisando si la detención se efectuó cumpliendo los requisitos establecidos en la Constitución.

El propósito de esta fase procesal es que cada uno de los sujetos procesales recabe el caudal probatorio para sostener la acusación y defensa respectivamente. También existe responsabilidad para que el órgano jurisdiccional participe recogiendo los medios probatorios para evidenciar la verdad de los hechos.

En el caso del juicio sumario federal la instrucción tiene un periodo de cierre de quince días, para que a continuación se cite a la audiencia, en donde el Ministerio Público presentara sus conclusiones, las que se ponen a la vista de la defensa, para que las conteste. Según el Código Federal de Procedimientos Penales ordena, que si las conclusiones fueron acusatorias será en la misma audiencia donde el Juez, el Ministerio Público y la defensa tendrán la oportunidad de interrogar al imputado. Sin embargo dentro del orden federal podemos observar que la tramitación de los juicios sumarios, prácticamente las audiencias son de lectura de constancias, para posteriormente pasar a la citación de la audiencia de juicio. Dentro de estas audiencias de juicio el uso es de dar lectura a las constancias que hayan sido apuntadas por el Ministerio Público y la defensa.

Aunque el código adjetivo federal hable de oír los alegatos de las partes, estos también correrán la suerte de convertirse en un documento escrito intercambiado dentro de la audiencia de referencia. En este sentido podemos decir que también los procesos dentro del fuero común que no han sido reformados al método acusatorio-oral siguen esta misma dinámica, que en nuestra opinión es fruto de una mala práctica procesal, más allá de lo que tienen previsto los códigos procesales respectivos. Debemos asumir el riesgo que existe de que estos errores pueden no corregirse con el nuevo modelo procesal.

El caso de la declaración preparatoria este es un requisito procesal, por medio del cual el tribunal pone en conocimiento de la persona imputada, las causas y motivos por los que será sometido a un proceso penal. En el momento en que la persona imputada queda a disposición del Juez, éste le toma la declaración preparatoria, también es la oportunidad en la que órgano jurisdiccional pone en conocimiento de aquel, los motivos por los que se le

acusa, el nombre de la persona o personas que lo denuncian, de sus derechos y sus consecuencias jurídicas. El inculpado puede presentar su declaración por escrito o en forma verbal, ya que es la oportunidad de manifestar su versión de los hechos. Para inmediatamente después resolver su situación jurídica, hoy conocida como auto de vinculación a proceso cuyos requisitos están previstos en el artículo 19 constitucional. Sin embargo la posibilidad que los códigos procesales se abrieran a que la declaración preparatoria pudiera ser rendida por escrito, introdujo una característica contraria al principio de oralidad quedando completamente alterada la naturaleza de este medio procesal donde es imprescindible que prevalezcan la relatoría de los hechos de viva voz.

Es decir que al adoptar la escritura como la forma de rendición de la prueba, se torna incompatible con la inmediación que el Juez debe tener en la práctica de esta diligencia probatoria. Así quedara afectada la base de la diligencia de prueba, cuya naturaleza es que se desarrolle en su presencia y de viva voz, rompiendo los principios de oralidad, contradicción e inmediación, al no garantizarse el contacto directo que el tribunal debe tener respecto de los sujetos y circunstancias que motivan el juicio. No hay olvidar que también esta es la oportunidad en la el inculpado aportara pruebas que demuestren su inocencia y que su mala praxis se traduce en una violación procesal, concretamente provocando la indefensión del imputado tal y como lo dispone el artículo 20 de la Constitución Mexicana.

A pesar de los esfuerzos entorno a asegurar el buen desarrollo de este medio de prueba, dentro del proceso penal mexicano se puede decir que han sido inútiles los mecanismos implementados para la práctica de la declaración preparatoria. En la práctica prevalecen en importancia las declaraciones rendidas en la averiguación previa, las que son recogidas por el Ministerio Público. En este sentido, podemos ver la importancia de la inmediación procesal, más que de la oralidad, porque la importancia que reviste en la validación jurídica de los actos procesales realizados en presencia del Juez, los cuales necesariamente, tendrán más eficacia probatoria por razones obvias, que las efectuadas en sede de autoridades, ajenas a la potestad jurisdiccional<sup>606</sup>.

---

<sup>606</sup> Cfr. Hernández Pliego, Julio Antonio, *"El proceso..."*, op.cit., p. 262

La tercera fase procesal es la constituida por la preparación al juicio, que comprende la acusación del Ministerio Público, las conclusiones que los sujetos procesales hacen ante el Juez y la audiencia de vista. En el documento de conclusiones se hará una exposición sucinta de los hechos, un razonamiento fundando jurídica y doctrinalmente la posición tanto de la acusación como de la defensa. En teoría esta fase significa la preparación del debate en el que se expondrán las pretensiones por parte de la defensa y el ministerio público.

La cuarta fase procesal es la audiencia de vista, una etapa importante marcada por la interacción de los sujetos procesales y el propio Juez. Aquí se concreta la inmediación, de acuerdo con la legislación procesal además de que las partes pueden intervenir ejerciendo su derecho de repetir pruebas desahogadas durante la instrucción, cuando alguna de ellas no fue desahogada conforme a derecho. En la realidad práctica las partes no aprovechan esta oportunidad procesal, a menudo desestimado en perjuicio de la defensa del imputado.

La audiencia de vista está pensada para ser el escenario de debate respecto de las alegaciones de las partes, donde también se pueden ofrecer pruebas por excepción. Con vista en todo el material probatorio los sujetos procesales precisarán frente al Juez su posición dentro del proceso.

En los juicios sumarios federales, la vista comienza con la presentación de las conclusiones del Ministerio Público y las que conteste la defensa. En los del orden común la audiencia comienza con la recepción del caudal probatorio ofrecido por los sujetos procesales, para posteriormente expresar en forma oral sus respectivas conclusiones, los puntos esenciales se recogerán en el acta respectiva que se llevara a cabo en la propia audiencia. En este momento procesal, el Juez podrá emitir su resolución. Teóricamente la importancia de esta audiencia es tutelar la garantía de audiencia de los sujetos procesales, a través del debate oral y la contradicción de las pruebas. Supone la etapa coloraría del proceso, debiendo desarrollarse de forma oral, contradictoria y pública. Es el momento procesal donde el tribunal conocerá los hechos de manera directa.

En los juicios ordinarios al debate le sigue la verificación del caudal probatorio, el tribunal, el Ministerio Público y la defensa tendrán la oportunidad de interrogar al imputado sobre



los hechos que son materia de la causa. Dentro de esta diligencia se da lectura a las constancias procesales que señalen cada uno de los sujetos, los alegatos que tengan a bien formular, para finalmente declarar el proceso visto para sentencia, con la excepción de que los sujetos procesales consideren citar a una nueva audiencia, por una sola vez. Los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Penales claramente establecen que la audiencia de vista debe celebrarse con la presencia del Juez y de las partes, pues de lo contrario se infringen las formalidades esenciales, trayendo consigo la consecuencia de que el procedimiento se repita.

Es de entenderse que la naturaleza de esta diligencia es que el Juez se forme juicio respecto de lo que habrá de resolver, teniendo a la vista un panorama de todas las actuaciones que formaron la causa, por tanto resulta obligada su presencia. En suma, es requisito sine qua non que exista identidad física del funcionario que preside la audiencia y del que pronuncia la sentencia. Sobre este tema existe abundante jurisprudencia. Así la Corte Mexicana se ha pronunciado porque el titular del juzgado penal sea quien dicte la resolución respectiva y que sea el mismo el que conozca de la audiencia de derecho como también se le llama, de lo contrario quedarán violadas las reglas esenciales que regulan el procedimiento, dando lugar a su reposición<sup>607</sup>.

Ahora bien, la practica ha desvirtuado la naturaleza de esta fase procesal, convirtiéndose en un mero trámite burocrático, resulto a través de las firmas de los asistentes en un formato de rutina, compartido por los sujetos procesales. El acto que debía permitir las alegaciones verbales de las partes, que suponen la observancia del principio de oralidad dentro esta fase del procedimiento, no se cumple. El hecho de que en las audiencias se prevalezca la lectura de las constancias presentados por los sujetos procesales, muestra que la balanza se inclinó por un procedimiento penal escrito. Anulando la oportunidad de discusión y debate de los sujetos que participan, que en definitiva hicieron imposible la oralidad de las audiencias.

Cuando acudimos al estudio de la oralidad y la escritura en la doctrina encontramos a menudo la referencia de cada una de estas, atribuyéndoles una serie de principios

---

<sup>607</sup> Tesis XX. J/17, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Febrero 1996, p. 290; Tesis XX.257 P, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo XIV, Septiembre 1994, p. 269.

resultantes de cada una. Así encontramos por ejemplo que los principios de inmediación, concentración y publicidad serían consecuencia de la oralidad, y a contrario sensu, la mediación, el secreto y la dispersión son producto de la escritura. En el caso de la inmediación, está sólo comprende que el órgano jurisdiccional concretamente el Juez tendrá conocimiento directo de las actuaciones procesales. Lo que se quiere conseguir con la inmediación es que el Juez no delegue la práctica de las diligencias del proceso a los funcionarios judiciales, sino que sean celebradas por él mismo. Es cierto que la mejor forma de apreciar la declaración de un testigo o la confesión que en directo, observando las reacciones para poder evaluar la certidumbre de la prueba. Ahora bien hay que decir que pueden existir actos que siguen un formato escrito sujetos de inmediación.

En el caso de la concentración supone es importante respecto de la oralidad, siempre y cuando en la audiencia sea celebrada dentro de un orden y en un único acto. Estos dos elementos serán fundamentales so pena de que el proceso se vea afectado por la dispersión. Por esta razón la ausencia de unidad en la celebración de las audiencias, produce que la oralidad cree más dispersión que un procedimiento seguido de forma escrita. Cuando la fase oral es distribuida en varias audiencias con frecuencia la dispersión se manifiesta si son celebradas con días entre una y otra, resultando imposible para el Juez recordar detalles de lo desahogado en cada una de ellas. En algunos casos llegando al extremo de que se transforman en audiencias de mera lectura de constancias.

Es cierto que el procedimiento escrito arrastra consigo serias dudas respecto de la publicidad, y en consecuencia éste principio se asocia sólo con la oralidad. Creemos que en la actualidad un procedimiento escrito puede ser tan público como el oral. Es innegable el peso de la publicidad, e no sólo como principio procesal, también político y fundamento de múltiples de normas fundamentales. Lo que creemos que salta a la vista es lo ocioso que resulta discutir sobre los principios respecto de la oralidad y la escritura exclusivamente, sería mucho más útil estudiar los principios procedimentales en su conjunto independientemente de su origen, armonizando mejor con la realidad de las cosas.

#### ***4.1.3. Abuso de la Prisión Preventiva.***

Los países de tradición procesal continental donde la principal influencia fueron los modelos españoles, franceses, portugueses e italianos, por regla general se caracterizan por ser reglamentaristas y casuistas, dejándose la facultad de restringir o cancelar el derecho a la libertad en manos del juzgador. En estos sistemas por mucho tiempo la libertad provisional no fue considerada un derecho del procesado, sino una facultad excepcional concedido al tribunal, es decir potestativa de éste. En este tenor la prisión preventiva ha sido operada como una medida de seguridad pre-delictual. Esta tradición hace que la prisión preventiva sea la regla y no la excepción respecto de la libertad provisional. A la vista está la actitud del órgano jurisdiccional que no cede aun y cuando se han producidas reformas legales respecto de la presunción de inocencia, así como del tratamiento que debe dársele al ciudadano que es sujeto a un proceso penal.

Si tomamos en cuenta que la cárcel es una invención reciente, resultado del modelo económico capitalista los sistemas penales al castigar a los más débiles hacen que prevalezcan las desigualdades sociales, generando estigmas en la sociedad. Louk Hulsman<sup>608</sup> define los modelos de sistema penal de las sociedades desarrolladas como un mal social, por contribuir a la creación de mecanismos sin alma donde prevalecen las relaciones de privacidad, agresividad, dependencia y dominación<sup>609</sup>. Es una realidad tangible y perfectamente comprobable que la saturación de las cárceles provoca hacinamiento, autogobierno, violencia e insalubridad. A mayor abundamiento el citado autor como uno de los principales abolicionistas del Derecho Penal manifiesta la imposibilidad de valorar si este, y la prisión son necesarios para la sociedad, pero si confirma que la prisión no es buena para los prisioneros.

Para Elena Larrauri<sup>610</sup> existe un acuerdo mayoritario en cuanto que el aumento de personas que están en prisión no es reflejo de un aumento de la delincuencia sino por multitud de otros factores, tales como las decisiones legislativas, la sensibilidad judicial, así como la

---

<sup>608</sup> Véase Hulsman, Jaqueline, Bernat de Celis, Louk, *Sistema Penal y Seguridad Ciudadana, Hacia una alternativa*, Primera Edición, Editorial Ariel, Barcelona, España, 1984, p. 100 y ss.

<sup>609</sup> Cfr. Barbabosa Oropeza, Ana luisa, *Prisión Preventiva vs. Presunción de Inocencia, Iter Criminis, Revista de Ciencias Penales*, Tercera Época, Número 4, Noviembre-Diciembre, 2007, INACIPE, México D.F., p.147.

<sup>610</sup> Cfr. Larrauri, Elena, *“Cómo resistir el populismo punitivo”, Iter Criminis, Revista de Ciencias Penales*, Número 8, Tercera Época, México, D.F., 2006, p. 84.

capacidad y límites que tiene el propio sistema para procesar todos los actos delictivos. Concluyendo que las tasas de encarcelamiento obedecen a una construcción política, esto es que el número de personas que están en prisión no es consecuencia de las decisiones judiciales, sino de un discurso político que tiene como referencia la aceptación del público, los medios de comunicación etc. Hoy por hoy las cárceles en México, como en buena parte del mundo son bodegas de seres humanos donde la rehabilitación es impensable. Lo que responde a un uso persistente de la pena de prisión para casos en los que se estima de pueden resolver con sanciones alternativas.

So pretexto de reducir la incidencia delictiva el sistema penal mexicano, justifica que con la prisión preventiva se inhabilite al agente criminógeno para continuar delinquir, y que como consecuencia de ello, tiene también efectos disuasorios al percibir el riesgo de captura, justificando que “la efectividad” del sistema penal lo hará dejar de delinquir. Esto sin perder de vista que dicho agente tenga la condición de inocente establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Hace más de una década los índices delictivos vienen en aumento, así lo reflejan estudios estadísticos que se han hecho sobre el particular. Es en este tenor que la evidencia empírica demuestra que la prisión preventiva es el pilar que sostiene la política criminal mexicana aún con los nuevos modelos de justicia penal, utilizándose de forma excesiva<sup>611</sup>. Es innegable que en los centros penitenciarios se han duplicado el número de reclusos, sin que ello se refleje en el descenso de indicadores delictivos. La pregunta es ¿a quienes estamos

---

<sup>611</sup> Entre 1997 y 2010 el promedio delitos federales denunciados pasó de 200 a más de 350, los del fuero común pasaron de 4000 a 4500; sólo cinco por ciento de los delitos penales son sujetos de un proceso penal; del total de la población penitenciaria, cuatro de cada diez no han sido condenados. De 429 centros de privación de libertad, 48 tienen sobrepoblación. “Elementos para la Construcción de una Política de Estado para la Seguridad y la Justicia en Democracia”, Conferencia Internacional sobre seguridad y justicia en democracia, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, Agosto 2011. Véase, Zepeda Leucona, Guillermo, *“Los mitos de la prisión preventiva en México”*, Primera Edición, Open Society Institute, México, D.F., 2004; *Cultura de la Constitución en México: Una encuesta nacional de actitudes, percepciones y valores*, coordinado por Concha, Hugo; Fix Fierro, Héctor; Flores Julia; Valadés, Diego; Universidad Nacional Autónoma de México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Comisión federal de mejora regulatoria, México, 2004; Carranza, Elías, Paulino Mora, Luis, Zaffaroni Raul, Eugenio, *“El Preso sin Condena en América Latina y el Caribe”*, Estudio comparativo estadístico y legal de treinta países y propuesta para reducir el fenómeno, Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la prevención del delito y tratamiento del delincuente, Primera Edición, San José de Costa Rica, 1983.

encarcelando?, los recientes golpes al crimen organizado responsables de los delitos de alto impacto social, como los secuestros, homicidios, tráfico de estupefacientes, de personas y de robo de vehículos no reflejan en absoluto un descenso de las actividades delictivas. De igual forma la reincidencia genérica y ficta, que en modo alguno indica peligro de nuevos delitos, por otra parte también es inadmisibles el mantener en prisión preventiva aún sujeto por una sospecha de reincidencia, esto es por el mero hecho de haber sido condenado con anterioridad. Esto genera un estigma de exclusión y discriminación produciendo efectos criminalizantes dentro de la sociedad.

Es innegable que el actual clima de emergencia derivado del incremento sustancial de los indicadores delictivos pone en la mesa de debate en la sociedad tanto la seguridad ciudadana, como la justicia penal, sin embargo con una visión significativamente radicalizada en función de la desesperación ante la alta criminalidad. Es de esta forma que se genera la percepción de que la liberación de una persona sujeta a un procedimiento penal, sea visto como impunidad o corrupción judicial. La solución a esta problemática de parte del Estado ha sido una modificación constante de las leyes con el objeto de incrementar sanciones, aumentando el catálogo de delitos graves, impidiendo que las personas que estén sujetas a un procedimiento penal puedan permanecer en libertad, durante el proceso, como respuesta mediática a efecto de transmitir seguridad a la sociedad.

La discusión se intensifica cuando la modificación del marco legal ha propiciado que el derecho fundamental a la libertad y a no ser privado de ella sea peligrosamente restringido, de esta manera el legislador ha reducido el margen de actuación de los órganos jurisdiccionales estableciendo como quedó anotado en líneas anteriores, un catálogo de delitos graves, en la que los acusados no pueden seguir su proceso penal en libertad, quedando reclusos en prisión preventiva. El sistema penal en México ha optado por clasificaciones como “delitos graves”, “peligrosidad”, esto es que el sujeto a proceso no sólo es probable responsable, sino que también es “probable peligroso”. En este sentido es el propio legislador quien amplía los supuestos legales de gravedad y de peligrosidad, con la correspondiente apoyo del órgano juzgador, haciendo efectivas las restricciones a la

libertad de los ciudadanos sujetos a proceso penal, so pretexto de librar a la sociedad de la amenaza de quien únicamente en la ley, se presume inocente.

En México la prisión preventiva se ha hecho la medida cautelar más utilizada, sino es que la única. Esto es que la legislación no establece alternativas distintas a esta. La problemática subyace a la construcción de un sistema judicial bajo principios del sistema inquisitivo, aunque no sólo supone un cambio de modelo procesal. Requiere el abandono de la cultura inquisitiva que incide en el modelo de administración de justicia en su totalidad, nos referimos al modo de procesamiento. Cada uno de los principios en que se compone todo modelo de derecho penal, enuncia por tanto, una condición sine qua non, es decir, una garantía jurídica para la afirmación de la responsabilidad penal y para la aplicación de la pena. No se tenga en cuenta como una condición suficiente en presencia de la cual está permitido o es obligatorio castigar, sino una condición necesaria en ausencia de la cual no está permitido castigar<sup>612</sup>.

Es por ello preciso recordar la naturaleza jurídica de la prisión preventiva, que tiene contra puesto el derecho a la libertad personal. Resulta, falso el razonamiento de que la prisión preventiva sea el único medio de control destinado a quien transgrede con su acción, un valor, un bien o un derecho. Y que este, a su vez sea un elemento que defina al sistema inquisitivo, no debemos perder de vista que también los sistemas acusatorios cuenta con la prisión preventiva, tal es el caso de Estados Unidos, Reino Unido por citar los más emblemáticos. La prisión preventiva constituye el derecho a recibir la consideración y el trato de no autor o no participe en hechos de carácter delictivo para Ferrajoli esta es una garantía de carácter procesal, e incluye dentro la misma clasificación a la presunción de inocencia, el autor de referencia las considera como garantías fundamentales que el procedimiento debe asegurar al ciudadano, es decir hasta que no se pruebe lo contrario. Entendiendo que es la culpa la que debe ser demostrada y no la inocencia, y es la prueba de la culpa y no la inocencia, la que se presume debe ser desde el principio el objeto del juicio<sup>613</sup>. La finalidad de la prisión preventiva como medida cautelar asegura el normal

---

<sup>612</sup> Cfr. Ferrajoli Luigi, *Derecho y Razón*, Teoría del Garantismo penal, Editorial Trotta, Madrid, 2000, p.92.

<sup>613</sup> *Ibíd*em, p.549.

desarrollo del proceso, con el objeto de que al concluir éste hay quedado acreditada la responsabilidad penal con la aplicación de la pena correspondiente al termino del mismo.

En términos generales la constituciones no tienen previsto la facultad del Estado para detener preventivamente, a contrario sensu aseguran el derecho de las personas a gozar de su libertad durante el proceso, atendiendo a las disposiciones que establecen la libertad ambulatoria y también el principio de inocencia que impide la aplicación de una pena en ausencia de un sentencia condenatoria, que eche abajo el estado de inocencia del que goza toda persona. En esta lógica la regla es la libertad. Ciertamente es que, bajo ciertas circunstancias, es posible que el derecho a la libertad sea restringido sin que medie sentencia condenatoria y esto se produce a través de la prisión preventiva. Pero al tener la condición de medida cautelar esta detención sólo puede efectuarse para fines procesales. De suerte que, la excepcionalidad se vuelve en el principio básico que regula a esta institución, que entre otras cosas goza de jerarquía constitucional además de internacional de conformidad con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos previéndose que “la prisión preventiva no debe ser la regla general”. De igual forma la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 7 prohíbe la detención o encarcelamiento arbitrario, es decir los que se encuentren debidamente justificados y no sólo los autorizados legalmente, ya que utiliza el término arbitrario para inferir una actuación contraria a la justicia, refiriéndose a aquellas detenciones ilegítimas aun y cuando hayan sido autorizadas por un Juez, haciendo efectivo el respeto al derecho fundamental de la libertad.

En este tenor la Sala Constitucional de Costa Rica señala que: *“Relacionado con el principio de inocencia que garantiza el trato como inocente para toda persona sometida a juicio. La prisión preventiva sólo puede acordarse cuando así lo exijan los intereses –en aras de proteger la libertad del encausado y posibilitar la administración de justicia- del proceso, objetivamente señalados y debidamente fundamentados, pues sólo por una existencia de colisión de intereses puede afectarse el estado de inocencia en el que se garantiza que sólo con base en un pronunciamiento judicial dictado con autoridad de cosa juzgada, pueda afectarse la libertad (...) La prisión preventiva, por afectar un importante bien jurídico del individuo -su libertad- necesariamente debe estar debidamente regulada y*

*su afectación solo debe darse por excepción cuando para los intereses del proceso sea absolutamente necesario, (...) dado que se le utiliza en la etapa procesal en que el indiciado cuenta a su favor con un estado de inocencia*”<sup>614</sup>.

Al tenor de lo anterior creemos necesario precisar en qué casos queda justificada la efectividad de la prisión preventiva, esto es, ¿En qué asuntos deberá restringirse la excarcelación? Si tomamos como referencia la presunción de inocencia, esto es que la persona es inocente hasta en tanto no le sea dictado sentencia condenatoria, la gravedad del delito que se le imputa debe cumplir únicamente efectos indiciarios que admitan duda, esto es una apreciación *-juris tantum-* ante la posibilidad de evadir la acción jurisdiccional. Otro elemento fundamental resulta cuando se dicta la prisión preventiva o ante la negativa de su otorgamiento, los autos correspondientes deban quedar perfectamente fundamentados, de acuerdo a la instancia que corresponda. A riesgo de que se puedan sancionar con nulidad los autos que sean fundados de modo solamente formal y con expresiones copiadas. Aún con los esfuerzos reformistas de años recientes, no podemos soslayar el vicio reiterado de parte de los órganos jurisdiccionales cuando recurren a fórmulas gastadas en el pronunciamiento de sus resoluciones al conceder o negar la libertad, esta práctica vicia la función jurisdiccional, impide el control racional del acto, lesionando seriamente la estructura misma del estado democrático de derecho.

Si bien es cierto que las medidas cautelares constituyen un instrumento para asegurar el efectivo cumplimiento de la futura resolución que recaiga dentro del proceso. También lo es que el legislador debe cuidar que al establecerlas, no se vuelvan un instrumento de control autoritario so pretexto de combatir la criminalidad.

La Corte Mexicana ha dicho: “...las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo; y sumarias, debido a

---

<sup>614</sup> Voto No. 1439-92 Cfr. Sánchez Romero, Cecilia, “La prisión Preventiva en un Estado de Derecho”, *Revista de la Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica*, Número 14, Año 10, No. 15, Diciembre 1998, San José, Costa Rica, p. 7 y 8. Disponible en <http://www.cienciaspenales.org/Revistasweb/Revista14.php> consultado 1 de marzo del 2012.



*que se tramitan en plazos breves; y cuyo objeto es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, sino también del interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado desapareciendo, provisionalmente, una situación que se reputa antijurídica; por lo que debe considerarse que la emisión de tales providencias no constituye un acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes; consecuentemente, para la imposición de las medidas en comento no rige la garantía de previa audiencia”<sup>615</sup>.*

Es cierto que el legislador no puede eliminar de manera absoluta la posibilidad de adoptar medidas cautelares dirigidas a asegurar la efectividad de las sentencia, pero tampoco está autorizado a limitar un derecho inherente al ser humano que es su derecho a la libertad limitando peligrosamente la presunción de inocencia en aras de combatir una criminalidad, cuyos resultados y efectividad tenemos todos a la vista.

El problema resulta cuando la prisión preventiva es la única institución en manos del Juez como método de resolución de conflictos, dentro del ordenamiento jurídico. ¿Qué no sería mejor pensar en instaurar soluciones alternativas, haciéndolas depender de la acción cometida, sus causas y los modos de participación de las personas en la comisión del delito?, si el objetivo que se busca es la solución de un conflicto, es preciso dotar al órgano jurisdiccional de la potestad de resolver conforme a los intereses de los sujetos procesales, y por ende la posibilidad de no aplicar penas privativas de libertad cuando estas no benefician ni al imputado, ni a la víctima. Este no sería un postulado necesariamente

---

<sup>615</sup> Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, marzo de 1998, página 18, Pleno, tesis P./J. 21/98; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, junio de 1998, página 173. Apéndice 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 430, Pleno, tesis 374.

atribuible a un sistema acusatorio o inquisitivo, sino más bien una forma democrática de resolver los problemas sociales<sup>616</sup>.

En México la prisión preventiva como medida cautelar ha estado regulada desde la Constitución de 1917, hasta hoy siguiendo variados criterios, a partir de las reformas de 1993 se crea la clasificación de delitos graves cuya sanción en todos los casos ha sido de prisión preventiva. Durante esta período la regla fue que cualquier procesado quedaría recluso durante todo el tiempo que durara el proceso, exceptuando a aquellos imputados cuyo delito estaba basado en sacar un medio aritmético que no fuese mayor de cinco años, en cuyo caso se les concedía la libertad. Con esta reforma la regla se invirtió ya que la mayoría de los acusados tenían el derecho de seguir el proceso en libertad, al menos que se tratara de delitos que por su gravedad no admitieran este beneficio. Es cierto que el artículo 20 constitucional dispuso que dicha reforma ampliaba la garantía para que todo inculcado pueda gozar de su libertad, llevando aparejado que el procesado a su vez reuniera una serie de requisitos para su otorgamiento. En este sentido la reforma obligó al legislador secundario a crear una ley secundaria que incluyera un catálogo limitativo de conductas delictivas que permitan no obtener la libertad condicional<sup>617</sup>.

En este tenor los lineamientos de la reforma constitucional de este período dictaron que el Código Federal de Procedimientos Penales y el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal establecieran cuales delitos por su gravedad no permitían la obtención de la libertad bajo caución. Hasta ese momento el Código de Procedimientos Penales consideraba un número reducido de delitos graves. Lamentablemente la reforma de 1993 quedo nulificada pues a escasos seis meses de haberse implementado, se sucedieron una serie de nuevas modificaciones que en forma desmesurada aumentaron las conductas delictivas consideradas como graves y que por consecuencia lógica no admitirían la libertad condicional. Así en mayo de 1996 se volvió a ampliar el catálogo de delitos graves, de

---

<sup>616</sup> Cfr. Hidalgo Murillo, José Daniel, *"Sistema Acusatorio..."*, op.cit., p. 108.

<sup>617</sup> Cfr. Cárdenas Rioseco, Raúl F., *La Prisión Preventiva en México, condena por adelantado o medida de seguridad encubierta*, Primera Edición, Editorial Porrúa, México D.F., 2004, p. 35-38.

nueva cuenta en diciembre de 1998, en febrero y mayo de 1999, nuevamente en enero y junio del 2000; y por último en febrero del 2002<sup>618</sup>.

Las bases que conceptúan la prisión preventiva en México las encontramos en la Constitución en su artículo 18, que se refiere a esta sin definirla, estableciéndola de manera excluyente, de la prisión como pena. De esta manera el artículo se limita a decir que “*sólo por delito que merezca pena corporal habrá lugar a prisión preventiva*”. Es preciso recordar el enlace que tienen esta institución con el proceso penal, así como con la ejecución de penas. Porque comprende una serie de derechos que involucran a diversos sujetos, por un lado al inculpado, por otro el ofendido y un tercero que será la sociedad. En México prevalece la prisión preventiva como medida cautelar. De acuerdo con la Constitución en su artículo 19 el Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos y en definitiva de la comunidad. Ciertamente es que con la reforma de 2008 se modificó el concepto de auto de formal prisión, por el de auto de vinculación a proceso, pero sin renunciar al concepto de “delitos graves”, creando formas oficiosas de prisión preventiva, y de igual forma para revocar la libertad del imputado.

Es indiscutible el alto contenido criminógeno de algunas de estas disposiciones. Creemos urgente eliminar las restricciones al derecho a la libertad en aquellos procesos seguidos por delitos de bagatela, teniendo el mero objetivo de la intimidación. La reducción de las categorías de conductas antijurídicas por un grupo de delitos verdaderamente graves, la inclusión dentro de ellas de acciones que hoy escapan a la selección que opera el sistema penal, con la consiguiente disminución de la criminalización de personas que pertenecen a los estratos sociales de menores recursos, esto constituyen procesos paralelos que deben marchar conjuntamente al desarrollo social. Vislumbrando el objetivo de abandonar un sistema de control social penal, basado en condenas anticipadas impuestas inquisitivamente y apoyándose en el control policial, para producir un control penal en que

---

<sup>618</sup> Ibídem, p. 39-42.

los pocos casos de prisión preventiva pierdan todo contenido punitivo, y las penas respondan a principios de legalidad, racionalidad y humanidad<sup>619</sup>.

Es abundante la doctrina que concluye la violación al principio de presunción de inocencia, como al de prisión preventiva por el Estado Mexicano contenida en Tratados Internacionales suscritos por éste. De suerte que en la legislación mexicana sigue prevaleciendo como regla general que los inculpadados deban permanecer en prisión, mientras queda resuelta su responsabilidad penal. Situación que es flagrantemente violatoria de derechos fundamentales así como de un sin número de convenciones internacionales mencionadas en líneas anteriores. Seguimos a Ferrajoli al decir que la función específica de las garantías en el derecho penal, es deslegitimar el ejercicio absoluto de la potestad punitiva, en virtud de que el juicio, la acusación, la prueba y la defensa demandan condiciones procesales. Es claramente un despropósito además de un elemento ausente de legitimación para el Estado, el imponer mal a inocentes puesto que contraría totalmente la vocación de seguridad jurídica que debe perseguir el Estado democrático de derecho y el principio de racionalidad de los actos de gobierno que en última instancia definen al estado republicano<sup>620</sup>.

De esta forma, no son las penas privativas de libertad ni mucho menos los términos de la prisión preventiva, lo que permitirá un combate eficaz de la criminalidad. Todo lo contrario, estas tendencias nos fuerzan de manera violenta hacia formas autoritarias de gobierno, en las que la violación de derechos fundamentales será tarea cotidiana, tal y como la han denunciado numerosas organizaciones de derechos humanos condenado al Estado Mexicano por numerosas violaciones de derechos humanos<sup>621</sup>. Que en definitiva hacen que los esfuerzos realizados a partir de la reforma constitucional de 2008 y las respectivas de

---

<sup>619</sup> Cfr. Carranza, Elías, Paulino Mora, Luis, Zaffaroni Raul, Eugenio, *"El Preso sin Condena..."*, op.cit., p. 138

<sup>620</sup> Cfr. Ferrajoli Luigi, *"Derecho y Razón..."*, op.cit., 35 y ss.

<sup>621</sup> Véase, *"Recibirán Juan N. Silva y 5 ministros más a la misión de Naciones Unidas"*, Periódico La Jornada Martes 22 de marzo de 2011, p. 18; *"Se disparan casos de tortura en México, informan a grupo de trabajo de la ONU"*, Periódico La Jornada, Martes 22 de marzo de 2011, p. 18; Hernández Roberto, Negrete Layda, *Presunto Culpable: ¿Porqué nuestro sistema de justicia condena inocentes de forma rutinaria?*, Revista Este País, tendencias y opiniones, Número 239, Marzo 2011, Revista Mensual, México, D.F.; Maldonado Álvarez, Luis Rubén, *"Presunto Culpable": asunto de Estado*, El Heraldo de Chihuahua, 9 de marzo de 2011;

los estados, pretendiendo modificar el sistema de procesamiento penal, queden únicamente el papel, y sujetas de amplio cuestionamiento.

#### ***4.1.4. La oralidad como proceso público y de audiencias. Críticas al Proceso Escrito.***

El principio de oralidad fue el punto de partida de las más importantes reformas procesales llevadas a cabo en la Europa Continental durante el siglo XIX. La influencia de la ley francesa se manifestó en contraste al proceso alemán, exclusivamente escrito, y represento de un modo tan vivo y eficaz, desde un punto de vista práctico y político, las ventajas y modernidad del proceso oral. El principio de oralidad tuvo su proclamación en 1848. En Alemania se pusieron en evidencia los principios vinculados con la oralidad, y en particular el principio de inmediación, de acuerdo con el cual el Juez que pronuncia la sentencia debe encontrarse en relación directa con la persona, los testigos, peritos, de esta manera asegurando otro de los principios como lo es la concentración<sup>622</sup>. Si bien es cierto que la palabra oralidad se adopta por la necesidad de expresar, de una forma simple y representativa, un complejo de ideas y características; también lo es que en realidad engloba un conjunto de principios. El mito de la oralidad que recorrió durante todo el siglo XX tiene su origen en Chiovenda y es necesario atender con algún detalle a su nacimiento para poder comprender todo el desarrollo posterior que lo ha conducido hasta nuestros días. Este autor en marzo de 1906 pronuncia una conferencia en Nápoles titulada “*Las reformas procesales y las corrientes del pensamiento moderno*”, en alusión a la influencia de las reformas políticas en la leyes procesales, aunado a los tratados internacionales, evidencia la adecuación del Código procesal italiano de 1865 a las condiciones de la sociedad y de la cultura de la época, para concluir que la solución “no será fruto de una reforma legislativa, ni de una reforma radical, sino sólo de una lenta y profunda modificación de nuestra conciencia y de nuestros sentimientos<sup>623</sup>. El objetivo de Chiovenda no fue establecer cuál era el contenido del principio de oralidad, sino establecer cuáles serían los principios fundamentales del proceso, integrados en la oralidad.

---

<sup>622</sup> Cfr. Chiovenda Giuseppe, “*Ensayos de Derecho Procesal...*” op.cit., p. 228.

<sup>623</sup> Cfr. Montero Aroca, Juan, “*La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil Española, los poderes del Juez y la oralidad*”, Revista de Derecho Procesal, Número 1-3, Año 2001, Madrid, p. 577.

Reconoce Chiovenda la dificultad de concebir un proceso oral que no admita los actos escritos, para este autor lo que identifica realmente en la oralidad es que en primer término los escritos preparatorios no son la forma de hacer que las partes formulen sus aportaciones al proceso, sino el anuncio de las declaraciones que van hacer en la audiencia. En la oralidad las declaraciones con eficacia jurídica sólo se hacen en la audiencia, tanto es así que una declaración no se considera hecha sino se hace oralmente. En segundo término los escritos de documentación tienen el objetivo de dar cuenta de lo ocurrido, principalmente de la audiencia; bien pueden ser las alegaciones de las partes, las respuestas de los testigos, peritos, aquellas resoluciones distintas a la sentencia. En este sentido las actas no deben servir para la memoria del órgano jurisdiccional responsable de emitir su resolución, únicamente tiene fines de documentación de la actividad procesal para las instancias posteriores<sup>624</sup>.

Decir proceso oral es designar la audiencia como el campo de acción de las partes y el Juez. Es la audiencia la que está destinada a acoger las deducciones de las partes, las contradicciones, las pruebas, así mientras dura la audiencia son admitidos todos los elementos de cognición. Un proceso oral debe entenderse como un proceso más rápido, concentrado y eficiente, así como de un procedimiento fiel a una metodología concreta y empírico-inductiva en la búsqueda de los hechos y en la valoración de las pruebas. Además de esto, otro significado que se le atribuye a la oralidad consiste en una progresiva socialización del derecho en general y del proceso en particular. Dentro de la oralidad el Juez asume la tarea de guía y de impulso procesal, de manera que exista un control en el cumplimiento de las reglas del *fair play*, así como el ordenado y expedito desarrollo del procedimiento<sup>625</sup>.

En este sentido toca preguntarnos ¿Cuál es el sentido de la oralidad en la actualidad? Durante el siglo XIX los procedimientos judiciales consistían en describir la previsión legal respecto de los actos que debían realizar las partes y el órgano jurisdiccional. El procedimiento era el conjunto de formas que los ciudadanos debían de seguir para obtener justicia, que a su vez los tribunales debía observar para otorgarla. Así que procedimiento en

---

<sup>624</sup> Ibídem, p. 578-579.

<sup>625</sup> Ibídem, p.585.

esta acepción equivalía a forma. ¿De qué estamos hablando entonces, cuando hablamos de oralidad en el procedimiento judicial? La oralidad obedece a la forma de realización de los actos procesales. Dice Montero Aroca que el problema del procedimiento, es en definitiva la forma, resumiéndose en dos principios: oralidad y escritura. De suerte que al hablar de oralidad es menester incluir aquellos otros principios que derivan de éste, tal es el caso de la inmediación, la concentración y publicidad. Para este autor existe de origen una imposibilidad manifiesta al querer instaurar un procedimiento totalmente ora o escrito. El problema no resulta de los principios que atañen a la oralidad o bien a la escritura es más bien cuestión de límites y de equilibrios. Es decir que en un procedimiento escrito la palabra ha de ser la forma de realización de los actos procesales, igualmente que de un procedimiento oral, la escritura no puede estar totalmente ausente, todo se reduce a determinar cuándo, por prevalecer a una forma u otra, podemos decir correctamente que estamos ante un procedimiento oral o escrito<sup>626</sup>.

En América Latina ligados a los procesos de transición democrática y a la pacificación de Centroamérica, en los últimos años el proceso de reformas al sistema de justicia penal, ha implicado esfuerzos de distinta naturaleza, dependiendo de la historia jurídico-política de cada país en concreto. Por ello es necesario destacar el intercambio intelectual y cultural que de forma progresiva ha permitido el intercambio de experiencias para una mejor comprensión del proceso penal y la correspondencia que debe tener con la definición de una política criminal por parte del Estado. Compartimos la opinión de Alberto Binder al decir que la discusión político criminal en América Latina responde a patrones comunes. Porque no sólo comprende reformas a los códigos penales, la política penitenciaria –a la que ya nos hemos referido en líneas anteriores- así como la organización policial, el problema descansa en una visión integral de la seguridad. Esta discusión está sujeta por un lado al legítimo derecho a tener seguridad que reclaman los ciudadanos y por el otro al temor de aumentar peligrosamente los poderes del Estado, con la lógica consecuencia de un debilitamiento de los derechos fundamentales. En palabras del citado autor a esta discusión

---

<sup>626</sup> Ibídem, p.590

subyace en definitiva el problema de Sistemas democráticos y Estados Policiales como configuración de un nuevo autoritarismo en nuestro hemisferio<sup>627</sup>.

De ahí que las reformas procesales en América latina se dice representan un cambio de paradigma en lo que al sistema de justicia penal se refiere, motivando un cambio del modelo procesal inquisitivo que ha primado en los sistemas procesales del hemisferio con una metodológica basada en la escritura. Para concentrarse en cambiar a una metodología oral del sistema, abandonando las prácticas escritas. La finalidad de estos procesos reformistas es establecer una estructura procesal que garantice un juicio oral pleno, acompañado de otros principios de igual importancia como la inmediación, la publicidad y la contradicción. Pretendiendo el desmantelamiento del proceso escrito, en aquellos sistemas que se definen mixtos, y que en algún sentido han sido calificados como de falsas oralidades. Las bondades que se le atribuyen a las funciones del juicio oral surgen de su forma adversarial y pública por estar ligadas íntimamente a la estructura misma del conflicto, que sirve de guía a toda la organización procesal. De suerte que, al juicio oral se le arroga la característica fundamental de fortalecer todo el sistema de garantías procesales<sup>628</sup>.

Creemos oportuno centrar nuestro análisis en aquellos elementos que nos sirven para estudiar ambos modelos procesales, los fundamentos que nos permiten desentrañar los ángeles y de demonios de cada uno. El diseño metodológico dentro del proceso, su utilidad reconociendo el diseño formal que aún subsiste en el modelo procesal mexicano, teniendo la escritura como regla dominante, sin que exista evidencia de ningún contrapeso.

En esencia debemos detenernos para hacer alusión a las leyes de enjuiciamiento españolas de mediados del siglo XIX, pues en gran medida es el modelo que se adoptó para luego consolidarse en toda América latina. Son varias las marcas que podemos identificar de este modelo, pero de manera inconfundible es la metodología de rigurosa escritura que marca el procedimiento, mezclando una infraestructura lamentable y el modelo procesal propiamente

---

<sup>627</sup> Cfr. Binder, Alberto, *“Diez tesis sobre la reforma de la justicia en América Latina”*, Revista Contribuciones, Publicación Trimestral de la Konrad –Adenauer Stiftung A.C., Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el desarrollo Latinoamericano, 3/1996, Año XIII, Número 3 (51), Julio-Septiembre 1996, p. 3-9.

<sup>628</sup> Ibídem, p. 14 y ss.



dicho, que a la postre hacen evidentes los problemas en los sistemas de justicia penal en toda Latinoamérica durante el siglo XX.

Cierto es que el diseño procesal mexicano fue concebido desde y para la forma escrita. En este sentido la evolución histórica-institucional está influida por la modalidad escrita, en donde las escasas actuaciones orales que se fueron instruyendo quedaron totalmente desvirtuadas por una mala praxis procedimental invadida de delegación. En este tenor, el órgano jurisdiccional responsable de emitir su resolución debería basarse en aquellos actos realizados únicamente por escrito en la documentación de los actos que se hayan llevado a cabo oralmente. Es incuestionable la operación del sistema basado en la superioridad absoluta de la escritura *verba volant y scripta manet*. Ciertamente es que las marcas de la metodología escrita se han extendido, fundamentalmente en la actitud y formación de la judicatura y de los abogados sumidos todos en una “cultura de la escritura”<sup>629</sup>.

En este sentido el diseño formal del proceso en México ha sido desarrollado con una metodología de escritos recogidos en forma de documentación en papel, tornando el procedimiento en burocrático, sin intermediación es decir sin contacto del Juez con las partes, los testigos, peritos así como del caudal probatorio. Se reserva la intervención del Juez para la emisión de la sentencia, se critica que el modelo escrito no genera estímulos para que éste participe de las audiencias de manera directa. En esta dinámica el juzgador está convertido, en un ente ausente, mero lector de los expedientes que se acumulan en su despacho. Para el caso del material probatorio y las audiencias de desahogo de pruebas, el justiciable asiste a ellos sin ver el rostro del Juez que va resolver el conflicto. Este modelo ha desatado una amplia crítica en este sentido, pues la relación del Juez y de los demás sujetos procesales es desarrollada generalmente por empleados del tribunal, los cuales se limitan a dar cuenta de la información recibida y a que quede asentada en actas, que son las que tendrá a la vista el juzgador al momento de pronunciar su resolución.

En virtud de este diseño escrito se critica que los jueces puedan dictar sentencia con recuerdo cercano de la prueba, eso sí es que el Juez tuvo oportunidad de estar presente en la audiencia de desahogo de pruebas. Es por ello que se ha afirmado que en México se ha

---

<sup>629</sup> Cfr. Palomo Velez, Diego I., “Las marcas del proceso oral y escrito diseñado en el Proyecto de Nuevo CPC Chileno”, Revista Chilena de Derecho, Vol. 36, Número 3, septiembre-diciembre, 2009, p. 627-628.

contado con un proceso cuyo modelo ha sido dominado por una estructura formal, integrado como un factor importante de retrasos, que como consecuencia de ello, tampoco cuida la calidad de la resolución. Sin embargo en México la justicia oral en los procesos penales no es algo novedoso. Se instauraron a finales del siglo XIX y principios XX fijando las mismas bases que el sistema norteamericano, para delitos comunes se resolverían por juicio ante jurado. Fue en 1857 cuando al discutirse la fracción cuarta del artículo 24 Constitucional se establecía como garantía del inculpado el que se le procesara “breve y públicamente mediante un jurado imparcial, compuesto de vecinos honrados del Estado y Distrito donde se haya cometido el crimen. Este distrito será determinado por ley”. Estos esfuerzos no prosperaron al aducirse por Ignacio L. Vallarta que las instituciones no podían importarse a un país (...) y que era necesario considerar las costumbres y cultura de los pueblos<sup>630</sup>.

Un segundo intento para instaurar la oralidad en la forma de jurado popular, siguiendo el modelo norteamericano, fue durante el gobierno de Benito Juárez quien el 1869 promulgó la Ley de Jurados en Materia Criminal para el Distrito Federal. A nivel local los esfuerzos prosperaron y el sistema opero con sus principios de oralidad, inmediación, concentración y publicidad hasta 1929. ¿Qué sucedió con esta experiencia? En la práctica la experiencia resulto un fracaso, debido al incremento en el número de asuntos, un número importante de audiencias para el Juez, para los fiscales, así como para los defensores, se complicaban los tiempos para la formación de un jurado, los concursos de oratoria en que se convertían algunos juicios. Y lo demás gravedad resulto en aquellos asuntos que por su gravedad e interés público se convertían en un espectáculo circense<sup>631</sup>.

Lo que es evidente es que la oralidad no es extraña en el procedimiento penal mexicano, de conformidad con los códigos en la materia de la era moderna, han existido una serie de actos que se desarrollan bajo la metodología oral, para luego recogerse mediante constancia escrita. De acuerdo con nuestros códigos procesales, las audiencias se desahogan en forma

---

<sup>630</sup> Cfr. Ruiz Torres, Enrique Humberto, “Cinco Tesis acerca de la Implantación de la Justicia Oral en México”, *Revista Académica, Facultad de Derecho de la Universidad La Salle*, Año VI, Número 10, Enero 2008, México, D.F., p. 21; Véase Ruiz Torres, Enrique Humberto, “Curso General de Amparo”, México, Oxford University Press, 2007; Ovalle Favela, José, “Antecedentes del Jurado Popular en México”, en *Estudios de derecho procesal*, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 1981.

<sup>631</sup> *Ibíd.*, p. 22.

verbal, aunque de ellas se deje constancia escrita, la declaración preparatoria sirve para informar al imputado de los hechos que se la atribuyen, y que éste a su vez conteste, ofrezca pruebas. También existe oralidad en cuanto al desahogo de pruebas por las partes, testigos, careos y confrontaciones todas siguen una metodología oral, quedando el resultado asentado en actas. De igual forma la fase procesal llamada vista sirve para que las partes fijen sus posiciones ante el Juez. Es por ello, que se aduce que en dentro del proceso penal mexicano se observan grados de oralidad, aunque no como se han caracterizado algunos sistemas acusatorios como el chileno, argentino o colombiano.

Si es la palabra hablada lo que define el principio de oralidad, aportando los elementos de prueba, alegatos entre otros de forma directa y verbal, no deben excluirse los escritos ya que éstos cumplen la función de dar soporte material a las evidencias, esto es el anuncio de lo ofrecido dentro del juicio, al mismo tiempo que quede documentado dentro del proceso. Suele a ver confusión entre sistema acusatorio y oralidad, es decir, puede hablarse de sistemas acusatorios orales basados en procedimientos de argumentación y recepción probatoria verbal directamente ante el órgano jurisdiccional, y a contrario sensu, también es posible concebir un proceso penal acusatorio perfectamente diseñado y funcional cuyo procedimiento de argumentación y recepción probatoria sea escrito<sup>632</sup>.

No obstante estimamos que, no debe ser la aceptación o el rechazo por la oralidad lo que defina nuestro debate en la elección de un sistema sobre otro, mejor es que el enfoque de la política legislativa en materia procesal penal, tenga como meta asegurar las garantías y objetivos básicos del proceso, para luego delimitar cuál de los sistemas si el escrito o el oral supone el instrumento más adecuado para asegurar los derechos fundamentales. Creemos que este debe ser el enfoque nuclear, en el presente capítulo hemos estudiado como una parte de la doctrina justifica al sistema oral como el más eficaz para llevar a cabo las garantías básicas del procedimiento penal. Así también hemos aclarado como la oralidad no se encuentra presente en todas las fases del procedimiento, refiriendo que el proceso oral consta además de una segunda fase compuesta por la inmediación, el contradictorio, la continuación, y la publicidad. Es por ello también que debemos introducir un argumento de

---

<sup>632</sup> Cfr. Nader Kuri, Jorge, *"El Sistema Penal Acusatorio y los juicios orales"*, Criminalia, Academia Mexicana de Ciencias Penales, Año LXXIII, No.3, Septiembre-Diciembre, Editorial Porrúa, México, D.F., 2010, p. 99.

crítica respecto de la oralidad porque también puede suceder que un procedimiento desarrollado bajo la metodología oral, se prolongue en el tiempo en donde la investigación policial, la instrucción judicial y demás actuaciones del juicio duren meses o años, para concluir con un debate de sólo unas horas de duración<sup>633</sup>.

Es necesario apuntar que en la práctica del sistema oral, se produce cierta patología conocida como pseudo-oralidad, lo cual provoca una modificación en la naturaleza del sistema, permitiendo que las audiencias se celebren de manera discontinua, de forma que el desahogo de pruebas se realicen de forma espaciada en el tiempo y espacio. De suerte que esta irregularidad de las audiencias provoque que los tribunales no tengan en cuenta los hechos del caso a la hora de pronunciar su sentencia, y que en consecuencia la misma se decrete basada en elementos escritos. Lo cierto es que un proceso que se precie de ser genuinamente oral, lo será cuando al promulgarse la sentencia, su fundamentación este basada únicamente por el material probatorio introducido verbalmente en el juicio. Es este sistema oral al que se le atribuye verdadera eficacia para cumplir los fines y principios de las garantías procesales<sup>634</sup>.

Por otra parte son especialmente inútiles y tediosas las apologías genéricas respecto de la oralidad frente a la escritura-dice Andrés de la Oliva- con tintes maniqueos y con presupuestos axiomáticos absolutos. Según este maniqueo, la oralidad es el bien y la escritura el mal. La asociación de la oralidad con el progreso y la modernidad se encuentra bien instalada en nuestros días. Compartimos la idea de este autor al decir que no se pueden ignorar los riesgos de algunos planteamientos tan alejados de la realidad que pretenden regular, es irreal en entender la escritura como conservadora y a la oralidad como progresista o moderna<sup>635</sup>.

Coincidimos con Nader Kuri<sup>636</sup> al decir que lo importante en todo caso es que se observen los elementos característicos del sistema procesal penal garantista, independientemente de

---

<sup>633</sup> Cfr. González Álvarez, Daniel, *"La oralidad como facilitadora de los fines y principios y garantías del proceso penal"*, Revista de la Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica, Número 11, Año 8, Julio 1996, San José de Costa Rica, 1996, p. 60.

<sup>634</sup> *Ibídem*, p.61.

<sup>635</sup> Cfr. De la Oliva Santos, A., Palomo Vélez, Diego I., VV.AA. coordinadores, *Proceso Civil*, Primera Edición, Editorial Jurídica de Chile, Colección Estudios Jurídicos, Santiago de Chile, 2007, p. 632.

<sup>636</sup> Cfr. Nader Kuri, Jorge, *"El Sistema Penal..."*, op.cit., p. 99-100.

la predominación verbal o escrita, y que los sistemas de justicia penal sean eficientes, eficaces y útiles en acabar con altos márgenes de impunidad y desigualdad. Sostiene este autor que lo adecuado o inadecuado del sistema procesal penal, lo garantista o no, no depende de la adopción del sistema oral o escrito. En consecuencia la legitimidad del sistema de justicia no depende de las formas publicitarias sino que de él resulten sancionados los responsables así como absueltos los no responsables a través de métodos orales, escritos o mixtos, que permitan conocer con amplio margen de certeza. Es decir, que aquel ciudadano que sea sometido a un procedimiento penal, pueda intervenir en igualdad de condiciones, cumpliéndose los principios y modelos de justicia garantista.

De hecho, un adecuado término medio entre oralidad y escritura nos asegura experiencias de mejores resultados. Así, en aquellos países con sistemas basados en procesos predominantemente orales como el caso de Alemania y España, pero que no descartan la oralidad ni la demonizan, tienen un mejor historial en lo que a procesos acelerados se refiere y, en general sus usuarios muestran mayores grados de satisfacción. El modelo español, brinda un buen ejemplo en el mejoramiento en el diseño del procedimiento, de sus audiencias, la implantación efectiva de las modernas tecnologías de registro y reproducción de imagen y sonido, han forzado la inmediación judicial, fortaleciendo así el juicio de hecho, el fondo y la calidad de la decisión<sup>637</sup>. El artículo 120.2 de la Constitución Española incorpora la oralidad al marco constitucional, especialmente al proceso penal, sin embargo dicho precepto constitucional no se opone al establecimiento de fases o que determinados actos sean desahogados con una metodología escrita, tal es el caso de los escritos de calificación, los artículos de previo especial pronunciamiento, el régimen de prueba documental. En términos generales el proceso penal español se encuentra informado por el principio de oralidad en sus aspectos más esenciales: la práctica de prueba, los informes de acusación y defensa, la última palabra del acusado y especialmente que el órgano jurisdiccional dicte sentencia con arreglo a las pruebas practicadas en el juicio. Compartimos la opinión de Teresa Armenta Deu al decir que la vigencia del principio de

---

<sup>637</sup> Cfr. Palomo Vélez, Diego I., *“Las marcas del proceso oral...”*, op.cit., p. 633.

oralidad, como de escritura, es que se lleven acompañados de otros principios que son su consecuencia lógica<sup>638</sup>.

Según Gelsi Bidart no resulta práctico resolver si eliminar todo rastro de escritura en la oralidad o abolir en absoluto la oralidad en el proceso escrito, es decir debe procurarse un equilibrio efectivo. Vale la pena recordar que la escritura sirve al proceso oral para recoger lo actuado, actos documentos, que forman parte del expediente, cumpliendo efectos documentales y de consulta en posteriores instancias<sup>639</sup>. Indudablemente que la oralidad es hoy una categoría conceptual muy definida, pues se erige como uno de los principios que fundan el proceso, a pesar de sus innegables ventajas, sigue siendo ampliamente discutido por la creencia de que su utilidad estriba únicamente en el uso exclusivo de la palabra hablada dentro del proceso judicial, contrapuesto al sistema escrito. En este sentido la oralidad también se asume como una garantía procesal porque aporta armonía, concentración, inmediatez, cercanía con el juzgador, impugnabilidad, publicidad, sana crítica, ejercicio dialectico entre otros.

Es incuestionable que la oralidad ha representado el símbolo del movimiento crítico y reformista para modificar un procedimiento dominado por la metodología de la escritura, siguiendo el principio de la época *quod non est in actis non est in mundo*, ante la falta de relaciones inmediatas entre el órgano jurisdiccional y los sujetos procesales, así como entre el Juez y los elementos de prueba. Ciertamente es que faltaba también el carácter de publicidad, ya que los escritos provocaron contra escritos perdiéndose así el carácter de oralidad y de concentración, volviendo nugatorio la intervención directa y el control del Juez, frente al desarrollo del proceso. La oralidad deberá facilitar, y hacer más naturales las relaciones entre el Juez y las partes.

Es por ello necesario precisar que la oralidad no constituye un principio en sí mismo, sino que constituye un instrumento facilitador de los principios políticos básicos y de las

---

<sup>638</sup> Cfr. Armenta Deu, Teresa, "La reforma del proceso penal: principios irrenunciables y opciones de política criminal", Revista del Poder Judicial, Tomo II, Número 58, Tercera Época, Segundo trimestre, Consejo General del Poder Judicial, Madrid 2000, p.278.

<sup>639</sup> Cfr. Gelsi Bidart, Adolfo, "Oralidad en todo proceso", XV Congreso Mexicano de Derecho Procesal, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Primera Edición, México, D.F., 1998, p. 477 y ss.

garantías que estructuran el propio sistema procesal penal<sup>640</sup>, dejar claro esto, insistiendo en que al estudiar entre escoger un sistema y otro, deben tomarse en consideración cuestiones pragmáticas, por encima de discusiones ideológicas, tomando en cuenta principalmente la eficacia para cumplir los principios básicos y las garantías que constituyen la base del sistema procesal dentro del estado democrático. Es fundamental que antes que definirse por la oralidad con la correspondiente adopción en la legislación nacional, deban escogerse y establecerse los principios básicos así como las garantías que habrán de fundar el sistema de justicia penal<sup>641</sup>. El objetivo es que la oralidad no sólo constituya un fenómeno cultural occidental por haberse incorporado a la mayoría de las legislaciones nacionales en materia penal, únicamente por ser el sistema al que se refieren todas las convenciones internacionales sobre derechos humanos a los que ya nos hemos referido en epígrafes anteriores. Pues todas se inclinan por el sistema oral para la justicia penal, por ser el sistema al que le atribuyen efectividad en la protección y tutela de los derechos fundamentales<sup>642</sup>.

Pese a ello, no creemos que baste con la adopción de textos legislativos avanzados, que introducen una batería de novedades, incorporando instituciones procesales modernas en la ley, que en ocasiones la práctica se encarga de desvirtuar. Es decir, no basta que los códigos prescriban la sanción legislativa. La naturaleza del proceso jurisdiccional impone planear y preparar después de la batalla parlamentaria, otras tantas para la promulgación de los nuevos códigos en el seno de los órganos jurisdiccionales, el conservadurismo, los hábitos burocráticos etc. El proceso como la democracia debe ser conquistado cada día. Muchos son los vicios que afectan a la justicia penal en México, tan sólo la multiplicación de las tareas administrativas, sobre las jurisdiccionales; deficiencias importantes en la comunicación entre los diversos operadores e instituciones judiciales; desaprovechamiento de los recursos humanos y materiales debido a la mala distribución de las tareas; oscuridad en el registro de las oficinas; delegación de funciones jurisdiccionales en empleados

---

<sup>640</sup> Cfr. Binder Alberto, en González Álvarez, Daniel, *“La oralidad como facilitadora...”*, op.cit., p. 63.

<sup>641</sup> *Ibíd.*, p.63.

<sup>642</sup> La Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”(22 de Noviembre 1969); El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (Marzo de 1976); La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948); La Convención de Salvaguarda de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales (4 Noviembre 1950); Proyecto de Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el procedimiento penal (Reglas de Mayorca); El Código Penal Modelo para América Latina.

subalternos; carencia de medios tecnológicos; deficiencia de infraestructura disponible y mal aprovechamiento de los espacios; falta de capacitación de los operadores entre otros. En este tenor, el gran reto que se avizora es la transformación el proceso, con el objeto de simplificar el juicio penal propiamente dicho, conduciéndolo de tal forma que resuelva el conflicto en lo sustancial por sobre lo formal. Se pretende que bajo el método de las audiencias se solucionen las incidencias posibles, a efecto de lograr mayor profundidad en los procesos penales.

Por otra parte no es improbable que aún bajo el método de audiencias, los procesos enfrenten el riesgo de transformarse en celebraciones de formalidad vacíos de contenido, provocando cuellos de botella en el funcionamiento del sistema. Esto se debe a la falta de claridad que se tiene respecto del papel que cada sujeto debe ejercer dentro del procedimiento. Una correcta definición de los roles en el desarrollo de la audiencia resulta clave para que ésta cumpla efectivamente la función de ser una instancia se traspasó de información de alta calidad a quien está encargado de tomar una decisión que también puede tener la mejor calidad posible y que, a su vez cumpla la función cautelar un entorno de justicia y razonabilidad a quienes intervienen en el proceso. Como bien hemos estudiado, una de las grandes ventajas de la metodología de audiencias es permitir el debate intenso de ideas entre las partes interesadas que habilite la producción de información de mejor calidad para quien tiene que tomar las decisiones en el caso. Pues de lo contrario, la información considerada para resolver el caso será indefectiblemente de menor calidad y, por tanto, con mayores posibilidades de error. Ello también infringe un principio básico que se encuentra detrás de la idea de las audiencias, la contradicción que a su vez constituye una manifestación central del derecho de defensa en un proceso acusatorio<sup>643</sup>.

En conclusión es necesario advertir que para que el Estado moderno con gobierno democrático mantenga su vigencia es preciso antes que vencer con la fuerza, convencer con sus actos. De ahí entonces que un sistema de justicia penal debe en todo momento ser reflejo de un sistema político democrático, por la existencia de frenos y contrapesos en el cada quien un tome un rol definido que cumplir y una responsabilidad de control sobre las

---

<sup>643</sup> Cfr. Quiros Camacho, Jenny, *"Oralidad en el Sistema Costarricense"*, Revista de la Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica, Número 24, Año 18, Noviembre 2006, San José de Costa Rica, p. 5 y 6.



actuaciones de los sujetos que intervienen teniendo como finalidad el asegurar los derechos fundamentales.

#### ***4.1.5. Nuevo diseño probatorio.***

El medio de prueba es todo aquel material que le es útil al Juez para formar su convicción, de tal suerte que la actividad probatoria es un elemento central del proceso, es decir que la valoración de la pruebas deberá medirse por el grado de certidumbre o convencimiento que arrojan al Juez. Sin embargo los medios probatorios que se adminiculan en un procedimiento penal, que se valoran al emitir una sentencia, por los tribunales, no son ordenados únicamente por éste, por tanto no es exclusiva la intervención del órgano jurisdiccional. En el derecho mexicano, en la etapa de la averiguación-investigación previa el Ministerio Público ha tenido la operación de valorar prueba para decidir si emprender o no una acción persecutoria. Ahora bien un aspecto fundamental al que debemos referirnos es al valor que el sistema de justicia penal asigna al caudal probatorio ofrecido en el proceso, -en otras palabras, son las reglas de valoración de prueba- las cuales dependen del sistema que rija el proceso respectivo en tiempo y lugar determinado. Existen dos sistemas de valoración de prueba, una tasada, donde la valoración queda establecido por la propia ley, y otro basado en la lógica y sana crítica la cual dependerá del grado de credibilidad que produzcan en el ánimo del juzgador. Esta última consiste en que las partes tengan entera libertad para el ofrecimiento de pruebas, quedando el tribunal obligado a razonar la admisión o desechamiento de cualquier elemento de prueba. La Constitución Mexicana en su artículo 20 reformado en 2008, establece que el proceso penal se rige por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación; en cuanto a la valoración de las pruebas, deberá realizarse de manera libre y lógica, así como la presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollarán de manera pública, contradictoria y oral.

Queda claro que la reforma acepta la libertad probatoria, haciéndose patente la legalidad de la prueba, prohibiendo otorgarle valor probatorio alguno, a aquellos elementos obtenidos por medios ilícitos, es decir prueba ilícita siguiendo la teoría del árbol envenenado o bien

que no fueron incorporados conforme lo dictan los códigos procesales acusatorios<sup>644</sup>. Para que no se incumplan estas reglas de libre valoración de la prueba, se impone al órgano jurisdiccional la motivación de todos sus fallos. Entonces, si el proceso jurisdiccional es la organización jurídica del contradictorio e inmediación, el proceso debe ser el desarrollo del contradictorio. De suerte, entonces que jurisdicción, juicio, proceso y contradictorio sean sinónimos entre sí, pues deben cumplir con la función de constatar y declarar el derecho, de lo contrario serán inexistentes. El contradictorio es la célula donde nace la argumentación del proceso<sup>645</sup>.

Cuando se diga que las pruebas serán apreciadas conforme a las reglas de la sana crítica, no se hace referencia que el Juez está sujeto a la ley, -dice Parra Quijano- a una tarifa legal, que le establece el valor a la prueba, ni tampoco una absoluta libertad que implique arbitrariedad, sino a una libertad reglada en virtud de que el Juez deberá tener en cuenta

---

<sup>644</sup> “ Un derecho fundamental que asiste justiciable durante todo el proceso es la prohibición o exclusión de la prueba ilícita, fundamentado en el derecho al debido proceso según el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a que los Jueces se conduzcan con imparcialidad artículo 17 constitucional; y a una defensa adecuada artículo 20, apartado B, fracción VIII, constitucional... bajo la óptica de la teoría del vínculo o nexo causal atenuado, en el escenario del proceso propiamente dicho, observando los derechos constitucionales y legales ante sede judicial, si en presencia del Juez, del Ministerio Público, del defensor, licenciado en derecho y del secretario fedatario de la diligencia, el inculpado, de manera libre, voluntaria y espontánea, declara en relación con el hecho imputado, ya sea en el mismo contexto de su declaración ministerial o en sentido diverso, admitiendo ciertos hechos, negando otros o haciendo valer causas de exclusión del delito, no obstante que esas manifestaciones puedan estar relacionadas con la ilicitud de la declaración inicial, si se advierte que la conexión es tan tenue entre ambas, que su exclusión se considere desproporcionada y carente de real utilidad, esa conexión causal puede darse por rota o inexistente jurídicamente, ya que la admisión voluntaria de los hechos no puede considerarse como un aprovechamiento de la lesión inicial de su derecho fundamental de prohibición o exclusión de la prueba ilícita. En consecuencia, es legal que el Juez de la causa o el tribunal de apelación, lleve a cabo una valoración del principio de prohibición o exclusión de la prueba ilícita, bajo la teoría en cuestión, ponderando cada caso en particular, en tutela judicial efectiva de los derechos de debido proceso, defensa adecuada, presunción de inocencia y sustancialmente del principio contradictorio sustentado en los argumentos de defensa del imputado y, conforme a su libre convicción, a las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y la máxima de la experiencia, sometidos a la crítica racional, justiprecie lo tenue o débil del vínculo o nexo causal entre la prueba ilícita y la derivada, y determine incluso, su inexistencia; sin que sea óbice a lo anterior que el juzgador, por el contrario, considere indivisible dicho vínculo y, por tanto, aplicable la exclusión de la prueba ilícita y la derivada”. Tesis: I.9o.P. J/12 (10a.), Semanario Judicial de la Federación, disponible en [www.scjn.gob.mx](http://www.scjn.gob.mx), consultado el 6 de septiembre de 2015.

<sup>645</sup> Cfr. Monteleone, Girolamo, “*Jurisdicción, Proceso, Juez en el Sistema de las Libertades Civiles*”, *Teoría y Derecho, Revista de Pensamiento Jurídico*, Revista semestral, junio 7/2010, Tirant lo Blanch, Valencia, España, p. 71.

para valorar la prueba, los excedentes extralegales que son: las reglas de la experiencia, las lógicas, la ciencia y de la técnica<sup>646</sup>.

Si partimos de la base que el núcleo del proceso jurisdiccional son las partes, y al menos dos de estas deben contraponerse entre sí, corresponde que sus acciones y afirmaciones tengan el mismo valor jurídico. Esta contradicción es la naturaleza misma del juicio. Si prevalece una sobre la otra, no habría necesidad de asistir al Juez. Las partes como artífices de los hechos, están justificados para ponerlos en conocimiento del Juez. El proceso acusatorio, -ciertamente- propone un debate oral donde el Juez recibe directamente la prueba.

Los nuevos valores que introduce el sistema acusatorio establecen al imputado como sujeto del proceso, tutelando sus derechos, previendo las distintas formas en que puede acudir al amparo penal, así como los derechos de asistencia y representación, todo dentro de una reforma que deposita la confianza en los imputados. Y que en contraste desconfía – justificadamente- de los órganos investigadores represivos, resultando consecuentemente en que todo deba documentarse por escrito. Según José Daniel Hidalgo los críticos del sistema inquisitivo al procurar la reforma al sistema acusatorio, sólo comprenden el principio acusatorio en la fase jurisdiccional y la oralidad, para el desahogo de los medios de prueba en la fase del juicio. El problema es que el sistema acusatorio mexicano se aferra a la oralización de los medios de prueba ya recibida que solo constan en forma documental, que al desahogarse en la audiencia de juicio introducen una falsa contradicción e inmediación. Por tanto el concepto de oralidad centrado en el juicio, es analizado separado de los principios de inmediatez y contradicción, que son los que dan valor y razón a la misma oralidad y finalmente se aferra a renunciar a que un Juez en la etapa de investigación obligue a plasmar por escrito lo ocurrido en las etapas anteriores al juicio<sup>647</sup>.

El proceso acusatorio propone un debate oral donde el Juez reciba directamente la prueba ¿Cómo ha de recibir el Juez la prueba, cuando ésta se ha producido en la escena del

---

<sup>646</sup> Cfr. Quijano Parra, Jairo, *“Razonamiento Judicial en Materia Probatoria”, Procesalismo Científico. Tendencias Contemporáneas, Memorias del XI Curso Anual de Capacitación para Profesores de Derecho Procesal*, coordinador Eduardo Ferrer-Macgregor, Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 2012, p. 45.

<sup>647</sup> Cfr. Hidalgo Murillo, José Daniel, *“Sistema Acusatorio...”*, op.cit., p. 141.

delito?, ¿Cómo si le es negada la investigación en la escena donde se producen los hechos?, la Constitución Mexicana resolvió el problema introduciendo los conceptos “desahogo” y “valoración”, que distingue de “datos de prueba” y “medios o elementos de prueba” Artículo 20 constitucional apartado A. I y II. Esta diferenciación determina que los datos y medios de prueba que comprueban un hecho ilícito y determinan a su autor no se producen en la oralidad del debate. El juicio no es una fase de investigación, sino de incorporación mediante el desahogo, valoración lógica y crítica del caudal probatorio recogido<sup>648</sup>. ¿Cómo renunciar a lo escrito si es el único método de conservar lo inmediato y directamente conocido?, para responder a estas interrogantes los códigos acusatorios mexicanos cambiaron el concepto de actas por el de registros. Es decir que con excepción de los supuestos en que la ley autoriza incorporar prueba por lectura, no se podrán ingresar o invocar medios de prueba ni dar lectura durante el debate, a los registros y demás documentos que den cuenta de las diligencias o actuaciones realizadas por la policía o el Ministerio Público, así lo prevé el Código de Procedimientos Penales de Morelos, y Zacatecas respectivamente<sup>649</sup>. No obstante creemos inadmisibles los presupuestos axiomáticos absolutos, respecto de la oralidad y la escritura en cuanto al juicio, más tratándose de la presentación y desahogo del caudal probatorio.

Podemos ver que el sistema acusatorio tal como ha sido planteado en México, no fue creado para que la investigación se desarrollara bajo la metodología oral, centrándose únicamente en el juicio, y con esa visión se ha entendido el proceso penal oral legalmente hablando. ¿Dónde entonces se critica la falta de oralidad en la etapa de investigación o en la de juicio?, para algunos la respuesta recae en la ausencia de contradicción en la etapa de acopio de pruebas, la que se lleva a cabo en la investigación sin que participe la defensa su desarrollo. Nuevamente nos preguntamos ¿Cuál es principio que prevalece la oralidad o la contradicción?, a este respecto el artículo 20 apartado A. fracción II resuelve que ningún acto probatorio de la etapa de investigación preliminar o preparatoria puede servir como fundamento de la sentencia después del juicio, en este mismo sentido resuelven los códigos

---

<sup>648</sup> Ibídem, p. 141.

<sup>649</sup> Ibídem, p. 142.

de Oaxaca y Chihuahua artículos 230 y 236<sup>650</sup>, con la misma redacción. Puede verse como las normas facilitan la incorporación de los medios de prueba por lectura en juicio, lo que resulta discordante al exigir oralidad en el juicio cuando al recabar las pruebas se impide la contradicción. ¿Qué utilidad tiene entonces un juicio oral, donde se acude a escuchar pruebas ya concluidas, sin oportunidad de contradecirlas?, ¿Qué diferencia existe cuando el profesional únicamente expone los resultados de la prueba practicada contenida en forma documental, si durante su elaboración no se tuvo acceso a contradecir, discutir, preguntar y ofrecer otro perito?<sup>651</sup>.

A la sazón, si se supone que la legislación mexicana procura que sea la oralidad la que prevalezca y no la lectura, esta se limita únicamente a que se cumpla en la etapa del juicio. No obstante que los códigos acusatorios establecen la admisión de informes y documentos que podrán ser leídos y exhibidos en el debate, con indicación de su origen; las grabaciones y elementos de prueba en forma audiovisual serán reproducidos en la audiencia, respetando la forma de reproducción habitual. También dispone que el tribunal de oficio o a petición de parte pueda prescindir de la lectura íntegra de documentos o escritos y de la reproducción total de una grabación para únicamente leer o reproducir parcialmente el documento o la grabación “en la parte pertinente”. Entonces nos preguntamos ¿Cuál es esa parte pertinente a criterio de quien, o con los parámetros de quién?, ¿defensa?, ¿Ministerio Público?, ¿Victima?, es incuestionable la marcada diferencia que existe cuando las partes tienen el beneficio de contradecir oralmente, con inmediatez la recaudación, desarrollo y posterior desahogo de las pruebas. Este debe ser el objetivo fundamental del proceso además del debate en audiencia oral.

La Constitución Mexicana, también ordena las excepciones y requisitos para la recepción de prueba anticipada, y por otra parte acepta que al imputado le sean facilitados “los datos”

---

<sup>650</sup> digno de resaltarse en el nuevo modelo de enjuiciamiento penal, es el relativo al régimen de valoración de pruebas, cuya repercusión más importante se resalta en la etapa del juicio, porque son en esta fase donde se concretizan con mayor rigor los principios de oralidad, intermediación, publicidad, concentración, contradicción y continuidad que se establecen como condición para legitimar la sentencia que se dicte al finalizar el debate. Por ello la regla general en materia probatoria, en que sólo podrán ser valoradas las pruebas que se hayan producido en la audiencia de juicio oral. De igual forma el Código de Oaxaca prevé las reglas para la prueba anticipada (Artículo 326) Cfr. Carmona Castillo, Gerardo A. “*El nuevo Código...*”, op.cit., p.41.

<sup>651</sup> Cfr. Hidalgo Murillo, José Daniel, “*Sistema Acusatorio...*”, op.cit., p. 144.

que solicite para su defensa que consten en el proceso (artículo 20 apartado A. fracción III y apartado B. fracción VI). A partir de que el imputado se encuentre detenido, éste y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación, a partir de ese momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de investigación, salvo los casos de excepción expresamente señalados por la ley, y que sean imprescindibles para el éxito de la investigación, y que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa. Pues el derecho de defensa, atañe a todas las fases procesales.

Otro elemento introducido por la reforma constitucional de 2008 fue la disminución del estándar probatorio para el ejercicio de la acción penal, esta parte de la reforma específicamente es la que ha suscitado más controversia –por razones obvias-. Estos cuestionamientos se basan en los riesgos en la disminución de estos estándares anunciando una peligrosa época de abusos en el ejercicio de la acción penal. Así el párrafo segundo del Artículo 16 y el primero del Artículo 19 señalan respectivamente:

*“Art. 16. (...) no podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querrela de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión”.*

*“Art.19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que se establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión”.*

Como puede observarse la redacción utiliza la palabra establecer por la de acreditar, significando que los parámetros probatorios se reduzcan en esta etapa del procedimiento, en la extensión referido a lo que hay que probar y la intensidad referente al grado de certeza de lo que se tiene que establecer<sup>652</sup>. Detrás de estas modificaciones a los parámetros

---

<sup>652</sup> Cfr. Natarén Nandayapa, Carlos, “Breves Reflexiones sobre algunos de los retos en el diseño del Nuevo Proceso Penal Ordinario”, *La Reforma Constitucional en materia penal*, Jornadas de Justicia Penal, VV.AA.,

probatorios se enfrenta un importante reto en la reconstrucción de la confianza acerca del Ministerio Público<sup>653</sup>; la modificación del valor probatorio de los actos de investigación<sup>654</sup>; distinguir entre ejercicio de la acción penal y la decisión de establecer la prisión preventiva, intentando reposicionar al Juez como aliado del ciudadano<sup>655</sup>.

Por otra parte el nuevo diseño probatorio supone también que el ejercicio de la acción persecutoria sea oponible a la privación de libertad —es decir a su abuso—, decantándose por medidas cautelares que tomen en cuenta la condición del sujeto y no solo la comisión del delito que se le atribuye, que decida si la ejerce o no. Es cierto que la reforma contiene una serie de decisiones que son incongruentes con los objetivos del sistema acusatorio que se pretendió implantar. Es el caso del Artículo 19 constitucional relativo a la prisión preventiva preservada de oficio en los casos específicamente señalados en el precepto, que ya hemos estudiado en epígrafe respectivo.

El juicio oral como proceso penal democrático tiene en México aún la tarea pendiente de articular un proceso penal plenamente acusatorio, que se traduzca por supuesto en garantizar la presunción de inocencia a través de eliminar los catálogos de delitos graves, estableciendo reglas racionales para el uso de la prisión preventiva; la inmediación procesal de suerte que sólo tenga valor probatorio la evidencia que se desahogue en presencia inmediata del Juez y no del Ministerio Público, cumpliendo con la garantía de

---

Instituto de Nacional de Ciencias Penales, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Primera Edición 2009, México, D.F., p. 233-234.

<sup>653</sup> “el Ministerio Público adquiere un papel central en el texto constitucional de 1917, respecto del diseño procesal al desaparecer el Juez de Instrucción y convertirse en el órgano constitucional encargado de llevar a cabo la investigación. Sin embargo la cercanía con el poder político ha derivado en una utilización discrecional de la acción penal y en general, de una limitada autonomía técnica (...) durante la etapa de investigación del proceso, la autoridad creaba prueba y la desahogaba ante sí mismo, generando multitud de abusos que se convirtieron en la realidad cotidiana, de suerte que la imagen de esta Institución es vista como un espacio de corrupción”. Cfr. *Ibíd*em, p.236.

<sup>654</sup> En la práctica mexicana el principio de inocencia ha sido invertido — mal entendido por toda la estructura de procuración y administración de justicia— pues, durante todo el proceso el imputado es responsable de desvirtuar las pruebas de su acusación, y no el Ministerio Público en quien recae por mandato constitucional la responsabilidad de probar la culpabilidad del inculcado. Los problemas se presentan desde el inicio del procesamiento, al inicio de las diligencias de investigación por parte de la autoridad acusadora, y se confirman posteriormente cuando el órgano juzgador dicta la vinculación a proceso con base en el contenido de la acusación presentada por el Ministerio Público. Que en México el órgano jurisdiccional resuelva desvirtuar una acusación presentada en los términos del Ministerio Público es prácticamente inexistente.

<sup>655</sup> Cfr. Natarén Nandayapa, Carlos, “*Breves Reflexiones...*”, op.cit., p.236.

imparcialidad del juzgador; la contradicción procesal y de igualdad de las partes que permita articular un proceso dialectico de valoración de prueba para conocer la verdad de los hechos a partir de la ofrecimiento de pruebas y presentar argumentos en equilibrio y en igualdad de circunstancias entre la defensa y el Ministerio Público; igualmente necesarios son la publicidad y la transparencia de los procesos para instruirse y juzgarse a la vista de la sociedad; la concentración y economía procesal que permita que las audiencias se lleven a cabo con la participación de todas las partes; y por supuesto la oralidad que en definitiva es el mecanismo que permite conocer los alegatos, las pruebas y las decisiones de manera directa y presencial.

En conclusión, nos importa resaltar en este estudio que el núcleo esencial de las normas probatorias debe ser en todo momento el cumplimiento de derechos fundamentales como el principio del debido proceso legal, la presunción de inocencia, y en definitiva el derecho a una tutela judicial efectiva, que como hemos analizado se comprende de principios básicos que el proceso justo y seguro debe tener.

#### ***4.1.6. Insuficiencia del Papel Investigador del Ministerio Público y las Policías.***

Además de garantizar el orden social, la investigación criminal tiene el objetivo de auxiliar al sistema penal, su tarea es fundamental para cumplir con los fines de procuración y administración de justicia. Una vez producido el hecho delictivo entran en funciones los órganos de investigación, ocupándose de la recolección de elementos de prueba, elaborando hipótesis con base en dictámenes periciales, proporcionando información importante para el establecimiento de la forma de comisión del delito. En definitiva la investigación permite administrar justicia, basada en la confirmación científica.

La funciones de investigación por medio de la función policial, se encuentra previsto por la Constitución Política Mexicana en el artículo 21, la legislación orgánica de las instituciones encargadas de llevar a cabo las labores de investigación, sujeto al Ministerio Público y los jueces en la recolección, aseguramiento, estudio y análisis del material probatorio judicial. No debe entenderse que las funciones de los órganos encargados de la investigación son



autónomas, sino que en un Estado Constitucional de derecho sus facultades deben estar determinadas por la Constitución, y las normas procesales.

Ahora bien la investigación criminal comprende la actividad técnica y científica que los órganos del Estado con funciones de Policía recolectan la evidencia física que a través de una metodológica técnica arroje los elementos materiales que permitan conocer y comprender los medios de comisión de un delito. La importancia de la investigación criminal, supone que sea una labor altamente calificada, cualificada y apoyado en bases técnico-científicas debido a la dificultad como a lo específico de la investigación de delitos de diversa índole<sup>656</sup>.

La organización política mexicana, basado en un sistema federal definen la construcción de las instituciones policiales encargadas de la investigación de los delitos. En el capítulo II, nos hemos referido al diseño de la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público de quienes depende la Agencia de Investigación Criminal instrumento encargado de la investigación criminal en México a nivel federal, los estados tienen las Policías Estatales respectivamente. Desde esta perspectiva no debemos olvidar que previo a la reforma constitucional en materia penal, el funcionamiento del proceso como de los métodos de investigaciones ejercidos por las instituciones de investigación también se organizó bajo esquemas inquisitivos. Han pasado seis años de la aprobación de la mencionada reforma que también se indicó mejoraría la calidad de la investigación de los delitos en el país.

En el 2010 el Centro de Investigación y Docencia Económicas elaboró un estudio con la finalidad de evaluar la procuración de justicia en el Estado de Chihuahua, uno de los primeros estados que comenzaron a funcionar bajo los parámetros del sistema acusatorio, reformando códigos penales, de procedimientos, así como en sus órgano jurisdiccional, etc. El ejercicio académico en comento se destacó: *“la debilidad institucional que calificó como un problema crucial eran causas y consecuencias de carencias estructurales del sistema en materia de sistemas de información, de supervisión, de análisis de la información de*

---

<sup>656</sup> Cfr. Castro Saldaña, Jesús Alberto, *“La investigación criminal y el esclarecimiento de un hecho punible”*, *Revista Criminalidad*, Volumen 50, Número 2, noviembre 2008, Bogotá D.C., Colombia, p. 108.

*estándares y protocolos institucionales para realizar las tareas cotidianas y controles de investigación administrativa*”<sup>657</sup>.

No podemos dejar señalar, que las instituciones de investigación mexicanas siguen funcionando bajo los esquemas del sistema inquisitivo, desde esta perspectiva se advierte debilidad institucional de las policías con prototipos de comandantes o jefes policiales. Estas instituciones no tienen programas permanentes de comunicación social, a excepción de los medios de comunicación que tratan hechos delictivos puntuales como mecanismos de aprobación de la función de investigación para legitimar más la actuación de las administraciones gubernamentales en turno, que la efectividad de los elementos policiales y de investigación en los procesos de investigación delictiva<sup>658</sup>.

El presupuesto en Seguridad Pública en México ha aumentado 15 078. 1 millones de pesos entre 2004 y 2009, un incremento del 230%. Cabe resaltar que estos recursos se han empleado para fortalecer el modelo de fuerza de las policías, sin que eso se refleje en la eficiencia y calidad de las investigaciones de delitos, además la mayor parte del crecimiento se ha dado en los recursos conferidos a autoridades federales, los cuales han aumentado 305%, así mismo existe un subejercicio de las aportaciones federales a los estados y los municipios a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP), y el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (Subsemun). En este sentido, es conveniente revisar la forma en que se etiquetan y se ejercen los recursos con la finalidad de reorientarlos y flexibilizarlos a las áreas que lo requieran tal es el caso de instituciones de investigación y su equipamiento.

---

<sup>657</sup> Cfr. Caballero, José Antonio, *“La Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua”*, gestión 2004-2010, CIDE, México, D.F., División de Estudios Jurídicos, disponible en [www.cide.edu.mx](http://www.cide.edu.mx), consultado el 6 de septiembre de 2025; Véase Seguridad Pública y Justicia del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, principales indicadores, Primera Edición, México, D.F., 2011.

<sup>658</sup> De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2010, más del 80% de los entrevistados dijeron tener “poca” o “nada” de confianza en las policías de tránsito, municipales y preventivas estatales. La Policía Federal Ministerial y la Policía Federal tuvieron porcentajes aprobatorios más altos, más del doble. Es decir, las organizaciones policiales municipales y estatales son las que menos confianza generan. Por la cantidad de sus recursos humanos y la naturaleza de sus actividades —en el caso de las preventivas y de tránsito— estas policías tienen más contacto con la ciudadanía que las federales. Esto es preocupante en virtud de que tanto la prevención como la persecución eficaz de los delitos dependen en gran medida del apoyo y de la información que la población pueda proveer. La confianza es esencial para establecer lazos y canales de inteligencia policial. Estas cuestiones deben considerarse en la discusión sobre un nuevo modelo policial. Cfr. *“Seguridad Pública y Justicia del Instituto...”*, op.cit., p.9

Por otra parte el procedimiento penal de naturaleza inquisitiva que dispone el Código Federal de Procedimientos Penales, aún hoy otorga facultades a las policías quienes actúan bajo el mando del Ministerio Público en las investigaciones de los delitos de acuerdo al Artículo 21 Constitucional. El texto descrito produce nuestra reflexión de falta de adecuación de las normas procesales en el nivel federal a la reforma constitucional, que debiera eliminar la dependencia orgánica del Ministerio Público y en cambio regular la corresponsabilidad entre este y la policía, lo que significa que por el estatus constitucional que adquiere la policía en las facultades de investigación del delito, está obligada a definir su propia doctrina funcional, respecto a las acciones a realizar, con el objeto de llevar a cabo su nuevo rol en las diferentes etapas del procedimiento penal acusatorio<sup>659</sup>.

Las facultades conferidas por este código procesal penal a la policía de investigaciones deben ejercerse bajo el concepto de corresponsabilidad. Para cumplir con la misión normativa de rango constitucional, la policía está obligada a definir su propia ideología policial, coherente con los principios que regulen el procedimiento penal acusatorio; a crear una organización y administración moderna, adecuada para el cumplimiento de la nueva concepción de la investigación del delito bajo la óptica de la corresponsabilidad institucional. De este modo la policía no se subordina al Ministerio Público administrativa o institucionalmente, y su personal actuará en coordinación o colaboración, quizá a través de unidades orgánicas, en el desarrollo de las actividades de investigación criminal que el sistema de gestión administrativa le asigne<sup>660</sup>.

La ausencia de una correcta investigación quedó claramente documentada en la caso “González y otras (Campo Algodonero) contra México”, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 16 de noviembre de 2009. En esta sentencia el tribunal internacional reconoció la grave violación a los derechos humanos de tres mujeres vecinas de Ciudad Juárez, Chihuahua México que fueron privadas de la vida. La Corte documento la negligencia, el descuido, la apatía e inactividad de las autoridades locales y federales encargadas de la investigación de los hechos delictivos denunciados relativos a la

---

<sup>659</sup> Cfr. González Rodríguez, Patricia Lucila, *La Policía de Investigaciones en el Sistema Acusatorio Mexicano*. Serie Juicios Orales, Número 7. Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 2013, p.3.

<sup>660</sup> *Ibíd*em, p. 4.

desaparición de tres mujeres. Así la resolución de la Corte Interamericana señaló lo siguiente: *“...las irregularidades en el manejo de evidencias, la alegada fabricación de culpables, el retraso en las investigaciones que tengan en cuenta el contexto de violencia contra la mujer en el que se desarrollaron las ejecuciones de las tres víctimas y la inexistencia de investigaciones contra funcionarios públicos por su supuesta negligencia grave, vulneran el derecho de acceso a la justicia, a una protección judicial eficaz y el derecho de los familiares y de las sociedad a conocer la verdad de lo ocurrido. Además, denota un incumplimiento estatal de garantizar, a través de una investigación seria y adecuada, los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal de las tres víctimas...esta ineficiencia judicial frente a casos individuales de violencia contra las mujeres propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en genera y envía un mensaje según el cual la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada como parte del diario vivir...”*<sup>661</sup> .

En el mismo sentido en el Caso de Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos, en la Sentencia de la Corte Interamericana de 23 de Noviembre del año 2009, esta estableció: *“...que el Estado está en la obligación de proveer recursos judiciales efectivos a las personas que aleguen ser víctimas de violaciones de derechos humanos, recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso penal, todo ello dentro de la obligación general, a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción. El derecho de acceso a la justicia requiere que se haga una investigación y de la correspondiente responsabilidad penal en tiempo razonable...en atención a garantizar los derechos de las personas perjudicadas, una demora prolongada puede llegar a constituir, por sí mismas, una violación de garantías judiciales...el derecho de acceso a la justicia incluye que la investigación de los hechos(delictivos)...cada acto estatal que conforma el proceso de investigación, así como la investigación en su totalidad, debe estar orientado hacia una finalidad específica, la determinación de la verdad y la investigación persecución, captura, enjuiciamiento y en su caso la sanción de los*

---

<sup>661</sup> Un análisis más completo de la sentencia de la Corte Interamericana puede verse en Ferrer Macgregor, Eduardo y Silva García, Fernando, *Los Feminicidios de Ciudad Juárez ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Campo Algodonero*, Primera Edición, Editorial Porrúa, UNAM, México, D.F., 2011.

*responsables de los hechos...*<sup>662</sup>.

Sobre este particular caso, el Tribunal Interamericano, constató que durante la audiencia pública el Estado Mexicano manifestó que el delito no fue atendido en su momento en gran medida por el contexto político y el marco constitucional que regían en la época en que sucedieron los hechos. En este sentido se dio cuenta de las consecuencias que se derivaron del retardo en el inicio y seguimiento de las investigaciones no pueden ser imputadas en forma alguna a las víctimas o a sus familiares, en suma la Corte pudo advertir la secuencia de omisiones así como la responsabilidad de quienes tenían la obligación constitucional y legal de investigar los delitos el Ministerio Público y demás órganos integrantes del Estado Mexicano<sup>663</sup>.

Queda claro que la investigación criminal dentro del proceso penal se materializa partiendo de un marco determinado por el régimen constitucional y ahora internacional que dicta los principios y reglas procesales que deben observarse para llevarse a cabo. La responsabilidad de la investigación delictiva una vez recibida la *notitia criminis* será siempre encargada a los órganos del Estado, misma que se actualiza por medio de una serie de diligencias y actuaciones tendientes al descubrimiento de la verdad, durante la etapa de investigación. El caudal de información que arroje la investigación sirve para determinar, conforme a derecho, si es posible someter a una persona determinada (imputado-acusado) a proceso penal.

En este sentido, desde la óptica del proceso penal, la investigación criminal está compuesta por aquellos actos realizados durante la etapa de investigación —por los intervinientes, o la policía— que tienen como propósito obtener y recoger los elementos de prueba que serán esgrimidos en forma mediata para verificar las afirmaciones de las partes durante el juicio y en forma inmediata para justificar, con grado de probabilidad, todas aquellas resoluciones

---

<sup>662</sup> Cfr. Cossío Díaz, José Ramón, Mejía Garza, Raúl M., Rojas Zamudio, Laura Patricia, “El Caso Radilla...”, op.cit., 316.

<sup>663</sup> Ibídem, p.319.

que dictara el juez de garantía durante las etapas preliminares del procedimiento<sup>664</sup>.

Es necesario precisar que la investigación criminal –dice Guillen López<sup>665</sup>- no se realiza, únicamente, practicando las diligencias instructivas, preventivas, confrontaciones, testimoniales, periciales, sino que junto con esta actividad es necesario tomar en consideración una serie de pasos metodológicos que le permitan a los órganos de investigación aplicar una investigación científica y eficaz del delito. En este sentido dice el autor de referencia para el éxito en la investigación criminal se debe contar con un profesional o grupo de profesionales que cuenten con el perfil idóneo, capacitación, con un buen grado de experiencia y especialización que posibilite, dentro de su rol de parte en el proceso, tanto en la investigación de campo establecer los hechos, así como ubicar y recolectar los elementos materiales de prueba, haciendo eficaz la investigación técnica o científica del delito. Así el Ministerio Público cumple su función en el escenario de la investigación criminal, como director objetivo del material probatorio, para después al ejercer su potestad persecutoria del delito, lo lleve a cabo basado en una teoría del caso jurídicamente válida y comprobable.

Sin embargo, a través de la norma fundamental que organiza el sistema penal acusatorio, dentro de los parámetros del Estado Democrático en su conjunto, por lo que su regulación debe comprender la investigación criminal, bajo los siguientes principios rectores: a) principio de oficialidad; b) principio de investigación oficial y aportación de parte; c) principio acusatorio; d) principio de legalidad; e) principio de oportunidad. En cuanto al principio de oficialidad, no es otra cosa que la referencia el Estado es el encargado de la acción penal. El principio de investigación oficial y aportación de parte, quiere decir que la carga de la prueba y la producción del material probatorio son responsabilidad de las partes, no queda a juicio ni responsabilidad de los tribunales generar las pruebas. Conforme al principio acusatorio, éste se refiere a la conformación de los poderes de persecución penal, comprendiendo todas las facultades atribuidas a su ejercicio, elaborando una distinción

---

<sup>664</sup> Cfr. Horvitz Lennon, María Inés y Julián, López Masle, *Derecho Procesal Penal Chileno*, Primera Edición, Editorial Jurídica de Chile, Chile, 2002, t. I, p. 444.

<sup>665</sup> Cfr. Guillen López, German, *La Investigación Criminal en el Sistema Penal Acusatorio*. Serie Juicios Orales. Número 6, Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 2013, p.12 y 13.

frente a las funciones que desarrolla el Estado al perseguir el hecho criminoso. Desde el ordenamiento constitucional, se proyecta a los códigos adjetivos la distinción de en quien recaen las facultades de investigar, de acusar y de procesar y sancionar. El principio de legalidad este principio determina que el Ministerio Público deberá ejercer la acción penal en todos los casos en que sea procedente con estricto apego a la norma jurídica en la materia. Y por último el principio de oportunidad se refiere a la facultad discrecional que tiene el Ministerio Público para determinar si ejerce o no la acción penal, queda a consideración de aquel evaluar si cuenta con el material suficiente que soporte la persecución penal ante los tribunales<sup>666</sup>.

La estructura del proceso penal está profundamente vinculado a la proyección y aspiraciones que tiene un Estado en su aspecto de político criminal. El modelo de política criminal –dice Alberto Binder<sup>667</sup>– se construye desde la perspectiva del poder, el conjunto de regulaciones penales siempre se diseñan a partir de un modelo de Estado que protege la jerarquización del poder. Con respecto al Ministerio Público éste soporta funciones conforme a los principios que deben seguir la investigación criminal bajo la concepción de un Estado democrático de derecho que será siempre el basamento que defina el sistema de justicia penal, donde se contempla la investigación criminal y las instituciones encargadas de la misma.

#### **Capítulo IV. Conclusiones.**

---

<sup>666</sup> Ibídem, p. 18 y ss.

<sup>667</sup> Cfr. Binder, Alberto, M., *Iniciación al Proceso Acusatorio (para auxiliares de la justicia)*, INECIP, Campomanes Libros, Buenos Aires, Argentina, 2000, p.26.

Fue después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los países de Europa occidental y continental comenzaron advertir la necesidad de incorporar en sus constituciones, instituciones que tuvieran como objetivo la eficacia de los derechos humanos, porque a través de ellos, se sentarían las bases del sistema democrático. Esta ola constitucional fue de especial importancia para Europa, después de los nocivos resultados del fascismo, del movimiento armado, de tal manera que fue central trabajar en los principios rectores que garantizaran la victoria de la democracia. Este movimiento tendría repercusiones en las constituciones de Alemania Federal, Italia, y de Francia.

Al término de la Segunda Guerra Mundial, muchos Estados de Europa estaban gobernados por dictadores y muy rezagados en cuanto a instituciones democráticas, algunos de estos estados tardarían en regresar al régimen constitucional y promulgar las cartas fundamentales, a través de las cuales quedarían incorporados las nuevas instituciones del movimiento constitucional y democratizador.

En América Latina, el fortalecimiento de las instituciones democráticas comenzó principalmente a partir de 1980, no obstante la influencia que en todo el territorio americano tuvieron a partir de los movimientos de independencia de los países de la región. Los constituyentes de la zona se habían inspirado en el pensamiento francés e inglés, los documentos que más influencia tendrían en la redacción de los documentos constitucionales, en primer lugar, la constitución estadounidense de 1787<sup>668</sup>; en segundo lugar, la española de 1812 y, en tercer lugar, el incipiente desarrollo constitucional en los otros países latinoamericanos. Sin embargo, fue clara la inspiración que los constituyentes americanos tomaron de la Europa democrática y continental.

---

<sup>668</sup> "...el primero de los principios del actual derecho constitucional es el constitucionalismo, es decir la confianza que ponen los hombres en el poder de las palabras formalmente escritas, para mantener un gobierno. Este principio tuvo su origen en la Revolución Americana...esta práctica de constituciones escritas fue iniciada en las colonias inglesas en Norteamérica, dando nacimiento al concepto racional-normativo de Constitución, como un documento escrito y sistemático, referido a la organización política de la sociedad, estableciendo poderes y la supremacía de la Ley, y la segunda, la declaración de derechos fundamentales. El elemento básico en el proceso de –construcción- del constitucionalismo, bajo el concepto de ley suprema y fundamental, puesta por encima de todos los poderes del Estado y de los particulares...", Cfr. Brewer-Carias, Allan, R., *"Reflexiones sobre la Revolución Americana 1776 y la Revolución Francesa de 1789 y sus aportes al constitucionalismo moderno"*, Cuadernos de la Catedra, Universidad Católica "Andes Bello", No.1, Editorial Jurídica, Caracas, Venezuela, 1992, p. 86 y ss.



Podemos de decir que la construcción del derecho constitucional en México da comienzo durante el siglo XIX, alimentado de un conjunto de fuentes históricas y en virtud de acontecimientos que se presentaron en el país previo a este período. Sin embargo en la exposición del presente ejercicio académico, hemos advertido la importancia que tuvieron en esta consolidación constitucional la Constitución Española de 1812, la Independencia de México siendo los movimientos político-jurídicos primarios que dé inicio estuvieron acompañados de la preocupación por contar con una ley fundamental que diera forma al Estado y a su gobierno, asegurando libertades para los habitantes. Estos momentos han quedado registrados como la piedra angular de los periodos subsecuentes comprendidos de 1808 a 1857 con la instalación de varios congresos constituyentes con las correspondientes cartas fundamentales que en cada momento se produjeron, con mayor o menor legitimidad<sup>669</sup>.

Así la historia constitucional mexicana registra desde *los Elementos Constitucionales de López Rayón*: los conceptos de soberanía atribuida al pueblo, la existencia de los tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. El Acta Constitutiva de Apatzingán de 1814, sería el esfuerzo por cortar todo lazo con España, y así hasta llegar a la Constitución Federal de 1824 se le atribuye el mérito de ser el documento que crea jurídicamente al Estado mexicano, por contener elementos tales como: la soberanía popular; las primeras garantías individuales; la república representativa; la división de poderes y de funciones como instituciones sólidas e independientes; el bicameralismo respecto del poder legislativo integrados a través de elección popular; el federalismo que supuso la descentralización política de los estados y la federación, así como la autonomía de aquellos en cuanto a su régimen interno. Y así hasta llegar a la Constitución Liberal de 1857 y la Revolucionaria de 1917.

Durante el periodo comprendido de 1810 a 1812, momento de creación y expedición de la Constitución de Cádiz, los únicos países que habían realizado un cambio radical en su esquema constitucional eran Reino Unido, Gran Bretaña y Francia. Estas naciones

---

<sup>669</sup> La historia constitucional mexicana durante medio siglo registra catorce instrumentos constitucionales, a pesar de que no todos cumplieron su cometido, de tener vigencia. Cfr. Fernández Ruiz, Jorge, *Constitucionalismo en el primero siglo del México independiente*, Constitucionalismo. Dos siglos de su nacimiento en América Latina, VV.AA., Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 2013, p.707 y ss.

comenzaban a abrirse paso en el proceso creador del constitucionalismo clásico, sentando sus bases.

De suerte que, los movimientos políticos en estas naciones abrieron paso a los nuevos modelos y paradigmas constitucionales de este periodo, surgiendo a la sazón de las grandes revoluciones de finales de XVIII con elementos comunes surgidos de las tesis contractualistas y racionalistas de la época. Queda clara la influencia del constitucionalismo francés donde primaron las primeras tesis sobre la soberanía parlamentaria, la supremacía de la ley como expresión de la voluntad popular bajo la concepción de Rousseau, que si bien no era reconocida como formalmente superior a la constitución, si se creía que no podía atentar contra derechos individuales contenidos en una norma fundamental. Desde esta perspectiva la ley se encargaría de desarrollar, y hacer positivos esos derechos. En la Francia de Rousseau, se construye el paradigma de que la ley es sinónimo de libertad, pues supone la representación de lo que los ciudadanos querían para sí mismos y estos jamás iban a dictar una norma que restringieran las libertades<sup>670</sup>. Abonaron al debate las ideas de Emmanuel Sieyès al añadir que las leyes constitucionales son fundamentales, virtud a que los cuerpos constituidos no podían existir sino a través de aquellas, así que tampoco podrían cambiarlas, considerando entonces al poder constituyente como poder soberano y más importante estableciendo la superioridad de la constitución sobre las normas que dictan los poderes constituidos. Es así como aproxima el paradigma de la supremacía constitucional, debido al carácter normativo de la Constitución que en palabras –del autor de referencia- sin dicho carácter normativo de cumplimiento obligatorio la constitución dejaría de ser suprema. Para Sieyès la constitución es un cuerpo de leyes obligatorias o no es nada<sup>671</sup>.

De esta manera la constitución francesa de 1797, la norteamericana de 1787 y la de Cádiz de 1812, fueron las primeras cartas políticas escritas que como faros iluminaron la codificación política moderna, edificando también el constitucionalismo contemporáneo, en virtud de que sus enseñanzas y principios siguen vigentes. De igual forma debemos agregar

---

<sup>670</sup>Cfr. Eto Cruz, Gerardo, *Fuentes del Constitucionalismo Gaditano con especial referencia a su incidencia en los mecanismos de defensa de la Constitución*, "Memoria...", op.cit., p. 204-207.

<sup>671</sup>Cfr. Sieyès, Emmanuel, *"Opinión de Sieyès sobre las atribuciones y la organización de la Jury Constitutionnaire propuesta el 2 del termidor"*, *Escritos políticos de Sieyès*, introducción, estudio preliminar y compilación de David Pantoja Morán, Fondo de Cultura Económica, México, D.F., 1993, p. 258.

la evolución política de Inglaterra, sus documentos y tradiciones políticas, lo mismo que su sistema de gobierno son un legado importante para el constitucionalismo<sup>672</sup>. Los principios que dieron identidad al constitucionalismo de ese momento, fueron la separación de poderes y la supremacía del poder legislador, adoptados por el constitucionalismo Español, que como consecuencia tuvo una amplia influencia en el constitucionalismo mexicano.

Advierte Jorge Fernández Ruiz<sup>673</sup> que el derecho constitucional como otras ramas del derecho, se alimenta de diversos tipos de fuentes: formales, materiales e históricas; la fuente formal es la actividad constituyente realizada por un congreso habilitado con tal carácter, cuyos trabajos tendrán como fruto el texto constitucional; las fuentes materiales vienen a ser las ideas, los hechos y acontecimientos que determinan la instalación de un congreso constituyente, así como el sentido, orientación y alcance de sus normas que ahí se promulgan. Ahora bien los problemas de derecho constitucional no son primariamente problemas de derecho, sino de poder.

Las tesis del constitucionalismo clásico convergen en que exista un congreso constituyente, que tiene la única tarea de crear un documento llamado constitución, a través del cual habrán de articularse los principios y valores de una sociedad en un tiempo, y un espacio determinado. Ahora bien, siguiendo a Ferdinand Lassalle ¿Cuál es el propósito mismo que tiene la creación de una constitución?, para responder a esta pregunta –el autor– dice “la constitución es la ley fundamental proclamada dentro de un país, en la que se echan los cimientos para la organización del Derecho público de esa nación, se extienden en una hoja de papel, se les otorga expresión escrita y a partir de ese momento se convierten en derecho, en instituciones jurídicas...”<sup>674</sup>.

En este sentido Lassalle añade que la verdadera constitución de un país sólo reside en los factores reales y efectivos de poder que rigen en ese país, de manera que las constituciones

---

<sup>672</sup> Cfr. Escobar Fornos, Ivan, *La Constitución de Cádiz. Modelos de Constitucionalismo, Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional*, No. 16, Anual, Centro de Estudios Políticos Constitucionales, Madrid, España, 2012, p. 185.

<sup>673</sup> Cfr. Fernández Ruiz, Jorge, “*Constitucionalismo...*”, op.cit., p.705.

<sup>674</sup> Cfr. Lassalle, Ferdinand, *¿Qué es una Constitución?*, Editorial Ariel, Traducción de Wenceslao Roces, Segunda Edición, Barcelona, España, 2001, p.78.

escritas no tienen valor, ni son duraderas por cuanto no dan expresión fiel a los factores reales de poder imperante en la realidad social<sup>675</sup>.

Así el paradigma francés agregó además que para que los Estados tuvieran constitución, tendrían que incluir una carta de derechos, así como establecer la división de poderes. Sin embargo, este reconocimiento no serviría de nada de no crear adicionalmente los instrumentos de protección de las libertades individuales, que los estados quedaban obligados a respetar. Es decir que no fue suficiente que la constitución diese vida jurídica al Estado, a través de los principios establecidos por el constitucionalismo clásico, todavía en construcción. Al mismo tiempo la norma fundamental se convertiría en protectora de libertades civiles de los individuos, ofreciendo recursos de equidad natural en ocasiones graves en las que la ley haya olvidado garantías, es decir abría la oportunidad de que los ciudadanos tengan la potestad para recurrir ante los tribunales cuando vieran vulnerado algún derecho fundamental que no haya quedado protegido por ley.

En México la norma fundamental que mejor recogió los principios de la Ilustración Francesa, fue la Constitución Liberal de 1857<sup>676</sup>, en ella se sentaron las bases de la reforma política, social y económica. Las promesas formuladas en las cartas constitucionales de la segunda mitad del siglo XX, tales como la elaboración de un Estado social de derecho como sistema de vínculos y deberes positivos de hacer, relativos a los derechos sociales, abonaron en la construcción de un “Estado máximo”, cuya legitimación dependería de cumplir con la obligación de garantizar el sostenimiento de las necesidades vitales de las personas, estas tesis se recogieron en la Constitución mexicana de 1917.

La teoría del principio fundamental es francesa –dice Jorge Carpizo- por encontrarse en la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que a la letra dice: “Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no esté asegurada, ni determinada la separación de poderes, carece de Constitución”, a pesar de esto encontraremos estados que

---

<sup>675</sup> *Ibíd*em, p. 79.

<sup>676</sup> “...Lejos estuvo la Constitución de 1857 de satisfacer los requerimientos de los liberales puros; empero, pero logró muchos avances respecto de la de 1824 —cuya reimplantación pedían pero moderados—, y muchos más respecto de los documentos constitucionales centralistas, representó el triunfo aparente del partido liberal, que logró plasmar en el papel un catálogo de derechos humanos garantizados frente al poder público: el sufragio popular, la desaparición de los fueros militar y eclesiástico, la desamortización de los bienes del clero, la separación de la Iglesia y el Estado, la división de poderes, y la forma federal de Estado”. Cfr. Fernández Ruiz, Jorge, “*Constitucionalismo...*”, op.cit., p.723.

tengan constituciones donde queden establecidos los principios de las garantías de los derechos y la división de poderes, con independencia de que el régimen de poder sea absoluto o totalitario<sup>677</sup>.

Cierto es que hay estados que pueden contar con una norma fundamental a través de la cual se desarrollen principios político-jurídicos, determinados ya sea por una persona o grupos concretos quienes no deben su legitimidad a una elección popular ni rinden cuentas a alguien. Hoy en día subsisten muchos sistemas de esa naturaleza, más allá de lo que asiente un folleto generalmente denominado “constitución”. Es decir, tienen una constitución de hecho o fáctica, pero no una constitución democrática, no una constitución que asegure derechos y libertades<sup>678</sup>.

El esfuerzo por establecer este principio fundamental en un primer momento en la Declaración Francesa los ilustrados de la época tuvo como objetivo establecer con claridad que para que un país tenga constitución, los derechos humanos necesariamente tienen que estar asegurados y protegidos, así como que el poder no podía encontrarse concentrado y sin control.

Todos estos acontecimientos, contribuyeron a la edificación del fundamento y el concepto de “Estado de derecho” que según Ferrajoli no es otra cosa que el sujeto frente al cual se justifican reglas, prohibiciones y obligaciones dirigidas a impedir abusos que dañan los derechos fundamentales, ósea los poderes públicos que encabezan al Estado deben quedar sometidos a una Constitución democrática. Según el paradigma del Estado de derecho habría que subordinar, -someter-, a reglas, límites y controles al Estado y al poder<sup>679</sup>. Esto es, que Constitución será sinónimo de democracia, porque únicamente existe democracia –Constitución– donde se protegen los derechos humanos y el poder no se encuentra concentrado, son estos aspectos esenciales de la democracia.

---

<sup>677</sup> Cfr. Carpizo, Jorge, “*Los principios jurídico-políticos fundamentales en la Constitución Mexicana*”, Revista de Derecho del Estado, No.27, Semestral, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Colombia, 2011, p. 15.

<sup>678</sup> *Ibíd.*, p. 15.

<sup>679</sup> Cfr. Ferrajoli, Luigi, “*Contra los poderes salvajes del mercado*”, Estrategia y propuesta para la reforma del Estado 2A. Ed., VV.AA., Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., p. 100.

El término constitución –dice Gerardo Pisarello<sup>680</sup>- puede designar cualquier conjunto más o menos formalizado de normas fundamentales que permitan identificar o caracterizar un ordenamiento jurídico. Este autor nos explica que la noción de constitucionalismo, en cambio, supone un particular sistema axiológico que en la modernidad ha estado íntimamente ligado a la necesidad de establecer límites y vínculos al poder, garantizando la autonomía de las personas, haciendo referencia a que el artículo 16 de la Declaración francesa de 1789, al vincular la idea de constitución a la separación de poderes y a la garantía de derechos, comporta el punto de referencia por excelencia de ese criterio ideal-normativo utilizado para evaluar las tradiciones constitucionales desarrolladas en Europa y en América durante los siglos XVIII y XIX.

El modelo liberal se actualizó en el tiempo, ya en el siglo XX al perfeccionar el canon de lo constitucionalmente perseguible en un sentido formal, así como en sentido garantista, por estar ligado a la limitación del poder, y en su vertiente democrática, ligada a la necesidad de dar legitimidad al poder.

Así los derechos humanos se convierten en la base y la esencia de toda la organización sociopolítica –en definitiva el Estado como dice Ferrajoli- prescrito en una constitución. Hay que dejar claro que los derechos fundamentales sean civiles o políticos, de libertad o sociales, se caracterizan por ser derechos universales que corresponden a todos, los derechos de libertad son libertades negativas como universales a la autonomía privada y una vez que se establecen en una norma constitucional también son universales a la autonomía política<sup>681</sup>.

Ahora bien, puede suceder que un ordenamiento siendo liberal, al mismo tiempo sea políticamente no democrático, de igual forma puede suceder que reconozca espacios más o menos ilimitados a la democracia política y a la autonomía de mercado y por ello sea no

---

<sup>680</sup> Cfr. Pisarello, Gerardo, *¿Constitucionalismo sin constitución o constitución sin constitucionalismo?*, Elementos para una lectura de la construcción Europea en clave post-estatal, Revista de Derecho Constitucional Europeo, No.5, semestral, Junta de Andalucía, Instituto Andaluz de Administración Pública, Universidad de Granada, Departamento de Derecho Constitucional, Granada, España, p. 247.

<sup>681</sup> *Ibíd.*, p. 102.

liberal. La tradición liberal ha ignorado la distinción, desconoce la naturaleza del poder de los derechos de autonomía y confunde en particular los derechos de libertad y los derechos civiles o de autonomía privada.<sup>682</sup>

Desde una perspectiva garantista, -dice Pisarello<sup>683</sup>- la lógica del constitucionalismo moderno sigue siendo la introducción de límites y controles al poder, pero no solo tomando en cuenta los poderes públicos, sino contemplando también a los poderes de carácter privado, concretamente el mercado. Lo que demanda la asignación de derechos fundamentales, ya no son solamente de naturaleza civil y político, sino que entran en el terreno de los derechos sociales, culturales y ambientales a todos los individuos, con especial énfasis de los grupos socialmente vulnerables.

En este orden de ideas podemos concluir que los principios del constitucionalismo se condicionan recíprocamente. Pues en aquel estado donde existe concentración de poder no hay protección de los derechos humanos.

Una importante construcción del derecho público del Estado Constitucional es sujetar a los poderes públicos a que ejerzan sus actos y funciones subordinados a los principios constitucionales, establecidos en una norma fundamental. Bajo este esquema se deposita en los jueces la potestad, no solamente de meros aplicadores del derecho al caso concreto, de conformidad con ciertas normas o estándares preexistentes, con el objeto de satisfacer unas expectativas que nacen, no de sus cualidades personales, sino de prescripciones establecidas por el ordenamiento constitucional. Es así como, los jueces entienden que su función es aplicar un parámetro normativo preexistente a una disputa.

Son los principios constitucionales los que albergan, reglas y valores cuya característica es

---

<sup>682</sup> Diversa es de hecho la estructura de estas dos clases de derechos. Los derechos de *libertad* son simples inmunidades de lesión o constricción (o “libertad de” ) o también facultades de comportamiento no jurídico igualmente inmunes de impedimentos (o “libertad para”, además de “de” ), tendencialmente conviven sin recíprocas interferencias. Los derechos de *autonomía* son *derechos civiles* (o de autonomía privada) o *derechos políticos* (o de autonomía política), consisten en poderes cuyo ejercicio produce efectos sobre las genéricas libertades negativas y positivas, están por el contrario destinados a chocar siempre que no estén jurídicamente limitados y disciplinados. Ibídem, p.103.

<sup>683</sup> Cfr. Pisarello, Gerardo, “Constitucionalismo...”, op.cit., p.247.

disfrutar de la condición normativa de la constitución, desarrollando su eficacia como normas de rango constitucional y a los que, deben someterse todos los poderes del Estado. De esta manera las normas fundamentales de nuestro tiempo se consolidan y completan su normatividad básicamente a través de los mecanismos de control constitucional. Estos principios constitucionales pueden considerarse como los instrumentos normativos fundamentales para la realización de los valores superiores del sistema jurídico constitucional de un determinado Estado, sin embargo estos no deben ser considerados aisladamente sino como parte integrante de un sistema que desarrolla una función de ordenación dentro del derecho.

En el presente ejercicio académico dejamos establecido que la función del órgano jurisdiccional se materializa en la labor de un juez o de un magistrado al fungir como aplicador e intérprete de la ley. Es decir, según el paradigma constitucional la jurisdicción como tal, tutela los derechos que aunque protegidos por normas de derecho objetivo han quedado insatisfechos, por existir incertidumbre en los términos normativos que deben tutelarse, o porque aun siendo reconocidos existe inobservancia de las hipótesis examinadas. A esto, hay que agregar la regla de que la función jurisdiccional queda depositado en un órgano llamado poder judicial, cuya función consiste en resolver conflictos que surjan entre los ciudadanos, entre estos y los poderes públicos mediante la aplicación del derecho.

Así el parámetro constitucional nos indica que el poder judicial está integrado por los órganos que de acuerdo con la constitución y las leyes tienen atribuido la función jurisdiccional, estos órganos son independientes, sometidos a la constitución y al orden jurídico establecido por ésta. Es en este momento donde se debe destacar la posición de la constitución, como una de las piezas claves del sistema de organización y distribución del poder, asignando al poder judicial una de las tareas más importantes, que no es solamente la de resolver conflictos también será la de fungir como interprete supremo de la constitución.

Subrayamos el problema que se detecta para la norma fundamental para construir los mecanismos a través de los cuales asegurar a los justiciables una protección, plena y efectiva contra los excesos de los poderes públicos, lo que supone una limitación para la



jurisdicción central y la local en sus respectivas esferas. En este sentido advertimos que el poder judicial cumple una triple función, primero la protección de las garantías individuales, segundo mantener dentro de su perímetro respectivo a las jurisdicciones según sus competencias. Cabe señalar que la facultad para hacer cumplir la constitución como norma superior de las leyes estatales, es una contribución de raigambre americana a la ciencia política –y después para el constitucionalismo moderno en general.

Hace falta destacar que el correcto desempeño de la actividad que desarrollan los aparatos jurisdiccionales supone la base que sostiene al Estado Constitucional Social y de Derecho, virtud a la importancia que ha adquirido la jurisdicción constitucional eje sobre el cual gravitan un sin número de cuestiones que afectan al Estado constitucional y la esencia misma del derecho.

A través del presente ejercicio académico ensayamos estudiar los antecedentes constitucionales e históricos sobre los cuales descansa la construcción y evolución de la estructura judicial mexicana, teniendo como objetivo el establecer cuáles son los parámetros de organización jurisdiccional sobre los que se construye el sistema de justicia en general y en lo particular respecto del sistema de procesamiento penal, sus consecuencias en cuanto a la organización jurídica, la eficacia del modelo de administración de justicia. El objetivo que nos planteamos fue estudiar sí el desempeño institucional se puede ubicar dentro de los lineamientos que sostienen un estado constitucional social y de derecho.

En esta misma línea de análisis, se estudió la evolución histórica e institucional del procedimiento penal, y las etapas por las que han pasado las instituciones procesales mexicanas en la materia, con el objeto de determinar los mecanismos jurídicos e institucionales que han vertebrado el sistema de enjuiciamiento penal, que motivaron una reforma constitucional en 2008. El tema central a reformar fueron concretamente en materia penal y procesal penal de gran envergadura, trastocando la estructura y funcionamiento del aparato jurisdiccional a nivel sistémico, como el nuevo sistema acusatorio, los principios del proceso penal, los derechos del imputado, derechos de la víctima y ofendido entre otros aspectos tanto procedimental como institucional, con

esencial repercusión en materia de principios, catálogo de derechos y garantías fundamentales y constitucionales.

Desde nuestra perspectiva advertimos que en las distintas etapas que abren paso a cada época constitucional en México, se producen patologías reformistas, según el momento político y jurídico por el que se esté atravesando. Así en las distintas etapas constituyentes en el desarrollo de nuestra exposición anotamos los conflictos acontecidos entre las tesis independentistas y las colonialistas; entre el federalismo y el centralismo; liberalismo versus centralismo; liberalismo versus imperialismo, y por último las ideas del constitucionalismo versus autoritarismo. Huelga decir que cada etapa desencadena el consiguiente despliegue ideológico, jurídico y político que respectivamente corresponde.

Reconocemos las aportaciones de cada etapa a la vida constitucional y jurídica mexicana, su impacto en la construcción progresiva del sistema jurídico-institucional. El elemento sustancial para efectos de nuestro estudio, es la adopción de un régimen constitucional, en el reconocimiento del Estado a nivel internacional, que está sujeto al reconocimiento de los derechos fundamentales. ¿En qué consiste todo esto?, pues en la construcción no solamente formal de normas jurídicas, sino que a través de estas se materialice expresamente un conjunto sistémico y sistemático, que base la realización de los valores constitucionalmente establecidos por el Estado Constitucional Democrático de Derecho.

Una vez establecimos que la Constitución es quien organiza política y jurídicamente al Estado, edificando el régimen bajo el cual se conduce la vida jurídica nacional, en todos sus ámbitos, en cada uno de los aspectos que conforman al aquel, así también se definen reglas que determinan los perfiles de las instituciones normadas por la norma fundamental. Es así como la carta fundamental mexicana además de crear a los órganos del Estado, y sus instituciones también fija las actividades de los mismos.

En este tenor el esfuerzo de construcción del Estado Mexicano a través de una constitución, pasa por un conjunto de normas programáticas por medio de las cuales tienen definición las instituciones del estado, sus facultades y procedimientos. Uno ejemplo de esto es el proceso

penal mexicano. Así los fundamentos constitucionales que sostienen el sistema de procesamiento penal, son desarrollados por el orden constitucional, para después desarrollarse a través del orden normativo secundario.

En México en la última década se han producido una serie de reformas constitucionales en distintas materias, una de ellas fue la reforma constitucional de 2007-2008 en el que se modifica el modelo del proceso penal para adoptar un sistema acusatorio-oral. Por distintas vías y voces tanto doctrinales como institucionalmente se justificó el cambio de método, que cambiaría también la ingeniería procesal caracterizada hasta ese momento como principalmente escrito con algunos matices de oralidad<sup>684</sup>.

Así lo confirman también los diversos tratados internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica; El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos adoptado por la ONU; La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; La Convención de Salvaguarda de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales, del Consejo de Europa; El Proyecto de Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Procedimiento Penal, y qué decir de los numerosos encuentros sobre sistemas procesales latinoamericanos, un ejemplo de las propuestas fue un código tipo.

La visión general fue una reforma integral al sistema de justicia penal, instaurando un sistema acusatorio en el que se respeten los derechos tanto de la víctima como del imputado, sostenido de manera expresa por el principio de inocencia para este. Este proceso se rige bajo los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Se presume que bajo la característica de la oralidad ayudará a fomentar la transparencia, al mismo tiempo que garantizar una relación directa entre el juez y las partes, con el objeto de que los procedimientos penales sean más ágiles y sencillo. Se dispuso la inclusión de jueces de control que resuelvan de manera inmediata, respetando las garantías

---

<sup>684</sup> Nos detuvimos a mencionar brevemente los estados de México que han cambiado sus legislaciones procesales, adjetivas y sustantivas, para adaptarse a la reforma constitucional. Hubo algunos de estos estados que iniciaron antes de la misma, es el caso de Chihuahua y Nuevo León. De igual forma subsisten estados con el sistema tradicional, como se le ha denominado.

de las partes. Así quedan establecidos a la par un sistema integral de garantías, tanto para la víctima, como para el imputado, de igual forma dispone el conjunto de principios generales que rigen el proceso penal<sup>685</sup>.

Hoy en día son sumamente criticables los sistemas que no contemplan el juicio oral dentro de su estructura procedimental, más aun en materia penal, pues es visto como el medio que permite un mejor respeto a los derechos fundamentales dentro del desarrollo del enjuiciamiento mismo, y que al mismo tiempo permite hacer una efectiva impartición de justicia. Así lo contemplan la mayoría de las democracias occidentales, sino además dicho sistema es referido por las convenciones internacionales. Todas se inclinan por la adopción del sistema de oralidad para la justicia penal, porque se le atribuye una mayor salvaguarda y tutela de los derechos humanos.

En consecuencia, la norma constitucional dispuso también las bases procesales<sup>686</sup> conforme a las cuales todas las autoridades del Estado deben proceder, instruyendo el principio de legalidad, que no es otra cosa que todo acto contrario a la constitución carece de valor jurídico. Así es como deja sentadas las bases de que cada órgano debe tener competencia expresa e innegable, salvo que la constitución manifieste lo contrario. La competencia se traduce en que cualquier órgano para actuar o conocer de un proceso determinado. Este fundamento lo encontramos en el artículo 16 de la Constitución Mexicana a través del cual se disponen los requisitos de mandamiento escrito, autoridad competente, fundamentación y motivación.

---

<sup>685</sup> Dictámenes de primera lectura, de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia, de Gobernación; de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, segunda, con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del 13 de Diciembre de 2007. Disponible en [www.cddhcu.gob.mx](http://www.cddhcu.gob.mx), consultado 1 de junio de 2015.

<sup>686</sup> Es cierto que algunos estados del país desarrollaron sus propios códigos tanto adjetivos como sustantivos, sin embargo, 05 de marzo de 2014 fue promulgado el Decreto por el que se expidió para regir la vida jurídica en todo el país en materia procesal penal, un Código Nacional de Procedimientos Penales, que los estados deben ratificar y aplicar. Este código también se creó con el objeto de regir en la materia federal, donde aún está pendiente la entrada en vigor del sistema acusatorio oral. El documento está disponible: [www.cddhcu.gob.mx](http://www.cddhcu.gob.mx).

Estas garantías constitucionales, tienen el carácter de instrumentales porque, a su vez, revelan la adopción dentro del régimen jurídico nacional del principio constitucional de legalidad, como una garantía del derecho humano a la seguridad jurídica, acorde a la cual las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo que expresamente les facultan las leyes, en el entendido de que son la constitución y el orden jurídico que de ésta emana la manifestación de la voluntad general. Así el parámetro antes mencionado tiene la doble funcionalidad de imponer facultades expresas el que todo acto de autoridad que no represente el ejercicio de una facultad expresamente conferida se considera arbitrario. Abriendo la oportunidad para que el justiciable combata el acto arbitrario a través de un control jurisdiccional, le queda a su cargo recurrir a los órganos de control a hacer valer la asumida ausencia o insuficiencia de fundamento legal y motivación dentro de dicho procedimiento.

Concretamente en la materia penal expresamente prescribe que a ninguna persona podrá privarse de la libertad, sino en virtud de mandamiento escrito, expedido por autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento, esto es que medie acusación formal contra el imputado, que los hechos sean constitutivos de delito, sancionado con pena corporal, y que dicha acusación se haga acompañar de información bastante que acredite la probable responsabilidad de quien se acusa.

La reforma constitucional que implantó el sistema acusatorio oral, motivo también una reforma procesal de carácter instrumental, es decir que fue necesario que los principios de la publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, fueran desarrollados por los códigos procesales penales a fin de que pudieran ser articulados por todos los sujetos procesales, no solamente las instituciones jurisdiccionales en la materia encargándose de hacerlos llegar a su receptor, el ciudadano. Si partimos de la premisa de que todos estos principios que dan vida al modelo procesal estudiado, derivan del derecho fundamental al debido proceso, siendo un derecho sustantivo, que se materializa a través de los códigos procesales. ¿Cuál será el resultado esperado? La oportunidad del justiciable a

un juicio justo, en completo equilibrio, en igualdad de circunstancias lo que en definitiva arroja la calidad del sistema de justicia penal ofrecida por el Estado Mexicano.

Existen dos elementos que condicionan un sistema procesal: uno es el derecho sustantivo y el otro las normas constitucionales, y los tratados internacionales que conforman el marco normativo básico. Según Goldschmidt: los principios de la política procesal de una nación no son otra cosa que segmentos de su política estatal. Se puede decir que la estructura del proceso penal de una nación no es sino el termómetro de los elementos corporativos o autoritarios de su constitución. Para él la ciencia procesal ha desarrollado un conjunto de principios opuestos constitutivos del proceso, de tal manera que el triunfo de uno sobre otro, o bien la fusión de ellos será lo que caracterice la historia del proceso<sup>687</sup>.

Al enfrentarnos al reto de conformar un nuevo proceso penal, es indudable la lección y la perspectiva que nos ofrece la historia de los sistemas procesales que existen respecto de su situación actual. En este sentido correspondió plantearnos ¿Cuáles son las líneas maestras para la configuración de un proceso penal basado en los principios que conforman un Estado Democrático Constitucional de Derecho?, ya que según la respuesta que obtengamos, surgirán un conjunto de principios llamados “no negociables”, y otros tantos de contenido meramente histórico, cultural, social y económico que a su vez determinaran los mecanismos jurídicos que conformen cada sistema procesal<sup>688</sup>. Lo que en principio nos permite concluir que serán los principios de la política procesal los que definan el sistema procesal, y no al revés.

Hemos hecho eco de la doctrina garantista, que advierte que para la conformación de un sistema penal garantista, son necesarias garantías de elaboración. Estas garantías también deben ser desarrolladas en función del derecho, o mejor dicho del respeto de parte del Estado a la libertad personal, esto es que aquel Estado que no respeta la libertad personal, entendiéndose orden de detención, por muchos juicios orales que tenga, es un estado que no respeta los derechos que derivan del debido proceso como el resto de derechos fundamentales.

Algunos elementos que fueron evidenciados por nuestra parte, con respecto a la

---

<sup>687</sup> Cfr. Goldschmidt, James, *“Los principios...”*, op.cit., p. 109.

<sup>688</sup> Cfr. Armenta Deu, Teresa, *“Nuevo Proceso...”*, op.cit., p.32.

implementación de la reforma en México, es la subsistencia en el abuso de la prisión preventiva, sin mayores alternativas determinadas por la ley penal en este sentido. Un gran número de delitos aún en los estados del país con el sistema acusatorio, resuelven sus vinculaciones a proceso con la medida cautelar de prisión preventiva. Con respecto a otras posibles sanciones, advertimos un panorama de desigualdad, fomentado desde las Fiscalías como también de parte de los jueces de garantía, aplicada claramente como pena sustituida.

Y qué decir de las prácticas de las detenciones, así como de la aplicación de penas de prisión. Las altas tasas de encarcelamiento en México obedecen a una construcción política, esto es que el número de personas que están en prisión no es consecuencia de las decisiones judiciales, sino de un discurso político que tiene como referencia la aceptación del público, los medios de comunicación etc. Las cárceles en México, en la actualidad como en buena parte del mundo son bodegas de seres humanos donde la rehabilitación es impensable. Lo que responde a un uso persistente de la pena de prisión para casos en los que se estima que pueden resolver con sanciones alternativas.

So pretexto de reducir la incidencia delictiva el Sistema Penal Mexicano, justifica que con la prisión preventiva se inhabilite al agente criminógeno para continuar delinquir, y que como consecuencia de ello, tiene también efectos disuasorios al percibir el riesgo de captura, justificando que “la efectividad” del sistema penal lo hará dejar de delinquir. El sistema penal en México ha optado también por clasificaciones como “delitos graves”, “peligrosidad”, esto es que el sujeto a proceso no sólo es probable responsable, sino que también es “probable peligroso”. En este sentido es el propio legislador quien amplía los supuestos legales de gravedad y de peligrosidad, con la correspondiente apoyo del órgano juzgador, haciendo efectivas las restricciones a la libertad de los ciudadanos sujetos a proceso penal<sup>689</sup>.

La problemática que subyace a nuestro análisis es que la construcción del sistema judicial

---

<sup>689</sup> Pueden consultarse los estudios *“Delito y cárcel en México, deterioro social y desempeño institucional”*, publicado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), disponible en [www.cide.edu.mx](http://www.cide.edu.mx) y en [www.miguelcarbonell.com](http://www.miguelcarbonell.com), consultado el 2 de junio de 2014.

en México continua funcionando bajo los esquemas del sistema inquisitivo, es decir el cambio de modelo procesal, requiere el abandono de la cultura inquisitiva que incide en el modelo de administración de justicia en su totalidad, nos referimos no solamente al modelo de procesamiento, también a las dinámicas con la demás partes involucradas han seguido funcionando.

Son indiscutibles los problemas de seguridad que se viven en México, como en otras partes del mundo, un sector académico y gubernamental amplio puso su fe en la conformación del nuevo sistema de justicia penal. En contraste a esta visión otras opiniones académicas –que compartimos- ha expresado su preocupación al querer resolver problemas estructurales con una reforma solamente a los juicios o al sistema de procesamiento penal<sup>690</sup>. En el periodo que ha transcurrido a nuestro estudio ha sido desarrollado el multicitado sistema en varios, estados así como la capacitación para su entrada en vigor a nivel federal en el año 2016. Sin embargo, también es evidente que los problemas de seguridad no han sido atajados en su totalidad y que ni el sistema penal acusatorio, ni sus principios son una varita mágica a través de la cual se resuelvan las problemáticas de seguridad.

No obstante lo anterior, quedo expuesta la opinión académica de autores como Sergio García Ramírez manifestando su preocupación y condenando el actuar ante la manera en que el gobierno mexicano viene resolviendo la lucha contra el crimen común así como la estrategia de combate al crimen organizado, a menudo adoptando modelos autoritarios y represivos, en los que se sanciona por igual a un delincuente peligroso que a un líder de movimientos sociales. Según este autor las reforma constitucional de 2008 aprobadas crearon un doble sistema penal, uno ordinario y otro especial para quienes son considerados enemigos del estado, estas medidas son puerta peligrosa hacia la Guantanamoización poniendo en riesgo al país de incurrir en formas antidemocráticas<sup>691</sup>.

---

<sup>690</sup> Cfr. Islas Colín, Alfredo, *“Las Reformas...”*, op.cit., p.34-37

<sup>691</sup> Ibídem, p. 87.



Alberto Daunis<sup>692</sup> nos ayuda a confirmar el amplio protagonismo de la seguridad, a partir de los atentados las Torres Gemelas en Nueva York y las explosiones acontecidas en Madrid que pusieron en alerta las políticas de seguridad de los distintos Estados. Que arroja como resultado que la actuación de los gobiernos se enfoque en el endurecimiento de las leyes, y también las medidas policiales para aumentar la seguridad, con un costo directo para los derechos humanos y las garantías. En México en los últimos tiempos hemos sido testigos en la disposición del gobierno la necesidad de promover en las normas jurídicas penales que respondan con dureza cualquier ataque a la seguridad. No es útil para explicar esta visión los modelos de derecho penal mínimo y el derecho penal máximo de Ferrajoli, aquí el autor nos explica que el primero se define por tutelar las libertades de los ciudadanos respecto del arbitrio punitivo, mientras el segundo es excesivamente severo, incierto e imprevisible<sup>693</sup>.

Por lo tanto se advierte una clara confrontación entre Estado de Derecho y Estado Absoluto, entre el Derecho Penal Garantista y el Derecho Penal autoritario. Como si se tratará de una especie de péndulo desplazado entre dos extremos el humanismo versus autoritarismo, del derecho penal liberal y el derecho penal autoritario, el derecho penal garantista y el derecho penal de la seguridad. Con pesar observamos la aproximación del péndulo a un derecho penal máximo con la consiguiente limitación de derechos y libertades fundamentales<sup>694</sup>.

Son varias las organizaciones no gubernamentales<sup>695</sup> que se han pronunciado en contra de la adopción de las medidas tomadas por el poder público en México<sup>696</sup>, poniendo en grave

---

<sup>692</sup> Cfr. Daunis Rodríguez, Alberto, *"Seguridad, Derechos Humanos y Garantías Penales: ¿Objetivos comunes o aspiraciones contrapuestas?"*, Derecho Penal de la Democracia vs. Seguridad Pública, XVII Congreso Universitario de Alumnos de Derecho Penal, coord. Ignacio Berdugo Gómez de la Torre, Nieves Sanz Mulas, Primera Edición, Editorial Comares, Granada, España, 2005, p.213.

<sup>693</sup> Cfr. Ferrajoli, Luigi, *"Derecho..."*, op.cit., 104.

<sup>694</sup> Cfr. Daunis Rodríguez, Alberto, *"Seguridad, Derechos..."*, op.cit., p.215.

<sup>695</sup> "La tortura es generalizada en México. Ocurre desde la detención y hasta la puesta a disposición de la justicia, y con fines de castigo e investigación. El Relator Especial identificó varias causas de la debilidad de las salvaguardias de prevención y recomienda medidas para atenderlas. Observo también serios problemas en las condiciones de detención, especialmente hacinamiento". Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, disponible en [www.hchr.org.mx](http://www.hchr.org.mx)., Pueden consultarse estos trabajos recientes *"Alto a la Tortura"*, *"Criminalización de la Protesta Social"*, *"los Derechos humanos se violan cada día en México"*, Amnistía Internacional México, disponible en

riesgo cumplir con los objetivos de un estado democrático, basado en respeto a los derechos humanos, estas instituciones han denostado al gobierno mexicano por violaciones sistemáticas a derechos como la libertad, el principio de no discriminación, la presunción de inocencia, el derecho a una tutela judicial efectiva, el principio de proporcionalidad de las penas o el derecho a no ser torturado. El problema se ubica en la clara limitación de derechos fundamentales en aras de una política criminal de seguridad que dé más seguridad estatal y ciudadana.

Sin cuestionamiento alguno los poderes públicos deciden reformar constantemente la legislación penal, en todas sus áreas, con el objeto de establecer más delitos, penas más altas, estableciendo reglas cada vez más severas, sin atender los principios y las garantías penales y procesales, so pretexto de mayor eficacia ante la criminalidad. En suma su respuesta de ataque es a través del instrumento más severo del que disponen: el derecho penal. Desde esta lógica vemos como el Estado Mexicano renuncia a combatir las causas generadores de las conductas delictivas que se encuentran en otro lado, por ejemplo el desempleo, la falta de acceso a la educación, salarios deficientes que no generan riqueza en la población, marginación de grupos sociales vulnerables como las mujeres, los niños, los jóvenes<sup>697</sup> y los indígenas<sup>698</sup>.

---

[www.alzatuvoz.org](http://www.alzatuvoz.org) y [www.amnistia.org.mx](http://www.amnistia.org.mx), Informe Mundial 2014: México, México: Crisis de desapariciones forzadas, disponible en [www.m.hrw.org](http://www.m.hrw.org).

<sup>696</sup> El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) presentó un informe reconociendo que la mayoría de la población está excluida de la justicia en todas sus vertientes, hay espacios de ilegalidad e impunidad, de corrupción y de abuso. A lo anterior se agrega la desastrosa situación que impera en el ámbito penal, es preciso concluir que la procuración e impartición de justicia en México se enfrenta a situaciones de desastre que hacen cuestionable cuando menos la existencia de un estado de derecho en el país y confluye en la crisis institucional generalizada...Cfr. *"Peña, ante la crisis de justicia"*, Editorial, Diario La Jornada, 28, marzo de 2015, disponible en: [www.jornada.unam.mx](http://www.jornada.unam.mx)., consultado el 29 de marzo de 2015, Véase también Justicia Cotidiana, Informe de los Foros de Justicia Cotidiana, Primera Edición, CIDE, Centro de Investigación y Docencia Económica, A.C., México, D.F., 2015, Disponible en: [www.cide.edu.mx](http://www.cide.edu.mx).

<sup>697</sup> "La mayor parte de nuestras comunidades rurales ofrece, entre numerosas carencias, la de una casi total desorganización, que las sitúa en el más amplio subdesarrollo. Sus niveles económico, social y cultural son apenas perceptibles. Muchas carecen de tierras de cultivo, otras de agua potable y comunicaciones en casi todas. Las causas están diseminadas", dijo Raúl Isidro Burgos a sus alumnos de la generación 1964-1970 de la Normal de Maestros de Ayotzinapa una tarde de agosto de 1970. La realidad que retrataba el académico, que da nombre a la Normal Rural de Guerrero, se parece mucho a las condiciones que siguen prevaleciendo en la mayor parte del país. Más de 46% de la población mexicana vive en la pobreza, mientras que 11% sobrevive en condiciones de pobreza extrema, de acuerdo con los últimos datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Las Escuelas Normales, en particular las Rurales, nacieron con la idea de dar la oportunidad a las comunidades más pobres de México de acceder a una

Estas tendencias son constatables nacional como internacionalmente dice Muñoz Conde<sup>699</sup>, esta situación de excepción corre el peligro de generalizarse y convertirse en la regla que inspire la actuación de los órganos encargados de la aplicación del Derecho Penal, llámese policías y jueces, abriendo paso a un proceso de fascistización social de las masas, más propio de dictaduras que de democracias participativas y respetuosas con las minorías, con la discrepancia pacífica y el legítimo pluralismo de todas las culturas e ideologías que respeten el marco básico de derechos fundamentales. Nos sumamos a la opinión del autor al comentar que es claro que se antepone el interés y el valor de la seguridad como pretexto para no hacer los cambios económicos y sociales necesarios para reducir los niveles de pobreza y hacer valer una mayor justicia social en el mundo.

Con el adjetivo de enemigos el Estado<sup>700</sup> se han estigmatizado ciertos colectivos considerados como peligrosos, se acusa de que estos grupos tienen la capacidad de riesgos

---

educación que ayudara al mejoramiento de sus vidas. Pero el abandono de este modelo educativo hizo que muchas desaparecieran y que las restantes lucharan por sobrevivir. “Creo que el plan del gobierno antes de Ayotzinapa era que las Escuelas Normales murieran de inanición, y eso es una verdadera vergüenza. En lugar de enfrentar el problema, lo que decidieron fue ahogarlas económicamente”, asegura Manuel Gil Antón, investigador del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México (Colmex). Para evitar morir de hambre, las escuelas normales rurales salen todos los años a exigir a los gobiernos estatales que, primero, abran la convocatoria de nuevo ingreso para seguir operando, y, después, más recursos para mantener y dar clases a sus alumnos. El futuro de la educación básica en México parece encontrarse en un volado con una moneda de dos caras: la exigencia de una mayor calidad de los educadores mexicanos para terminar con la desigualdad y el olvido de las Escuelas Normales de Maestros”. Cfr. Arteaga, Roberto y Muciño, Francisco, *La historia no contada de Ayotzinapa y las Normales Rurales*, Economía y Finanzas, Revista Forbes México, Mensual, publicado el 25 de diciembre de 2014, disponible en [www.forbes.com.mx](http://www.forbes.com.mx), consultado el 4 de junio del 2015.

<sup>698</sup> Algunos ejemplos son los del Dr. José Manuel Mireles Valverde, el profesor Alberto Patishtán Gómez, Nestora Salgada entre otros. “El gobierno federal no perdona a las policías comunitarias y los grupos de autodefensa que hayan sido capaces de frenar al crimen organizado, y aunque conoce perfectamente dicha situación y sabe de la inocencia de las personas que se armaron para protegerse ante la inacción del Estado, las encarcela y trata como a delincuentes”. Brooks, David, *La exigencia de que Nestora Salgado sea liberada crece también en Estados Unidos*, Política, Diario La Jornada, del 22 de agosto del 2014, consultado el 3 de junio de 2015.

<sup>699</sup> Cfr. Muñoz Conde, Francisco, *El Nuevo Derecho Penal Autoritario*, Estudios Penales en Recuerdo del Profesor Ruiz Antón, VV.AA. coordinadores, Primera Edición, Tirant lo Blanch, Valencia, España, 2004, p. 805. En la misma obra véase también Urbina Gimén Ortiz de, Íñigo, *La referencia político-criminal en el derecho penal contemporáneo (¿Es el derecho penal la barrera infranqueable de la política criminal, o se orienta por ella?)*.

<sup>700</sup> A partir del sexenio de Felipe Calderón, las fuerzas armadas han venido aplicando un plan de exterminio, encubierto bajo el disfraz de una “guerra contra la criminalidad”. En 2008, el documento La Secretaría de la Defensa Nacional en el combate al Narcotráfico alertaba sobre el riesgo de la inviabilidad del país ante la

para la convivencia pacífica de la sociedad. Así el derecho penal se transforma para constituirse como el derecho penal del enemigo donde los individuos son clasificados como fuentes de riesgo o peligro que deben ser neutralizados, devolviendo la legislación penal a etapas pasadas, identificadas por el autoritarismo y la deshumanización. Todo esto bajo el pretexto de la protección ciudadana y justificar la actuación represiva del Estado.

En este orden de ideas hay que destacar los medios de comunicación, es decir la publicidad mal implementada se ha convertido en un arma letal al servicio de los poderes públicos. Los medios de comunicación son el canal a través del cual los gobiernos promueven sus agendas políticas, para transmitir mensajes muy específicos en contra de los enemigos del Estado, provocando nefastas consecuencias para los ciudadanos. En México es frecuente que los medios de comunicación den a conocer nombres y fotografías o imágenes de personas que son privadas de su libertad, con el objeto de cumplir más que con un procesamiento penal respetuoso de los derechos y garantías constitucionales, con la agenda política del gobierno. Sin que exista ningún elemento que los haga culpables de haber cometido un delito y sin embargo son exhibidos públicamente como violadores, asesinos o ladrones. En esta lógica, los medios de comunicación con la conveniencia de las autoridades policiales o ministeriales, vulneran incuestionablemente de la presunción de inocencia, entre otros derechos fundamentales reconocidos por la propia constitución mexicana y los tratados internacionales en la materia que el Estado mexicano ha suscrito e integrado al derecho interno.

Por tanto, bajo la supremacía de las tesis del constitucionalismo moderno la situación -se supone- cambia sustancialmente pues la constitución es el fundamento que rige todo el orden jurídico interno de un país. Esta premisa supone que el orden jurídico emane de las disposiciones constitucionales, además de que debe ser aplicado e interpretado de

---

“previsible simbiosis” entre cárteles criminales y “grupos armados desafectos al gobierno”, objetivos a “aniquilar”, mediante una cruzada nacional de tipo contrainsurgente...en materia de seguridad nacional el control territorial del país está a cargo de las fuerzas armadas. El Ejército y la Marina se reparten la vigilancia de zonas estratégicas del país, incluidas las áreas de producción de hidrocarburos, electricidad. Además, con la militarización de las policías, municipal, estatal y federal son los miembros de las fuerzas armadas los que se encuentran al frente de las secretarías de seguridad pública así como de los aparatos de inteligencia en la mitad de los estados mexicanos. Cfr. Fazio, Carlos, *La Catástrofe que viene*, Opinión, Diario la Jornada, de fecha 28 de marzo del año 2015, disponible en: [www.jornada.unam.mx](http://www.jornada.unam.mx), consultada el 28 de marzo 2015.

conformidad con los preceptos constitucionales. De esta lógica entendemos que la constitución son el fundamento del sistema penal y todos sus complementos, institucionales, estructurales y jurídicos. Añadimos a esta aseveración el nuevo contexto internacional en materia de protección de derechos humanos, en el caso Mexicano, sujeto al bloque interamericano de derechos humanos.

De tal suerte que el impacto del constitucionalismo dice Barbero Santos<sup>701</sup>, en el sistema de justicia penal, significa que en los Estados democráticos los principios penales tienen la cualidad de ser principios constitucionales. Subraya el autor que el individuo no es servidor del Estado, sino que el Estado justifica su existencia en la medida que está al servicio de la comunidad, en la medida que está al servicio del hombre. Es necesario poner límites al actuar del Estado, no sólo por su manifestación como poder ejecutivo, legislativo previendo un sistema de control constitucional de las leyes, interno y ahora externo. Por tanto, se destaca la importancia de la función jurisdiccional, para que por medio de su intervención se hagan efectivos y compatibles los principios penales, el ordenamiento jurídico derivado de estos, con los principios democráticos por tener una jerarquía superior con respecto del resto.

---

<sup>701</sup> Cfr. Barbero Santos, Marino, *Estado constitucional de Derecho y sistema penal.*, Dereito e Ciudadania, Año IV, No.10-11, 2000-2001, Praia, Cabo Verde, Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional, Universidad de Castilla La Mancha, disponible en [www.cienciapenales.net](http://www.cienciapenales.net), p.14.

## **BIBLIOGRAFIA:**

Agudo Zamora, Miguel, Milione, Ciro, *El Derecho a ser informado de la Acusación en la Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional Español, Teoría y Realidad Constitucional*, Núm. 23, UNED, Madrid, España, 2009.

Aguilar López, Miguel Ángel, Análisis comparativo, VV.AA., *Temas de Derecho Procesal Penal* México España, Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2005.

Alcalá-Zamora y Castillo, Niceto, *Veinticinco Años de Evolución del Derecho Procesal 1940-1965*, Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, México D.F., 1968.

\_\_\_\_\_, *Estudios de Teoría General e Historia del Proceso (1945-1972)*, Tomo II, Número 12-30, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 1992.

Alcaraz Mondragón, Eduardo, “*Ministerio Público y Derechos Humanos*”, *Panorama Internacional sobre Justicia Penal, Proceso y Justicia Penal Internacional, Culturas y Sistemas Jurídicos comparados, Séptimas Jornadas Sobre Justicia Penal*, Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México D.F., 2007.

Alexy, Robert, “*Epílogo a la Teoría de los derechos fundamentales*”, *Revista Española de Derecho Constitucional*, No. 66 Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, España, 2002.

\_\_\_\_\_, “*Los derechos fundamentales en el Estado Constitucional Democrático*”, *Neoconstitucionalismo(s)*, Primera Edición, Editorial Trotta, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Madrid, España, 2003.

Alvarado Martínez, Israel, “*La investigación procesamiento y ejecución de la delincuencia organizada en el sistema acusatorio*. Series juicios orales Núm. 2, Primera edición 2012, primera reimpresión 2014, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 2014.

Álvarez Sacristán, Isidoro, “*Juicio Verbal Versus Escrito*”, *Diario La Ley*, Tomo 4, Grupo Wolters Kluwer, Madrid, 1991.

Ambos, Kai, *Breves comentarios sobre la reforma judicial en América Latina*, *Anuario de Derecho Penal* 2009, Université de Fribourg, Revista en línea disponible en [www.unifr.ch/ddp/derechopenal/articulos/a\\_20080521\\_16.pdf](http://www.unifr.ch/ddp/derechopenal/articulos/a_20080521_16.pdf).

Ambrosio Morales, María Teresa, “*La Atención a los Ofendidos y a las Víctimas de los Delitos en México*”, *Estudios Jurídicos en Homenaje a Olga Islas de González Mariscal*, Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 2007.

Aragón Reyes, Manuel, *“Principios Constitucionales”, Temas Básicos de Derecho Constitucional*, Tomo I, Primera Edición, Editorial Civitas, Madrid, España, 2001.

Arellano García, Carlos, *El Juicio de Amparo*, Primera edición, Editorial Porrúa, México, D.F., 1982.

\_\_\_\_\_, *El Juicio de Amparo*, Editorial Porrúa, Primera Edición, México 1984.

Arilla Bas, Fernando, *“El Procedimiento Penal en México”, Manual del Abogado Penalista*, Editores Mexicanos Unidos, Cuarta Edición, México, D.F., 1973.

Armenta Deu, Teresa, *“Nuevo Proceso Penal”, Memorias del Congreso Internacional de Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados, II Proceso Penal*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2005.

\_\_\_\_\_, *“La reforma del proceso penal: principios irrenunciables y opciones de política criminal”, Revista del Poder Judicial*, Tomo II, Número 58, Tercera Época, Segundo trimestre, Consejo General del Poder Judicial, Madrid 2000.

Armstrong Brandwood, Joanne, *“You say “fair trial” and I say “free press”: British and American approaches to protecting defendants rights in high profile trials”, New York University Law Review*, Vol.75, No.5, November 2000, USA.

Arteaga Nava, Elisur, *Derecho Constitucional*, Oxford University Press Harla, Colección Juristas Latinoamericanos, México, D.F. 2000.

Arteaga, Roberto y Muciño, Francisco, *La historia no contada de Ayotzinapa y las Normales Rurales*, Economía y Finanzas, Revista Forbes México, Mensual, publicado el 25 de diciembre de 2014.



Arozamena Sierra, Jerónimo, “*Jueces Ordinarios y Constitución*”, Documentación Jurídica, Jornadas sobre El Poder Judicial, Tomo XII, Enero-Junio, 45/46, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, España, 1985.

Azaola, Elena, Bergman, “*Delincuencia Marginalidad y Desempeño institucional*”. Resultados de la tercera encuesta a población en reclusión en el Distrito Federal y en el Estado de México. CIDE, México D.F. 2009.

Balaguer Callejón, Francisco, VV.AA., *Manual de Derecho Constitucional*, Volumen I, Primera Edición, Editorial Tecnos, Madrid, España, 1999.

Barbabosa Oropeza, Ana luisa, *Prisión Preventiva vs. Presunción de Inocencia, Iter Criminis*, Revista de Ciencias Penales, Tercera Época, Número 4, Noviembre-Diciembre, 2007.

Barbero Santos, Marino, *Estado constitucional de Derecho y sistema penal., Dereito e Ciudadania*, Año IV, No.10-11, 2000-2001, Praia, Cabo Verde, Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional, Universidad de Castilla La Mancha.

Bentham, J., *Tratado de las pruebas judiciales*, traducción de M. Ossorio Florit, EJEa, Buenos Aires, 1959.

Berizonce, Roberto Omar, Martínez Astorino, Roberto Astorino, *Juicios Orales. La Reforma Judicial en Iberoamérica, Homenaje al Maestro Cipriano Gómez Lara*, Ferrer Mac-gregor, Eduardo, Saíd Ramírez, Alberto, Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 2013.

Bergman, Marcelo (coordinador), *Delincuencia, marginalidad y desempeño institucional. Resultados de la encuesta a población en reclusión en tres entidades de la República Mexicana*, CIDE, México, D.F., 2003.

Bidart Campos, Germán J., “*Marco, Condicionamientos y Frenos del Federalismo*” y, Vescovi, Enrique, “*Régimen Federal*”, IV Congreso Interamericano de Derecho Constitucional, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 1992.

Binder, Alberto, *Introducción al Derecho Procesal Penal*, Buenos Aires, Ed. Ad-hoc, 1993.

\_\_\_\_\_, “*Diez tesis sobre la reforma de la justicia en América Latina*”, *Revista Contribuciones*, Publicación Trimestral de la Konrad –Adenauer Stiftung A.C., Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el desarrollo Latinoamericano, 3/1996, Año XIII, Número 3 (51), Julio-Septiembre 1996.

\_\_\_\_\_, “*La reforma de la Justicia Penal: entre el corto y el largo plazo*”, *Sistemas Judiciales*, Núm. 3, “*Reformas Procesales en América Latina*”, Centro de Estudios de las Américas, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, junio 2002.

Blanco Escandón Celia, “*Los Sujetos Procesales en el Nuevo Proceso Penal*”, *Temas actuales de Justicia Penal*, Sextas Jornadas sobre Justicia Penal, Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 2006.

Barbabosa Oropeza, Ana luisa, *Prisión Preventiva vs. Presunción de Inocencia, Iter Criminis*, *Revista de Ciencias Penales*, Tercera Época, Número 4, Noviembre-Diciembre, 2007, INACIPE, México D.F.

Barragán, Barragán, José, *Introducción al Federalismo (la formación de los Poderes 1824)*, Universidad Nacional Autónoma de México, Primera Edición, México, 1978.

Barragán Salvatierra, Carlos, *Derecho Procesal Penal*, Segunda Edición, Editorial McGraw-Hill/Interamericana, México, D.F., 2004.

Brewer Carias, Alan R., “*Los problemas de la federación centralizada*”, IV Congreso Interamericano de Derecho Constitucional, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 1992.

Brewer-carias, Allan, R., “*Reflexiones sobre la Revolución Americana 1776 y la Revolución Francesa de 1789 y sus aportes al constitucionalismo moderno*”, *Cuadernos de la Catedra*, Universidad Católica “Andes Bello”, No.1, Editorial Jurídica, Caracas, Venezuela, 1992.

Briseño Sierra, Humberto, Reseñas Bibliográficas de Grant J.A.C., “*Control Jurisdiccional de la Constitucionalidad de las Leyes: una contribución de las Américas de la Ciencia Política*”, *Revista de la Facultad de Derecho*, Número 52, octubre-diciembre, Año 1963, Tomo XIII, UNAM, México, D.F.

Brooks, David, *La exigencia de que Nestora Salgado sea liberada crece también en Estados Unidos*”, Política, Diario La Jornada, del 22 de agosto del 2014, consultado el 3 de junio de 2015.

Burgoa, Orihuela, Ignacio, *Derecho Constitucional Mexicano*, Primera Edición, Editorial Porrúa, México, D.F. 1973.

\_\_\_\_\_, *Juicio de Amparo*, Edición, Editorial Porrúa, México, D.F., 1997.

\_\_\_\_\_, *El Juicio de Amparo*, Trigesimacuarta Edición, Editorial Porrúa, México, D.F., 1998

Bustillos Julio, *Federalismo Judicial A través del Amparo*, Relaciones entre las jurisdicciones federal y locales a través del instrumento protector de los derechos fundamentales, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 2010

\_\_\_\_\_, *El Amparo Judicial: A 140 años de la primera sentencia (1869-2009)*, VV.AA., “El Juicio de Amparo a 160 Años de la Primera Sentencia”, Tomo I, Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 2011.

Caballero Ochoa, José Luis, *La Interpretación Conforme, El modelo constitucional ante los Tratados Internacionales sobre los Derechos Humanos y el Control de Convencionalidad*, Primera Edición, Editorial Porrúa, Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, México, D.F., 2013-2014.

\_\_\_\_\_, “*La Cláusula de Interpretación Conforme el Principio pro persona (Artículo 1º, Segundo párrafo, de la Constitución)*”, *La Reforma Constitucional de Derechos Humanos. Nuevo Paradigma*, Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 2011.

Caballero Juárez, José, “*La codificación y el federalismo judicial*”, *Anuario Mexicano de Historia del Derecho*, Volumen XIV, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 2002.

Caballero, José Antonio, “*La Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua*”, gestión 2004-2010, CIDE, México, D.F.

Cabrera Acevedo, Lucio, *El Constituyente de 1917 y El Poder Judicial de la Federación Una Visión del Siglo XX*, Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, D.F., 2002.

\_\_\_\_\_, “*El Poder Judicial durante la Revolución. Cuando cesa de laborar: La Suprema Corte (1914-1917)*”, *Un Homenaje a Don Cesar Sepúlveda*, Escritos Jurídicos, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Primera Edición, México, D.F., 1995.

\_\_\_\_\_, *Los Tribunales Colegiados de Circuito*, Segunda Edición, Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, D.F., 2003.

Calamandrei, Pietro, *la casación civil*, traducción Santiago Sentís Melendo, Editorial Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, 1961, volumen 1 y 2.

Chiovenda Giuseppe, *Ensayos de Derecho Procesal Civil*, Traducción de Santiago Sentís Melendo, Vol. II, Ediciones Jurídicas Bosch y Cía., Chile, Buenos Aires, 1949.

Carbonell Miguel, *En los orígenes del Estado Constitucional: Declaración Francesa de 1789*, Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (Sección peruana), Ilustre Colegio de Abogados de Lima, Cuadernos de Rectorado 23, Editorial Iustitia, S.A.C., Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Lima, Perú, 2012.

\_\_\_\_\_, “*El federalismo en México: introducción a su problemática*”, *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, No. 19, enero-abril, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 1998.

\_\_\_\_\_, “*El Federalismo en México: principio generales y distribución de competencias*”, *Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano*, Año 2003, Konrad-Adenauer-Stiftung, 9ª Edición, Montevideo, Uruguay.

\_\_\_\_\_, “Reflexiones sobre el Monopolio de la Acción Penal y la Autonomía del Ministerio Público”, *Retos y Perspectivas de la Procuración de Justicia en México*, Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 2004.

\_\_\_\_\_, “*Sobre el principio de publicidad de las actuaciones judiciales*”, *La Judicatura*, *Revista Jurídica del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora*,

*Jueces y Lenguaje*, Enero-Junio 2009, Estudios sobre la Filosofía Analítica y Función Judicial, Hermosillo Sonora, México.

\_\_\_\_\_, *¿Qué son y para qué sirven los juicios orales?*, Universidad Nacional Autónoma de México, Editorial Porrúa, Renace, México, D.F., 2009.

Cárdenas Rioseco, Raúl F., *La Prisión Preventiva en México, condena por adelantado o medida de seguridad encubierta*, Primera Edición, Editorial Porrúa, México D.F., 2004.

Carmona Castillo, Gerardo A., “*El nuevo Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca*”, *Cuadernos de Literatura Jurídica*, Número 2, Noviembre 2008, Universidad Autónoma “Benito Juárez de Oaxaca”, Oaxaca, México.

Carpio Marcos, Edgar, *La Jury Constitutionnaire en el Pensamiento de Sieyès*, *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, Año XXXII, No. 95, mayo-agosto, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 1999.

Carpizo, Jorge, *Sistema Federal Mexicano*, *Gaceta Mexicana de Administración Pública Estatal y Municipal*, julio-septiembre 1981, Núm. 3, Ediciones Instituto Nacional de Administración Pública, México, D.F.

\_\_\_\_\_, “*Otra reforma constitucional: la subordinación del Consejo de la Judicatura Federal*”, *Cuestiones Constitucionales*, Revista Mexicana de Derecho Constitucional, Número 2, Enero-Junio, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 2000.

\_\_\_\_\_, “*Los principios jurídico-políticos fundamentales en la Constitución mexicana*”, *Revista de Derecho del Estado*, No.27, Semestral, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Colombia, 2011,

Carranco, Zúñiga Joel, *Poder Judicial*, Editorial Porrúa, Primera Edición, México, D.F., 2000.

Carranza, Elías, Paulino Mora, Luis, Zaffaroni Raúl, Eugenio, “*El Preso sin Condena en América Latina y el Caribe*”, Estudio comparativo estadístico y legal de treinta países y propuesta para reducir el fenómeno, Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la prevención del delito y tratamiento del delincuente, Primera Edición, San José de Costa Rica, 1983.

Castro, Juventino V., *Hacia el Sistema Judicial Mexicano del XXI*, Editorial Porrúa, Primera Edición, México D.F., 2000.

Cassagne, Juan Carlos, “*El Bicentenario de la Constitución Cádiz y su proyección en Iberoamérica*”, Cuando las Cortes de Cádiz, Panorama Jurídico 1812, Jornada Conmemorativa del Bicentenario, Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 2012.

Cienfuegos Salgado, David, *Justiciabilidad Electoral en México, Reflexiones, retrospectivas y retos*, Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz, Primera Edición, Xalapa Veracruz, 2012.

Colín Sánchez, Guillermo, *Derecho Mexicano de Procedimientos Penales*, Tercera Edición, Editorial Porrúa, México, D.F., 1974.

Concha, Hugo, *Cultura de la Constitución en México: Una encuesta nacional de actitudes, percepciones y valores*; Fix Fierro, Héctor; Flores Julia; Valadés, Diego; Universidad Nacional Autónoma de México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federal y la Comisión federal de mejora regulatoria, México, 2004.

*Congreso Constituyente Diario de Debates*, Compilación, Nueva Edición del diario de debates del Congreso Constituyente de 1916-1917, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo I y II, México, D.F., 2006.

*Controversia constitucional entre la Federación y el Estado de Oaxaca 2/32, Federación y Estado de Oaxaca, 15 de octubre de 1932, en la Constitución y su Interpretación por el Poder Judicial de la Federación, Volumen III, F-L, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fondo de Cultura Económica, México, D.F. 1992.*

Couture J. Eduardo, *Fundamentos del Derecho Procesal Civil*, Tercera Edición, Depalma, Buenos Aires, 1958.

Cossío Díaz, José Ramón, *Jurisdicción Federal y Carrera Judicial en México*, Cuadernos para la Reforma de la Justicia 4, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, Primera Edición, México D.F., 1996.

\_\_\_\_\_, Mejía Garza, Raúl M., Rojas Zamudio, Laura Patricia, “*El Caso Radilla*”, Estudio y Documento, Editorial Porrúa, Primera Edición, México, D.F., 2012.

Cruz, Barney, Oscar, *Historia del Derecho en México*, Oxford University Press, Segunda Edición, México, D.F., 2004.

\_\_\_\_\_, *La codificación en México: 1821-1917, una aproximación*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma, Edición, México, D.F., 2004.

\_\_\_\_\_, “*Impacto del Movimiento Liberal Gaditano en el Mundo Jurídico Mexicano*”, *Cuando las Cortes de Cádiz. Panorama Jurídico de 1812*. Jornada de Conmemoración del Bicentenario, VV.AA., Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Primera Edición, México, D.F., 2012.

Cruz Parceró, Taissia, “*El Poder Judicial en la Constitución de Cádiz. Garantías Procesales en Materia Criminal*”. Memoria del Seminario Internacional: Conmemoración del Bicentenario de la Constitución de Cádiz. Las ideas constitucionales de América Latina,



VV.AA., Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Senado de la República, México, D.F., 2013.

Daunis Rodríguez, Alberto, “*Seguridad, Derechos Humanos y Garantías Penales: ¿Objetivos comunes o aspiraciones contrapuestas?*”, *Derecho Penal de la Democracia vs. Seguridad Pública*, XVII Congreso Universitario de Alumnos de Derecho Penal, coord. Ignacio Berdugo Gómez de la Torre, Nieves Sanz Mulas, Primera Edición, Editorial Comares, Granada, España, 2005.

De la Hidalga, Luis, *Historia del Derecho Constitucional Mexicano*, cuadros sinópticos: División de poderes y sistema electoral, Editorial Porrúa, México, D.F., 2002.

Delgado Carbajal, Baruch, F. *Reforma Constitucional en Derechos Humanos El impacto en la impartición de justicia local*, Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, Primera Edición, Editorial Flores, México, D.F., 2014.

Del Moral, Antonio, “*Derecho a un Juicio Público*”, *Persona y Derecho, Revista de Fundamentación de las Instituciones Jurídicas y de Derechos Humanos*, 59/2008, Instituto de Derechos Humanos, Universidad de Navarra, España, 2008.

De la Torre Villar, Ernesto, *La Constitución de Apatzingán y los creadores del Estado mexicano*, Segunda Edición, Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F., 1978.

“*Delito y cárcel en México, deterioro social y desempeño institucional*”, publicado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), disponible en [www.cide.edu.mx](http://www.cide.edu.mx) y en [www.miguelcarbonell.com](http://www.miguelcarbonell.com).

*Derechos del Pueblo Mexicano, México a través de sus constituciones*, Volumen I, Tomo IX, Artículos 82-94, Serie VI, H. Cámara de Diputados LV Legislatura H. Congreso de la Unión, Comité de Asuntos Editoriales, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, Editorial Miguel Ángel Porrúa, México D.F., 1994.

*Derechos del Pueblo Mexicano. México a través de sus constituciones*, 4ª Edición, Tomo X, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Miguel Ángel Porrúa, México, D.F., 1994.

*Diccionario de la Lengua Española*, Real Academia Española, Vigésima segunda Edición, Editorial Espasa Calpe S.A., Madrid, España, 2001.

*Diccionario Especializado en Materia de Amparo*, Definiciones, conceptos en materia civil, penal, laboral, constitucional, Edición Especial, Primera Edición, Editorial Libros Técnicos, Tlaxcala, Tlax, 2012.

Diez-Picazo, Luís María, *El Poder de Acusar*, Ministerio Fiscal y Constitucionalismo, Primera edición, Editorial Ariel, Barcelona, España, 2000.

DUGUIT, León, *La separación de poderes y la Asamblea Nacional de 1798*, Madrid, Editorial Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1996.

“*El Matrimonio entre Personas del Mismo Sexo en la Legislación del Distrito Federal y sus Efectos Jurídicos*”, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Primera Edición, México, D.F., 2013.

*Elementos para la Construcción de una Política de Estado para la Seguridad y la Justicia en la Democracia*, Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia, Hacia una Política de Estado en los Albores del Tercer Milenio, Agosto de 2011, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, disponible [www.unam.mx](http://www.unam.mx).

Escobar Fornos, Iván, *La Constitución de Cádiz. Modelos de Constitucionalismo*, Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, No. 16, Anual, Centro de Estudios Políticos Constitucionales, Madrid, España, 2012.

Estrada Rodríguez, José Guadalupe, *Los Supuestos de Procedencia del Juicio de Amparo*, Primera Edición, Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas, Zacatecas, México, 2002.

Esquinca Muñoa, Cesar, *“Aspectos de la Procuración de Justicia y la Defensa Penal”*, La Reforma a la Justicia Penal, Quintas Jornadas sobre Justicia Penal, VV.AA., Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 2006.

\_\_\_\_\_, *“La Defensa Pública en el Proceso Penal”*, Memoria del Congreso Internacional de Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados. II. Proceso Penal., Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 2005.

Eto Cruz, Gerardo, *Fuentes del Constitucionalismo Gaditano con especial referencia a su incidencia en los mecanismos de defensa de la Constitución, Memoria del Seminario Internacional: Conmemoración del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, Las ideas constitucionales de América Latina*, VV.AA., Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 2013.

Fazio, Carlos, *La Catástrofe que viene*, Opinión, Diario la Jornada, de fecha 28 de marzo del año 2015.

Fairén Guillén, Víctor, *Teoría General del Derecho Procesal*, Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 1992.

Fernández Ruiz, Jorge, *Constitucionalismo en el primero siglo del México independiente, Constitucionalismo. Dos siglos de su nacimiento en América Latina*, VV.AA., Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 2013.

Ferrajoli, Luigi, *“Garantías”*, *Jueces para la democracia*, Información y Debate, Julio/2000, No.38, Publicación cuatrimestral, Editorial EDISA, Unigraf, Madrid, España, 2000.

\_\_\_\_\_, *Teoría Neoconstitucionalismo*, Ensayos escogidos, Primera Edición, Editorial Trotta, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Madrid, 2007.

\_\_\_\_\_, *Democracia y Garantismo*, Editorial Trotta, Madrid, España, 2008.

\_\_\_\_\_, *Derecho y Razón*, Teoría del Garantismo penal, Editorial Trotta, Quinta Edición, Madrid, España, 2001.

\_\_\_\_\_, *“Contra los poderes salvajes del mercado”*, Estrategia y propuesta para la reforma del Estado 2A. Ed., VV.AA., Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 2001.

Ferrer Mac-gregor Eduardo, Sánchez Gil, Rubén, *El Nuevo Juicio de Amparo*, Guía de la reforma constitucional y la nueva ley de amparo, Tercera Edición, Editorial Porrúa, UNAM, Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, México, D.F., 2013.

\_\_\_\_\_, *“La Interpretación Conforme y Control Difuso de Convencionalidad”*. *El Nuevo Paradigma para el Juez Mexicano*. Estudios Constitucionales, Año 9, No. 2, Centro de Estudios Constitucionales de Chile Universidad de Talca, Santiago de Chile, 2011.

\_\_\_\_\_, Eduardo y Silva García, Fernando. *Los Feminicidios en Ciudad Juárez ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Campo Algodonero*. La segunda sentencia condenatoria del Estado mexicano, Porrúa, UNAM, México, D.F., 2011.

Fioravanti, Maurizio, *Constitución. De la antigüedad a nuestros días*, Ed. Trotta, Madrid, España, 2001.

Fix Zamudio, Héctor, Ensayos “*Presente y Futuro de la Casación Civil a través del Juicio de Amparo Mexicano*”, *Ensayos sobre el Derecho de Amparo*, Tercera Edición, Editorial Porrúa, UNAM, México, D.F., 2003.

\_\_\_\_\_, Valencia Carmona Salvador, *Derecho Constitucional Mexicano Comparado*, Tercera Edición, Editorial Porrúa, México, 2003.

\_\_\_\_\_, “*El Poder Judicial en la Constitución Federal de 1824*”, *Examen Retrospectivo del Sistema Constitucional Mexicano a 180 Años de la Constitución 1824*, VV.AA., Valadés Diego y Barceló Rojas, Daniel Armando coordinadores, Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 2005.

\_\_\_\_\_, *Comentarios al Artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Derechos del Pueblo Mexicano*, México a través de sus Constituciones, Volumen I, Tomo IX, Artículos 82-94, Serie VI, H. Cámara de Diputados LV Legislatura, H. Congreso de la Unión, Comité de Asuntos Editoriales, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, Editorial Miguel Ángel Porrúa, 1994.

\_\_\_\_\_, *Justicia Constitucional y Control de legalidad en México*, El Estado Constitucional Contemporáneo, Culturas y Sistemas Jurídicos comparados, Tomo I, VV.AA., Instituto de Investigaciones Jurídica, UNAM, Primera Edición, México D.F., 2006.

\_\_\_\_\_, “*Influencia del Constitucionalismo Gaditano en la Nueva España*”, Memoria del Seminario Internacional, Conmemoración del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, Las ideas constitucionales de América Latina, Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Senado de la República, México, D.F., 2013.

\_\_\_\_\_, “*La Suprema Corte de Justicia y el Juicio de Amparo*”, Ensayos sobre el Derecho de Amparo, Tercera Edición, Editorial, Porrúa, UNAM, México, D.F., 2003.

\_\_\_\_\_, Favela Ovalle José, *Derecho Procesal*, Primera Edición, Universidad Nacional Autónoma de México, México D.F., 1991.

\_\_\_\_\_, Ferrer Mac-gregor, Eduardo (coordinadores), *El Derecho de Amparo en el Mundo*, Primera Edición, Editorial Porrúa, UNAM, Konrad-Adenauer-Stiftung, México, D.F., 2006;

\_\_\_\_\_, en Carbonell, Miguel, “*Los derechos fundamentales en México*”, Editorial Porrúa, Universidad Nacional Autónoma de México, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Primera Edición 2004, Primera Reimpresión 2005.

Flores García, Fernando, *Diccionario Jurídico Mexicano*, Decima primera edición, Editorial Porrúa, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F. 1998.

Flores Olea, Víctor, “*El trasfondo ideológico*”; Estudios sobre el Decreto Constitucional de Apatzingán, Dirección General de Publicaciones, Coordinación de Humanidades, UNAM, México, D.F., 1964.

Franco Guzmán, Ricardo, “*La necesidad de unificar la legislación Penal en toda la República*”, Los Desafíos de la Seguridad Pública en México, coordinadores Peñaloza, Pedro José, Garza Salinas, Mario A., Primera Edición, Procuraduría General de la República, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2002.

Franco Sodi, Carlos, *El Procedimiento Penal Mexicano*, Segunda Edición, Editorial Porrúa, México, D.F., 1939.

Fondevila Gustavo, Mejía Vargas, Alberto, *Reforma Procesal Penal: Sistema Acusatorio y Delincuencia Organizada, Reforma Judicial. Revista Mexicana de Justicia*, Núm. 15-16, Enero-diciembre, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 2010.

Gabriel Juárez, Mariano, *“La regla de exclusión de la prueba prohibida en la jurisprudencia internacional sobre derechos humanos: el caso de la tortura y el juicio de ponderación”*, Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, Año XVII, Bogotá, Colombia, 2012.

García Morillo, Joaquín, *El poder judicial y el Ministerio Fiscal*, Derecho Constitucional, Volumen II, Los poderes del Estado. La organización territorial del Estado. Novena Edición, VV.AA., Tirant lo Blanch, Valencia, España, 2013.

García Palacios, Omar, *Curso de Derechos Constitucional*, Instituto de Estudios e Investigación Jurídica, Primera Edición, Nicaragua, 2011.

García Pelayo Manuel, *Constitución y Derecho Constitucional (evolución y crisis de ambos conceptos)*, *Revista de Estudios Políticos*, No.37-38, Revista Trimestral Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, España, 1948.

García Ramírez, Sergio y Castañeda Hernández, Mireya (Coord.), *Recepción nacional del derecho internacional de los derechos humanos y admisión de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana*, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Secretaria de Relaciones Exteriores, Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2009.

\_\_\_\_\_, *“Algunas Cuestiones del Proceso Penal”*, Memoria del Congreso Internacional de Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados, Tomo II Proceso Penal, Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 2004.

\_\_\_\_\_, *“Admisión de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”*, en García Ramírez, Sergio y Castañeda Hernández, Mireya (coord.). *Recepción Nacional del derecho internacional de los derechos humanos y admisión de la*

competencia de la Corte Interamericana, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 2009.

\_\_\_\_\_, *La Reforma Penal Constitucional (2007-2008), ¿Democracia o autoritarismo?*, Primera Edición, Editorial Porrúa, México, 2008; IX Jornadas Sobre Justicia Penal, La Reforma Constitucional sobre Justicia Penal y Seguridad Pública, Mesa IV, Perspectiva Académica, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Disco 4, 24 de abril del 2008.

\_\_\_\_\_, *Reparación de Fuente Internacional por Violación de Derechos Humanos (Sentido e implicaciones del párrafo tercero del artículo 1º. Constitucional bajo reforma de 2011)*, La Reforma Constitucional de Derechos Humanos, un nuevo paradigma, VV.AA., Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Primera Edición, México, D.F., 2011.

\_\_\_\_\_, *Consideraciones sobre la Reforma Procesal Penal*, VV. AA., Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México.

\_\_\_\_\_, *Principios Rectores del Proceso Penal*, XV Congreso Mexicano de Derecho Procesal, Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 1998.

\_\_\_\_\_, “*La reforma del Proceso Penal*”, *Revista Mexicana de Justicia, Reforma Judicial*, enero-junio 2008, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F.

\_\_\_\_\_, *Justicia Penal*, Primera Edición, Editorial Porrúa, México, 1982.

Garibay, Alberto F., “*La enseñanza del caso Marbury vs. Madison*”, *Academia*, Revista sobre la enseñanza del derecho, Núm. 13, Año 7, Buenos Aires, Argentina, 2009.



Gelsi Bidart, Adolfo, *“Oralidad en todo proceso”*, XV Congreso Mexicano de Derecho Procesal, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Primera Edición, México, D.F., 1998.

Gil de, Lester, Clementina, *“Evolución de la Administración de Justicia del D.F.”*, Las Nuevas Bases Constitucionales y Legales del Sistema Judicial Mexicano, La Reforma Judicial 1986-1987, Editorial Porrúa, Primera Edición, México, D.F., 1987.

Guillen López, German, *La Investigación Criminal en el Sistema Penal Acusatorio*. Serie Juicios Orales. Número 6, Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 2013.

Guillén López, Raúl, *“Breve Estudios Sobre los Intentos de Establecer en México Juicios Orales en Materia Penal*. Serie Juicios Orales, Núm. 1, Primera Edición, Primera Reimpresión 2014, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 2014.

\_\_\_\_\_, *“Breve Estudio sobre la Interpretación de establecer los juicios orales en materia penal”*, Serie Juicios Orales, Núm. 1, Primera Edición 2012, Primera Reimpresión 2014, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F.

Gutiérrez Berlinches, Álvaro, *“Las partes Acusadoras en el Proceso Penal Español”*, *Temas de Derecho Procesal Penal de México y España*, VV.AA., coordinadores, Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 2005.

Goldschmidt, James, *“Los principios del proceso penal II”*, Problemas jurídicos y políticos del proceso penal, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1961.

\_\_\_\_\_, *“Problemas Fundamentales de Derecho”*, Derecho, Derecho Procesal y Proceso I, Edición López Barja de Quiroga, Jacobo, Editorial Marcial Pons, Madrid, 2010.

Góngora Pimentel, Genaro, Saucedo Zavala, María Guadalupe, *Ley de Amparo, Doctrina Jurisprudencial Compilación de Tesis, Informes 1930 a 1989*, Semanario Judicial de la Federación, quinta, sexta, séptima y octava época, Apéndice 1917-1988, Gaceta: febrero 1988 a diciembre 1994, Tomo II, Editorial Porrúa, México, D.F.,

González Álvarez, Daniel, “*La oralidad como facilitadora de los fines y principios y garantías del proceso penal*”, *Revista de la Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica*, Número 11, Año 8, Julio 1996, San José de Costa Rica, 1996.

González Obregón, Diana Cristal, “*Una Nueva cara de la Justicia en México: Aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales bajo el Sistema Acusatorio Adversarial*”, Serie Juicios Orales, Núm. 21, Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 2014.

González Oropeza, Manuel, Báez Silva, Carlos, *Derecho Electoral Mexicano*, una perspectiva judicial, Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz, Primera Edición, Xalapa, Veracruz, 2012.

González Macías, P.; Herrera Izaguirre, J.; López Díaz, L.; García Govea, M. y Gaona Tovar, T.: “*Comentarios sobre el sistema inquisitivo y el sistema acusatorio: camino a los juicios orales*”, en *Contribuciones a las Ciencias Sociales*, disponible en: [www.eumed.net/rev/cccss/16/](http://www.eumed.net/rev/cccss/16/) diciembre 2011.

González, María del Refugio, *Historia del Derecho Mexicano*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, Primera Reimpresión, México, 1983.

González Rodríguez, Patricia Lucila, *La Policía de Investigaciones en el Sistema Acusatorio Mexicano*. Serie Juicios Orales, Número 7. Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 2013.

Grant J.A.C., “*Control Jurisdiccional de la Constitucionalidad de la leyes: una contribución de las Américas de la ciencia política*”, *Revista de la Facultad de Derecho de*

México, Número 47 julio-septiembre 1862, 48 octubre-diciembre 1962 y 49 enero-marzo 1963, UNAM, México D.F.

Gudiño Pelayo José de Jesús, *Ingeniería Judicial y Reforma del Estado*, Segunda Edición, Editorial Porrúa, México, D.F., 2003.

Haberle, Peter, *El Estado Constitucional*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Primera Edición, Primera reimpresión, México D.F. 2003.

Haro, Ricardo, *Constitución, Poder y Control*, Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 2002.

Hauriou, André, *Derecho Constitucional e Instituciones Políticas*, Traducción castellana José Antonio González Casanova, Ediciones Ariel, Barcelona, España, 1971.

Herdegen, Mathias, *Derecho Internacional Público*, Primera Edición, Fundación Konrad Adenauer, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, D.F., 2005.

Hernández Pliego, Julio Antonio, *El Proceso Penal Mexicano*, Primera Edición, Editorial Porrúa, México, 2002,

Hernández, María del Pilar, *Federalismo y Justicia Federativa*, “Homenaje al Doctor Emilio O. Rabasa”, VV.AA., Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Primera Edición, México, D.F., 2010.

\_\_\_\_\_, “Del Federalismo Judicial”, *Reforma Judicial*, *Revista Mexicana de Justicia*, Número 2, julio-diciembre, Año 2003, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F. 2003.

Hernández Roberto, Negrete Layda, *Presunto Culpable: ¿Por qué nuestro sistema de justicia condena inocentes de forma rutinaria?*, Revista Este País, tendencias y opiniones, Número 239, Marzo 2011, Revista Mensual, México, D.F.

Herrera García, Alfonso, “El Recurso de Amparo en el Modelo Kelseniano de Jurisdicción Constitucional, ¿Un Elemento Atípico?”, VV.AA., “El Juicio de Amparo a 160 Años de la Primera Sentencia”, Tomo I, Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 2011.

Hesbert Benavente, Chorres, Hidalgo Murillo, José Daniel, Hidalgo Murillo, *Código Nacional de Procedimientos Penales*, comentado guía práctica, comentarios, doctrina, jurisprudencia y formularios, práctica procesal penal desde el sistema acusatorio en México, Primera Edición, Editorial Flores, México, D.F., 2014.

Hidalgo, Murillo, José Daniel, *Sistema Acusatorio Mexicano y Garantías del Proceso Penal*, Universidad Panamericana, Primera Edición, Editorial Porrúa, México, 2009.

Hobbes, Thomas, “*Leviatán*”, o la materia, forma y poder de la república, eclesiástica y civil, Fondo de Cultura Económica, Primera Edición en inglés 1651, Quinta reimpresión 2005, México, D.F.

Horvitz Lennon, María Inés y Julián, López Masle, *Derecho Procesal Penal Chileno*, Primera Edición, Editorial Jurídica de Chile, Chile, 2002.

Hulsman, Jaqueline, Bernat de Celis, Louk, *Sistema Penal y Seguridad Ciudadana, Hacia una alternativa*, Primera Edición, Editorial Ariel, Barcelona, España, 1984.

Iberhard Struense, Maier, Julio B.J., *Las reformas procesales penales en América Latina*, Julio B.J., Maier, Kai Ambos, Jan Woischnik, *coordinadores*, Primera Edición, Konrad Adenauer-Stiftung, Ad-hoc, Instituto Max Planck para Derecho Penal Extranjero Internacional, Buenos Aires, República Argentina, 2000.

Islas Colín, Alfredo, *“Las Reformas a la Constitución Política”*, *Revista del Centro Nacional de Derechos Humanos*, Año 3, Número 9, 2008, Comisión Nacional de Derechos Humanos, México, D.F., 2008.

Islas de González Mariscal, Olga, *“Derechos de las víctimas y de los ofendidos por el delito”*, Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México D.F., 2003.

Informe *Ayotzinapa, Investigación y Primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa*, Grupo Interdisciplinario de Expertos, (GIEI), Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Alejandro Valencia Villa, Ángela María Buitrago, Carlos Martín Beristáin, Claudia Paz y Paz Baile, Francisco Cox Vial. Primera Edición, Marra Servicios Editoriales, 2015.

Jiménez del Campo, J., *Derechos Fundamentales. Conceptos y Garantías*, Editorial Trotta, Madrid, España, 1999.

Jimeno Bulnes, Ma. Del Mar, *“Principio de Publicidad en el Sumario”*, *Justicia*, Número III y IV, 1993, Barcelona, España, 1993.

*Justicia Cotidiana, Informe de los Foros de Justicia Cotidiana*, Primera Edición, CIDE, Centro de Investigación y Docencia Económica, A.C., México, D.F., 2015.

Kelsen, Hans, *Teoría General del Derecho y del Estado*, Traducción Eduardo García Máynez, Textos Universitarios, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1979.

\_\_\_\_\_, *La Garantía Jurisdiccional de la Constitución (la justicia constitucional)*, Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 2001.

Lara Leoncio, *El Nuevo Sistema Electoral Mexicano*, Universidad Nacional Autónoma de México, Corte de Constitucionalidad de Guatemala, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Primera Edición, México, D.F., 1992.

Larrauri, Elena, “*Cómo resistir el populismo punitivo*”, *Iter Criminis, Revista de Ciencias Penales*, Número 8, Tercera Época, México, D.F., 2006.

Lassalle, Ferdinand; *¿Qué es una Constitución?*, Buenos Aires: Ediciones Siglo Veinte, 1975.

\_\_\_\_\_, *¿Qué es una Constitución?*, Editorial Ariel, Traducción de Wenceslao Roces, Segunda Edición, Barcelona, España, 2001.

*Libro Blanco de la Reforma Judicial, una agenda para la justicia en México*, Primera Edición, Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, D.F., 2006.

Lima Malvido, María de la Luz, *Modelo de atención a víctimas en México*, Sociedad Mexicana de Criminología, México, 1995.

Lockhart, José Francisco, “*La prueba ilícita en el proceso penal*”, *Revista Intercambios*, No. 16, Año XVI, Mayo 2014, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de la Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina.

Lombroso, Cesar. *L' Uomo Delicente*, Fratelli Bocca, Editori, Italia, 1876.

López Monroy, José de Jesús, “*Aplicación de los preceptos de la Constitución de la 1824*”, *Anuario Mexicano de Historia del Derecho*, Volumen VIII, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 1996.

*Las Garantías de Seguridad Jurídica*, Poder Judicial de la Federación, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera edición, Colección Garantías Individuales, SCJN, México, D.F. 2003.

*Las Garantías de Seguridad Jurídica*, Número 2, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Colección Garantías Individuales, Primera Edición, Primera Edición, México, D.F., 2003.

*Los derechos humanos en la actividad jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación*, México, SCJN-Alto Comisionado de Naciones Unidas, Tomo II, Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, SCJN, México, D.F., 2010.

Madison, James, Paper Number 51, “*Checks and Balances*”, *The Federalist*, Alexander Hamilton, James Madison, John Jay, Edited by Benjamin F. Wright, University of Texas; Barnes and Nobles, New York, USA, p. 2004.

Madrazo, Jorge, *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, Decima primera edición, Editorial Porrúa, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F. 1998.

Maíz, Ramón, “*Los dos Cuerpos del Soberano: El Problema de la soberanía nacional y la soberanía popular en la Revolución francesa*”, *Soberanía y Constitución, Cuadernos monográficos de Teoría del Estado Derecho Público e Historia Constitucional*, 1/98, volumen I, coordinador Ramón Punset, Junta General del Principado de Asturias, Universidad de Oviedo, Oviedo, España, 1998.

Maldonado Álvarez, Luis Rubén, “*Presunto Culpable*”: *asunto de Estado*, *El Heraldo de Chihuahua*, 9 de marzo de 2011.

Magaloni Kerpel, Ana Laura, Ibarra Olguín, Ana María, *“La configuración Jurisprudencial de los Derechos Fundamentales. El caso del Derecho Constitucional a una defensa adecuada”*, Cuestiones Constitucionales, Número 19, julio-diciembre, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 2008.

Manzanera Rodríguez, Luís, *“Situación actual de la Victimología en México. Retos y perspectivas”*, Gaceta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Número 65, Enero-Febrero, CODHEM, México, 2004.

Margadant, Guillermo F., *Introducción al Estudio del Derecho Mexicano*, textos universitarios, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1972.

Márquez, Daniel, *“La Constitución de 1857, Libertad e Institucionalidad”*, El Proceso Constituyente Mexicano. A 150 años de la Constitución de 1857 y 90 de la Constitución de 1917, VV.AA., Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 2007.

Márquez Rábago Sergio R., *Evolución Constitucional Mexicana*, Editorial Porrúa, Primera Edición, México, D.F., 2002.

Martínez Solares, Verónica, *“víctimas y justicia penal”*, Órgano Informativo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Hacia el equilibrio entre la víctima del delito y el transgresor de la ley, Número 65, Enero-Febrero, Año 2004, Toluca, Estado de México.

Matías Pedro, *“Impunidad en México alcanza 95%, alerta de la ONU”*, Revista Proceso, Semanario de información y análisis, Mensual, Enero 2012, México, D.F.

*“México vive una crisis de investigación criminal”*, La Opinión, Diario digital en línea, disponible en [www.laopinion.com/mexico-vive-una-crisis-enlainvestigacion-criminal](http://www.laopinion.com/mexico-vive-una-crisis-enlainvestigacion-criminal).

Milione Ciro, *“El derecho a un proceso público en la Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”*, Revista Uruguaya de Derecho Procesal, 4/2001, Instituto



Iberoamericano de Derecho Procesal, Fundación Cultural Universitaria, Montevideo, Uruguay, 2001.

Montero Aroca, Juan, *Derecho Jurisdiccional*, Tomo I, 18 Edición, Tirant lo Blanch, Valencia, España, 2010.

\_\_\_\_\_, “La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil Española, los poderes del Juez y la oralidad”, *Revista de Derecho Procesal*, Número 1-3, Año 2001, Madrid.

Monteleone, Girolamo, “Jurisdicción, Proceso, Juez en el Sistema de las Libertades Civiles”, *Teoría y Derecho, Revista de Pensamiento Jurídico, Revista semestral*, junio 7/2010, Tirant lo Blanch, Valencia, España,

MONTESQUIEU, *De l'Esprit des Lois*, en *Montesquieu, Ouvres Complètes*, Paris, Editorial du Seuil, 1964.

Montesquieu, “*Del Espíritu de las Leyes*”, estudio preliminar Daniel Moreno, Decimonovena Edición, Editorial Porrúa, México, D.F., 2013.

Moreno Alonso, M., *La Constitución de Cádiz. Una mirada crítica*; Sevilla, Primera Edición, Editorial Alfar, 2011, Sevilla, España.

Moreno Catena, Víctor, “*El Ministerio Fiscal, Director de la Investigación de los Delitos*”, *Teoría y Derecho, Revista del Pensamiento Jurídico, ¿Ministerio Fiscal o Juez Instructor?*, *La investigación penal a debate, Revista Semestral*, No.1, Junio/Diciembre, 2007, Tirant lo Blanch, Valencia, España.

Muñoz Conde, Francisco, *El Nuevo Derecho Penal Autoritario*, Estudios Penales en Recuerdo del Profesor Ruiz Antón, VV.AA. coordinadores, Primera Edición, Tirant lo Blanch, Valencia, España, 2004.

Nader Kuri, Jorge, *“El Sistema Penal Acusatorio y los juicios orales”*, *Criminalia*, *Academia Mexicana de Ciencias Penales*, Año LXXIII, No.3, Septiembre-Diciembre, Editorial Porrúa, México, D.F., 2013.

Natarén Nandayapa, Carlos F., *Los Derechos Fundamentales en el Derecho Penal*, Temas de Derecho Procesal Penal, México-España, Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2005.

\_\_\_\_\_, *“Breves Reflexiones sobre algunos de los retos en el diseño del Nuevo Proceso Penal Ordinario”*, La Reforma Constitucional en materia penal, Jornadas de Justicia Penal, VV.AA., Instituto de Nacional de Ciencias Penales, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Primera Edición 2009, México, D.F.

Narváez, José Ramón, *“Oralidad y Justicia en la Historia de México”*, *Anuario Mexicano de Historia del Derecho*, Volumen XIX, Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2007.

Nieva Fenoll, Jordi, *Los Problemas de la Oralidad*, *Diario La Ley*, No. 6701, Año XXVIII, Ref. D-102, Madrid, 26 de abril 2007.

Nogueira Alcalá, Humberto, *Aspectos de una Teoría de los Derechos Fundamentales: la delimitación, regulación, garantías y limitaciones de los derechos fundamentales, Ius et Praxis, Derecho de la Región*, v.11 no.2, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Talca, Talca, Chile, 2005.

Noriega Cantú, Alfonso, *Lecciones de Amparo*, Segunda Edición, Editorial Porrúa, México, D.F., 1980.

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “*20 Claves para Conocer y Comprender mejor Los Derechos Humanos*”, Primera Edición, México, D.F., 2011.

Ojeda Bohórquez, Ricardo, “*Los Distintos Procesos Penales en el Orden Federal Mexicano*”, Temas de Procesal Penal de México y España, VV.AA coordinadores., Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 2005.

Ojeda Velázquez, Jorge, *Derecho Constitucional Penal*, Teoría y Práctica, Tomo I, Primera Edición, Editorial Porrúa, México, 2005.

Ortells Ramos, Manuel, “*Problemas de la Oralidad en el Proceso Penal Español (oralidad, contradicción, inmediación de los medios de prueba personales)*, *Juicios Orales. “La Reforma Judicial en Iberoamérica”*, Homenaje al Maestro Cipriano Gómez Lara, Ferrer Mac-gregor, Eduardo, Saíd Ramírez, Alberto, Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 2013.

Ortiz Mayagoitia, Guillermo, “*El orden jurídico nacional a la luz de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano*, Edición 2003, Konrad-Adenauer-Stiftung A.C., Montevideo, Uruguay.

Ovalle Favela, José, *El Procedimiento Penal Oral en el Estado de Chihuahua*, Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua, UNAM, México, D.F., 2010.

\_\_\_\_\_, “*Antecedentes del Jurado Popular en México*”, en Estudios de derecho procesal, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 1981.

Palomo Vélez, Diego I., “*Las marcas del proceso oral y escrito diseñado en el Proyecto de Nuevo CPC Chileno*”, Revista Chilena de Derecho, Vol. 36, Número 3, septiembre-diciembre, 2009.

Peña Oviedo, *Ley de Amparo*, Práctica Forense de Amparo, Primera Edición, Editorial Flores, México, D.F., 2004,

“Peña, ante la crisis de justicia”, Editorial, Diario La Jornada, 28, marzo de 2015, disponible en: [www.jornada.unam.mx](http://www.jornada.unam.mx).

Pereira Campos, Santiago, “El principio de publicidad en el Código General del Proceso”, *Revista Uruguaya de Derecho Procesal*, 1/92, Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, Montevideo, Uruguay, 1992.

Peset Reig, Mariano, “La Constitución de Cádiz en América: Apatzingán 1814”, *Corts: Anuario de Derecho Parlamentario*, No.26, *Revista Anual*, Editada por las Cortes Valencianas, Valencia, España, 2012.

Pisarello, Gerardo, “Globalización, Constitucionalismo y Derechos: Las vías del cosmopolitismo jurídico”, *Teoría del Neoconstitucionalismo*, Ensayos Escogidos, Edición Miguel Carbonell, Editorial Trotta, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Madrid, España, 2007.

\_\_\_\_\_, *¿Constitucionalismo sin constitución o constitución sin constitucionalismo?*, *Elementos para una lectura de la construcción Europea en clave post-estatal*, *Revista de Derecho Constitucional Europeo*, No.5, semestral, Junta de Andalucía, Instituto Andaluz de Administración Pública, Universidad de Granada, Departamento de Derecho Constitucional, Granada, España, 2013.

Plascencia Villanueva, Raúl, *Procuración de Justicia y Reforma Penal, Las Reformas Penales de los últimos años en México (1995-2000)*, Primeras Jornadas Sobre Justicia Penal, VV.AA., Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2001.

Polanco Braga, Elías, “*El Nuevo Sistema de Enjuiciamiento Penal Mexicano*”, en *Cultura Jurídica de los Seminarios de la Facultad de Derecho*, número 4, octubre-diciembre 2011, Editada por la Facultad de Derecho de la UNAM, México, D.F., 2011.

Ponce de León Armenta, Luis, *Compendio de la Legislación comentada del Poder Judicial Federal*, Primera Edición, Editorial Porrúa, México, 1997, VV.AA., Las Nuevas Bases Constitucionales y Legales del Sistema Judicial Mexicano, *La Reforma Judicial 1986-1987*, Primera Edición, Editorial Porrúa, México, 1987.

Prieto Castro, Leonardo, *Derecho Procesal Civil*, Volumen I, Editorial Tecnos, Madrid, España, 1978.

Prieto Sanchís, Luis, “*El constitucionalismo de los derechos*”, Teoría del Neoconstitucionalismo, Primera edición, Editorial Trotta, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Madrid, España, 2007.

Pulido Quecedo, Manuel, *Constitución Española, con la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional*, Tercera Edición, Editorial Aranzadi, Navarra, España, 2001.

Quijano Parra, Jairo, “*Razonamiento Judicial en Materia Probatoria*”, *Procesalismo Científico. Tendencias Contemporáneas, Memorias del XI Curso Anual de Capacitación para Profesores de Derecho Procesal*, coordinador Eduardo Ferrer-Macgregor, Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 2012.

Quirós Camacho, Jenny, “*Oralidad en el Sistema Costarricense*”, *Revista de la Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica*, Número 24, Año 18, Noviembre 2006, San José de Costa Rica.

Quiroz Acosta, Enrique, *Lecciones de Derecho Constitucional*, Segundo Curso, Editorial Porrúa, Primera Edición, México, D.F., 2002.

Rabasa Emilio O., *Historia de las Constituciones Mexicanas*, 1ª reimpresión de la 3ª Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 2004.

\_\_\_\_\_, *El Pensamiento Político y Social del Constituyente de 1916-1917*, Primera Edición Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 1996.

\_\_\_\_\_, *Historia de las Constituciones Mexicanas*, Segunda Reimpresión, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México D.F., 2000.

\_\_\_\_\_, “*El Pensamiento Constitucional de Venustiano Carranza (Análisis de su mensaje del 1º de Diciembre de 1916 al presentar el Proyecto de Constitución)*”, *Anuario de Mexicano de Historia del Derecho*, Volumen VII, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 1995.

Ramos Pascua, José Antonio, “*Principios Jurídico-Políticos de la Constitución de Cádiz*”, *Bajo palabra, Revista de Filosofía*, Época 2, No.8, Revista Anual, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, España, 2013.

Rangel Hernández Laura, *Sentencias Condenatorias al Estado mexicano dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sus implicaciones en el orden jurídico nacional*, IUS, Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, México, Año V, No. 28, Julio-Diciembre de 2011.

*Reforma Constitucional en Materia de Justicia Penal y Seguridad Pública*, proceso legislativo, junio de 2008, Secretaría de Servicios Parlamentarios, Centro de Documentación e Información y Análisis, Dirección de Bibliotecas y de los Sistemas de Información, Palacio Legislativo, México, D.F.

Reyes, Juan Pablo, “*La SCJN analiza petición de la PGR sobre el amparo de Don Neto*”, *Diario Excelsior*, Agosto de 2013, Diario en línea disponible en [www.excelsior.com.mx/nacional/2013/08/28/915676](http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/08/28/915676).

Ríos Espinosa, Carlos, *El conocimiento en el Proceso Penal*, Temas de Derecho Procesal Penal México España, VV.AA., Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2005.

Ríos Vázquez, Rodolfo, *Los Tribunales Colegiados de Circuito*, Gestación e Instalación, Primera Edición, Oficio Ediciones, Monterrey, N.L., 2004.

Rivas Acuña, Israel, *El Consejo de la Judicatura Federal, trayectoria y perspectivas*, Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México D.F., 2011.

Riveras Silva, Manuel, *El Procedimiento Penal*, trigésima octava edición, Editorial Porrúa, México, D.F., México, D.F., 2009.

Roemer Andrés, Buscaglia, Edgardo, *compiladores, Terrorismos y Delincuencia Organizada. Un enfoque de derecho y economía*. Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 2006.

Rodríguez Olvera, Oscar, Espinosa, Sandra, *“Impacto de la inseguridad pública en los derechos fundamentales”*, Reporte CESOP No. 4, SEGURIDAD PÚBLICA, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, XL Legislatura, agosto 2007.

\_\_\_\_\_, *“Pulso Ciudadano” (indicadores selectos de opinión pública)*”, Núm. 39, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados (CESOP), XL Legislatura, noviembre de 2007.

\_\_\_\_\_, *“Opinión pública sobre justicia”*, Reporte CESOP No. 8, PODER LEGISLATIVO Y OPINIÓN PÚBLICA, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados (CESOP), XL Legislatura, diciembre de 2007.

Romero Apis, José Elías, *“Los Derechos Humanos y las Víctimas del delito en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”*, Modelo de atención a víctimas en México, Sociedad Mexicana de Criminología, México, 1995.

Rubio Llorente, Francisco, *“Constitucionalismo”*, en Aragón Reyes, Manuel (coordinador), Temas Básicos de Derecho Constitucional, Tomo I, Primera edición, Editorial Civitas, Madrid, España, 2001.

Ruíz Antón, Luis Felipe, *“El principio de irretroactividad de la ley penal en la doctrina y la Jurisprudencia”*, Anuario de la Facultad de Derecho, Universidad de Extremadura, No.7, Anual, Extremadura, España, 1989.

Ruiz Torres, Enrique Humberto, *“Cinco Tesis acerca de la Implantación de la Justicia Oral en México”*, Revista Académica, Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, Año VI, Número 10, Enero 2008, México, D.F.

\_\_\_\_\_, *“Curso General de Amparo”*, México, Oxford University Press, 2007.

\_\_\_\_\_, *“Curso General de Amparo”*, México, Oxford University Press, 2007; Ovalle Favela, José, *“Antecedentes del jurado popular en México”*, en Estudios de derecho procesal, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 1981.

Salazar Santana, Bernardo Alfredo, *“La Garantía de Defensa Adecuada. Sus Alcances en el Procedimiento Penal”*, El Derecho Mexicano Contemporáneo. Retos y Dilemas, VV.AA., Primera Edición, Fundación Académica Guerrerense, Universidad Autónoma de Chiapas, Colegio de Guerrero, Chilpancingo, Guerrero, México, 2012.

Sánchez Cordero, de García Villegas, Olga, *“El Futuro del Derecho: hacía la unificación de las normas procesales como inicio de un salto evolutivo en la justicia”*, en: Ciclo Permanente de Actualización Profesional “Temas Relevantes de la Práctica Procesal en Materia Civil y Familiar”, (19 de Marzo 2001, México D.F.), Consejo Nacional de



Egresados en Posgrado en Derecho A.C.; trabajos: Unidad de Congresos Centro Médico Nacional, Siglo XXI, México D.F. 2001.

Sánchez Romero, Cecilia, “*La prisión Preventiva en un Estado de Derecho*”, *Revista de la Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica*, Número 14, Año 10, No. 15, Diciembre 1998, San José, Costa Rica.

Santaolalla Fernando, “*Consideraciones sobre la Normatividad y Superioridad de la Constitución*”, *Teoría y Realidad Constitucional*, Encuesta: la ley de Extranjería y la constitución, Número 7, 1º Semestre, Año 2001, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces S.A., UNED, Madrid, España.

Sanciñena, Asurmendi, Teresa, *La Audiencia en México en el reinado de Carlos III*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, Primera Edición, México, D.F., 1999.

*Seguridad Pública y Justicia del Instituto Nacional de Estadística y Geografía*, principales indicadores, Primera Edición, México, D.F., 2011.

Serna de la Garza, José María, *El Sistema Federal Mexicano*, un análisis jurídico, Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 2008.

\_\_\_\_\_, “*Influencia de la Constitución de Cádiz en México*”, Memoria del Seminario Internacional, Conmemoración del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, Las ideas constitucionales de América Latina, Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Senado de la República, México, D.F., 2013.

Sieyès, Emmanuel, “*Opinión de Sieyès sobre las atribuciones y la organización de la Jury Constitutionnaire propuesta el 2 del termidor*”, *Escritos políticos de Sieyès*, introducción, estudio preliminar y compilación de David Pantoja Morán, Fondo de Cultura Económica, México, D.F., 1993.

Silva Meza, Juan N., *“La Jurisprudencia Penal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. México. Su repercusión en el Proceso Penal”*, Panorama Internacional sobre Justicia Penal. Proceso Penal y Justicia Penal Internacional. Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados, Séptimas Jornadas Sobre Justicia Penal, VV.AA. coordinadores, Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 2007.

\_\_\_\_\_, *Las Reformas Penales de los últimos Años en México, Las Reformas Penales de los últimos años en México (1995-2000), Primeras Jornadas sobre Justicia Penal*, García Ramírez, Sergio, Vargas Casillas Leticia, A., coordinadores, Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 2001.

\_\_\_\_\_, Silva García, Fernando, *Derechos Fundamentales*, Bases para la reconstrucción de la jurisprudencia constitucional, Editorial Porrúa, Primera Edición, México, D.F., 2009.

Soberanes, Fernández, José Luis, *El Poder Judicial en el Siglo XIX*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, Segunda Edición, México, D.F., 1992.

\_\_\_\_\_, *La administración Superior de Justicia en Nueva España, Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, Año XIII, Número 37, enero-abril, 1980, (143-200), Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F.

\_\_\_\_\_, *Historia del Sistema Jurídico Mexicano. Segunda Parte, El Derecho en México. Una visión conjunta*, T.1, Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 1991.

Solís Delgadillo, Juan Mario, *La Reforma Penal Mexicana espejismos y realidades. Los actores del sistema como variables de éxito o fracaso. Reforma Judicial. Revista Mexicana*

*de Justicia*, Núm. 13, Enero-Junio, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 2009.

Solís Rodríguez, Javier, *Consejo de la Judicatura Federal: Responsabilidad Administrativa, facultad disciplinaria y prescripción*, Estudios sobre la Responsabilidad del Estado en Argentina, Colombia y México, VV.AA. coordinadores, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Primera Edición, México, D.F., 2007.

Suñez Tejera, Y. y González Moreno, G.: "*La oralidad como facilitadora de los principios del proceso penal*", en Contribuciones a las Ciencias Sociales, Junio 2012, [www.eumed.net/rev/cccss/20/](http://www.eumed.net/rev/cccss/20/).

Speckman Guerra, Elisa, "*El Derecho Penal en el Porfiriato: un acercamiento a la legislación, los discursos y las prácticas*", Proyectos Legislativos y otros temas penales, Segundas Jornadas Sobre Justicia Penal, VV.AA., Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 2003.

\_\_\_\_\_, "*La Justicia Penal en el Siglo XIX y las primeras décadas del XX*" (*los legisladores y su propuesta*), Los Abogados y la Formación del Estado Mexicano, Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 2013.

Tena Ramírez, Felipe, *Leyes Fundamentales de México 1808-1994*, Decimoctava Edición, Editorial Porrúa, 1994.

\_\_\_\_\_, *Leyes fundamentales de México 1808-2002*, 23a. Edición, Editorial Porrúa, México, D.F., 2002.

\_\_\_\_\_, *Derecho Constitucional Mexicano*, 19ª. Edición, Editorial Porrúa, México, D.F., 1983,

Tomás Biosca Ezequiel, Betanzo Hernández Germán, *Nociones de Derecho Positivo Mexicano*, Editorial Porrúa, Primera Edición, México, 1996.

Tocqueville, A.; *La democracia en América*, Barcelona, Editorial RBA, 2005.

Urbina Gimén Ortiz de, Íñigo, *La referencia político-criminal en el derecho penal contemporáneo (¿Es el derecho penal la barrera infranqueable de la política criminal, o se orienta por ella?)*, *El Nuevo Derecho Penal Autoritario*, Estudios Penales en Recuerdo del Profesor Ruiz Antón, VV.AA. coordinadores, Primera Edición, Tirant lo Blanch, Valencia, España, 2004.

Ugalde, Luis Carlos, “*Los riesgos de la Centralización en México*”, *Revista Alcaldes*, publicado 01/06/2014, Revista en línea, disponible [www.luiscarlosugalde.mx](http://www.luiscarlosugalde.mx).

Valadés Diego, *Apuntes sobre la formación del concepto de Estado*, VV.AA., en Homenaje al Doctor Emilio O. Rabasa, Primera edición, México, D.F., 2010.

Valencia Carmona, Salvador, *Derecho Constitucional Mexicano a Fin de Siglo*, Editorial Porrúa, Universidad Nacional Autónoma de México, Primera edición, México D.F., 1995.

Valencia Carmona, Salvador, “*Constitución y Nuevo Proceso Penal*”, *Revista Mexicana de Justicia, Reforma Judicial*, enero-junio 2009, Instituto de Investigaciones Jurídicas.

Vázquez Marín, Óscar, “*La Implementación de los Juicios Orales en el Sistema de Justicia Penal Mexicano: ¿qué sigue después de la reforma constitucional?*”, *Reforma Judicial. Revista Mexicana de Justicia*, Núm. 12, Julio-Diciembre, Año 2008, México, D.F.

Vescovi, Enrique, “*Régimen Federal*”, IV Congreso Interamericano de Derecho Constitucional, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 1992.

Víscaino Zamora, Álvaro, Secretario General Académico, INACIPE, *El Mundo del Abogado*, Año 10, Número 99, Julio 2007, México D.F.

Villamil, Jenaro, “*El Ejercito y su urgente retorno a los cuarteles*”, Revista Mensual, Septiembre de 2015, Semanario de Información y análisis, México, D.F., disponible en [www.proceso.com.mx](http://www.proceso.com.mx).

Volk, Klaus, “*El Principio de la Oralidad en el Proceso Penal*”, *Reforma Judicial. Revista Mexicana de Justicia*, Núm. 14. Julio-Diciembre, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 2009.

VV.AA., *Análisis del Sistema Electoral Mexicano*, Instituto Federal Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Primera Edición, México, D.F., 1996.

Witker, Jorge y Nataren, Carlos F., *Tendencias actuales del diseño del proceso acusatorio en América Latina y México*, Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 2010.

Zarco, Francisco, *Historia del Congreso Extraordinario Constituyente de (1856-1857)*, Primera Edición 1956, Segunda reimpresión 1979 México, D.F.

Zepeda Leucona, Guillermo, “*Los mitos de la prisión preventiva en México*”, Primera Edición, Open Society Institute, México, D.F., 2004.

Zertuche Muñoz, Fernando, “*El Congreso Constituyente de 1856-1857: el decenio de su entorno*”, así como a Fernández Ruiz, Jorge, “*Juárez y sus contemporáneos* 2ª. Ed.”, Segunda Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 2006; VV.AA., *Juárez Jurista*, Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, D.F., 2007.

\_\_\_\_\_, *“La evolución constitucional de México”*, Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F., 2004.

Páginas electrónicas:

[www.jornada.unam.mx](http://www.jornada.unam.mx).

[www.forbes.com.mx](http://www.forbes.com.mx).

[www.hchr.org.mx](http://www.hchr.org.mx).

[www.m.hrw.org](http://www.m.hrw.org).

[www.alzatuvoz.org](http://www.alzatuvoz.org)

[www.amnistia.org.mx](http://www.amnistia.org.mx),

[www.cide.edu.mx](http://www.cide.edu.mx)

[www.miguelcarbonell.com](http://www.miguelcarbonell.com).

[www.cddhcu.gob.mx](http://www.cddhcu.gob.mx).

[www.scjn.com.mx](http://www.scjn.com.mx).

[www.juridicas.com](http://www.juridicas.com).

[www.dialnet.com](http://www.dialnet.com)

[www.cidh.com](http://www.cidh.com)

[www.proceso.com.mx](http://www.proceso.com.mx).

## **RESUMEN:**

Los procesos de reformas constitucionales a los sistemas judiciales y específicamente en materia penal se han venido produciendo con alguna frecuencia en el Estado Mexicano, en principio teniendo como objetivo el fortalecer al estado democrático, teniendo como punto de partida la observancia de los derechos que emanan de la norma constitucional y los tratados internacionales. Los estados democráticos enfrentan problemas respecto de las funciones de administración e impartición de justicia, es una necesidad que estos mejoraren sus sistemas de justicia instrumentando métodos eficaces de combate a la delincuencia, preservando el bienestar de la convivencia en la comunidad. Sin embargo estos esfuerzos no deben hacerse separándose del derecho fundamental a juicios justos en estricta observancia de principios como del debido proceso, el derecho a la libertad personal, o el principio de inocencia, entre otros, teniendo siempre en cuenta que el receptor de estos mecanismos es precisamente el ciudadano, sometido al poder coercitivo del Estado. El objetivo es establecer desde el análisis científico la modificación constitucional del Sistema de Justicia Penal en México, para determinar las ventajas y desventajas que implican el cambio de un sistema judicial acusatorio-oral, es decir de una modalidad escrita a uno de carácter oral, estudiar su implementación desde el punto de vista constitucional, jurídico, político y de las instituciones que la componen.

## **ABSTRACT:**

The constitutional process of reform in judicial systems and specifically in criminal matters have been occurring with some frequency in the Mexican state with the aim of strengthening the democratic state, taking as a starting point the observance of constitutional rights as well as in human rights international treaties. Democratic states face problems regarding the roles of management and delivery of justice, it is a necessity that these states improve their justice systems by implementing effective methods of combating crime, preserving the welfare of their citizens. Hence, these efforts should not be done away from the fundamental human rights to a fair trial in strict compliance with other principles such as due process, the right to personal liberty, or the presumption of innocence, among others, always keeping in mind that the recipient of these mechanisms are precisely the citizens, subject to the coercive power of the state. The goal of this study is to establish from the scientific analysis of the constitutional amendment to the Penal Justice System in Mexico and determine the advantages and disadvantages involved in changing an accusatory-oral judicial system, from a written one the study includes the analysis from the standing point of its performance in Mexican constitution, legal, political and institution systems.